



INFORME DE LA COMISION SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES, RELATIVO DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES

Santiago, 12 de abril de 2022

Contenido

I.	ANTECEDENTES GENERALES.....	3
A.	Metodología de trabajo.....	3
B.	Reasignación de iniciativas.....	3
II.	OBJETO DE LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES.....	5
III.	DELIBERACIÓN CONSTITUCIONAL.....	6
A.	DISCUSIÓN GENERAL.....	6
1.	Audiencias públicas y valoración de la participación popular.....	6
2.	Despliegue territorial de la Comisión.....	9
3.	Iniciativas constitucionales deliberadas en general.....	9
4.	Discusión de transversalización.....	11
B.	VOTACIÓN GENERAL.....	12
C.	VOTACION PARTICULAR.....	150
IV.	INDICACIONES RECHAZADAS.....	180
V.	PROPUESTA CONSTITUCIONAL.....	216
	ANEXO I: Informe bloque temático 2. Derechos sociales. Sistematización de audiencias.....	223
	Reparación de violaciones de DD.HH. (201).....	223
	Vivienda, Ciudad y Territorio (202).....	225
	Derecho al Trabajo y su protección (203).....	233
	Cuidados y Reconocimiento del trabajo doméstico (204).....	239
	Huelga, Negociación Colectiva y Libertad sindical (205).....	244
	Seguridad Social y Sistema de Pensiones (206).....	248
	Derecho a la Salud y Determinantes Sociales de la Salud (207).....	253
	Educación (208).....	259
	Alimentación (209).....	272
	Deporte, Actividad física y Recreación (210).....	277
	Anexo 1. Menciones de audiencias del Bloque Temático 2 a temáticas del Bloque Temático 1.....	283
	Anexo 2. Menciones de audiencias del Bloque Temático 2 a temáticas del Bloque Temático 3.....	283
	Derecho a la Propiedad.....	283
	Libertad de Emprender y Desarrollar Actividades Económicas.....	284
	Derechos Sexuales y Reproductivos.....	284
	ANEXO II. Bloque Temático 4. Derechos Colectivos. Sistematización de audiencias.....	285
	401: Igualdad ante la Ley y No Discriminación.....	285
	402: Admisión a las funciones y Empleos Públicos.....	294
	Derechos centrados en sus Titulares.....	296
	403: Derechos de las Personas Privadas de Libertad y Derecho a la Reinserción.....	296
	404: Derechos Individuales y Colectivos Indígenas y Tribales.....	300
	405: Derechos de las Personas Mayores.....	301
	406: Derechos de las Mujeres.....	304



407: Derechos de las Personas con Discapacidad, Funcionalmente Diversas y Neurodiversas	306
408: Derechos de las Disidencias y Diversidades Sexuales y de Género.....	308
409: Derechos de las Personas Migrantes	310
410: Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes	312
411: Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado.....	316
412: Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.....	318
Anexo 1. Menciones a derechos del Bloque 2	321
Cuidados y Reconocimiento del trabajo doméstico.....	321
Seguridad Social y Sistema de Pensiones.....	321
Anexo 2. Menciones a derechos del Bloque 3	322
Libertad de Información y Prensa	322
Libertad de Expresión.....	322
Derechos sexuales y reproductivos.....	322
Derecho a la honra, privacidad y datos personales	323
ANEXO III. Informe Enlaces Transversales.....	324



I. ANTECEDENTES GENERALES

A. Metodología de trabajo

El artículo 65 del Reglamento General de la Convención Constitucional dispone las materias que, a lo menos, debe abordar la Comisión sobre Derechos Fundamentales. Al respecto, la Comisión aprobó en su Metodología y Cronograma de Trabajo (s6a, 04/11/2021) dividir en cuatro bloques las materias en análisis.

Sobre los primeros dos bloques¹, la Comisión ha emitido un primer informe, un informe de reemplazo y se encuentra pendiente la emisión de un segundo informe.

En cuanto al Bloque Temático N°3 (ex B2)², este abarca las siguientes materias: 1) Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos; 2) Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio; 3) Derecho al trabajo y su protección; 4) Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado; 5) Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical; 6) Seguridad Social y sistema de pensiones, 7) Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales; 8) Educación; 9) Derecho al sustento alimenticio; 10) Derecho al deporte, la actividad física y la recreación; 11) Otros.

A su vez, el Bloque Temático 4 abarca las siguientes: 1) Igualdad ante la ley, 2) Admisión a las funciones y empleos públicos; 3) Reinserción de los privados de libertad y personas privadas de libertad; 4) Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales; 5) Derechos de las personas mayores; 6) Derechos de las mujeres; 7) Derechos de las personas con discapacidad (Personas con discapacidad); 8) Disidencias y diversidades sexuales; 9) Migrantes; 10) Niñez y juventud; 11) Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; 12) Derecho humano al agua y saneamiento; 13) Otros derechos humanos ambientales; 14) Otros.

Para el mejor orden en el manejo de la información, se creó una sección 'Otros Derechos Fundamentales' (en adelante, 'ODF'), asociada al Bloque Temático N°4.

Así, este informe da cuenta del trabajo desarrollado a propósito de los Bloques Temáticos N°3 (ex B2), 4 y ODF, en las sesiones

B. Reasignación de iniciativas

Con todo, y con la finalidad de cumplir el cronograma de trabajo de la Convención Constitucional, la Comisión acordó (s51a, 14/03/2022) solicitar a la Mesa Directiva la reasignación, a las demás comisiones, de las siguientes iniciativas constituyentes adscritas al Bloque Temático N°4 y ODF, sólo en las materias que en cada temática se informan:

A la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía:

1. Admisión a las funciones y empleos públicos:

Iniciativas convencionales constituyentes N°138, 249, 344, 624 y 962.

Iniciativa indígena constituyente N°215.

2. Derechos de las personas mayores:

Iniciativas convencionales constituyentes N°301, 326, 342, 441, 456, 468, 475 y 598.

Iniciativa indígena constituyente N°56.

3. Derechos de las mujeres:

Iniciativa convencional constituyente N°354, 719, 774 y 844.

¹ El primero de dichos bloques, denominado 'Definiciones generales sobre Derechos Fundamentales', contempla las siguientes materias: 1) Titularidad de los derechos fundamentales; 2) Destinatarios de los derechos fundamentales; 3) Límites y restricciones a los derechos fundamentales; 4) Regulación de los derechos fundamentales y reserva de ley; 5) Cláusula de obligaciones generales de los derechos fundamentales (deber de respetar, garantizar y promover); 6) Fines de los derechos fundamentales; 7) Mecanismos de garantías de los derechos fundamentales, y 8) Financiamiento de los derechos fundamentales.

A su vez, el segundo bloque temático, sin denominación, contempla las siguientes materias: 1) Libertad de conciencia y religión; 2) Libertad de emitir opinión, de información, de culto y de prensa; 3) Libertad de expresión; 4) Derecho a la seguridad individual; 5) Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas; 6) Inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones; 7) Derechos sexuales y reproductivos; 8) Libertad personal; 9) Derecho de propiedad, 10) Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; 11) Derecho a la honra; 12) Debido proceso, con todos sus derechos asociados; 13) Derecho a reunión; 14) Libertad de asociación, 15) Derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero; 16) Derechos de las personas frente a la Administración del Estado; 17) Derecho de petición; 18) Otros.

² Los bloques temáticos N°2 y 3 devinieron en 3 y 2 (s17ª, 28/12/2021).



Iniciativa indígena constituyente N°55, 172, 200, 211, 238 y 256.

Iniciativa popular constituyente N°57.

4. Derechos de las personas con discapacidad:

Iniciativas convencionales constituyentes N°27, 366, 718, 944, 948 y 1026.

Iniciativas indígenas constituyentes N°95, 166, 171 y 260.

Iniciativas populares constituyentes N°27, 42 y 71.

5. Disidencias y diversidades sexuales:

Iniciativa convencional constituyente N°2-4 y 610.

Iniciativa popular constituyente N°41 y 928.

6. Migrantes:

Iniciativas convencionales constituyentes N°48, 171, 248, 367, 375, 515, 612 y 725.

7. Niñez y juventud:

Iniciativas convencionales constituyentes N°337, 391, 413, 419, 622, 689, 840, 843, 848, 881, 935.

Iniciativas indígenas constituyentes N°129, 162, 175, 234 y 253.

Iniciativas populares constituyentes N°25, 32 y 65.

8. Derecho a la nacionalidad y ciudadanía:

Iniciativas convencionales constituyentes N°304 y 375.

9. Derecho a la participación política:

Iniciativas convencionales constituyentes N°249, 267, 375, 377, 408, 463, 556, 899, 975 y 1006.

10. Derecho a la familia y grupos intermedios:

Iniciativas indígenas constituyentes N°03, 23 y 210.

Iniciativas convencionales constituyentes N°351 y 775.

11. Acceso a transportes públicos gratuito y movilidad:

Iniciativas convencionales constituyentes N°661, 781, 827 y 1000.

Iniciativa popular constituyente N°53-4.

A la Comisión sobre Formas de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal:

1. Igualdad tributaria y en cargas públicas:

Iniciativas convencionales constituyentes N°163, 304, 860 y 1014.

Iniciativa indígena constituyente N°215.

2. Otros derechos ambientales:

Iniciativas convencionales constituyentes N°296 y 371³

3. Propiedad sobre los recursos mineros:

Iniciativa convencional constituyente N°375-4.

A la Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional:

1. Reinserción de los privados de libertad:

Iniciativas convencionales constituyentes N°611 y 653.

2. Personas privadas de libertad:

Iniciativas convencionales constituyentes N°611, 619 y 1031.

3. Amnistía:

Iniciativas convencionales constituyentes N°452/529, 461 y 703.

Iniciativa popular constituyente N°55.

³ Erróneamente, también se asignó la ICC N°406.



Iniciativa indígena constituyente N°183-4.

A la Comisión sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio:

1. Consumidores:

Iniciativas convencionales constituyentes N°621, 839 y 840.

2. Personas neurodivergentes:

Iniciativas convencionales constituyentes N°464 y 566.

3. Derecho de acceso a la información:

Iniciativas convencionales constituyentes N°137, 244, 266, 550, 859 y 975/1006.

Iniciativas indígenas constituyentes N°215.

4. Derecho a ahorrar:

Iniciativa convencional constituyente N°800.

5. Derecho a la desobediencia civil:

Iniciativa convencional constituyente N°243, 299 y 304.

6. Ferias libres:

Iniciativa convencional constituyente N°547-4.

7. Derecho a una muerte digna:

Iniciativa convencional constituyente N°273 y 986.

Iniciativa popular constituyente N°72.

8. Derecho al turismo:

Iniciativa convencional constituyente N°426-4.

9. Deuda histórica profesores:

Iniciativa convencional constituyente N°438-4.

10. Metas sociales:

Iniciativa convencional constituyente N°829-1.

11. Derechos culturales y otros derechos afines:

Iniciativa convencional constituyente N°375 y 804.

Iniciativa indígena constituyente N°270.

12. Derecho a la identidad de origen:

Iniciativa convencional constituyente N°878-4.

13. Derecho al acceso a la energía:

Iniciativa convencional constituyente N°375-4.

A la Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico:

1. Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado:

Iniciativas convencionales constituyentes N°177, 417, 516, 620, 691, 700, 784, 854, 857 y 999.

Iniciativas indígenas constituyentes N°183, 210, 215 y 221.

La Mesa Directiva acogió esta solicitud de reasignación en sesión celebrada con la misma fecha.

II. OBJETO DE LA COMISIÓN SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES

La Comisión sobre Derechos Fundamentales es una comisión temática de la Convención Constitucional, por lo que su finalidad es estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales para ser sometidas a la discusión y aprobación del Pleno.

Constituida el 19 de octubre de 2021, la integración de la Comisión es la siguiente: convencionales Damaris Abarca González, Benito Baranda Ferrán, Luís Barceló Amado, Adriana Cancino Meneses, Rocío Cantuarias Rubio, Claudia Castro Gutiérrez, Roberto Celedón Fernández, Aurora Delgado Vergara, Gaspar Domínguez Donoso, Patricio Fernández Chadwick, Javier Fuchslocher Baeza, Dayyana González Araya, Lidia González Calderón, Giovanna Grandón Caro, Felipe Harboe Bascuñán, Natalia Henríquez Carreño, Elsa Labraña Pino,



Francisca Linconao Huircapan, Isabella Mamani Mamani, Teresa Marinovic Vial, Janis Meneses Palma, Valentina Miranda Arce, Katherine Montealegre Navarro, Alfredo Moreno Echeverría, Matías Orellana Cuellar, Manuel José Ossandón Lira, Bárbara Rebolledo Aguirre, María Rivera Iribarren, Mariela Serey Jiménez, Fernando Tirado Soto, Tatiana Urrutia Herrera y César Valenzuela Maass.

Desde el 18 de enero de 2022, Bastián Labbé Salazar reemplazó a María Elisa Quinteros Cáceres.

Desde el 3 de febrero de 2022 la Coordinación de la Comisión es integrada por Janis Meneses Palma y César Valenzuela Maass.

III. DELIBERACIÓN CONSTITUCIONAL

A. DISCUSIÓN GENERAL

1. Audiencias públicas y valoración de la participación popular

Durante la etapa de audiencias públicas concurren a exponer su parecer las siguientes personas:

Bloque Temático N°3 (ex B2)

Sesiones 10ª a 15ª, celebradas entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2021.

Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos: 1) por el Colectivo de derechos humanos de Concepción, las señoras Jessica Bastidas, Ester Araneda y Cecilia Bustos; 2) por el Colectivo Urdiendo Memorias, las señoras Lucy Domínguez Domínguez y Ester Hernández Cid; 3) Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los señores Federico Aguirre Madrid y Sebastián Smart Larraín, y la señora Carolina Alvear; 4) por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, el señor Álvaro Ramis Olivos.

Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio: 5) por la I. Municipalidad de San Rosendo, el alcalde Rabindranath Acuña Olate y el concejal Felipe Sánchez Concha, 6) por el Movimiento Territorios Soberanos, los señores Carlos López y Gustavo Sotomayor; 7) por el Comité de vivienda El Renuevo, la señora Evelyn Cheuquelen y el señor Esteban Troncoso Urzúa; 8) por la Villa José Manzo de Velasco 5, los señores Luis Gutiérrez y Luciano Valenzuela; 9) por la Asociación de Oficina de Arquitectos, la señora Mónica Álvarez de Oro, presidenta, y el señor José Ramón Ugarte, vicepresidente; 10) por el Centro Producción del Espacio, los señores Carlos Aguirre y Francisco Vergara; 11) por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, la señora Pilar Jiménez y los señores Sergio Baeriswyl y Gonzalo Pérez; 12) por la Comunidad de Organizaciones Solidarias, el señor Ignacio Silva y la señora Isabel Lacalle.

Derecho al trabajo y su protección: 13) en representación del Grupo de trabajadores y trabajadoras a honorarios de la Universidad del Biobío, la señora Jessica Jerez Yáñez y el señor Víctor Mora Canales; 14) por el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile, el señor Alejandro Valdebenito; 15) por la Asociación Nacional de Investigadores en postgrado, el señor José Manuel Jiménez y la señora Constanza Marchant; 16) por la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca, los señores Roberto Pizarro Tapia, Claudio Oyarzún y José Tello Ávila; 17) por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y ramas afines, las señoras Marta Oyarzo y Paola Sanhueza; 18) por la Sociedad Chilena de Ergonomía, el señor Mauricio Santos y señora Marta Martínez; 19) por la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados, el señor José Ortiz Arcos y la señora Marisol Torres Rodas; 20) por la Asociación Movimiento Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH), la señora Soledad Mella y el señor Alejandro Mena; 21) por la Asociación Gremial de Peritos de Propiedad Industrial, el señor Juan Luis Meza y la señora Pía Cortés; 22) por la Fundación Empleo, el señor Jorge Gaju y la señora Jessica Parada; 23) por la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile F.G.N, la señora Sara Smok Ubeda, vicepresidenta; 24) por la Organización Internacional del Trabajo, la señora Patricia Roa y el señor Humberto Villasmil, 25) por el Comité de trabajadores y sindicalistas – Coordinadora feminista 8 de marzo, las señoras Natalia Corrales Cordero y Andrea Poblete Falcón.

Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado: 26) por el Movimiento ciudadano Postnatal 6 y 12 meses, las señoras Alejandra Jaures y Leslie Power; 27) por el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE), la señora Claudia Miranda; 28) por la Fundación Nodo XXI, las señoras Mara Roitstein y Camila Miranda, 29) la señora Alejandra Zúñiga Fajuri.

Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical: 30) por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Zona Oriente, María Angélica Soto Obreque y Elma Correa, y el señor Fabián Ponce Núñez; 31) por el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales, los señores



Felipe Tamayo y Fernando Espinoza Moreno; 32) por la Federación Walmart y Confederación de Comercio -Unidad por el Trabajo Digno-, el señor Sergio Pérez Faúndez y la señora Viviana Catalán Lindermann, 33) por el Sindicato Interempresa Líder de Trabajadores de Walmart Chile los señores Antonio Moreno, presidente, y el secretario Patricio Venegas; 34) la señora Karla Varas Marchant, profesora de Derecho Laboral en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; 35) la señora Wendoling Silva Reyes; 36) el señor René Cortázar.

Seguridad social y sistema de pensiones: 37) por la agrupación Con mi plata NO, la señora Marta Salazar y el señor José Sandoval; 38) por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, los señores Hugo Cifuentes, profesor de derecho de seguridad social, y Marco Vásquez; 39) por la Red Chilena de Ingreso Básico, la señora Gabriela Cabaña, presidenta, y el señor Cristóbal Ramos, secretario; 40) por Isapres de Chile A.G., los señores Gonzalo Bustos y Matías Avendaño; 41) por la Comisión de Seguridad y Previsión Social del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, el señor Álvaro Gallegos; 42) por la Asociación de Administración de Fondos de Pensiones, las señoras Constanza Bollmann y Alejandra Cox.

Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales: 43) por la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, (Fenpruss) Biobío, los señores Aldo Santibáñez Yáñez, presidente Nacional, y Pavel Guíñez; 44) por GDT psiquiatría social de sonepsyn/ capítulo chileno de sociedad mundial de psiquiatría, el señor Héctor Duque Mella y la señora Fabiola Jaramillo Castell; 45) por Long Covid Chile, los señores André Saravia y Tomás Morales; 46) por el Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano (INEDH) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el señor Camilo Bass del Campo; 47) por el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, las señoras Alicia Arias Schreiber y Soledad Barría; 48) por el Colegio Médico de Chile, el señor Fernando Araos y la señora Francisca Crispi.

Derecho a la educación: 49) por la Asociación de Establecimientos Particulares Subvencionados del Biobío (Asepar), la señora Carolina Contreras Povea y el señor Misael Valenzuela Castro; 50) por la Red de educación en contexto de encierro de adolescentes y jóvenes (Red ECEA) y Corporación Educacional Tierra de Esperanza, el señor José Rebolledo y la señora Karina Basauri Villar; 51) por la Corporación educacional Colegio Bernardo O'Higgins (CBO), el señor, Esteban Fico y Soledad Arriagada, 52) por el Movimiento CREA, Universidad San Sebastián, Gabriel Mora y Vicente González; 53) Fernando Peña, académico en la universidad San Sebastián, 54) por el Grupo Toparquía, los señores Henry Renna y Daniel Otárola, 55) por el Colegio de Profesores comunal Santa Juana, el señor Mauricio Videla; 56) por la organización Educación 2020, la señora Alejandra Arratia Martínez y el señor Jorge Ibáñez Carvallo, 57) por la organización Abofem, la señora Verónica del Pozo, 58) por el Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECh), el señor Ennio Vivaldi.

Derecho al sustento alimenticio: 59) por la organización Red Hambre Cero, la señora Paulina Sánchez y el señor Javier Cuevas; 60) por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G., la señora Cecilia Sepúlveda, presidenta, y la señora Lorena Rodríguez; 61) por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, las señoras Manuela Cuvi Rodríguez y Ornella Giovanna Toboni.

Derecho al deporte, la actividad física y la recreación: 62) Por la Agrupación folclórica Renacer Cuequero, John Cea y Widny Mendoza; 63) por la organización Deporte para la Constitución, la señora Daniela Ahumada y el señor Hernán González; 64) por el Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el señor Rodrigo Soto Lagos; 65) el señor Claudio Basilio Farías, profesor de educación física; 66) por el Colectivo Recreación y Ocio a la Constitución, el señor Sergio Alejandro Toro Arévalo y la señora Carolina Kurruf Poblete Gálvez.

Bloque Temático N°4 y Otros Derechos Fundamentales

Sesiones 1ª a 4ª, subcomisiones N°1 y 2, celebradas entre el 20 y el 23 de diciembre de 2021.

Igualdad ante la ley: 1) Estefanía Esparza Reyes; 2) por el Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, el señor José Manuel Díaz de Valdés; 3) por la ONG OPTIA - Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, la señora Catherine Muñoz.

Admisión a las funciones y empleos públicos: 4) el señor Enrique Rajevic y la señora Isabel Aninat; 5) por la Asociación Nacional de Funcionarios de Chile (Anfuchid), la señora Macarena Chandía Pino.

Reinserción de los privados de libertad: 6) los señores Javier Velásquez y Mauricio Reyes; 7) Carmen Gloria Espinoza Vilches.

Personas privadas de libertad: 8) las señoras Rocío Sánchez Pérez y Katherine Ríos, 9) por la Asociación Pensamiento Penal, las señoras Paula Vial Reynal y Grace Méndez Montes.

Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales: 10) por Fundación Aitue, los señores Carlos Llancaqueo Mellado y Nicolás Figari; 11) por la Fundación Rakizuum, el señor Richard



Caifal Piutrin y la señora Laura Tarita Alarcón Rapu; 12) por la Comunidad diaguíta Campillay Guacalagasta, el señor Gastón Vera Rojas; 13) por la Organización Sociales y Territoriales de Walmapu, el señor Blaise Elie Pantel y la señora Karina Riquelme Viveros; 14) por la Asamblea Nación Aymara Arica y Parinacota, el señor Gino Raúl Grünewald Condori; 15) Gabriel Pozo Menares, de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco; 16) por la Mesa técnico política Pueblo Tribal Afrochileno, la señora Camila Rivera Tapia.

Derechos de las personas mayores: 17) por Voces Mayores, las señoras María Ximena Abogabir Scott y Macarena Pía Rojas Gutiérrez; 18) por la Universidad de Los Andes - Observatorio Constitucional, la señora Marcela Inés Peredo Rojas; 19) por la Fundación Gero Zoom, la señora Camila Martínez y el señor Patricio Saldívar.

Derechos de las mujeres: 20) por la Fundación contra el femicidio con Javiera en la memoria, las señoras Claudia Neira Oportus y Paula Silva; 21) por la Fundación Nada Sin Nosotras, las señoras Verónica Riquelme y Mariela Infante Erazo.

Derechos de las personas con discapacidad: 22) por Colectivo Personas en situación de discapacidad, las señoras Javiera Viveros Alegría y Daniela Fuentes Salinas.

Disidencias y diversidades sexuales: 23) por la Fundación Iguales, la señora Isabel Margarita Amor Alfaro y el señor Juan Enrique Pi; 24) por la Fundación Diverses, los señores Ethan Langenegger Muñoz y Alex Pascal Castillo.

Migrantes: 25) por el Servicio Nacional de Migraciones, los señores Romer Ángel Rubio Flores y Ricardo Bahamondes; 26) por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, el señor Manuel Hidalgo; 27) por el Movimiento acción migrantes, la señora Mabel Cobos y el señor Eduardo Cardoza.

Niñez y juventud: 28) por el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores/As Subcontratados del SENAME, la señora Violeta Oyarce Paredes y el señor Francisco Gorziglia Cabrera; 29) por la Fundación Iberoamericana de Derechos de Infancia y Familia, el señor Miguel Cillero Bruñol y la señora Ester Valenzuela Rivera; 30) por la Subsecretaría de la Niñez, la señora Blanquita Honorato Lira.

Derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: 31) por el Observatorio Constitucional Ambiental, la señora Valentina Durán Medina y el señor Benjamín González Guzmán; 32) por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)², la señora Pilar Moraga y el señor Rodolfo Sapiains.

Derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales: 33) por Febapru Chile, el señor Marcó Landeros; 34) por la Fundación Newenko, las señoras Daniela Duhart Vera y Evelyn Vicioso Moyano; 35) por el Centro de Derechos y Gestión de Aguas UC, las señoras Daniela Rivera y María Molinos; 36) por la Cámara de Turismo, Comercio y Servicios Saltos del Laja A.G., los señores José Sanzana y Pablo Venegas⁴.

Otros derechos fundamentales:

Pobreza: 1) por la Fundación Gente de la Calle, el señor Ignacio Silva.

Derechos del consumidor: 2) por Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras (FOJUCC AC), el señor Pablo Rodríguez Arias y la señora Fabiola Inostroza Leal; 3) por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), el señor Hernán Calderón Ruiz.

Participación: 4) por la Fundación Ciudadanía Inteligente, el señor Octavio Del Favero y la señora Federica Sánchez Staniak; 5) por la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil- CHILECOSOC, los señores Juan Carlos Venegas y Alejandro Jiménez.

Acceso a la información y resguardo patrimonial: 6) por Organizaciones de Archiveras y Archiveros de Chile, el señor Claudio Moisés Ogass Bilbao y la señora Valentina Rojas Rojo; 7) el señor Jorge Luis Astudillo Muñoz; 8) por el Consejo para la Transparencia, el señor David Ibaceta, director general, y la señora Ana María Muñoz; 9) por Chile Transparente, la señora Tamara Agnic.

Cultivos cannábicos: 10) por la Federación chilena de colectivos cannábicos (FECHICC), el señor Juan Cristóbal Guerrero San Martín y la señora María Alejandra Leyton Alfaro.

Sobre relaciones familiares: 11) por PoliamorChile, el señor Agustín Ignacio Alvear Blau; 12) por la Fundación Acción Familia, el señor Juan Antonio Montes.

⁴ Exposición ocurrida en la 11ª sesión, 25 de noviembre de 2021.



Derechos digitales: 13) por Imagina Chile, los señores Felipe Pino Zúñiga y Bastian Riveros; 14) por la Facultad de Derecho de la Universidad Central, el señor Emilio Oñate; 15) por la Fundación Kamanau, el señor Moisés Sánchez y la señora Carola Cotroneo.

Neurodivergencia: 16) por Neurodiversidad, la señora Romina López Fernández y Alejandro Andrade; 17) por la Agrupación unidos por la neurodiversidad, la señora Alexandra Pérez y el señor Maximiliano Bravo.

Derecho al cuerpo: 18) por el Equipo de Investigación Danza en la Constitución, la señora Tamara Valentina Arrieta Leal y el señor Exequiel Gómez Acuña.

En las actas de tales sesiones se desarrollan tales exposiciones y comentarios de la Comisión. Asimismo, los anexos I y II contienen una sistematización de las exposiciones efectuadas en las audiencias destinadas a estos bloques, elaborada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile).

2. Despliegue territorial de la Comisión

Durante el desarrollo de las etapas de audiencias públicas del Bloque Temático N°3 (ex B2), la Comisión celebró dos sesiones (*s10a y 11ª, 24 y 25 de noviembre de 2021*), en la comuna de San Rosendo, en el marco de salida territorial de la Convención Constitucional a la región del Biobío.

3. Iniciativas constitucionales deliberadas en general

En cuanto a las Iniciativas Indígenas o Populares Constituyentes, sus presentaciones ocurrieron ante la Comisión en las sesiones 48ª, 49ª, 50ª y 57ª, celebradas entre el 7 y el 28 de marzo de 2022. En cuanto a las Iniciativas Convencionales Constituyentes (ICC), sus presentaciones ocurrieron ante las subcomisiones N°3 y 4 de la Comisión, las que celebraron cinco sesiones cada una, de modo paralelo, entre el 14 y el 21 de marzo de 2022.

La nómina de iniciativas expuestas, y de quien realizó la ponencia respectiva (que se informa entre paréntesis), es la siguiente:

Derecho a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, sus familiares y la sociedad en conjunto, respecto de delitos cometidos por agentes del estado y que constituyen violación a los derechos humanos

Subcomisión N°3: N°370 (Manuela Royo); 451 (Carolina Videla), y 581 (Natalia Henríquez).

Subcomisión N°4: N°375 (Roberto Celedón); N°666 (Tatiana Urrutia) y N°1005 (Roberto Celedón).

Las ICC N°74, 466 y 543 no fueron expuestas.

Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y el territorio

IIC N°5 (Luís Carvajal); 39/222 (Walter Imilan, Axel Pailafilu); 45 (Solange Aguilar Santibáñez); 73 (Cecilia Collio Llanquileo); 195 (Andrea Santibáñez Martínez).

IIC N°263 no fue expuesta.

IPC N°16/41126 (Victoria Herrera Pacheco, Juan Sharp Oyarzún, Diego Rebolledo Flores, Enrique Venegas Flores).

Subcomisión N°3: N°1 (Manuel Ossandón); 129 (Alfredo Moreno); 340 (Tania Madriaga); 563 (Dayana González), y 690 (Patricio Fernández).

Subcomisión N°4: N°68 (Cristian Monckeberg); 328 (Manuel Woldarsky); 396 (Cesar Uribe) y 688 (Benito Baranda).

La ICC N°941 no fue expuesta.

Derecho al trabajo y su protección

ICC N°178 (Andrea Santibáñez Martínez).

IPC N°28/2826 (Silvia Silva Silva, Pablo Zenteno).

Subcomisión N°3: N°362 (Janis Meneses); 107 (Giovanna Grandón); 569 (Roberto Celedón); 655 (Jeniffer Mella); 716 (Lisette Vergara) y 747 (Manuel Woldarsky).

Subcomisión N°4: N°143 (Teresa Marinovic); 320 (Luis Barceló); 555 (Bernardo Fontaine); 587 (Marcos Barraza); 682 (Aurora Delgado) y 719 (María Rivera).

Las ICC N°380, 474, 495, 613, 630 y 1025 no fueron expuestas.

Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

IIC N°252 no se expuso.



IPC N°32/56422 (Andrea Iturry Yamamoto, Carolina Barahona González, Mitzy Duboy Luengo); 61/71122 (Rocío Norambuena); 75/9638 (Alejandra Sepúlveda, Miriam Henríquez).

Subcomisión N°3: N°474 (Alondra Carrillo); 478 (Bárbara Rebolledo), y 947 (Bárbara Rebolledo).

Subcomisión N°4: N°355 (Mariela Serey); 546 (Miguel Botto) y 719 (María Rivera).

La ICC N°436 no fue expuesta.

Derecho a la negociación colectiva

Subcomisión N°3: N°110 (Giovanna Grandón); 146 (Manuel Ossandón); 302 (Luis Barceló); 474 (Alondra Carrillo); 555 (Bernardo Fontaine), y 569 (Roberto Celedón).

Subcomisión N°4: N°108 (Giovanna Grandón); 143 (Rocío Cantuarias); 257 (María Rivera); 436 (Elsa Labraña); 495 (Marcos Barraza); 568 (Miguel Botto); 682 (Javier Fuchslocher), y 1025 (María Rivera).

La ICC N°362 no fue expuesta.

Derecho a la seguridad social

IPC N°2/8590 (Coca Burnier, Constanza Burnier, Macarena Letelier, Eduarso Jerez Sanhueza, José Sandoval Pino, Stephanía Jeldrez); 17/4758 (Luis Mesina, Sandra Marín Cheuquelaf); 63/73838 (Felipe Corvalán Destefani, Cristian Vivian).

Subcomisión N°3: N°28 (Elsa Labraña); 331 (Bernardo Fontaine); 358 (Luis Barceló) y 372 (Roberto Celedón).

Subcomisión N°4: N°135 (Rocío Cantuarias); 381 (Alondra Carrillo), 569 (Roberto Celedón), 587 (Marcos Barraza); 589 (Trinidad Castillo) y 687 (Roberto Celedón).

Las ICC N°357, 362 y 667 no fueron expuestas. Y la ICC N°795 fue retirada por la convencional Ivanna Olivares.

Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales

IIC N°4 (Yolanda Nahuelcheo); 8 (Pedro Llancapan Zúñiga); 26 (Andrés Cuyuk Soto); 72 (Mijail Painecura Godoy, Mónica Aillapán); 85 y 244 (Javiera Antil).

IIC N°43, 102, 128, 267 no fueron expuestas.

IPC N°22/43538 (Eduardo Waghorn); 29/9026, 38/7062 y 39/4126 (Carolina Espinoza, Erika Díaz, Jorge Carabante, Gabriela Farías, Aldo Santibáñez); 30/9414 (Cristián Jara).

Subcomisión N°3: N°379 (Janis Meneses); 590 (Mariela Serey); 668 (Isabella Mamani); 872 (Bárbara Rebolledo), y 1030 (Arturo Zúñiga).

Subcomisión N°4: N°6 (Bárbara Rebolledo); 307 (Barbara Rebolledo); 387 (Francisca Linconao); 492 (Lisette Vergara); 658 (Lisette Vergara); 681 (Gaspar Domínguez); 960 (Manuel Woldarsky), y 993 (Loreto Vidal).

La ICC N°749 no fue expuesta.

Educación

IIC N°2 (Alejandro Toro Huentecura); 36 (Rosa Cheuquecoy, Benito Cumilaf Mariano, Aurora Nahuelan González); 49 (María Huenchun); 191 (Andrea Santibáñez Martínez).

IIC N°216, 227, 266, 270 no fueron expuestas.

IPC N°1/5938 (Siomara Molina); 3/4102 (Ingrid Bohn); 11/34 (Daniel Rodríguez); 14/38 (Nydia Alejandra Caru Avilés); 15/10898 (Jorge Enrique Briones Vega); 23/36582 (Ennio Vivaldi); 50/43926 (Ignacio Maldonado, Joaquín Walker, Alejandra Arratia); 62/70062 (Carlos Díaz, Trinidad Riesco); 70/(...) (Karen Muriel Yany Anich, Aliro Borquez).

Subcomisión N°3: N°145 (Manuel Ossandón), 288 (Katerine Montealegre); 338 (Carlos Calvo); 351 (Teresa Marinovic); 363 (Janis Meneses); 404 (Elisa Loncon); 623 (Lisette Vergara); 650 (Dayyana González); 662 (Lorena Céspedes) y 833 (Elisa Gustinianovich).

Subcomisión N°4: N°127/276 (Teresa Marinovic); 330/974 (Giovanna Grandón); 343 (Manuel Ossandón); 359 (Loreto Vallejos); 369 (Loreto Vallejos); 386 (Natividad Llanquileo); 411 (Malucha Pinto); 535 (Elisa Loncon); 629 (Valentina Miranda); 665 (Ramona Reyes), 837 (Roberto Celedón) y 891 (Bastían Labbé).

Las ICC N°646, 651, 698, 719, 746 y 1019 no fueron expuestas.

Derecho al sustento alimenticio

IIC N°34 (Rosa Cheuquecoy, Benito Cumilaf Mariano, Aurora Nahuelan González).

IPC N°67/17046 (Camila Montecinos Urbina).



Subcomisión N°3: no hubo ponencias.

Subcomisión N°4: N°345 (Alejandra Flores).

Derecho al deporte, la actividad física y la recreación

IPC N°31/11050 (Andy Zepeda, Vjera Leyton, Rodrigo Fecci).

Subcomisión N°3:

Subcomisión N°4: N°383 (Carolina Domínguez), y 551 (Bastián Labbé).

La ICC N°685 no fue expuesta.

Igualdad ante la ley

Subcomisión N°3: N°278 (Pedro Muñoz); 448 (Bessy Gallardo); 552 (Janis Meneses); 610 (Bessy Gallardo) y 845 (María Rivera).

Subcomisión N°4: N°175 (Rocío Cantuarias); 537 (Manuel Ossandón) y 831 (Damaris Abarca).

Las ICC N°304, 565 y 676 no fueron expuestas.

Derechos colectivos e individuales indígenas

IIC N°46 (Pedro Núñez); 56 (Jorge D'Orcy Saez); 90 (Alihuen Antileo, Jaime Antileo); 91 (Flores Alves, José Huentelao, Berta Marín); 92 y 183 (Jakeline Curaqueo, Margarita Calfio Montalva); 95 (Carlos Paillamanque); 119 (Andrea Santibáñez Martínez); 142 (Pedro Muñoz Hernández); 145 (Margot Ríos Mamani); 151 (Andrea Santibáñez Martínez); 152 (Andrea Santibáñez Martínez); 159 (María Melillán Moncada); 160 (Oscar Núñez Llanca, Susana Gaete); 173 (Andrea Santibáñez Martínez); 184 y 188 (José Huanca Mamani); 211 (Ariela Copa Gómez); 221 (Juana Cheuquepán Colipe); 244 (Juana Cheuquepán Colipe); 266, 267 y 270 (Luz González Maichil).

IIC N°3, 16, 22, 42, 48, 81, 89, 100, 205, 215, 251, 257, 261 no fueron expuestas.

Derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales

IIC N°58 no fue expuesta.

Subcomisión N°3: N°114 (Luis Barceló); 164 (Jorge Arancibia) y 793 (Gloria Alvarado).

Subcomisión N°4: N°8 (Carolina Vilches y Manuela Royo) y 512 (Bernardo Fontaine).

Las ICC N°136 y 954 no fueron expuestas.

Derecho a la agricultura campesina y derechos fundamentales desde la perspectiva rural

Subcomisión N°3: N°776 (Gloria Alvarado) y 1023 (Gloria Alvarado).

Subcomisión N°4: no hubo ponencias.

La ICC N°1016 no fue expuesta.

Protección de datos y seguridad informática

Subcomisión N°3: N°375 (Roberto Celedón) y 524 (Felipe Harboe).

Subcomisión N°4: No hubo ponencias.

La ICC N°458 no fue expuesta.

Grupos históricamente excluidos

Subcomisión N°3: N°287 (Benito Baranda).

Subcomisión N°4: N°463 (Tatiana Urrutia).

4. Discusión de transversalización

Quienes han integrado el Mecanismo de Transversalización en representación de la Comisión expusieron su trabajo durante la deliberación de los Bloques Temáticos relativos a este informe, en la sesión 61ª, de 7 de abril de 2022. En el anexo N°3 se contiene el reporte dado.



B. VOTACIÓN GENERAL⁵⁶

(c.201) Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos (ICI 89-4, 91-4, 92-4, ICC N° 74, 370, 375, 421, 446, 451(y 519), 543, 581, 666, 879, 1005)

1. ICI N°89-4

Artículo x.- El Estado reconoce la nacionalidad originaria de los integrantes de pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen sus mecanismos para determinar a sus integrantes. Con todo, el principal criterio de los pueblos debe ser el vínculo consanguíneo y quienes logren acreditarlo no pueden ser privadas de su nacionalidad originaria o ser discriminada por su origen.

Sometida a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstenciones).

2. ICI 91-4

El Estado reconoce que los pueblos indígenas han sufrido vulneraciones históricas que los han desposeído de sus tierras y de sus formas de vida tradicionales. Es deber del Estado velar por la reparación integral de dichas vulneraciones de modo tal que los Pueblos Indígenas puedan alcanzar un desarrollo integral que los conduzca al buen vivir. Una ley determinará la forma en que se reparará a los Pueblos las vulneraciones sufridas, la que deberá considerar, a lo menos la salud, educación y vivienda de los Pueblos Originarios concernidos.

Es deber del Estado y de sus órganos velar para que la historia de vulneraciones de los Pueblos Indígenas sea conocida por la población. En virtud del principio de la interculturalidad, los programas educativos deberán incorporar en todos los niveles la historia de los Pueblos Indígenas y su relación con el Estado de Chile.

Se procedió a votar de forma separada cada inciso.

Sometido a votación el inciso primero se **rechazó** (6 votos a favor, 21 votos en contra, 3 abstenciones).

Sometido a votación el inciso segundo se **rechazó** (5 votos a favor 23 votos en contra, 3 abstenciones).

3. ICI N°92-4

PREÁMBULO: Reconocimiento de la preexistencia de las naciones y pueblos ancestrales, y del genocidio ejecutado por el Estado de Chile en los procesos de expansión imperial y colonial que caracterizó al largo siglo XIX en el Continente Americano.

ARTÍCULO xx: “El Estado de Chile reconoce que la nación chilena cometió actos de genocidio, durante la ocupación e invasión militar de los territorios ancestrales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, teniendo consecuencias devastadoras hasta el presente, que afectó las tierras, bienes, familias, personas, espacios sagrados; y, toda la biodiversidad que habitaban y convivían ancestralmente.

Por tanto, la nación chilena se compromete a través del Estado de Chile a enmendar, reparar y compensar el trauma histórico causado, en sus diferentes dimensiones de carácter territorial, ambiental, política, económica, social, cultural y espiritual, a través de la implementación de medidas, mecanismos, políticas y programas de verdad, justicia, garantías de no repetición, reparación integral, restitución, indemnización y resarcimiento, respecto de los delitos cometidos por los agentes colonizadores del Estado.

ARTÍCULO xx: Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen derecho a la verdad y justicia, al establecimiento de garantías de no repetición y medidas de reparación integral.

Es deber del Estado de Chile resarcir los daños causados por los procesos de invasión, genocidio y colonización sobre los territorios ancestrales y formas de vida de los pueblos originarios.

Este derecho comprende la implementación de medidas, políticas, programas y mecanismos de restitución, indemnización, rehabilitación, mitigación, resarcimiento, de expresiones simbólicas o de cualquier otro carácter que sean suficientes para satisfacer la reparación de la forma más completa posible en sus dimensiones territorial, ambiental, política, económica, social, cultural, simbólica y espiritual.

⁵ Las votaciones se desarrollaron sin debate.

⁶ En este informe solo se menciona el resultado de la votación. Para conocer la manera en que cada convencional votó, visitar el sitio de datos abiertos de la Convención (<https://www.cconstituyente.cl/datosabiertos/Default.aspx>) o el sitio de la Comisión (https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=28).



El Estado será responsable de financiar, fomentar y promover estudios e investigaciones antropológicas, historiográficas y cartográficas que contribuyan al esclarecimiento de la verdad histórica en función de la reparación integral, material y simbólica.

La ley establecerá los instrumentos de justicia transicional de carácter judicial y extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de verdad, justicia y reparación.

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 23 votos en contra, 3 abstenciones).

4. ICC N°74-4

Artículo xx. Garantía de no repetición, restitución y reparación. El Estado reconoce el despojo territorial sufrido por los pueblos y naciones preexistentes y se obliga a adoptar medidas de no repetición y a generar, en conjunto con estos, todos los mecanismos adecuados y oportunos para restituir las tierras y territorios, incluyendo la expropiación. En aquellos casos en que no sea posible, deberá reparar íntegramente.

Artículo xx Prohibición de desarrollar actividades militares en tierras y territorios de los pueblos y naciones preexistentes. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos y naciones preexistentes, a menos que se haya acordado libremente con ellos. El Estado deberá desmilitarizar las tierras y territorios que se encuentren bajo esa condición, y antes de utilizarlos para actividades militares, deberá celebrar la debida consulta y alcanzar el consentimiento previo, libre e informado por medio de procedimientos apropiados.

Se solicitó votación separada de ambos artículos.

Sometido a votación el artículo primero **rechazó** (11 votos a favor, 19 votos en contra, 2 abstenciones).

Sometido a votación el artículo segundo **rechazó** (10 votos a favor, 20 votos en contra, 2 abstenciones).

5. ICC 370-4

Artículo nuevo: Los derechos de la justicia transicional

El Estado reconoce a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y la Naturaleza ocurridas en todo tiempo, y de la sociedad en su conjunto, los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria, y que se adopten medidas para garantizar la no repetición de esos hechos, de acuerdo con los estándares internacionales vigentes en materia de derechos humanos y justicia transicional.

Las políticas de justicia transicional tendrán por objetivo garantizar estos derechos frente a todas las violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza cometidas o avaladas por el Estado en contra de personas, colectivos de personas, ecosistemas y territorios. Mediante una ley, se establecerán instrumentos, mecanismos y políticas de justicia transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso, se aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

Artículo nuevo: El derecho a la verdad sobre el paradero de las y los desaparecidos, a ser encontrados y restituidos a sus familias y a la sociedad

Toda persona calificada como detenida desaparecida o víctima de desaparición forzada tiene el derecho de ser buscada hasta dar con su paradero o su probable destino final.

La ley deberá disponer de institucionalidad, recursos técnicos y materiales, de acuerdo a los estándares vigentes en materia de búsqueda de personas desaparecidas, para determinar su paradero o probable destino final.

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 votos en contra, 1 abstención).

6. ICC 375-4

30.- Derecho a la reparación integral

Todas las personas, grupos y pueblos víctimas de violaciones a los derechos humanos serán tratadas de un modo acorde con su dignidad y tendrán garantizado el pleno goce del derecho a acceder a los mecanismos de justicia y reparación. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.

Todos aquellos involucrados en los actos de los que habla este artículo deberían dar a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.



Cuando se determine que una persona natural o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.

El Estado garantizará la implementación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas, proporcionará las garantías de no repetición adecuadas y asegurará el rápido restablecimiento de sus derechos.

La Constitución reconoce la obligación del Estado y de todos los miembros de la sociedad de respetar y hacer respetar el deber de enjuiciar a los perpetradores de crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario, de rechazar la impunidad, lo que impide que estos actos sean amnistiables, indubitables, prescriptibles, penal y civilmente, o cualquier otra forma que favorezca la impunidad. Todo acto contrario a este artículo carece de validez ab initio.

El convencional Celedón **retiró** la iniciativa N°375 en esta materia.

7. ICC 421-4

Asumiendo los valores propios de la memoria democrática y la dignidad humana, le corresponde al Estado, ante las violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido o cometan en el futuro, asegurar el derecho a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, así como garantizar su no repetición. Constituye una responsabilidad pública afianzar el deber de recordar, preservando los espacios de memoria con sus archivos documentales y facilitando el acceso público a unos y otros, a la vez que educar para la paz y la no violencia como salvaguardia contra la ocurrencia de tales violaciones.

El convencional Fernández **retiró** la iniciativa N°421 en esta materia.

8. ICC 446

Artículo x: Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición

La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición ante las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que sufran.

Dentro de este derecho existe el deber por parte del Estado, de perseguir las violaciones referidas cuando ocurran, asegurando la incoación de investigaciones oportunas, eficaces y rigurosas; asegurándose, asimismo, la proporcionalidad de las sanciones que se impongan a los responsables de aquéllas, no pudiendo proceder respecto de éstos últimos ninguna clase de indulto, rebaja de pena o medida que sea expresión de impunidad.

Además, las acciones penales y civiles que emanan tendrán el carácter de imprescriptibles y la responsabilidad no podrá ser objeto de amnistía, prohibiéndose el uso de la justicia militar para su investigación y sanción, debiendo ser conocida por una juez natural y establecido previamente por ley. Las víctimas directas e indirectas de estas violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos tendrán el derecho de participar en todas las instancias que se generen.

Artículo x: De las obligaciones del Estado de Chile, respecto de las graves violaciones a los DD.HH

El Estado de Chile estará obligado a tipificar conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos como delitos en el ordenamiento jurídico interno y a proveer activamente información y establecer y respetar el derecho al habeas data.

También, el Estado de Chile deberá cooperar con terceros Estados y con organizaciones internacionales jurisdiccionales en materia de ayuda, información, extradición y activación de los principios de jurisdicción universal.

Artículo X: De las inhabilidades para responsables de delitos de lesa humanidad

Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones; ni podrá ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 21 votos en contra, 2 abstenciones).



9. ICC 451-4 (y 519)

Artículo N4. Derecho a la reparación integral por violaciones a los Derechos Humanos.

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral de conformidad con el Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Artículo N5. Derecho a la verdad

Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

Artículo N6. El derecho a la memoria

Las víctimas y comunidades tienen derecho a recordar el pasado y relacionarlo con el presente, a través de la construcción, expresión y transmisión de memorias respecto de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, y/o acciones de defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos y valores democráticos, a fin de permitir a la sociedad conocer, comprender, difundir y educar sobre su pasado en forma íntegra, democrática, pluralista y en pleno respeto por los derechos humanos.

El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la memoria desde un abordaje integral que considere también su relación con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición, así como la participación de las víctimas y la sociedad civil, en armonía con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile.

El Estado tiene el deber de recuperar, preservar y garantizar el acceso público a las pruebas documentales, espacios de memoria y de otro tipo, contruidos, recuperados o significativos para una comunidad, que dan testimonio y/o constituyen vestigios de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 5 votos en contra, 3 abstenciones).

10. ICC 543-4

Artículo 1. El derecho al reconocimiento: El Estado reconoce todas las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado de Chile hacia la población civil, por lo mismo, es obligación y competencia de éste repararlas, generando acciones coordinadas entre los distintos organismos que lo conforman, vigilando su actuación a través de mecanismos eficientes de control, evaluación y participación social.

Artículo 2. El Estado, asegurará la existencia de una Política Nacional de Reparación Integral, comprendida como todos los esfuerzos y acciones que compete al Estado en materias de verdad, justicia, reparación integral que considera medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución e indemnización y, garantías de no repetición.

Artículo 3. La gestión y administración de la política de reparación integral es de responsabilidad del Estado, obligado de generar un soporte financiero, organizacional y administrativo que garantice el efectivo cumplimiento de la reparación integral alcanzando el máximo esperado de los estándares que plantea el derecho internacional de los derechos humanos.

Artículo 4. Sobre las medidas de satisfacción, el Estado dispondrá recursos y acciones destinadas a reconstruir la verdad sobre los hechos ocurridos y difundir la memoria en relación al conflicto. La participación de las personas víctimas, sociedad y Estado debe ser resguardada.

Artículo 5. Sobre las medidas de rehabilitación, se obliga al Estado a generar acciones de promoción, prevención y rehabilitación integral en el ámbito físico, social, psicológico, participación y memoria, como parte de las acciones sanitarias que le corresponderá ejecutar a la cartera de salud; garantizando la inmediatez, acceso, oportunidad, calidad, y gratuidad a las personas víctimas y sobrevivientes de violación a derechos humanos.

Artículo 6. Sobre las medidas de restitución e indemnización, estas deben ser acordes a la magnitud y proporcionalidad del daño causado. Se garantizará los derechos y condiciones que las personas víctimas y sobrevivientes tenían antes de los hechos ocurridos, en materias de previsión social, educación, salud, laboral, vivienda, y en todos los ámbitos que inciden en el bienestar de las personas.

Artículo 7. Sobre las medidas de garantías de no repetición, el Estado dispondrá de acciones que garanticen que estos actos no vuelvan a ocurrir, alcanzado la verdad de los hechos que acontecieron, sancionando a las y los responsables, reformando y/o reestructurando aquellas instituciones donde se han cometido acciones que atentan a los derechos fundamentales de las personas. El estado dispondrá de un ente público autónomo con función fiscalizadora procurando que se cumplan las garantías de no repetición.

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 votos en contra, ninguna abstención).



11. ICC 581-4

ARTÍCULO XX

El Estado garantiza la estatización de los sitios de memoria en las que se hayan cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos y consagra estos como patrimonio cultural.

El Estado debe además asegurar en los sitios de memoria la implementación de museos y planes educativos con base en la cultura y la memoria.

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 votos en contra, ninguna abstención).

12. ICC 666-4

Artículo N°X: Derecho a la verdad

La Constitución asegura a la comunidad y a las víctimas el derecho al esclarecimiento de la verdad respecto de las graves violaciones a los Derechos Humanos; especialmente cuando se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

Artículo N°X: Derecho a la reparación integral por violaciones a los Derechos Humanos

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral, de conformidad con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile.

El convencional Fuchslocher **retiró** la iniciativa N°666 en esta materia.

13. ICC N°879-4

Artículo XX.-"Es obligación permanente del Estado y sus instituciones la protección de sus ciudadanos y promover, proteger, respetar y garantizar los DD.HH. e impedir su vulneración en cualquier momento y circunstancia, siendo este delito de acción pública inmediata, territorial, no amniable e imprescriptible.

El Estado, en su calidad de garante de los DDHH debe garantizar su inviolabilidad y, de suceder una violación de esta norma, de concurrir con la reparación integral tanto a las víctimas como a sus familiares consanguíneos hasta tercer grado, de acuerdo con esta Constitución, los tratados internacionales suscritos y leyes nacionales relativas, garantías en las que se incluye, como mínimo, los siguientes mecanismos compensatorios y de reparación:

Restitución laboral a sus funciones originales en caso de desvinculación; Indemnización Económica por pérdidas, ya sean pasadas, presentes y/o futuras, además del lucro cesante;

Rehabilitación y acompañamiento físico y psicológico, que conlleven a una mejora y satisfacción personal, moral y social; Asistencia y protección legal a la víctima y su familia."

Artículo transitorio XX:

En relación específica con las víctimas del período de la dictadura cívico militar y de gobiernos posteriores regidos por la Constitución del 80 y leyes represivas de la dictadura hasta la promulgación de esta Constitución, el Estado se obliga a reparar integralmente el perjuicio y daños causados a dichas víctimas y a sus familiares directos hasta la tercera generación. Siendo las violaciones de DDHH imprescriptibles y ante la existencia de numerosas víctimas que por temor u otra circunstancia no han prestado su testimonio a los informes precedentes, se abrirá un período de reclamación adicional conducido por el CDE que abarque las violaciones cometidas en dictadura y gobiernos posteriores, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 2022.

Los informes Rettig, Valech y los del periodo de reclamación del párrafo mencionado anteriormente, deberán refundirse en uno solo y puestos en conocimiento público para que el Consejo de Defensa del Estado inicie el proceso de reparación y abra los juicios correspondientes en los Tribunales de DDHH en contra del Estado y los victimarios o se haga parte, en los juicios ya iniciados, en defensa de las víctimas.

Se excluye de la Justicia Militar los delitos por violaciones a DDHH cometidos por agentes del Estado en contra de civiles o militares los que deberán ser tratados en los Tribunales de Derechos Humanos por la situación de incompetencia que se presenta.

Se solicitó votación separada de cada artículo.

Sometido a votación el primer artículo **rechazó** (5 votos a favor, 27 votos en contra, ninguna abstención).

Sometido a votación el transitorio artículo **rechazó** (5 votos a favor, 27 votos en contra, ninguna abstención).



14. ICC N°1005

Artículo XX. Derechos de las víctimas y la sociedad ante la violación de Derechos Humanos

Todas las víctimas de violación de derechos fundamentales como la vida, desaparición forzada, la integridad física y/o aplicación de tormentos o torturas, o quienes sus derechos representen según la normativa internacional, tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y, en protección a la sociedad en su conjunto, a la adopción de medidas de garantías de no repetición.

Las afectaciones a estos derechos cuando se acredite que obedecieron a una política de órganos represivos del Estado y que correspondan a acciones delictivas, sea a nivel nacional o internacional, serán imprescriptibles tanto respecto de la persecución penal como las acciones civiles que procedan.

Acreditado la veracidad de los hechos ilícitos vulneratorios y la participación de agentes del Estado el proceso penal proseguirá su curso aunque no se identifique al hechor concreto o éste se encuentre eximido de responsabilidad penal por muerte y/o demencia a fin de que la víctima sea reparada en su dignidad y honor por la Justicia, incluyendo en ello las indemnizaciones con ocasión de los daños a la salud física y mental, los daños materiales y morales, y las reparaciones simbólicas que correspondan.

Las instituciones responsables de los agentes del Estado involucrados en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos deberán proponer medidas institucionales que garanticen la no repetición, sin perjuicio del derecho de las víctimas, de las partes y de los Tribunales de Justicia el proponer y determinar este último las que fundadamente estime procedentes, las que serán obligatorias a los órganos del Estado.

Los responsables directos que sean agentes del Estado serán degradados y nunca más podrán ser funcionarios públicos ni ejercer cargos públicos de ninguna naturaleza, incluso de elección popular.

El Estado de Chile deberá cooperar y comprometerse en el esclarecimiento de todos los hechos que signifiquen graves violaciones a los derechos humanos aunque afecten a terceros Estados. Será considerada como traición a la patria cualquier inducción, colaboración y/o ejecución de actos realizados por terceros extranjeros que impliquen la violación del principio de libre determinación del pueblo de Chile y la violación de los derechos humanos de ciudadanas y ciudadanos del Estado y de cualquiera persona en el territorio nacional.

Se considerará violación de derechos humanos toda acción u omisión que vulnere los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los instrumentos internacionales, cuando el agente sea autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. También se considerará violación de derechos humanos cuando la acción u omisión señalada sea realizada por un particular, ya sea individuo, organización o empresa, instigado o autorizado explícita o implícitamente por una autoridad o funcionario público, cuando actúe con su aquiescencia o colaboración, o cuando por la naturaleza y gravedad de la violación, o de la entidad y magnitud de las acciones o actividades en las que ésta ha ocurrido, pueda quedar en la impunidad en caso de no perseguirse la responsabilidad del particular, sea éste individuo, organización o empresa.

Artículo XX. Derecho a la verdad

La sociedad tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos vinculados a la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que originaron su perpetración, especialmente cuando son de carácter masivo y/o sistemático. El Estado debe garantizar el acceso y difusión de este derecho, reconociendo que se trata de una salvaguardia fundamental contra la repetición.

Artículo XX. Deberes de prevención e investigación

El Estado garantizara la implementación de las medidas necesarias para la prevención y debida investigación de todas aquellas conductas delictivas que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, en especial de la tortura, las muertes potencialmente ilícitas y la desaparición forzada.

Las acciones y las penas vinculados a los delitos antes referidos y en especial aquellos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y genocidio son imprescriptibles y no serán susceptibles de ninguna limitación o impedimento a debida investigación ni sanción.

Es deber del Estado investigar toda grave violación a los derechos humanos de oficio, con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia, imparcialidad y con enfoque diferencial, y de acuerdo con los estándares desarrollados en el Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Artículo XX. Derecho a la reparación integral de las víctimas

Toda víctima de una violación a los derechos humanos tiene derecho a ser reparada integralmente por el Estado, incluyendo, la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción



y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. El Estado está obligado a garantizar este derecho, asegurando el respeto de las garantías procesales y evitando toda forma de revictimización.

Artículo XX. Prohibición y rol garante del Estado frente a la desaparición forzada

Nadie será sometido a desaparición forzada. El Estado tiene el deber de salvaguardar la búsqueda inmediata, así como hacer operativas todas aquellas obligaciones que garanticen la protección de la víctima y sus cercanos.

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 25 votos en contra, ninguna abstención).

(c.202) Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio (IIC N°3, 5, 39, 45, 73, 195, 221,215, 263; IPC 16 ICC N°1, 68, 129, 328, 340, 395, 563, 688, 690,941)

15. IIC N°3

1.3 Propuesta al Derecho de Vivienda Digna

Vivienda digna acorde a las condiciones climáticas de habitabilidad de las comunidades en cuanto a sus elementos y materiales de construcción, como de dimensiones acorde al número de integrantes de las familias.

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 votos en contra, 3 abstenciones).

16. IIC N°5

Articulado de la Iniciativa Popular de Norma

Establecer el derecho de las Asociaciones y Comunidades Indígenas a participar activamente en el desarrollo integral de una política de vivienda indígena, donde se les permita contribuir en el diseño y ejecución de sus programas y proyectos habitacionales orientados a la practica de la Cosmovisión y el Buen Vivir(Suma Qamaña) para las Familias Indígenas.

Esto en base a que los convenio de cooperación institucionales gubernamentales en materia de vivienda sean desarrollados respetando la consulta indígena y el derecho de participar de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la declaración de los Derecho Indígenas de la ONU.

Actualmente se han tomado acuerdos firmados (como el 112-11-2017) en el Consejo Nacional de la CONADI, donde se establece concretar un traspaso de terreno para un proyecto de vivienda, pero las instituciones no le dan un reconocimiento a este acuerdo, lo que dificulta la gestión de las asociaciones por proyectos que mejoran la calidad de vida de las familias indígenas. Por otro lado los Convenios que se suscriben en favor de desarrollar proyectos de vivienda indígena, no invitan participar como contraparte a las Asociaciones o Comunidades Indígenas beneficiarias, lo que hace menos enriquecedor y valioso el trabajo final del proyecto.

Es necesario cohesionar los instrumentos normativos (convenios y acuerdos) y darles el sentido vinculante que corresponde para agilizar de mejor forma el trabajo con las comunidades y asociaciones indígenas en un trabajo conjunto respetando el nivel de participación indígena.

Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 21 votos en contra, 4 abstenciones).

17. ICI N°39

El Estado debe garantizar el derecho a la vivienda y hábitat con pertinencia cultural indígena en todos los territorios donde todos los pueblos originarios desarrollan sus proyectos de vida colectivos.

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 19 votos en contra, 4 abstenciones).

18. IIC N°45

Los pueblos y naciones preexistentes, a través de sus instituciones propias y organizaciones representativas, tienen derecho a participar activamente de forma incidente y vinculante en el diseño y elaboración de programas de vivienda social que les corresponda.

El Estado tiene el deber de aplicar en sus proyectos habitacionales sociales la pertinencia cultural, cuando sean dirigidos a integrantes de pueblos indígenas.

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 votos en contra, 2 abstenciones).

19. IIC N°73

Artículo "X": Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al acceso sin discriminación a la vivienda digna, en concordancia a sus características socioculturales y cosmovisión. Es deber del Estado en consentimiento con los pueblos indígenas garantizar y proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo, fomento y materialización de proyectos habitacionales comunitarios que aseguren el buen vivir.



Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstención).

20. IIC N°195

Derechos de las personas indígenas y su familia a una vivienda adecuada, digna y con pertinencia cultural. Ello no contempla únicamente el derecho a un techo, sino el derecho de vivir en seguridad, paz, dignidad, y con acceso garantizado a servicios básicos.

El Estado conjuntamente con representantes de los pueblos y naciones preexistentes adoptarán las medidas eficaces y necesarias para garantizar este derecho.

Sometida a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 20 votos en contra, 1 abstención).

21. ICI 215

22. El derecho al acceso a la vivienda, según se establezca en la ley. El Estado deberá contribuir a crear las condiciones para que las personas puedan ejercer este derecho, ya sea que éste se otorgue a través de instituciones públicas o privadas.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de este derecho y a la forma en que ellas se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador.

Sometida a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 19 votos en contra, 2 abstenciones).

22. ICI N°221

Art. x.- La Constitución asegura a todas las personas el derecho a una vivienda digna y pertinente a la cultura de los pueblos, ubicada apropiadamente, en condiciones de habitabilidad, con acceso a la luz del sol, la tierra y áreas verdes, y para disfrutar del Kume mongen (buen vivir) en familia.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 19 votos en contra, 4 abstenciones).

23. ICI N°263

PROPUESTA DE NORMA:

Derechos de las personas indígenas y su familia a una vivienda adecuada, digna y con pertinencia cultural. Ello no contempla únicamente el derecho a un techo, sino el derecho de vivir en seguridad, paz, dignidad, y con acceso garantizado a servicios básicos.

El Estado debe garantizar el acceso a la vivienda con diseño y pertinencia cultural para la familia indígenas ya sea en la urbe como en zonas rurales

El Estado garantizará mediante un ente fiscalizador en conjunto con representantes de los pueblos originarios elegidos democráticamente por estos de acuerdo con sus costumbres y por región, que se promuevan y cumpla dicha norma y la asignación de recursos económicos necesarios para ello.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 25 votos en contra, ninguna abstención).

24. IPC N°16

Art. X. Derecho a la Vivienda.

1.- Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.

2.- El Estado deberá asegurar progresivamente y con el máximo de los recursos disponibles el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos, los siguientes atributos de la vivienda: (a) espacio suficiente para la producción y reproducción de la vida; (b) estructural y materialmente estable, ecológica, sustentable y sostenible; (c) tenencia jurídica asegurada (d) condiciones de habitabilidad, higiene, comodidad y seguridad (e) accesible; (f) integrada socialmente e inserta en un entorno con disponibilidad de servicios, instalaciones e infraestructura; (g) acceso a la luz solar, iluminación natural y eficiencia energética; (h) asequibles; (i) ubicada apropiadamente; (j) pertinente culturalmente y con pertenencia territorial; (k) con acceso al equipamiento necesario para el desarrollo y redistribución de trabajos de cuidado; para la protección integral a la infancia y a mujeres y disidencias y diversidades sexuales y de género, frente a la violencia de género; y para evitar la discriminación y otras formas de vulneración que atenten contra la vida digna; conforme a la ley.

3.- El Estado podrá participar directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación, innovación y distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos a través de organismos públicos, comunitarios y de la sociedad civil.

4.- Los poderes públicos considerarán especialmente en el diseño de los planes de vivienda a personas con bajos niveles de ingresos económicos, mujeres jefas de hogar, personas mayores, personas en situación de discapacidad, pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de calle y todo otro grupo históricamente excluido. El Estado se obliga a



desarrollar todas las acciones necesarias para satisfacer en forma urgente la necesidad de vivienda digna a las personas y familias agrupadas en comités de vivienda, en cooperativas, en tomas de terreno y campamentos. Estas viviendas están exentas del pago de cualquier tipo de contribuciones y son inembargables, de conformidad a la ley.

5.- Nadie podrá ser desalojado de su vivienda arbitrariamente.

Art. X.- Función social y ecológica de la propiedad del suelo. La Constitución establece la función social y ecológica de la propiedad del suelo conforme a la cual es obligación del Estado:

1.- Garantizar la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada a través de sus programas habitacionales y el financiamiento o gestión de recursos que se requieran.

2.- Establecer las reglas de ocupación, uso, transformación del suelo y un sistema de planificación territorial conforme al interés general y a una distribución justa y equitativa de los suelos, en virtud de los principios de colaboración, coordinación, escalas interdependientes y no jerárquicas, interculturalidad, participación local, igualdad urbana, justicia territorial, priorización local, sustentabilidad, perspectiva de género, conectividad, movilidad, inclusión, accesibilidad, integración socio espacial, resiliencia, protección de bienes comunes, del patrimonio e identidad cultural, pertinencia cultural y pertenencia territorial y orientado al ejercicio de los derechos; conforme a la ley.

3.- Proceder a las expropiaciones y limitaciones de dominio que resulten necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada. De igual forma, asegurar la debida indemnización, acorde a un sistema nacional de tasación y catastro de suelo.

4.- Administrar un Banco de Suelo Público orientado preferentemente al cumplimiento de fines habitacionales. Anualmente, todas las instituciones públicas le informarán o traspasarán, los bienes raíces que resulten prescindibles para el cumplimiento de sus fines institucionales, según señale la ley. El Banco de Suelo Público podrá adquirir suelos privados para atender el déficit habitacional.

5.- Establecer mecanismos adecuados para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda en desmedro del interés público, de conformidad a la ley.

6.- Prevenir o mitigar los riesgos derivados de procesos naturales.

7.- Garantizar la existencia de mecanismos adecuados para que las comunidades locales y todos sus integrantes puedan beneficiarse directamente de las plusvalías generadas por la acción urbanística y regulatoria de los entes públicos.

Art. X. Producción social del hábitat. El Estado reconoce el rol protagónico de las comunidades locales en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento del territorio en que habitan. Por ello, es deber del Estado:

1.- Garantizar la participación popular y vinculante por parte de las comunidades locales en toda etapa y en cualquier instrumento de planificación territorial, programas y proyectos habitacionales, urbanos y rurales, bajo estándares de plena información y transparencia.

2.- Garantizar la construcción democrática y con perspectiva de género de los proyectos habitacionales, actividades y áreas productivas, de barrios y de ciudad; a través del reconocimiento, fomento y apoyo adecuado a comités, cooperativas, movimientos organizados y modalidades de autoconstrucción y autogestión comunitaria del hábitat.

Sometido a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 7 votos en contra, 2 abstenciones).

25. ICC N°1

Artículo XX. "Los Chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad.

Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos.

La construcción de la vivienda social deberá tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización.

El mal uso de subsidios o fondos gubernamentales ya sea por parte de las constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios será castigado con penas de prohibición absoluta para



la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley."

Sometido a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 27 votos en contra, 4 abstenciones).

26. ICC N°68

ARTÍCULO ÚNICO. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Serán los órganos públicos competentes, los responsables de procurar las condiciones y normas necesarias para hacer efectivo este derecho con criterios de equidad.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra, 3 abstenciones).

27. ICC N°129

Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

número XX. El derecho al acceso a la vivienda, según se establezca en la ley. El Estado deberá contribuir a crear las condiciones para que las personas puedan ejercer este derecho, ya sea que éste se otorgue a través de instituciones públicas o privadas.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de este derecho y a la forma en que ellas se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador."

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 votos en contra, 2 abstenciones).

28. ICC N°328

Artículo XX

Todas las personas, sin discriminación, tienen derecho a producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos para una vida digna. El derecho a la ciudad se basa en elementos constitutivos como la gestión democrática, la función social y ecológica del suelo y de la propiedad y todos los derechos humanos. En consecuencia, todas las autoridades del Estado y todas las personas jurídicas deben garantizar, proteger y respetar este derecho, adoptando todas las medidas idóneas, inclusive legislativas, de planificación, gestión e intervención en la ciudad.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 18 votos en contra, 5 abstenciones).

29. ICC N°340

Artículo XX

Garantía de derecho a la vivienda y territorios adecuados para el desarrollo pleno del buen vivir.

Toda persona y comunidad tendrá derecho a la vivienda adecuada con territorios adecuados. El Estado garantizará este derecho en las mejores condiciones y los más altos estándares de habitabilidad y sustentabilidad, permitiendo el desarrollo de una vida digna.

Este se entenderá como derecho humano individual universal, garantizando la tenencia segura sea en condiciones de propiedad individual, colectiva o cooperativa, en arriendo, comodato, cesión de derecho o comunitaria; y como un derecho humano colectivo, garantizando la participación soberana, de quienes habitan y producen el hábitat, con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales individuales y colectivas.

Para hacer efectivo este derecho, el Estado:

a. Deberá velar por que sus instituciones públicas, en todos los niveles, dispongan de las competencias, herramientas y atribuciones necesarias para el desarrollo de políticas públicas de vivienda adecuada con territorios adecuados, mediante el diseño, creación, desarrollo e implementación de políticas públicas localizadas y con perspectiva de género.

b. Establecerá políticas descentralizadas con adecuados sistemas de financiamiento, con arreglo a criterios de seguridad en la tenencia de suelo, disponibilidad de infraestructura, servicios básicos elementales, asequibilidad económica, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, adecuación cultural y protección del patrimonio material, inmaterial y natural.

c. Fijará las políticas públicas de vivienda adecuada con territorios adecuados, de acuerdo a la realidad territorial, garantizando para ello el fomento, apoyo y participación local de las diversas agrupaciones de la sociedad civil (comité de vivienda, cooperativas de viviendas, colectivos autogestionarios, academia, etc.), en su planificación, diseño y ejecución de planes y programas correspondientes.

d. Fomentará el desarrollo de proyectos que promuevan y garanticen la sostenibilidad económica, social y ambiental mediante instrumentos de planificación territorial que fomente territorios



integrados, interconectados, que fomenten la equidad e igualdad y que considere servicios básicos e infraestructura adecuada.

e. Deberá velar por que se incorporen tecnologías tradicionales y actuales, que permitan mayores niveles de calidad en las condiciones de habitabilidad, buscando su adecuación a las exigencias del cambio climático y las vulnerabilidades que presenta cada territorio.

f. Regulará el uso de suelos, de acuerdo con el interés general y social, entendiendo la función social y ecológica del suelo, el que deberá ser resguardado inclusive participando de las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

g. Tendrá la prioridad para adquirir y disponer terrenos. En el caso de sitios de propiedad pública, mediante el manejo, control y catastro de todos los terrenos públicos, facilitando su traspaso para la construcción y promoción de viviendas adecuadas con territorios adecuados. En el caso de adquirir sitios privados, eriazos o deshabitados, mediante la facultad de expropiar o adquirir acorde a una tasación pública, cuando de situación lo amerite.

h. Participará directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, restauración y conservación de viviendas, así como a la creación de espacios, infraestructura pública y servicios básicos adecuados para el desarrollo pleno del buen vivir, apoyando los procesos autogestionarios de las entidades que se constituyan en los territorios, a partir de la organización de las comunidades y en alianza con entes privados que colaboren en este propósito.

i. Deberá garantizar la provisión de todos los servicios básicos, de urbanización, equipamientos, infraestructura, espacios públicos, áreas verdes y servicios ambientales, ya sea en modalidad urbano, rural o alternativa, a partir de entidades públicas o comunitarias de carácter solidarias y/o cooperativas, sin fines de lucro y en alianza con entes privados que colaboren en este propósito.

j. Deberá tener un rol activo en la producción de soluciones para una vivienda adecuada sin déficit, priorizando al momento de diseñar planes de vivienda, a aquellas personas con bajos niveles de ingresos económicos, mujeres jefas de hogar, niños, niñas y jóvenes, personas de tercera edad, en situación de discapacidad y personas que habiten

inmuebles con malas condiciones de habitabilidad o ruinosas y personas que habiten en tomas y campamentos.

k. En el caso de los pueblos originarios, el Estado conjuntamente con representantes de los pueblos y naciones preexistentes adoptaran las medidas eficaces y necesarias para garantizar este derecho, con pertinencia cultural. Ello no contemplará únicamente el derecho a un techo, sino el derecho de vivir en seguridad, paz, dignidad, y con acceso garantizado a servicios básicos.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 20 votos en contra, 2 abstenciones).

30. ICC N°395

DEL DERECHO AL TERRITORIO Y LA CIUDAD

Artículo x1: Toda persona tiene el derecho a habitar y participar del territorio en que se encuentra, ya sea natural, rural, urbano o indígena, en igualdad de oportunidades, sin discriminación ni segregación de ningún tipo y con absoluto respeto a los derechos de la naturaleza, a los derechos y autonomía de los pueblos originarios y a las condiciones sociales y culturales que caracterizan su espacio.

Asimismo, toda persona, habitante o en tránsito, en cada territorio, tiene derecho a practicar de manera íntegra e integradamente todos y cada uno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, los que componen en su conjunto, el ejercicio pleno del derecho al territorio y la ciudad, con base en los principios de justicia social, democracia, participación, plurinacionalidad, igualdad, sostenibilidad e interdependencia ecológica.

Artículo x2. Respecto del territorio y la ciudad, el Estado y sus entidades territoriales deben garantizar la producción y reproducción de la vida digna, en atención al bien común, el ejercicio pleno de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, la función social y ecológica del suelo y de la propiedad, el carácter Público de los servicios, la equidad distributiva y la gestión, producción y disfrute democráticos de dichos derechos.

Es deber del Estado que todo territorio, natural, rural, urbano o indígena, se constituya como un ambiente sano, seguro, justo, inclusivo e integrado socialmente, sostenible, respetuoso de las condiciones culturales y patrimoniales, locales y plurinacionales.

El Estado y sus diversas entidades territoriales deben adoptar todas las medidas legislativas, de planificación, gestión e intervención necesarias e idóneas, a fin de garantizar, proteger y respetar estos derechos.

Artículo x3. Una ley deberá regular de manera participativa un Estatuto de la Ciudad que entregue las directrices y guías respecto del rol social y ecológico del suelo y la propiedad, planes y



planificación territorial y urbana, gestión urbana y del territorio y regulación estatal, fiscal y jurídica de los suelos, la regularización de la propiedad informal, y el acceso y goce de la población a los servicios, equipamiento e infraestructura.

La convencional Dayyana González **retiró** la iniciativa N°395 en esta materia.

31. ICC N°563

Art. XX Transitorio. Desde la entrada en vigor de esta Constitución, y hasta el momento en que el Estado cumpla con su deber de garantizar el acceso a una vivienda digna en los términos del artículo xx (derecho a la vivienda digna), los órganos del Estado deberán abstenerse de efectuar desalojos forzosos, desplazamientos arbitrarios o cualquier otra acción equivalente respecto a personas que vivan en tomas o campamentos, en conformidad con los estándares e instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.

Lo anterior, es sin perjuicio de los casos de traslados por motivos de peligrosidad del hábitat, que ponga en riesgo inminente la integridad física o la vida de los habitantes de tomas y campamentos, en los cuales la autoridad estará obligada a ofrecer una alternativa a las familias o personas afectadas para reasentar.

Previo al desplazamiento o radicación que fuere necesaria o inevitable, el Estado, en conjunto con las personas y familias que habitan la toma o campamento, y las autoridades locales y regionales, deberán establecer una mesa de trabajo permanente a fin de garantizar la participación igualitaria, democrática y real en la búsqueda de solución habitacional, con respeto a los catastros realizados por las propias familias.

Durante el desplazamiento que fuere necesario o inevitable, el Estado deberá garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos consagrados en esta Constitución y en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que se encuentren vigentes. Con posterioridad al referido desplazamiento, se deberá proporcionar una apropiada indemnización y alojamiento alternativo, asegurando un reasentamiento con medidas mínimas para un habitar digno.

La convencional Dayyana González **retiró** la iniciativa N°563 en esta materia.

32. ICC N°688

Artículo X. Derecho a la ciudad.

Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar, transformar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna.

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común, y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, la gestión democrática, la función social y ecológica del suelo y de la propiedad.

Es deber del Estado tomar las medidas intersectoriales para ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades y asentamientos humanos, bajo los principios de igualdad, justicia espacial e intergeneracional, equidad territorial, equidad de género, accesibilidad universal, seguridad humana, sostenibilidad, participación, y respeto a la diversidad y a la naturaleza.

Para ello, el Estado garantizará, a lo menos, la protección y acceso equitativo y efectivo a servicios básicos, bienes y espacios públicos; la conectividad y movilidad; la integración socio espacial; la colectivización de los cuidados; y la participación social en las plusvalías.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 8 votos en contra, ninguna abstención.).

33. ICC N°690

Artículo X: Derecho a una vivienda digna y adecuada. Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada.

El Estado adoptará todas las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho y garantizará la participación de las comunidades en la elaboración y gestión de políticas habitacionales y urbanísticas.

La ley regulará el uso del suelo de acuerdo con el interés general, para facilitar su uso eficiente y promover la generación de barrios urbanos y rurales seguros, sustentables, accesibles universalmente, con integración social y urbana, y adecuados espacios públicos. Asimismo, establecerá los mecanismos necesarios para la materialización de estos objetivos.

El Estado participará en la plusvalía que genere su acción urbanística.

La convencional Urrutia **retiró** la iniciativa N°690 en esta materia.

34. ICC N°941

Art. XX Transitorio.



Desde la entrada en vigor de esta Constitución, y hasta el momento en que el Estado cumpla con su deber de garantizar el acceso a una vivienda digna en los términos del artículo xx (derecho a la vivienda digna), los órganos del Estado deberán abstenerse de efectuar desalojos forzosos, desplazamientos arbitrarios o cualquier otra acción equivalente respecto a personas que vivan en tomas o campamentos, en conformidad con los estándares e instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos en la materia.

Lo anterior, es sin perjuicio de los casos de traslados por motivos de peligrosidad del hábitat, que ponga en riesgo inminente la integridad física o la vida de los habitantes de tomas y campamentos, en los cuales la autoridad estará obligada a ofrecer una alternativa a las familias o personas afectadas para reasentar.

Previo al desplazamiento o radicación que fuere necesaria o inevitable, el Estado, en conjunto con las personas y familias que habitan la toma o campamento, y las autoridades locales y regionales, deberán establecer una mesa de trabajo permanente a fin de garantizar la participación igualitaria, democrática y real en la búsqueda de solución habitacional, con respeto a los catastros realizados por las propias familias.

Durante el desplazamiento que fuere necesario o inevitable, el Estado deberá garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos consagrados en esta Constitución y en los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que se encuentren vigentes.

Con posterioridad al referido desplazamiento, se deberá proporcionar una apropiada indemnización y alojamiento alternativo, asegurando un reasentamiento con medidas mínimas para un habitar digno.

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 27 votos en contra, ninguna abstención).

(c.203) Derecho al trabajo y su protección (IIC N°56, 178, N°215; IPC N°01,28; ICC N°107, 143, 257, 302, 362-2, 380, 436, 474/613, 484, 495, 530, 555, 569, 587,600, 630,655, 682, 716, 719, 747, 1025)

35. ICI N° 56-4

Artículo XX: El salario de los trabajadores/as debe ser suficiente para asegurar una vida digna de ellos/as y sus familias.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 18 votos en contra, 8 abstenciones).

36. ICI N°178

Derecho al trabajo. Las personas tienen derecho al trabajo como una garantía a contar con un sustento que sea fruto de su participación en labores productivas. El Estado y la sociedad deberán asegurar las condiciones equitativas de igual pago por igual trabajo o igual valor del trabajo y participar en instancias de control y gestión de las empresas. Asimismo, las personas y pueblos indígenas tienen derecho a un trabajo digno, en condiciones justas y sin discriminación por raza, color, edad, género o cualquier otra condición o forma de vida.

El trabajo de cuidados, el cual comprende labores de sostenimiento de la vida no sólo domésticas sino también de apoyo y acompañamiento en relaciones interdependientes, es reconocido por el Estado, deberá ser remunerado y redistribuido en condiciones de reciprocidad entre el Estado, la ciudadanía y las familias, conformando un Sistema de cuidado universales y efectivos. En particular, dicho sistema deberá considerar las formas de reproducción de los cuidados y cosmovisión de los pueblos indígenas.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 22 votos en contra, 4 abstenciones).

37. ICI N°215

11. La libertad de trabajo y la protección del mismo, en la forma establecida por la ley. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, con una justa retribución.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o salud pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren un grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales ordinarios establecidos en la ley.



La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, independientemente si están o no sindicalizados, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Con todo, la negociación colectiva no afectará el derecho de cada trabajador para acordar individualmente sus condiciones de trabajo, en razón de su idoneidad y/o capacidad personal.

La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos, cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.

Todos los trabajadores tendrán derecho a la huelga pacífica como parte de la negociación colectiva, en conformidad a lo señalado en la ley. No podrán declararse en huelga ni tampoco paralizar sus funciones los funcionarios y demás trabajadores del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a esta prohibición. Todos los trabajadores tendrán el derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones para el cumplimiento de sus fines con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece; así como la transparencia en su financiamiento y administración y una efectiva democracia interna. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas.”

Solicitud de votación separada de los incisos 3 y 5.

Sometido a votación del inciso tercero **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstención).

Sometido a votación del inciso tercero **rechazó** (8 votos a favor, 23 votos en contra, 1 abstención).

Sometido a votación el resto de los incisos **rechazó** (7 votos a favor, 25 votos en contra, 1 abstención).

38. IPC N°01-4

Cláusula que deberá vincularse con derecho al trabajo

El Estado debe garantizar las condiciones para el respeto y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en el trabajo, eliminando todo riesgo laboral que pueda potencialmente afectar la salud sexual y reproductiva, así como la estabilidad y dignidad en el empleo, sin discriminación en razón de su género.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 25 votos en contra, 1 abstención).

39. IPC N°28-4

“El Estado de Chile reconoce y promueve el Trabajo Decente, que persigue cuatro objetivos estratégicos: el reconocimiento, respeto y garantía plena de los derechos fundamentales en el trabajo, la generación de oportunidades de empleo, el aseguramiento de la protección social y el reconocimiento y fortalecimiento del diálogo social.

Los sindicatos del sector público y privado y las asociaciones empresariales contribuyen al fortalecimiento de la democracia y a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Sometido a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 6 votos en contra, 2 abstenciones).

40. ICC N°107-4

Artículo 1. Sobre el derecho al trabajo

El trabajo es un derecho y un deber social, no una mercancía. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones saludables, no discriminatorias, seguras y dignas, así como el deber de contribuir con su trabajo a la sociedad.

El Estado debe garantizar las condiciones que hagan efectivo ese derecho con políticas públicas que promuevan la generación de empleo y protección de la estabilidad de el mismo. Se prohíbe el despido injustificado y el abuso en los despidos por necesidades de la empresa.



Ninguna clase de trabajo, oficio o profesión puede ser prohibida, excepto en los casos que afecte la salubridad pública o el interés general y sólo si ello es decretado por una ley. Se garantiza la libertad de trabajo en las condiciones que señalan la Constitución y la Ley.

Nadie puede ser obligada a realizar un trabajo gratuito. Se prohíbe el trabajo infantil y forzoso.

Artículo 2. Sobre el descanso.

Toda persona tiene derecho a feriado anual, descanso semanal, feriados y vacaciones periódicas pagadas. Sus condiciones serán reguladas por la ley.

Artículo 3. Sobre la prohibición de discriminaciones. Se prohíbe la discriminación por distinción, exclusión o preferencia, de oportunidades de empleo y salarial, la inequidad de trato en la ocupación y toda forma de acoso laboral por motivo de sexo, identidad de género, edad, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión, opinión política, participación sindical, origen social, enfermedad, discapacidad, tipo de trabajador, estereotipos laborales de género o cualquier otra que no sea la capacidad.

El Estado impulsará una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades, derogará las disposiciones legislativas y modificará las disposiciones y prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política.

No se considerarán discriminatorias las leyes, disposiciones y medidas administrativas para brindar asistencia y promover la integración laboral que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato.

Artículo 4. Sobre el avance tecnológico y la inserción laboral. La ley garantizará que los procesos de racionalización, introducción de nuevas tecnologías o automatización de la empresa tendrán como prerequisite la participación de las personas que trabajan, especialmente los sindicatos, y deberán ser siempre graduales y precedidos por medidas para garantizar la reinserción laboral.

El Estado debe ofrecer alternativas de formación, capacitación y readaptación laboral para adquirir nuevas competencias que garanticen una mejor inserción laboral.

Artículo 5. Sobre el salario digno.

Se considerará trabajo asalariado todo aquel sometido al poder organizativo y la dirección del empleador o equivalente.

Toda persona tiene derecho a igual salario por igual trabajo. Tendrán derecho a un salario digno, suficiente al menos para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, tendiente a un mejoramiento continuo.

Se prohíbe cualquier otra razón que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Las empresas deberán adoptar medidas para garantizar equidad de acceso a todos los tipos de empleo, remuneraciones, condiciones laborales y oportunidades de desarrollo laboral que conduzcan a una efectiva equidad salarial.

El salario mínimo por jornada ordinaria será fijado por ley de manera periódica con base en las propuestas de una Comisión Nacional integrada por representantes de los gremios patronales centrales sindicales y del Gobierno

Los salarios y demás remuneraciones tienen un carácter preferente frente a otras obligaciones del empleador.

Artículo 6. Sobre los tipos de contratación.

Se prohíbe toda intermediación laboral, subcontratación o cualquier otra forma de tercerización o simulación de las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora.

Las personas que trabajan empleadas por contratistas de mano de obra gozarán de las mismas condiciones y remuneraciones que los contratados de forma directa por la empresa principal y gozarán de la protección que confiere la legislación a otros trabajadores y trabajadoras de estas categorías en los mismos sectores.

En el caso de las empresas que contratan personas bajo la modalidad de teletrabajo, a distancia o similares, deberán garantizar los medios y el entorno adecuado para la realización de sus labores: se prohíbe el uso de criterios e instrumentos que afectan la privacidad, la dignidad e integridad de las personas contratadas y sus familias.

Artículo 7. Sobre el derecho a participación y redistribución de utilidades.

Las personas que trabajan tendrán derecho a participar en la gestión de la empresa y recibir parte de sus beneficios.

La participación en los beneficios de la empresa será independiente del salario y otros beneficios legales y será fijada por la empresa o por negociación colectiva, pero no podrá ser efectivamente



menor a 30% de las utilidades líquidas del periodo. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables y en las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley. La participación de las personas que trabajan en la gestión de la empresa se realizará a través de su organización sindical y, a falta de esta, de acuerdo a lo establecido por la Ley, la cual fijará los alcances de dicha participación.

(Art. 8, en (c.204) derecho al cuidado)

Artículo 9. Sobre la aplicación de los derechos laborales.

Los derechos laborales establecidos en la Constitución se aplican a las personas trabajadoras en todas sus modalidades: a domicilio, eventuales, informales, a distancia, teletrabajo, tercerizados empleados por contratistas o cualquier otra modalidad. El Estado mantendrá un servicio de inspección a las empresas encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales del trabajo, imponiendo las sanciones que establezcan la Ley.

La Ley fijará las condiciones para estas modalidades de trabajo y el Estado velará por supervisar su cumplimiento.

Artículo 10: Sobre los principios de los derechos laborales.

Los derechos laborales se aplicarán bajo los siguientes principios:

1. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución serán considerados como mínimos a favor de los trabajadores.
2. Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y del trabajo ratificados por Chile hacen parte de la legislación interna. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a estos cuando prevean normas más favorables y se aplicarán de manera preferente.
3. Los derechos laborales establecidos por la Constitución y las leyes son irrenunciables. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Será nula toda ley, acuerdo, convenio, contrato o norma en que se renuncie, menoscabe, adultere o tienda burlar sus efectos en contra de quienes trabajan. Toda medida o acto del empleador o cualquier autoridad contrario a ellos será nula y no genera efecto alguno.
4. Los derechos laborales no se verán menoscabados por la legislación nacional de protección a la inversión extranjera y los tratados internacionales al respecto o de comercio. e) Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las personas trabajadoras, primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral, no discriminación y de inversión de la prueba a favor de las personas trabajadoras.
5. En caso de duda sobre el alcance o interpretación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.
6. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, se aplicará la más favorable a las personas trabajadoras; la norma adoptada se aplicará en su integridad.
7. En las relaciones laborales prevalecerá la realidad sobre las formalidades o apariencias.

Artículo 11. A través de materia de ley se establecerá:

1. La extensión de la jornada laboral diaria y semanal; los límites y condiciones de las jornadas extraordinaria y nocturna;
2. Los límites de la edad mínima para trabajar y sus condiciones;
3. La obligación del empleador de establecer condiciones de higiene, salud laboral, seguridad en los locales de trabajo y sus equipos para prevenir los riesgos laborales, la maternidad, asegurar la integridad física y mental de los trabajadores y un buen ambiente de trabajo;
4. La obligación de los empleadores de contar con protocolos y medidas de prevención de epidemias establecidos en conjunto con los sindicatos o donde no los hubiera, con los trabajadores organizados;
5. La obligación del empleador de indemnizar a los trabajadores por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales;
6. La responsabilidad de las empresas por establecer condiciones para que las personas con discapacidad puedan desempeñar sus actividades laborales;
7. La responsabilidad de las empresas de adecuar las condiciones laborales a las prácticas culturales de los trabajadores de pueblos originarios, sin menoscabo de la equidad de oportunidades;



8. La garantías de que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado de gestación y maternidad o número de hijos o dependientes, los descansos remunerados pre y post natal; las facilidades de lactancia; armonizar los horarios de trabajo adecuados al cuidado humano; la obligación de los empleadores de instalar y mantener salas cuna y lugares de custodia para los niños de las personas que trabajan; así como el derecho a licencia por maternidad y/o paternidad.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa N°107 en esta materia.

41. ICC N°143-4

Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

número xx: La libertad de trabajo y la protección del mismo, en la forma establecida por la ley.

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, con una justa retribución.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o salud pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren un grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales ordinarios establecidos en la ley.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 votos en contra, 1 abstención).

42. ICC N°257-4

Artículo XX. *Derecho a la estabilidad en el empleo. Toda persona tiene derecho al trabajo, a elegir libremente la ocupación, empleo o actividad de acuerdo a su capacidad. Tiene derecho a una remuneración justa según la cantidad y responsabilidad del trabajo que ejecute. La remuneración de las mujeres y jóvenes no tendrá discriminación.*

Los trabajadores tienen derecho a la estabilidad en el empleo. Son contrarios a esta Constitución el despido por necesidades de la empresa, la falsa contratación a honorarios y la tercerización de trabajos propios del rubro. El despido sin causa justificada implicará la restitución inmediata de su empleo al trabajador. El empleador que se niegue a cumplir la restitución será apremiado con pena de presidio mayor en su grado mínimo, o a solicitud del trabajador con un recargo del 100% de su indemnización.

Artículo XX. *Derecho a una remuneración justa. Todo trabajador tiene derecho a una remuneración justa que le asegure, a él y a su familia, una existencia digna, garantizando la satisfacción de las necesidades alimenticias, de vivienda, vestuario, educación, recreación y descanso, la que no podrá ser inferior a las remuneraciones mínimas pactadas en la negociación sectorial, o a la fijada por la Ley por excepción a una empresa estratégica, la que deberá ser reajustada periódicamente de acuerdo a las variaciones experimentadas por el costo de la vida, y lo pactado en los contratos colectivos a todo nivel.*

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 votos en contra, 3 abstenciones).

43. ICC N°302-4

Artículo XX: La Constitución asegura a todas las personas:

1.- *El derecho al trabajo y a una remuneración justa que le permita satisfacer adecuadamente sus necesidades y las de su familia.*

2. *La libertad de trabajo. Se prohíbe toda forma de discriminación arbitraria.*

La ley regulará el ejercicio de estos derechos, las formas y mecanismos para hacerlos efectivos y los medios de participación en la comunidad humana de trabajo.

Toda prestación de servicios dependiente o independiente debe ajustarse a reglas de un ambiente de trabajo digno, adecuado y seguro, establecidas en la ley.

3.- *Ninguna clase de trabajo, emprendimiento o industria podrá ser prohibida, a menos que así lo disponga una ley cuando se oponga a la moral, afecte a la seguridad, la salud pública, el interés público, el medio ambiente, o cuando así lo exija el interés nacional.*



4. La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 21 votos en contra, 3 abstenciones).

44. ICC N°362-2

2. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ARTÍCULO X: PROTECCIÓN AL TRABAJO DIGNO. *El trabajo digno es un derecho fundamental y gozará de la protección del Estado, especialmente aquellas materias referidas al ejercicio de la libertad sindical y los derechos colectivos.*

El Estado promueve y garantiza el trabajo decente y digno, lo que conlleva la protección contra el desempleo y el derecho a la remuneración mínima suficiente que asegure a la persona y a su familia un bienestar acorde con la dignidad humana y a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan.

ARTÍCULO X: LIBERTAD DE TRABAJO E IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN. *El Estado reconoce y ampara el derecho fundamental de toda persona al trabajo, su libre elección al ejercicio de cualquier oficio o profesión conforme a la ley.*

El Estado garantiza el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación sea por razón de sexo, origen étnico, nacionalidad, origen social, opinión, orientación sexual, opciones políticas, creencias religiosas, estilos de vida o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La ley sancionará toda forma de discriminación.

Se prohíbe la discriminación tanto directa como indirecta. La protección ante un trato discriminatorio incluirá toda la relación laboral, desde la etapa precontractual hasta la poscontractual.

El Estado garantizará la igualdad y equidad de género en el ejercicio del derecho al trabajo. Es obligación del Estado contribuir a superar todos los obstáculos que han permitido establecer un trato desigual, así como promover activamente esta igualdad, adoptando las medidas legislativas y administrativas para eliminar toda discriminación que afecte a las mujeres y a la diversidad sexual, adoptando un enfoque de género en el diseño de políticas y planes.

En aplicación de estos principios, igualmente, el Estado y las leyes favorecerán la inserción laboral de las personas con tradiciones culturales y capacidades diferentes, adoptando las medidas pertinentes en cuanto a información y adecuación de ambientes de trabajo, entre otras.

ARTÍCULO X: PRIMACÍA DE LA REALIDAD. *Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.*

ARTÍCULO X: IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES. *Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.*

ARTÍCULO X: IN DUBIO PRO OPERARIO. *Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora.*

ARTÍCULO X: NULIDAD DE ACTO ABUSIVO. *Toda medida o acto del empleador contrario a esta Constitución y las leyes laborales es nulo, no genera efecto alguno, salvo la obligación del empleador de reparar el daño causado, debiendo retrotraerse las partes al estado anterior al acto nulo.*

ARTÍCULO X: PROHIBICIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. *Se prohíbe todo trabajo que prive a los niños, niñas y adolescentes de su derecho a la educación, que sea perjudicial para su desarrollo físico y psicológico o que limite su potencial y dignidad. Es deber del Estado proscribir y adoptar medidas respecto a cualquier forma de explotación económica y social de niños, niñas y adolescentes.*

ARTÍCULO X: ELIMINACIÓN TRABAJO FORZOSO. *Ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio es conforme a los valores contenidos en la Constitución. La ley deberá establecer medidas efectivas de prevención y de protección de las personas, en especial, de aquellas más vulnerables, y dispondrá las sanciones penales aplicables a quienes incurran en conductas que vulneren este derecho fundamental de las personas.*

ARTÍCULO X: CAPACITACIÓN LABORAL. *Es deber del Estado promover la formación, capacitación, reconversión productiva, readaptación profesional y laboral de los trabajadores y trabajadoras.*



El Estado instituirá un Sistema Nacional y Público, de carácter tripartito y paritario, que brinde programas de formación y orientación profesional continua y permanente, de manera de favorecer el empleo productivo, sustentable e inclusivo, a través de programas certificados de ajuste a los requerimientos del progreso técnico y la innovación tecnológica.

ARTÍCULO X: SALUD FÍSICA Y MENTAL DE TRABAJADORAS/ES. *Es deber del Estado promover y velar por el cumplimiento de la obligación que tiene todo empleador de garantizar el mayor grado de bienestar físico, mental y social de las y los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención de afectaciones de la salud, el control de riesgos y la adaptación del trabajo a la persona, y de ésta a su puesto de trabajo.*

En cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, la ley establecerá las sanciones a empleadores y mandantes que no brinden la debida protección de la vida, salud e integridad psíquica y física de quienes trabajan bajo su dependencia. Se resguardarán de manera especial las condiciones de salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras que laboren en determinados tipos de faenas de mayor riesgo para su salud, como aquellos trabajos calificados como pesados y otros de características similares.

El Estado instituirá un Sistema Nacional y Público, tripartito y paritario, que promueva, fiscalice, resguarde y vele por la salud física y mental de las y los trabajadores. Entre sus funciones, deberá llevar un Registro Nacional y único de los accidentes y enfermedades de origen laboral.

(Los artículos sobre cuidados y maternidad fueron incorporados en el código 204).

ARTÍCULO X: PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORAS/ES EN LA EMPRESA. *Trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a tener representantes en la dirección de las empresas públicas y privadas.*

ARTÍCULO X: ACCESO A LA JUSTICIA. *Se garantiza a las y los trabajadores, y sus organizaciones el acceso a la justicia, para la tutela de sus derechos y cobro oportuno de sus créditos laborales, debiendo existir una necesaria complementariedad de competencias entre la autoridad administrativa y la judicial.*

El Estado instituirá una Defensoría Laboral pública, autónoma y con los suficientes recursos para brindar asesoría gratuita, representación jurídica y profesional de calidad a las y los trabajadores y a sus organizaciones.

ARTÍCULO X: TUTELA ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS LABORALES. *Corresponde al Estado velar por el cumplimiento de la legislación del trabajo y de seguridad social, a través de un organismo administrativo autónomo y funcionalmente descentralizado, debidamente dotado de los medios para el ejercicio de sus funciones.*

La solución de las controversias individuales o colectivas del trabajo serán de competencia de tribunales especializados, que conocerán las causas mediante procedimientos apropiados, rápidos, económicos, justos y eficientes para resolverlas.

De la decisión de los tribunales de instancia podrá recurrirse ante la Corte especializada que corresponda, de acuerdo a la competencia territorial establecida en la ley.

ARTÍCULO X: DIÁLOGO SOCIAL. *La ley establecerá los mecanismos de diálogo social en las materias que así lo disponga, especialmente: políticas del Estado referidas al cumplimiento de derechos fundamentales en el trabajo; medidas a adoptar por autoridades públicas respecto de materias contempladas en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por el Estado de Chile; en la fijación del salario mínimo, previo a la presentación del proyecto de ley al Congreso Nacional; medidas de protección social por la aplicación de regímenes de excepción constitucional por catástrofe natural; y toda otra cuestión de índole económica y social de interés para las organizaciones de trabajadores y trabajadoras.*

ARTÍCULO X: TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MIGRANTES. *Las y los trabajadores migrantes accederán al trabajo y al goce y ejercicio de derechos laborales, independientemente de su situación administrativa.*

(Los artículos referentes a sindicalización, huelga y negociación fueron incorporados en el código 205, y el artículo referente a seguridad social fue incorporado en el código 206).

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 votos en contra, 1 abstención)

45. ICC N°380-4

Artículo XX. *Todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y decente. El trabajo es una función y un valor social, que asegura a las personas su supervivencia y la de su familia, su plena realización y desarrollo personal para su inclusión social y económica, su reconocimiento en el seno de la comunidad y vivir con dignidad. Se reconocen todos los tipos de trabajo, autónomos o en relación de subordinación y dependencia.*



El derecho al trabajo incluye el crecimiento, formación y readaptación profesional; la protección y estabilidad del empleo; la libre elección y aceptación del empleo, el recibir un trato justo e igualitario y el beneficiarse de sus utilidades. Se prohíbe cualquier forma de esclavitud o servidumbre, el trabajo forzoso y la trata de personas.

Artículo XX. El Estado debe dar protección a los trabajadores y trabajadoras. Las autoridades públicas proveerán y promoverán el trabajo digno y decente, con el fin de garantizar el ejercicio de este derecho. La autoridad administrativa laboral y los tribunales del trabajo deberán aplicar e interpretar la ley en base al principio protector, a la protección del trabajo decente y el respeto a la libertad sindical, considerando los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Artículo XX. Es obligación del Estado promover un régimen laboral compatible con el crecimiento personal y social, en dignidad e igualdad de condiciones, que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, permita la actividad política y comunitaria, promueva la reciprocidad en las obligaciones familiares y la distribución equitativa de las tareas domésticas.

Artículo XX. Las y los trabajadores tienen derecho a una remuneración digna y suficiente para proveer sustento y dignidad, personal y familiar. El ingreso debe reajustarse anualmente según el alza del costo de la vida y será inembargable, salvo en los casos de deuda por pensión de alimentos y otros señalados exclusivamente por la ley. El Estado garantizará el desarrollo del trabajo en condiciones de igualdad sustantiva. Se prohíbe la discriminación remunerativa por trabajo de igual valor entre hombres, mujeres y diversidades y disidencias sexogenéricas.

Artículo XX: Las y los trabajadores tienen derecho a no ser privados injustamente del trabajo y a que el empleador demuestre motivos objetivos, razonables y proporcionados para la validez del despido. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo, o a cualesquiera otra prestación prevista por la ley. Se prohíbe el uso de criterios arbitrarios o mecanismos de contratación que menoscaben otros derechos, tales como la privacidad, la dignidad o integridad personal. Se prohíben los despidos sin causa justa o por motivos políticos e ideológicos.

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o violencia de cualquier índole que afecte a las personas en el acceso al trabajo o en el trabajo mismo, ya sea de manera directa o indirecta, especialmente la discriminación vinculada con los roles reproductivos, la gestación, cuidado o crianza.

Artículo XX. La subcontratación estará permitida únicamente para actividades ajenas al giro de la empresa. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, tales como los contratos a honorarios que ocultan relaciones laborales o administrativas estables, o la tercerización y externalización de servicios fuera de los márgenes constitucionales que atente contra los derechos individuales o colectivos de las y los trabajadores.

Artículo XX: Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada a su trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.

Artículo XX. Tiempo libre y derecho a la desconexión digital. Se reconoce el valor del tiempo libre y el derecho a la desconexión digital de los trabajadores y trabajadoras. Quedará prohibido al empleador contactar al trabajador o trabajadora, por cualquier medio digital o telemático, fuera de la jornada de trabajo.

Artículo XX: El Estado reconoce la división sexual del trabajo como un obstáculo para el goce pleno del derecho al trabajo. La ley establecerá mecanismos que permitan visibilizar y superar esta división.

El Estado velará especialmente por la mejora progresiva de las condiciones laborales en las áreas de trabajo feminizado.

Artículo XX: La política estatal deberá medir, regular y fiscalizar anualmente la cobertura y ejercicio de este derecho, especialmente en lo relativo al acceso, crecimiento profesional y brechas salariales, con miras a la supresión de todas las formas de desigualdad en el ámbito laboral.

Artículo XX. El Estado garantiza la integración y accesibilidad al trabajo en igualdad de condiciones de las personas en situación de discapacidad. Se prohíbe reducir la remuneración de estas personas por circunstancias vinculadas a su condición.

Artículo XX. El Estado resguardará el ejercicio de los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, por lo cual eliminará cualquier discriminación o riesgo laboral que afecte el ejercicio de estos derechos o la salud reproductiva de las personas. La ley regulará los beneficios que permitan la crianza compartida, la maternidad y/o paternidad y lactancia.

Artículo XX. Se reconocerá y regularizará el trabajo independiente realizado en espacios públicos, incluido el de las y los trabajadores de la cultura. Se prohíbe la confiscación de sus productos,



materiales o herramientas laborales. El Estado impulsará espacios de capacitación para apoyar este tipo de trabajo.

Artículo XX. Derecho al trabajo de los Pueblos Originarios. El Estado garantiza el derecho de los pueblos originarios, individual y colectivamente, a no ser discriminados en todas las dimensiones del derecho al trabajo y a la protección y pleno goce de sus derechos laborales y de seguridad social, evitando toda forma de explotación, discriminación o acoso. Asimismo el Estado reconoce, fomenta y protege sus propias organizaciones económicas, actividades tradicionales, sistemas de producción y comercio, con pleno respeto a la autodeterminación y cosmovisión de cada pueblo.

Será deber del Estado generar instancias de participación y consulta para el diseño de medidas específicas en lo relativo al trabajo y personas indígenas, así como elaborar estrategias adecuadas para dar a conocer los derechos laborales de las personas indígenas.

La convencional Meneses **retiró** la iniciativa N°380 en esta materia.

46. ICC N°436-4

El trabajo, derecho y deber.

Artículo 1.- El trabajo es un derecho humano esencial y un deber social, fuente de realización personal y de la economía productiva del país.

Es por ello que todo trabajo en sus diversas formas gozará de la protección del Estado, el que deberá garantizar la plena realización y desarrollo del trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humanas, conforme los principios establecidos por Organización Internacional del Trabajo OIT.

El Estado de Chile reconoce y promueve el Trabajo Decente, que persigue cuatro objetivos estratégicos: el reconocimiento, respeto y garantía plena de los derechos fundamentales en el trabajo, la generación de oportunidades de empleo, el aseguramiento de la protección social y el reconocimiento y fortalecimiento del diálogo social. El derecho al trabajo decente garantiza que todo trabajador y trabajadora pueda ejercer su oficio o profesión libremente elegido, a la promoción a través del trabajo en condiciones de integridad, seguridad, higiene, salud y bienestar ocupacional, sin discriminación laboral alguna, y con derecho a gozar de un salario digno, suficiente y decente de carácter retributivo que considere su aporte al desarrollo del país.

Jornada y descanso laboral

Artículo 2.- El Derecho al Trabajo Decente reconoce y protege el derecho al descanso biológico, la vida familiar y el derecho al ocio, desarrollo y creatividad personal, a la vida personal y familiar, el otorgamiento de vacaciones remuneradas y la disminución progresiva de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo. Nadie podrá ser obligado a prestar servicios personales sin su consentimiento y sin justa retribución, cualquiera sea su fuente que le de origen.

Remuneración digna, suficiente y decente.

Artículo 3.- El Estado de Chile reconoce la dignidad del trabajo, protegiendo la fuente laboral, y asegurando un ingreso mínimo digno, decente y suficiente para la satisfacción de las necesidades esenciales de las personas, incluyendo a quienes se dediquen al cuidado familiar no remunerado, principalmente asegurado para las mujeres. Asimismo, se establece constitucionalmente la obligación de las empresas de establecer planes de equidad e igualdad salarial. Se consagra además el derecho de las y los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, la ley desarrollará esta participación, especialmente a través del ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical.

Diálogo social y protección del trabajo.

Artículo 4.- El Estado debe promover el derecho de información y la necesaria consulta y participación de los y las trabajadoras en su propia empresa, con el fin de perseguir un verdadero diálogo social. Deberá fomentar los derechos fundamentales del trabajo, especialmente el principio de la libertad sindical, en su triple dimensión de derecho de sindicación, la negociación colectiva y garantizar el derecho efectivo a huelga, además de los derechos de protección al trabajo y de igualdad y no discriminación laboral, respetando los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Para una adecuada protección de los derechos laborales de los y las trabajadoras se fortalecerá la Dirección del Trabajo como un ente administrativo público y autónomo, la Justicia Laboral y se creará una Defensoría Laboral pública, autónoma, gratuita, para asegurar una tutela judicial efectiva que garantice la protección de los derechos laborales individuales y colectivos.

Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios del Derecho del trabajo, especialmente el principio protector de las personas trabajadoras, supremacía de la realidad laboral, continuidad y estabilidad laboral, irrenunciabilidad de derechos laborales, y no



discriminación laboral. En caso de duda sobre el alcance, sentido o interpretación de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.

Derecho a la no discriminación Laboral e igualdad ante la ley.

Artículo 5.- El Estado garantiza el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación laboral, entendiéndose esta como un trato lesivo o dañoso y carente de justificación, proporcionado a un individuo perteneciente a una categoría protegida de personas o grupo protegido. Protección que se extiende a la selección y contratación de trabajadores, sus remuneraciones y carga de trabajo, el ejercicio de la potestad de mando del empleador, la mantención de un ambiente laboral libre de toda discriminación y adecuado a las legítimas necesidades de todos los y las trabajadoras, y la terminación de la relación laboral.

El Estado impulsará una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades, derogará las disposiciones legislativas y modificará las disposiciones y prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política.

El Estado garantizará la igualdad y equidad de género en el ejercicio del derecho al trabajo, llevando adelante las políticas públicas necesarias para el cumplimiento de este fin.

Protección al trabajo infantil.

Artículo 8. El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales que entorpece el desarrollo de niños y niñas siendo un potencial generador de daños físicos y psicológicos. Se prohíbe todo tipo de trabajo que prive a los niños, niñas y adolescentes del derecho a la educación y a una formación integral.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra, 2 abstenciones).

47. ICC N°474-4/613-4

Artículo X. Las personas que trabajan remuneradamente gozarán de la protección de las leyes, las cuales asegurarán un ambiente libre de violencia de género, fomentando la prevención y sanción de dichas prácticas, garantizando la igualdad remuneracional entre hombres, mujeres, y diversidades y disidencias sexo genéricas por trabajos de igual valor, que les asegure para sí y su familia una existencia digna, sin discriminación, y a la compatibilidad de la vida laboral con la vida familiar y personal, en el ámbito público y privado.

El Estado promoverá la plena garantía de los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras, generando leyes y políticas públicas que garanticen un abordamiento integral y transversal del enfoque de género en el trabajo remunerado, garantizando la igualdad y no discriminación en él. Será obligación del Estado generar políticas de inclusión de personas trans y no binarias al mundo laboral público y privado.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 votos en contra, 1 abstención).

48. ICC N°484-4

Artículo xx. Derechos de las y los trabajadores

Todas las trabajadoras y los trabajadores,

sin distinción de edad, sexo o género, origen étnico o nación, religión o ideología, tendrán derecho al salario y otras formas de remuneración al trabajo, y su intangibilidad.

La ley establecerá la protección del salario y otras formas de remuneración al trabajo de las y los trabajadores, y su inembargabilidad.

El salario y otros ingresos del trabajo no podrá ser objeto de ningún tipo de descuento por parte del Estado o su empleador, salvo aquellos que expresamente consienta el trabajador con los límites que señale la ley o aquellos que se deriven de sus cargas impositivas o vinculadas a sus obligaciones legales con sus hijos, hijas o familiares.

El salario de las y los trabajadores, ya sean públicos o privados, podrá ser objeto de cargas obligatorias para el financiamiento de las prestaciones de los sistemas de seguridad social o de salud, públicos, las que se deberán utilizar de forma directa, inmediata y exclusiva para fines de seguridad social o de salud, públicas, y en ningún caso para financiar el ahorro nacional, la deuda pública, seguros privados, el mercado de capitales, pagos educacionales, lucro en salud, servicio de créditos que excedan los límites legales al cobro de intereses, o fines análogos.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 2 abstenciones).

49. ICC N°495-4

Artículo XXI. Derechos de los trabajadores y trabajadoras del Estado



Los trabajadores y las trabajadoras del Estado gozarán de todos los derechos y garantías comunes y universales a todos los trabajadores y las trabajadoras del país, especialmente al trabajo decente, a la carrera funcionaria y a la tutela de sus derechos fundamentales. La relación de las personas que ejercen sus trabajos para el Estado será siempre bajo los criterios de subordinación y de dependencia, propios de todo trabajador o trabajadora, aun cuando se desarrolle en los términos del principio jerárquico de la administración pública, esto sin perjuicio de las normas estatutarias especiales, que establezcan derechos específicos para los funcionarios y funcionarias públicos en atención a las características de la función pública que desempeñen; esto no obsta, a la existencia de cargos expresamente excluidos de dicha regulación por la ley o de aquellos que son de exclusiva confianza de las autoridades que los nombran.

Los trabajadores y trabajadoras del Estado gozarán de todos los derechos esenciales para el ejercicio normal del derecho a sindicarse y de la libertad sindical, sin perjuicio de las obligaciones, derechos y deberes que se deriven directamente de la naturaleza de sus funciones públicas. El Estado garantizará la protección adecuada contra todo acto de discriminación en relación con estos derechos y no se podrá condicionar el empleo de los trabajadores/as a su incorporación, renuncia o participación en una organización de trabajadores.

Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del Estado serán completamente independientes respecto de las autoridades públicas, y éstas ejercerán sus funciones siempre bajo la prohibición de injerencia en su constitución, conformación, funcionamiento o administración.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 votos en contra, 3 abstenciones).

50. ICC N°530-4

ART. XXXX:El Estado chileno, como garante de la dignidad de la persona humana, garantizará la protección, la estabilidad, la seguridad y el bienestar social de las y los trabajadores que se desempeñan en el sector descentralizado y centralizado de servicios públicos, fomentando una forma de trabajo provisto de estabilidad, protección social, seguridad física y psicosocial, para ello, deberá propender a:

1) Incorporar progresivamente a un sistema de trabajo estable y seguro a las y los trabajadores públicos que actualmente se desempeñan en modalidades de trabajo precario, llámese este, modalidad de contrata, honorarios o código del trabajo.

2) Potenciar la carrera funcionaria como instrumento de desarrollo de las y los trabajadores, en todas sus plantas y potenciar el carácter vocacional del ser Servidor Público.

3) El gasto de personal a contrata no podrá superar el 20% del gasto total anual del personal de planta, y en el caso de los prestadores de servicios a honorarios con cometidos específicos, no podrá superar el 10% del gasto total anual del personal de planta.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 votos en contra, 4 abstenciones).

51. ICC N°555-4

“N° XX [La libertad de trabajo y su protección].

Toda persona tiene el deber de trabajar según sus propios medios y capacidades, y el derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución, en la forma que lo determine la ley.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, especialmente en cuanto al pago de remuneraciones por igual función dentro de la empresa, sin perjuicio de que la ley pueda exigir límites de edad para determinados casos. Mujeres y hombres tendrán derecho a igual remuneración por el mismo trabajo.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.

El Estado promoverá políticas públicas para promover la existencia de empleos suficientes.”

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 votos en contra, ninguna abstenciones).

52. ICC N°569-4

PROPUESTA DE ARTICULADO

Artículo 1: La Constitución garantiza los siguientes derechos y libertades fundamentales laborales y sindicales:



1.- Precepto constitucional sobre derecho al trabajo y su protección, y el derecho a la Igualdad y no discriminación en el trabajo:

Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre determinación. El trabajo humano es la fuente de toda actividad económica así como el de la subsistencia personal y familiar, de las cuales emana su importancia y dignidad. Se reconoce su diversidad como la del cuidado y la del trabajo por cuenta propia o ajena; modalidades como aquellas del trabajo manual y/o de las múltiples formas del trabajo intelectual, incluidos los de planificación y dirección, así como el científico, técnico y artístico. Reconocemos la primacía del trabajo sobre el capital, que es, en definitiva, trabajo acumulado, por lo que la economía está al servicio de la persona humana.

La organización y la división social del trabajo deben ser acordes con la dignidad humana e igualdad de género, incluida la protección de la maternidad y la corresponsabilidad parental y así como los derechos a la desconexión, a la limitación razonable de la jornada de trabajo, el debido descanso, y el derecho a un salario justo y suficiente que asegure al trabajador o trabajadora y a su familia un bienestar acorde con la dignidad humana y el derecho a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan.

El Estado debe promover las condiciones que hagan efectivo el derecho al trabajo, resguardando la estabilidad en el empleo, la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente en materia de remuneraciones entre mujeres y hombres, la capacitación profesional y técnica y la permanente educación de las y los trabajadores, así como la protección contra el desempleo.

El Estado protegerá el empleo humano ante el impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo y su transformación, privilegiando la reconversión del trabajo.

Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que su realización implique daño a la seguridad personal o a la salud públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley así lo declare. Se prohíbe el trabajo forzoso, la trata de personas, toda forma de servidumbre, el trabajo infantil forzoso, denigrante y humillante.

(Los numerales N°2, N°3, N°4 y N°5 fueron incorporados en las secciones correspondientes según su contenido).

6.- Precepto constitucional sobre participación de los trabajadores en la empresa

El estado garantizará el derecho de los trabajadores de participar en el directorio de las empresas. La ley establecerá el procedimiento y forma de designación del o los representantes de los trabajadores con una participación de al menos un veinte por ciento del directorio respectivo.

7.- Precepto constitucional sobre tutela administrativa de los derechos laborales.

El estado garantizará el derecho a la protección y fiscalización eficaz del cumplimiento de los derechos laborales. La ley establecerá el organismo autónomo correspondiente para estos efectos.

8.- Precepto constitucional sobre tutela jurisdiccional de los derechos laborales.

El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Sometido a votación se **rechazó** (15 votos a favor, 18 votos en contra, 0 abstenciones).

53. ICC N°587-4

Artículo X. Derecho al Trabajo Decente y sus garantías.

Todas las personas tienen derecho al trabajo decente. Los poderes del Estado contarán con amplias facultades para promover, regular y cautelar la dignidad en las condiciones del empleo. La educación y capacitación continua serán parte integral de la vida laboral. El legislador deberá regular mecanismos para romper las barreras de la desigualdad social, cultural, étnica, de género o cualquier otra y contará con amplias facultades para promover la inclusión de los grupos desfavorecidos en todos los niveles de la vida y el trabajo.

El Estado garantizará la igualdad y equidad de género en el ejercicio del derecho al trabajo. Es obligación del Estado contribuir a superar todos los obstáculos que han permitido establecer un trato desigual, así como promover activamente esta igualdad, adoptando las medidas legislativas y administrativas para eliminar toda discriminación que afecte a las mujeres y a la diversidad sexual, adoptando un enfoque de género en el diseño de políticas y planes.

El derecho al trabajo decente garantiza que todo trabajador y trabajadora pueda ejercer su oficio o profesión libremente elegido, en condiciones de dignidad, integridad, seguridad, higiene, salud



y bienestar ocupacional, sin discriminación directa o indirecta en el trabajo y con derecho a gozar de un salario decente de carácter retributivo que considere su aporte al desarrollo del país. Se prohíbe cualquiera distinción o preferencia que no se base en la capacidad o idoneidad personal.

La ley garantizará la estabilidad en el empleo. Queda prohibido el despido arbitrario. Es deber del Estado fijar procedimientos adecuados que permitan la defensa de los trabajadores y trabajadoras ante el despido, debiendo establecer instrumentos de protección efectivos contra su utilización ilegal y arbitraria. Es deber del Estado establecer medidas adecuadas e idóneas para su impugnación y control ante los tribunales de justicia. El legislador debe contemplar un modelo de reparación integral ante el despido.

El derecho al trabajo decente garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. La ley fijará los mecanismos para su retribución económica en el ámbito del Derecho a la Seguridad Social.

El Derecho al Trabajo Decente reconoce y protege el derecho al descanso, a la vida personal y familiar, el otorgamiento de vacaciones remuneradas y la disminución progresiva de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo.

Es obligación del Estado implementar políticas tendientes a lograr el pleno empleo, elaboradas conjuntamente con la estrategia de desarrollo económico sostenible y sustentable. El incumplimiento del deber Estatal dará derecho a un seguro de desempleo que permita la subsistencia hasta la obtención de un trabajo productivo. Nadie podrá ser obligado a prestar servicios personales sin su consentimiento y sin justa retribución, cualquiera sea su fuente que le de origen. Se prohíbe cualquier forma de esclavitud o servidumbre, el trabajo forzoso e infantil y la trata de personas.

Artículo X. Derecho al Trabajo Decente de los trabajadores y trabajadoras del Estado.

Los trabajadores y las trabajadoras del Estado gozarán de todos los derechos y garantías comunes y universales a todos los trabajadores y las trabajadoras del país, especialmente al trabajo decente, a la carrera funcionaria y a la tutela de sus derechos fundamentales. La relación de las personas que ejercen sus trabajos para el Estado será siempre bajo los criterios de subordinación y de dependencia, propios de todo trabajador o trabajadora, aun cuando se desarrolle en los términos del principio jerárquico de la administración pública, esto sin perjuicio de las normas estatutarias especiales, que establezcan derechos específicos para los funcionarios y funcionarias públicos en atención a las características de la función pública que desempeñen; esto no obsta, a la existencia de cargos expresamente excluidos de dicha regulación por la ley o de aquellos que son de exclusiva confianza de las autoridades que los nombran.

Los trabajadores y trabajadoras del Estado gozarán de todos los derechos esenciales para el ejercicio normal del derecho a sindicarse y de la libertad sindical, sin perjuicio de las obligaciones, derechos y deberes que se deriven directamente de la naturaleza de sus funciones públicas. El Estado garantizará la protección adecuada contra todo acto de discriminación en relación con estos derechos y no se podrá condicionar el empleo de los y las trabajadoras a su incorporación, renuncia o participación en una organización de trabajadores.

Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del Estado serán completamente independientes respecto de las autoridades públicas, y éstas ejercerán sus funciones siempre bajo la prohibición de injerencia en su constitución, conformación, funcionamiento o administración.

Artículo X. Derecho al Salario Decente.

Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a un salario mínimo decente, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna y que le permita cubrir las necesidades materiales, sociales, intelectuales, culturales, sanitarias, esparcimiento, descanso y previsión de él o ella y de su familia, tendiente al mejoramiento continuo y progresivo. La fijación del salario mínimo será efectuada anualmente por ley, previa consulta a una Comisión Tripartita compuesta por representantes de las y los trabajadores, las y los empleadores y el Gobierno. Para su fijación y monto deberá tenerse en cuenta la naturaleza y los fines otorgados al salario mínimo decente. Regirá para su determinación el principio de no regresividad. La ley garantizará el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y el principio de transparencia retributiva. su infracción será reclamable ante el órgano de la administración encargado de supervigilar el cumplimiento de la ley laboral.

Las personas trabajadoras tienen el derecho a participar de las utilidades empresariales, la ley desarrollará esta participación, especialmente a través de las negociaciones colectivas con los sindicatos.

Las empresas tendrán la obligación de implementar Planes de Equidad e Igualdad Salarial y de condiciones de Trabajo, especialmente con la intervención de las organizaciones sindicales de



trabajadores y trabajadoras. Será además un contenido obligatorio en las negociaciones colectivas.

La legislación protegerá la intangibilidad e inembargabilidad de las remuneraciones y el carácter prioritario o preferente de los salarios frente a otras obligaciones del empleador.

Artículo X. Derecho a la Formación y Capacitación para el Trabajo Decente. Es deber del Estado promover la formación, capacitación, reconversión productiva, readaptación profesional y laboral de los trabajadores y trabajadoras. El Estado establecerá un Sistema Nacional y Público, de carácter tripartito y paritario, que brinde programas de formación y orientación profesional continua y permanente, de manera de favorecer el empleo productivo, sustentable e inclusivo, a través de programas certificados de ajuste a los requerimientos del progreso técnico y la innovación tecnológica.

Artículo X. Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo. La Constitución ampara la vida e integridad física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras, garantizando su derecho a condiciones de trabajo seguras; a capacitación laboral permanente sobre seguridad y salud en el trabajo; a ejercer su derecho a ser informados de los riesgos y medidas de seguridad inherentes a las funciones que desempeñen; a requerir de la autoridad las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de accidentes del trabajo y/o de enfermedades profesionales, fiscalizar el cumplimiento de dichas medidas preventivas y sancionar su incumplimiento; recibir la atención necesaria en caso de ocurrencia de un accidente o enfermedad de tipo ocupacional, recibiendo los tratamientos necesarios y la rehabilitación integral, cuando fuese el caso; percibir los subsidios correspondientes al periodo de tiempo en que no puedan retornar a sus labores y al grado de invalidez que eventualmente presenten; y a ser indemnizados por los perjuicios materiales y morales infligidos a consecuencia del accidente laboral y/o la enfermedad profesional, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere recaer en el empleador.

El Estado debe garantizar el derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo de todos/as los trabajadores del país. Todos los trabajadores/as deben tener garantizada la protección frente a las contingencias que surgen a partir de los riesgos laborales, bajo los principios de solidaridad, universalidad, suficiencia, unidad y participación. En el cual, además, la administración y cobertura de las prestaciones del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales sea responsabilidad del Estado y también a través de entidades sin fines de lucro, que tengan ese único fin y que sean reguladas y fiscalizadas por el mismo Estado.

Es deber del Estado promover y velar por el cumplimiento de la obligación que tiene todo empleador de garantizar el mayor grado de bienestar físico, mental y social de las y los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención de afectaciones de la salud, el control de riesgos y la adaptación del trabajo a la persona, y de ésta a su puesto de trabajo. La ley establecerá las sanciones a empleadores y mandantes que no brinden la debida protección de la vida, salud e integridad psíquica y física de quienes trabajan bajo su dependencia.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 votos en contra, 2 abstenciones).

54. ICC N°600-4

Artículo X.- Se reconocen las condiciones especiales del trabajo rural, por lo que el Estado adoptará, sin ser esta enunciación taxativa, las siguientes medidas que permitan dar cumplimiento adecuado a los derechos laborales, organizativos y de seguridad social:

- 1. Facilitar la organización de las y los trabajadores rurales, permitiéndoles optar a distintas formas organizativas, sean de carácter territorial, productivo, temporal, entre otros.*
- 2. Garantizar la protección de la salud y seguridad en el trabajo rural, previniendo especialmente los efectos del uso de agrotóxicos y las enfermedades profesionales.*
- 3. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social adecuado a las particularidades y condiciones del trabajo rural, incorporando trabajadores dependientes e independientes.*
- 4. Garantizar acceso a mecanismos de participación directa y vinculante en la preparación y aplicación de normativas, planes, políticas y programas en materias que afecten su trabajo.*
- 5. Mantener un sistema de fiscalización laboral especializado que cubra a todos los empleadores y trabajadores rurales, para garantizar el respeto a la legislación laboral, previsional y de salud y seguridad en el trabajo.*

Para estos efectos, se aplicarán preferentemente las normas de la legislación nacional e internacional que más favorezcan el ejercicio de estos derechos.

Sometido a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 21 votos en contra, 0 abstenciones).

55. ICC N°630-4

Artículo XX. Del Derecho al Trabajo Decente y su protección



El Estado protege y garantiza la función social del trabajo, según la cual todas las personas tienen el derecho a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de sus condiciones de existencia y la de sus familias. El Estado tiene el deber de proteger el derecho al trabajo que asegure dignidad, salud, bienestar, alimentación, vivienda, educación, cultura, seguridad social y en general el ejercicio de todos los derechos, así como la promoción del pleno empleo, como fundamento del bienestar de la sociedad.

Todas las personas tienen derecho al trabajo digno y a ganarse la vida mediante un empleo libremente escogido o aceptado, en condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la estabilidad en el empleo y a la protección contra el desempleo. La ley regulará las causas de separación y la sanción al despido injustificado, en cuyo caso, el trabajador o trabajadora tendrá siempre derecho irrenunciable a una justa indemnización y a la nulidad del despido, en caso de considerarse arbitrario. Ninguna persona podrá sufrir discriminación, distinción, exclusión o preferencia alguna en su trabajo o en el acceso a éste, basados en motivos de raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexo afectiva, la identidad y expresión de género, características sexuales, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la condición de salud, la capacidad, o de cualquier otro tipo. Estará prohibido todo trabajo forzoso u obligatorio, así como toda limitación al acceso igualitario al trabajo decente, especialmente respecto de personas y grupos económicamente desfavorecidos y marginados. La ley podrá establecer acciones afirmativas, cupos laborales, para garantizar el acceso al trabajo decente para personas de grupos desaventajados por razones tales como etnia, identidad de género, sexo y capacidad.

Todas las personas tienen derecho al ocio, al descanso, y en especial a las vacaciones remuneradas. La jornada laboral se establecerá con claridad, la cual en general no podrá superar las 40 horas semanales y estará sujeta a las limitaciones necesarias para asegurar estos derechos y aquellos que la Constitución le asegura a las trabajadoras y trabajadores. Se reconoce el derecho de las personas a la desconexión laboral una vez cumplida su jornada de trabajo.

Todas las personas tienen derecho, sin discriminación alguna, a una remuneración justa, equitativa y satisfactoria, a la participación de las utilidades de la empresa, y a toda prestación que asegure una existencia conforme a la dignidad humana y que en caso de necesidad será completada mediante el deber del Estado y el derecho de las personas a la seguridad social. Todo empleador tiene el deber ineludible de dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones, prestaciones, condiciones, beneficios y oportunidades entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye un mismo valor. Es deber del Estado dar cumplimiento a este principio a través de las leyes y políticas respectivas.

El Estado deberá velar por el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo mediante el establecimiento de un organismo autónomo de fiscalización laboral, el cual tendrá las facultades coercitivas que establezca la ley para el cumplimiento eficaz de dicho fin.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 2 abstenciones).

56. ICC N°655-4

1. "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA MUJER EN EL MUNDO DEL TRABAJO"

Propuesta de cláusula constitucional número uno:

El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo decente en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito público como en el privado.

Es deber del Estado eliminar las barreras que se oponen a la igualdad material entre hombres y mujeres en el trabajo, tomando un rol activo en la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, desarrollo y término de la relación laboral".

Propuesta de cláusula constitucional número dos:

"El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo decente en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito público como en el privado, garantizando especialmente igualdad en el acceso al trabajo, en la formación profesional, en la promoción y ascensos, en la estabilidad laboral y en el goce de condiciones laborales equitativas y satisfactorias.

Es deber del Estado eliminar las barreras que se oponen a la igualdad material entre hombres y mujeres en el trabajo, tomando un rol activo en la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, desarrollo y término de la relación laboral".

2. "LA NECESARIA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL "DERECHO DE NO DISCRIMINACIÓN REMUNERATIVA POR TRABAJO DE IGUAL VALOR"



Propuesta de cláusula constitucional:

“El derecho a la no discriminación laboral. El Estado debe establecer instrumentos que garanticen el derecho de no discriminación remunerativa por trabajo de igual valor entre mujeres y hombres.”

3. “PROPUESTA DE CLÁUSULA SOBRE NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN EL TRABAJO EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN”

Propuesta de cláusula constitucional número uno:

Cláusula bases de la institucionalidad (primer capítulo-principios generales).

“Prohíbese la violencia contra la mujer que afecten o vulneren en cualquiera de sus manifestaciones los derechos fundamentales de las mujeres, sea en el ámbito

público o privado. Conságrese la igualdad de trato entre hombres y mujeres como principio fundante e informador del ordenamiento jurídico nacional.

Reconózcase el derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia basada en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales, tanto en el ámbito público o privado, cualquiera sea la forma que pueda adquirir, sea física, psicológica, sexual o laboral.

El Estado deberá garantizar mecanismos que prevengan la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos”.

Propuesta de cláusula constitucional número dos:

Cláusula principios constitucionales.

“El derecho de toda persona a una relación de trabajo en el ámbito público o privado libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y al acoso en razón de género. Se entenderá por actos de violencia y acoso en razón de género, todos los actos, prácticas y omisiones, ya sea que se ejecuten en un solo acto o de forma reiterada, que afecten o vulneren de cualquier forma los derechos fundamentales reconocidos a los trabajadores y trabajadoras, que atenten contra la dignidad de la persona, en particular aquellas que crean un ambiente intimidatorio, degradante u ofensivo, basados en el género de la persona afectada, especialmente los actos discriminatorios, el acoso sexual y los que constituyan acoso laboral por razón de género.

La protección de este derecho también comprende la etapa de postulación a un trabajo, así como las actividades que se desarrollen con ocasión del trabajo incluida su terminación.

La ley señalará el procedimiento que tendrá la persona afectada para la investigación, sanción y reparación a la contravención de este derecho.

La ley determinará las obligaciones que los empleadores deberán cumplir para la prevención y reparación de la violencia y acoso en razón de género, y para la protección de este derecho.

La ley regulará los mecanismos para que el Estado promueva, prevenga, proteja, sancione y repare a las trabajadoras y trabajadores afectados en el disfrute de este derecho de manera integral, incorporando el principio de transversalización de género de las medidas a regular”.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 20 votos en contra, 6 abstenciones).

57. ICC N°682-4

Artículo X: Protección del trabajo y derecho al trabajo decente.

El Estado reconoce y garantiza la protección del trabajo. En consecuencia, este deberá asegurar la protección eficaz de los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, mediante un órgano autónomo a cargo de su fiscalización.

La Constitución asegura el derecho al trabajo decente. Este comprende el derecho a la libre elección del trabajo, bajo condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, incluyendo el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital y a la garantía de indemnidad.

La Constitución garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración equitativa que le asegure su sustento y el de su familia.

Se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario.

Artículo X: Participación de los trabajadores y trabajadoras.



La Constitución asegura a los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales el derecho de participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos a través de los cuales se ejercerá este derecho.

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 13 votos en contra, 3 abstenciones).

58. ICC N°716

Artículo Único:

Todo empleador deberá velar por generar condiciones favorables en los espacios de trabajo con especial énfasis en la higiene, seguridad y ergonomía. Será responsabilidad de los órganos correspondientes, tal como fije la ley, la labor de fiscalizar y dar su total cumplimiento.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 26 votos en contra, 2 abstenciones).

59. CC 719-4

Artículo X: Que el Estado deberá promover y garantizar la incorporación masiva de mujeres en todos los procesos productivos de la economía nacional y no sólo servicios; propendiendo a establecer como derecho, la calificación laboral. Se deberá implementar una política que garantice el derecho de las mujeres a la incorporación y reconocimiento al trabajo intelectual y altamente especializado que impulse el desarrollo industrial y científico del país. Derecho al descanso, la lactancia materna, asistencia económica en caso de incapacidad de trabajo.

(El artículo referente a educación se encuentra en incorporado en la sección sobre derecho a la educación)

Artículo X: A igual trabajo, igual salario. El Estado debe establecer garantías plenas a las mujeres para recibir las mismas tarifas salariales que los hombres, que desempeñen un cargo y función. En las circunstancias de enfermedad de hijo menor de 1 año se garantizara el pago de una licencia medica equivalente a la remuneración integra. En las empresas del sector privado que incumplan con este derecho, el estado podrá intervenir su organización.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 28 votos en contra, 1 abstención).

60. ICC 747-4

Artículo 1: Derecho del trabajo y sus principios. Esta Constitución reconoce como principios aplicables al derecho del trabajo, entre otros, los siguientes:

1) In dubio pro operario: Las normas que regulan las relaciones laborales tienen por objeto la protección de la parte más débil de la relación laboral, esto es, las trabajadoras y trabajadores de Chile.

En el caso que una norma se pueda entender de varias maneras, debe preferirse aquella interpretación que más favorezca a las y los trabajadores.

2) La regla de norma más favorable: Ante la presencia de varias normas aplicables a una misma situación jurídica, debe aplicarse la norma que más favorezca a las y los trabajadores.

3) Irrenunciabilidad de los derechos laborales: Los derechos laborales son irrenunciables, ninguna persona puede privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho del Trabajo en beneficio propio.

4) Continuidad de la relación laboral: Los contratos de trabajo son de duración indefinida, salvo aquellos contratos pactados por obra o a plazo fijo.

El contrato de trabajo sólo podrá terminar por causales expresamente establecidas en la ley. El término del contrato de trabajo prohibido por la constitución y la ley será declarado nulo por el respectivo órgano jurisdiccional y obligará al empleador a reincorporar al trabajador y pagar todas las remuneraciones devengadas durante el tiempo de separación hasta su reincorporación o la fecha de dictación de la sentencia definitiva que ponga fin al asunto en el tribunal.

5) Primacía de la realidad: En caso de discordancia entre lo que ocurra en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos entre empleador y trabajadores, el juez y las partes deben atenerse a lo que sucede en el terreno de los hechos.

6) Vigencia de los derechos fundamentales: La realización de una actividad laboral no afecta ni suspende la vigencia de todos los derechos fundamentales de las y los trabajadoras en el lugar de trabajo; ni de sus dirigentes sindicales y gremiales.

En Chile, no hay incompatibilidad ni inhabilidad alguna entre la calidad de trabajador o dirigente sindical y cualquier cargo de representación popular.

7) Paridad de género: Las trabajadoras tendrán igualdad de oportunidades con los trabajadores en el acceso al trabajo; tanto durante la relación laboral, en el ejercicio de todos los derechos laborales, como en el derecho a la participación en la gestión y el resultado de las empresas.



8) *Libertad sindical: Las y los Trabajadores del sector público y privado, tienen el derecho a ejercer la libertad sindical sin presiones de ningún tipo.*

9) *Todos aquellos principios que se consagran en los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile sobre protección al trabajador y trabajadora, estabilidad en el empleo, libertad sindical y protección de las organizaciones sindicales.*

Artículo 2: Sobre el derecho individual al trabajo. Se reconoce el derecho al trabajo, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganar su sustento mediante un trabajo decente, libremente escogido o aceptado.

Se prohíbe cualquier forma de esclavitud o servidumbre, el trabajo forzoso e infantil y la trata de personas, en todo el territorio nacional.

La Constitución asegura el derecho de toda persona a un trabajo digno, que permita su realización personal y asegure condiciones equitativas y satisfactorias para su sustento y el de su familia.

Artículo 3. Sobre la Protección de las y los trabajadores. El derecho a la protección de las y los trabajadores, comprende:

1. El derecho a acceder a una remuneración justa que reconozca el aporte de los trabajadores y trabajadoras a la prosperidad del país. Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras a participar de las utilidades de la empresa;

2. La igualdad de remuneraciones por un trabajo de igual valor, sin distinción alguna por motivos de sexo, orientación sexual, raza, color, nacionalidad, maternidad, discapacidad u otros factores sospechosos de discriminación;

3. Se prohíbe la discriminación en el trabajo, tanto en las ofertas y entrevistas, como en la ejecución del contrato o en su término. Los migrantes gozarán de los mismos derechos que los trabajadores y trabajadoras chilenos.

4. La organización del trabajo debe facilitar la conciliación de la vida laboral, profesional y familiar.

5. Las innovaciones tecnológicas deben servir para dignificar el trabajo y facilitar su desarrollo a las y los trabajadores;

6. El derecho a la seguridad, higiene y salud en el trabajo. La ley regulará el seguro laboral para accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que será de acceso universal;

7. La igual oportunidad para todos de ser promovidos a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio, capacidades y mérito.

8. El derecho al descanso de trabajadoras y trabajadores, al disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas e irrenunciables;

9. El derecho a percibir remuneración por los días festivos, sean o no trabajados.

10. El despido deberá siempre estar motivado por justa causa.

11. Los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras

constituyen un límite a las facultades del empleador en la empresa.

12. Se prohíbe la subcontratación para aquellas labores que formen parte del giro de la empresa.

13. La ley podrá establecer el derecho a la información y a la consulta, así como la codeterminación dentro de las empresas.

14. La ley protegerá el trabajo sostenido en condiciones de riesgo para la salud o integridad física, el autónomo y el de sectores vulnerables.

Las normas anteriores no podrán interpretarse o aplicarse de forma que disminuyan los derechos laborales reconocidos en las declaraciones y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 25 votos en contra, 3 abstenciones).

61. ICC Nº1025-4

ARTÍCULO XX DERECHO AL TRABAJO DIGNO

El Estado debe garantizar el derecho al trabajo a toda persona en condición de hacerlo. Organizando instituciones y servicios para que las personas puedan obtener un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad. Además, el Estado debe organizar instituciones y servicios que faciliten a los trabajadores el desempeño de sus responsabilidades.

ARTÍCULO XX DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL



El trabajo debe tender a su estabilidad en el tiempo y el Estado deberá elaborar legislación que lo garantice. Son contrarias a ello, los empleos de plazo fijo y temporales, siendo limitados en su aplicación y tiempo. El término de la relación laboral deberá ser causado, fundándose en la ley y debidamente justificado.

ARTÍCULO XX DERECHO A LA PROTECCION DEL TRABAJADOR

El trabajador y la trabajadora en el empleo, deben ser protegidos por el Estado mediante la legislación y sus órganos. Debiendo el empleador garantizar de acuerdo a la ley, la protección de sus trabajadores durante toda la relación laboral. Al término de la relación laboral, todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a la remuneración de desempleo. Terminada la vida laboral activa, el trabajador y la trabajadora tendrán derecho a recibir una justa jubilación.

ARTICULO XX DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN LABORAL

Los trabajadores a trabajadoras no podrán ser discriminados o discriminadas en el empleo, ni en forma previa, ni durante, ni al término de la relación laboral.

ARTÍCULO XX DERECHO A UNA JUSTA E IGUAL RETRIBUCIÓN DEL SALARIO

Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a recibir un salario justo para satisfacer sus necesidades de acuerdo a las exigencias de la vida social, por las actividades laborales que realiza y la riqueza que genera. Garantizando a lo menos condiciones dignas para él y su grupo familiar. Por un mismo trabajo se retribuirá con un mismo salario.

ARTÍCULO XX DERECHO A LA RECLAMACIÓN

Todos los trabajadores y trabajadoras podrán ejercer “el derecho a la reclamación” ante la jefatura o dirección de la empresa en que laboran, ante la autoridad administrativa o la autoridad judicial, para hacer valer sus derechos laborales. La reclamación deberá ejercerse en un plazo razonable, debiendo regular y garantizar el Estado su ejercicio.

Sometido a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 28 votos en contra, 2 abstenciones).

(c.204) Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (IIC N°252, IPC N°32, 61, 75; ICC N°107, 355, 362, 436,478, 546, 474/613, 719 y 947).

62. ICI N°252

1.-DERECHO AL CUIDADO

Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidada y cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y en condiciones de igualdad, corresponsabilidad y con pertinencia de acuerdo a los preceptos de los pueblos originarios.

El Estado debe generar normativas y políticas públicas, basadas en los enfoque de derechos humanos, interculturalidad, género y la promoción de autonomía personal, que garanticen la implementación de un sistema integral de Cuidados de carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural indígena y perspectiva interseccional, asegurando su financiamiento permanente, suficiente y progresivo.

El sistema prestará especial atención a niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Así mismo velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajo de cuidados.

2. - RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DOMESTICO Y DE CUIDADOS.

El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios indefensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

El Estado garantiza su redistribución a través del Sistema Integral de Cuidados y, estableciendo un régimen laboral compatible con el trabajo de cuidados, que promueva la igualdad y la corresponsabilidad social de género. Asimismo, garantizará a quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidados, los derechos laborales consagrados en la Constitución y las leyes.

3.- FISCALIZACIÓN:

El Estado garantizará mediante un ente fiscalizador en conjunto con representantes de los pueblos originarios elegidos democráticamente por estos y de acuerdo con sus costumbres y por región, que se promuevan y cumpla dicha norma y la asignación de recursos económicos para ello.



Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstención).

63. IPC N°32

1.- *El derecho al cuidado de los primeros mil días de vida y protección de la maternidad y co-parentalidad, debe ser entendido como un derecho fundamental básico, que le corresponde a todas las personas, por el hecho de ser tales. Garantizar este derecho es un deber del Estado, tal como propiciar normas que involucren a trabajadores del sector público y privado, además de las políticas públicas necesarias para que sea tratado como un derecho fundamental.*

2.- *El Estado velará porque a todos los niños y niñas, se les reconozca el derecho a ser deseados, a crecer en un ambiente tranquilo, y estos cuidados deben ser generados aún antes de la concepción, mediante el acceso a la información integral, en diversos ámbitos, como es la educación, derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales, derecho a la salud, entre otros, de esa forma se puede propender a ser cuidados de manera digna, garantizando su seguridad, integridad y desarrollo de vínculos sanos.*

3.- *Será deber del Estado que todas las mujeres y hombres que ejerzan la parentalidad, tanto como todas las personas proveedoras de cuidado, tengan acceso a las garantías tanto laborales como económicas, para ejercer los cuidados necesarios de manera integral.*

4.- *A fin de asegurar la salud integral de las personas que ejercen labores de cuidado, el Estado proveerá los programas necesarios de cobertura especializada para estas temáticas, integrando en las prestaciones la salud física, mental y espiritual.*

5.- *La co-parentalidad será impulsada, fomentada y apoyada por el Estado, mediante el reconocimiento de algunos derechos y beneficios, tales como, un permiso prenatal, a fin de que el padre se involucre activamente los últimos días del embarazo, un permiso postnatal, que actualmente es de 5 días, que se extienda, pues el apego claramente es un proceso que no debe ser limitado únicamente a esos 5 días, y a fin de lograr un fortalecimiento de la familia y erradicar toda clase de discriminación por género, establecer un marco legal que proteja a los integrantes de este núcleo, a través de un fuero que incluya al padre, además de contar con estrategias educativas, culturales, sociales y económicas que permitan que este ejercicio sea posible.*

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 14 votos en contra, 2 abstenciones).

64. IPC N°61

Artículo XX

Se reconoce el trabajo doméstico y de cuidado. Todos los trabajos deben ser remunerados.

Tanto el trabajo doméstico como los trabajos de cuidado serán remuneradas con cargo a un Fondo Universal financiado a través del presupuesto nacional. De este modo, el Estado deberá garantizar disponibilidad presupuestaria que permita una remuneración digna a quienes ejercen estas tareas.

Este derecho contemplará el acceso a previsión social, toda vez que se basa en el reconocimiento de la igualdad de trabajos en el espacio público y privado.

Será labor de los municipios coordinar, administrar y fiscalizar a fin de permitir una adecuada ejecución de este derecho. Una ley regulará las potestades, procedimientos y plazos para la atribución de funciones al gobierno local que se traduzca en el efectivo desarrollo de este derecho fundamental.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstención).

65. IPC 75

Toda persona tiene el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse, debiendo el Estado otorgar un ambiente adecuado y los medios materiales y simbólicos necesarios para vivir dignamente en sociedad durante toda

las etapas de la vida.

La ley establecerá un sistema nacional de cuidados de carácter integral, universal, accesible, suficiente, interseccional y con pertinencia cultural, que articulará prestaciones y promoverá la corresponsabilidad al interior de la comunidad. Este sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

Sometido a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 7 votos en contra, 0 abstenciones).

66. ICC N°107

Artículo 8. Sobre el trabajo doméstico y laborales de cuidado.



Se reconoce el trabajo doméstico y las laborales de cuidado humano como actividad económica que crea valor agregado, produce riqueza y bienestar social; quienes lo ejerzan tendrán derecho a la seguridad social.

El trabajo no remunerado de autosustento o en las empresas será reconocido y quienes lo ejerzan tendrán derecho a la seguridad social.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa N°107 en esta materia.

67. ICC N°355

Artículo X. Derecho al Cuidado.

Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad.

El Estado debe generar normativas y políticas públicas, basadas en el enfoque de derechos humanos y de género, y la promoción de la autonomía personal, que garanticen la implementación de un Sistema Integral de Cuidados de carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural y perspectiva interseccional, asegurando su financiamiento permanente, suficiente y progresivo.

El sistema prestará especial atención a niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados.

Artículo X. Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.

Artículo x. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

El Estado garantizará su redistribución a través del Sistema Integral de Cuidados y, estableciendo un régimen laboral compatible con el trabajo de cuidados, que promueva la igualdad y la corresponsabilidad social y de género. Asimismo, garantizará, quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidados, los derechos laborales consagrados en la Constitución y las leyes.

Sometido a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 6 votos en contra, 2 abstenciones).

68. ICC N°362-2

ARTÍCULO X: RECONOCIMIENTO DE LAS LABORES DE CUIDADO Y DEL HOGAR. El Estado reconocerá el trabajo de cuidados en el hogar como actividad creadora de valor, productora de riqueza y bienestar social.

Quienes lo ejerzan tendrán de manera plena derecho a la Seguridad Social, siendo obligación del Estado instituir, para ello, un Sistema Plurinacional de Cuidado.

ARTÍCULO X: PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD, PATERNIDAD Y VIDA FAMILIAR. Es deber del Estado otorgar especial cuidado a las personas en estado de gestación, quienes tendrán derecho a la protección de su empleo, a gozar de descansos en un periodo razonable antes y después del parto y a su adecuado sustento durante dichos descansos.

Padres, madres y quienes deban asumir el cuidado personal de niños y niñas, tendrán el derecho a conciliar dicho cuidado con su vida laboral, para lo cual la ley establecerá las condiciones que garanticen el ejercicio de estos derechos. Lo mismo se aplicará respecto del cuidado que realiza de personas enfermas, adultos mayores, y otras personas con necesidades especiales.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstención).

69. ICC N°436

Derechos de maternidad y a conciliar el trabajo y los cuidados afectivos de niños y niñas.

Artículo 6.- El Estado protegerá los derechos de las personas en estado de pre y post gestación, garantizándole la protección integral de sus derechos laborales.

Las madres, padres o los cuidadores de niñas y niños, tendrán derecho a conciliar dicho cuidado afectivo, con su vida laboral, para lo cual se le deben respetar íntegramente su fuente de trabajo y sus derechos laborales.

Labores de cuidado del hogar y la familia.



Artículo 7.- El Estado reconoce el trabajo de cuidados en el hogar como actividad creadora de valor y de bienestar social. Los que la realicen tendrán derecho a la Seguridad Social garantizada por el Estado.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 votos en contra, 3 abstenciones).

70. ICC N°478

Artículo X.

“Toda persona tiene el derecho a cuidar y a ser cuidado. Es deber del Estado otorgar, a través de instituciones públicas, fundaciones de la sociedad civil, un ambiente adecuado así como los medios materiales y económicos para el ejercicio de este derecho en todas las etapas del ciclo vital, según las condiciones y requisitos que señale la ley.

La ley establecerá un sistema nacional de cuidados de carácter integral y universal, que prestará asistencia a los cuidadores y promoverá la corresponsabilidad al interior de la comunidad. Este sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, y a quienes cuidan a otros de manera no remunerada.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 19 votos en contra, 6 abstenciones).

71. ICC N°546

Artículo AA: Reconocer el valor social del cuidado, como trabajo fundamental y su aporte en términos económicos y sociales a toda persona que habite en el territorio nacional, el cuidado como un derecho humano para quienes lo requieran y como un trabajo para quienes lo ejerzan.

Artículo BB: Recompensar y remunerar con salarios iguales por un trabajo de igual valor. Pensiones dignas, condiciones de trabajo dignas y protección social integral, basado en el principio de la igualdad sustantiva en dignidad, libertad y derechos.

Valorar el trabajo de cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos fortalecidos, de calidad y sensibles al género; la provisión de infraestructura y recursos adecuados, capaces de garantizar los derechos sociales y; la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia.

Artículo CC: Reducir la carga del trabajo de cuidados no remunerado sobre las mujeres. Garantizar el derecho al cuidado, para dar pasos concretos en la superación de la división sexual del trabajo.

Artículo DD: Redistribuir el trabajo de cuidados dentro de los hogares, en el Estado y entre todos los trabajadores y trabajadoras mediante la garantía del cuidado.

Garantizar educación pública no sexista, educación sexual integral, derecho a la maternidad libre, a los derechos sexuales y reproductivos y, a la desfamiliarización y desfeminización de la responsabilidad por los cuidados.

Artículo EE: Restaurar y reclamar el deber y la responsabilidad principal del Estado de proporcionar servicios públicos de cuidados y desarrollar sistemas de cuidados que transformen las relaciones de género.

Garantizar la igualdad, la equidad en el reparto de tareas, la equidad en los servicios públicos para evitar brechas, la accesibilidad, la disponibilidad, la universalidad, la calidad, la solidaridad, la corresponsabilidad, la progresividad, la autonomía, la transparencia, la interculturalidad, la transversalidad de la perspectiva de género, la transversalidad del enfoque de derechos humanos y la coordinación y cooperación institucional.

Sometido a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 27 votos en contra, 3 abstenciones).

72. ICC N°474/613

Artículo X. El Estado reconoce la corresponsabilidad social de los cuidados, debiendo fomentar, garantizar y generar políticas públicas que permitan la conciliación laboral y familiar, resguardando el interés superior de las niñas y adolescentes, fomentando una sociedad

igualitaria que permita el desarrollo técnico y profesional de hombres, mujeres y otras identidades género. Las leyes regularán la obligación de quienes emplean de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para las niñas y adolescentes que estén al cuidado de quienes trabajan sin discriminación de género.

El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo, los derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad y maternidad. Las mujeres y personas con capacidad de gestar no podrán ser



discriminadas o despedidas durante el embarazo, gozarán de una protección especial y de licencia con remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social.

Sometido a votación se **rechazó** (14 votos a favor, 17 votos en contra, 2 abstenciones).

73. ICC N°719

Norma X: Red nacional de labores Sociales Domésticas. El trabajo doméstico es un bien social colectivo y necesario, por lo tanto debe ser considerado como una responsabilidad social pública del Estado a través de una Red nacional de labores Sociales Domésticas.

La Red Nacional de Labores Sociales Domésticas, garantizada por el estado, deber completar: Construcción de salas cunas y guarderías infantiles; lavanderías colectivas y construcción de comedores populares en todas las poblaciones, comunas y barrios; ampliación de funcionamiento y raciones de los comedores de los establecimientos educativos de cada comuna, asequible a todos los miembros de la sociedad; bajo la planificación de un menú centralizado, que contribuya al desarrollo saludable de la población. Ración obligatoria, comedor y casas de acogida transitoria para la mujer y sus hijos, que se desempeña en el trabajo agrícola temporal.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones).

74. ICC N°947

Artículo XX (...) El Estado reconoce y valora el trabajo doméstico, además del cuidado de personas no remunerado como actividades esenciales para el bienestar del individuo, la familia y la sociedad. Corresponderá al legislador promover la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el trabajo doméstico y de cuidado familiar. Una ley arbitrará los medios para la adecuada subsistencia de aquellas personas que efectúen dichas labores. Asimismo, el Estado deberá velar por la protección del derecho a la seguridad social a través de políticas públicas de protección social integral.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 votos en contra, 5 abstenciones).

(c.205) Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical (ICC N° 108, 110, 143, 146, 257, 302, 362, 382, 436,474/613-4, 495, 555, 568,569, 587, 630, 682, 747,1025)

75. ICC N°108-4

Artículo XX. Sobre el derecho a la sindicalización. Todos y todas quienes trabajan en el sector privado y público tienen derecho a organizarse sindicalmente.

Se garantiza la plena y efectiva libertad sindical en todos los asuntos relativos a sus intereses individuales y colectivos, dentro y fuera de la empresa, destinados a promover, ampliar y defender sus derechos; mejorar las condiciones de empleo y de trabajo; a participar en la reorganización o reestructuración empresarial, la introducción de nuevas tecnologías u otras decisiones de relevancia para las condiciones laborales; representar en la gestión de empresas, instituciones de seguridad social y otras instituciones que afecten las condiciones laborales; participar en la definición, ejecución, control y evaluación de políticas públicas y otros que definan libremente las personas trabajadoras.

Las organizaciones sindicales tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades y a formular su programa de acción. Los podrán fundar o afiliarse a federaciones, confederaciones y centrales, así como fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas.

Se garantiza la constitución de sindicatos sin autorización previa; las autoridades públicas empresariales deberán abstenerse de toda intervención que limite este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

La constitución de los sindicatos se realizará ante cualquier ministro de fe y su reconocimiento jurídico se producirá con el simple depósito del acta notarial de constitución en la Inspección del Trabajo sólo para fines de información.

Los representantes sindicales podrán ejercer todos sus derechos civiles y políticos como tales, tendrán fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de sus labores y los trabajadores gozarán de protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. La ley establecerá un proceso preferente y sumario para atender denuncias contra dichos actos. El Estado promoverá la organización sindical, adoptará las medidas para garantizar el libre derecho de sindicalización y perseguirá las prácticas anti sindicales.

Artículo 2. Sobre el derecho de los sindicatos a negociar colectivamente. Las organizaciones sindicales tendrán el derecho a negociar colectivamente en el sector público, privado y en todo tipo de empresas. El ejercicio de la negociación colectiva legalmente vinculante le corresponde



únicamente al sindicato u organizaciones de grado superior. En el ejercicio de este derecho, pueden negociar acuerdos sobre condiciones de trabajo, de empleo y regular sus relaciones recíprocas ante cualquier tipo de empresa y a cualquier nivel, sea la empresa inter empresa, ramal, inter ramal, regional o nacional. Los convenidos se aplicarán a todas las personas que trabajan y a quienes ingresen posteriormente, aunque no pertenezcan al sindicato contratante. Los convenios o contratos colectivos en el ámbito acordado serán legalmente vinculantes. El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva y sus resultados.

Artículo 3. Sobre prácticas antisindicales y discriminatorias. Toda acción y/o prácticas antisindicales o discriminación por motivos sindicales es una violación a los derechos humanos fundamentales de los trabajadores del sector privado. Dichas prácticas conllevan sanciones administrativas y penales; sus efectos serán nulos y las autoridades administrativas y judiciales las considerará como causal de nulidad.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa N°108 en esta materia.

76. ICC N°110.

Artículo XX. Sobre el derecho a la huelga.

Se garantiza a todos y todas quienes trabajan y sus organizaciones sindicales el derecho a huelga en todos los asuntos relativos a sus intereses a nivel de empresa o generales.

Corresponde a las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales decidir sobre la oportunidad de su ejercicio. El derecho a huelga no tendrá limitación alguna, salvo en casos excepcionales y sólo en los servicios esenciales en el estricto sentido del término, los que serán fijados por ley.

Se prohíben los reemplazos de las personas en huelga por personal contratado, subcontratado, cedido temporalmente, reasignado desde la misma empresa, o bajo cualquier otra figura, la externalización de actividades y la conformación de equipos mínimos de emergencia en porcentajes sobre dimensionados o cualquier otra acción u omisión destinada a menoscabar el derecho efectivo de huelga, las cuales deberán ser sancionadas por la autoridad.

En el caso de las funciones tercerizadas, declarada la huelga por los trabajadores contratistas o subcontratistas que ejercen tal labor, quedará absolutamente prohibido a la empresa mandante ejercer tal función directamente o a través de otra empresa tercerizada.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa N°110 en esta materia.

77. ICC N°143-4

La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, independientemente si están o no sindicalizados, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Con todo, la negociación colectiva no afectará el derecho de cada trabajador para acordar individualmente sus condiciones de trabajo, en razón de su idoneidad y/o capacidad personal.

La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos, cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.

Todos los trabajadores tendrán derecho a la huelga pacífica como parte de la negociación colectiva, en conformidad a lo señalado en la ley. No podrán declararse en huelga ni tampoco paralizar sus funciones los funcionarios y demás trabajadores del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a esta prohibición.

Todos los trabajadores tendrán el derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones para el cumplimiento de sus fines con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece; así como la transparencia en su financiamiento y administración y una efectiva democracia interna. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas.”

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 26 votos en contra, 0 abstenciones).



78. ICC N°146-4

Artículo XX: Libertad de sindicalización:

Trabajadoras y trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente en los casos y forma que señale la ley. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y regulará las características propias de su ejercicio para los funcionarios públicos.

Se garantiza el derecho a fundar organizaciones sindicales en todos sus niveles y afiliarse o desafiliarse a ellas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución en la forma y condiciones que determine la ley.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 votos en contra, 2 abstenciones).

79. ICC N°257-4

Articulado XX. Libertad sindical y derecho a huelga solidaria. Toda persona sin distinción de estatuto alguno, tienen derecho a sindicarse libremente. La libertad sindical comprende el derecho de trabajadores y funcionarios a fundar organizaciones sindicales nacionales e internacionales, a afiliarse a la de su elección; participar de los cargos de elección popular; ejercer el derecho a la huelga, con carácter solidario, para la defensa fraterna y unificada de sus intereses y la negociación colectiva en todos sus niveles.

Toda la legislación respetara en su esencia este derecho fundamental.

Artículo XX. Negociación colectiva sectorial. La negociación colectiva podrá desarrollarse a todo nivel, con base en la negociación sectorial o por rama de la economía, tripartita, con participación directa del Estado, los trabajadores y los empresarios. Son materia de negociación colectiva toda defensa de los intereses de los trabajadores.

Podrán negociar sectorialmente las Confederaciones, y las Centrales de trabajadores en caso de tener representatividad relevante, o a petición de las Confederaciones. La Negociación Sectorial, entre otros, podrá definir las condiciones remuneracionales comunes para esa rama de la economía, la participación en las utilidades o en su defecto las gratificaciones legales según sea el caso, definición de los cargos que ocuparan las empresas del sector, y otros beneficios que deban ser acordados necesariamente con el Estado, como exenciones o aportes específicos, que no pueden o no deben venir desde el empresariado.

Los instrumentos colectivos sectoriales se entenderán ley en el rubro y tendrán una duración máxima de dos años, y se extenderán obligatoriamente a todos los trabajadores del sector o rama de la economía que negocia, que se encuentren trabajando o que sean contratados con fecha posterior a la firma del convenio.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 26 votos en contra, 0 abstenciones).

80. ICC N°302-4

5. El derecho a sindicarse libremente, tanto de los trabajadores del sector privado como de los trabajadores o funcionarios del sector público. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de las organizaciones sindicales y su propio financiamiento. Asimismo, la ley observará el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales suscritos y que se encuentren vigentes.

Las organizaciones sindicales no podrán tener fines de lucro.

6.- “Se reconoce la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras para constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con derecho a negociar y celebrar instrumentos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.”¹ (Agregar en la fundamentación que no se limitara la negociación por empresa o negociaciones ramales para dar al legislador la facultad de regular y permitir dicha negociación tomando en consideración los distintos tipos de diversidad laboral sin restringir ni imponer la libertad sindical.)

7.- Se reconoce y garantiza el Derecho a Huelga, siendo competencia de las organizaciones sindicales definir el ámbito y los intereses que se propongan defender mediante su ejercicio, no pudiendo el legislador restringir su ámbito de aplicación ni su contenido esencial.

La legislación podrá establecer restricciones a la Huelga en aquellos casos en que, por sus características, afecte la vida, salud o seguridad de la población. El legislador no podrá imponer restricciones que impidan su ejercicio o afecten su contenido esencial.



Queda prohibida la huelga en el poder judicial, fuerzas armadas, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y los agentes de los cuerpos de seguridad estatal.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 1 abstenciones).

81. ICC N°362-2

ARTÍCULO X: LIBERTAD SINDICAL. *Se reconoce la libertad sindical de las y los trabajadores, públicos y privados, para constituir las organizaciones sindicales que estimen*

convenientes las cuales tendrán derecho a negociar y celebrar contratos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses.

Las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar de manera vinculante en la vida pública y política del país, para la defensa de sus intereses económicos y/o sociales, en virtud de su centralidad en la democracia plurinacional.

Se reconocerá, a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, todos los derechos que la hacen posible, tales como la libertad de expresión, derecho a la información y consulta, participación institucional y otros que se desprenden del ejercicio mismo de la libertad sindical.

Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores tendrán derecho a participar sin limitaciones en las instancias de índole económica, social, ambiental y política, de carácter municipal, regional, nacional o en cualquier otro que la Constitución y las leyes establezcan.

Las y los dirigentes sindicales podrán ser elegibles para cargos de representación popular.

ARTÍCULO X: DERECHO A LA SINDICACIÓN. *Las y los trabajadores gozan de la libertad de constitución en el nivel que determinen (de empresa, supraempresa, por rama de producción, territorial, etc), de personalidad jurídica, de reglamentación, de representación y de actuación sindical en el ámbito que determine la organización.*

Las y los trabajadores podrán afiliarse voluntariamente a la organización sindical de cualquier nivel que elijan, ya sea por su actividad, su empleo o sus intereses.

Las organizaciones de trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de parte del Estado o empleadores.

La organización de trabajadoras/es gozará de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley.

Los representantes elegidos de los trabajadores gozan del derecho a la información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra cualquier forma de condicionamiento, coacción, persecución o limitación del ejercicio legítimo de sus funciones.

Es función de las organizaciones sindicales defender y promover los derechos e intereses económicos y sociales de las y los trabajadores y de sus familias, en los niveles que defina la propia organización.

ARTÍCULO X: DERECHO A NEGOCIACIÓN COLECTIVA. *La titularidad sindical para negociar colectivamente corresponde a las organizaciones sindicales, y es su función ejercer el derecho de negociar y contratar colectivamente al nivel que estimen conveniente, pudiendo ser territorial, nacional, ramal, por grupo económico o de empresa según la representación que tengan en esos niveles, siendo competencia de las partes la definición de los mecanismos escalonados o graduados de extensión, y el ámbito de aplicación.*

De cualquier manera, la negociación colectiva en un nivel de menor representación no podrá disminuir los beneficios obtenidos en un nivel superior.

Estará prohibido pactar mediante acuerdos individuales condiciones inferiores a las establecidas en instrumentos colectivos.

Las organizaciones sindicales tendrán siempre el derecho a suscribir un instrumento colectivo con idénticas estipulaciones a su instrumento vigente.

Será deber del Estado promover y fomentar que la negociación colectiva se desarrolle en todos sus niveles y garantizar su exigibilidad.

ARTÍCULO X: DERECHO A HUELGA. *Se garantiza el derecho a la huelga, en toda clase de conflictos jurídicos e intereses sociales o económicos. Se reconocen todos los tipos de acción colectiva ejercidas por las y los trabajadores, incluidas la huelga por solidaridad.*

Es competencia de las y los trabajadores definir el ámbito de los intereses que se propongan defender mediante la huelga, no pudiendo la ley limitar ese ámbito.

La legislación podrá establecer un mecanismo, para que en las empresas o instituciones que presten servicios esenciales en un sentido estricto, esto es, aquellas que afecten la vida, la salud



o seguridad de la población, se establezcan servicios mínimos indispensables y estrictamente necesarios para evitar una amenaza de dichos derechos.

Es competencia de tribunales especializados la calificación de dichos servicios mínimos.

ARTÍCULO X: DERECHO A NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO. *Las y los trabajadores del sector público tendrán derecho pleno a la libertad sindical conforme a lo señalado en esta Constitución.*

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa N°362 en esta materia.

82. ICC 382-4

Artículo XX. *Se reconoce a los y las trabajadoras del sector público y privado la libertad sindical, condición y garantía de la construcción de su unidad para la defensa de sus derechos e intereses.*

Artículo XX. *Sindicalización. Las y los trabajadores gozan de la libertad de constituir organizaciones sindicales en todos los niveles que determinen, sin autorización previa y con plena autonomía para definir su forma organizativa.*

Las y los trabajadores tienen la libertad de afiliarse voluntariamente a la organización sindical que elijan, ya sea por su actividad, su empleo o sus intereses.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica, de reglamentación, de representación y de actuación sindical en el ámbito que determine la organización y a procedimientos de constitución sencillos y expeditos de los sindicatos.

Las organizaciones sindicales deberán regirse por el principio de gestión democrática y paritaria, basado en la elección periódica y por votación secreta de sus órganos dirigentes, sin sujeción a ninguna autorización, y asentados en la participación activa de las y los trabajadores en todos los aspectos de la actividad sindical.

Las organizaciones sindicales son independientes de las y los empleadores, del Estado, de las asociaciones religiosas, de los partidos y demás organizaciones políticas, y la ley deberá establecer las garantías adecuadas de esta independencia, que constituye el fundamento de la unidad de las clases trabajadoras.

Los y las representantes sindicales gozan del derecho a la información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra cualquier forma de condicionamiento, amenaza o coacción, persecución o limitación del ejercicio legítimo de sus funciones.

Ningún sindicato podrá ser disuelto por vía administrativa.

Artículo XX. *Negociación colectiva. La titularidad para negociar colectivamente y celebrar contratos colectivos corresponde a las organizaciones sindicales, en el nivel que estimen conveniente, ya sea a nivel de empresa, supra empresa o ramal, y según la representación que tengan en ese nivel, siendo competencia de las partes la definición de los mecanismos escalonados graduados de extensión, y el ámbito de aplicación. Será deber del Estado promover y fomentar que la negociación colectiva se desarrolle en todos sus niveles y garantizar su exigibilidad. El Estado deberá implementar mecanismos tripartitos entre organizaciones sindicales, Estado y empleadores, para el desarrollo de este tipo de negociación.*

El instrumento colectivo más general es base del más particular. Estará prohibido pactar mediante acuerdos individuales condiciones inferiores a las establecidas en instrumentos colectivos. Las organizaciones sindicales tendrán siempre el derecho a suscribir un instrumento colectivo con idénticas estipulaciones a su instrumento vigente.

Artículo XX. *Derecho a huelga. Se garantiza a los y las trabajadoras el derecho a huelga. Compete a los y las trabajadoras definir el ámbito de los intereses que se propongan defender mediante la huelga, ámbito que no podrá ser limitado por ley.*

El ejercicio del derecho a huelga no está subordinado al proceso de negociación colectiva. En los lugares de trabajo donde existan organizaciones sindicales, éstas tendrán la titularidad del ejercicio del derecho a huelga; en los lugares de trabajo donde no las haya, una asamblea de trabajadores y trabajadoras podrá decidir ejercer colectivamente este derecho. La ley establecerá un sistema de protección mediante fuero para quienes ejerzan este derecho.

La ley definirá las condiciones de prestación de los servicios indispensables y estrictamente necesarios durante la huelga, cuando ésta afecte comprobadamente la vida, la salud o la seguridad de la población. Se prohíbe el cierre patronal durante la huelga.

Artículo XX. *Queda prohibida la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad.*

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa N°382 en esta materia.



83. ICC 436-4

Libertad Sindical

Artículo 7.- El Estado reconoce expresamente la libertad sindical de todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado para constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con derecho a negociar y celebrar contratos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.

Las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar de manera vinculante en la vida pública y política del país, para la defensa de los intereses económicos y/sociales de sus representados.

El Estado reconoce a las organizaciones sindicales, el ejercicio de los derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, derecho de información y consulta, participación institucional y los demás que emanen del ejercicio mismo del derecho fundamental de libertad sindical.

Las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar sin restricción alguna en la vida social de nuestra república, incluso los dirigentes sindicales podrán ser elegidos para cargos de representación popular.

Los sindicatos o los y las trabajadoras que se consideren lesionadas (os) en su derecho a la libertad sindical podrán reclamar debidamente representados por una Defensoría Laboral Pública y Autónoma, su tutela ante los tribunales competentes, en un proceso tutelar preferente. La tutela de la actividad sindical implica el pleno respeto al ejercicio del principio de la libertad sindical.

El ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical comprenderá:

1.- Libertad de constitución en cualquier nivel (de empresa o supraempresa), de personalidad jurídica, de reglamentación, de representación y de actuación sindical en la empresa.

2.- Los representantes elegidos de los trabajadores gozan del derecho a la información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra cualesquiera formas de condicionamiento, coacción, persecución o limitación del ejercicio legítimo de sus funciones.

3 - Es competencia de las asociaciones sindicales defender y promover la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores a los que representen.

4. - Es competencia de las asociaciones sindicales ejercer el derecho de contratación y negociación colectiva al nivel que estimen conveniente: nacional, ramal o de empresa. La ley podrá establecer un sistema ramal de negociación colectiva o mecanismos de extensión o ambos.

5. - Se garantiza expresamente el derecho a la acción colectiva y a la huelga, tanto en los conflictos jurídicos como de intereses o económicos.

6. - Es competencia de los trabajadores definir el ámbito de los intereses que se propongan defender mediante la huelga, no pudiendo la ley limitar ese ámbito.

7. - La legislación podrá establecer servicios mínimos en aquellas huelgas que afecten la vida, salud o seguridad de la población.

8. - La legislación deberá establecer un sistema de negociación colectiva en el sector público, comprendiendo, además el derecho a la acción colectiva y a la huelga.

Sometida en votación se **rechazó** (4 votos a favor, 28 votos en contra, 0 abstención)

84. ICC N°474/613-4

Artículo X. El Estado promoverá que las directivas de los sindicatos y asociaciones de trabajadores estén compuestas por al menos un cincuenta por ciento de mujeres, incluyendo mecanismos de inclusión de las diversidades y disidencias sexogenéricas.

Sometida en votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra, 2 abstenciones).

85. ICC N°495-4

Artículo XX2. Negociación colectiva y derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras del Estado

La negociación entre el Estado y las organizaciones de trabajadores del Estado acerca de las condiciones de trabajo y empleo y la regulación de las relaciones entre el Estado y sus trabajadores/as u organizaciones de trabajadores/as es un derecho reconocido y garantizado, y es deber del Estado y sus autoridades el otorgar a los y las representantes de las organizaciones las condiciones adecuadas para el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas.



La ley regulará el procedimiento que regirá la negociación entre las organizaciones de trabajadores del Estado y las autoridades. La ley además establecerá un procedimiento, en el que se asegure la participación incidente de las organizaciones de trabajadores del Estado, señalando los límites a este derecho, siempre asociados al carácter de servicios mínimos esenciales definidos como aquellos cuya interrupción en un momento determinado pueda tener consecuencias para la vida, la seguridad o la salud de las personas.

La Constitución reconoce y garantiza el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores del Estado, y es causa justificada de inasistencia para todos y todas las funcionarías públicas que legítimamente concurren a ella, y por lo tanto no les ocasionará consecuencias jurídicas adversas. Sin perjuicio de ello, debe entenderse que las excepciones a este derecho de carácter general deben ser de interpretación restrictiva y dirán relación con los servicios mínimos esenciales y con quienes ejerzan funciones directivas de alto nivel o cargos superiores de mando, que tengan facultades de representación y por tanto el carácter de contraparte de las/os funcionarios en huelga.

El ejercicio de la huelga por parte de los trabajadores y trabajadoras del Estado no será constitutivo de falta de servicio por parte del Estado.

Se solicitó votación separada del penúltimo y último inciso.

Sometida en votación el penúltimo inciso se **rechazó** (7 votos a favor, 24 votos en contra, 0 abstenciones).

Sometida en votación el último inciso se **rechazó** (6 votos a favor, 24 votos en contra, 2 abstenciones).

Sometida en votación el resto de los incisos se **rechazó** (7 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstención).

86. ICC N°555-4

N° XX [Derechos Colectivos de los trabajadores].

El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Es deber del Estado promover instancias de mediación y diálogo social entre las organizaciones sindicales y las de los empleadores.

El derecho de los trabajadores organizados, primeramente, en sindicatos u otras reguladas por ley, a negociar colectivamente con la empresa en que laboren, salvo los casos en que la ley expresamente prohíba negociar.

Es deber del Estado promover una solución justa y pacífica de los conflictos colectivos del trabajo.

El derecho a la huelga en la negociación colectiva según lo determine la ley. Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores organizados en sindicatos con sus empresas. La ley que regule el ejercicio de este derecho fijará las condiciones que permitan asegurar los servicios esenciales para la comunidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad no tendrán derecho a huelga. Una ley podrá extender esta prohibición a ciertos órganos de la administración pública del Estado.

Sometida en votación se **rechazó** (4 votos a favor, 24 votos en contra, 4 abstenciones).

87. ICC N°568-4

Artículo x: El Estado reconoce a la organización sindical como libre y autónoma en su organización y funcionamiento. Se reconoce la libertad sindical y los sindicatos como organizaciones para la representación, defensa y promoción de los derechos económicos y sociales de las personas trabajadoras y trabajadores del sector público y municipal.

Artículo xx: El Estado reconoce el derecho de todas y todos los trabajadores a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización, para promover y proteger sus intereses económicos, sociales, culturales, de género, y otros que estime convenientes.

Artículo xxx: El Estado reconoce el Derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y a fundar organizaciones internacionales o a afiliarse a las mismas.

Artículo xxxx: La afiliación a los sindicatos del sector público y municipal, será automática, pero la desafiliación, en cualquier nivel, será voluntaria.



Artículo xxxxx: El derecho de acción sindical dentro y fuera del Servicio Público o Municipal, en todo caso comprenderá el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga.

Artículo xxxxxx: Los sindicatos del del sector público y municipal que se consideren lesionados en su derecho a la libertad sindical o de derecho de acción sindical podrán reclamar su tutela ante los tribunales competentes por un proceso preferente y sumario.

Artículo x: El Estado reconoce, garantiza y promociona el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos de trabajadoras y trabajadores del sector público y municipal, y las y los Jefes de Servicio o sus asociaciones.

Artículo xx: La expresión negociación colectiva debe comprender todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, y una organización o varias organizaciones de trabajadoras y trabajadores, que tenga por fin de: a) fijar condiciones de trabajo y empleo; b) regular las relaciones entre empleadores y las y los trabajadores; c) regular las relaciones entre empleadores o de sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadoras y trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.

Artículo xxx: Los convenios colectivos tendrán fuerza de ley dentro del ámbito funcional, personal y territorial que las partes definan.

Artículo xxxx: El Estado, incluidas las municipalidades, tendrán la obligación de estimular y fomentar la negociación colectiva en todos sus niveles y garantizar sus resultados frente al incumplimiento de lo acordado en los convenios colectivos.

Artículo xxxxx: La titularidad de la negociación colectiva la detenta la organización sindical.

Artículo x: La constitución reconoce el derecho a huelga, de información, de extensión de la huelga y de otras medidas de acción colectiva de los trabajadores y trabajadoras del sector público y municipal, en cuanto tales para la defensa de todos los intereses políticos, económicos y sociales que les son propios.

Artículo xx: El ejercicio del derecho a huelga no puede dar lugar a sanción alguna ni ser motivo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo. Mientras dure la huelga el empleador no podrá reemplazar a los huelguistas por otros trabajadores o trabajadoras contratados o cedidos temporalmente para anular u obstaculizar los efectos de la huelga, ni externalizar la actividad del servicio público o municipalidad, con la misma finalidad impeditiva del ejercicio de este derecho fundamental.

Artículo xxx: Cuando la huelga se declare en actividades esenciales de interés vital de reconocida e inaplazable necesidad, el ejercicio del derecho puede ser limitado estableciendo las prestaciones mínimas indispensables a mantener durante la huelga. Una autoridad independiente será la encargada de establecerlos debiendo tener como únicos criterios para restringirla aquellas que amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.

Artículo xxxx: Si el motivo de la huelga tuvo por finalidad restituir el cumplimiento obligaciones por falta grave y deliberada del empleador, no se descontará salario, remuneración o estipendio alguno por el tiempo en que la paralización haya durado.

Se solicitó votación separada del primer artículo xxxx.

Sometida en votación el primer artículo xxxx se **rechazó** (3 votos a favor, 28 votos en contra, 2 abstenciones).

Sometida en votación el resto de la iniciativa se **rechazó** (6 votos a favor, 25 votos en contra, 2 abstenciones).

88. ICC N°569-4

2.- Precepto constitucional sobre el derecho de sindicalización, libertad y autonomía sindical.

Se reconoce la libertad sindical de las y los trabajadores, públicos y privados, para constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, sean estas nacionales e internacionales, las cuales tendrán derecho a negociar y celebrar contratos colectivos.

La organización de trabajadoras/es gozará de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley.

Las organizaciones sindicales, en cumplimiento de sus fines, tendrán derecho a participar en la vida pública y política del país, en las instancias que correspondan sea a nivel local, regional, nacional e internacional. Las y los dirigentes sindicales podrán optar libremente a cargos de elección popular, siendo sólo incompatible el ejercicio de ambos al mismo tiempo.



El derecho a constituir organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, a afiliarse y desafinarse de ellas, a darse su propia normativa y realizar su actividad sin intervención de terceros.

El Estado deberá permitir que los sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales sindicales funcionen libremente, absteniéndose de toda intervención que limite este derecho y garantizándoles su autonomía.

Las y los dirigentes sindicales elegidos por los trabajadores gozan del derecho a la Información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra cualesquiera forma de vulneración de la libertad y autonomía sindicales.

Las organizaciones sindicales no podrá ser disuelta por decisión administrativa.

3. - Precepto constitucional sobre el derecho de negociación colectiva:

La titularidad sindical para efecto de la negociación colectiva corresponde a las organizaciones sindicales, la que podrá ser por empresa, interempresas, grupos económicos, por ramas de actividad económica, por territorios o nivel nacional e internacional, si así procediese.

El Estado deberá promover y garantizar la negociación colectiva en todo nivel, sea por empresa, interempresas, grupos económicos, por ramas de actividad económica, por territorios o nivel nacional e internacional, si fuese del caso, creando las condiciones necesarias para su desarrollo y efectividad.

Las organizaciones sindicales tendrán el derecho preferente y excluyente de negociar colectivamente.

4.- Precepto constitucional sobre el derecho de huelga:

Las y los trabajadores del sector público como privado en el ejercicio de la libertad sindical tendrán pleno derecho a ejercer las acciones colectivas que legítimamente les correspondan, incluida la huelga, siendo de sus exclusivas competencia la definición del ámbito de los intereses que se propongan defender mediante la huelga u otra acción colectiva.

La ley podrá autorizar, respecto de empresas o instituciones que presten servicios esenciales en el ámbito de la vida, la salud o seguridad de la población, que se establezcan servicios mínimos indispensables y estrictamente necesarios para evitar una afectación a esos derechos.

Se prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga o de la empresa de trabajadores en huelga. La ley no podrá establecer limitaciones o restricciones a la huelga.

Será competencia de tribunales especializados la calificación de dichos servicios mínimos.

*Sometida en votación se **rechazó** (13 votos a favor, 19 votos en contra, 1 abstención).*

89. ICC N°587-4

Artículo X. Derecho a la Libertad Sindical.

Se reconoce la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras, del sector público y privado, para constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, con derecho a negociar y celebrar instrumentos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la Huelga.

Los trabajadores y trabajadoras deben gozar de la adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo. Especialmente contra aquellos actos que tengan por objeto sujetar el empleo de un trabajador o trabajadora a la condición de que no se afilie a un sindicato, o; a la de dejar de ser miembro de uno, y, de despedir a un trabajador o trabajadora o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales dentro o fuera de la empresa.

Los sindicatos o el o la trabajadora que se consideren lesionado en su derecho a la libertad sindical o de derecho de acción sindical podrán reclamar su tutela ante los tribunales competente por un proceso preferente y sumario. La tutela de la actividad sindical implica la conservación de la estabilidad en el empleo de los trabajadores y trabajadoras ante la conducta antisindical del empleador, asociación empresarial o la administración pública, o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.

Se reconoce como valiosa la participación de los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, en la gestión de las empresas. El legislador deberá determinar en qué empresas y bajo qué condiciones podrán participar los trabajadores y trabajadoras como parte del órgano directivo correspondiente.

Artículo X. Derecho a la Sindicalización.



Se reconoce el rol preferente de los sindicatos en la comunidad y su condición de único representante de los trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores que corresponda.

Los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la protección y promoción de sus intereses, pudiendo afiliarse y desafiliarse de estas con la sola condición de observar sus estatutos.

Las organizaciones sindicales tienen el derecho de constituir, a su vez, organizaciones sindicales de grado superior u organizaciones internacionales, en los niveles que autónomamente decidan, pudiendo afiliarse y desafiliarse de estas con la sola condición de observar sus estatutos.

Las organizaciones sindicales del sector público y privado, sin distinción alguna y en todos sus niveles, tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos, de elegir libremente sus representantes, de formular su programa de acción, organizar su administración y actividades de manera autónoma. El Estado debe promover este derecho y abstenerse de toda intervención que lo limite, garantizando su autonomía.

Las organizaciones sindicales del sector público y privado, en todos sus niveles, y sus representantes tienen derecho a las facilidades y garantías para el ejercicio oportuno y eficaz de sus funciones reconocidas en sus estatutos y la ley para el cumplimiento de sus fines. La ley regulará el derecho de información, consulta y participación de manera amplia y vinculante.

Las y los representantes de las organizaciones sindicales del sector público y privado, sin distinción alguna, tienen derecho a la protección judicial y administrativa contra cualquier acto de condicionamiento, coacción, persecución, injerencia, entorpecimiento o afectación a sus funciones reconocidas en la ley y sus estatutos.

Artículo X. Derecho a la Negociación colectiva.

La Negociación Colectiva es el derecho de las organizaciones sindicales del sector público y privado, en cualquiera de sus niveles, para acordar y regular con un empleador o varias organizaciones de empleadores o con el Estado, materia de interés común mediante instrumentos colectivos, debiendo respetar los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras. El Estado deberá promover y adoptar todas las medidas adecuadas para fomentar el desarrollo pleno y eficaz de este derecho.

Es competencia de las organizaciones sindicales ejercer el derecho a negociación colectiva en el nivel que estimen conveniente, siendo estos compatibles y no excluyentes. En el caso de coincidencia en las materias objeto de negociación, ha de primar aquella disposición que sea más favorable para los trabajadores y trabajadoras.

La ley asegurará la negociación colectiva ramal en el sector público y privado y establecerá sus mecanismos de extensión.

Artículo X. Derecho de Huelga.

Se reconoce y garantiza el derecho a la huelga de las y los trabajadores, del sector público y privado, sin distinción alguna, siendo competencia de las organizaciones sindicales definir el ámbito y los intereses que se propongan defender mediante su ejercicio. El legislador no podrá restringir su ámbito ni su contenido esencial.

La ley establecerá las limitaciones a la Huelga únicamente en aquellos casos en que, por sus características, afecte la vida, la salud o seguridad de la población. El legislador no podrá prohibir la huelga ni imponer restricciones que impidan su ejercicio o afecten su contenido esencial.

El ejercicio del derecho a huelga no puede dar lugar a sanción alguna ni ser motivo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo.

Queda prohibida la Huelga en las fuerzas armadas, de orden y seguridad pública.

*Sometida en votación se **rechazó** (6 votos a favor, 27 votos en contra, 0 abstenciones).*

90. ICC N°630-4

Artículo XX. Del Derecho a formar sindicatos, a la negociación colectiva y a la huelga.

El Estado reconoce el derecho a la libertad sindical, respecto a la cual toda persona tiene derecho a formar sindicatos y a sindicarse para la defensa, asistencia y representación de los intereses de trabajadoras y trabajadores, así como al reconocimiento efectivo del derecho a negociar y celebrar contratos colectivos en el nivel que las partes establezcan y el derecho a adoptar acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga. Para el ejercicio de estos derechos, todo sindicato u organización de trabajadores podrá federarse y confederarse, sin más limitación que aquellas que sus miembros les impongan.



El derecho a la negociación colectiva se ejercerá por una o varias organizaciones sindicales asociadas, federadas o confederadas, ante un empleador o un grupo de empleadores, estén organizados o no, y, será potestad de las organizaciones sindicales ejercer el derecho a negociación colectiva en el nivel que mejor determinen para sus intereses, sea nacional, por rama o por empresa, para fijar remuneraciones, participación, condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores o sus organizaciones y en general las materias que sean de interés entre ambos. La ley no podrá limitar el nivel de la negociación ni las materias de la misma. La ley establecerá las condiciones y procedimientos para la extensión de los convenios colectivos.

La ley regulará el ejercicio del derecho a huelga y a la acción colectiva, los que no pueden estar limitados sino respecto de la atención de las necesidades o servicios esenciales de la comunidad. La ley fijará las condiciones de los servicios esenciales mínimos durante el ejercicio de la huelga. Las excepciones a este derecho serán siempre de interpretación restrictiva y sólo se relacionarán con la protección de la vida, la salud o seguridad de la población.

No podrán negociar colectivamente ni ejercer el derecho a huelga las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, ni quienes ejerzan funciones directivas, de administración, o que tengan facultades de representación del empleador.

La convencional Miranda **retiró** la iniciativa N°630 en esta materia.

91. ICC N°682-4

Artículo X: Derecho a la libertad sindical.

La Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.

Los sindicatos serán titulares exclusivos del derecho a la negociación colectiva y huelga, en tanto únicos representantes de trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores que corresponda.

El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, afiliarse y desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, trazar sus propios fines y realizar su actividad sin intervención de terceros.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley.

La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras.

Se establecerán por ley las modalidades y procedimientos en que las personas trabajadoras ejercerán el derecho a negociar colectivamente.

La Constitución asegura el derecho a huelga. Compete a los trabajadores y las trabajadoras decidir el ámbito de intereses que se propongan defender, aspectos que no podrán ser limitados por la ley.

El legislador no podrá prohibir la huelga. La ley sólo podrá establecer limitaciones a la huelga para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población.

No podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

Sometida en votación se **aprobó** (19 votos a favor, 13 votos en contra, 1 abstención).

92. ICC N°747-4

Artículo 4: Sobre el derecho colectivo al trabajo. La Constitución reconoce la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras para constituir las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con derecho a negociar y celebrar contratos colectivos, y con derecho a adoptar, en caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.

Este derecho comprenderá:

1. Libertad de constitución en cualquier nivel (de empresa o supraempresa), de obtención de su personalidad jurídica, de determinar su reglamentación, la representación y de actuación sindical en la empresa;



2. Los representantes elegidos por trabajadores y trabajadoras gozan del derecho a la información y consulta, así como a la protección legal adecuada contra cualesquiera formas de condicionamiento, coacción, persecución o limitación del ejercicio legítimo de sus funciones. La ley determinará su fuero.

3. La Constitución garantiza el derecho a la acción colectiva y a la huelga, tanto en los conflictos jurídicos como de intereses o económicos.

4. La negociación colectiva y la huelga serán ejercidas exclusivamente por organizaciones sindicales.

5. La ley establecerá servicios mínimos restrictivamente, en aquellas huelgas cuyos efectos puedan afectar la vida, salud o seguridad de la población. La pérdida de utilidades no será causal suficiente para dicha determinación.

6. La ley establecerá un sistema de negociación colectiva en el sector público, comprendiendo, además, el derecho a la acción colectiva y a la huelga a los funcionarios del Estado.

Será competencia de los trabajadores y trabajadoras definir el ámbito de los intereses que se proponga defender mediante huelga, no pudiendo la ley limitarlo.

Será competencia de las organizaciones sindicales la promoción y defensa de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras que representan, y ejercer el derecho de contratación colectiva a nivel que estimen conveniente, sea nacional, intersectorial, ramal, o de empresa. La ley podrá establecer un sistema de negociación colectiva o mecanismos de extensión, o ambos.

Las normas de este artículo no podrán interpretarse o aplicarse de forma que disminuyan los derechos laborales reconocidos en las declaraciones y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile.

Sometida en votación se **rechazó** (6 votos a favor, 25 votos en contra, 2 abstenciones).

93. ICC N°1025

ARTÍCULO XX DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN

Todo trabajador o trabajadora puede fundar sindicatos, unirse a sindicatos y desafiliarse de los mismos. Por cada empleador o empleadores asociados, solo podrá existir una organización sindical de trabajadores y/ o trabajadoras, que representará a todos los trabajadores y trabajadoras que laboren en la o las empresas del empleador o de los empleadores asociados.

ARTÍCULO XX DERECHO A NEGOCIAR COLECTIVAMENTE

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a presentar mediante la o las organizaciones sindicales peticiones colectivas de índole laboral al o a los empleadores en forma individual o conjunta en los plazos que estimen convenientes, siendo vinculante para estos últimos. El Estado debe promover y garantizar la negociación colectiva entre las organizaciones sindicales y los empleadores en todos sus ámbitos, actividades e instancias, sin mayor injerencia.

ARTÍCULO XX DERECHO A LA HUELGA

Todos los trabajadores y trabajadoras en forma colectiva, pueden ejercer el derecho a huelga en el ámbito, actividad o instancia laboral en que se desempeñen.

Sometida en votación se **rechazó** (6 votos a favor, 25 votos en contra, 2 abstenciones).

(c.206) Seguridad social y sistema de pensiones (IIC N°215, 244; IPC N°02-4, 17-4).

94. ICI N° 215

18. El derecho a la seguridad social. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio de este derecho. El Estado garantiza el acceso a prestaciones mínimas establecidas por ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. El Estado deberá respetar el derecho de las personas a elegir la institución que entregue estas prestaciones y no podrá establecer discriminaciones arbitrarias en razón de ello.

El sistema de previsión deberá, a lo menos, resguardar a las personas contra las contingencias de vejez, invalidez o muerte, enfermedad y embarazo, seguridad y salud en el trabajo y el desempleo.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de este derecho y a la forma en que ellas se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador, con arreglo a la presente Constitución. Sólo la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

La legislación sobre la seguridad social o que incida en ella, tanto del sector público como del sector privado, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.



Las leyes que regulen el sistema de seguridad social y el ejercicio de este derecho deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.”

Sometida en votación se **rechazó** (12 votos a favor, 21 votos en contra, 1 abstención).

95. ICI N°244

Artículo 24

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Sometida en votación se **rechazó** (5 votos a favor, 27 votos en contra, 1 abstención).

96. IPC N°02

Artículo XX.

“El Estado deberá tutelar preferentemente el derecho a la seguridad social.

La ley creará un sistema de seguridad social que asegure el acceso de todos los chilenos en edad de retiro a una pensión básica universal, cuyo financiamiento provendrá de la recaudación tributaria general.

Dicho sistema incluirá pensiones adicionales financiadas con ahorros individuales provenientes de cotizaciones previsionales obligatorias razonables, las que permanecerán en todo momento en la propiedad de la respectiva persona cotizante, tanto en capital como en rentabilidad. Las cotizaciones serán acreditadas en cuentas individuales de capitalización, y sus fondos y saldos tendrán el carácter de heredables, inalienables, imprescriptibles, inembargables, inexpropiables, y no podrán ser objeto de nacionalización o estatización bajo ninguna circunstancia. La ley no podrá destinar parte alguna de estos fondos a financiar pensiones de terceros distintos del cotizante.

Las personas tendrán siempre el derecho a elegir libremente la entidad administradora o gestora de sus fondos previsionales acumulados, sea ella privada, estatal o mixta. En ningún caso la ley podrá establecer el monopolio estatal de la administración o gestión de las cotizaciones previsionales ni de dichos fondos.

La ley velará para evitar pensiones diferentes entre hombres y mujeres cuyos fondos previsionales ahorrados sean idénticos en su monto, respetando las modalidades elegidas por cada cual”.

“Artículo Transitorio: Las cuentas de capitalización individual existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución, abiertas en conformidad al Decreto Ley N°3.500, de 1981, permanecerán íntegramente vigentes hasta la utilización total de los fondos por el respectivo titular, cotizante, pensionado o heredero. En ningún caso la ley podrá expropiar, nacionalizar ni reducir los fondos de estas cuentas o afectarlas a un destino o titular distinto de la pensión del cotizante o de sus herederos”.

Sometida en votación se **rechazó** (8 votos a favor, 18 votos en contra, 7 abstenciones).

97. IPC N°17

Artículo XX:

El Derecho a la Seguridad Social

“El Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento.

La definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias.

La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores.

La seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas.”

Artículo Transitorio



Dentro del plazo de un año, una vez aprobada la nueva Constitución Política, deberá adecuarse la actual legislación sobre seguridad social a las normas que establece el Artículo XX de la Constitución.

Expirado dicho plazo, asumirá de pleno derecho la recaudación, pago y gestión de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones, el Instituto de Previsión Social, que se regirá hasta tanto se dicten las leyes que desarrollen la garantía constitucional del Artículo XX.

Las administradoras de fondos de pensiones deberán hacer traspaso de los fondos o documentos que los respalden y los registros individuales de cada afiliado activo o pensionado al referido Instituto dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta norma constitucional. Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones supervigilar al Instituto de Previsión Social en todo este proceso.

Se solicitó votar en forma separada el artículo transitorio.

El convencional Harboe manifestó que debía ser votado el articulado en primer lugar, y posteriormente el artículo transitorio, ya que el artículo transitorio poseía una vinculación en su contenido con el resto del articulado.

Sometida en votación el resto del articulado se **aprobó** (20 votos a favor, 12 votos en contra, 1 abstención).

Sometida en votación el artículo transitorio se **rechazó** (4 votos a favor, 28 votos en contra, 1 abstención).

98. IPC N°63

"El derecho a un sistema de seguridad social basado en cuentas individuales que reciba aportes personales e institucionales.

La administración de la seguridad social podrá realizarse a través de instituciones públicas o privadas, conforme lo establezca la Ley.

Los cotizantes se les reconocerá el derecho de propiedad de sus respectivas cuentas de capitalización individual con derecho al autoprestamo de parte o la totalidad de los fondos acumulados, ó al retiro de la totalidad de los fondos acumulados en sus respectivas cuentas individuales"

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 21 en contra, 4 abstenciones).

99. ICC N°28

ARTICULO XX: "El Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento.

La definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias.

La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores.

La seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas.

ARTÍCULO TRANSITORIO: Dentro del plazo de un año, una vez aprobada la nueva Constitución Política, deberá adecuarse la actual legislación sobre seguridad social a las normas que establece el Artículo XX de la Constitución.

Expirado dicho plazo, asumirá de pleno derecho la recaudación, pago y gestión de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones el Instituto de Previsión Social, que regirá hasta tanto se dicten las leyes que desarrollen la garantía constitucional del Artículo XX.

Las administradoras de fondos de pensiones deberán hacer traspaso de los fondos o documentos que los respalden y los registros individuales de cada afiliado activo o pensionado al referido Instituto dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta norma constitucional. Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones supervigilar al Instituto de Previsión Social en todo este proceso.

La convencional Delgado **retiró** la iniciativa.



100. ICC N°135

Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

número XX: El derecho a la seguridad social. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio de este derecho.

El Estado garantiza el acceso a prestaciones mínimas establecidas por ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. El Estado deberá respetar el derecho de las personas a elegir la institución que entregue estas prestaciones y no podrá establecer discriminaciones arbitrarias en razón de ello.

El sistema de previsión deberá, a lo menos, resguardar a las personas contra las contingencias de vejez, invalidez o muerte, enfermedad y embarazo, seguridad y salud en el trabajo y el desempleo. La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de este derecho y a la forma en que ellas se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador, con arreglo a la presente Constitución. Sólo la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.

La legislación sobre la seguridad social o que incida en ella, tanto del sector público como del sector privado, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Las leyes que regulen el sistema de seguridad social y el ejercicio de este derecho deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 24 en contra, 2 abstenciones).

101. ICC N°331

“La Constitución asegura a todas las personas:

N°XX. El derecho a la seguridad social.

El Estado deberá formular una política de seguridad social, fiscalizar el funcionamiento del sistema, y garantizar el acceso universal a prestaciones básicas que satisfagan de modo uniforme, solidario y suficiente los estados de necesidad, en los términos que establezca la ley.

Las prestaciones del sistema podrán ser otorgadas por entidades públicas o privadas, bajo las normas y fiscalización del Estado.

La afiliación y cotización al sistema será obligatoria para todos los trabajadores sean dependientes o independientes. Cuando fuere el caso, las personas tendrán el derecho a elegir el sistema al que deseen acogerse, así como la entidad que brinde prestaciones de seguridad social.

No se podrá aplicar como sanción la pérdida de derechos previsionales. Las cotizaciones y los fondos previsionales acumulados en cuentas individuales constituyen propiedad de sus titulares.

El Estado asegurará el acceso a una pensión básica a todas las personas, en la forma que lo determine la ley.

Las materias relativas a la seguridad social serán de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.”

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra, 1 abstención).

102. ICC N° 357

Artículo XXX: Del derecho al mínimo vital y al ingreso básico universal.

El Estado reconoce el derecho humano al mínimo vital.

El Estado debe proporcionar a cada habitante de la República una transferencia monetaria, periódica, individual, incondicional e inembargable.

Para asegurar este mínimo se deberá destinar una cantidad suficiente de recursos dentro de la Ley de Presupuestos para la preservación de los servicios y prestaciones sociales.

La ley que regule la organización e implementación del ingreso básico garantizará que, en el caso de las personas en contextos de dependencia, la administración de su ingreso esté a cargo, total o parcialmente, de sus cuidadoras o cuidadores.

Artículo XXX transitorio:

El gobierno remitirá un proyecto de ley para la implementación del derecho al mínimo vital y al ingreso básico universal dentro de los primeros dos años contados desde la entrada en vigor de la presente constitución.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 26 en contra, 1 abstención).



103. ICC N° 358

Artículo XX: El Estado reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la Seguridad Social, constituida como servicio público que otorga prestaciones contributivas y no contributivas, que aseguran cobertura decorosa y digna ante las contingencias sociales, que, entre las prestaciones que regule la ley, debe incluir las de asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, cesantía, vejez, invalidez, sobrevivencia, maternidad, apoyos y cuidados familiares, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Al Estado, como responsable del servicio público, corresponde proveer de un piso de protección social suficiente a toda la población.

El legislador definirá y regulará las cotizaciones tanto de empleadores como trabajadores, los aportes del Estado, la gestión y la participación social, velando por el desarrollo de la seguridad social conforme sus principios, en particular, la universalidad y la solidaridad, cuidando la sostenibilidad de los distintos regímenes que la integran.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 22 en contra, 5 abstenciones)

104. ICC N° 362

ARTÍCULO X: DERECHO A SEGURIDAD SOCIAL. El Estado reconoce y promueve las siguientes garantías mínimas de seguridad social: prevención, asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, de desempleo, de vejez, en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes, prestaciones para eventos de pandemia o afectaciones derivadas de catástrofes naturales y del cambio climático, todo en conformidad con los principios de protección de esta Constitución, de los Tratados Internacionales y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

El Estado creará un Sistema Nacional de Previsión y Seguridad Social regido por los principios de universalidad, comprensividad, suficiencia de las prestaciones, sostenibilidad financiera, solidaridad y redistribución del ingreso, igualdad y uniformidad en el trato, unidad, responsabilidad estatal, eficiencia, y participación de los y las trabajadoras en su gestión.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

105. ICC N°372

Artículo XX: “La sociedad y el Estado reconocen a todas las personas el derecho a la Seguridad Social fundado en sus principios esenciales, tales como, el principio de universalidad objetiva y subjetiva, suficiencia o integridad, unidad, solidaridad, igualdad y participación.

Así el Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humana, para la protección integral de la colectividad y para propender a una equitativa redistribución de la renta nacional.

El sistema de Seguridad Social deberá garantizar, promover y resguardar el Desarrollo Humano e Integral de todas las personas, mediante medidas económicas y otras disposiciones que promuevan el buen vivir, especialmente protegiendo la vida familiar, el ocio, el reconocimiento de la tercera edad, las niñeces, la vida digna de las personas con discapacidad de origen físico o intelectual, la neurodiversidad, como también toda persona que por razones externas a su voluntad no pueda valerse por sí mismo, sea por desempleo temporal, maternidad o paternidad, vejez o incapacidad física o mental.

El sistema de Seguridad Social protege a las personas en la enfermedad, vejez, invalidez, viudedad y orfandad, así como en el desempleo y en las demás situaciones de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a que se prevean y garanticen los medios adecuados para sus necesidades vitales en caso de accidente, enfermedad, invalidez, ancianidad, paternidad o maternidad, desempleo involuntario. Asimismo, las personas con discapacidad tendrán derecho a la educación y a la formación profesional especializada para su desarrollo humano integral e inclusión en el mundo del trabajo y la economía nacional.

Corresponde al Estado organizar, coordinar, y colaborar en financiar un sistema de Seguridad Social unificado y descentralizado, con participación de organizaciones representativas de la sociedad civil y demás beneficiarios.

La maternidad y la paternidad, así como los cuidados, constituyen un trabajo adicional, reconocido y valorado por la sociedad; promovido y protegido por el Estado. Los trabajadores y trabajadoras que son o serán padre o madre gozarán de todos los seguros y bonos sociales legales de manera suficiente para su subsistencia digna.



Ninguna persona mayor ni persona con discapacidad deberán ser desentendidos por la sociedad y el Estado. Las personas mayores, las personas con discapacidad física e intelectual, los padres y madres, como todo aquél que requiera del sistema de previsión y seguridad social por situaciones de falta o disminución de medios de subsistencia o capacidad para sustentarse por sí mismo suficientemente ajenas a su voluntad resultan prioritarios y esenciales para el sistema de seguridad social.

La ley determinará las formas en que se financie y administre el sistema de Seguridad Social, asegurando su carácter unificado, descentralizado, solidario e integral, garantizando que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las personas cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la situación de invalidez, vejez, desempleo temporal, paternidad o maternidad y otras circunstancias ajenas a la voluntad del beneficiado no esté sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas.

Asimismo, la ley deberá cubrir, especialmente, los riesgos de pérdida, suspensión o disminución involuntaria de la capacidad de trabajo individual, muerte del sostén económico de la familia o de cesantía involuntaria, así como el derecho a la atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación en caso de accidente, enfermedad o maternidad o paternidad y el derecho a prestaciones familiares a los jefes de hogares”.

Artículo Transitorio XX:

“Dentro del plazo de dos años, una vez aprobada la nueva Constitución Política, deberá adecuarse la actual legislación sobre Seguridad Social a las normas que establece el Artículo XX de la Norma Fundamental.

Las administradoras de fondo de pensiones deberán hacer traspaso de los fondos o documentos que los respalden y los registros individuales de cada afiliado activo o pensionado al órgano determinado por la ley que administre conjuntamente a las organizaciones representativas de trabajadores y demás beneficiarios en el plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta norma constitucional.

Corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, junto a la Superintendencia de Pensiones supervigilar dicho órgano determinado por la ley en todo este proceso.

*Sometida a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones).*

106. ICC N° 381

Art. XX. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Es deber del Estado garantizar prestaciones e ingresos suficientes, ciertos y dignos en caso de pobreza, enfermedad, parto, maternidad y paternidad, invalidez, vejez, desempleo, sobrevivencia, accidentes de trabajo, orfandad, o de estar al cuidado de personas en situación de dependencia; así como de toda circunstancia que derive en un estado de necesidad, de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo.

Art. XX. El Sistema de Seguridad Social tendrá una perspectiva transversal de género, reconociendo la situación de desventaja estructural en que se encuentran especialmente las mujeres y diversidades y disidencias sexogenéricas, circunstancia que será considerada para efectos de determinar los montos de las prestaciones en un sentido compensatorio.

Art. XX. La ley creará un sistema público de Seguridad Social, fundado en los principios de universalidad, solidaridad, reparto, suficiencia de las prestaciones, redistribución del ingreso y unidad. Participarán de su financiamiento el Estado; los y las trabajadoras; y los y las empleadoras a través de cotizaciones obligatorias.

Su control compete al Estado a través de órganos públicos, autónomos y sin fines de lucro; su administración será democrática, paritaria y participarán de ella representantes del Estado, de los y las trabajadoras; de los y las pensionadas; y de los y las empleadoras.

Art. XX. Será parte del sistema público de Seguridad Social el Sistema Plurinacional de Cuidados, cuya finalidad es reorganizar los trabajos domésticos y de cuidados tendiendo a su sostenimiento colectivo, así como a la superación de la actual división social y sexual del trabajo. Se garantizará a los y las trabajadoras domésticas y de cuidados, con cargo al Estado, los derechos laborales que resulten pertinentes y aplicables en igualdad de condiciones, sin violencia ni discriminación, así como las prestaciones económicas, de salud y de descanso suficientes y dignas a quienes desempeñan estos trabajos.

Artículo XX. El Estado garantizará que las personas refugiadas, apátridas, solicitantes de asilo y otros grupos histórica, cultural y socialmente excluidos, disfruten del mismo trato para el acceso a las prestaciones de seguridad social, de conformidad con las normas internacionales.

*Sometida a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 19 en contra, 2 abstenciones).*



107. ICC N°436

Seguridad Social

Artículo 9.- El Estado debe consagrar un auténtico régimen público de Seguridad Social para todas las personas, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante estados o situaciones de necesidad. Con una real Seguridad y Salud Laboral que asegure prestaciones médicas y económicas suficientes y un Régimen Nacional Previsional y de seguridad Social administrado por el Estado, basado en los principios de solidaridad, universalidad, comprensividad, suficiencia de las prestaciones, sostenibilidad financiera y redistribución del ingreso, igualdad y uniformidad de trato, unidad, responsabilidad estatal, eficiencia, y participación de los y las trabajadoras en su gestión.

La convencional Labraña **retiró** la iniciativa.

108. ICC N°569

5.- Precepto constitucional sobre el derecho a la seguridad social.

El estado garantizará a las y los trabajadores el derecho a la seguridad social. Las personas tienen derecho a prestaciones universales de seguridad social que garanticen una vida digna.

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones).

109. ICC N°570

Artículo XX: Derecho a la seguridad social

El Estado reconoce, garantiza y respeta el derecho a la Seguridad Social fundamentado en los principios de universalidad, solidaridad, suficiencia, unidad, equidad de género, progresividad y participación de las personas beneficiarias, trabajadores y cotizantes. El derecho a la Seguridad Social se materializa mediante prestaciones definidas para la protección ante contingencias como la vejez, la maternidad, la enfermedad, los accidentes y enfermedades del trabajo, la dependencia, la situación de discapacidad, o la pérdida de empleo, las que son inembargables, imprescriptibles e irrenunciables y su acceso se encuentra garantizado para todas las personas y sus familias de conformidad a los principios de la Seguridad Social reconocidos en la Constitución y en los Pactos y Convenciones de Derechos Humanos reconocidos y ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Existirá un único sistema de Seguridad Social, de carácter público y obligatorio, el cual será administrado por un órgano estatal autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, financiado mediante cotizaciones obligatorias de las y los trabajadores, cotizaciones obligatorias de las y los empleadores y aportes del Estado. Las personas que sean beneficiarias de prestaciones de Seguridad Social estarán exentas de las cotizaciones que deban pagar las y los trabajadores.

La dirección superior del sistema público de Seguridad Social corresponderá a un Consejo de nombramiento democrático y en cuya conformación necesariamente deberá existir representación de personas trabajadoras y beneficiarias del sistema. Una ley orgánica determinará la composición de dicho Consejo, estableciendo los procedimientos para su nombramiento, las inhabilidades y las causales de remoción. El sistema público de Seguridad Social en su conjunto estará sometido a los mecanismos de control, de rendición de cuentas y de transparencia según lo establezca la constitución y las leyes.

Los fondos provenientes de las cotizaciones y aportes de Seguridad Social estarán exclusivamente destinados al cumplimiento de las prestaciones de Seguridad Social, y no podrán destinarse al financiamiento directo o indirecto del gasto público, a la generación y contratación de créditos o préstamos, el otorgamiento de garantías o la contratación de empréstitos con el Estado, sus organismos, empresas o sociedades donde éste tenga participación.

La convencional Miranda **retiró** la iniciativa.

110. ICC N° 589

Artículo x1. Derecho a la seguridad social. El derecho a la Seguridad Social es un derecho humano, fundamental y social, que tiene por fin la protección de la población, ante contingencias económicas y sociales durante todo el ciclo vital, para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad humana y al libre desarrollo de su personalidad.

Es un esfuerzo tripartito realizado por la sociedad en su propio beneficio. En este contribuye, el Estado, el empleador y el trabajador/a. Como tal derecho humano, tiene todos sus atributos, tales como ser inalienable, inextinguible, irrenunciable, universal, imprescriptible e indivisible.

Es deber ineludible y primordial del Estado, la promoción, respeto y permanente defensa del Derecho a la Seguridad Social para todos los y las habitantes del territorio chileno.



Esta Constitución garantiza su ejercicio, otorgando jerarquía supraconstitucional al Derecho Internacional de Derechos Humanos, estableciendo Control de Convencionalidad a las leyes, manteniendo Recursos administrativos y judiciales e institucionalidad de defensoría descentralizados a nivel de todo el país y estableciendo un Sistema de Seguridad Social que contemple mecanismos de participación social.

Artículo X2. Sistema de Seguridad Social. Se establece un Sistema de Seguridad Social, estatal, el cual debe cumplir con los siguientes principios: universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, suficiencia, evolución progresiva de derechos, concordancia de la Seguridad Social con la realidad económica, participación, obligatoriedad, integralidad, inmediatez y asignación preferente de recursos.

Este Sistema debe asegurar cobertura suficiente al menos en los siguientes ámbitos: Seguridad Social en Salud, Previsión Social, Seguridad y Salud Laboral y Servicios Sociales.

La ley determinará las prestaciones económicas y en especie o servicios que se otorgarán para la prevención y resolución de contingencias, como las derivadas de vejez, invalidez, desempleo, salud, muerte, sobrevivencia, situación familiar, habitacional y social, accidentes, necesidades de descanso, recreación y otras.

Las instituciones que establezca la ley para la regulación, provisión, ejecución, fiscalización y control del Sistema deben contemplar la participación directa de trabajadores y trabajadoras, tanto dependientes como independientes y de otros sectores de la comunidad.

Asimismo, el Sistema debe reconocer la plurinacionalidad y la relación de interculturalidad con sus derechohabientes.

Las instituciones que se pronuncien respecto a la cobertura de las prestaciones otorgadas por el derecho a la Seguridad Social, serán de derecho público, a través de un órgano colegiado, elegidos sus miembros por alta dirección pública, multidisciplinario jurídico – científico, técnico, imparcial, dotado de profesionales del campo del derecho, de la medicina, incluyendo en su conformación paridad de género e inclusión, órgano que resolverá las solicitudes de las personas con apego estricto a lo establecido en la constitución, las leyes y la normativa que rige la materia, a las que estarán sujetas cada una de sus decisiones, en calidad de funcionarios públicos.

En caso de que el Estado, deba delegar excepcional y parcialmente funciones que le competen en alguna de las ramas de la Seguridad Social, mantendrá la responsabilidad de exigir el debido cumplimiento de los principios, normas y los fines de la Seguridad Social a sus delegatarios, como también mantendrá el deber de rectoría, regulación, fiscalización, control y sanción sobre los privados que desempeñen roles públicos delegados. En ningún caso esos agentes privados tendrán fines de lucro en el tipo de actividades que les corresponda asumir en virtud de esa excepcional delegación de servicio público.

La rama de Previsión Social se concibe con un piso básico, no contributivo y universal de pensiones de vejez e invalidez, un segundo piso contributivo, de reparto y solidario para trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes y un tercer piso, sobre un monto de ingresos a determinar, voluntario, contributivo y de capitalización individual. Todo, regulado y administrado por una institución estatal.

La rama de Seguridad Social en Salud será cubierta por un Sistema Único de Salud, universal, público, integral, gratuito, plurinacional e intercultural, regido también por los principios de Seguridad Social antes señalados.

La Seguridad y Salud en el trabajo se centrará en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales y accidentes de trayecto, fomentando la seguridad en el trabajo y una vida sana como la vía correcta en la disminución de los siniestros, sin perjuicio de las prestaciones en servicio, en especie y económicas que deban otorgarse en el ámbito laboral dependiente e independiente, al acaecer una de las contingencias cubiertas.

Los Servicios Sociales tendrán consideraciones etarias y sociales, en equidad y en pro del bienestar personal, comunitario y social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Estas deben establecer condiciones y plazos máximos para la implementación del ejercicio del Derecho a la Seguridad Social en un Sistema acorde a tal derecho.

1. Normas que regulen el tránsito desde la actual institucionalidad hacia un Sistema de Derecho humano y social a cumplir por el Estado, Universal, Plurinacional e Integrado de Seguridad Social.

2. Normas que regulen el tránsito de un sistema de financiamiento por cotizaciones, de cargo principalmente de trabajadores/as, hacia un financiamiento mediante impuestos generales y específicos. Será condición para ello, el que exista un sistema tributario justo, donde los impuestos sean equitativos solidarios y progresivos.



3. Normas que regulen la transición gradual desde la existencia actual de instituciones con fines de lucro que intermedian deberes a cumplir por la Seguridad Social, hacia la prohibición de tener participación de instituciones privadas con fines de lucro dentro del ámbito de la Seguridad Social, considerando que el Estado es el responsable de otorgar y garantizar el Derecho humano, fundamental y social de la Seguridad Social.

“Artículo transitorio

Mientras exista algún Sistema previsional privado, las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, serán siempre heredables. La ley determinará la forma de heredabilidad”.

“Artículo transitorio....

Mientras existan funciones de Seguridad Social a cargo de organismos privados, la ley no podrá permitir la defensa o representación de sus intereses, por parte de órganos del Estado, en contra de los y las habitantes que, en el ejercicio de sus derechos, impugnen las resoluciones relativas a acceso y cobertura de sus prestaciones de seguridad social”.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 27 en contra y 2 abstenciones).

111. ICC N°655

4. “REDACCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL”,

Propuesta de cláusula constitucional:

“La Constitución garantiza a todas las personas: el derecho a la seguridad social. El Estado garantizará a todas las personas la cobertura de los riesgos sociales vejez, salud y cesantía conforme a los principios de solidaridad, universalidad, suficiencia, unidad, igualdad, obligatoriedad y participación.

La administración de la cobertura de dichos riesgos sociales recaerá exclusivamente en el Estado.”

Sometida a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención).

112. ICC N°667

Artículo X. Servicios públicos para la ejecución del Estado social.

Para cumplir las finalidades del Estado social, la ley regulará la creación y el funcionamiento de los sistemas y servicios públicos adecuados y necesarios para la implementación de las medidas y acciones tendientes a la satisfacción de las prestaciones garantizadas por esta Constitución.

Todos los sistemas y servicios que garanticen derechos sociales serán parte del Estado social, y deberán organizarse y coordinarse conforme a él, considerando la distribución de competencias del Estado regional.

Los servicios públicos sociales deberán llevar a cabo las acciones necesarias para la ejecución de prestaciones accesibles, con cobertura universal, con estándares de calidad verificables y controlables, con mecanismos de participación y rendición de cuentas y contando con financiamiento suficiente y sostenible en el tiempo, sin perjuicio de las normas especiales que esta Constitución establece.

Sometida a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención).

113. ICC N°674

Artículo X: Derecho a la seguridad social

La Constitución garantiza el derecho a la seguridad social, fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación y oportunidad.

La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, invalidez, viudez, orfandad, maternidad y paternidad; desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, la seguridad social asegurará la protección de las personas que ejercen labores domésticas y de cuidados no remunerados.

Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social y el control del sistema. Éste se financiará en forma conjunta por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación, en la forma que determine la ley. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema.



Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención).

114. ICC N°687

Artículo permanente.- Toda persona residente de forma permanente en Chile, tendrá derecho a percibir una renta básica en dinero, que garantice las necesidades elementales de existencia. Esta renta será de carácter mensual, incondicional, individual, inembargable e independiente de todo otro ingreso. La ley determinará su monto y dispondrá la forma para que su transferencia sea automática, sin mediar solicitud, ni justificación alguna. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de la renta básica.

Artículo transitorio.- La renta básica reemplazará todo subsidio con fines similares y se implementará de conformidad a la progresividad que establezca la ley. El Presidente de la República, durante el primer año de su mandato, deberá dar cuentas al Congreso Nacional de las medidas que adoptará para la progresión de la efectividad de este derecho”

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 27 en contra, 1 abstención).

115. ICC N°701

Artículo XXX: Será labor esencial del Estado establecer un sistema de Seguridad Social que contemple Pensiones de vejez e invalidez que garanticen a lo menos un valor equivalente al del sueldo mínimo establecido por la ley de

El sistema de Seguridad Social deberá responder a criterios de eficiencia, eficacia, publicidad de los actos administrativos, probidad y dignidad humana.

ARTÍCULO TRANSITORIO: Se derogará el cuerpo normativo del Decreto Ley 3500 y se implementará un nuevo sistema de Seguridad Social que contemple pensiones de vejez e invalidez, que tenga como pilares fundamentales los criterios de igualdad, dignidad y justicia social; se adoptarán medidas incorporando necesariamente los criterios establecidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile en esta materia Se evaluará mediante los mecanismos que la ley indique, quiénes y de qué forma serán beneficiarios de dicha pensión.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 27 en contra y ninguna abstención).

116. ICC N°795

Artículo xx

El Estado provisionará de forma exclusiva los servicios sociales para garantizar su acceso universal, con altos estándares en la calidad.

La convencional Ivanna Olivares retiró la iniciativa.

(c.207) Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales (IIC N°4, 8, 26, 43, 72, 85, 95, 102, 128, 205, 215, 221, 244, 251, 267; IPC N°01, 29, 30, 38, 39; ICC N°3, 6, 126, 307 379, 387, 396, 492, 590, 658, 668, 681, 735, 749, 872, 960, 968, 977, 986, 993 y 1030)

117. ICI N° 4-4

Los pueblos y naciones originarias tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, om como al uso y la protección de las aguas, plantas, animales, minerales de interés vital y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios.

Esto implica el reconocimiento y salvaguarda de los sistemas de salud de dichos pueblos, por parte del Estado, con el fin de asegurar su preservación, garantizar su desarrollo e integridad, conforme a su identidad territorial. Ello con el fin de mantener el equilibrio físico, mental, espiritual y social del ser humano, prolongar la vida y asegurar la trascendencia, todo lo cual forma parte de su patrimonio cultural.

Reconociendo que ningún sistema médico por si solo puede recuperar la salud, el Estado tendrá el deber de promover y garantizar el desarrollo de la salud intercultural y la complementariedad entre los sistemas médicos en las instituciones de salud del país, con enfoque de pertinencia cultural.

El Estado tomará las medidas para evitar el patentamiento de los conocimientos indígenas asociados a su sistema médico ancestral en todas sus formas, tangibles e intangibles, incluyendo técnicas y conocimientos de diagnóstico, prevención, rehabilitación, curación, así como las plantas o hierbas medicinales.

Sometida a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 20 en contra y 1 abstención).

118. ICI Nº 8-4

ARTÍCULO: Principio: “Los pueblos originarios tienen derecho al goce del más alto nivel posible de salud y bienestar en igualdad de condiciones y sin discriminación, considerando los diversos territorios y contextos en los que habita la población indígena. Principio entendido tanto en los marcos epistemológicos propios, considerando su filosofía y forma de vida, donde es central el cuidado de la persona, su entorno y biodiversidad (itrofilmongen), junto a sus prácticas medicinales, espiritualidad e interacción con el modelo de salud público universal”.

ARTÍCULO: Se reconoce y garantiza el ejercicio amplio de los sistemas de medicina tradicional de los pueblos originarios, en el contexto del reconocimiento que establece la OMS, Convenio 169 de la OIT y otros tratados o acuerdos internacionales ratificados por Chile. Considerando su protección, fomento y promoción.

ARTÍCULO: Se otorga el derecho al desarrollo de los modelos de salud indígena, sus concepciones de bienestar, salud-enfermedad, prácticas preventivas y de recuperación de la salud, así como las condiciones que lo garanticen. Solo los integrantes de los pueblos indígenas podrán ejercer las prácticas medicinales ancestrales, correspondientes a su pueblo.

ARTÍCULO: El estado asume la tarea de salvaguardar, proteger y/o recuperar ecosistemas significativos para la medicina indígena, en los distintos territorios donde se encuentra diversidad de especies (itrofilmogen) tales como; animales, herbolaria (priorizando la nativa), semillas, minerales y otros recursos medicinales.

ARTÍCULO: Se garantiza mejores condiciones en todos los planos (estatal, social y cultural), para el ejercicio en las mejores condiciones del rol de los especialistas tradicionales de salud machi, lawentuchefe, zugun machife, pñenelchefe, gütamchefe, en el pueblo mapuche.

ARTÍCULO: Se garantiza el ejercicio en las mejores condiciones para equipos de salud mapuche en contextos de interculturalidad. Se trata por ejemplo de asesores culturales, trabajadores indígenas, keyu machi y coordinadores de equipos de salud mapuche, entre otros, los que son reconocidos por sus territorios, comunidades y asociaciones indígenas. Incluyendo derechos laborales y seguridad social.

ARTÍCULO: Se garantiza la existencia, protección, fortalecimiento y financiamiento de espacios de salud comunitarios donde se desarrolla la medicina ancestral de los pueblos originarios, entre ellos los Centros de Salud Mapuche o lawentuwe Ruka.

Considerando la disponibilidad de espacio público para el funcionamiento de estas instancias de forma independiente a los establecimientos biomédicos, en entornos apropiados y con diseños arquitectónicos pertinentes.

ARTÍCULO: Se asegura un sistema de financiamiento para promover, implementar y desarrollar el derecho a la salud y bienestar de los pueblos indígenas, en sus distintas dimensiones.

ARTÍCULO: Se asegura el derecho a la salud ancestral con enfoque omúnna en el sistema público universal de salud, asegurando su accesibilidad y calidad en lugares apartados.

Sometida a votación el artículo octavo se **rechazó** (9 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

Sometida a votación el resto de la iniciativa, se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención).

119. ICI Nº 26-4

PROPUESTA: RECONOCIMIENTO DE SISTEMAS DE SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS SISTEMAS LOCALES DE SALUD AUTOGESTIONADOS.

Se reconoce y protege en su autonomía e integridad, los sistemas de salud tradicionales de los pueblos indígenas, incluyendo sus agentes de salud, procedimientos, sistema de atención, tecnologías, así como sus recursos herboláreos y materiales.

Asimismo, el Estado reconoce, protege y promueve los sistemas y modelos locales de salud autogestionados por organizaciones de pueblos indígenas, consistentes en centros de salud intercultural, hospitales o casas de salud, encargadas de la prevención, promoción, atención y rehabilitación de la salud de su población a cargo por medio de estrategias y modelos propios de los sistemas médicos indígena, biomédico oficial o de acuerdo a sus propias definiciones, de manera autónoma y en relación de cooperación con el sistema nacional de salud, quien salvaguarda su protección, promoción, autonomía e integridad.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).



120. IIC Nº 43-4

La salud es un derecho humano fundamental y social, que resulta del equilibrio y la reciprocidad de las personas y comunidades con su entorno ambiental y ecológico, como de las determinantes sociales, políticas, económicas, laborales, culturales, espirituales y educacionales.

El Estado reconoce y respeta los sistemas, prácticas y autoridades tradicionales que imparten salud como machi, lawentuchefe, pũñeñelchefe, ngütamchefe y otros agentes de salud de los pueblos y naciones originarias presentes en el país, y garantiza su ejercicio en el sistema público de salud, a través de la medicina preventiva, como complemento a los tratamientos indicados, tanto por los especialistas de medicina occidental como de los pueblos y naciones originarias, así como al tratamiento, promoción, protección y conservación de los tipos de alimentación, considerando también el rescate, valoración y uso de las semillas originarias y/o nativas, las hierbas y plantas medicinales, animales, minerales de interés vital y otros recursos naturales de uso medicinal, en sus tierras y territorios ancestrales, con el fin de permitir el más alto bienestar de salud física, mental, espiritual omunitaria, además de asegurar su preservación e integridad, conforme a su identidad territorial.

Es deber del Estado financiar, promover y fomentar los sistemas de salud propios de los pueblos y naciones originarias y su participación en el sistema público de salud, con determinación de las comunidades, proporcionando la infraestructura y medios adecuados y pertinentes para el efectivo ejercicio de estos derechos. Considerando que el Estado debe garantizar que cada centro de salud, cuente con la totalidad de sus funcionarios y directivos con conocimiento respaldado en cosmovisión y sistemas de salud propios de los pueblos y naciones originarias, según corresponda.

El Estado debe facultar a los agentes de salud de los pueblos y naciones originarias, para respaldar y justificar las ausencias laborales, en la recuperación/restauración de la salud, inherentes a las indicaciones y tratamientos que determinen los distintos agentes.

El Estado debe respetar, garantizar, proporcionar recursos y promover el derecho de los agentes encargados de impartir salud en cada pueblo y nación originaria, para trasladarse libremente por todo el territorio en busca de plantas u otros elementos de carácter medicinal, considerando que las fronteras de los pueblos originarios, son distintas a las impuestas por el Estado.

El Estado garantiza el acceso a un sistema único y público de salud, regido por los principios de universalidad, gratuidad, interculturalidad, complementariedad, solidaridad, participación, información y protección de derechos y del medio ambiente. Y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, se podrá escoger libremente la complementariedad en salud para acceder, sin discriminación, con pertenencia cultural y enfoque de género.

El Estado debe garantizar la conservación, protección y recuperación de los territorios en sus elementos naturales, ya que son fuentes de vida, de salud, y de buen vivir, por tanto, se debe trabajar complementariamente con las diferentes instituciones del estado o privadas, que tengan relación con el territorio, conforme a la utilización de elementos introducidos que dañen el medio ambiente, la salud y el entorno cultural.

El Estado debe tomar medidas para prevenir y/o prohibir que los pueblos y las personas indígenas sean objetos de programas de investigación, experimentación biológica o médica y en caso de su autorización, procurar que la información sea analizada en conjunto, para generar estrategias de prevención atinentes a las realidades de los territorios y comunidades correspondientes.

Frente a cualquier vulneración o amenaza a los derechos garantizados en estos artículos, cualquier individuo o colectivo podrá interponer un recurso de protección ante la corte de apelaciones respectiva, con el fin de que se restablezca su derecho amenazado o vulnerado.

Se creará una Dirección dependiente de la Superintendencia de Salud con participación representativa de los pueblos indígenas, con el fin de supervigilar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de los deberes estatales en relación a la salud intercultural.

Sometida a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención).

121. IIC Nº 72-4

Agréguese una letra al catálogo de derechos fundamentales de la nueva Constitución.

Artículo X: Derecho a la salud intercultural. Toda persona perteneciente a los Pueblos y Naciones Indígenas tiene derecho a la prevención, curación, promoción y rehabilitación según las costumbres y prácticas culturales propias. El Estado debe garantizar el acceso y atención sin discriminación arbitraria; velando por la incorporación de pertinencia cultural en los servicios de salud pública; fomentando el acceso de los miembros de pueblos indígenas a espacios territoriales de significación espiritual para fines medicinales y de sanación.



El Estado promueve y reconoce los sistemas de salud autogestionados por las organizaciones de pueblos indígenas como los centros de salud intercultural, hospitales y ruka o casas de salud, son encargadas de la prevención y atención de la salud de la población por medio de modelos propios de los sistemas indígenas, de manera autónoma y en cooperación con el sistemas de salud nacional.

Agréguese los siguientes artículos vinculados a “Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales”.

Artículo “X”: Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y promover sus sistemas de salud ancestral en el marco de su propia comprensión (Kimün ka Rakiduum) y configuración de mundo (Itrofil Mongen). Es deber del Estado fomentar, garantizar y respetar la salud propia ancestral sin intervención, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho.

Artículo “X”: El Estado en consulta y cooperación con los pueblos y naciones indígenas debe garantizar el manejo sostenible, conservación y fomento de los ecosistemas asociados a la proliferación de medicina ancestral y los lugares de sanación espiritual, además propender el libre tránsito de las medicinas de los pueblos indígenas en los diferentes territorios.

Artículo “X”: El Estado mediante sus instituciones administrativas, legislativas o de otra naturaleza, deben reconocer, validar y garantizar el desarrollo de prácticas, procesos y uso de elementos naturales propios de los pueblos indígenas para la sanación, fomentando la elaboración de medicamentos y productos para el cuidado del bienestar personal y su libre comercialización, fundamentadas en las prácticas ancestrales.

Sometida a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención).

122. IIC Nº 85-4

ARTICULADO: El Estado Plurinacional de Chile garantiza el derecho a una salud pública de acceso y cobertura universal y gratuito general, preventiva del surgimiento de enfermedades y oportunamente curativa. Descentralizada, democrática con participación vinculante de los pueblos y naciones existentes en el territorio. Pertinente culturalmente y decolonial, capaz de garantizar el bien estar personal, colectivo y del ecosistema, partícipe de la colaboración y solidaridad internacional.

Administración en Salud. Autonomía, Co-Gobiernos e Interculturalidad.

ARTICULADO: El estado debe reconocer, respetar, no transgredir y aportar según solicitud en las realidades locales y/o territoriales, en aquellos procesos y/o sistemas autónomos indígenas en salud, desarrollando una relación de colaboración, para garantizar el bien estar personal, colectivo, comunitario y del ecosistema.

ARTICULADO: El estado debe garantizar la materialización de la plurinacionalidad en las plataformas de poder y decisión, a través de un co-gobierno proporcionalmente representativo en las instituciones y centros de salud que se encuentren inmersos en territorios donde exista población indígena, en todos sus niveles de complejidad (primario, secundario y terciario, así como administrativos regionales, provinciales y comunales). Para esto el estado debe propiciar los recursos y medios necesarios para la formación, capacitación y especialización de los escaños. Los integrantes indígenas serán elegidos y avalados por comunidades, autoridades ancestrales y agrupaciones Mapuche.

ARTICULADO: El estado plurinacional reconoce que la salud de los pueblos indígenas está ligada directamente con los ecosistemas, y que esta vinculación cultural-espiritual equilibrada es el eje promotor de su salud. El estado debe garantizar la protección, el resguardo y recuperación de los ecosistemas y sus derivados los cuales no pueden ser alterados por particulares ni gobiernos.

ARTICULADO: El estado garantizará la descentralización e interculturalidad de salud a través de las postas rurales interculturales, para que sean el eje fundamental de un modelo de primarización de la salud con enfoque familiar-comunitario y de pertinencia cultural. Dotando de un Equipo Permanente Integral de Salud y los respectivos recursos materiales y tecnologías necesarias para un óptimo trabajo de promoción y prevención en salud que cuente con la rotación permanente de especialistas y una vinculación efectiva con CECOSF, CESFAM y Hospitales.

ARTICULADO: Las Postas Rurales Interculturales podrán desarrollar redes de vinculación con la salud Ancestral de los pueblos indígenas, brindando condiciones materiales y recursos para que las personas puedan recibir oportunamente la atención y/o derivación a sistemas o instituciones más autónomas de salud, donde el estado colaborará con lo que autoridades ancestrales y/o comunidades indígenas soliciten.

ARTICULADO: La pertinencia cultural e interculturalidad en salud debe ser garantizada en sus instituciones y procesos, para esto se desarrollará una malla curricular intercultural, con pertinencia cultural en salud, que integre enseñanza media (captación de futuros profesionales y



técnicos en salud), Universitaria, Técnica y de Postgrado (especialidad comunitaria indígena bilingüe) en cada una de las carreras que aportan al sistema de salud. También la creación de centros de formación y práctica, así como el perfeccionamiento de las instituciones y centros de salud como espacios práctico-docentes. Este proceso será implementado en estrecho vínculo con el Sistema educativo para concretizar la base educativa-científica-cultural de un nuevo modelo de salud pública plurinacional.

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención).

123. IIC N°95-4

SALUD INTERCULTURAL Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen derecho a la salud en su dimensión individual y colectiva. Los pueblos tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud preexistentes, así como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales, incluyendo la dimensión transfronteriza. Asimismo, en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, tienen el derecho de acceder a sistemas de salud sin discriminación, con pertinencia cultural, y desarrollando sus propias instituciones y prácticas de salud.

El Estado a través de todas sus instituciones públicas, debe garantizar el adecuado acceso al uso de la medicina ancestral de los pueblos, en conjunto con la medicina occidental, sin ningún tipo de discriminación ni cuestionamiento por parte de la institucionalidad pública, garantizando siempre el diálogo clínico respetuoso entre ambos sistemas, en beneficio de las personas y sus familias, ya sean pertenecientes a pueblos preexistentes o no.

El Estado debe reconocer la validez de ambos sistemas, respetando el sistema de validación comunitaria en conjunto con el método científico, sin ningún tipo de desmedro. Además, garantizará un financiamiento adecuado para la cobertura de atención de salud, en general y con especialidades, en todo el país

El Estado deberá adoptar medidas eficaces para garantizar plenamente el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de permitir el más alto goce de salud física, mental y comunitaria.

Será deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud de los pueblos indígenas, tanto en su dimensión individual como colectiva, el que será universal y gratuito. Las comunidades indígenas tendrán derecho a designar a facilitadores interculturales y referentes de medicina tradicional en los sistemas de salud pública.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

124. ICI N° 102-4

Se reconoce y protege en su autonomía e integridad, los sistemas de salud tradicionales de los pueblos indígenas, reconociendo la calidad de quienes realizan tratamientos y practica de salud, los procedimientos, sistema de atención, y los insumos en hierbas usados.

El Estado incluirá a través de una Ley la salud de los pueblos originarios en los centros de atención primaria y hospitales y los declarará como plurinacionales e interculturales.

Reconocerá los centros o casa de salud propias de los pueblos originarios y proveerá de recursos para su funcionamiento.

Sometida a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones).

125. ICI N° 128-4

ARTÍCULO X: El Estado reconoce y oficializa la existencia de la medicina ancestral indígena y/o tribal en el territorio chileno propiciando su aplicación en quienes lo necesiten otorgando los implementos necesarios para poder ejercer la medicina respondiendo a los conocimientos, normas, reglas y protocolos de cada nación originarios y/o tribal.

ARTÍCULO X: El Estado promueve e incorpora la medicina ancestral indígena y/o tribal en los principales servicios de salud del país acorde a la demanda de la población indígena y/o tribal de cada territorio habitado.

ARTÍCULO X: El Estado propicia, financia y otorga infraestructura que responda a la sabiduría de cada nación originaria y/o tribal de cada localidad correspondiente para la correcta ejecución de la atención de salud respondiendo a los protocolos, normas, reglas y conocimientos de cada territorio.

ARTÍCULO X: El Estado responde, atiende, consulta y recepciona demandas de la población perteneciente a una nación originaria y/o tribal para la efectiva construcción y creación de espacios de atención medicinal respetando la sabiduría, norma, reglas y protocolos de cada territorio.



ARTICULO X: *El estado capacita a personal de salud alópata en torno a la salud interculturalidad, sabiduría indígena y/o tribal, conocimientos ancestrales, prácticas culturales, diversos tipos de medicinas, diversidad de roles, entre otras cosas, acordes al territorio, para potenciar el trabajo en conjunto sin generar exclusión entre ambos.*

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

126. ICI N°205-4

SALUD *Los pueblos indígenas y naciones originarias, tienen derecho a la salud en su dimensión individual y colectiva.*

Los pueblos y naciones originarias tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, así como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales.

Asimismo, en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, tienen el derecho de acceder a sistemas de salud sin discriminación, con pertinencia cultural, y desarrollando sus propias instituciones y prácticas de salud. En los territorios indígenas, la administración de los sistemas de salud estatal será progresivamente traspasada a los pueblos y naciones originarias. Y se debe iniciar con la Coadministración.

Será deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud de los pueblos indígenas, tanto en su dimensión individual como colectiva.

Las personas que entreguen prestación de salud intercultural en los centros de Salud tienen Derecho a Remuneración.

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

127. IIC N° 215-4

23. El derecho al acceso a las prestaciones de salud.

Corresponderá al Estado la regulación de las acciones relacionadas con la salud. A través de la ley se podrán establecer la forma y condiciones en que éstas se realicen, debiéndose fomentar la competencia y transparencia en el sector, ya sean instituciones públicas o privadas. El Estado no podrá establecer en su trato respecto de ellas diferencias arbitrarias.

A través de la ley se podrán establecer cotizaciones obligatorias para el financiamiento de la salud de la población, pudiendo cada cotizante elegir libremente por el sistema de salud al cual adscribirse y destinar sus recursos, sea este estatal o privado. Es deber del Estado garantizar la libertad de elección, debiendo apoyar a todas las personas equitativamente, considerando su necesidad, en la forma establecida por la ley.

También se reconoce la libertad de las personas sobre los tratamientos médicos a los que se deba someter. Sólo la ley podrá establecer límites u obligaciones en estas materias, respetando siempre la dignidad de la persona humana.

La acción de los órganos estatales es complementaria a la responsabilidad personal y a la iniciativa privada, siendo deber del Estado fomentar la colaboración público-privada, con criterios de eficiencia en el uso de recursos, oportunidad de la prestación y resguardo de los recursos públicos.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud del derecho aquí consagrado y la forma en que se financiarán, corresponderá exclusivamente al Legislador.”

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 19 en contra y 5 abstenciones).

128. ICI N° 221-4

“Art. X. La constitución garantiza a todas las personas el derecho a la salud. Es deber del Estado asegurar la disponibilidad de salud indígena en todo el territorio a través de servicios de salud interculturales e inclusivos.”

Sometida a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones).

129. ICI N° 244-4

Artículo 25

1. *Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.*

Se deben considerar estos ejes para contar un mejoramiento efectivo y real



Equidad, a través de este concepto el Estado y el gobierno de turno, se solicita en todo orden de la salud sea de manera equitativa y en igualdad de condiciones para los pueblos indígenas y chileno.

Participación, es un tema importante para los pueblos indígenas, ya que permite visibilizar las demandas en la salud indígena a la Incidencia a contar con políticas públicas pertinente a la cultura y tradiciones de los pueblos originarios/indígenas.

Interculturalidad, este concepto permite que la diversidad cultural que existe en Chile, sea una convivencia entre pueblos como una riqueza cultural e inclusivo y las formas de salud también sean un complemento para mejorar la salud en Chile. El reconocimiento y la valoración del sistema de salud de los pueblos originarios/indígenas junto al respeto de sus espacios pertinentes

Medicina Indígena, esta forma de sanación en los pueblos indígenas, se encuentra en todo el Wall Mapu, en todo el espacio, territorio, tierra, agua, piedra, es decir en ITROFILMONGEN

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

El valor a la vida de todos los seres de la tierra, también nos da vida como un ser más

La protección integral de cada elemento de la ITROFILMONGEN, se habla de todo el entorno natural es desde el Territorio del Wall Mapu, eso es el sistema de sanación para los pueblos originarios/indígenas, la pertinencia de los espacios donde se practica la sanación corresponde el patrimonio cultural tanto material y espiritual.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

La salud desde la visión de los Pueblos Originarios/Indígenas se refiere al conjunto de elementos que compone el entorno social, cultural, ambiental y otros, y que el desequilibrio de estos elementos es causal de la afectación de la salud, por lo tanto, el Buen Vivir es un concepto dinámico y continuo que requiere ser resguardado en su contexto.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Que los Servicios de Salud tenga una relación de igualdad de condiciones con las Instituciones indígenas reconocidos y validado por los pueblos originarios/indígenas en situaciones de: Convenios PESPI y la administración de los recursos financieros.

*Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 21 en contra y 5 abstenciones).*

130. IIC Nº 251-4

1.- (Semma) DERECHOS A LA SALUD Y BUEN VIVIR

Como pueblo Originario tenemos nuestros propios modelos de salud ancestral para restablecer y devolver el equilibrio al derecho del buen vivir, por tal motivo la constitución a de velar por el reconocimiento de nuestros modelos de salud y a las personas que practican y consolidan insertando en el territorio ancestral la medicina natural e intercultural, la integridad física, psíquica, el derecho a vivir en un medio ambiente sin contaminación para ello el tratamiento que se le dará al cambio radical de los procedimientos mineros como metálicas y no metálicas.

El derecho a la alimentación sana y saludable, el derecho a la protección de la salud y nuestra extensa gama de remedios naturales en la cual desde tiempos precoloniales se usaban y se usan, derecho al reconocimiento de nuestra medicina ancestral, derecho a la protección y recuperación además de la rehabilitación de las personas que llegasen a los centros asistenciales como policlínicos, Clínicas y hospitales, el derecho a una atención rápida y no de largas esperas, el derecho a nutrientes naturales sin químicos y a nuestras semillas totalmente nuestras sin alteraciones.

Debemos tener cuidado especial en el tratamiento de las leyes que han sido obstáculos para que los elementos de medicina ancestral puedan usarse.

Derecho a una vida digna, como también el derecho a una muerte digna.

Derecho a los medicamentos en los programas de salud auge.

Derecho a buen tratamiento de las enfermedades.

*Sometida a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 19 en contra y ninguna abstención).*



131. ICI Nº 267-4

“El Estado reconoce el derecho a la Salud Intercultural de la Primeras Naciones.

Es deber del Estado garantizar la protección, acceso, conservación y reparación de los espacios naturales que constituyan la fuente de la medicina de las Primeras Naciones.”.

Sometida a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones).

132. IPC Nº 01-4

Cláusula que deberá vincularse con el derecho a la salud.

El Estado reconocerá a todas las personas el derecho universal a la salud sexual y reproductiva, a la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, sin coerción, discriminación ni violencia, a los servicios de atención de salud integrales; al derecho a la información y acceso a métodos anticonceptivos, libremente elegidos, eficaces, y de calidad; el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; al acceso a la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo; a la prevención, el diagnóstico, atención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual; asegurando que estos procesos sean realizados conforme a las cosmovisiones de las personas, sin discriminación y violencia.

“Norma Transitoria: En concordancia con lo anterior, se estipula lo siguiente:

- La interrupción del embarazo no será imputable penalmente, hasta que se realicen los cambios normativos correspondientes.

El que por causa de actos, acciones u omisiones sufra perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de estos derechos, podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva del domicilio de la persona afectada, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue convenientes y necesarias para restablecer el derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada.”

Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones).

133. IPC Nº 29-4

DEL DERECHO A LA SALUD El derecho a la salud es un derecho humano, fundamental y social, que tiene por fin el disfrute del más alto nivel de salud y bienestar de las personas y comunidades. La salud es una construcción social y resultado de las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, educacionales y de las interrelaciones de las personas, comunidades y pueblos, con su entorno ambiental y ecológico.

Es deber prioritario del Estado respetar, promover y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, resguardando las vidas. Por ello, debe considerarse la salud de la población en todas las políticas públicas destinadas a consagrar los demás derechos, debiendo el Estado establecer y mantener un modelo de desarrollo económico y social justo, equitativo, sostenible, sustentable, y en armonía con el ambiente, para posibilitar el buen vivir de las personas, las comunidades y los pueblos.

A tal efecto, el Estado deberá establecer un Sistema de Salud, en los términos que se dispone a continuación:

ARTÍCULO II DEL SISTEMA DE SALUD: El Estado garantizará mediante instituciones, normas jurídicas, políticas sociales y económicas, el buen vivir y a su vez la reducción de riesgos, de daños y de enfermedades para las personas, comunidades, pueblos y ecosistemas, así como el acceso universal e igualitario a las acciones y provisión de servicios de promoción, prevención, protección, cuidados, recuperación y rehabilitación de la salud. También debe garantizar su regulación y fiscalización. Para hacer efectivo este derecho, el Estado deberá establecer un Sistema Único de Salud, Universal, Plurinacional e Integrado. Este será Público, Garantista, Solidario, Intercultural, Descentralizado, Desconcentrado y Participativo, centrado en la estrategia de Atención Primaria de Salud, respetando y promoviendo los principios de la Seguridad Social de Universalidad, Solidaridad, Unidad, Igualdad, Evolución progresiva de derechos, Concordancia de la Seguridad Social con la realidad económica, Participación, Obligatoriedad, Integralidad, Inmediatez y Asignación preferente de recursos. Asimismo, dicho Sistema Único de Salud deberá ser gratuito, con una organización adecuada a la realidad y necesidades de cada territorio y su población y debidamente dotado de recursos, el que garantizará la calidad e integralidad de las funciones esenciales de salud pública, con un modelo de financiamiento sustentado en impuestos generales y específicos, dentro de un Sistema Tributario justo, basado en la solidaridad, equidad y progresividad. El Sistema Único de Salud debe respetar las diferentes concepciones y manifestaciones culturales, las diferentes cosmovisiones propias de un Estado Plurinacional, la diversidad de las personas y comunidades que lo integran, teniendo presente el enfoque de derechos humanos, género e inclusión social. La ley establecerá un consejo nacional de salud que tendrá como objetivo dirigir el sistema único de salud y evaluar el cumplimiento de



sus fines y definir las medidas necesarias para su correcto funcionamiento, sus funciones y facultades resolutorias, así como su composición, la que deberá contemplar a lo menos al ministro de salud y representantes de entidades públicas, de organizaciones de la sociedad civil, de los pueblos originarios y de entidades universitarias y científicas. Además, deberá contemplar consejos regionales y locales con similar composición. El Sistema Único de Salud, deberá promover un modelo de atención organizado en redes territoriales con pertinencia cultural, que cumpla con las siguientes características: a) Pertinencia regional, comunal y local.

b) Participación deliberativa- y además vinculante, en los casos que establezca la ley- de las personas y comunidades.

c) Atención integral, que considere acciones promocionales, preventivas, asistenciales, de cuidados, acompañamiento, rehabilitación y reinserción, entre otras.

En el Sistema Único de Salud podrán participar personas naturales y jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, cuyo giro único sea la provisión de servicios de salud. Serán reguladas por el Sistema, en su ejercicio clínico y financiero, bajo las mismas medidas que las instituciones públicas que lo integran, mediante contrato o convenio de derecho público y percibirán de él por sus servicios, montos iguales a los definidos para el Sistema Único de Salud.

Está prohibido el destino de recursos públicos para auxilio, pagos o subvenciones a las instituciones privadas con fines lucrativos.

El Estado deberá regular y fiscalizar, con facultades suficientes, la provisión de servicios de Salud por parte de privados que no integran el Sistema Único de Salud. Estas entidades y personas naturales no podrán recibir recursos públicos, económicos ni de otra índole, y serán reguladas por la Autoridad Sanitaria y otras instituciones públicas, para dar garantías de calidad pertinencia y aranceles justos que la ley determine. El Sistema Único de Salud debe procurar y fiscalizar el óptimo desarrollo integral de sus trabajadores y trabajadoras, sus justas y protegidas condiciones de trabajo y su relación armoniosa de respeto y cercanía con las personas y comunidades de cada territorio, para el logro del mejor estado de bienestar de los equipos de salud y de las comunidades en las cuales se desempeñan.

ARTÍCULO III

DE OTRAS FUNCIONES

Al Sistema Único de Salud, además de las funciones en el ámbito de cobertura sanitaria y pecuniaria, conforme dicte la ley, le corresponde las siguientes: I. Controlar y fiscalizar procedimientos, productos y sustancias de interés para la salud y participar en la producción de medicamentos, inmunobiológicos, hemoderivados, otros insumos, equipamientos y tecnologías para la salud;

II. Ejecutar las acciones de vigilancia sanitaria, epidemiológica, de salud laboral y ocupacional;

III. Participar en la formulación de la política y la ejecución de las acciones de control sanitario ambiental y territorial.

IV. Garantizar, en el área de salud, políticas de desarrollo científico y tecnológico;

V. Regular, fiscalizar, inspeccionar y efectuar el control sanitario del aire, de los alimentos, de los suelos y las aguas y de los residuos;

VI. Participar en el control y fiscalización de la producción, transporte, almacenamiento y uso de sustancias, productos y residuos especiales, psicoactivos, tóxicos, radiactivos y peligrosos para la salud de las personas y dañinos para el medio ambiente;

VII. Participar en la protección del medio ambiente;

VIII. Regular y fiscalizar condiciones sanitarias ambientales y condiciones laborales, según las normas nacionales e internacionales que rigen en el Estado de Chile.

IX. Instalar un sistema nacional de información clínico sanitario integrado, interoperable y con datos estructurados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: (Sólo Citas de materias.)

Estas deben establecer condiciones y plazos máximos para la implementación del ejercicio del derecho a la salud en un Sistema Único y Universal de Salud.

1. Normas que regulen el tránsito desde el actual diseño fragmentado del Sector Salud (Fonasa, Isapre, Capredena, Dipreca, Prestadores Privados y de las Mutualidades de Empleadores de Seguridad Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales) hacia un Sistema Único, Universal, Plurinacional e Integrado de Salud (SUS).

2. Normas que regulen el tránsito de un sistema de financiamiento por cotizaciones, de cargo de trabajadores/as, a un financiamiento mediante impuestos generales y específicos. Será condición



para ello, el que exista un sistema tributario justo, donde los impuestos sean equitativos solidarios y progresivos.

Sometida a votación se **rechazó** (14 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención).

134. IPC Nº 30-4

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

(Este párrafo se integraría al artículo actual garantizando el derecho a una salud mental digna y gratuita para todos los chilenos y chilenas históricamente.)

"Es deber del Estado garantizar la promoción, protección, prevención y atención de la salud mental de todas las personas durante todo su ciclo vital."

La ley protege la vida del que está por nacer.

La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.

El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella.

Sometido a votación separada el inciso tercero de la iniciativa se **rechazó** (2 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención).

Sometido a votación el resto del articulado se **rechazó** (8 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención).

135. IPC Nº 38-4

"La Salud es un derecho social, comunitario y humano inalienable, incluyendo su dimensión física, mental y espiritual.

Es responsabilidad del Estado garantizar efectivamente el acceso a un Sistema Único y Universal de Salud, de carácter solidario, equitativo, participativo, con enfoque de género, intercultural, descentralizado y articulado desde el territorio municipal. Que se base en la prevención y la promoción de la salud, el respeto a los derechos sexuales, reproductivos y de género; que otorgue trato digno para el buen vivir y la muerte humanizada; que sea parte de la relación con la naturaleza y la biodiversidad.

Los servicios de salud deben articularse en torno a la atención primaria de salud y organizarse mediante el fortalecimiento de la red integrada de servicios de salud públicos y otras redes territoriales de salud popular.

El sistema único, universal y público, debe estar suficientemente financiado con impuestos progresivos de modo que las prestaciones sean gratuitas al momento de su realización, que los actores que las presten sean sin fines de lucro, que asegure el acceso en un plazo razonable y otorgando prestaciones de calidad."

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención).

136. IPC Nº 39-4

El Estado de Chile reconoce el derecho de toda la población al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental, espiritual, sexual y reproductiva de acuerdo a su origen cultural, y en un medioambiente saludable. Esto con el fin de que todas y todos puedan gozar del bienestar necesario para ser igualmente libres.

Para tales efectos, es deber del Estado garantizar la ejecución de estrategias y acciones de salud pública, como son la prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación de la salud individual; protegiendo las condiciones sociales en que viven las personas y en que acceden a prestaciones asistenciales.

Corresponderá al Estado diseñar e implementar un sistema de salud capaz de garantizar las prestaciones sanitarias, atendiendo las necesidades de las personas independiente de su capacidad de pagar por ellas. Todo ello considerando los principios de equidad, universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, calidad, eficiencia y enfoque de género. Todo sistema de salud debe incluir instancias de integración y/o coordinación de toda la red sanitaria, la intersectorialidad y las comunidades.



El Estado procurará que el sistema de salud priorice sus esfuerzos sanitarios en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad con perspectiva intercultural y de género. Para esto se organizará a través de redes integradas, con una atención primaria que, además de ofrecer prestaciones asistenciales, oriente su gestión a la promoción de la salud y la participación comunitaria, con énfasis en los determinantes socioculturales y en los procesos protectores de la salud.

El sistema universal de salud será financiado a través de un fondo único que mancomune las cotizaciones de la población con impuestos generales. Estos se destinarán íntegramente a este sistema, avanzando hacia un modelo de financiamiento basado en impuestos generales de carácter progresivo y bajo los principios de la seguridad social.

Sometida a votación se **aprobó** (16 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones).

137. ICC N°3-5

Artículo XX.

Artículo X. En caso alguno se admitirá la construcción de infraestructuras o el ejercicio de actividades económicas que impliquen la utilización de minerales o elementos reconocidos mortales, como el asbesto, o como dañinos a la salud o perjudiciales cuando alcanzan umbrales considerados críticos. A su vez, el Estado velará por una permanente revisión de los límites permitidos, de acuerdo a estándares científicos, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ajustar la normativa a estándares científicos, debiendo adoptar todas las medidas necesarias para ajustar la normativa, y todos los actos administrativos que sean pertinentes para el desarrollo de construcciones y/p actividades económicas a niveles seguros.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 4 abstenciones).

138. ICC N°6-4

Artículo XX. "La Constitución asegura a todas las personas:

Nº A) El derecho a la reproducción humana asistida en la forma y condiciones que determine la ley. El Estado se obliga a asegurar el acceso progresivo a técnicas de reproducción asistida, para todas las personas con imposibilidad de concebir.

El legislador deberá establecer reglas especiales sobre la identidad de las niñas y los niños y su filiación, para los distintos casos de reproducción humana asistida, debiendo siempre velar por su interés superior".

Sometida a votación se **rechazó** (14 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones).

139. ICC N°126-4

Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

Número XX: El derecho al acceso a las prestaciones de salud.

Corresponderá al Estado la regulación de las acciones relacionadas con la salud. A través de la ley se podrán establecer la forma y condiciones en que éstas se realicen, debiéndose fomentar la competencia y transparencia en el sector, ya sean instituciones públicas o privadas. El Estado no podrá establecer en su trato respecto de ellas diferencias arbitrarias.

A través de la ley se podrán establecer cotizaciones obligatorias para el financiamiento de la salud de la población, pudiendo cada cotizante elegir libremente por el sistema de salud al cual adscribirse y destinar sus recursos, sea este estatal o privado. Es deber del Estado garantizar la libertad de elección, debiendo apoyar a todas las personas equitativamente, considerando su necesidad, en la forma establecida por la ley.

También se reconoce la libertad de las personas sobre los tratamientos médicos a los que se deba someter. Sólo la ley podrá establecer límites u obligaciones en estas materias, respetando siempre la dignidad de la persona humana.

La acción de los órganos estatales es complementaria a la responsabilidad personal y a la iniciativa privada, siendo deber del Estado fomentar la colaboración público-privada, con criterios de eficiencia en el uso de recursos, oportunidad de la prestación y resguardo de los recursos públicos.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud del derecho aquí consagrado y la forma en que se financiarán, corresponderá exclusivamente al Legislador."

Sometida a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención).

140. ICC N°307-4

Artículo XX. EL DERECHO A LA SALUD Toda persona tiene derecho a la protección de la salud mental y física. Es deber del Estado garantizar acciones de prevención, promoción, protección y



recuperación de la salud, y de rehabilitación del individuo, que contribuyan a la máxima satisfacción de este derecho, considerando las atenciones especiales necesarias para las personas que lo requieran.

El Estado deberá asegurar, en colaboración con la sociedad civil, que toda persona obtenga el acceso a prestaciones de salud conforme a los principios de equidad, atención oportuna, universalidad, solidaridad, eficacia y libre elección, en la forma establecida en esta Constitución y las leyes.

Los órganos de la administración del Estado fomentarán la educación sanitaria, el deporte, los hábitos de vida saludable y el descanso necesario.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

141. ICC Nº 379-4

Artículo XX: Toda persona tiene derecho a la salud. Se entenderá la salud desde un enfoque integral como un estado de completo bienestar biopsicosocial y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades.

Artículo XX: El Estado debe garantizar el derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles, esto abarca la ejecución de acciones y prestaciones de salud contemplando los siguientes elementos esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, no discriminación e igualdad de acceso a la atención de salud y a los servicios de salud, accesibilidad física y geográfica, accesibilidad económica, acceso a la información, aceptabilidad, pertinencia cultural, pertinencia etaria, y calidad.

Artículo XX: El derecho a la salud está garantizado a todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna, mediante un Sistema Nacional de Salud basado en la Atención Primaria y con financiamiento mediante impuestos generales. El Estado ejerce las funciones de rectoría del sistema, considerando acciones de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y muerte digna.

Artículo XX. Las instituciones privadas podrán participar en el sistema de salud, de conformidad con sus directivas y financiamiento propio. Los actores privados deben organizarse en base a los principios y pleno respeto a los derechos que rigen la presente Constitución; quienes además se encontrarán regulados, supervisados y fiscalizados por el Estado en la forma que la ley señale.

Artículo XX. Salud intercultural. Los pueblos originarios y diversas naciones que habitan nuestro territorio tienen derecho a la salud en los términos que reconoce la Constitución, considerando especialmente su cultura, prácticas, tradiciones y cosmovisión.

La convencional Meneses **retiró** la iniciativa.

142. ICC Nº 387-4

ARTÍCULO XX: DERECHO A LA SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL

Todas las personas, pueblos indígenas y naciones originarias, tienen derecho a la salud en su dimensión física y espiritual, individual, colectiva y con pertinencia cultural, incluido el derecho a acceder a los sistemas de salud, tratamientos y medicamentos.

Es deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud como un bien público, de las personas y los pueblos indígenas, considerando todas las determinantes sociales y con el fin de permitir el más alto goce de salud física, mental y comunitaria.

El Estado garantiza un Sistema Plurinacional e Intercultural de Salud, financiado de manera solidaria y de carácter universal y que se regirá por los principios de gratuidad, interculturalidad, solidaridad y justicia social e intergeneracional. Es deber del Estado permitir el uso de la infraestructura pública de salud por parte de las autoridades y agentes de salud de los pueblos y naciones indígenas. Una ley regulará su creación, financiamiento, organización y funciones.

Los pueblos y naciones originarias tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud, así como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales, incluidas las dinámicas medicinales transfronterizas. Asimismo, tienen el derecho de acceder a sistemas de salud sin discriminación, con pertinencia cultural, y desarrollando sus propias instituciones y prácticas de salud.

Es deber del Estado respetar a las autoridades y personas que imparten salud en los pueblos, garantizando que sus actos y decisiones no sean objeto de ningún tipo de discriminación y tengan los mismos efectos administrativos que los de los profesionales médicos del sistema estatal público.



Los sistemas de formación de médicos y profesionales de salud deben considerar una perspectiva intercultural en sus respectivas mallas curriculares.

En los territorios indígenas, la administración de los sistemas de salud estatal serán progresivamente traspasados a los pueblos y naciones originarias.

ARTÍCULO XX - DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Estado deberá impulsar un proceso de participación y consulta indígena previa, libre y vinculante, a fin de obtener el consentimiento de los pueblos y naciones preexistentes en cuanto al procedimiento mediante el cual se trasladarán la administración de los sistemas de salud estatal a los pueblos y naciones originarias.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

143. ICC N° 396-4

Artículo XX. Derecho a la Salud. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la salud integral, individual y colectiva.

El Estado garantiza este derecho y debe liderar y ejercer la gobernanza de un único Sistema Nacional de Salud, mediante un trabajo intersectorial para la regulación, diseño, ejecución, supervisión, vigilancia, fiscalización y evaluación de las políticas sanitarias. El Estado debe considerar en todas sus decisiones los determinantes sociales de la salud.

El Sistema Nacional de Salud será integrado y deberá asegurar el acceso y cobertura universal de salud. Este se rige por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, inclusión y no discriminación, integralidad, interculturalidad, enfoque de género, pertinencia territorial, eficacia, calidad y progresividad. El Estado promoverá la participación vinculante social y comunitaria en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo, incluyendo la educación en salud.

El Sistema Nacional de Salud se financiará a través de impuestos generales. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores. La administración de los fondos será de exclusiva responsabilidad de una entidad pública regida por los principios de la seguridad social, especialmente la solidaridad y justicia social. Podrán existir seguros privados voluntarios los que en ningún caso podrán duplicar el rol del Estado. Ninguna persona podrá incurrir en un gasto catastrófico en salud.

Las prestaciones de servicios sanitarios deben ser equitativas, efectivas, seguras y de calidad. Estas podrán ser efectuadas por instituciones u organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas. Su acción preferente será la promoción y prevención de la salud, además de las acciones de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, urgencia, inclusión, cuidados paliativos y de fin de vida. La atención primaria constituye la base del sistema nacional de salud.

Es deber del Estado la planificación de la formación, distribución y capacitación permanente del personal sanitario.

El Estado debe implementar un sistema de información en salud que facilite la integración del Sistema Nacional de Salud,

El Estado promoverá y participará de las instancias internacionales orientadas a fortalecer la salud global.

Es deber del Estado, sus órganos y sus autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud de los pueblos y naciones indígenas, con la participación y cooperación de los pueblos interesados.

Artículo XX. Transitorio. En el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigencia de la Constitución, se dictará una ley sobre el único Sistema Nacional de Salud, la cual regulará el liderazgo y gobernanza, el financiamiento, el personal sanitario, las prestaciones de servicios de salud y la participación comunitaria. La misma ley deberá regular el procedimiento de integración al Sistema Nacional de Salud de todas las instituciones y organizaciones sanitarias, incluidas a lo menos las públicas, privadas, las de orden, seguridad y fuerzas armadas, las mutualidades y las organizaciones de beneficencia que ofrezcan prestaciones de servicios de salud.

La ley establecerá un procedimiento para la revisión de los contratos otorgados por el Estado para la construcción de establecimientos sanitarios en todos sus niveles de atención.

Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones).

144. ICC N°492-4

Derecho a la habilitación y rehabilitación en contexto de salud y bienestar



Artículo Único:

Toda persona, a lo largo de su ciclo vital, tiene derecho a la habilitación y rehabilitación para un óptimo funcionamiento, bajo un principio de protección, salud y bienestar, en el caso que presente limitaciones en su funcionamiento producto de alguna condición de salud aguda, subaguda o crónica, y/o discapacidad temporal o permanente que limite su autonomía e independencia para su desempeño diario y participación social.

Es deber del estado, desarrollar las políticas y normas que aseguren, promuevan y garanticen el derecho a la habilitación y rehabilitación. La garantía del derecho a la habilitación y rehabilitación, no exime al Estado de su obligación de generar las políticas y normas para derribar las barreras sociales que impiden el desarrollo de las personas con discapacidad.

Sometida a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones).

145. ICC N° 590-4

XXX.- El Estado promoverá, protegerá y garantizará el derecho a una Salud Mental universal, gratuita, oportuna y de calidad, sin exclusiones ni estigmas, en equidad de condiciones con la salud física, asegurando el pleno respeto a los derechos humanos, la diversidad cultural, el enfoque de género y la identidad sexo genérica.

XXX.-Es obligación del Estado aumentar gradualmente en sus presupuestos anuales los recursos financieros, humanos y de infraestructura necesarios para garantizar la realización del derecho a la Salud Mental, aumentando progresivamente la capacidad de respuesta del Sector Público a los requerimientos de Salud Mental en los distintos niveles de atención y territorios, respetando los principios de equidad y paridad, y asegurando siempre un nivel mínimo de satisfacción de este derecho.

La Defensoría de los Pueblos tendrá una relatoría especial para estas materias, pudiendo impetrar esta acción en favor de personas afectadas en su salud mental en los casos que determine su ley orgánica.

Sometida a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones).

146. ICC N°658-4

ARTÍCULO ÚNICO:

La medicina alternativa, complementaria e integrativa, es aquella que viene a dar tratamiento apoyando o componiendo la medicina convencional, al ser humano en sus diferentes dimensiones, tanto físico, psicológico y espiritual.

Esta constitución garantiza el acceso digno a la medicina alternativa, complementaria e integrativa a todas las personas, sin discriminación alguna y sin importar su condición social, sistema de salud, origen o cultura.

Es deber del Estado proteger y propender a que este derecho sea entregado a todas las personas, utilizando para ello todos los medios y vías necesarias para tal efecto.

Sometida a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones).

147. ICC N° 668-4

Artículo XX.- Los pueblos y naciones indígenas, como titulares del derecho colectivo a la libre determinación, tienen derecho a mantener y gestionar sus propios sistemas, agentes médicos, instituciones y prácticas de salud indígenas como también al uso y la protección de las plantas medicinales, animales, minerales y otros recursos naturales de uso medicinal, incluyendo los ecosistemas donde estos se reproducen.

Corresponde al Estado, en colaboración con los pueblos y naciones indígenas, salvaguardar los ecosistemas en que los sistemas de salud indígenas se reproducen y, en particular el Sistema de Salud debe garantizar el derecho a la salud y el bienestar de los pueblos y naciones indígenas de manera efectiva y sistemática, con pleno respeto a sus derechos fundamentales, los conocimientos y las prácticas que favorezcan su bienestar, así como la prevención, la sanación y el tratamiento de enfermedades de acuerdo a los marcos filosóficos, a las costumbres y tradiciones de cada pueblo y nación indígena.

Es deber del Estado garantizar un sistema de salud público de calidad, plurinacional, culturalmente pertinente, en igualdad de condiciones y sin discriminación con el resto de la población.

La convencional Mamani **retiró** la iniciativa.



148. ICC N°681-4

Artículo X. Derecho a la salud. La Constitución garantiza a todas las personas el Derecho a la Salud integral.

El Estado deberá considerar en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población.

El Estado garantizará este derecho, a través de un Sistema Universal de Salud de carácter nacional, público e integrado. Este se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, pertinencia territorial, descentralización, eficacia, calidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. El Estado promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo.

El Sistema Universal de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión y cuidados paliativos. La atención primaria constituirá la base de este sistema.

Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas.

El Sistema Universal de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema.

Los prestadores privados integrados al Sistema Universal de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento.

Artículo Transitorio X. Los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas, las de Orden y Seguridad, junto con los sistemas de salud contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se incorporarán al Sistema Universal en un período de transición que no podrá superar los dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución.

Artículo Transitorio X. Las instituciones privadas que cumplan con los requisitos establecidos en el [art. Derecho a la Salud] y los demás que establezcan las leyes se integrarán al Sistema Universal a través de una ley que regule el traspaso fijando su implementación y gradualidad, cuya dictación no podrá exceder el plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución.

Artículo Transitorio X. El Sistema Universal de Salud comenzará a regir en un plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigencia de esta Constitución. Las cotizaciones obligatorias deberán enterarse al Sistema Universal de Salud en el mismo periodo. La ley fijará los mecanismos y gradualidad de la entrada en vigencia del nuevo sistema y la forma en que las aseguradoras privadas de salud dejen de percibir las referidas cotizaciones. No se podrá reducir el monto de cotización de salud legal vigente por al menos un plazo de 10 años.

Sometida a votación se **aprobó** (18 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones).

149. ICC N°735-4

ARTÍCULO XX : El derecho a la salud integral es un derecho humano.

El Estado reconoce e incorpora a la medicina tradicional, medicina complementaria y prácticas de bienestar de salud dentro del sistema de salud universal. Incluyéndose como parte del Derecho Fundamental a la Salud.

Se contempla el acceso igualitario y transversal de la aplicación de estas medicinas antes mencionadas, en conjunto con la medicina alópata, para que las personas puedan elegir si lo desean, que se integren a sus tratamientos.

Es deber del Estado garantizar la promoción, integración y aplicación en todos los niveles y organismos del sistema de salud de este modelo.

El sistema de salud debe respetar las diferentes concepciones y manifestaciones culturales, las diferentes cosmovisiones internas (de nuestros pueblos originarios) y externas (de otras culturas), de la diversidad de las personas y comunidades que la integran, teniendo presente el enfoque de derechos humanos, género e inclusión social.

El Estado formará un consejo amplio de representantes de todas las entidades necesarias relacionadas con el cambio de modelo, para asegurar su implementación.

El estado generará las condiciones necesarias para el cambio de modelo.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra y 3 abstenciones).



150. ICC N°749-4

El Estado tiene el deber de reparar integralmente la afectación al derecho a la salud por una intervención o tratamiento médico que conlleve efectos adversos o secundarios que menoscaben o lesionen cualquier dimensión de la salud de la persona.

La ley regulará los requisitos de procedencia y la forma en que se realizará esta reparación integral.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 27 votos en contra y 1 abstención).

151. ICC N°872-4

Artículo XX (...) “Toda persona tiene derecho a la salud mental. El Estado velará por dar protección y asegurar un acceso igualitario y oportuno a prestaciones de medicina preventiva, curativa y de rehabilitación para las personas con trastornos o enfermedades que afecten la salud mental.

El Estado deberá procurar que exista un adecuado balance entre los recursos públicos destinados a tratamientos de salud física y mental, debiendo incorporar progresivamente en los planes de salud aquellos tratamientos de especialidades neuropsiquiátricas y psicológicas. De igual modo, deberá velar porque las prestaciones de salud mental cumplan con los mismos estándares disciplinares, científicos y tecnológicos, que las patologías de carácter físico.

El Estado deberá promover la mejora sistemática de las condiciones de vida y de trabajo de las personas, el deporte y la cultura física, la educación sanitaria y ambiental y los hábitos de vida saludable y establecer políticas de prevención de la tóxico-dependencia”.

Sometido a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 15 votos en contra y 6 abstenciones).

152. ICC N°960-4

Artículo 1. La salud es un derecho humano y social fundamental, de carácter colectivo, plurinacional y orientado al buen vivir, que debe ser garantizado por el Estado, a través de políticas públicas transversales y sectoriales orientadas al bienestar material y subjetivo de sus comunidades, asegurando la equidad y calidad en el acceso de todas las personas a los servicios sanitarios en sus niveles primario, secundario y terciario, velando por la formación de profesionales y técnicos y fiscalización permanente para asegurar una atención digna a los usuarios. Todas las personas que habitan el territorio, sin distinción de etnia o género, tienen derecho a una salud integral y al acceso a la asistencia sanitaria, independiente del tipo y costo de las enfermedades, priorizando por la prevención y promoción de la salud.

Artículo 2. El Estado debe garantizar el derecho a la salud a través de su integración con un sistema de protección social y las políticas estatales relacionadas con el medioambiente, la vivienda y la alimentación, priorizando por la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Del mismo modo debe asegurar el acceso a la asistencia sanitaria, a través de un sistema público, nacional y único de salud, descentralizado, basado en principios de universalidad, calidad, oportunidad, equidad, integralidad, pluralismo, pertinencia epidemiológica y participación. Las entidades privadas sin fines de lucro podrán ser parte complementaria del sistema único de salud. También deberá asumir la rectoría en materia de salud laboral a través de la implementación de políticas específicas en esta materia, asegurando una institucionalidad de seguridad laboral sin fines de lucro que garantice la salud ocupacional de los trabajadores.

Artículo 3 El Estado debe garantizar el financiamiento que asegure el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria en todos sus niveles, considerando un presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de la política sanitaria y la existencia de un seguro único de salud que garantice el acceso universal a la asistencia de todo tipo de enfermedades. A su vez el Estado se hace cargo de coordinar y/o ejecutar directamente la producción y/o distribución de los medicamentos y todo tipo de insumos que se requiera para las tareas de tratamiento y rehabilitación. Los bienes producidos y los servicios otorgados en materia de asistencia no podrán ser privatizados. Las entidades privadas podrán participar de la entrega de servicios asistenciales e insumos sin mediar lucro de por medio.

Artículo 4 La comunidad organizada de la diversidad de pueblos e identidades que habitan el territorio nacional tienen el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones en materia de Salud Pública y asistencia sanitaria a través de mecanismos de cogestión y participación vinculante que permitan el ejercicio de la soberanía en la producción de salud e incidencia en los procesos de tratamiento y rehabilitación, asociado a todo tipo de enfermedades.

Artículo 5. El Estado, a través de su sistema único de salud, debe hacerse cargo de materias de rehabilitación de situaciones o condiciones de discapacidad, tanto de las personas afectadas como de sus cuidadores. El sector privado sin fines de lucro podrá colaborar en esta materia, pero será responsabilidad del Estado ejercer su función de rectoría y financiamiento basal.



Sometido a votación el artículo 3° de la iniciativa se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones).

Sometido a votación el resto del articulado de la iniciativa se **rechazó** (3 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención).

153. ICC N° 968-4

Artículo XX. Del Derecho a la Salud

La constitución reconoce el derecho a la salud, la cual será entendida como el estado de equilibrio físico, espiritual, mental y social del ser humano con el ambiente y representa un derecho fundamental inalienable al ser humano y a las comunidades. Este derecho integra también el derecho a la salud mental y salud sexual y reproductiva.

El Estado tiene el deber de promover, proteger y garantizar el goce de la salud integral, su cobertura universal y asegurar las condiciones que permitan a todos los habitantes vivir lo más saludablemente posible, para lo cual debe considerar la salud de la población en todas sus acciones y mantener un modelo de desarrollo económico y social justo, equitativo, sostenible, sustentable, y en armonía con el ambiente, posibilitando el buen vivir de las personas y las comunidades. El Estado deberá elaborar políticas especiales para personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados en el acceso y garantía del derecho a la salud, por razones tales como sexo, etnia, nacionalidad, estatus migratorio, identidad de género, orientación sexoafectiva, capacidad, diversidad corporal, entre otras.

El Estado debe garantizar la reducción de riesgos, de daños y de enfermedades para las personas y comunidades, protegiendo los ecosistemas y el medio ambiente e influyendo en el mejoramiento de las determinantes sociales en salud.

Es un deber del Estado garantizar la promoción y prevención en salud, el diagnóstico, los tratamientos, la curación, la rehabilitación y la reinserción de las personas cuyas afectaciones en salud así lo requieran. Los medicamentos son bienes esenciales para el interés general de la nación y la salubridad pública de la población. Su acceso y disponibilidad deberá propender a la universalidad. La ley deberá regular dicho acceso a través de mecanismos de control de precios para garantizarlo. El Estado deberá, a través de los procedimientos que establece la constitución y las leyes, declarar el licenciamiento no voluntario de medicamentos por razones de salubridad pública y el interés general de la nación.

El Estado se organizará en un sistema único, universal y público de salud, el cual tendrá carácter solidario, equitativo, con enfoque de género, plurinacional e intercultural, descentralizado y sustentable con el medio ambiente. El sistema único de salud se estructurará en escalafones de atención de acuerdo a la gravedad y complejidad de las afectaciones sanitarias a tratar. En su base estará la atención primaria de salud, la cual ofrecerá prestaciones asistenciales y orientará su gestión a la prevención y promoción de la salud, además de la participación comunitaria con énfasis en el abordaje de los determinantes socioculturales.

El Estado garantizará la participación organizada y vinculante de la población en las decisiones y gestión del sistema único de salud en todos sus niveles y escalafones.

Una ley establecerá un Consejo Nacional de Salud que tendrá como objetivo dirigir el Sistema Único de Salud, evaluar el cumplimiento de sus fines y definir las medidas necesarias para su correcto funcionamiento, sus funciones y facultades resolutivas. En su composición deberá contemplarse, al menos, al ministro de salud y representantes de entidades públicas, de organizaciones de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y de entidades universitarias y científicas. Además, deberá contemplar consejos regionales y locales de similar composición.

El Estado propenderá que el sistema único de salud incorpore permanentemente el progreso en la investigación científica y tecnológica en el campo de la medicina, nacional e internacional, según las necesidades del país, promoviendo la producción y adquisición farmacológica, biomédica, y de equipamientos.

El financiamiento del sistema único de salud se realizará con los aportes de todos los agentes económicos y habitantes del país, mediante impuestos generales progresivos. Adicionalmente la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores. Este fondo único será administrado por el Estado, regido por los principios de la seguridad social, especialmente de solidaridad y justicia social.

La ley podrá establecer aranceles por las acciones de salud conforme la capacidad económica de la persona y de sus cargas familiares, pero en ningún caso podrá negarse la atención de salud y ninguna persona deberá incurrir en un gasto catastrófico en salud.

En el sistema único de salud podrán participar personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro y cuyo giro único sea la provisión de servicios de salud mediante contrato o convenio de derecho público. Serán reguladas por el referido sistema en su ejercicio clínico y



financiero, y podrán percibir de él por sus servicios montos iguales a los definidos por el sistema único de salud.

El Estado garantizará la calidad y pertinencia de las prestaciones sanitarias mediante un sistema de acreditación de las instituciones públicas y privadas, las cuales no podrán funcionar sin la autorización respectiva.

Será también deber del Estado, a través de su autoridad sanitaria y otras instituciones públicas, la fiscalización y regulación de la provisión de servicios sanitarios por parte de instituciones privadas que no integren el sistema único de salud, las que en todo caso no podrán percibir recursos públicos de ninguna índole.

Sin perjuicio de la cobertura estatal, se reconoce el derecho de las personas a incorporarse voluntariamente a servicios de salud privados de financiamiento propio.

La convencional Miranda **retiró** la iniciativa.

154. ICC N°977

Artículo XX. La Salud es un Derecho Humano y Social fundamental que debe ser garantizado por el Estado, para todas las personas y comunidades que habitan el territorio nacional, sin exclusión, ni discriminación de ningún tipo.

Artículo XX. El Estado reconoce la salud como el completo estado de bienestar físico, mental, espiritual, social y ambiental del individuo, y no sólo como la ausencia de enfermedad, en consecuencia, debe promover el buen vivir incorporando la diversidad de saberes en los cuidados y apoyos mutuos para garantizar la salud de toda la población.

Artículo XX. Todas las políticas públicas y decisiones relevantes de gestión en cualquier sector evaluarán y considerarán su impacto potencial en la salud de la población que pudiere ser afectada, con el fin de garantizar el Buen Vivir.

Artículo XX. Toda persona cotizará a un fondo único de salud de carácter público.

Artículo XX. Cada persona tendrá derecho a los tratamientos probadamente efectivos basándose exclusivamente en su necesidad. Beneficia a toda la población del país.

Artículo XX. Todas las personas tienen derecho a la atención de salud con enfoque convencional, natural y ancestral, que respete y reconozca la interculturalidad y autodeterminación.

Artículo XX. La participación social vinculante en salud debe ser garantizada como un derecho a crear, formar, decidir y supervisar las políticas públicas, y como una responsabilidad para cada habitante del país, considerando las características propias de las comunidades y los territorios.

Artículo XX. Beneficia a todas las personas que habitan el país, independientemente de su condición.

Artículo XX. El Estado debe garantizar, proteger y promover el derecho a la salud en todas las Políticas Públicas. Los principios rectores de este derecho son: Universalidad, Oportunidad, Integralidad, Gratuidad, Interdependencia, Intergeneracionalidad, Interculturalidad, Intersectorialidad, Transversalidad, Territorialidad y Enfoque de Géneros.

Artículo XX. El sistema de salud pública debe asegurar el acceso universal a todas las acciones que materializan este derecho, tal como la protección, promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de las personas y comunidades que habitan el territorio nacional.

Artículo XX. El Estado debe asegurar la descentralización del sistema sanitario según condiciones epidemiológicas de cada territorio a través de procesos de participación social vinculante.

Artículo XX. El Estado debe administrar el sistema de salud en su recaudación. La base de las prestaciones debe ser de administración estatal.

Artículo XX. El Estado debe participar mayoritariamente de la producción y distribución de medicamentos e insumos para la asistencia sanitaria.

Artículo XX. El Estado debe asegurar la creación de organizaciones e instituciones destinadas a la formación, promoción y prestación de las medicinas naturales y ancestrales.

Artículo XX. El Estado debe asegurar la incorporación de la educación sanitaria, preventiva y promocional en todas las mallas curriculares, desde la educación básica, hasta la educación superior.

La convencional Labraña **retiró** la iniciativa.



155. ICC N° 986-4

Artículo XX. La Ley protege el derecho a tener acceso a los cuidados paliativos, proporcionados a través de servicios de salud integrados y centrados en la persona, con equipos multidisciplinarios que presten especial atención a las necesidades y preferencias de cada persona.

Artículo XXX. Se establece que cada Servicio de Salud disponga de una red de atención continuada paliativa: hospitalaria, ambulatoria y domiciliaria.

Artículo XXXX. La ley asegura el acceso a un ambiente seguro donde cada persona pueda recibir los cuidados paliativos en el fin de la vida con pleno respeto de su cultura y creencias en cada región del país, con especial acceso a grupos vulnerables y en riesgo social.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 19 votos en contra y 3 abstenciones).

156. ICC N° 993

Artículo X. La Constitución garantiza el derecho a la salud y bienestar dentro de las escuelas, mediante el acceso a salud escolar integral, tanto de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a instituciones educativas públicas privadas, con o sin Programa de Integración Escolar del país.

Artículo XX. La Ley protege el derecho a la salud dentro de las escuelas, a través de la implementación de unidades de enfermería escolar insertas dentro de los establecimientos Educativos, las cuales cuentan con un profesional de salud capacitado para gestionar la salud de las comunidades educativas, además de propiciar entornos saludables, desarrollo de exámenes preventivos a lo largo del curso de vida de los estudiantes, contar con atención asistencial ante emergencias desarrolladas dentro de la jornada escolar, asistir y propiciar la inclusión de niños y niñas con necesidades especiales de salud y velar por comunidades educativas seguras desde el punto de vista de sanitario.

Artículo XXX. Se establece que cada unidad de enfermería escolar, debe estar articulada y trabajar de forma coordinada, con la red de salud de atención primaria.

Artículo XXXX. Se reconoce la enfermera escolar, como el profesional con especialidad preparado para gestionar la salud de las comunidades educativas.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 19 votos en contra y 3 abstenciones).

157. ICC N° 1030

Artículo X: La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho a la salud.

El Estado promueve el libre e igualitario acceso a las acciones de salud, sean éstas de promoción, prevención o recuperación de salud, de rehabilitación de la persona o cuidados paliativos en la última etapa de la vida.

El Estado será el ejecutor preferente de las acciones de salud cuando no exista iniciativa privada que permita garantizar su ejecución, en la forma y condiciones que determine la ley.

El Estado coordinará las acciones de salud, sean éstas efectuadas por entidades públicas o privadas.

Asimismo, el Estado efectuará acciones de control y fiscalización al sector de la salud, para el adecuado acceso y ejecución de las acciones sanitarias.

El Estado podrá integrar o coordinar los recursos públicos y privados para la prestación de acciones de salud. Una ley establecerá las bases para efectuar la integración, la que considerará, a lo menos, las condiciones sanitarias que autorizan la aplicación de esta medida, los problemas de salud considerados, la forma de coordinación y el procedimiento de entrega de la correspondiente contraprestación a quienes efectúen las prestaciones.

Existirá un seguro único de salud para todos los habitantes de la República. Cada persona podrá elegir el tipo de administrador de éste y de seguros complementarios voluntarios. Ambos podrán ser públicos o privados.

Con todo, el Estado implementará los mecanismos necesarios para que las personas puedan elegir sus prestadores de salud, sean públicos o privados.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 19 votos en contra y 3 abstenciones).



(c.208) Educación (IIC N° 02, 03, 36, 49, 56, 95, 191, 205, 210, 215, 216, 221, 227, 251, 266, 270; IPC N° 01, 03, 11, 14, 15, 23, 50, 62, 70; ICC N° 127, 145, 276, 288, 330, 338, 343, 351, 359, 363, 369, 386, 404, 411, 437, 535, 623, 629, 644, 646, 650, 651, 662, 665, 697, 698, 700, 719, 736, 746, 833, 837, 887, 891, 974, 979, 1019).

158. ICI N°02

ARTÍCULO XX: *“Las primeras naciones, a través de sus instituciones autónomas, tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y proyectar sus sistemas de educación ancestral en el marco de su propia comprensión y configuración de mundo. Es deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho”.*

Deberán adoptarse medidas apropiadas para garantizar que las nuevas generaciones sean educadas por las familias e instituciones tradicionales propias del territorio, en el marco de sus saberes, lenguas y conocimientos ancestrales.

Sometido a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 12 votos en contra y 2 abstenciones)

159. ICI N°03

Propuesta frente al Derecho a Educación

Se propone que la Beca Indígena se otorgue automáticamente a los alumnos que tienen dicha calidad cuyo promedio mínimo sea nota 5, sin necesidad de postular a ella ni limitación de cupos, a fin de que el estado asegure los recursos para la educación de los alumnos que aspiren estudios superiores, y que no se vean imposibilitados a ello por falta de recursos económicos.

En cuanto al Derecho a una Educación Intercultural, es necesario que el estado asegure y provea los recursos financieros para la formación y contratación de Educadores Tradicionales que impartan la cultura ancestral y lingüística a los pichikeche.

Sometido a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 25 votos en contra y 5 abstenciones).

160. ICI N°36

ARTÍCULO XX

El Estado reconoce, protege y garantiza el derecho a la educación, como derecho de todo ser humano de adquirir conocimientos que permitan su desarrollo pleno e integral, y para el desenvolver sus capacidades y potenciales.

El Estado reconoce, protege, y garantiza el derecho de todos los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, de mantener y emplear sus instituciones educativas y sistemas educativos propios, a que su lengua y cultura sea considerada en el sistema educativo general, sin perjuicio del derecho a la educación del cual son titulares sus miembros.

Todo niño y niña perteneciente a alguno de los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, tiene el derecho de acceder a todos los niveles y formas de educación que sea posible.

El Sistema Educativo general deberá contemplar y mantener de manera adecuada la educación intercultural plurilingüe, en todos los niveles educacionales, para los miembros de los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, a los cuales también podrán acceder los demás habitantes de del Estado.

El Estado reconoce y garantiza el derecho de los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, de establecer y controlar libremente sus sistemas educativos, en sus propias lenguas, de acuerdo con sus propios métodos educacionales y culturales.”

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 votos en contra y 2 abstenciones).

161. ICI N°49

1.-DERECHOS DE EDUCACIÓN PROPIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

PROPUESTA DE NORMA

Las personas pertenecientes a los pueblos originarios tienen derecho a acceder a una educación pública, gratuita, de calidad e intercultural, en todos los niveles educativos, y el derecho a acceder a una educación propia, conforme a su propia cultura e instituciones.

Los pueblos originarios tienen el derecho colectivo a establecer, mantener y controlar sus propios sistemas educativos, en sus propias lenguas y de acuerdo a sus propia cultura, instituciones, metodologías de enseñanza y aprendizaje, tanto en espacios rurales como urbanos, conforme al principio de consuetudinariedad que permite mantener, relevar, revitalizar el sistema cultural, estructura social y política, desarrollo territorial, espiritual, de formación y educación.



-El Estado debe velar por el derecho a la educación y el acceso justo a todos los niveles, espacios y formas de educación, garantizando que éste sea respetado como un derecho humano, gratuito, de calidad, integral, intercultural, plurilingüe y plurinacional. Es deber del Estado respetar, promover, garantizar y financiar los sistemas educativos propios de cada Pueblo, respetar las autoridades y personas que la imparten, y promover en el sistema público, la formación de profesionales con conocimientos específicos que profundicen la plurinacionalidad en todos los aspectos de la vida de la sociedad.

El sistema educativo está orientado por la finalidad formar personas integrales y con conocimientos suficientes que puedan ser replicados y transmitidos a otras generaciones pertenecientes a las primeras naciones y a la sociedad en general.

El Estado tiene el deber de garantizar que La ley General de Educación y demás cuerpos normativos del sistema educativo, establezca la obligatoriedad sin condiciones, a incluir en el currículum nacional los conocimientos de los pueblos originarios. Se debe garantizar de manera eficiente y efectiva la participación de los pueblos originarios en la definición del currículum nacional, y la participación de las familias y comunidades en la definición de los Proyecto Educativo Institucional de las unidades educativas a nivel territorial y local y, en general, en el sistema educativo en sus distintos niveles.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 25 votos en contra y 1 abstención).

162. ICI N°56

Artículo XX: Los idiomas de los pueblos-naciones indígenas se consideran idiomas oficiales junto con el castellano.

Especialmente en los territorios autónomos indígenas se usará para documentos y comunicaciones oficiales uno o más idiomas propios además del castellano.

Artículo XX: La educación es un derecho gratuito y universal. La educación estará enfocada en la historia y tradiciones culturales de los pueblos y/o comunidades en el país.

Sometido a votación se **rechazó** (11 votos a favor, 18 votos en contra y 3 abstenciones).

163. ICI N°95

EDUCACIÓN Y PUEBLOS Y NACIONES PREEXISTENTES Los pueblos preexistentes tienen derecho a una educación gratuita intracultural, intercultural y plurilingüe en todos los niveles del sistema educativo nacional.

El Estado debe garantizar, promover, respetar y difundir el derecho a la educación intercultural, contextualizada y pertinente a los territorios. El Estado debe garantizar y promover que los pueblos preexistentes desarrollen sus propias instituciones educativas, con una participación vinculante de los pueblos en la toma de decisiones. Asimismo, el Estado debe velar por la transversalidad de los saberes, conocimientos culturales y lingüísticos en el currículum educativo.

El Estado debe respetar y garantizar el desarrollo del enfoque metodológico de la educación intercultural, con participación de la comunidad, permitiendo entender la realidad social, política, económica y cultural de los pueblos, fortaleciendo las condiciones para el desarrollo de un buen vivir.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 votos en contra y 2 abstenciones).

164. ICI N°191

Se garantizará el derecho a una educación centrada en el desarrollo de las personas y las comunidades, en armonía con el entorno natural y social.

El Estado tendrá el deber de garantizar la provisión y el acceso justo a todos los niveles y formas de educación, cautelando que el derecho humano a la educación sea gratuito, de calidad, integral, emancipador, intercultural, plurilingüe, laico y no sexista.

El Estado tendrá el deber de resguardar que los pueblos y naciones indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general. Asimismo, el Estado financiará los sistemas educativos propios de las comunidades, pueblos y naciones preexistentes.

Los pueblos y naciones preexistentes tendrán derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

El adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.



Será deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la educación de los pueblos indígenas, en todas sus dimensiones y niveles.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 votos en contra y 2 abstenciones).

165. ICI N°205

EDUCACIÓN:

El estado tendrá el Deber de garantizar el Derecho a la educación, publica, gratuita y de calidad con pertinencia cultural y territorial., Además El Estado debe resguardar que los pueblos y naciones preexistentes, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general El estado debe garantizar el acceso a la Beca Indígena a todos y todas los y las descendientes de pueblos originarios de manera universal.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 votos en contra y 1 abstención).

166. ICI N°210

Artículo XX El estado de Chile reconoce a los educadores ancestrales de los pueblos indígenas y promueve su enseñanza , diferenciándolos por el territorio a cual estos tienen pertinencia.

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 14 votos en contra y 1 abstención)

167. ICI N°215

24. El derecho a la educación. La educación es obligatoria desde el primer nivel de transición de la educación parvularia hasta el último año de enseñanza media. Los padres o quienes tengan el cuidado legal de niños y adolescentes tienen el derecho preferente para elegir el tipo de establecimiento en que sus hijos o pupilos recibirán enseñanza, así como el derecho de escoger, dirigir y orientar la educación moral y religiosa de sus hijos según sus convicciones, y que sus hijos reciban una educación acorde a la misma.

Para asegurar lo anterior, el Estado tiene el deber de:

i. Financiar la provisión gratuita de estos niveles, así como también, promover y velar por el acceso a la educación superior, tanto universitaria como técnico profesional.

ii. Garantizar la libertad de enseñanza, promoviendo el derecho de las personas e instituciones de crear, gestionar y solventar proyectos educativos autónomos que cumplan con las exigencias mínimas establecidas por la ley, sin establecer diferencias arbitrarias basadas, entre otras circunstancias, en la calidad confesional de los establecimientos. Será deber del Estado reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos, reconociendo también su autonomía. La libertad de enseñanza no tendrá otros límites que los impuestos por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la nación.

iii. Promover la libertad de elección de las familias respecto el tipo de educación para los niños y adolescentes a su cuidado, debiendo contribuir equitativamente a su financiamiento en proporción a las necesidades de cada cual, conforme a lo establecido por la ley. El Estado no podrá discriminar entre niños y adolescentes que se encuentren en la misma situación socioeconómica, independientemente del establecimiento educacional al cual asistan.

iv. Fomentar el desarrollo y la calidad de la educación en todos sus niveles y la formación ciudadana y cívica; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación, sea que dichas actividades se desarrollen a través de instituciones públicas o privadas.

Una ley aprobada por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza, tanto a los establecimientos públicos como privados, y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Los proyectos educativos, públicos y privados, no deben estar orientados ni podrán propagar tendencias político-partidistas. El cuerpo docente deberá respetar esta condición, sin perjuicio del reconocimiento de su derecho a la libertad de cátedra.”.

Sometido a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 19 votos en contra y 2 abstenciones).



168. ICI N°216

Artículo XX. El Estado, tiene el deber de contribuir al rescate, revitalización y uso de los idiomas ancestrales como manifestación de las identidades culturales y como elemento fundamental de la continuidad histórica de los Pueblos Indígenas.

El Estado y todos sus órganos deben generar acciones afirmativas con el propósito de contribuir a fomentar el conocimiento y formación en las lenguas originarias, que para los pueblos indígenas constituye un medio para expresar y transmitir sus patrones culturales y relaciones sociales, su propia identidad colectiva, la forma como perciben la naturaleza y el universo que los rodea.

Se propiciará, por parte de los órganos de la administración pública, la incorporación de los idiomas ancestrales en el espacio público, actividades oficiales y documentos de carácter oficial, particularmente, en los territorios indígenas siempre con la participación de los pueblos y naciones indígenas presentes en dichos territorios.

El organismo encargado del sistema público de educación deberá incorporar de manera pertinente los diversos idiomas ancestrales en el currículum escolar nacional, en todos sus niveles formativos. Los establecimientos que estén insertos en aquellas áreas que formen parte de los territorios indígenas o bien que la comunidad escolar indígena, así lo solicite, se deberá incorporar al plan educativo institucional de la unidad educativa respectiva, contenidos con pertinencia indígena y en los idiomas de los pueblos indígenas al que pertenece dicha comunidad educativa.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 20 votos en contra y 3 abstenciones).

169. ICI N°221

“Art. X. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho a la educación, en todos sus niveles y formas, la que será gratuita, de calidad, intercultural y bilingüe.

Es deber del estado plurinacional tomar las medidas adecuadas para la resguardar el kimün (conocimiento ancestral) y fomentará, en todos los niveles, métodos de aprendizajes pertinentes culturalmente en cada territorio, basados en el inarrumeny el kimkatun como prácticas que permiten aprender de la vida, la naturaleza y sus leyes.

El Estado valora promueve y protege el rol de las educadoras tradicionales mapuche en el traspaso y reproducción de la cultura, la lengua y la costumbre”.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra y 3 abstenciones).

170. ICI N°227

"Artículo X: Educación plurilingüe, intracultural e intercultural. El Estado desarrollará una educación plurilingüe, intracultural e intercultural conforme los distintos conocimientos y cosmovisiones existentes en el territorio.

Los pueblos originarios tienen derecho a impartir su propia educación según su historia, tradiciones, cultura y cosmovisión. El Estado promoverá una identidad plurinacional en el país.”

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 votos en contra y 2 abstenciones).

171. ICI N°266

“Las Primeras Naciones tienen derecho a una educación de acuerdo a sus necesidades y particularidades.

Es deber del Estado garantizar una reforma educacional en todos sus niveles, la que debe contemplar los conocimientos de la Primeras Naciones y sus particularidades.

Dicha reforma será de carácter colaborativo, garantizando el debido proceso de Participación y Consulta Indígena.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra y 3 abstenciones).

172. ICI N°251

2.- (Ppoya) DERECHO A LA EDUCACIÓN, INTERCULTURAL Y BILINGÜE

El pueblo Lickanantay Atacameño promueve y perpetua la cultura ancestral con modelo educativo, es fundamental preservar la pedagogía originaria, aquella que asegura la práctica de la memoria comunitaria, el relato oral y el aprendizaje a través de las experiencias.

Que la educación no sea un martirio sino sea atractiva, significativa, de felicidad y no de estrés.

Reconocimiento en las Aulas a los Educadores tradicionales en la cual reciba un buen trato y buena fe y mejor remuneración por la educación que imparte, un lugar específico para impartir nuestra educación, financiamientos para las salidas a terreno para entregar nuestro conocimiento.



La nueva constitución deberá procurar incorporar la lengua y la cultura de los pueblos originarios del territorio, esto por considerar al estado como plurinacional e intercultural, por tanto, la educación ha de tener ejes transversales que posibiliten el rescate, la conservación y difusión de la cultura e identidad de los pueblos originarios.

Derecho fundamental de una educación gratuita y de calidad para nuestros niños, niñas y adolescentes en la comunidad educativa.

Sometido a votación el inciso segundo se **rechazó** (6 votos a favor, 23 votos en contra y 4 abstenciones).

Sometido a votación el inciso penúltimo se **rechazó** (7 votos a favor, 22 votos en contra y 3 abstenciones).

Sometido a votación el resto de los incisos se **rechazó** (8 votos a favor, 21 votos en contra y 4 abstenciones).

173. ICI N° 270

El Estado reconoce los derechos lingüísticos de las Primeras Naciones. Es deber del Estado garantizar la protección, conservación y revitalización de la variante lingüística huilliche Tse Süngun.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 22 votos en contra y 5 abstenciones).

174. IPC N°01

Cláusula que deberá vincularse con el derecho a la educación

El Estado reconoce el derecho de todas las personas, desde la primera infancia, a recibir una educación sexual integral, de acuerdo a la edad, y basada en la evidencia; entendiéndola como aquellos conocimientos basados en datos empíricos, aquellas habilidades, actitudes y valores que les permitirán disfrutar plenamente y con dignidad el relacionarse entre pares; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; prevenir situaciones de riesgo y abuso sexual, desarrollando con información sus proyectos de vidas, y el derecho a la información sexual y reproductiva.

El Estado deberá garantizar el acceso de la educación sexual integral en igualdad de condiciones y sin discriminación, en todo el sistema educacional.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 votos en contra y 3 abstenciones).

175. IPC N°03

Artículo XX.

1. El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el bien integral de la persona humana en las distintas etapas de su vida, tanto en su dimensión corporal como espiritual. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Corresponderá al Estado fomentar y financiar dicho desarrollo desde las comunidades de familias, así como otorgar especial protección al ejercicio de estos derechos.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar, criar y formar a sus hijos, así como el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para ellos. El rol de los órganos del Estado en materia educacional es siempre de ayuda y apoyo, y nunca de sustitución de los padres, salvo que estos o los tutores del menor no puedan ejercer su rol.

2. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Los establecimientos educacionales podrán fundarse para enseñar según un ideario propio, definido libremente por el establecimiento mismo. El Estado no puede imponer una visión única sobre la persona humana, la sociedad y el mundo, ni una única comprensión sobre los derechos humanos. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público. Todo establecimiento educacional podrá oponerse, en razón de su ideario, a impartir contenidos que lo contradigan.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia. Además, financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.



Es deber del Estado asegurar la calidad de los establecimientos educacionales, así como respetar y velar por su autonomía, sobre todo respecto de sus idearios.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Corresponderá al legislador establecer los mecanismos para que el Estado entregue apoyo económico a los establecimientos educacionales que lo requieran sin discriminación entre ellos, mientras cumplan con los requisitos establecidos en este artículo.

Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Sometido a votación el número 2 se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones).

Sometido a votación el resto del articulado se **rechazó** (6 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones).

La convencional Cantuarias votó a favor.

176. IPC N°11

La Constitución asegura a todas las personas:

1. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la educación, la que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.

2. Los padres, o quienes tengan el cuidado personal en conformidad a la ley, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, o pupilos en su caso.

3. La educación de segundo nivel de transición, así como la educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.

4. El Estado debe respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades, las que deberán cumplir las normas mínimas que el Estado prescriba en materia de enseñanza, así como que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

5. Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

6. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.

7. Las Instituciones de educación superior reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país.

8. El Estado asegura asimismo la libertad de cátedra de quienes ejercen la enseñanza.

9. Las personas naturales y jurídicas tienen el derecho de crear, mantener y desarrollar centros educacionales, dentro de los límites del respeto a los demás derechos fundamentales, así como a los deberes y principios constitucionales

10. El Estado, en respeto de la igualdad ante la ley, tiene el deber de garantizar y promover estos derechos, mediante un financiamiento no discriminatorio de la libre elección entre la educación estatal y privada.

11. Las disposiciones de este artículo no se interpretarán como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el primer inciso, y que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado en una ley orgánica constitucional.

12. La determinación de todo lo relativo a las prestaciones exigibles en virtud de este derecho, así como la forma de financiamiento en el marco de lo establecido, corresponderá exclusivamente a la ley.

Sometido a votación el numeral 2 se **rechazó** (12 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones).

Sometido a votación el numeral 4 se **rechazó** (9 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención).



Sometido a votación el resto de los numerales se **rechazó** (10 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención).

177. IPC N°14

El Estado deberá resguardar el derecho a la educación para todas las personas, a lo largo de su vida, para lo cual financiará un sistema de educación público, no sexista, laico y gratuito, desde la primera infancia hasta la educación superior, siendo la educación básica y media de carácter obligatorio.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán existir establecimientos educativos de carácter privado, conforme con los requisitos que estipule la ley.

La educación pública tendrá como finalidad erradicar la violencia de género con miras a construir una sociedad igualitaria, diversa, inclusiva y democrática; libre de discriminación, sexismo, racismo y discursos de odio.

La educación pública tendrá un carácter democrático, por lo cual las comunidades educativas deben fomentar lógicas de relación horizontales y cooperativas dentro de ellas y entre sí. El Estado garantizará la participación de toda la comunidad en la gestión y toma de decisiones.

La educación pública reconoce la autonomía personal, social y comunitaria. Las escuelas deben adoptar las estrategias necesarias para respetar y valorar la pertenencia cultural, étnica y/o comunitaria de todas las personas, como también su orientación, expresión e identidad sexo-genérica, a fin de generar espacios seguros para el aprendizaje y validar diversidad de formas y proyectos de vida.

La educación pública resguardará y promoverá el cuidado mutuo entre los seres humanos y todas las formas de vida; la corresponsabilidad social; el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza; la participación en la vida común y la convivencia armónica de los pueblos-naciones.

Los y las profesoras tendrán un rol protagónico en la toma de decisiones en materia de educación a nivel local y nacional, en tanto son agentes y líderes intelectuales en el sistema educativo y la sociedad reconoce su papel clave para la transformación social.

El Estado deberá garantizar que los y las trabajadoras de la educación cuenten con instancias de formación permanente, con condiciones laborales que dignifiquen su tarea y con los espacios que les permitan trabajar colaborativamente, participar en la toma de decisiones dentro de la escuela y reflexionar sobre su propia práctica.

El sistema educativo protegerá especialmente aquellos saberes y prácticas que posean un valor estético, cultural y/o filosófico. La educación se fundamentará en los resultados del desarrollo tecnológico y científico, con miras a erradicar la ignorancia, los prejuicios y los fanatismos ideológicos. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género e interseccional, con especial enfoque en los derechos humanos y una orientación inclusiva, diversificadora e integral.

Se incluirá el conocimiento y la promoción de las ciencias y humanidades como ámbitos complementarios, la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literatura, la historia, la formación ciudadana, la filosofía, la tecnología, las lenguas y cultura indígena de nuestro país, las lenguas extranjeras, el deporte y la promoción de una vida saludable, las artes y la música, la educación sexual y afectiva y el cuidado de la naturaleza, entre otras.

La formación de docentes y trabajadores/as del sistema educativo debe ser coherente con este enfoque.

Se entenderá que el derecho a la educación contiene todos los elementos consignados en este artículo y que es un derecho inalienable y preferente de la niñez y juventud.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 19 en contra y 6 abstenciones)

178. IPC N°15

Artículo 1. Derecho a la educación.

La educación es un derecho humano esencial, indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El Estado tiene la función primordial, ineludible e indelegable de garantizar a todas las personas a lo largo de la vida su provisión gratuita y un acceso universal, permanente, inclusivo, democrático e integral.

Artículo 2. Propósito de la educación

La educación es fundamental para la vida digna, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo plurinacional. Su objetivo central es contribuir al fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos, a la creación de una sociedad justa e igualitaria, al bienestar individual y colectivo, la protección de



la naturaleza, biodiversidad, los territorios, al trabajo decente, al desarrollo productivo, científico, cultural y a la convivencia armónica de los pueblos naciones.

La educación constituye el espacio de formación integral de las personas y comunidades, estimulando esencialmente el sentido crítico, enfoque de género, y el desarrollo del conocimiento, en un ambiente de respeto mutuo y relaciones horizontales y cooperativas. La educación es diversa, inclusiva, descolonizadora, plurilingüe e intercultural, ecológica y libre de toda discriminación, sexismo, racismo y discursos de odio.

La educación brinda oportunidades educativas a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión.

El Estado otorga especial protección a la educación propia de los pueblos originarios, respetando su derecho a la enseñanza y aprendizaje de su lengua, su cultura, saberes e identidad, y fomentará la mantención de las demás culturas, lenguas, saberes e identidades de los pueblos naciones en Chile.

Artículo 3. Sistema Plurinacional de educación pública y financiamiento.

El Estado como primer responsable del derecho a la educación, organiza y gestiona el sistema plurinacional articulado de educación pública de carácter democrático y comunitario, mediante servicios públicos, con financiamiento permanente, directo y basal, esto es, pertinente y suficiente que les permita cumplir plena y equitativamente con su función. Para ello el Estado debe destinar a lo menos el 6% del producto interno bruto del país, de acuerdo a la progresividad que establezca la ley.

La educación parvularia, la educación básica y la educación media serán obligatorios y gratuitos. La educación superior pública será gratuita. La educación pública impartida en todos los niveles y modalidades educativas será de carácter laica, emancipadora, participativa, solidaria, democrática, contextualizada, promotora de la paz y respetuosa de toda corriente de pensamiento con respeto a los derechos humanos.

El Estado promoverá la educación pública de gestión comunitaria comprendida como un proceso educativo no formal, colectivo y diverso, siempre que esta se organice por medio de un programa sistemático, verificable, sin fines de lucro, emanado de los actores que la componen y que asegure un aprendizaje permanente para alcanzar el máximo desarrollo intelectual y cultural. Esta educación podrá formar parte del sistema nacional de educación pública y recibir financiamiento estatal, de conformidad a la ley.

Artículo 4. Comunidades

El Estado garantiza el derecho a la participación de las personas, familias y comunidades en el proceso educativo.

Los establecimientos educacionales constituyen una comunidad democrática de aprendizaje compuesta por estudiantes, sus cuidadores y tutores, las y los profesores, educadores, asistentes de la educación, académicos, funcionarios y directivos; quienes promoverán la colaboración de organizaciones de la sociedad civil de carácter local.

Las instituciones reconocidas oficialmente deberán contar con un Consejo Educativo integrado por representantes de toda la comunidad, electos democráticamente, el que tendrá facultades resolutorias en la dirección y gestión del proyecto educativo institucional, en la construcción de los pilares del proyecto educativo-pedagógico de acuerdo a las necesidades particulares de las comunidades y en el marco de los principios generales de la educación, en las modificaciones al reglamento interno y, en el caso de los establecimientos pertenecientes al sistema de educación pública, además, participarán en la administración de los recursos.

El Consejo Educativo, tendrá, en el marco de los propósitos generales de la educación, la facultad para situar el currículum nacional en consideración del proceso de enseñanza aprendizaje y de las necesidades, intereses y características personales, culturales de las y los estudiantes, sus contextos y sentido de pertinencia.

Las comunidades de aprendizaje, organizadas de conformidad a la ley, participarán de manera vinculante en la definición de las políticas públicas educativas.

Artículo 5. Libertad de enseñanza y aprendizaje

El Estado respetará y garantizará la libertad de aprendizaje como expresión de diversidad. Esta comprende la posibilidad de toda persona, madres, padres o cuidadores de elegir establecimientos educacionales.

Esta garantía incluye el respeto a la libertad de los particulares para fundar proyectos educativos privados, quienes estarán obligados a funcionar de acuerdo a los propósitos de la educación, y estarán al servicio del interés público, no respondiendo a intereses corporativos. Aquellos que



logren obtener el reconocimiento oficial del Estado, serán examinados por la autoridad pública de acuerdo a la ley.

Artículo 6. Trabajadores y trabajadoras de la educación

Las y los profesores y educadores son un pilar fundamental en el sistema educativo. El Estado garantizará su formación, con carácter gratuito, la actualización continua de sus conocimientos, estabilidad en el ejercicio de sus funciones y el mejoramiento permanente de sus condiciones materiales, las que deberán ser adecuadas para un ejercicio pedagógico reflexivo, colaborativo y agente de los propósitos de la educación.

El Estado garantizará la formación gratuita de los asistentes de la educación la que será coherente con los propósitos de la educación.

Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. Esta libertad comprende la autonomía para planear los procesos de enseñanza, elegir los métodos o técnicas para su ejercicio lectivo y expresar libremente sus opiniones en el marco de los propósitos de la educación.

Con independencia del establecimiento educacional donde cumplan sus funciones, las y los profesores, educadores y asistentes de la educación se regirán por estatutos laborales especiales, únicos y universales, que señale la ley. El Estado garantiza, en todo caso, a los trabajadores de la educación, todos los derechos tanto individuales como colectivos consagrados en la Constitución.

Sometido a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención).

179. IPC N°23

El Estado garantiza el derecho a la educación de todas las personas que habitan su territorio. La educación procura el desarrollo integral, sobre la base de las habilidades y aptitudes, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y fomenta el respeto por la democracia, las libertades y los derechos y deberes establecidos en esta Constitución.

El Estado provee educación pública, laica y de calidad, a través de establecimientos educacionales propios, en todos los niveles de enseñanza y territorios del país, debidamente articulados, los que promoverán los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la libertad y la participación de la comunidad educativa, considerando las particularidades locales y regionales, así como aquellas de cada una de las etapas y modalidades formativas. El Estado garantiza el financiamiento que requiera el funcionamiento y desarrollo de sus establecimientos educacionales en todos los niveles.

Los particulares tendrán derecho a crear, organizar y mantener establecimientos educacionales, respetando las normas constitucionales y conforme a la ley respectiva.

Las madres, padres o apoderados, que tengan el cuidado personal según la ley, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos(as) o pupilos(as).

La educación parvularia, básica y media son obligatorias. La educación pública será gratuita en los niveles obligatorios y en los estudios de educación superior que establezca la ley.

Las instituciones de educación superior gozarán de autonomía académica, económica y administrativa. El ingreso, permanencia y promoción de los estudiantes en este nivel obedecerá únicamente a méritos o causales objetivas, sin sujeción a discriminaciones arbitrarias, y considerará, además, los principios de equidad e inclusión.

La ley establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de enseñanza, y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel, junto con las normas para el aseguramiento de la calidad y el correcto uso de los recursos públicos.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 16 en contra y 8 abstenciones).

El convencional Ossandón votó a favor.

180. IPC N°50

El Estado garantiza a todas las personas el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, adecuada a sus necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística y respeto a los principios de autonomía progresiva e interés superior de niños, niñas y adolescentes.

La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente, cuyos fines son el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, el bien común y el desarrollo de una sociedad libre, diversa y cohesionada, así como el fortalecimiento del respeto a los principios



democráticos de convivencia, a los derechos humanos y la protección del medioambiente y la naturaleza.

El Estado asegurará la obligatoriedad y gratuidad entre el segundo nivel de transición parvularia y la educación media, extendiéndose la gratuidad desde el nivel de sala cuna y, progresivamente, a la educación superior.

El Estado articulará, regulará y supervigilará un sistema educativo equitativo y pluralista, que valora la diversidad de proyectos educativos atendiendo los intereses, necesidades y características de las personas y las comunidades, favorezca el desarrollo de sus trayectorias educativas y estimule la innovación pedagógica.

Las instituciones de dependencia estatal deberán ser diversas, no confesionales, de alto estándar educativo y de provisión descentralizada, constituyendo, en su conjunto, el eje estratégico del sistema educativo.

La Constitución reconoce la libertad de enseñanza. Se protege el derecho de las familias de elegir para las personas a su cargo una educación de acuerdo con sus creencias, convicciones y cosmovisiones. La comunidad podrá crear y conducir establecimientos educacionales bajo condiciones que aseguren el cumplimiento de los fines y principios que establece esta Constitución, pudiendo recibir financiamiento estatal sólo aquéllos que ofrezcan educación gratuita, no persigan fines de lucro y se sujeten a las demás normas que establezca la ley.

La labor docente cumple un rol esencial para la realización plena del derecho a la educación. A fin de promover el desarrollo y aprendizaje de los y las estudiantes, el Estado velará por la formación inicial y continua y por condiciones laborales adecuadas para profesores, profesoras, educadores y educadoras.

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones).

181. IPC N°62

El Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados – VertebraL–, consciente de las perspectivas históricas que este proceso constitucional abre a partir de este momento social y político, desea proponer a la Convención Constitucional la discusión y aprobación de normas relativas a la educación superior, con especial énfasis en el ámbito técnico-profesional, como son algunas de las siguientes.

a) Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad en todos los niveles educativos a lo largo de la vida, incluyendo la educación superior y la educación continua.

b) La educación debe tener, como uno de sus propósitos centrales, el pleno desarrollo de las personas a lo largo de la vida, tanto en los planos individual como social, promoviendo y cultivando los valores elementales del ser humano, los principios y libertades constitucionales, así como cautelando los derechos fundamentales de participación en la comunidad y en la vida pública nacional.

c) Se reconoce y se debe garantizar la libertad de enseñanza. Esta se inspira en la diversidad de una sociedad democrática, en la que los poderes públicos deberían siempre asegurar la necesaria provisión mixta de educación superior, estatal y privada, con distintas visiones que les permita a las personas elegir de acuerdo a su vocación.

d) El Estado reconoce y resguarda la autonomía de todas las instituciones de educación superior reconocidas oficialmente. Las casas de estudios superiores deben contribuir al bien común mediante la materialización de sus proyectos educativos, con estricto apego a su visión y misión, poniendo como centro del quehacer de la comunidad educativa a los estudiantes, en el contexto de un sistema de educación superior que garantice el derecho a la educación y valore con equidad su diversidad técnico profesional y universitaria.

e) Los institutos profesionales y centros de formación técnica tienen como finalidad alcanzar un alto nivel de aprendizaje de sus estudiantes, que les permita enfrentar los desafíos del país, de sus sectores productivos y de servicios, con pertinencia regional y visión a la vez local y global. Para ello es indispensable lograr una formación disciplinar y humana de excelencia.

f) El Estado debe establecer un régimen regulatorio que favorezca a todas las instituciones de educación superior por cuanto estas cumplen un rol público, asegurándoles un adecuado y equitativo aporte en beneficio de los estudiantes, sean ellas estatales o no estatales, e independiente del subsector en el que se encuentren, de manera que puedan desarrollar sus funciones conforme a los requerimientos educacionales, científicos, productivos y culturales del país.

g) Acceso igualitario y no discriminatorio a los puestos de trabajo, incluyendo las funciones públicas en el Estado, a cualquier estudiante que haya concluido exitosamente sus estudios de



educación superior, evitando discriminaciones que no tengan como fundamentos los aspectos técnicos propios del cargo o empleo y de mérito de los postulantes.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones).

182. IPC N°70

La redacción de la norma constitucional, en consecuencia, debiera expresarse de la siguiente manera:

1. Todas las personas tienen derecho a la educación.
2. La educación tendrá por finalidad el pleno desarrollo de la persona, tanto en su dimensión individual como social, respetando la forma de convivencia democrática y los principios, derechos y libertades constitucionales.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones).

183. ICC N°127

Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

Número XX: El derecho a la educación. La educación es obligatoria desde el primer nivel de transición de la educación parvularia hasta el último año de enseñanza media. Los padres o quienes tengan el cuidado legal de niños y adolescentes tienen el derecho preferente para elegir el tipo de establecimiento en que sus hijos o pupilos recibirán enseñanza, así como el derecho de escoger, dirigir y orientar la educación moral y religiosa de sus hijos según sus convicciones, y que sus hijos reciban una educación acorde a la misma.

Para asegurar lo anterior, el Estado tiene el deber de:

- i. Financiar la provisión gratuita de estos niveles, así como también, promover y velar por el acceso a la educación superior, tanto universitaria como técnico profesional.
- ii. Garantizar la libertad de enseñanza, promoviendo el derecho de las personas e instituciones de crear, gestionar y solventar proyectos educativos autónomos que cumplan con las exigencias mínimas establecidas por la ley, sin establecer diferencias arbitrarias basadas, entre otras circunstancias, en la calidad confesional de los establecimientos. Será deber del Estado reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos, reconociendo también su autonomía. La libertad de enseñanza no tendrá otros límites que 3 los impuestos por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la nación.
- iii. Promover la libertad de elección de las familias respecto el tipo de educación para los niños y adolescentes a su cuidado, debiendo contribuir equitativamente a su financiamiento en proporción a las necesidades de cada cual, conforme a lo establecido por la ley. El Estado no podrá discriminar entre niños y adolescentes que se encuentren en la misma situación socioeconómica, independientemente del establecimiento educacional al cual asistan.
- iv. Fomentar el desarrollo y la calidad de la educación en todos sus niveles y la formación ciudadana y cívica; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación, sea que dichas actividades se desarrollen a través de instituciones públicas o privadas.

Una ley aprobada por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza, tanto a los establecimientos públicos como privados, y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Los proyectos educativos, públicos y privados, no deben estar orientados ni podrán propagar tendencias político-partidistas. El cuerpo docente deberá respetar esta condición, sin perjuicio del reconocimiento de su derecho a la libertad de cátedra.”

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

184. ICC N°145

Artículo XX: Libertad de enseñanza.

Se reconoce la libertad de enseñanza tendiente a asegurar el pluralismo, la tolerancia y la innovación.

Esta libertad comprende el derecho de todas las personas de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales instituyendo sus propios proyectos educativos en la forma y con los estándares de calidad definidos por la ley, y el derecho de padres, madres y cuidadores de escoger libremente una educación adecuada a sus creencias y convicciones.



En el caso de las instituciones de educación superior, se reconocen el derecho a la autonomía académica y a la libertad de investigación.

La enseñanza reconocida oficialmente, en todos sus niveles, no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones).

185. ICC N°276

Artículo XX: El cumplimiento de este Derecho Fundamental comprende la educación presencial como requisito de satisfacción del mismo, para la educación preescolar, básica y media, constituyendo obligación del estado proveer a su cumplimiento. Solo en circunstancias especiales calificada por ley podrá suspenderse la educación presencial por periodos predeterminados. Es responsabilidad del Estado asegurar que este derecho se cumpla en toda circunstancia, calificando las escuelas como establecimientos esenciales que deben permanecer abiertos y disponibles de forma prioritaria.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención).

186. ICC N°288

Artículo XX. “El Estado garantizará la no discriminación arbitraria dentro del ámbito educacional en cualquiera de sus niveles, resguardando la igualdad entre los alumnos que asisten a establecimientos educacionales estatales o a aquellos que asisten a establecimientos gestionados por privados con fondos públicos.

Asimismo, la ley deberá asegurar que el financiamiento provisto entregue las condiciones para una educación de calidad, tomando en cuenta la ruralidad y las características particulares de cada comunidad”.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones).

187. ICC N°330

Artículo XX.- Garantía de educación inclusiva, no sexista, diversa y democrática. *El Estado de Chile es garante de una educación inclusiva, no sexista, diversa y democrática para todos los habitantes de nuestro territorio a lo largo de la vida.*

Artículo XX.- Estado garante con funciones de gestión, ejecución y fiscalización. *La condición de Garante de Derechos, obliga al Estado a ser gestor, ejecutor y fiscalizador de la labor educativa. Por tanto, el sistema educacional se sostiene en un pilar central que es la Educación Pública.*

Artículo XX.- Educación comunitaria. *Allí donde se requiera y en acuerdo con las comunidades, él podrá delegar la función pública de la educación a organizaciones formales sin fines de lucro y de ciudadanía activa, que posean capacidad de gestión autónoma, con participación comunitaria vinculante y acompañamiento de órganos locales del Estado.*

Artículo XX.- Participación de las comunidades educativas. *El Sistema Educacional reconoce en las comunidades educativas a los actores centrales de los procesos formativos. La toma de decisiones respecto de las estrategias educativas recae en todos estos, sin exclusión y de acuerdo con sus responsabilidades y competencias.*

Artículo XX.- Pertinencia, participación, flexibilidad y no exclusión. *La Política Educativa contempla los principios de pertinencia, participación y flexibilidad para el diseño e implementación de proyectos educativos. Conforme a ello las instituciones y espacios educativos deberán desarrollar proyectos educativos situados e inclusivos, no pudiendo alejar a ninguna persona de su incorporación plena a los procesos educativos bajo pretextos excluyentes basados en la identidad sexo genérica, la procedencia geográfica, sus creencias, las capacidades diferentes, la pertenencia cultural o cualquier otra.*

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa.

188. ICC N°338

Artículo X. Derecho a la educación inicial gratuita, pública y plurinacional en un sistema único de Educación para la primera infancia. *La educación parvularia o inicial es el primer nivel del sistema educativo chileno y permite el ejercicio del derecho a la educación desde la sala cuna hasta el ingreso de la educación básica. El Estado es garante del financiamiento total de un sistema único, público y gratuito que esté orientado a la justicia educativa, ejercicio pleno y efectivo de los derechos de las niñas, niños de la primera infancia.*

Todas las niñas y niños tienen derecho a la Educación Parvularia Pública en condiciones de calidad, en establecimientos educativos y/o modalidades no convencionales que brinden acceso a oportunidades de aprendizaje oportuno, pertinente y lúdico para su desarrollo humano integral.



El Estado reconoce a la educación inicial como el primer espacio de formación ciudadana de niños y niñas, contribuyendo así a las bases de una vida democrática.

La educación inicial pública garantiza la formación de niñas y niños para la vida sostenible, con enfoque de equidad de género, territorial, plurinacional e inclusiva de los diversos contextos culturales y lingüísticos.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones).

El convencional Tirado votó en contra.

189. ICC N°343

Artículo XX. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. *Toda persona tiene derecho a la educación y al aprendizaje, en la forma y condiciones que regule la ley.*

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona a lo largo de toda su vida y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, para promover la tolerancia, el pluralismo y la paz social.

El cuidado y la educación de los hijos, hijas y pupilos son derecho y deber preferente de los padres, madres y cuidadores legales, lo que incluye la posibilidad de elegir libremente el proyecto educativo que recibirán.

En el caso de la educación parvularia, será obligatorio el segundo nivel de transición. El Estado financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores.

Es deber del Estado mantener un sistema de educación básica y media gratuitos, destinado a asegurar el acceso de toda la población, sin distinción de edad. Estos niveles serán de carácter obligatorio.

La educación técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a este nivel será igual para todas las personas, en función de los méritos respectivos. La educación impartida por los establecimientos estatales o en aquellos no estatales que disponga la ley será progresivamente gratuita.

Todas las personas tienen derecho a una educación inclusiva de calidad, capaz de adaptarse a los distintos contextos y particularidades. El Estado debe asegurar que el sistema educativo, en todos sus niveles, permita que las personas puedan desarrollarse de acuerdo con sus capacidades y necesidades especiales, en establecimientos de educación especial o regular.

El sistema de educación será de naturaleza mixta, incluyendo una de propiedad y administración del Estado o sus órganos, y otra particular, sea ésta subvencionada o pagada, en las condiciones objetivas, razonables, transparentes y no discriminatorias que establezca la ley.

El Estado deberá fiscalizar y apoyar a los establecimientos educacionales y sus sostenedores para garantizar el cumplimiento de las leyes y el acceso a una educación de calidad, con equidad.

Corresponderá también al Estado y a la comunidad toda, promover el desarrollo de la cultura, la investigación e innovación científica y tecnológica, la creación artística y la protección y conservación del patrimonio cultural y natural de la nación.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones).

190. ICC N°351

“Artículo.-(1)El Estado debe reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos que permitan el pleno desarrollo de las personas durante las distintas etapas de su vida, conforme a la pluralidad de culturas, valores e intereses presentes en nuestra Nación.

Para ello, es fundamental el deber y derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos. Asimismo, es deber de la comunidad en general contribuir a la enseñanza, desarrollo y perfeccionamiento de la educación, para lo cual el Estado reconocerá la debida autonomía de los centros educativos y de los docentes en el ejercicio de sus labores.

De esta manera, toda persona natural o jurídica a quien la ley no se lo prohíba, podrá fundar establecimientos de instrucción secundaria y superior. Solo estarán impedidos de fundar establecimientos de instrucción secundaria y superior, los que hubieren sido condenados por crímenes o por simples delitos mientras dure la condena. Esta incapacidad sin embargo, será perpetua respecto de aquellos que se encuentren inhabilitados de trabajar con menores de edad.

Artículo.-(2) La dignidad humana exige el reconocimiento del derecho a la educación, el que tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona durante las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Es deber de la comunidad en general contribuir a la enseñanza, desarrollo y perfeccionamiento de la educación,



para lo cual el Estado reconocerá la debida autonomía de los centros educativos y de los docentes en el ejercicio de sus labores.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística.

El Estado deberá reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos que permitan el pleno desarrollo de las personas durante las distintas etapas de su vida, conforme a la pluralidad de culturas y valores, presentes en nuestra Nación. La libertad de enseñanza no tendrá otros límites más que la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la Nación.

Sometido a votación el inciso 2 del artículo 1 se **rechazó** (10 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

Sometido a votación el resto del artículo 1 se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención).

Sometido a votación el inciso 2 del artículo 2 se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

Sometido a votación el resto del artículo 2 se **rechazó** (9 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

191. ICC N°359 (repetida en 373)

Artículo X. DERECHO A LA EDUCACIÓN. La educación es un proceso de enseñanzas y aprendizajes a lo largo de la vida, con carácter holístico y transformador; tiene por objetivos estimular la propensión y el goce de aprender en aras del desarrollo integral de las personas, el ejercicio de los derechos humanos, la valoración y respeto de la naturaleza, el fortalecimiento de la convivencia solidaria y democrática, y la construcción del bien común.

El Estado garantiza a todas las personas el derecho a una educación de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género y no sexista, intercultural, adecuada a sus necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística y respeto a los principios consagrados en esta Constitución, con especial énfasis en la libre determinación de los pueblos, y a los principios de autonomía progresiva e interés superior de las infancias y adolescencias.

El Estado asegurará la obligatoriedad y gratuidad entre el segundo nivel de transición parvularia y la educación media, extendiéndose la gratuidad desde el nivel de sala cuna y, progresivamente, a la educación superior.

El Estado reconoce la contribución que realizan las instituciones de educación superior a la creación y transferencia del conocimiento y la cultura, y al desarrollo de las regiones y el país. La Constitución garantiza la autonomía académica, gestión financiera y administrativa de estas instituciones en un marco de control democrático y participativo de las comunidades educativas en su totalidad.

El profesorado representa un pilar fundamental en los procesos educativos y por tanto el Estado protege, reconoce y valora su rol para su realización plena. El Estado deberá impulsar un sistema de desarrollo continuo para las trabajadoras y trabajadores de la educación, que favorezca a su vez, las condiciones laborales y materiales adecuadas para el ejercicio de la labor educativa de acuerdo con los propósitos establecidos en esta Constitución.

El Estado debe fomentar la creatividad e innovación pedagógica y de gestión, que permitan adecuar los procesos educativos en miras de lograr accesibilidad universal.

El Estado garantiza el derecho de las comunidades para participar en la gestión educativa, y reconoce que los establecimientos educacionales constituyen una comunidad democrática de aprendizaje; quienes promoverán la colaboración de personas y organizaciones de carácter local en torno al cumplimiento del derecho a la educación.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones).

192. ICC N°363

I. Derecho a la educación.

Artículo XX. La educación es un derecho humano esencial, indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El Estado tiene la función primordial, ineludible e indelegable de garantizar a todas las personas a lo largo de la vida su provisión gratuita y un acceso universal, permanente, inclusivo, democrático e integral.

II. Propósito de la educación.

Artículo XX. La educación es fundamental para la vida digna, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo plurinacional.



Su objetivo central es contribuir al fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos, a la creación de una sociedad justa e igualitaria, al bienestar individual y colectivo, la protección de la naturaleza, biodiversidad, los territorios, al trabajo decente, al desarrollo productivo, científico, cultural y a la convivencia armónica de los pueblos naciones.

La educación constituye el espacio de formación integral de las personas y comunidades, estimulando esencialmente el sentido crítico, enfoque de género, y el desarrollo del conocimiento, en un ambiente de respeto mutuo y relaciones horizontales y cooperativas. La educación es diversa, inclusiva, descolonizadora, plurilingüe e intercultural, ecológica y libre de toda discriminación, sexismo, racismo y discursos de odio.

La educación brinda oportunidades educativas a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión.

El Estado otorgará especial protección a la educación propia de los pueblos originarios, respetando su derecho a la enseñanza y aprendizaje de su lengua, su cultura, saberes e identidad, y fomentará la mantención de las demás culturas, lenguas, saberes e identidades de los pueblos naciones en Chile.

III. Sistema Plurinacional de educación pública y financiamiento.

Artículo XX. El Estado como primer responsable del derecho a la educación, organiza y gestiona el sistema plurinacional articulado de educación pública de carácter democrático y comunitario, mediante servicios públicos, con financiamiento permanente, directo y basal, esto es, pertinente y suficiente que les permita cumplir plena y equitativamente con su función. Para ello el Estado debe destinar a lo menos el 6% del producto interno bruto del país, de acuerdo a la progresividad que establezca la ley.

La educación parvularia, la educación básica y la educación media serán obligatorios y gratuitos. La educación superior pública será gratuita. La educación pública impartida en todos los niveles y modalidades educativas será de carácter laica, emancipadora, participativa, solidaria, democrática, contextualizada, promotora de la paz y respetuosa de toda corriente de pensamiento con respeto a los derechos humanos.

El Estado promoverá la educación pública de gestión comunitaria comprendida como un proceso educativo no formal, colectivo y diverso, siempre que ésta se organice por medio de un programa sistemático, verificable, sin fines de lucro, emanado de los actores que la componen y que asegure un aprendizaje permanente para alcanzar el máximo desarrollo intelectual y cultural. Esta educación podrá formar parte del sistema nacional de educación pública y recibir financiamiento estatal, de conformidad a la ley.

IV. Comunidades.

Artículo XX. El Estado garantiza el derecho a la participación de las personas, familias y comunidades en el proceso educativo.

Los establecimientos educacionales constituyen una comunidad democrática de aprendizaje compuesta por estudiantes, sus cuidadores y tutores, las y los profesores, educadores, asistentes de la educación, académicos, funcionarios y directivos; quienes promoverán la colaboración de organizaciones de la sociedad civil de carácter local.

Las instituciones reconocidas oficialmente deberán contar con un Consejo Educativo integrado por representantes de toda la comunidad, electos democráticamente, el que tendrá facultades resolutorias en la dirección y gestión del proyecto educativo institucional, en la construcción de los pilares del proyecto educativo-pedagógico de acuerdo a las necesidades particulares de las comunidades y en el marco de los principios generales de la educación, en las modificaciones al reglamento interno y, en el caso de los establecimientos pertenecientes al sistema de educación pública, además, participarán en la administración de los recursos.

El Consejo Educativo, tendrá, en el marco de los propósitos generales de la educación, la facultad para situar el currículum nacional en consideración del proceso de enseñanza- aprendizaje y de las necesidades, intereses y características personales, culturales de las y los estudiantes, sus contextos y sentido de pertinencia.

Las comunidades de aprendizaje, organizadas de conformidad a la ley, participarán de manera vinculante en la definición de las políticas públicas educativas.

V. Libertad de enseñanza y aprendizaje.

Artículo XX. El Estado respetará y garantizará la libertad de aprendizaje como expresión de diversidad. Esta comprende la posibilidad de toda persona, madres, padres o cuidadores de elegir establecimientos educacionales.

Esta garantía incluye el respeto a la libertad de los particulares para fundar proyectos educativos privados, quienes estarán obligados a funcionar de acuerdo a los propósitos de la educación, y



estarán al servicio del interés público, no respondiendo a intereses corporativos. Aquellos que logren obtener el reconocimiento oficial del Estado, serán examinados por la autoridad pública de acuerdo a la ley.

VI. Trabajadores.

Artículo XX. Las y los profesores y educadores son un pilar fundamental en el sistema educativo. El Estado garantizará su formación, con carácter gratuito, la actualización continua de sus conocimientos, estabilidad en el ejercicio de sus funciones y el mejoramiento permanente de sus condiciones materiales, las que deberán ser adecuadas para un ejercicio pedagógico reflexivo, colaborativo y agente de los propósitos de la educación.

El Estado garantizará la formación gratuita de los asistentes de la educación la que será coherente con los propósitos de la educación.

Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. Esta libertad comprende la autonomía para planear los procesos de enseñanza, elegir los métodos o técnicas para su ejercicio lectivo y expresar libremente sus opiniones en el marco de los propósitos de la educación.

Con independencia del establecimiento educacional donde cumplan sus funciones, las y los profesores, educadores y asistentes de la educación se regirán por estatutos laborales especiales, únicos y universales, que señale la ley. El Estado garantiza, en todo caso, a los trabajadores de la educación, todos los derechos tanto individuales como colectivos consagrados en la Constitución.

La convencional Meneses **retiró** la iniciativa.

193. ICC N°369

Artículo XX. Derecho a la educación: la educación es un derecho humano habilitante para ejercer todos los demás derechos y es deber del Estado garantizarla de manera insustituible, a través de una educación integral y de calidad, adecuada a las necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística.

Artículo XX. Principios de la educación: la educación, en su rol social, debe ser transformadora, con miras a construir una sociedad igualitaria, democrática, inclusiva, ecológica, laica, no sexista, plurinacional y sin fines de lucro; además de proteger y promover el bienestar colectivo, personal y el buen vivir, con respeto a los derechos humanos y de la naturaleza.

La educación debe resguardar la autonomía progresiva de niñas, niños y jóvenes, reconociendo y respetando la identidad, orientación y expresión sexogenéricas, sin discriminación y respetuosa de las necesidades educativas especiales. Debe estimular la propensión y el goce por aprender y el pleno desarrollo de la personalidad, la emocionalidad y la espiritualidad, generando espacios seguros para el aprendizaje y fomentando el pensamiento crítico y reflexivo.

Es función primordial del Estado garantizar a toda persona, sin distinción, la adecuada disponibilidad y el acceso gratuito, la permanencia y participación tanto a la educación formal y la considerada comunitaria y no formal, en todos los niveles y modalidades educativas y durante todas las etapas de la vida de las personas.

Artículo XX. Sistema Nacional de Educación Pública: el Estado organizará, por medio de la ley respectiva, un Sistema Nacional de Educación Pública, de carácter democrático, con pertinencia territorial y centrado en las comunidades, conformado por establecimientos que actuarán de forma integrada. Todo establecimiento que quiera funcionar deberá cumplir con los requisitos y obligaciones que establezca la ley.

La educación básica y media serán obligatorias y gratuitas. La educación parvularia y la educación superior pública serán gratuitas. La educación cívica, la educación física, la educación ambiental y la educación sexual integral serán obligatorias en todos los niveles.

El Estado consagra el derecho a todas las familias, las comunidades y tutores a elegir el tipo de educación de niñas, niños y jóvenes; así como el derecho a participar en la creación e implementación del proyecto educativo que permita su desarrollo integral.

Artículo XX. Financiamiento de la educación: el Estado administrará y gestionará el Sistema Nacional de Educación Pública por medio de un financiamiento permanente, basal, que responda a las características y necesidades de las comunidades, que permita funcionar de manera eficiente y digna a todos los establecimientos públicos. El Estado no proporcionará recursos a proyectos educativos privados.

Artículo XX. Reconocimiento del trabajo docente: la labor docente es fundamental dentro del sistema educativo. Es deber del Estado garantizar su desarrollo desde la formación inicial, en los procesos de aprendizaje continuo y el fomento de la innovación pedagógica y de gestión; además proveer de condiciones materiales adecuadas para todos los trabajadores de la educación; y



respaldar la autonomía y la libertad de las y los docentes para ejercer su rol dentro del sistema educativo, participar plenamente en el debate público y el diálogo sobre los futuros de la educación.

Artículo XX. La libertad de aprendizaje y enseñanza: el Estado garantizará a las comunidades la libertad de decidir sus propios proyectos educativos, con participación democrática de sus miembros y en base a los principios declarados en la presente Constitución. Las y los docentes poseen libertad de cátedra para diseñar metodologías de aprendizaje y enseñanza, y la autonomía para implementarlas.

Se permite la existencia de proyectos educativos particulares sin fines de lucro, que cumplan con los requisitos establecidos por la ley y los principios de la Constitución. Es deber del Estado promover dicha libertad entendida en los términos que aquí se definen.

Sometido a votación el artículo relativo al financiamiento se **rechazó** (3 votos a favor, 26 en contra y 2 abstenciones).

Sometido a votación el resto de los artículos se **rechazó** (3 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención).

194. ICC N°386

ARTÍCULO XX: DERECHO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL. *Todas las personas tienen el derecho a acceder a una educación pública, gratuita, de calidad, laica, no sexista, plurilingüe e intercultural, en todos los niveles y formas de educación. Las personas pertenecientes a los pueblos indígenas tienen además derecho a acceder a una educación conforme a su propia cultura e instituciones.*

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la educación de los pueblos indígenas, en todas sus dimensiones y niveles.

El Estado respeta, promueve, garantiza y financia los sistemas educativos propios de cada pueblo, reconoce a las autoridades y personas que la imparten y promueve en el sistema de educación superior público, la formación de profesionales con conocimientos específicos para profundizar la plurinacionalidad e interculturalidad.

Es deber del estado garantizar que los pueblos indígenas cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general.

El estado garantiza que la ley General de Educación y otros cuerpos normativos del área, deben incluir en el currículum una perspectiva intercultural y de género, respetuosa de la historia, cultura y conocimientos de los pueblos originarios. Es deber del Estado garantizar la participación de los pueblos originarios en la definición del currículum nacional, y la participación de las familias y comunidades en la definición del Proyecto Educativo Institucional de las unidades educativas en el nivel territorial y local. Para ello, se creará un Sistema Único de Educación Plurinacional e Intercultural.

Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

ARTÍCULO XX - DISPOSICIÓN TRANSITORIA *En el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Estado deberá impulsar un proceso de participación y consulta indígena previa, libre y vinculante, a fin de obtener el consentimiento de los pueblos y naciones preexistentes en cuanto al procedimiento mediante el cual se trasladará en lo pertinente la administración de los sistemas e instituciones de educación estatal a los pueblos y naciones originarias.*

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa.

195. ICC N°411

Artículo XX. ALTA CAPACIDAD E INCLUSIÓN: NADIE FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO. *Es deber del Estado garantizar un sistema educativo inclusivo en todos sus niveles. Todos los niños, niñas, adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales y alta capacidad, deberán contar con adecuaciones curriculares diferenciadas y apoyos socioafectivos que les permitan desarrollar su personalidad, sus aptitudes y sus capacidades mentales y físicas hasta el máximo de sus posibilidades.*

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones).



196. ICC N°437

Artículo XX. El Estado garantizará que todas las personas reciban una educación integral, en un contexto afectivo, abarcando aspecto emocionales, sociales, corporales, psicológicos, cognitivos y espirituales para el desarrollo de una conciencia ética y ecológica.

Artículo XX. El estado debe promover la co-construcción de mallas curriculares participativas, flexibles, dinámicas e incluyentes; generando cátedras destinadas al estudio, debate y reflexión acerca de los Derechos Humanos y su importancia en el respeto por la vida y por la historia reciente de Chile, una visión intercultural, en relación a la diversidad geográfica, cultural, lingüística del país; a fin de promover el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Artículo XX. El Estado debe promover y garantizar que las universidades que forman a los profesores del país, tengan en sus mallas curriculares destinadas a cumplir los objetivos señalados en el artículo 2.

Artículo XX. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico que propendan al desarrollo de la inteligencia afectiva, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.

La convencional Labraña **retiró** la iniciativa

197. ICC N°535

Artículo X. Derecho a la educación intercultural plurilingüe. Todas las personas y miembros de pueblos y naciones indígenas y tribales tienen derecho a una educación intercultural plurilingüe con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, en sus lenguas, con sus propios métodos educacionales e identidad cultural, saberes y conocimientos ancestrales, en concordancia con los objetivos de desarrollo de las regiones, comunidades autónomas y autonomías territoriales indígenas, siendo esto base del Estado Plurinacional.

El Estado deberá garantizar y promover el acceso a la educación intercultural plurilingüe para todos desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Los distintos programas educativos y el currículum plurinacional deben incluir la herencia cultural de los pueblos, las historias, los conocimientos, tecnologías y cosmovisiones, en consulta con las comunidades indígenas y tribales.

El Estado reconoce a los agentes de educación tradicional, respetando su autonomía, dignidad y derechos laborales. El Estado deberá crear una política de formación del profesorado y de todos los agentes vinculados a la educación desde una perspectiva intercultural y plurinacional.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

198. ICC N°623

Artículo x1: Derecho a la Educación. La Educación es un derecho social y un deber ineludible e inexcusable del Estado.

La Educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.

El Estado asegurará una educación pluralista, inclusiva y diversa, según las necesidades e identidades culturales, productivas, geográficas, territoriales y cosmovisiones de nuestro territorio.

Toda persona que habita en Chile tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, laica, gratuita, pluralista, inclusiva, integral, intercultural, no sexista y libre de toda violencia o discriminación.

Artículo x2: Del objetivo de la Educación. La educación tendrá como objetivo la democratización, la descolonización y despatriarcalización de la sociedad, la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia crítica.

La Educación será pública, plurinacional, estatal, comunitaria, democrática, pluralista, universal, no sexista, participativa, descolonizadora, inclusiva e integral. Se centrará en el respeto y valoración de los derechos de la Madre Tierra (Ñuke Mapu -Pachamama), preservación y conservación de la biodiversidad, junto con el desarrollo holístico del ser humano, en los marcos de una educación para la democratización, el diálogo intercultural, la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos, el resguardo a la libertad de cátedra, el reconocimiento de la riqueza pluricultural y multiétnica de nuestros territorios, las formas de vida colectivas y comunitarias de producción e intercambio con la naturaleza y los demás seres humanos; además de la promoción de los principios de respeto a los adultos mayores y la recuperación de sus saberes, junto a la defensa y difusión de las lenguas



de las naciones y pueblos indígenas, de su música, danzas, deportes y demás componentes culturales.

Artículo x3: El Sistema Plurinacional de Educación Pública. Está integrado por una institucionalidad única de educación inicial, la educación regular escolar obligatoria de primero básico a cuarto medio, la educación no formal, las instituciones de educación privada debidamente acreditadas y la educación superior pública y gratuita.

El sistema educativo tendrá un financiamiento basal y estratégico, para el cumplimiento de los proyectos educativos nacionales y territoriales. Este sistema Plurinacional se fundamenta en una educación socio-comunitaria-afectiva, humanista, científica, artística, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora, crítica, solidaria y transformadora, poniendo en el centro el valor del trabajo y la democratización para la justicia social.

Artículo x4: El derecho y el deber de Participar de la Educación Pública. Las madres, padres, cuidadores y tutores, junto a todos los tipos y formas de familias trabajadoras, tendrán el derecho y el deber de participar del sistema educativo, mediante organismos representativos e instrumentos de participación directa y democráticas para diseñar y co-construir, junto a las comunidades educativas y su entorno territorial y cultural los proyectos educativos comunitarios de los territorios y a nivel nacional, mediante un congreso de educación permanente y vinculante, que tenga como función, construir y asegurar la implementación y actualización del proyecto educativo nacional. Los establecimientos educacionales contarán con consejos escolares resolutivos, democráticos y representativos de las organizaciones y formas de asociatividad de cada estamento de la comunidad escolar.

Artículo x5: De las y los Trabajadores de la Educación. Las y los trabajadores de la educación pública tendrán un contrato único, estatal e indefinido en todos sus niveles, con una carrera funcionaria que proteja la igualdad salarial y reconozca la experiencia, especialización y capacitación permanente, la cual será responsabilidad del Estado promover y financiar.

Artículo x6: Educación Comunitaria y No Formal. El Estado, a través del Sistema Plurinacional de Educación Pública, promoverá la creación y organización de programas educativos populares y comunitarios no formales, los cuales podrán recibir aportes del Estado y serán ejecutados por educadores populares, Kimelfes, Amautas tradicionales y organizaciones e instituciones comunitarias como juntas vecinales, clubes deportivos, centros culturales, conservatorios, universidades, asociaciones culturales y deportivas, sindicatos, centros de pensamiento, entre otras organizaciones jurídicas sin fines de lucro.

Artículo XX. Del derecho a la educación. La educación es un derecho humano de todas las personas. Su objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad humana en las distintas etapas de la vida en sociedad, a través de un proceso continuo y progresivo que promueva el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, la justicia social, los valores democráticos y las libertades fundamentales. Asimismo, propenderá a la concientización y erradicación de los prejuicios, las desigualdades estructurales y todas las formas de discriminación, la violencia, acoso y bullying, en particular en contra de grupos desaventajados.

El Estado debe otorgar especial protección al ejercicio de este derecho, fomentando el desarrollo de la educación en todos sus niveles, asegurando la investigación científica y tecnológica, así como la libre creación artística en todo el país. El sistema educativo, en su totalidad, está bajo la supervisión del Estado, el cual promoverá transversalmente la participación democrática de las comunidades educativas para el desarrollo y perfección de la educación, colaborando en la elaboración de programas pertinentes de buena calidad y la adecuación cultural de la educación como ejes fundamentales del sistema.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención).

199. ICC N°629

Artículo XX. Del derecho a la educación. *La educación es un derecho humano de todas las personas. Su objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad humana en las distintas etapas de la vida en sociedad, a través de un proceso continuo y progresivo que promueva el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, la justicia social, los valores democráticos y las libertades fundamentales. Asimismo, propenderá a la concientización y erradicación de los prejuicios, las desigualdades estructurales y todas las formas de discriminación, la violencia, acoso y bullying, en particular en contra de grupos desaventajados.*

El Estado debe otorgar especial protección al ejercicio de este derecho, fomentando el desarrollo de la educación en todos sus niveles, asegurando la investigación científica y tecnológica, así como la libre creación artística en todo el país. El sistema educativo, en su totalidad, está bajo la supervisión del Estado, el cual promoverá transversalmente la participación democrática de las comunidades educativas para el desarrollo y perfección de la educación, colaborando en la



elaboración de programas pertinentes de buena calidad y la adecuación cultural de la educación como ejes fundamentales del sistema.

La educación será obligatoria desde el nivel medio menor de educación parvularia hasta el último año de enseñanza media, buscando extender este derecho a la educación superior. El derecho a la educación es inseparable de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, por cuanto se debe ejercer haciendo prevalecer siempre el interés superior de estos.

Es deber del Estado garantizar un sistema educacional público, laico, gratuito, no sexista y de calidad, sin discriminaciones de género, clase, etnia y religión, con acceso universal e inclusivo para todos los niveles, constituyendo un área prioritaria de la política pública y de inversión estatal. El Estado, a través de la educación, debe promover la erradicación de las desigualdades económicas, sociales, culturales y ecológicas. Toda institución educativa del Estado deberá ofrecer acceso gratuito a la formación que ofrece en los términos que establece la ley.

Asimismo, corresponde al Estado el desarrollo de una política educacional progresiva que asegure mecanismos inclusivos de acceso, permanencia y desarrollo del nivel superior. Corresponde a la ley determinar las formas y requisitos para cumplir con estas obligaciones, las que deben estar, sin embargo, orientadas por la equidad social, el desarrollo de la persona y las necesidades del país.

Cada nivel educativo deberá desarrollar al ser humano de una manera integral en sus múltiples dimensiones de acuerdo a su etapa de desarrollo. Ninguna persona será privada de su derecho a aprender y el Estado garantizará el reconocimiento de aptitudes o capacidades, mediante la aplicación obligatoria de mecanismos de acceso inclusivos, objetivos y transparentes, proscribiendo toda selección arbitraria.

En todos los niveles educativos, la actividad educacional podrá ser desarrollada por establecimientos privados, previo reconocimiento oficial, sometiéndose éstos a la supervisión del Estado. Serán permitidos todos los proyectos institucionales, siempre y cuando no fomenten la segregación ni la discriminación arbitraria de integrantes de las comunidades educativas. Es deber del Estado promover la libertad de enseñanza, entendiéndola como la diversidad de proyectos educativos y el respeto de la libertad de los docentes en el aula, siempre que estos se rijan por el respeto a los derechos humanos, los principios democráticos, la noción de no discriminación, los avances científicos y el respeto a la ley.

Todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, sean públicos o privados, podrán desarrollar libremente la enseñanza, mientras sea democrática y pluralista, sin una orientación político partidaria o ideológica, y de acuerdo a los conocimientos científicamente afianzados.

Además, mediante los mecanismos que establezca la ley, se asegurará el desarrollo y valorización de la profesión docente, así como de quienes realizan funciones asistentes de la educación.

Es deber del Estado asegurar el adecuado financiamiento de las instituciones de educación estatales, para que estas puedan cumplir plenamente sus funciones, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos, tecnológicos, medioambientales y culturales del país, rigiéndose por los principios de inclusión, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.

Es materia de ley establecer los requisitos mínimos exigibles para todos los establecimientos y para cada nivel educacional, así como las normas objetivas, de general aplicación, que precisen los derechos y obligaciones señalados en este artículo.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 26 en contra y 2 abstenciones).

200. ICC N°644

I.- Comisión de Derecho Fundamentales

Derechos lingüísticos de los pueblos y naciones originarias

Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen derecho a revitalizar, preservar y difundir, sus lenguas, de acuerdo al territorio que pertenezcan, pudiendo expresarse, comunicar y darse a entender, sin discriminación, en todas las áreas y ámbitos de la vida.

El Estado promoverá los derechos lingüísticos de los pueblos y naciones originarias, con independencia de los estados de vitalidad de sus lenguas, atendiendo a la suscripción de tratados internacionales, como acto de reparación ante las situaciones de desplazamiento lingüístico de las lenguas originarias.

El Estado promoverá y contribuirá con asesoría técnica y recursos suficientes para lograr sus fines, en la fundación de Institutos de Lengua y Cultura de los Pueblos y naciones preexistentes,



como organismos autónomos, compuesto por integrantes de los pueblos con conocimientos formales y no formales, dedicados a la investigación, difusión y formación en sus lenguas y culturas respectivas

Derecho a una educación propia de los pueblos y naciones originarias

El Estado deberá promover, respetar e incentivar los procesos educativos propios de los pueblos y naciones originarias. En este marco, se deben definir garantías y financiamiento para la formación de especialistas en lengua y cultura originaria validados internamente y con autonomía por cada pueblo y nación originaria, garantizando la vigencia y transmisión de valores culturales propios. Por otra parte, también se deberán garantizar criterios de flexibilidad para la admisión de educadores tradicionales, sabios u otros representantes de pueblos o naciones originarias a la educación superior. Así mismo, se deberán garantizar condiciones de trabajo y remuneraciones dignas para quienes ejercen como educadores y educadoras tradicionales en las comunidades educativas u otros espacios propios de transmisión del saber ancestral.

Sometido a votación el inciso final se **rechazó** (6 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones).

Sometido a votación el resto del articulado se **rechazó** (5 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones).

201. ICC N°646

ARTÍCULO X. DERECHO A LA EDUCACIÓN. *La educación es un derecho fundamental y por consiguiente, la Constitución asegura a todas las personas:*

Que, la educación es un conjunto de procesos de enseñanzas y aprendizajes con carácter holístico y transformador. Ésta tiene por objetivos estimular la propensión y el goce de aprender en aras del desarrollo integral de las personas a lo largo de sus vidas, fomentar su participación libre y autónoma, fortalecer la convivencia solidaria y democrática, promover y proteger la naturaleza, el respeto por los derechos humanos y las diversidades, sobre la base de los enfoques de inclusión, pluralismo, igualdad de género y no sexismo, plurinacionalidad e interculturalidad. La educación tiene pertinencia territorial, cultural y lingüística.

La educación es una función primordial del Estado, quien debe asegurar a toda persona, de manera gratuita, y sin discriminación, la adecuada disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, permanencia, promoción y participación en todos los niveles y modalidades educativas. Queda prohibida la provisión de educación con fines de lucro.

Para el cumplimiento de estos deberes, el Estado organizará y desarrollará un Sistema Nacional de Educación conformado por establecimientos educativos en y de los diversos niveles y modalidades, sean estatales o privadas, que deberán actuar de forma integrada, en torno a procesos educativos. La ley regulará el sistema de organización, administración, fiscalización y financiamiento de los establecimientos educacionales. En el caso de los establecimientos estatales, estos deberán ser laicos y su financiamiento será a través de fondos directos, basales y anuales, cautelando su proyección y planificación estratégica para el país y su vinculación con el desarrollo nacional y regional.

El Estado reconoce a la educación inicial como el primer espacio de formación ciudadana de infantes, contribuyendo así a las bases de una vida democrática. La educación básica y media son obligatorias.

El Estado reconoce la contribución que realizan las instituciones de educación superior a la recreación del acervo cultural en todas sus expresiones y a la creación de nuevos conocimientos, lo que ayudará al desarrollo de las regiones y el país. La Constitución garantiza la autonomía académica, gestión financiera y administrativa de estas instituciones en un marco de control democrático y participativo de las comunidades educativas en su totalidad.

El Estado debe promover la creatividad e innovación pedagógica y de gestión, que permitan crear y adecuar los proyectos y procesos educativos en miras a lograr el pleno disfrute del derecho a la educación.

El Estado garantiza el derecho de las comunidades a participar en la gestión educativa y reconoce que los establecimientos educacionales constituyen una comunidad democrática de aprendizaje; quienes promoverán la colaboración de personas y organizaciones de carácter local en torno al cumplimiento del derecho a la educación.

Las personas que tienen el deber de cuidado de infantes y adolescentes tienen la facultad de escoger el tipo de educación desde la inicial hasta la básica inclusive, en armonía con los principios de interés superior y de autonomía progresiva. Se posibilita el ejercicio de la facultad antes descrita a través de la creación de proyectos educativos identitarios o con diversos marcos curriculares, siempre que respeten especialmente los deberes y principios establecidos en este artículo, así como los establecidos por esta Constitución y por las leyes que se dicten para su



reconocimiento oficial y continuidad. Estas facultades no son un impedimento para el ejercicio del derecho a la educación.

El profesorado, entre ellos, educadores tradicionales, representa un pilar fundamental en los procesos educativos y por tanto el Estado reconoce y protege su rol para su realización. Para ello, el Estado les garantiza estándares de formación inicial y continua, propendiendo a su actualización en los conocimientos científicos, sensibilidad a la reflexión filosófica, a la experiencia artística y a las necesidades de la sociedad como a sus procesos de transformación, como, a su vez, las condiciones laborales y materiales adecuadas para el ejercicio de la labor educativa de acuerdo con los propósitos establecidos en esta Constitución.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención).

202. ICC N°650

Artículo 1. La educación es un derecho fundamental y obligatorio garantizado, resguardado, financiado y administrado directamente a través del Estado en un régimen desconcentrado.

Artículo 2. La administración de la educación es realizada por medio de un Sistema Plurinacional de Educación Pública, que es un conjunto de instituciones desconcentradas, pero dirigidas desde el Estado directamente por el Ministerio de Educación Pública. Los organismos desconcentrados y el propio Ministerio de Educación Pública son instituciones públicas con participación vinculante de las comunidades locales y territoriales, representados por trabajadores, apoderados y estudiantes.

Artículo 3. El Estado financia directamente el sistema Plurinacional de Educación a través de un financiamiento basal que asegurará el desarrollo de los proyectos educativos locales y desconcentrados.

El Estado sólo puede financiar la educación que sea directamente administrada por los organismos desconcentrados y dependientes del Estado, dejando fuera cualquier financiamiento a privados en educación.

Artículo 4. El principio rector que sustenta esta educación estatal es la interculturalidad y el respeto por los procesos locales y territoriales, tendiendo a la armonización entre un sistema plurinacional para todo el territorio nacional y las problemáticas locales de cada uno de los territorios.

Los principios [características] que tendrá la educación estatal que es administrada por el Sistema Plurinacional de Educación Pública son: plurinacional; intercultural; participativa; democrática; laica; humanista; con enfoque en el desarrollo sustentable de las comunidades y territorios; no discriminativa; permanente; con infraestructura que permitan una habitabilidad digna, definida desde las necesidades de los territorios.

Artículo 5. El Estado garantiza la construcción, sustentabilidad, extensión, diseño, mejoramiento, permanencias, alcances y mantención de la infraestructura de la Educación Pública y Estatal, a través de una Unidad Técnica de Infraestructura Educativa Pública y Estatal, dependiente del Ministerio de Educación y de carácter desconcentrado, incorporando a la comunidad de manera vinculante para el desarrollo de proyectos educativos.

Artículo 6. La infraestructura educativa, garantizada por el Estado, debe ser reflejo de la cultura local y territorial, no discriminativa, incorporando dentro de esta los factores que sean necesarios para el desarrollo integral de las personas y la comunidad, con participación vinculante de los habitantes del territorio.

Artículo 7. Esta norma constitucional será complementada con una ley orgánica constitucional, que establecerá la articulación curricular necesaria para garantizar la aplicación de los principios [características], considerando el currículum, las condiciones de enseñanza, las condiciones laborales, las instituciones auxiliares y la organización democrática interna de las unidades educativas.

La convencional Dayyana González **retiró** la iniciativa.

203. ICC N°651

Artículo.- El Estado deberá ofrecer en forma libre e igualitaria una educación con enfoque socioecológico.

El Estado, en sus planes y políticas educativas deberá ofrecer en forma libre e igualitaria una educación con enfoque socioecológico que salvaguarde la salud mental y física de la niñez y la juventud, que permita superar la pobreza alimentaria, como una herramienta fundamental del proceso educativo de los niños, jóvenes y adultos en todos los niveles de aprendizaje, fortaleciendo la formación de personas conscientes, críticas y reflexivas, motivadas para una participación ciudadana activa y reconociendo sus derechos y deberes frente al desarrollo social, ambiental y sostenible del país, promoviendo el desarrollo de acciones y hábitos que permitan la



mitigación y adaptación a la crisis climática, y entregando herramientas preventivas para la reducción del riesgo de desastres naturales en los establecimientos educacionales y en las comunidades circundantes.

Artículo. -El Estado debe garantizar acceso libre e igualitario a la educación socioecológica. como una herramienta fundamental del proceso educativo de los niños, jóvenes y adultos en todos los niveles de aprendizaje, fortaleciendo la formación de personas conscientes, críticas y reflexivas; motivadas para una participación ciudadana activa y reconociendo sus derechos y deberes frente al desarrollo social, ambiental y sostenible del país.

Artículo.- Principios de igualdad, equidad social, solidaridad, inclusión y sostenibilidad ecológica. Los planes y programas relacionados con la educación socioecológica deberán someterse a los principios de igualdad, equidad social, solidaridad, inclusión y sostenibilidad ecológica. Constituyen las bases fundamentales de un sistema educativo y este debe estar presente en todos los niveles, promoviendo la conservación de la diversidad biológica, la armonía con la naturaleza, el bienestar social y la equidad intergeneracional.

Sometido a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones).

204. ICC N°662

Artículo X. *El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación.*

La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tiene como propósito el desarrollo integral de la persona, su personalidad, el sentido de su dignidad, el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, así como, la construcción del bien común, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fortalecimiento de la convivencia democrática y pacífica para el desarrollo de una sociedad justa, libre, diversa y cohesionada, la valoración y respeto de la Naturaleza y el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural del país.

Deberá ser una educación integral y de calidad, rigiéndose especialmente por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista, ambiental, y con pertinencia local, cultural y lingüística. Se entenderá por calidad de la educación el cumplimiento de los propósitos y principios antes mencionados.

La educación será una función primordial del Estado.

Los establecimientos de educación parvularia, básica y media, así como también las instituciones que provean educación superior, conforman un sistema nacional de educación basado en el principio de colaboración, que tendrá como centro la experiencia educativa de los estudiantes. El Estado fomentará su mejoramiento continuo y ejercerá labores de regulación, promoción y supervigilancia. Las instituciones que conforman este sistema estarán sujetas al régimen común que jara la ley, no podrán perseguir fines de lucro y se orientarán por los principios de este derecho y los generales que establezca esta Constitución.

La educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

La Constitución reconoce procesos educativos no formales, realizados por medio de programas sistemáticos, no necesariamente evaluados y que podrán ser reconocidos y verificados según lo dispuesto por la ley.

Para garantizar universalmente el derecho a la educación habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas organizado, financiado y administrado por el Estado, el que orientará el desarrollo del sistema educacional nacional. Su fortalecimiento y desarrollo será un deber especial del Estado. Este sistema deberá proveer de manera progresiva una educación laica, gratuita y pertinente territorialmente.

La Constitución reconoce el derecho de los integrantes de cada comunidad educativa a participar tanto en decisiones de la unidad respectiva, como de la política educacional local y nacional que sean relevantes para su quehacer y para el ejercicio del derecho a la educación.

La ley especificará las condiciones y órganos para asegurar la participación vinculante de los integrantes de la comunidad educativa en todo establecimiento o institución reconocida oficialmente por el Estado.

La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y su contribución al pluralismo educativo.

La libertad de enseñanza comprende el derecho preferente de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir la educación de las personas a su cargo. Este derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y de conformidad a la ley. Comprende también el derecho de toda persona a crear y gestionar proyectos educativos, los que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios y



respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución y las demás condiciones que establezca la Ley.

Los proyectos educativos así creados, que sean gratuitos y cumplan con los demás requisitos que para eso je la Ley, podrán recibir financiamiento del Estado. Estos proyectos serán parte de un sistema que el Estado deberá articular, resguardando su rol público.

La Constitución reconoce la función primordial de profesores, profesoras, educadores y educadoras, así como de asistentes de la educación, en el resguardo del derecho a la educación.

El Estado protegerá el rol docente para lo cual deberá fortalecer su función, promover el desarrollo de la profesión, mejorar sus condiciones laborales y resguardar la autonomía profesional de acuerdo a los propósitos establecidos en esta Constitución y la Ley.

El Sistema de Educación Superior estará conformado por las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales reconocidos por el Estado. Todos ellos deberán guiarse por los principios que esta Constitución establece, de acuerdo a los requerimientos educacionales, productivos, científicos y culturales del país.

En virtud del deber especial mencionado en el inciso 8º, el Estado deberá desarrollar y fortalecer los establecimientos estatales de educación superior.

Las Universidades privadas podrán ser especialmente reconocidas por ley, acreditando haberse dado una organización interna que asegure su plena autonomía respecto de sus fundadores o los sucesores a cualquier título de éstos, y cumpliendo los demás requisitos que fije la ley. Este reconocimiento les permitirá acceder a un trato preferente del Estado.

Las Universidades estatales y las Universidades privadas así reconocidas, serán autónomas. La Constitución protege la libertad de cátedra e investigación y la libre discusión de las ideas de sus académicos y académicas.

El Estado velará por el acceso a la educación superior de todos los estudiantes que cumplan los requisitos de admisión establecidos por la ley, fomentará la igualdad de acceso, con especial atención a los grupos históricamente excluidos, y garantizará progresivamente la gratuidad en este nivel educativo.

Se reconoce la autonomía de los pueblos originarios para proveer educación, de conformidad a sus costumbres y cultura, resguardando los contenidos y requisitos mínimos establecidos por la ley."

Sometido a votación el inciso 13 se **aprobó** (18 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones).

Sometido a votación el resto del articulado se **aprobó** (21 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones).

205. ICC N°665

Artículo X: *El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación.*

La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tiene como propósito el desarrollo integral de la persona, su personalidad, el sentido de su dignidad, el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, así como, la construcción del bien común, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fortalecimiento de la convivencia democrática y pacífica para el desarrollo de una sociedad justa, libre, diversa y cohesionada, la valoración y respeto de la Naturaleza y el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural del país.

Deberá ser una educación integral y de calidad, rigiéndose especialmente por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, equidad, con enfoque de género y no sexista, ambiental, y con pertinencia focal, cultural y lingüística. Se entenderá por calidad de la educación el cumplimiento de los propósitos y principios antes mencionados.

Artículo X: *La educación será una función primordial del Estado.*

Los establecimientos de educación parvularia, básica y media, así como también las instituciones que provean educación superior, conforman un sistema nacional de educación basado en el principio de colaboración, que tendrá como centro la experiencia educativa del estudiantado. El Estado fomentará su mejoramiento continuo y ejercerá labores de regulación, promoción y supervigilancia. Las instituciones que conforman este sistema estarán sujetas al régimen común que fijará la ley, no podrán perseguir fines de lucro y se orientarán por los principios de este derecho y los generales que establezca esta Constitución.

La educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.



La Constitución reconoce procesos educativos no formales, realizados por medio de programas sistemáticos, no necesariamente evaluados y que podrán ser reconocidos y verificados según lo dispuesto por la ley.

Por su parte, el acceso a la educación superior pública será gratuito e igualitario para todos y todas, en función de los méritos respectivos; y, la educación técnico profesional de nivel superior pública y gratuita será dictada por Instituciones estatales especializadas no universitarias, territorialmente descentralizadas.

Es deber del Estado garantizar, una educación inclusiva, equitativa y de calidad, a cuya base debe encontrarse la educación pública y estatal como Instrumento que promueve la especialidad, calidad y equidad de la formación, así como el acceso igualitario y la descentralización territorial de la educación.

Para garantizar universalmente el derecho a la educación habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas organizado, financiado y administrado por el Estado, el que orientará el desarrollo del sistema educacional nacional. Su fortalecimiento y desarrollo será un deber especial del Estado. Este sistema deberá proveer de manera progresiva una educación laica, gratuita y pertinente territorialmente.

La Constitución reconoce el derecho de los integrantes de cada comunidad educativa a participar tanto en decisiones de la unidad respectiva, como de la política educacional local y nacional que sean relevantes para su quehacer y para el ejercicio del derecho a la educación.

La ley especificará las condiciones y órganos para asegurar la participación vinculante de los integrantes de la comunidad educativa en todo establecimiento o institución reconocida oficialmente por el Estado.

La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y su contribución al pluralismo educativo.

La libertad de enseñanza comprende el derecho preferente de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir la educación de las personas a su cargo. Este derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y de conformidad a la ley. Comprende también el derecho de toda persona a crear proyectos educativos, los que deberá regirse pro proceso de admisión no discriminatorios y respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución y las demás condiciones que establezca la Ley.

Los proyectos educativos así creados, que sean gratuitos y cumplan con los demás requisitos que para eso fije la ley, podrán recibir financiamiento del Estado. Estos proyectos serán parte de un sistema que el Estado deberá articular, resguardando su rol público.

La Constitución reconoce la función primordial de profesores, profesoras, educadores y educadoras, así como de asistentes de la educación, en el resguardo del derecho a la educación.

El Estado protegerá el rol docente para lo cual deberá fortalecer su función, promover el desarrollo de la profesión, mejorar sus condiciones laborales y resguardar la autonomía profesional de acuerdo a los propósitos establecidos en esta Constitución y la Ley.

El Sistema de Educación Superior estará conformado por las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales reconocidos por el Estado. Todos ellos deberán guiarse por los principios que esta Constitución establece, de acuerdo a los requerimientos educacionales, productivos, científicos y culturales del país.

El Estado deberá desarrollar y fortalecer los establecimientos estatales de educación superior.

Sometido a votación el inciso “Los proyectos educativos así creados, que sean gratuitos y cumplan con los demás requisitos que para eso fije la ley, podrán recibir financiamiento del Estado. Estos proyectos serán parte de un sistema que el Estado deberá articular, resguardando su rol público” se **rechazó** (3 votos a favor, 28 en contra y 1 abstención).

Sometido a votación el resto del articulado se **rechazó** (2 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones).

206. ICC N°697

Artículo I. *El Estado, a través de la constitución, las leyes y sus políticas públicas debe proporcionar el financiamiento suficiente y todos los recursos necesarios para asegurar y garantizar que los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción alguna, puedan acceder y recibir educación pública, gratuita y de calidad.*

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.



207. ICC N°698

ARTÍCULO ÚNICO. *El Estado de Chile organiza la educación desde la justicia social asumiendo como principios reguladores el reconocimiento recíproco y la paridad participativa. De tal forma que:*

El Estado garantiza el derecho a la educación, la define como un bien público y otorga gratuidad universal a todos sus niveles educativos (educación parvularia, básica, media y superior). Además, debe garantizar la paridad de recursos para el sistema educativo nacional público, de tal manera de asegurar los bienes materiales necesarios para que las personas puedan participar en igualdad respecto de las demás, independiente de contextos, identidades, culturas, pueblos y territorios. Principio redistributivo de la justicia de paridad participativa.

El Estado garantiza el derecho a una educación con igual representación en la toma de decisiones en el diseño de la política educativa, la construcción de los marcos curriculares y en el desarrollo del currículum de cada centro educativo, considerando al menos: profesionales del ministerio, profesorado, estudiantado, familias, portadores/as del patrimonio cultural local, activistas de movimientos sociales y otros/as agentes definidos por las comunidades locales. Principio político de la justicia de paridad participativa.

El Estado garantiza el derecho a una educación con igualdad de estatus cultural en el sistema educativo, donde las culturas de las distintas personas estén representadas en el currículum, de tal forma que quienes son portadoras de las mismas se sientan en igualdad respecto de las demás. Entre ellas, las culturas indígenas, afrodescendientes e inmigrantes, las culturas locales (campesina, minera, industrial, montañesa, desértica, costera, etc.), el conocimiento científico, la diversidad de identidades, lenguas, prácticas sociales, tradiciones y territorios.

El Estado garantiza el derecho a una educación que cubra las necesidades afectivas, amorosas, de protección y cuidado fundamentales para el desarrollo de la autoestima que requieren las personas para desenvolverse armónicamente en los diferentes espacios sociales por medio de relaciones de confianza. Principio normativo de la esfera del amor propio de la justicia de reconocimiento recíproco igualitario.

El Estado garantiza el derecho a una educación con igualdad de trato entre la diversidad de personas que participan en ella, que gocen de los mismos derechos independientemente de sus identidades personales, de género, etnias, orientaciones sexuales, pertenencias culturales, territoriales, sociolingüísticas y niveles educativos, entre otros. Principio normativo de la esfera del derecho de la justicia de reconocimiento recíproco igualitario.

El Estado garantiza el derecho a una educación que otorgue igual valoración a la diversidad de habilidades, capacidades, y/o talentos, tales como los artísticos, cognitivos, deportivos, artesanales, manuales, creativos, de cuidado de animales y personas, preservación y cultivo de plantas, etc., que portan y aportan las personas desde su propia singularidad al desarrollo de toda la sociedad. Principio normativo de la esfera de estima social propio de la justicia de reconocimiento recíproco igualitario.

El Estado garantiza el derecho a educación de los pueblos indígenas, de forma individual y colectiva, reconociendo y promoviendo el derecho mantener sus propias instituciones educativas y a que su lengua y cultura se refleja en el sistema educativo, a través de sus instituciones, organizaciones y miembros. Asimismo el Estado reconoce el derecho de las personas Indígenas, en particular de niñas, niños y adolescentes Indígenas, al acceso, sin discriminaciones, a todos los niveles y formas de educación, el cual debe ser garantizado principalmente a través del sistema público de educación, el que deberá contemplar y mantener de manera adecuada la educación intercultural plurilingüe, en todos los niveles educacionales, para los miembros de los Pueblos Indígenas, pero abierto a todos los habitantes del país.

Sometido a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención).

208. ICC N°700

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en las distintas etapas de su vida y estará encaminada a formar personas en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y en prepararlos para asumir una vida responsable, con espíritu de diálogo, comprensión, paz, tolerancia, igualdad de géneros y amistad entre grupos de diverso origen étnico, credo religioso y de nacionalidad. La formación ciudadana incluirá el aprendizaje y desarrollo de habilidades y métodos para la gestión colaborativa de conflictos y de las diferencias en la convivencia.

La convencional Labraña **retiró** la iniciativa.

209. ICC N°719

Artículo X: Es responsabilidad del estado, garantizar el acceso y la gratuidad, en todos los niveles de instrucción, sin restricciones de sexo, procedencia nacional o social. En todos los centros de



enseñanza, hombres y mujeres estudiarán bajo un currículo único y nacional. En caso de embarazo en el curso de los estudios, remuneración en cuantía de salario mínimo por embarazo y parto, hasta la finalización de estudios. Las madres que hayan dado a luz y dedicado años a la educación de los hijos, hasta los ocho años, podrán jubilarse a la edad de 40 o 45 años, con una antigüedad laboral de 15 años.

La convencional Rivera **retiró** la iniciativa.

210. ICC N°736

ARTÍCULO XX

Se garantizará el derecho a una educación centrada en el desarrollo de las personas y las comunidades, en armonía con el entorno natural y social.

ARTÍCULO XX

El Estado tendrá el deber de garantizar la provisión y el acceso justo a todos los niveles y formas de educación, cautelando que el derecho humano a la educación sea gratuito, de excelencia, integral, emancipador, intercultural, plurilingüe, laico y no sexista.

ARTÍCULO XX

El Estado tendrá el deber de resguardar que los pueblos y naciones indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, cuenten con espacios formativos que permitan la continuidad de sus tradiciones, creencias, valores, idiomas, culturas y estructuras sociales en el marco del sistema educativo general. Asimismo, el Estado financiará los sistemas educativos propios de las comunidades, pueblos y naciones preexistentes.

ARTÍCULO XX

Los pueblos y naciones preexistentes tendrán derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propias lenguas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

ARTÍCULO XX

El estado adoptará medidas eficaces, juntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Será deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la educación de los pueblos indígenas, en todas sus dimensiones y niveles.

Fue **retirada** por la convencional Labraña.

211. ICC N 746

Artículo X1: Derecho a la educación en derechos humanos. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información sobre derechos humanos y libertades fundamentales; acceder a educación y formación en derechos humanos; a exigir de parte del Estado educación y formación en derechos humanos y exigir al Estado promoción, respeto y protección de los derechos humanos.

La educación en derechos humanos debe tener como finalidad, a lo menos, la comprensión, el aprendizaje y la sensibilización sobre los derechos humanos, contemplando la formación para el respeto, ejercicio y defensa de estos derechos como el conocimiento sobre la violación a los derechos humanos tanto en el pasado como el presente con el propósito de contribuir a la prevención, a la reparación de las víctimas y a las garantías de no repetición.

Artículo X2. Obligaciones del Estado en materia de educación en derechos humanos.
Serán deberes del estado, en materia de educación en derechos humanos, las siguientes:

- 1. Entregar, promover, respetar, proteger y garantizar la educación permanente en derechos humanos a todas las personas;*
- 2. Entregar, promover, respetar, proteger y garantizar la educación y formación en derechos humanos a todas las personas que cumplan funciones en los órganos del Estado, especialmente, quienes cumplan funciones en las fuerzas armadas, de seguridad y orden, en Ministerios, Municipalidades y otras instituciones dependientes;*
- 3. Entregar, promover, respetar, proteger y garantizar la educación y formación en derechos humanos a toda persona que cumpla una función y/o profesión como garante de derechos;*
- 4. Tomar medidas para la incorporación de la formación en derechos humanos en el ámbito de la educación no formal referidas a la sociedad civil y empresas;*



5. Tomar medidas para la incorporación de la formación en derechos humanos en el ámbito de la educación informal, referida principalmente a las expresiones de la cultura y los medios de comunicación social;

6. Tomar medidas para la incorporación de la educación en derechos humanos en el ámbito de la educación formal, desde la educación parvularia o preescolar hasta la educación superior y técnico profesional tanto pública como privada, especialmente, en la formación inicial docente;

7. Promover y garantizar la formación de formadores en derechos humanos tanto para el ámbito de la educación formal como de la educación no formal, desde un enfoque sistémico;

8. Monitorear a través de un organismo competente creado por el legislativo para esta función, el cumplimiento de dichas obligaciones;

9. Y las demás que la ley determine para el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, ratificados y vigentes y para el fomento de eficaz tramitación de tratados o acuerdos internacionales futuros.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa.

212. ICC N°833

Artículo XX: El Estado garantiza, reconoce y protege tanto la libertad de cátedra, como a la libertad académica en todos los niveles del sistema educativo de todos los sistemas de conocimientos, sin distinción alguna.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

213. ICC N°837

Artículo XX. Derecho a la Educación y a la Libertad de Enseñanza. La libertad de establecer establecimientos educacionales con contenidos propios tendrá el límite del respeto a los otros derechos consagrados en esta Constitución, y la obligación de impartir los contenidos básicos establecidos en los planes curriculares del sistema educativo, con especial relevancia de aquellos valores esenciales para la formación para la vida social y ciudadana y para el desarrollo integral y libre de la personalidad de todas las personas.

Artículo XX. Derecho a la Educación y Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad. Es deber y competencia del Estado el establecer los planes de estudio y currículos escolares conforme a los cuales se provean las condiciones de integralidad y pluralidad educativas necesarias para el pleno y libre desarrollo de la personalidad de todas las personas.

El derecho de las madres y los padres a decidir las enseñanzas de sus hijas e hijos conforme a las convicciones personales deberá siempre respetar el de sus hijas e hijos a recibir una educación plural e integral que les habilite para el pleno ejercicio de sus derechos, para su socialización, inclusión y formación en una ciudadanía activa, y para su participación libre e informada en todos los ámbitos de su vida y de una sociedad democrática.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones).

214. ICC N°887

DEL SENTIDO DE LA EDUCACIÓN

ART. 1 En su concepción e implementación la Educación debe ser una Educación Nacional, Ciudadana y Laica, generadora del amor a sí mismo y – en esa medida – a los demás.

Nacional, porque el proceso educativo debe darse en función de los objetivos del país y, por lo tanto, debe servir a las aspiraciones y lineamientos básicos que emanan de la comunidad y que son fielmente interpretados e implementados por las autoridades educacionales.

Ciudadana, porque a los distintos grupos etarios de la comunidad nacional se les debe entregar - con sentido universal - las nociones fundamentales para una buena y sana convivencia plena de respeto por sí mismo y por los demás, como también por la Nación y las instituciones republicanas.

Laica, en pro de dar espacio para la adhesión y práctica de todos los credos en un ambiente de plena libertad de conciencia y respeto recíproco.

DE LOS DERECHOS

ART. 2º: Todas las personas tienen el derecho a la educación prenatal, educación parvularia, educación de la niñez, educación juvenil y educación de adulto y es deber del Estado crear las condiciones necesarias y suficientes para que ellos ejerzan plenamente este derecho.

ART. 3º: La educación de la niñez y la educación juvenil son obligatorias para todas las personas, siendo el Estado el garante que se dé cumplimiento a ello, habida consideración que es la



Educación el medio a través del cual es posible contribuir a igualar el acceso a una vida personal y familiar digna y gratificante.

ART. 4 La Educación así garantizada debe asegurar la equidad en cuanto la oportunidad, la condiciones y los medios y recursos de todos los estudiantes sin discriminación de ningún tipo, aun cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle en realidades muy diferentes.

ART. 5º: Todas las personas con necesidades y capacidades especiales tienen el derecho de acceder a una educación diferenciada que les posibilite alcanzar el más alto nivel de logro posible y es deber del Estado crear las condiciones necesarias y suficientes para el pleno ejercicio de este derecho.

ART. 6º: Todas las personas tienen el derecho a acceder a los distintos niveles del Sistema Nacional de Educación y si no dispone de los recursos económicos para costear su ingreso y permanencia, el Estado cubrirá los costos, situación que se mantendrá en tanto el estudiante alcance los niveles de rendimiento académico aceptables.

DE LOS PRINCIPIOS

El Estado tiene la misión de orientar, apoyar y controlar la oportuna y adecuada interpretación y cumplimiento de los siguientes principios, que deben inspirar y regular los niveles, modalidades y funcionamiento de las unidades que conforman el Sistema Nacional de Educación.

ART. 7º: La familia es responsable de la Educación de sus hijas e hijos.

ART. 8º: El Sistema Nacional de Educación tiene la misión de brindar a las familias, orientación y apoyo profesional especializado, sistemático y permanente en relación con la compleja y trascendente tarea de la crianza y educación de sus hijas e hijos desde la etapa prenatal hasta que logren su auto valencia.

ART. 9º: El Estado detenta la condición de Estado Docente que conlleva las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a) Diseñar, implementar y mantener en funcionamiento las distintas unidades que conforman el Sistema Nacional de Educación.

b) Establecer la normativa que conlleva la participación y el financiamiento del servicio educacional ofrecido por entidades particulares y – en conformidad con ésta – otorgar o denegar la respectiva acreditación solicitada.

c) Supervisar, evaluar y controlar el servicio educacional que proporcionan las entidades gubernamentales y no gubernamentales acreditadas, con el propósito de asegurar la calidad del mismo.

ART. 10º: Todo estudiante conlleva la condición de ser una persona/aprendiz. Ello exige que en toda Institución Educacional exista clara consciencia que se está trabajando con personas que merecen respeto y consideración, independiente de su condición de género, edad, situación socio-económica, nivel de desarrollo psicobiológico, creencias y características de su familia.

ART 11º: La Educación debe respetar la diversidad y los derechos naturales y culturales de las personas y comunidades que hacen uso del servicio educacional. Ello se manifiesta a través de:

a) La valoración de los diversos recursos naturales y culturales.

b) La descentralización en favor de los actores locales y la dotación del nivel de autonomía necesaria y suficiente a las instituciones educacionales, para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje

c) Los métodos de observación participativa y sistémica.

d) El respeto de las libertades en el ámbito de la Educación. En particular ello conlleva:

- El derecho de toda persona a tener acceso a los recursos naturales y culturales.

- Experimentar la vida educativa como una relación vital entre los actores – educador, educadora, persona/aprendiz, organizaciones y otros actores asociados – y el conjunto

de conocimientos que forman los recursos culturales comunes, portadores de identidad, de valores y sentido, sin los cuales los actores quedan limitados en su accionar.

ART. 12º: Asumir que aprender es trabajar. La dicotomía “estudias o trabajas” es un planteamiento que induce a un error de valoración.

Trabajo es toda actividad en que invertimos vida para generar una ideofactura o una manufactura.

La persona/aprendiz realiza día a día un sin número de actividades que insumen su energía, insumen VIDA y, por lo tanto, es TRABAJO. Ese quehacer tiene un propósito productivo:



Hacer-se a sí mismo. Su obra - producto de su trabajo – es ella o él mismo cada vez con un mayor y mejor repertorio de competencias para vivir mejor y – algo esencial – cada vez más consciente del SER PERSONA.

ART. 13º: La Educación sistemática es un proceso intencionado y permanente de interacción humana que debe estar inspirado, diseñado, ofrecido y ejecutado con amor

ART. 14º: El Estado asume el diseño, la implementación y conducción del sistema de formación de los profesionales y asistentes de la educación, junto con las instituciones a las que otorgue la acreditación para colaborar en esta misión.

DE LOS FINES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

El Sistema Nacional de Educación en su diseño, implementación, funcionamiento, permanente evaluación y optimización, se orientará hacia el logro de los siguientes Fines Educativos Fundamentales:

ART. 12º: PRIMER FIN EDUCACIONAL:

Brindar a las familias orientación y apoyo profesional especializado, sistemático y permanente en relación con la compleja y trascendente tarea de la crianza y educación de sus hijas e hijos desde la etapa prenatal.

ART. 13º: SEGUNDO FIN EDUCACIONAL

Lograr que cada persona/aprendiz, sobre la base de su efectiva participación en las situaciones educativas que se le proponen y del apoyo oportuno de su familia, logre los aprendizajes esperados establecidos en los objetivos de su programa factible de estudios, correspondiente al nivel de educación que cursa.

En todos los cursos - considerados como tramos anuales en que se divide el proceso de Educación sistemático - se deben considerar tres instrumentos curriculares:

A. El Plan de Estudio del Curso: Distribución de horas anuales de estudio en las áreas y/o asignaturas.

B. El Programa de Estudio del Curso que incluye las distintas áreas o asignaturas con sus objetivos de aprendizaje y contenidos, pudiendo ser complementados con sugerencias metodológicas.

C. El Programa de Estudio Factible establecido para un estudiante o grupo de estudiantes del curso y que se adecúa a las condiciones de entrada del estudiante o del grupo de estudiantes pertenecientes a ese nivel o curso y las capacidades y reales posibilidades de logro de los aprendizajes que se establecerán en los objetivos definidos.

ART. 14º: TERCER FIN EDUCACIONAL

Incentivar y capacitar a cada persona/aprendiz para que asuma paulatinamente la responsabilidad de su vida, alcanzando la plena autonomía en relación con lo cotidiano, lo estudiantil, la convivencia, lo socio- económico y el pensar, sentir y hacer.

ART. 15º: CUARTO FIN EDUCACIONAL

Proporcionar oportunamente la orientación y el apoyo profesional especializado a cada persona/aprendiz para que tempranamente defina su proyecto de formación técnica o profesional y logre – en el tiempo previsto – su titulación, incorporándose al mundo del trabajo en el área de servicio o producción para el cual se ha formado.

ART. 16º: QUINTO FIN EDUCACIONAL

Incentivar y capacitar a cada persona/aprendiz en el ejercicio efectivo, responsable y permanente de su libertad, motivándolo para asumir como proyecto de vida, el desafío de llegar a SER el más alto pensamiento que sobre sí mismo sea capaz de concebir.

ART. 17º: SEXTO FIN EDUCACIONAL

Proporcionar a las familias y a cada uno de sus integrantes, pistas, orientaciones y apoyo para que avancen en su proceso personal de expansión de conciencia, valorándose a sí mismo y a los demás, aprendiendo a vivir mejor y ser felices.

DE LOS EJES CURRICULARES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

El Sistema Nacional de Educación pone a disposición de las familias y de los ciudadanos en particular, un servicio educacional de iniciación temprana y cobertura hasta la edad adulta.

Ello exige que, en su concepción, estructura y funcionamiento, los distintos niveles del sistema compartan una ideofactura educacional común, capaz de poner en relieve y consolidar en los



ciudadanos – desde la infancia a la adultez – los elementos esenciales de nuestra cultura nacional chilena.

La estrategia para la implementación de este convergente y coherente quehacer educacional, exige que desde el Hogar, que es la Escuela Doméstica, hasta la Universidad, que es la Escuela Superior, las Unidades Educativas cuenten con programas de estudio que contengan una red de objetivos, contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje que implemente los siguientes cuatro ejes curriculares esenciales y comunes:

ART. 18º: PRIMER EJE CURRICULAR

Educación para la valoración de sí mismo y - en esa medida - valoración de los demás como base de una convivencia solidaria, base de una democracia consciente de sí misma.

ART. 19º: SEGUNDO EJE CURRICULAR

Educación para vivir mejor y en armonía con los demás y el medio ambiente.

ART. 20º: TERCER EJE CURRICULAR

Educación para la autenticidad, la autoestima, la autonomía y la confianza en sí mismo.

ART. 21º: CUARTO EJE CURRICULAR

Educación para la valoración de la cultura nacional asumiendo conscientemente, la identidad que se desprende de ella, conjuntamente con la valoración de la cultura internacional asumiendo comprensivamente que somos parte de un mundo globalizado.

DE LOS NIVELES DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN

ART. 22º: El Sistema Nacional de Educación debe estar organizado en los niveles que correspondan a las etapas de desarrollo de los seres humanos. Así, responderá a sus necesidades de crecimiento y desarrollo, junto con potenciar al máximo sus capacidades para llegar a SER el más alto pensamiento que sobre sí mismo sean capaces de concebir y, en consecuencia, logren ser personas felices.

Los niveles que abarca son cinco, los cuales deben ser atendidos por las instituciones educativas que se creen en función del propósito núcleo de cada uno de ellos.

NIVEL	GRUPO ETARIO QUE ATIENDE	PROPÓSITO NÚCLEO DEL NIVEL
EDUCACIÓN PRE NATAL Se desarrolla en el hogar	Desde la gestación al Nacimiento	Estimulación temprana asistida para preparar su adaptación al entorno y desarrollo de la capacidad de aprendizaje, fortaleciendo, además, el vínculo maternal.
EDUCACIÓN PARVULARIA	Desde los 0 a los 6 años de edad.	Desarrollo de la confianza en sí mismo en un clima afectivo nutritivo que complemente la crianza del hogar, proporcionando experiencias interpersonales de calidad que desarrollen las capacidades para: o Aprender más y mejor en menos tiempo. o Potenciar la capacidad de adaptación al entorno. o Acrecentar su auto estima, valoración personal y valoración de los demás.
EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ	Desde los 6 a los 12 años de edad	o Valoración de la Educación como el medio para llegar a ser más y mejores personas, tener éxito en la vida y ser felices. o Dominio de las habilidades y técnicas para el auto aprendizaje. o Generación de los aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales necesarios y suficientes para ingresar a la Educación Juvenil y lograr los objetivos de aprendizaje del Programa de Estudios del nivel.

		<p>o Acrecentar su auto estima, valoración personal y valoración de los demás</p>
<p>EDUCACIÓN JUVENIL</p>	<p>Desde los 12 a los 18 años de edad</p>	<p>o Desarrollo de la asertividad en cuanto a habilidad social necesaria para defender sus derechos, expresar sus opiniones e ideas de forma honesta, respetuosa sin caer en la comunicación agresiva ni pasiva.</p> <p>o Logro de las competencias requeridas para ejercer un oficio en calidad de trabajador independiente o Generación de los aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales necesarios y suficientes para ingresar a la Educación de Adultos a estudiar la Carrera Técnica o Profesional de su elección, lograr su titulación en el lapso establecido e insertarse en el ámbito laboral.</p> <p>o Acrecentar su auto estima, valoración personal y valoración de los demás.</p>

ART. 23°: La Educación Pre natal ocurre en al ámbito familiar. Está a cargo de la madre, el padre y los adultos del grupo familiar. La capacitación, asesoría, supervisión y aportes de medios y materiales didácticos, estará a cargo de los profesionales de la Unidad Educacional del sector en que reside la familia.

ART. 24°: La Educación Parvularia - en los niveles que sea posible y conveniente - se desarrollará en un espacio natural acondicionado como un Parque Educativo, en que la mayoría de las actividades ocurran al aire libre y en contacto con la naturaleza. Lo señalado estará condicionado a las características propias de la zona de residencia de las familias de los estudiantes.

ART. 25°: Toda persona que presente algún tipo de discapacidad y manifieste su voluntad de estudiar, tendrá garantizado el ingreso, permanencia y avance a su ritmo en cada nivel del sistema educacional que, para brindar este servicio, asumirá la condición de Educación Especial y tendrá como finalidad esencial conseguir crecientes niveles de autonomía del estudiante.

ART. 26°: Toda persona adulta que no haya cursado lo niveles educacionales correspondiente a la niñez y juventud, podrá hacerlo en el Sistema de Recuperación de Estudios que, en cuanto a horario y modalidad de enseñanza-aprendizaje, estará adecuado a las condiciones de vida y laborales de las adultas y adultos interesados en completar sus estudios regulares.

Sometido a votación se **rechazó** (2 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención).

215. ICC N°891

Artículo XX. Derecho a la Educación. Toda persona tiene Derecho a la Educación en Chile. El derecho a la educación implica el acceso, formación y participación en el sistema educativo; como también la investigación, el desarrollo y la planificación estatal en las distintas áreas que guardan relación con sus fines.

Artículo XX. Rol del Estado. El Estado financia un Sistema de Educación Pública en los distintos niveles y modalidades de enseñanza: educación inicial, básica, media, superior y educación de adultos; aulas hospitalarias, educación especial y cárceles, con la finalidad de garantizar este derecho.

La educación militar y de las fuerzas de orden y seguridad, asegurará desde una perspectiva transversal y específica la educación en derechos humanos y la perspectiva de género.

El Estado debe resguardar que el Derecho a la Educación sea ejercido con criterios de inclusión, plurilingüismo y equidad territorial, especialmente en territorios rurales o de zonas extremas.

Nada de lo señalado en este artículo impedirá otras acciones del Estado en favor del fortalecimiento de la Educación Pública y sus fines. La existencia de instituciones de educación privada está permitida, en los términos que señale la ley.



Artículo XX. Fines de la Educación. La educación tiene como fin último erradicar las lógicas de opresión, abuso y desigualdades que se encuentran a la base de la sociedad, con miras a producir las condiciones materiales y culturales que posibiliten la libertad personal y colectiva, la justicia social y el buen vivir.

El Sistema Educativo Nacional tendrá un carácter laico, público, no sexista, inclusivo, intercultural, democrático, con énfasis en la ética, enfoque de género y Derechos Humanos, en todos sus niveles y modalidades. El Estado reconoce, valora y garantiza la inclusión plurinacional en todo el sistema educativo.

La educación debe formar para el ejercicio permanente de la política y la autodeterminación de los pueblos. Para esto, promoverá el diálogo, una educación filosófica y las relaciones igualitarias entre los seres humanos, el mundo y la naturaleza; humanizando y cultivando el deseo de comunidad.

La educación deberá propiciar un acercamiento a los distintos saberes y epistemologías, valorando su diversidad y complejidad. Todas las personas tienen derecho a la filosofía, cuya enseñanza y la práctica será promovida de modo transversal y específico, con miras a la incorporación de una perspectiva integral, solidaria y emancipadora.

El Estado reconoce a la educación como un derecho habilitante, por lo cual todo espacio educativo debe resguardar el ejercicio pleno de los Derechos Fundamentales de quienes lo integran.

Artículo XX. Del Sistema Escolar. Las escuelas públicas tendrán autonomía para gestionar sus proyectos educativos, con pertinencia cultural y territorial. Deben propiciar el intercambio de saberes, la educación ambiental, la afectividad y autoestima, la creación y recreación, el cuidado mutuo, la imaginación y la sensibilidad artística, con miras a desarrollar la autonomía personal y colectiva de quienes la integran.

Toda la comunidad educativa tiene derecho a participar de modo incidente en todos los aspectos de la vida escolar y a organizarse para estos fines, incluso la niñez y adolescencia, de acuerdo con su nivel de desarrollo.

Las y los profesores tienen derecho a enseñar y a aprender. El Estado garantiza el desarrollo del quehacer pedagógico resguardando como parte del ejercicio profesional el tiempo y los recursos necesarios para la investigación pedagógica, la actualización, la co-formación, la reflexión sobre su propia práctica y la participación vinculante en la toma de decisiones en materia de educación. Las y los docentes son los encargados de diseñar, desarrollar y evaluar las políticas públicas sobre educación, a nivel local y nacional.

Las familias y tutores/as tienen el derecho y el deber de participar en el espacio educativo, en beneficio de los procesos pedagógicos y educativos de la comunidad escolar. Se promoverá la diversidad de proyectos educativos en las Escuelas públicas, en el marco de los fines de la educación.

Las comunidades tienen derecho a la escuela. Las escuelas deberán facilitar la interacción con su entorno y el beneficio conjunto de los procesos educativos.

Artículo XX. De las instituciones de Educación Superior. Las instituciones de educación superior formarán con miras a la contribución pública y a las necesidades del país. Tienen la misión de enseñar, producir conocimiento y socializarlo, con criterios de pluralidad epistémica.

Las instituciones de educación superior deberán vincularse activamente con sus territorios, contribuyendo en el diagnóstico y resolución de las problemáticas territoriales.

Las instituciones de educación superior promoverán y favorecerán el ejercicio académico desde el principio transversal de libertad de cátedra, mientras esta no contraríe los fines de la educación y del derecho a la no discriminación.

La formación de los profesionales tendrá un enfoque coherente con los fines del Sistema Educativo Nacional.

Se promoverá la contratación paritaria dentro de las plantas académicas y la incorporación de sectores históricamente excluidos en puestos de poder, así como la injerencia de todos los estamentos en la toma de decisiones.

El convencional Labbé retiró la iniciativa.

216. ICC N°974

Artículo XX. Es deber del Estado de Chile:

A. Garantizar el derecho de todas las personas al acceso equitativo a la educación artística, cultural y patrimonial desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida.



B. Garantizar el desarrollo de planes, programas y proyectos que promuevan el acceso a la educación, la formación continua y el perfeccionamiento en artes, cultura y patrimonio, de manera descentralizada y desconcentrada.

C. Garantizar el desarrollo de proyectos comunitarios de educación artística, reconociendo el valor fundamental de estos para el desarrollo de las distintas comunidades culturales y los territorios.

D. Garantizar en todos los territorios los recursos necesarios para el acceso equitativo a la educación artística y las condiciones para el desarrollo de los procesos formativos.

Artículo XX. Para garantizar el acceso a la educación artística, la finalidad de la educación considera los siguientes aspectos:

A. La educación deberá orientarse a la formación integral de las personas considerando todos los ámbitos del desarrollo humano, a nivel individual y colectivo.

B. Las artes y culturas serán reconocidas como componentes esenciales del sistema educativo, garantizando la presencia de programas de formación artística y cultural obligatorios en todos los niveles de la educación formal, promoviendo la diversidad de las manifestaciones artísticas y buscando la vinculación con otras áreas del conocimiento. Se deberá garantizar la integración de los cultores y artistas en las categorías apropiadas de la educación que permitan garantizar una educación artística de calidad.

C. La educación deberá desarrollar la creatividad artística, la innovación y el pensamiento crítico a través de la enseñanza y de las prácticas artísticas y culturales.

D. La educación será intercultural y buscará promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social.

E. La educación deberá tener pertinencia territorial y comunitaria, lo que deberá reflejarse en la integración de las expresiones culturales de los distintos territorios, comunidades y los pueblos que los habitan, tanto en las temáticas abordadas como en las metodologías de enseñanza, para promover la difusión y conservación de los elementos identitarios de cada territorio.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa.

217. ICC N°979

Artículo XX. El Estado garantizará el derecho a la educación a través de la implementación de un sistema nacional integrado de educación pública, que contemple desde la educación parvularia a la educación técnica y universitaria.

Artículo XX. El sistema de educación pública, será financiado por el Estado y deberá ser gratuito en todos sus niveles, pues garantiza un derecho social y es un bien público. No se permitirá el lucro, ni la competencia y se fomentará la colaboración.

Las universidades públicas regionales deben ser un apoyo permanente para las escuelas y liceos estatales y un instrumento de desarrollo local o regional.

Artículo XX. La Educación técnica deberá ser de excelencia y estar articulada centralmente con las estrategias de desarrollo económico y productivo del país y las regiones.

Artículo XX. El estado deberá garantizar el desarrollo de procesos educativos integrales, superando la lógica instrumental del entrenamiento. La integralidad supone promover la vida en comunidad, la solidaridad, la identidad desde la diferencia, la afectividad, la integración social y la colaboración por sobre la competencia.

Artículo XX. Se debe implementar la participación efectiva de la comunidad educativa y territorial en la gestión y la definición de los proyectos educativos, por medio de instancias resolutorias y vinculantes denominadas consejos territoriales de educación.

Artículo XX. El Estado financiará completamente la construcción y reconstrucción de los establecimientos a través de un fondo de recuperación de la infraestructura de las escuelas públicas y potenciará las capacidades profesionales y técnicas de los actores de la comunidad.

La convencional Grandón **retiró** la iniciativa.

218. ICC N°1019

“Artículo XX. El Estado promoverá la formación financiera de la población con el objeto que las personas puedan adoptar decisiones informadas para mejorar su bienestar. Se impartirá a través de instituciones públicas y privadas, y no sólo mediante la educación formal, la que integrará esta formación en todos sus niveles, respetando la diversidad de los proyectos educativos”.

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones).



(c.209) Derecho al sustento alimenticio (IIC N° 34, IPC N° 67, ICC N 112, 113, 345, 773)

219. ICI N° 34-4

ARTÍCULO XX. “En el ejercicio del derecho a la libre determinación, cada Pueblo y Nación Indígena Preexistente tiene el derecho colectivo de determinar y ejercer sus propias formas de alimentación, agricultura, ganadería, actividades forestales y demás actividades que digan relación con la obtención y producción de alimentos y medicinas.

El Estado deberá garantizar y proteger, por medio de la Constitución y la ley, aquellas formas de alimentación, actividades silvoagropecuarias y demás actividades que digan relación con la obtención y producción de alimentos y medicinas, que sean propias de los Pueblos y Naciones indígena Preexistentes.

El Estado deberá proteger, por medio de la Constitución y la ley, aquellas semillas, cultivos, productos, frutos, vegetales, plantas, hongos, medicinas, preparaciones, que sean propios o identificados con los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes, ya que dichos elementos forman parte de sus historias, patrimonios, culturas y cosmovisiones. El Estado deberá desarrollar las medidas legislativas y reglamentarias tendientes a evitar y sancionar la apropiación por terceros de dichos elementos. Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia, podrá obtener derechos de propiedad, comerciales o industriales sobre los mencionados elementos.

El Estado deberá diseñar y ejecutar políticas públicas tendientes a reglamentar que las actividades silvoagropecuarias que se desarrollen en el país, sean de carácter sustentable, respetando el buen vivir (kume moguen) y los derechos reconocidos por la presente norma, como los demás derechos colectivos de los Pueblos y Naciones Indígenas Preexistentes.

En el ejercicio del derecho a la educación, los Pueblos y Naciones indígenas Preexistentes, podrán educar a sus miembros sobre sus propias formas de alimentación, agricultura, ganadería, actividades forestales y demás actividades que digan relación con la obtención y producción de alimentos y medicinas.

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención).

220. IPC N° 67-2

1. La alimentación es un derecho fundamental e inalienable de los pueblos de Chile, indisolublemente ligado a la Soberanía Alimentaria y a la protección de los sistemas campesinos de uso y conservación de semillas. Garantizar este derecho es un deber del Estado y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país. No puede quedar al arbitrio del mercado.

2. El Estado velará por que todas y todos los habitantes del país tengan en todo momento acceso físico y económico a una alimentación saludable, diversa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada, que garantice una vida libre de hambre y permita un desarrollo mental, físico y espiritual digno y satisfactorio.

Sometida a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones).

221. ICC N 112-4

Artículo XX. “La Constitución asegura a todas las personas:

El derecho a una alimentación adecuada, en condiciones de dignidad que cubra sus necesidades biológicas y nutricionales, respetando sus prácticas sociales y tradiciones culturales. Este derecho incluye la disponibilidad y acceso al agua inocua necesaria tanto para la producción de alimentos y su preparación, como para el consumo personal.

Esta Constitución reconoce a los alimentos como bienes comunes esenciales para sostener la vida, por lo cual el Estado genera, promueve y apoya políticas públicas que fortalezcan la soberanía alimentaria a fin de garantizar el derecho a la alimentación de todas las personas y asegurar la disponibilidad de alimentos para las generaciones futuras.

El Estado garantiza a la población en forma oportuna y permanente la disponibilidad de alimentos saludables, en cantidad y calidad suficiente, sin sustancias nocivas, para satisfacer la demanda interna del país y las necesidades alimentarias y nutricionistas de cada persona acorde a cada etapa de su vida y especialmente en caso de enfermedades o condiciones médicas específicas.

El Estado tomará medidas concretas y eficaces para evitar toda distorsión de precios y acumulación excesiva de alimentos que puedan causar escasez o limitaciones en su disponibilidad, distribución y acceso físico y/o económico.

El Estado protege este derecho con medidas para evitar que las empresas o los particulares priven a las personas al acceso a una alimentación adecuada.



El Estado y cualquier persona podrá requerir a productores y distribuidores información pública, clara y veraz respecto a la trazabilidad, composición y calidad nutricional de los alimentos que se ofrezcan en el mercado.

El Estado promoverá ambientes alimentarios saludables por medio de la soberanía alimentaria y la educación en todos los niveles sobre agroecología, los factores protectores de la salud y las crisis climática y ecológica.

Artículo XX. La Constitución asegura y protege la autonomía de los pueblos indígenas en la toma de decisiones ambientales sobre la producción y comercialización de alimentos según sus culturas y tradiciones, así como el control sobre las actividades que se desarrollen en sus territorios para alcanzar la soberanía alimentaria y ejercer su derecho a la alimentación.

Sometida a votación se **rechazó** (14 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones).

222. ICC N°113

Artículo 1: La soberanía alimentaria es el derecho fundamental e inalienable de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas alimentarios, así como a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política alimentaria y el derecho a la alimentación, con el fin de proporcionar alimentos sanos, libres de contaminantes, diversos, nutritivos, culturalmente apropiados, suficientes, abundantes, accesibles y asequibles para todas y todos quienes habitan el país.

La soberanía alimentaria es indispensable para el buen vivir y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país, cuyo objetivo será la producción de alimentos para el consumo interno.

Artículo 2: El Estado reconoce como actores esenciales para garantizar la Soberanía Alimentaria a: campesinas y campesinos, pescadoras y Pescadores, recolectoras y recolectores artesanales, crianceras y crianceros, apicultoras y apicultores, pueblos indígenas y otras personas y comunidades que trabajan en la producción y recolección artesanal y tradicional de alimentos.

El Estado las y los reconoce como sujetos históricos portadores de una cultura y cosmovisión propias, con diversos saberes y conocimientos, prácticas e innovaciones, entre las que se consideran los sistemas tradicionales de agricultura, pastoreo, silvicultura, pesca artesanal, apicultura, ganadería, recolección, cuidado de semillas, crianza de animales, producción y recolección de medicinas tradicionales, con formas de manejo, producción y procesamiento agroecológicos, diversificados y desconcentrados, que permiten conservar la naturaleza, y mejorar progresivamente la base productiva del país.

Artículo 3: El Estado reconoce y garantiza a los actores esenciales de la soberanía alimentaria, su derecho a acceder y a hacer usufructo individual o colectivo de la tierra, agua y mar, al libre uso, manejo e intercambio de semillas y animales de cría, a los conocimientos, a los recursos económicos y a la biodiversidad.

El Estado desarrollara normativas y políticas públicas destinadas a garantizar su acceso preferente a estos bienes. En tales políticas se brindará prioridad a mujeres y jóvenes rurales.

Artículo 4: La tierra, el agua y el mar, cumplen una función social y ecológica irremplazable que deben ser protegidas por el Estado y no pueden quedar al arbitrio del mercado.

El Estado deberá regular su uso a través de diferentes instrumentos, prohibir su deterioro, fomentar su restauración, regeneración, limitar o prohibir la concentración de su propiedad y reconocer los usos consuetudinarios campesinos y de los pueblos originarios. Todo instrumento de ordenamiento territorial deberá fijar objetivos de soberanía alimentaria para el territorio.

El Estado generara normativas y políticas para combatir la concentración y extranjerización de su propiedad, cumpliendo con las normas de regulación económica, social y medioambiental que la Constitución y la ley determine.

El Estado reconoce la legitimidad de las distintas formas de propiedad y aprovechamiento de la tierra.

Artículo 5: El Estado debe contar con políticas e instituciones orientadas específicamente al apoyo técnico y financiero de los actores esenciales reconocidos en el artículo 2, poniendo a su disposición las herramientas y recursos necesarios para fortalecer procesos productivos y emprender la transición agroecológica, facilitando su acceso a capacitación, información y participación temprana y vinculante en el diseño e implementación de tales políticas e instituciones.

El Estado reconoce la legitimidad de las distintas formas de propiedad y aprovechamiento de la tierra.



Artículo 6: El Estado debe fomentar el desarrollo del conocimiento y tecnología en función del resguardo y fortalecimiento de las formas de vida y de producción señaladas en el artículo 2, lo cual debe incluir la promoción de los saberes tradicionales, la investigación científica y la agroecología.

El Estado debe garantizar a las y los actores esenciales reconocidos en el artículo 2 su derecho a información y participación vinculante sobre innovaciones tecnológicas que les afecten, sus posibles impactos y alternativas.

El Estado no subsidiará investigaciones ni infraestructura para proyectos que contravengan la soberanía alimentaria y los principios agroecológicos.

Artículo 7: El Estado debe fomentar los mercados locales y circuitos cortos de comercialización de alimentos, garantizando el acceso a infraestructura necesaria y favoreciendo relaciones comerciales justas entre consumidores y productores.

Los circuitos medios y largos de distribución deben minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la intermediación.

El Estado priorizará en su adquisición de alimentos las compras a las y los actores esenciales reconocidos en el art 2, a través de circuitos cortos de distribución.

El Estado adoptará las medidas necesarias para regular los precios de los alimentos a modo de permitir un ingreso digno a las y los productores, y una adecuada disponibilidad y acceso equitativo a alimentos saludables para toda la población.

Artículo 8: Es deber del Estado asegurar los medios y medidas necesarias para resguardar a los actores esenciales reconocidos en el artículo 2 de abusos, destrucción, contaminación y prácticas monopólicas, oligopólicas, extractivistas, especulativas y delictuales que atenten contra su bienestar, formas de vida y de producción.

El Estado protegerá a las comunidades rurales de todo desplazamiento forzoso que los aleje de su tierra y/o medios de vida.

Artículo 9: Se reconoce el derecho de los actores esenciales indicados en el artículo 2 a fundar e integrar asociaciones, sindicatos, cooperativas u otras organizaciones para proteger sus intereses y negociar colectivamente. Es deber del Estado promover su formación y garantizarles acceso a mecanismos de participación directa y vinculante en la preparación y aplicación de planes, políticas, programas y normas en materias que les afecten.

Para ello, se creará una institucionalidad y legislación específica que considere las particularidades propias del sector, como sus patrones de dispersión, estacionalidad y dinámicas locales.

Artículo 10: Las y los trabajadores rurales, por sus condiciones de informalidad, estacionalidad y precariedad, son considerados como grupo especial en lo que refiere a mecanismos garantes de sus derechos laborales, a la salud y de seguridad social contenidos en esta Constitución, por lo que el Estado debe contar con instituciones y legislación orientadas específicamente a su cumplimiento.

Para estos efectos, se aplicarán preferentemente las normas de la legislación nacional e internacional que más favorezcan el ejercicio de estos derechos.

Las y los trabajadores rurales enfrentan condiciones especiales de dispersión y estacionalidad, por lo que podrán optar a distintas formas de sindicalización.

Artículo 11: El Estado protegerá y reconocerá como patrimonio inapropiable de los pueblos, las semillas y todo material vegetal de propagación, ya que su existencia y diversidad son la base de la alimentación del país.

Queda prohibida cualquier forma de privatización de semillas, material vegetal de propagación, animales y otras formas de vida, incluidos los procesos vitales, los componentes y estructuras celulares, genéticas y químicas de ellas.

El Estado garantizará los recursos necesarios para la existencia de sistemas públicos de mejoramiento genético, cuyos avances y resultados serán de dominio público.

Queda prohibida la producción, uso, consumo e importación de semillas, cultivos, alimentos y aditivos transgénicos en el país.

Artículo 12: El Estado asegura a sus agricultores, pueblos y comunidades el derecho a la semilla, que incluye el derecho de guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender, reutilizar, conservar, mejorar y recuperar las semillas como parte del resguardo y conservación de la biodiversidad y del patrimonio genético del país, dando apoyo y fomentando los saberes campesinos y ancestrales que hacen eso posible.



El Estado protegerá a quienes cumplen la función de conservar este patrimonio, disponiendo de medios y medidas necesarias para resguardarlos de prácticas que atenten contra su labor e integridad.

Se prohíbe cualquier política, legislación, reglamentación o medida que limite el derecho a la semilla.

Es deber del Estado proteger las semillas contra la homogeneización, la destrucción y la contaminación genética. Las semillas transgénicas no están incluidas en esta protección ni reconocimiento.

Artículo 13: El Estado protegerá la salud humana, los ecosistemas y la soberanía alimentaria. Por ello, se prohíbe el uso, desarrollo, comercialización e importación de plaguicidas definidos como altamente peligrosos según el Sistema Global Armonizado; así como de agentes biológicos experimentales nocivos; y de organismos vivos como semillas, peces o animales modificados genéticamente.

Las regulaciones respecto a otros plaguicidas y agroquímicos serán sometidas a análisis bajo el principio precautorio definido en esta Constitución.

Artículo 14: La suscripción y ratificación de tratados intencionales no pueden perjudicar la conservación y bienestar de las y los actores esenciales reconocidos en el artículo 2, la soberanía alimentaria y la biodiversidad del país.

Sometida a votación el artículo 7 se **rechazó** (6 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención).

Sometida a votación el resto de la iniciativa se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

223. ICC N°345-4

Artículo XX. RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL E INALIENABLE

Artículo xx. La alimentación es un derecho fundamental e inalienable de los pueblos de Chile, base de la salud y la calidad de vida, indisolublemente ligado a la Soberanía Alimentaria, a los sistemas campesinos de uso y conservación de semillas, a la agricultura campesina e indígena, a la recolección artesanal y al canal alimentario agropesquero tradicional. Garantizar este derecho es un deber del Estado y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país. No puede quedar al arbitrio del mercado.

Artículo xx. El Estado garantizará que todas y todos los habitantes del país tengan de manera permanente acceso físico y económico a una alimentación sana, saludable, diversa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada, que garantice una vida libre de hambre, satisfaga las necesidades biológicas de las personas y permita un desarrollo mental, físico y espiritual digno y satisfactorio.

Artículo xx. Será deber del Estado resguardar, promover y apoyar la agricultura campesina e indígena, la recolección artesanal y el canal alimentario agropesquero tradicional, para garantizar el derecho a la alimentación, hacer realidad la soberanía alimentaria y hacer posible la producción de alimentos protegiendo el medio ambiente y los bienes naturales y respetando los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios.

Artículo xx: A fin de asegurar alimentos saludables, la orientación de la agricultura debe ser hacia las formas de manejo, producción y procesamiento agroecológicos, diversificados y desconcentrados. El Estado debe proveer los recursos y medios necesarios para garantizar procesos de cambio hacia métodos agroecológicos de producción y procesamiento.

Artículo xx: El Estado debe proveer los recursos y medios necesarios para garantizar procesos de cambios hacia métodos de producción para una pesca artesanal sustentable.

Artículo xx: Las y los campesinos, los pueblos originarios, las y los recolectores artesanales, los pescadores artesanales, las y los feriantes y sus organizaciones tienen derecho a participar en la definición de políticas agrícolas y alimentarias. El Estado deberá promover y garantizar esta participación, estableciendo las medidas necesarias para que la misma se haga efectiva, conforme establezca la Ley y esta Constitución.

Sometido a votación el artículo 1 se **aprobó** (20 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención).

Sometido a votación el resto de la iniciativa se **aprobó** (21 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención).

224. ICC N°773-4

Artículo único.- Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Este derecho comprende la seguridad alimentaria y nutricional, la cobertura alimentaria para toda la población,



especialmente en sectores aislados geográficamente y el derecho a conocer la composición y origen de los alimentos.

Es función del Estado garantizar, en forma progresiva, continua y permanente, la disponibilidad y el acceso, tanto físico como económico, de los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente de quienes deben acceder a ciertos alimentos por razones de salud, debiendo además proteger y promover los alimentos y bebidas tradicionales y ancestrales, así como el patrimonio culinario y gastronómico. Asimismo, velará, en forma permanente, por la inocuidad y calidad de alimentos y bebidas.

Corresponderá al legislador establecer un sistema nacional de alimentación, que elabore, coordine y ejecute las políticas y programas vinculados al ejercicio de este derecho, así como de promoción de una dieta saludable.

Sometida a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones).

(c.210) Derecho al deporte, la actividad física y la recreación (IPC Nº 31 ICC N 336, 383, 424, 551, 553, 685)

225. IPC Nº31-4

“La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la práctica del deporte, a participar de su organización colectiva e individual, y a la expresión y celebración identitaria en torno a la práctica deportiva, como un patrimonio cultural inalienable de sus comunidades. Al ser el deporte una actividad fundamental de la vida y la cultura, es deber del Estado garantizar el derecho a la práctica, la organización, la celebración y la identidad deportiva, como un derecho colectivo de los pueblos y de cada uno, observando:

I) la autonomía de las entidades deportivas dirigentes y de las asociaciones, en lo referente a su organización y funcionamiento. El Poder Judicial sólo admitirá acciones relativas a la disciplina y a las competiciones deportivas una vez agotadas las instancias de la justicia deportiva, regulada en la ley;

II) el destino de los recursos públicos a la promoción prioritaria de la diversidad igualitaria en el deporte, asegurando la participación de todas las personas en todas las actividades deportivas, el deporte escolar, de los pueblos originarios, y, en casos específicos, para el deporte de alta competición.

III) el tratamiento diferenciado para el deporte profesional y no profesional.

La ley establecerá la regulación y los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto el ejercicio de la exploración y gestión del deporte profesional como actividad económica, social y cultural, estableciendo, en todo caso, que su estructura administrativa y propiedad deberán ser democráticas.”.

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones).

226. ICC Nº336-4

Artículo X: Todas las personas tendrán derecho al deporte y a la actividad física, en todas sus disciplinas y en sus múltiples dimensiones, incluida la práctica deportiva ancestral, sin discriminaciones arbitrarias. Es deber del Estado remover las condiciones estructurales que imposibilitan el acceso y ejercicio de la práctica deportiva en condiciones de igualdad. Las leyes y normas cuyo objetivo sea crear las condiciones que hagan reales y efectivas las prácticas deportivas, y que estén basadas en motivos de raza, origen étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física, entre otras, no serán consideradas discriminaciones arbitrarias.

El Estado garantizará las distintas dimensiones del deporte y la actividad física, ya sea recreacional, educativa, formativa, autóctona, competitiva o de alto rendimiento, así como medio para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Para lograr estos objetivos, se podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley.

El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración y la reinserción social, así como la mantención y mejora de la salud. Por ello, la ley asegurará el involucramiento de las personas con la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas. En el cumplimiento de este mandato, el Estado deberá aplicar el principio de descentralización.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones).

227. ICC Nº 383

Art. XX. Derecho a las prácticas corporales, actividad física, educación física y al deporte.



Toda persona tiene derecho a las prácticas corporales, actividad física, educación física y al deporte, entendido este como un componente indispensable para el desarrollo integral, saludable y del buen vivir de las personas.

Es deber del Estado garantizar este derecho en todas sus manifestaciones, de forma equitativa, inclusiva, eficiente y descentralizada. A su vez, debe promover su democratización a lo menos a nivel preventivo, recreativo, formativo y competitivo, proporcionando la institucionalidad, infraestructura, medios, recursos y creando las políticas públicas necesarias a nivel nacional, regional y comunal, para el cumplimiento de este derecho.

El Estado promoverá la formación y desarrollo de organizaciones deportivas y recreacionales afines de carácter democrático, que incluyan a la comunidad, así como la expresión y celebración identitaria en torno a la práctica deportiva dentro del marco de la Constitución y la ley.

Sometida a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones).

228. ICC Nº 424

Todas las personas tienen derecho al deporte y a la actividad física. Corresponde al Estado garantizar su práctica y la actividad física en todos los niveles educativos, así como en el ámbito de la salud y la recreación de la comunidad.

Sometida a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones).

229. ICC Nº 551-4

Artículo XX. Derecho al ocio. Toda persona tiene derecho al ocio y a disponer de tiempo libre de todo tipo de trabajo, con la finalidad de descansar, esparcirse, o cultivar prácticas creativas y recreativas en beneficio de su persona y de la comunidad.

El Estado reconoce la centralidad de este derecho para una vida sana y digna. Garantizará su ejercicio impulsando instituciones culturales o recreativas; desarrollando políticas públicas y apoyando iniciativas comunitarias que fomenten el buen uso del tiempo libre y garantizando la existencia de espacios públicos seguros y accesibles para el disfrute común.

Sometida a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 23 en contra y 4 abstenciones).

230. ICC Nº 553-4

“Constituye obligación del Estado la creación, establecimiento, ejecución, coordinación y control de las políticas públicas que, reconociendo su importancia en la salud humana, estén destinadas a promover, fomentar y financiar la realización permanente y sistemática de actividades deportivas en toda la población y especialmente en niños y jóvenes en edad escolar.

Sometida a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones).

231. ICC Nº 685

Todas las personas tienen derecho a la cultura corporal, la educación física, al deporte, recreación y a todo movimiento corporal.

El Estado protegerá, difundirá y promoverá la cultura corporal compuesta principalmente por la educación física, el deporte y la recreación, durante todas las etapas de la vida.

El Estado reconoce la cultura corporal como un pilar esencial en el desarrollo íntegro de las personas en su dimensión física, intelectual y social.

El Estado tiene el deber de implementar las condiciones estructurales, administrativas y económicas para asegurar a todas las personas el acceso permanente, inclusivo, integral, democrático, con pertinencia local y en condiciones de igualdad y no discriminación, principalmente a nivel formativo, competitivo recreativo y territorial, para lo cual impulsará políticas y planes educacionales, de salud, medioambientales, sociales, plurinacionales, de transporte y urbanísticas que garanticen el goce de este derecho por parte de todas las personas.

El Estado promoverá y fomentará las organizaciones sociales territoriales sin fines de lucro que propendan al desarrollo íntegro de las personas a través de la cultura corporal, establecerá planes de desarrollo y financiamiento a nivel nacional, regional y local de cultura corporal en sus diversas expresiones.

El Estado asumirá la coordinación, implementación, acceso, ejecución y desarrollo de este derecho y sus obligaciones contraídas a través de los ministerios con competencia en la materia.

Sometida a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones).



(c.401) Igualdad ante la ley (ICI Nº 184, 210, 215; ICC Nº175, 278, 304, 448, 537, 552, 565, 610,676, 726, 831,).

232. ICI Nº 184-4

X. El Estado Plurinacional debe garantizar la no discriminación, la igualdad, la equidad y la participación efectiva de los Pueblos Naciones Originarias en los espacios del Estado, siempre que ellos así lo determinen.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones).

233. ICI Nº210-4

ARTÍCULO XX:

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Sometido a votación se **rechazó** (12 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones).

234. ICI Nº215

Artículo 1º. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas indígenas, y a todo habitante de la República:

10. La igualdad ante la ley. Todas las personas gozan de los mismos derechos reconocidos por esta Constitución. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones arbitrarias.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones).

235. ICC N 175-4

Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

Número XX: La igualdad ante la ley. Todas las personas gozan de los mismos derechos reconocidos por esta Constitución. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones arbitrarias.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones).

236. ICC Nº278

Artículo XXX. Derecho a la igualdad y no discriminación.

La Constitución asegura el derecho a la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile queda prohibida toda forma de esclavitud, sea sexual, laboral o de otra índole.

Asimismo, se asegura el derecho a la igual protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en motivos tales como nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, idioma, religión o creencia, raza, pertenencia étnica, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, situación socioeconómica, pobreza, ruralidad, situación migratoria, condición de refugiado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, condición de salud mental o física, incluyendo la seropositividad, el estado civil, la filiación, la apariencia personal o cualquier otra condición social.

Se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación basada en alguna de las categorías mencionadas anteriormente u otras que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

El Estado promoverá las condiciones para garantizar que la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sea real y efectiva. Para ello, deberá adoptar las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos que impidan o dificulten su plena realización en todas las esferas de la vida.

Una ley determinará las medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de todas las formas de discriminación, en los ámbitos público y privado. Ello no impide la adopción de otras leyes, políticas de igualdad, adecuaciones institucionales, medidas afirmativas o acciones estatales destinadas a alcanzar una igualdad sustantiva y superar situaciones de discriminación, marginación o subordinación, particularmente en aquellas categorías señaladas en el inciso segundo.

Los órganos del Estado deberán tener especialmente en cuenta los casos en que confluyan, respecto de una persona, más de una categoría, condición o criterio de los señalados en el inciso segundo.

Sometido a votación se **aprobó** (18 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones).



237. ICC N°304-4

Artículo x. Derecho a la igualdad, no discriminación y no sometimiento.

La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la igualdad, la no discriminación y el no sometimiento.

Se garantiza la igualdad material y sustantiva entre todas las personas, sin distinción por cualquier condición de diversidad humana, tales como, raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexo afectiva, la identidad y expresión de género, características sexuales, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la condición de salud y la capacidad, adoptando medidas de inclusión y acción positiva que afirmen y garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, no sometimiento, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de personas en su niñez y juventud, mujeres, personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, disidencias y diversidades sexo-genéricas, y otros grupos históricamente excluidos.

El Estado deberá corregir y superar toda situación de desventaja o sumisión en que una norma o acto administrativo, criterio o práctica aparentemente neutras pongan a una persona o grupo de personas con respecto a otros, salvo que estas normas, criterios o prácticas puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, adecuados y proporcionales.

Es deber del Estado, de sus poderes, de las entidades y empresas relacionadas con el Estado que ejercen funciones públicas, y de todos los servicios e instituciones públicas elaborar e implementar políticas públicas, protocolos y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Existirá una acción judicial y administrativa para garantizar el imperio y cumplimiento de este derecho, para asegurar todos los contenidos dispuestos en esta norma.

Asimismo, le corresponderá al Estado velar por la prevención, reparación integral de todas las personas y grupos que sean objeto de discriminación y sometimiento, promoviendo medidas efectivas de no repetición.

*Sometido a votación se **rechazó** (3 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones).*

238. ICC N°448-4

Artículo X. Es deber del Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales de los que son titulares personas y comunidades, teniendo acceso a las oportunidades que el desarrollo permita.

Con el propósito de lograr una igualdad sustantiva, el Estado garantizará la implementación de acciones que propicien el mejoramiento permanente de las condiciones de las personas y comunidades para ejercer sus derechos.

Es deber de las instituciones públicas y de todos los poderes del Estado en sus respectivos ámbitos de competencia, mejorar de manera oportuna y permanente las circunstancias que impiden el ejercicio pleno de derechos, utilizando para ello todas las medidas, de ley o de política pública que establezcan la Constitución y las leyes.

*Sometido a votación se **rechazó** (1 voto a favor, 26 en contra y 4 abstenciones).*

239. ICC N°537-4

Artículo X:

“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación arbitraria, a la igual protección de la ley.

En Chile no hay personas ni grupos privilegiados.

Los órganos del Estado promoverán la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

*Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones).*

240. ICC N 552-4 (se repite en ICC N° 565-4)

Artículo XX. Todas las personas naturales son iguales ante la ley; respecto de ellas se prohíbe toda discriminación basada en la identidad, orientación o expresión de género, raza, origen étnico, ascendencia, lengua, creencias políticas, religiosas o filosóficas, condición económica o social,



situación de discapacidad, educación, estado de salud, edad, nacimiento u otras circunstancias personales o sociales.

El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor de grupos histórica, económica, social y culturalmente excluidos, respecto de los cuales el Estado tiene un deber de protección reforzado. En el mismo sentido, el principio de igualdad no obsta a que el Estado tenga un trato exclusivo y/o preferente con sus instituciones públicas que se encargan de satisfacer derechos fundamentales como educación, salud y vivienda.

Artículo XX. Es obligación del Estado crear e implementar estrategias de prevención, investigación y sanción con enfoque de género de hechos que vulneren el pleno goce y ejercicio de este derecho, sea en el ámbito público o en el privado, promoviendo acciones positivas para garantizar una vida libre de discriminación.

Artículo XX. La niñez será tratada en pie de igualdad y como personas autónomas, con derecho a influir en las cuestiones que les conciernen en un grado que corresponda a su nivel de desarrollo.

Artículo XX. Todas las personas tienen derecho a la igualdad sustantiva de género, especialmente la igualdad de trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de la sociedad civil, incluidos los educacionales y laborales. El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de este derecho, asegurando la eliminación de todos los obstáculos que dificulten el ejercicio de este derecho y promoviendo acciones positivas para su pleno desarrollo, teniendo como base las obligaciones asumidas conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

241. ICC N 565-4 (se repite en ICC N° 552-4)

Artículo XX. Todas las personas naturales son iguales ante la ley; respecto de ellas se prohíbe toda discriminación basada en la identidad, orientación o expresión de género, raza, origen étnico, ascendencia, lengua, creencias políticas, religiosas o filosóficas, condición económica o social, situación de discapacidad, educación, estado de salud, edad, nacimiento u otras circunstancias personales o sociales.

El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor de grupos histórica, económica, social y culturalmente excluidos, respecto de los cuales el Estado tiene un deber de protección reforzado. En el mismo sentido, el principio de igualdad no obsta a que el Estado tenga un trato exclusivo y/o preferente con sus instituciones públicas que se encargan de satisfacer derechos fundamentales como educación, salud y vivienda.

Artículo XX. Es obligación del Estado crear e implementar estrategias de prevención, investigación y sanción con enfoque de género de hechos que vulneren el pleno goce y ejercicio de este derecho, sea en el ámbito público o en el privado, promoviendo acciones positivas para garantizar una vida libre de discriminación.

Artículo XX. La niñez será tratada en pie de igualdad y como personas autónomas, con derecho a influir en las cuestiones que les conciernen en un grado que corresponda a su nivel de desarrollo.

Artículo XX. Todas las personas tienen derecho a la igualdad sustantiva de género, especialmente la igualdad de trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de la sociedad civil, incluidos los educacionales y laborales. El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de este derecho, asegurando la eliminación de todos los obstáculos que dificulten el ejercicio de este derecho y promoviendo acciones positivas para su pleno desarrollo, teniendo como base las obligaciones asumidas conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

242. ICC N 610-4

Artículo XX. Del derecho a la igualdad de hijos e hijas.

La constitución reconoce la igualdad entre hijos e hijas, independientemente del sexo, orientación sexual e identidad de género de sus progenitores.

El Estado tiene el deber de garantizar el reconocimiento y acceso a los mismos derechos sin discriminación alguna.

Artículo XX. Del derecho a la igualdad formal ante la ley.



Todas las personas son iguales ante la ley, en el ejercicio de sus derechos y garantías y tienen derecho a una igual protección de la ley.

La convencional Miranda **retiró** la iniciativa.

243. ICC N°676

Artículo X.- “Ninguna persona será objeto de diferencias de trato que vulneren su dignidad o que sean irracionales o injustificadas. Si la diferencia de trato emana de un privado, deberá siempre ponderarse la concurrencia de otros derechos fundamentales.

Sometido a votación se **rechazó** (1 voto a favor, 28 en contra y 3 abstenciones).

244. ICC N°726-4

Artículo X:

La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la igualdad, la no discriminación y el no sometimiento.

Se garantiza la igualdad material y sustantiva entre todas las personas, sin distinción por cualquier condición de la diversidad social, tales como edad, características sexuales, identidad y expresión de género, orientación sexo-afectiva, pertenencia a pueblos originarios o tribal afrodescendiente, origen nacional o social, clase o estrato social, estado civil, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, filiación, situación laboral, nivel educacional, condición de salud, de migración, de refugio, de ruralidad, de gestación, situación de discapacidad, seropositividad, o cualquier otra condición, situación, característica o elemento distintivo; adoptando medidas de inclusión y acción positiva que afirmen y garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, no sometimiento, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de personas en su niñez y juventud, personas mayores, personas en situación de discapacidad, mujeres, disidencias y diversidades sexo-genéricas, y otros grupos históricamente excluidos.

El Estado deberá corregir y superar toda situación en que se ponga a una persona o grupo de ellas, en desventaja o sometimiento respecto de otras, ya sea por acción u omisión, mediante normas, actos administrativos, criterios o prácticas aparentemente neutras, salvo que ellas puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, adecuados y proporcionales.

Es deber del Estado, de sus poderes, servicios, empresas, y de toda entidad que ejerza funciones públicas o contribuya a ellas, elaborar e implementar, en su caso, leyes, políticas públicas, protocolos, y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Existirá una acción judicial y administrativa para garantizar el imperio y cumplimiento de este derecho, para asegurar todos los contenidos dispuestos en esta norma. Asimismo, le corresponderá al Estado velar por la reparación integral de todas las personas y grupos que sean objeto de discriminación y sometimiento, promoviendo medidas efectivas de no repetición.

Sometido a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones).

245. ICC N 831

Artículo 1. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de las personas mayores de edad que la integran y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia será sancionada conforme a la ley.

Artículo 2. El Estado no podrá discriminar entre distintos tipos de familia.

Sometido a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones).

(c.404) Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales (ICI N° 16, 22, 42, 46, 48, 56, 81, 90-3, 92, 100, 119, 131, 142, 145, 151, 152, 159, 160, 173, 183, 184, 188-3, 221, 254, 261; ICC N 210-1, 654, 838,842, 845)

246. ICI N 16-4

ARTÍCULO: Los pueblos originarios y tribales forman parte del Estado chileno, único e indivisible.

El Estado de Chile reconoce y garantiza a las naciones pre existentes al Estado, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social.



2. *Igualdad ante la ley y no discriminación. El Estado sancionará toda forma de racismo, xenofobia y discriminación arbitraria fundada en motivos de origen, identidad étnica o cultural.*
3. *Derecho a la verdad histórica, memoria, justicia, reparación integral del daño causado y garantías de no repetición respecto de las colectividades afectadas por genocidio, racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y/o discriminación.*
4. *Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables e inembargables. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.*
5. *Mantener la posesión de las tierras, territorios ancestrales y del maritorio.*
6. *Conservar, usar, gozar, disponer y administrar los bienes comunes naturales que se encuentren en sus territorios.*
7. *La consulta previa, libre, informada y vinculante dentro de un plazo razonable, sobre políticas públicas, planes o programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles social, ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnización integral en caso de sufrir perjuicios sociales, culturales y/o ambientales. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, dichas políticas públicas, planes o programas no podrán materializarse.*
8. *Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos.*
9. *Conservar y promover sus prácticas de valoración y respeto del ItrofillMongen y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de los pueblos, para asegurar la conservación y utilización sustentable de todas las formas de vida que cohabitan armónicamente.*
10. *Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos, tierras comunitarias de posesión ancestral y autonomías territoriales indígenas.*
11. *Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.*
12. *Derecho a la posesión útil, tranquila e ininterrumpida de sus territorios ancestrales.*
13. *Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.*
14. *Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio de Chile. El Estado proveerá los recursos para el efecto.*
15. *Obtener del Estado recursos y financiamiento para la defensa, anulación, recuperación, protección y repatriación del material bioantropológico de las personas mapuche y biológico proveniente de los recursos naturales, de los conocimientos ancestrales, obras, marcas comerciales y otros bienes similares intelectuales que se originen en la autonomía territorial mapuche y/o hayan sido creadas por personas mapuche, incluso contra registro o patentamiento realizado, dentro o fuera de Chile, por personas o colectivos no indígenas;*
16. *Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural plurilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.*
17. *Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.*
18. *Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado.*
19. *Propiciar convenios transfronterizos, desarrollar y potenciar las relaciones con los países limítrofes y mantener una relación de cooperación con otros pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales.*



20. *Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.*

21. *La limitación y/o restricción de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.*

22. *Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna.*

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 21 en contra y 4 abstenciones).

247. ICI N 22-4

1- Derechos Culturales: Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a ejercer y practicar libremente y sin discriminación su cultural, sus prácticas culturales, sus expresiones culturales, prácticas ancestrales, espiritualidad, cosmovisión la que se desarrolla de manera individual y colectiva, desde su nacimiento hasta su muerte, según sus costumbres y derecho consuetudinario. Los pueblos y naciones tienen derecho a mantener, controlar, fortalecer y revitalizar los lugares y sitios sagrados, y a recuperarlos, y en caso de no ser posible, a tener acceso a ellos cuando estén en manos de terceros.

2.- Derecho a la libre determinación y autonomía: Los pueblos y naciones preexistentes tiene derecho a que se reconozcan y respeten sus instituciones propias, ya sean políticas, sociales, culturales o espirituales, de acuerdo a su derecho consuetudinario, pudiendo decidir de manera libre sobre su destino en su territorio en base al derecho a la libre determinación y la autonomía.

3- Derechos LINGÜÍSTICOS: Los pueblos y naciones pre- existentes tienen Derecho hablar y fortalecer su idioma, y el Estado adoptara todas las medidas para el pleno reconocimiento y ejercicio de un país plurilingüe, donde no solo hay un solo idioma oficial.

4- Derecho al Territorio; Se debe reconocer y garantizar al DERECHO AL TERRITORIO, se entenderá como territorio la amplitud del espacio en su conjunto, con todos sus elementos porque para la nación mapuche se comprende como un todo, y cada elemento es también parte de nuestra espiritualidad, comprendiéndose la tierra, el suelo, el subsuelo, las aguas y el aire, y cada ser vivo que habita en ella.

Los pueblos y naciones preexistentes usaran su territorio que es el lugar determinado por sus usos y costumbres, y antecedentes históricos ancestrales, donde se ejercerán los derechos colectivos de los pueblos y naciones en base a mecanismos de administración propios, donde la Consulta vinculante, previa, libre e informado es irrenunciable en cualquier aspecto que afecte a los pueblos y naciones.

5- Principio de transversalidad de la pertinencia Cultural en los Derechos Sociales: Se debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de manera colectiva de los pueblos y naciones preexistentes. Se debe garantizar que cada derecho establecido en esta Constitución Política debe ser con pertinencia cultural y territorial.

6- Principio rector de buen vivir. “El fin del Estado es la búsqueda del buen vivir”

7- Derecho a la restitución de tierras y territorio. El Estado se obliga, a la creación de una comisión plurinacional, con representantes de todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado, y estará constituida acorde a la densidad de población e identidades territoriales de cada uno de ellos. Y será para el esclarecimiento y catastro de la pérdida territorial del pueblo mapuche, y que en el caso mapuche williche se tomará como antecedente histórico territorial el Parlamento de las Canoas de 1793 celebrado entre apo ulmen (denominado por el colonizador como caciques) y la corona española.

Además, deberá generar todas las medidas para concretizar la restitución territorial efectiva y oportuna cuando sea procedente.

Sometido a votación el numeral 4 se **rechazó** (5 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones).

Sometido a votación el numeral 7 se **rechazó** (6 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones).

Sometido a votación el resto de la iniciativa se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

248. ICI Nº 42-4

1. Se determina que en la nueva carta magna, debe quedar establecido el reconocimiento de las naciones originarias, como pueblo-nación. Lo que conlleva a que Chile se transforme en un Estado Plurinacional.



2. Que la Autodeterminación, es un derecho que va aparejado al ser reconocido como Nación, tanto en nuestra organización política y de desarrollo económico. Por lo que debe ser consagrado por la Constitución.

3. Que las naciones originarias habitan un territorio el cual debe ser reconocido como derecho en toda su concepción jurídica (aguas, suelo, subsuelo, biodiversidad, medio ambiente, otras).

4. Que como nación, contamos con un idioma propio de transmisión oral, el que requiere ser reconocido, para un apropiado rescate y promoción.

Que nuestros derechos políticos deben ser defendidos a través de la mantención de escaños reservados y con una lógica de paridad, en cargos de elección popular, sean estos en el parlamento, concejos regionales, concejos comunales, entre otras.

5. Se establece también que la salud es un derecho, al cual deben asociarse otros como la salud ancestral de los pueblos indígenas. Dando al Estado renaciente la responsabilidad de asegurar el respeto y fomento a una salud indígena, a través de políticas públicas de salud con pertenencia territorial.

6. Por todo lo anterior, es que se vuelve totalmente necesario que los derechos de las naciones originarias sean abordadas en un capítulo exclusivo.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones).

249. ICI N°46

Artículo xx: Los pueblos y naciones preexistentes tienen el derecho a las tierras, territorios y recursos naturales que actual, ancestral o tradicionalmente ha poseído, ocupado, utilizado o adquirido. El territorio indígena cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos y naciones preexistentes al Estado ocupan o utilizan, o han poseído, ocupado, utilizado o adquirido de alguna manera, incluyendo la tierra, las aguas, el suelo, el subsuelo y los recursos y bienes naturales. El Estado reconoce la integralidad de los territorios indígenas.

Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, disponer y controlar sus tierras, aguas y territorios en razón de la propiedad tradicional o ancestral de ocupación o utilización.

El estado reconoce aquella posesión ancestral o tradicional y los sistemas de tenencia de tierra de los pueblos indígenas y velará por su protección y resguardo.

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, usar, gozar, disponer y administrar los bienes comunes naturales que se encuentren en sus territorios. El uso y aprovechamiento de los ecosistemas y los bienes de la naturaleza en dichos territorios se realizarán respetando los usos y costumbres de cada pueblo y en conformidad con la presente Constitución.

Artículo xx: El Estado reconoce, respeta, protege y garantiza la especial relación de los pueblos y naciones preexistentes con sus tierras, territorios y espacios sagrados, que constituyen la base para la supervivencia como pueblos o naciones.

Artículo xx: Las tierras y territorios indígenas no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas del mismo pueblo. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a su propio sistema jurídico de tenencia de la tierra, territorios, agua y recursos naturales. Las tierras y aguas están exentas de todo impuesto.

Artículo xx: Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la restitución territorial por las tierras, territorios y recursos que tradicional o ancestralmente hayan poseído, ocupado o utilizado y que estos hayan sido despojados y perdidos, en razón de cualquier circunstancia y a cualquier título.

Cuando la restitución no sea posible, los pueblos y naciones indígenas tendrán derecho a la reparación, mediante indemnizaciones en tierras, territorios y recursos de igual calidad y extensión, u otra reparación adecuada. Es deber del Estado garantizar y materializar la restitución territorial o la reparación, para lo cual deberá contar con la participación de los pueblos y naciones originarias.

Artículo xx: Para el cumplimiento de la restitución o reparación a que hace referencia el artículo anterior, el Estado, deberá conformar la comisión plurinacional e intercultural dentro de los seis meses de publicada esta Constitución, con la participación de las naciones originarias, encargada de catastrar el despojo territorial que han sufrido los pueblos originarios y cuantificar las tierras perdidas. Además, catastrará las tierras antiguas demandadas por los pueblos originarios y deberá confeccionar políticas de restitución de las tierras, aguas y recursos naturales, o en su caso, la reparación integral.

Para estos efectos, el Estado dispondrá de los recursos financieros y de toda índole, necesarios para dar cumplimiento a este mandato. La comisión creada deberá evacuar sus conclusiones y propuestas dentro de dos años de entrada en funcionamiento. Los pueblos originarios podrán



solicitar que existan observadores o instituciones internacionales de derechos humanos y de derechos de los pueblos originarios encargados de observar y garantizar el funcionamiento de la comisión.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones).

250. ICI Nº 48-4

Propuesta de Artículos. Derecho de propiedad de los Pueblos Indígenas.

Aquellas personas o comunidades indígenas tienen el derecho de propiedad o posesión sobre las tierras que actual o tradicionalmente han ocupado.

Dicho territorio comprende, el suelo, subsuelo, recursos naturales renovables, la biodiversidad y demás ecosistemas existente en ellas, que ocupan, posean o hayan adquirido de alguna forma ya sea en conformidad a la ley o de acuerdo a sus tradición eso derecho consuetudinario, relativo a las regiones que ancestral e históricamente han habitado.

El Estado reconoce, respeta, protege y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, asimismo es deber del estado otorgar una especial protección al vínculo y/o relación de los pueblos indígenas con sus tierras ancestrales y sagradas que constituyen la base de su cosmovisión cultural y espiritual. Las tierras a que se refiere precedentemente no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas del mismo pueblo.

El Estado debe reconocer su rol en el proceso de despojo de las tierras Mapuche, previo a la entrega de los títulos de merceden el siglo XIX, tomando como referencia los reconocimientos, tratados y acuerdos binacionales como el tratado de Taphue de 1825, donde el Estado Chileno reconoce la autonomía y la extensión territorial del Pueblo Nación Mapuche, por lo tanto el Estado al reconocer su rol, reconoce la deuda histórica para con los pueblos originarios. Es obligación del Estado reparar y restituir los daños y perjuicios sufridos por los pueblos originarios en el proceso de conformación del Estado Chileno y la ampliación de sus fronteras, estableciendo un mecanismo de restitución de tierras usurpadas, donde se consideren procesos de expropiación y compensación – devolución voluntaria de empresas u otro tipo de personalidades jurídicas, compras u otros mecanismos que permitiesen reparar y restituir la propiedad usurpada y enajenada a los pueblos originarios.

Respecto de aquellas personas o comunidades indígenas, que por lesione enorme, error, fuerza, dolo, maquinaciones fraudulentas o cualquier otra circunstancia ajena a su voluntad han sido privados, perturbados respecto del derecho de propiedad o posesión que detentaban o detentan sobre sus tierras, podrán ejercer acción reivindicatoria pertinentes en contra de aquellos a quienes les fueron traspasados.

En el caso que lo anterior no sea posible será deber del Estado garantizar la mencionada restitución de sus tierras adoptando para tales efectos todas las medidas pertinentes, eficaces y oportunos para tal fin y/o mecanismos compensatorios equivalentes.

Por último respecto de aquellos pueblos originarios que habitan y han desarrollados su forma de vida y subsistencia a lo largo de la costa, espacios marítimos, lacustres y fluviales tienen derecho a usar, gozar y disponer de ellos conforme a sus usos y costumbres. En caso de reconocerse procesos de usurpación, el Estado debe reparar y restituir los derechos ancestrales vulnerados de los pueblos costeros o sus identidades territoriales, según corresponda.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

251. ICI Nº 56-4

Artículo XX: Las actividades económicas, comerciales, sociales y culturales de los Pueblos-Naciones indígenas de carácter transfronterizo están permitidas siempre y cuando sean legítimas y lícitas. En colaboración con los Pueblos-Naciones indígenas el Estado protegerá y garantizará estas actividades a través de una regulación especial.

Artículo XX: El Estado está para garantizar de forma sana, suficiente, de calidad y sin exclusión: salud, seguridad social, justicia oportuna, vivienda, trabajo, educación, alimentación para el crecimiento y buen vivir de los habitantes del país.

Artículo XX: La Constitución reconoce tres tipos de personas: Naturales, Colectivas y Jurídicas.

Sometido a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones).

252. ICI Nº 81-4

Derecho de consentimiento. Cuando las posibles afectaciones tengan un impacto significativo en los derechos colectivos, limiten sus derechos de tierras, recursos o territorios, o pongan en riesgo la supervivencia de las comunidades o pueblos naciones preexistentes, las autoridades deberán



contar con su consentimiento previo, libre e informado. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

253. ICI Nº 90-3

ARTICULADO: Dentro del primer Año posterior a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el Gobierno de Chile deberá constituir y financiar una comisión especial, plurinacional, paritaria y con presencia de autoridades ancestrales, encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados. En la Comisión deberán tener representación proporcional todos los pueblos y naciones preexistentes al Estado.

Las bases de la política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas y territorios indígenas históricos y de la recuperación de la propiedad comunitaria de los bienes naturales, deberá dar preferencia y urgencia a la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados o de significación cultural.

Dentro del primer Semestre de funcionamiento, la Comisión informará al Gobierno de Chile respecto a las demandas de restitución de tierras que cuenten con informe de factibilidad aprobado por la actual Corporación Nacional de Desarrollo Indígena pendiente de ejecución, para que en el plazo de 2 años se concluya su adquisición.

La Comisión deberá evacuar su trabajo dentro de un plazo máximo de dos años contados desde el momento de su constitución, prorrogables por igual periodo previo requerimiento de la propia Comisión.

Este proceso debe incluir la creación y aplicación de una ley de expropiación y devolución de tierras demandadas por comunidades indígenas y autoridades ancestrales.

ARTICULADO: Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho de propiedad y posesión sobre las tierras y territorios, el control político y cultural sobre el mismo, considerando expresamente el control y autogestión de sus recursos naturales, lugares sagrados, semillas y genética medicinal-alimenticia, para garantizar la existencia a través del tiempo. Así también se consagra el derecho de propiedad intelectual y cultural, ya sean bienes materiales e inmateriales.

ARTICULADO: Reconocimiento del principio de consentimiento fundamentado como facultad Mapuche de otorgar o negar el ingreso a nuestros territorios ancestrales, sagrados y de significancia cultural, de cualquier proyecto o solicitud externa. Así como también se aplicará el derecho a nulidad de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploraciones o explotaciones externas autorizadas antes de la aprobación de la nueva constitución. Por medio de consulta indígena vinculante se reevaluarán estos proyectos.

ARTICULADO: Reconocimiento de tratados internacionales como la carta de naciones unidas, el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; el pacto internacional de derechos civiles, el convenio 169 de la OIT y el tratado de Taphue.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones).

254. ICI Nº 92-4

ARTÍCULO xx: “El Estado reconoce, acata, observa y aplica los tratados, acuerdos, convenios y cualquier otros arreglos concertados por él, y sus antecesores jurídicos, con las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes.

Esta Constitución no podrá interpretarse en el sentido de abrogar o derogar los derechos y libertades reconocidos por estos tratados o acuerdos, sino que se deberán interpretar según el sentido natural de comprensión por parte de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, y por último, las incertidumbres o indeterminaciones serán interpretadas en favor de los pueblos originarios, teniendo especial relevancia los agentes o autoridades culturales que transmiten la memoria oral e histórica con respecto a la celebración de estos tratados”.

ARTÍCULO xx: “La nación Mapuche tiene derecho a llevar sus propias relaciones diplomáticas internacionales, quienes suscriben tratados o acuerdos de cooperación con otros Estados y naciones sin intermediación de terceros.

El Derecho propio o Az Mapu prevalece por sobre los tratados internacionales, sin perjuicio de reconocer y respetar los tratados sobre derechos humanos. Ningún organismo ni tribunal internacional tendrá jurisdicción sobre el territorio ancestral, sin el reconocimiento expreso por las primeras naciones a través de tratados celebrados y pactados a su libre voluntad.

Ninguno de los tratados internacionales bilaterales o multilaterales suscritos por el Estado de Chile tienen aplicación en Wallmapu, excepto aquellos sobre derechos humanos o suscritos directamente con la nación Mapuche”.



Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones).

255. ICI Nº 100-4

Propuesta de norma: En Chile, las personas y los pueblos y naciones preexistentes al Estado gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en esta Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado de Chile es parte, con especial aplicación obligatoria de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, conforme a los estándares que esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales ratificados por Chile establezcan.

El Estado plurinacional de Chile garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas y pueblos-naciones preexistentes, sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.

Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos, comunidades y pueblos, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, identidad de género, culto, estado civil o cualquier otra. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos que permitan alcanzar una igualdad material, se considerará discriminación.

Las autoridades jurisdiccionales ejercerán el control de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para los pueblos y naciones preexistentes, dejando de aplicar aquellas normas contrarias a esta Constitución Política y a los derechos humanos reconocidos en tratados y jurisprudencia internacionales, en esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

El reconocimiento, regulación, ejercicio y garantía de los derechos humanos se rigen por los siguientes principios:

(i) La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, integralidad, progresividad y no regresividad.

(ii) Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles.

(iii) En los casos en que exista conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado.

(iv) En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la plurinacionalidad, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la etaria y la sustentabilidad.

Progresividad de los derechos. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El ejercicio del presupuesto público se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos.

Derecho a la reparación integral. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 20 en contra y 3 abstenciones).

256. ICI Nº 119-4

Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho, de forma colectiva o individual, al disfrute pleno de todos los derechos fundamentales que esta constitución establece, así como también a todos y cada uno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por los tratados e instrumentos internacionales reconocidos por Chile, como también por los organismos internacionales al cual el Estado le delegó competencia en materia de derechos humanos. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es de cumplimiento obligatorio en Chile.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención).



257. ICI Nº 131-4

- Que la nueva Constitución reconozca oficialmente la trashumancia del Pueblo Chango a lo largo de la cordillera de la costa, las planicies litorales, playas, islas y roqueríos de Chile.
- Que la constitución reconozca y resguarde los derechos ancestrales de pesca, caza, recolección y pastoreo, como parte significativa de la actividad ancestral, cultural y económica del pueblo chango.
- Que la nueva Constitución reconozca como territorio histórico del Pueblo Chango desde el extremo norte hasta la zona central, y de manera transversal toda la cordillera de la costa hasta el mar del país, resguardando y protegiendo su derecho de uso y goce de los recursos naturales que allí se encuentran.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

258. ICI Nº 142-4

ARTÍCULO ÚNICO: El Estado de Chile, reconoce, respeta, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes.

Los pueblos; las comunidades; las asociaciones; y los individuos que los integran, serán titulares de los derechos consagrados en esta Constitución.

La Constitución Política de Chile, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que Chile es parte, serán de observancia obligatoria en Chile.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

259. ICI Nº 145-4

Derecho a que se reconozca por derecho propio a sus autoridades ancestrales, autogobierno, sus estatutos y reglamentos por pueblo o nación indígena, garantizando la libre determinación, en la que se debe incorporar los tratados, acuerdos, arreglos firmados, entre los pueblos o naciones indígenas y el estado, en especial, respecto a la deuda histórica, identidad y despojo de tierras y territorios indígenas. Es deber del Estado y de la sociedad en general, garantizar, respetar, promover y proteger los estatutos y reglamentos de acuerdo a la Cosmovisión de cada pueblo, reforzando sus propias instituciones administrativa, jurídica, política, económica, social, cultural y espiritual. Para ello, es necesario establecer políticas públicas, administrativas y créase una Ley y un Ministerio de Pueblos o Naciones Indígenas.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones).

260. ICI Nº 151-4

Los pueblos y naciones preexistentes e individuos indígenas tienen derecho a la identidad e integridad cultural, a preservar, desarrollar, administrar y transmitir a las futuras generaciones, su patrimonio cultural e histórico, tangible e intangible, que constituye la base de su existencia y garantiza su continuidad colectiva e individual.

El Estado tiene el deber de garantizar mecanismos eficaces para la restitución de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales, de los que hayan sido privados sin su consentimiento previo, libre e informado, o en contravención a las normas, costumbres, tradiciones indígenas o los tratados históricos celebrados por los pueblos con la corona y el Estado de Chile.

Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a que se reconozcan y respeten sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad; sus usos, costumbres, normas y tradiciones; las formas de organización social, económica y política; las formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas; y la interrelación que existe entre manifestaciones culturales.

Es deber del Estado establecer mecanismos eficaces de prevención, restitución, reparación y sanción frente a actos que tienen por objeto o consecuencia desposeer a los Pueblos de sus tierras, territorios y recursos, menoscabar sus derechos, incitar a la discriminación racial o étnica o promover una asimilación e integración forzada.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

261. ICI Nº 152-4

Los Pueblos e individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación, en conformidad con las tradiciones, costumbres y el derecho propio de cada comunidad o nación.



Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.

Los Pueblos tienen derecho a determinar la membresía o pertenencia, determinar las responsabilidades de los miembros y derecho a mantener relaciones a través de las fronteras.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

262. ICI Nº 159-4

Artículo XXX: El Estado de Chile garantiza la formación educacional, técnica y profesional de personas y trabajadores pertenecientes a los pueblos originarios con identidad y conocimiento de los derechos y realidades territoriales en distintos ámbitos de la vida.

Artículo XXX: El Estado de Chile garantiza la participación laboral en el sector público y privados de personas indígenas con el fin de fortalecer el desarrollo social, económico y cultural de los pueblos originarios y naciones preexistentes desde sus propias realidades, identidad y costumbres.

Artículo XXX: El Estado promoverá mecanismo que permitan acceder en igualdad y trato justo a instituciones públicas y privados de desarrollo, científica, deportiva, social y cultural tanto a nivel nacional y local a trabajadores, técnicos y profesionales pertenecientes a pueblos originarios capacitados y con conocimiento de la cosmovisión y filosofía de pueblos originarios, así como de su historia con el fin de incorporar en proyectos, planes, programas y políticas sociales las necesidades y realidades de las comunidades y población indígena de las localidades urbanas y rurales.

Artículo XXX: El Estado garantizará en conjunto con representantes de los pueblos originarios la participación indígena en políticas públicas y privadas de acuerdo con sus costumbres y por región, que se cumpla, garantice y promueva la incorporación de trabajadores, técnicos y profesionales indígenas en distintas instancias laborales y de igual acceso a distintos cargos de incidencia, desarrollo y relevancia donde se promuevan planes, programas y proyectos de desarrollo para los pueblos originarios con asignación de recursos económicos pertinente para tales efectos.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones).

263. ICI Nº 160-4

Los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen los derechos fundamentales de los pueblos originarios, tribal afrodescendientes y de las demás naciones de Chile, así como toda norma del orden administrativo, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Se exceptúan las normas relativas a los estados de excepción que la propia Constitución contempla.

Cualquier transgresión a este precepto podrá ser representada por el afectado ante la autoridad que generó el acto, la cual deberá enmendar y restablecer los derechos afectados en un plazo de 15 días o bien, persistir emitiendo la correspondiente resolución fundada. De esta resolución se podrá recurrir ante la corte de apelaciones del lugar donde se generó el acto para que adopte las medidas necesarias para restablecer los derechos de los afectados.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención).

264. ICI Nº 173-4

Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación continuada los profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

El Estado garantizará medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de las personas mayores las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

El Estado establecerá medidas en conjunto con los pueblos y naciones indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención).

265. ICI Nº183

ARTÍCULO xx(4):“La Nación Mapuche declara y ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre el Wallmapu, que comprende los territorios al sur del río Biobío en Gulumapu, y, al sur del



río Negro y río Salado en Puelmapu, y todos los espacios marítimos e insulares correspondientes a los Océanos Pacífico y Atlántico, por ser parte integrante del territorio y maritorio ancestral. La recuperación de dichos territorios y maritorios, del ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable de la nación Mapuche”.

ARTÍCULO xx (18): “Es deber del Estado indemnizar a las ciudadanías chilenas y/o empresas que deseen retirarse voluntariamente del Wallmapu, y para el caso de ser dueños de bienes raíces inmuebles, estos serán transferidos gratuitamente por el Estado a los lof o a las comunidades mapuche como parte de las medidas de reparación y resarcimiento territorial”.

ARTÍCULO xx(21): “El territorio de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado corresponde a la totalidad del hábitat de las regiones o espacios que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado, adquirido o recuperado de alguna manera y se encuentran en propiedad o posesión de las comunidades e integrantes de los pueblos originarios; y, las que han sido expoliadas, usurpadas, despojadas, expropiadas o cualquiera sea la situación o formas de tenencia de ellas en la actualidad”.

ARTÍCULO xx (22): “Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen derecho a la propiedad, posesión, al uso, goce o disfrute, disposición, recuperación o reivindicación, restitución, resarcimiento, compensación, control, administración y conservación del suelo, el subsuelo, las aguas superficiales y subterráneas, los recursos naturales y los bienes espirituales existentes en sus territorios”.

ARTÍCULO xx(23): “El territorio, la tierra, las aguas superficiales y subterráneas, el patrimonio material e inmaterial cultural, lingüístico, arqueológico e histórico, las artes y la arquitectura de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado es inalienable, imprescriptible e inembargable”.

ARTÍCULO xx(24): “Serán nulos de pleno derecho, los derechos de aprovechamiento de aguas concedidos en los territorios de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx (25): “El derecho a la propiedad estará limitado en función de la reparación y resarcimiento del territorio, maritorio, tierra, aguas, recursos naturales y bienes espirituales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes. Asimismo, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, estará limitada por aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y biodiversidades, o, que pertenezcan o deban pertenecer a las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx(26): “Los descendientes de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes que, por circunstancias ajenas a su libre voluntad, se han visto despojados de los derechos sobre sus tierras y territorios históricos, las aguas superficiales y subterráneas, los recursos naturales y bienes espirituales, mantienen vigente el derecho de recuperarlas o reivindicarlas respecto de terceros a quienes se ha traspasado legalmente, y cuando ello no sea posible, a obtener otras tierras de igual extensión y calidad u otras medidas compensatorias que se determinen en conjunto con los pueblos originarios”.

ARTÍCULO xx(27): “El Estado será responsable de establecer todas las medidas, políticas, programas y mecanismos urgentes, oportunos, adecuados, necesarios, expeditos y consensuados para garantizar y materializar la efectiva restitución y resarcimiento de las tierras y territorios a las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx(28): “El Estado será responsable de la restitución y transferencia a título gratuito de los parques, reservas, monumentos naturales o áreas protegidas situadas en los territorios ancestrales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx(29): “Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado tienen derecho a controlar, recuperar, acceder, proteger y reivindicar los espacios sagrados o de significación cultural. El Estado, en conjunto con los pueblos originarios, deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto y eficacia de estos derechos”.

ARTÍCULO xx(30): “El Estado será responsable de establecer todas las medidas, políticas, programas y mecanismos que busquen transferir a título gratuito la propiedad y administración de las concesiones mineras, marítimas, las aguas superficiales y subterráneas, y los bosques nativos situados en los territorios ancestrales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx(31): “En virtud del derecho a la reparación histórica y de la política de restitución territorial, en el ejercicio del derecho a la recuperación o reivindicación, bastará la posesión, ocupación o tenencia tradicional de la tierra, para que las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes que carezcan de un título legal sobre la propiedad de la tierra, obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro ante la autoridad competente”.



ARTÍCULO xx (35): “El Estado reconoce, respeta, protege y garantiza los derechos precedentes y la especial relación de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes con sus tierras, territorios y espacios sagrados, que constituyen la base espiritual y material de su identidad individual y colectiva, la condición para la reproducción de su cultura, desarrollo y plan de vida, y la garantía del derecho colectivo a la supervivencia como pueblos”.

ARTÍCULO xx(39): “No se podrán desarrollar actividades militares en las tierras, territorios o espacios sagrados de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, a menos que se haya acordado libremente con ellos. El Estado deberá desmilitarizar las tierras y territorios que se encuentren bajo esa condición, incluyendo a las tierras y territorios en recuperación o reivindicación territorial. Ningún movimiento de recuperación o reivindicación territorial podrá ser considerado por esta Constitución o las leyes como un movimiento o grupo terrorista, por tanto, no serán aplicables las leyes antiterroristas, de seguridad interior del Estado u otras de similares características”.

ARTÍCULO xx(40): “En razón del derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos, del derecho a la reparación histórica y la política de restitución territorial, ningún movimiento de recuperación o reivindicación territorial, que esté integrado por personas de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, podrá ser considerado por esta Constitución o las leyes como un movimiento o grupo terrorista”.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones).

266. ICI Nº 184-4

El Estado Plurinacional debe garantizar la no discriminación, la igualdad, la equidad y la participación efectiva de los Pueblos

Naciones Originarias en los espacios del Estado, siempre que ellos así lo determinen.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

267. ICI Nº 188-3

X. El Estado asegurara el reconocimiento, la restitución y la protección de los territorios indígenas (subsuelo y suelo) a los Pueblos Naciones Originarias, para que ellos puedan desarrollar sus prácticas tradicionales y ancestrales.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención).

268. ICI Nº 215-4

Artículo 1º. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas indígenas, y a todo habitante de la República:

19. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.

Toda persona imputada de delito tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.

Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial e independiente.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, que asegure el derecho de las partes a ser oídas y a presentar pruebas, peticiones y recursos que determine el legislador, el que deberá garantizar siempre la igualdad procesal de las partes frente al juzgador. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

El justo y racional procedimiento se entiende extensivo al procedimiento administrativo sancionador y a todo proceso que derive en una sanción.

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.



Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.

La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud del derecho aquí consagrado y la forma en que se financiarán, corresponderá exclusivamente al Legislador.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones).

269. ICI Nº 221-4

“Art. X. La Constitución reconoce el derecho de los pueblos originarios a ejercer su libre determinación y a decidir, bajo las propias costumbres, las medidas adecuadas que les permitan ejercer el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales individuales y colectivos e incidir en todos los asuntos públicos que les afecten directamente,”

“Art. X. El Estado plurinacional y la sociedad chilena asumen y promueven como principios orientadores de su actuar el itrofilmongen (biodiversidad) y el kume mongen (buen vivir)”.

“Art. X.- La Constitución asegura el derecho de los pueblos originarios a expresar libremente y mantener el felleltun, sus creencias y cosmovisiones, incluyendo sus centros ceremoniales; así como a gozar y preservar su patrimonio cultural e inmaterial, tales como las ruka, los Nguilaltuwe, los Paliwe, los Rewe y Chemamul”.

“Art. X.- El Estado garantizará el acceso igualitario a la justicia, sin discriminación alguna.”

“Art. X.: Es deber del estado tomar las medidas intersectoriales y en sus distintos niveles, para asegurar las condiciones materiales y espaciales que permitan a los pueblos originarios ejercitar sus derechos colectivo sociales, culturales y lingüísticos, así como a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones sociales y formas de organización social.

El estado destinará suelos urbanos y rurales a la construcción de espacios con pertinencia cultural funcionales a la mantención de las prácticas culturales y la conservación y reproducción del patrimonio material e inmaterial de la ciudad”.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención).

270. ICI Nº 254-4

Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación continuada los profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.

El Estado garantizará medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de las personas mayores, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

El Estado establecerá medidas en conjunto con los pueblos y naciones indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

El Estado garantizará mediante un ente fiscalizador en conjunto con representantes de los pueblos originarios elegidos democráticamente por estos de acuerdo con sus costumbres y por región, que se promuevan y cumplan los preceptos de un Estado plurinacional y la asignación de recursos económicos para ello.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención).

271. ICI Nº 261-4

Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho, de forma colectiva e individual, al disfrute pleno de todos los derechos fundamentales que esta constitución establece, así como también a todos y cada uno de los derechos humanos y la libertades fundamentales reconocidos por los tratados e instrumentos internacionales reconocidos por Chile, como también por los organismos internacionales al cual Estado le delegó competencia en materia de derechos humanos.

El cumplimiento obligatorio de la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre indígenas y tribales y que estos sean transversales a la nueva constitución para su pleno ejercicio y reconocimiento por parte del Estado Chileno y sus instituciones.



El Estado garantizará mediante un ente fiscalizador en conjunto con representantes de los pueblos originarios elegidos democráticamente por estos de acuerdo con sus costumbres y por región, que se promuevan y cumpla dicha norma y la asignación de recursos económicos necesarios para ello.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención).

272. ICC N°210-1

Artículo 3°.- La Constitución reconoce y asegura a los pueblos indígenas:

1 El derecho a la libre determinación y a la autonomía en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y comunitarios, el que deberá ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes.

2 El derecho a conservar, fortalecer y desarrollar su historia, identidades, culturas, idiomas, instituciones y tradiciones propias.

3 Los derechos culturales y lingüísticos, incluyendo el derecho a su patrimonio cultural, material e inmaterial. La preservación y difusión de los idiomas de los pueblos indígenas será materia de una ley especial.

4 El derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Una ley sujeta a mayoría absoluta establecerá la participación de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional, bajo criterios de proporcionalidad.

5 El derecho a sus formas de administración de justicia, las que deberán respetar los derechos humanos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y se aplicarán solo a la justicia impartida a los integrantes de un mismo pueblo. El respeto a los derechos humanos estará garantizado por la revisión de las decisiones a través de un recurso de tutela de derechos.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones).

273. ICC N°404

Derechos Lingüísticos. *Las personas y pueblos tienen el derecho individual y colectivo a comunicarse en su respectiva lengua en todo espacio público o privado, físico o digital, y a la oficialización de ella.*

Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener su identidad y diferencia, lo que implica el derecho al uso colectivo de su lengua, su conservación y el derecho de aprenderla, cultivando, además, el castellano como lengua de comunicación intercultural.

Todos los habitantes del territorio nacional, y en especial en las autonomías territoriales indígenas, tendrán el derecho a aprender y usar las lenguas.

Los integrantes de un pueblo indígena tienen el derecho a aprender y adquirir la lengua de sus antepasados y a recibir educación pública que considere su lengua. Ninguna persona o grupo podrá ser discriminado por razones lingüísticas.

El Estado reconoce todas las lenguas indígenas como patrimonio inmaterial de todos los pueblos y garantiza, en participación y consulta con los pueblos y a través de la institucionalidad nacional y regional, su tránsito progresivo a la co-oficialización. Mediante el aseguramiento de su visibilización, difusión, educación, revitalización y preservación, se deberá garantizar las políticas públicas para la difusión de las lenguas reconocidas y progresivamente las funciones sociales de estas a través de su uso en las publicaciones y documentos oficiales, en la administración pública, en la sociedad, medios de comunicación y plataformas virtuales. Para promover y profundizar este derecho, el Estado debe crear una ley, en consulta con los pueblos indígenas, que establecerá la política de planificación lingüística, con el objetivo primordial de preservar, conservar, registrar, desarrollar y educar sobre las lenguas indígenas en todas sus funciones sociales, además de avanzar en medidas de normalización, escritura, desarrollo lexical y gramatical de estas.

Dicha ley también establecerá la institucionalidad que permita la planificación, coordinación y promoción de la investigación lingüística con el objetivo de revitalizar, registrar y difundir las lenguas.

Sometido a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones).

274. ICC N°654-4

EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA.

Artículo XX. *La participación y consulta previa es un derecho de los pueblos y naciones indígenas y el pueblo tribal; y una obligación para el Estado y de todos sus órganos, cada vez que se*



prevean medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza susceptibles de afectar sus derechos.

La consulta es siempre de carácter previo, no se agota con la mera información; es de buena fe, adecuada a las circunstancias, a través de las instituciones representativas indígenas, de manera sistemática y transparente, con el propósito de lograr el consentimiento libre, previo e informado sobre la medida objeto de la consulta.

Corresponderá a la ley en consulta y cooperación de buena fe con los pueblos y naciones indígenas y el pueblo tribal, establecer la regulación del proceso de participación y consulta previa de conformidad a los principios y estándares de esta Constitución y el Derecho Internacional.

La naturaleza y alcance de las medidas que se adopten para dar cumplimiento al derecho-deber a la consulta, en ningún caso pueden menoscabar los derechos fundamentales de los pueblos y naciones indígenas y el pueblo tribal, garantizados en el Sistema Internacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que en cualquier caso serán considerados como estándares mínimos.

Artículo XX. Se creará un organismo autónomo y plurinacional, cuya función será revisar las solicitudes de inicio de un proceso de consulta previa, realizar el seguimiento del procedimiento y velar por el cumplimiento de los estándares o principios rectores que validan la consulta previa. La composición y las atribuciones específicas de este organismo autónomo serán determinadas por la ley, en consulta con los pueblos y naciones indígenas.

Artículo XX Los procesos de participación y consulta previa podrán siempre ser revisados, ya sea por vía administrativa o judicial según corresponda.

Artículo XX (Transitorio).

Este organismo autónomo se deberá crear dentro del plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, mientras que el inicio de sus funciones no podrá superar los diez meses desde su creación. En el periodo de transición, previo a su funcionamiento, el Estado y sus organismos se abstendrán de desarrollar e implementar procedimientos de participación y consulta previa, con excepción de la consulta previa que se implemente para la creación del organismo autónomo y plurinacional.

Sometido a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

275. ICC N°838

Artículo XX. Derecho al desarrollo de los Pueblos

El Estado de Chile reconoce el derecho humano y colectivo al desarrollo de los pueblos, conforme al cual todos los pueblos y naciones gozan de su libre determinación y autonomía, conforme a los principios y reglas del sistema de Naciones Unidas, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en el caso de los Pueblos habitantes del Estado, de los principios y reglas de esta Constitución.

Este derecho colectivo involucra el desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y fundamentales, y la posibilidad de todas las personas, grupos y pueblos, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención).

276. ICC N°842

ARTÍCULO XX: DERECHO A LA JUSTICIA INTERCULTURAL

Las comunidades e individuos pertenecientes a pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado tienen derecho a la justicia intercultural, a que se respeten sus sistemas normativos, instituciones y jurisdicción propia, en los términos establecidos en esta Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos.

Es deber del estado garantizar el acceso a la justicia intercultural conforme los principios de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Es deber de los órganos que intervienen en el proceso de administración de justicia, respetar y promover el derecho a acceder a una justicia con perspectiva intercultural.

El estado garantiza el acceso a un proceso judicial en la justicia ordinaria, a la tutela efectiva de sus derechos, a la pronta resolución de los conflictos y a la reparación efectiva de los daños causados, con pleno respeto a sus prácticas y sus sistemas jurídicos propios.

Cuando se impongan sanciones civiles, administrativas, penales o de otro tipo a personas indígenas, se deben respetar sus características económicas, sociales y culturales. En el ámbito penal, se deben privilegiar sanciones que no impliquen el encarcelamiento, y cuando esto no sea



posible, los tribunales y sistemas penitenciarios deben garantizar condiciones que permitan ejercer el derecho a vivir conforme a su propia cultura.

Las personas indígenas tienen derecho a una asistencia jurídica especializada, intérpretes y facilitadores interculturales.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones).

277. ICC N 845

ARTÍCULO XX: DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Las personas, pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado son sujetos titulares de derechos individuales y colectivos, conforme esta Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El Estado reconoce y garantiza a las personas, colectivos y pueblos indígenas el disfrute pleno de todos los derechos individuales y colectivos consagrados en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Estos instrumentos internacionales integran la constitución y son de observancia e implementación obligatoria en Chile.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención).

(c.412) Derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales (IIC N°3, 40, 56, 58, 95, 215; ICC N°8, 114, 136, 164, 512, 793, 954).

278. ICI N° 3-4

1.2 Propuesta frente al Derecho del agua: La habitabilidad de las comunidades mapuche se da en un entorno de naturaleza conformada por tierra, subsuelo, árboles, aire, agua, vida silvestre, montañas, caudales de agua dulce superficiales y subterráneas, lawenes, humedales, además del lafquén (mar) como un todo, como un solo territorio lafquenche, por tanto, la Constitución debe consagrar expresamente su pertenencia sobre dichos bienes nacionales.

Por consiguiente, los caudales insertos y/o que rodean las comunidades deben estar inscritos a nombre de dichas comunidades.

Asimismo, que las doce (12) millas de mares interiores de dominio del estado chileno, sean declaradas a perpetuidad por la Constitución para las comunidades que tienen sus posesiones en el espacio costero como Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios Lafquenche, tanto en sus espacios rocosos, como playas, aguas superficiales y en sus profundidades, además del fondo marino.

1.6 Propuesta a Derecho a Medio Ambiente libre de contaminación La visita de turistas a los espacios costeros del Océano Pacífico ha significado un alto grado de contaminación tanto acústica por el uso de parlantes a altos volúmenes que espantan la vida silvestre, como de basura por el inmenso volumen de desechos y desperdicios abandonados con nula conciencia de contaminación, es necesario que la Constitución considere y otorgue instrumentos jurídicos y de infraestructura a las municipalidades para que se hagan cargo de esta problemática.

Además, que se mida el impacto ambiental que generen intervenciones de terceros que ocasionen derrumbes o intervención del borde costero o ríos de la zona, instalación de empresas salmoneras y pisciculturas, el uso de vehículos motorizados como motos y jeeps en las dunas costeras impidiendo la anidación de las aves, con su consiguiente peligro de exterminio, y se requiera informe y/o autorización de las comunidades lafquenche.

Se cuantifique, además, el impacto ambiental, cultural, económico y territorial de las empresas Forestales, Mineras e Inmobiliarias

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención).

279. ICI N° 40-4

Artículo 1: Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las aguas superficiales y subterráneas que han poseído u ocupado y utilizado actual e históricamente, asumiendo las responsabilidades de su conservación que a ese respecto involucran a las futuras generaciones y los demás elementos de la naturaleza. El Estado garantizará su pleno ejercicio frente a terceros y adoptará las medidas eficaces, junto con los pueblos, para asegurar que accedan, mantengan, respeten y protejan tales espacios.

Art. 2: También tendrán derecho a la reparación estatal, incluyéndose la restitución o cuando no sea posible, una indemnización, suficiente, justa y equitativa por las aguas superficiales y subterráneas que tradicionalmente hayan poseído, ocupado o utilizado, y que hayan sido



agotadas, confiscadas, tomadas, ocupadas, utilizadas o dañadas sin su consentimiento libre, previo e informado.

Art.3: Los pueblos tienen derecho a la propiedad de las aguas que se encuentren en su territorio, controlándose y administrándose bajo sus instituciones propias en instancias de planificación, gestión y fiscalización o las que determinen necesarias para mantener el equilibrio, el buen vivir, la biodiversidad y el uso consuetudinario de las aguas para la preservación de la vida. El Estado deberá proveer los recursos necesarios para el ejercicio de este derecho.

Art.4: Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua presentes en el territorio que habitan los pueblos y naciones preexistentes, dando paso a las indemnizaciones pertinentes que se determinen por ley, con excepción de los que detentan las personas y familias indígenas que gozan de ellos, los que servirán de antecedentes para la administración, manejo y uso consuetudinario y ancestral que se realice por sus instituciones propias.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones).

280. ICI N°56

Artículo XX: El agua es un derecho humano y sus distribución no será objeto de privatizaciones o concesiones.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención).

281. ICI N°58-4

Articulado de la Iniciativa Popular de Norma

El derecho al agua

1. Más recientemente hemos visto una incidencia en el derecho al agua por parte de pueblos indígenas. El derecho al agua debe ser reconocido como un derecho fundamental e irrenunciable en la Constitución chilena.

2. La Observación General No 15 de la ONU – El Derecho Al Agua (2002) que interpreta el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vinculante en el Estado Chileno, ha precisado por su parte que “el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.”

3. Se señala además que los Estados Partes deben garantizar que los recursos hídricos naturales estén al abrigo de la contaminación por sustancias nocivas.

4. Plantea además que:

“10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.” (Énfasis agregado)

5. En cuanto a la calidad del agua, la Observación General No 15 señala que “no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas”.

El Pacto por otro lado, prohíbe medidas regresivas con respecto al derecho al agua. Una obligación del Estado es el de abstenerse de “contaminar ilícitamente el agua”.

Todos estos estándares son relevantes aquí por cuanto la nueva Constitución ha de reconocer que los pueblos indígenas tiene un derecho inalienable al agua y a que se respete dicho derecho en sus territorios, incluido la protección de sus ríos, lagunas y fuentes acuíferas que han constituido tradicionalmente parte de sus territorios. Además el papel que el agua tiene en las relaciones sociales y la resolución de conflictos, así como su carácter espiritual y de identificación cultural para los pueblos



Indígenas. Ver en ese sentido la reciente sentencia de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos en el caso Asociación Lhaka Honhat vs. Argentina en el cual se reconoció dicho derecho fundamental de los pueblos indígenas al agua.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención).

282. ICI N°95-4

DERECHO AL AGUA Y PUEBLOS Y NACIONES PREEXISTENTES Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ecológica. El estado garantizará su conservación, recuperación y manejo sustentable e integral, en tanto cuencas hidrográficas y caudales asociados a ciclos hidrológicos. En conjunto con los pueblos, el Estado regulará toda actividad que pueda afectar el equilibrio de los ecosistemas, asociados a las actividades que puedan afectar la calidad y cantidad de agua, fuentes y zonas de recarga y desembocadura, incluyéndose la dimensión transfronteriza.

El agua para los pueblos indígenas representa un elemento sagrado, compuesto de rituales y ceremonias que armonizan el cosmos y perpetúan las tradiciones. Desde la cosmovisión el agua está íntimamente relacionada con el existir del ser humano.

El vínculo persona, agua y naturaleza hacen parte de la identidad cultural de las comunidades.

Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las aguas superficiales y subterráneas que han poseído u ocupado y utilizado actual e históricamente, asumiendo las responsabilidades de su conservación que a ese respecto involucran a las futuras generaciones y los demás elementos de la naturaleza. El Estado garantizará su pleno ejercicio frente a terceros y adoptará las medidas eficaces, junto con los pueblos, para asegurar que accedan, mantengan, respeten y protejan tales espacios.

Tendrán derecho a la reparación estatal, incluyéndose la restitución y regeneración o cuando no sea posible, una indemnización pecunaria, suficiente, justa y equitativa por las aguas superficiales y subterráneas que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido agotadas, confiscadas, tomadas, ocupadas, utilizadas, o dañadas sin su consentimiento libre, previo e informado. También tendrán derecho a la reparación por parte de terceros que hayan intervenido o intervengan el territorio de los pueblos y naciones preexites por las acciones u omisiones que les hayan afectado o afectaren por las externalidades negativas, daños, perjuicios y la afectación a sus derechos humanos.

Los pueblos tienen derecho a la propiedad de las aguas que se encuentren en su territorio, controlándose y administrándose bajo sus instituciones propias en instancias de planificación, gestión y fiscalización o las que determinen necesarias para mantener el equilibrio, el buen vivir, la biodiversidad y el uso consuetudinario de las aguas para la preservación de la vida. El Estado deberá proveer los recursos y medidas necesarias para asegurar el ejercicio de este derecho.

Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua presentes en el territorio que habitan los pueblos y naciones preexistentes, dando paso a las indemnizaciones pertinentes que se determinen por ley, excepcionándose los que se detenten por las personas y familias indígenas que gozan de ellos, los que servirán de antecedentes para la administración, manejo y uso consuetudinario y ancestral que se realice por sus instituciones propias.

Sometido a votación se **rechazó** (8 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones).

283. ICI N°215-4

1º. La garantía fundamental al agua para consumo humano y saneamiento. Corresponderá al legislador regular el alcance y contenido de este derecho.

El Estado promoverá el uso y gestión eficiente y sustentable del agua y el desarrollo de infraestructura, innovación y tecnología para tales fines”.

Sometido a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones).

284. ICC N° 8-4

Artículo: Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para una vida digna.

Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales.



Toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado, y de las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad.

Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Toda persona o comunidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos establecidos en este artículo.

La convencional Delgado **retiró** la iniciativa.

285. ICC N 114-4

Artículo XX: Las aguas, en cualquiera de sus estados y ubicación, sean superficiales o subterráneas, así como los glaciares y el agua de mar, son bienes de la nación, de uso público, de carácter polifuncional, inapropiables, irrenunciables, imprescriptibles e inalienables.

El Estado reconoce y garantiza como derecho humano prioritario el acceso al agua potable y el saneamiento. Los órganos públicos competentes deberán asegurar el adecuado abastecimiento para el consumo de las personas. Asimismo, deberán planificar, coordinar y ejecutar las acciones que permitan el desarrollo de las actividades productivas, recreativas y culturales, velando por el equilibrio del ecosistema, la equidad y seguridad hídrica.

La ley regulará las instituciones, condiciones, modalidades y garantías para el acceso, uso y calidad del agua, priorizando las infraestructuras hídricas multipropósito que garanticen el acceso de todos los usuarios, asegurando el interés público y ambiental, la debida gestión de las cuencas hidrográficas, así como el desarrollo sostenible. La autoridad competente elaborará una política nacional de aguas y saneamiento.

Los usos de las aguas obligan a sus titulares a desarrollar las actividades necesarias para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento, por el plazo y en las condiciones establecidas en la ley.

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, en contra, abstenciones)

286. ICC N°136-4

“Artículo XX. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

Número XX: La garantía fundamental al agua para consumo humano y saneamiento. Corresponderá al legislador regular el alcance y contenido de este derecho.

El Estado promoverá el uso y gestión eficiente y sustentable del agua y el desarrollo de infraestructura, innovación y tecnología para tales fines”.

Sometido a votación se **rechazó** (13 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones)

287. ICC N 164-4

Art XX: Las aguas terrestres son bienes nacionales de uso público y se otorga a sus titulares el derecho de aprovechamiento sobre ellas en conformidad a la Constitución y la ley. Los derechos de aprovechamiento de agua, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley se otorgarán a sus titulares, vía concesión.

- Art XX: Las aguas correspondientes al Maritorio Nacional, están organizadas en virtud de acuerdos internacionales, correspondiendo la explotación de sus recursos a la normativa legal derivada de esta constitución, debiendo considerar los principios de sustentabilidad y preservación del medio ambiente. En este marco se deben considerar los proyectos de desalinización de agua de mar, los que pueden obedecer a planes de desarrollo público o privado y, en este último caso, superadas las exigencias de aprobación ambiental, tendrán las necesarias concesiones que promuevan la inversión y el desarrollo de interés nacional.

- Art XX: La Constitución reconoce y asegura a todas las personas, El derecho humano al agua para consumo humano y saneamiento. Corresponderá al legislador, definir los requisitos e instituciones que participarán en este proceso.

- Art XX: El Estado de Chile, promoverá el uso y gestión eficiente y sustentable del agua y el desarrollo de infraestructura, innovación y tecnología para tales fines.

- Art XX: La Dirección general de aguas, es una institución técnica, con personalidad jurídica, patrimonio propio y descentralizada del estado, que velará por la supervigilancia del correcto uso y manejo del recurso hídrico, lo relativo a su operatividad y funcionarios, quedará en materia de ley.

Sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 21 en contra y 1 abstención).



288. ICC Nº 512-4

El derecho de las personas a acceder a agua potable y saneamiento es un derecho humano básico que debe ser garantizado por el Estado.

Corresponderá al Estado velar para que todos los habitantes de la República tengan acceso progresivo y universal al agua y al saneamiento de forma segura, salubre, suficiente y asequible, para el uso personal y doméstico, sea que ésta se distribuya por prestadores estatales o privados. Deberá el Estado velar especialmente por los grupos vulnerables, a fin de fijar políticas públicas que favorezcan su acceso.

Es deber del Estado asegurar un uso racional, eficiente y sustentable del agua. El Estado desarrollará una política de infraestructura hídrica para su captación, distribución y almacenamiento para zonas urbanas y rurales. Para el cumplimiento de estos deberes, la ley creará un organismo autónomo y especializado, de carácter técnico, que funcionará descentralizadamente a nivel de cuencas.

Las aguas son bienes nacionales de uso público. Las condiciones para su utilización y el otorgamiento a los particulares quedará entregada a la ley. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a las limitaciones y condiciones que establezca la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos.

Sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones).

289. ICC Nº 793-4

Artículo X.- El Estado reconocerá el derecho al agua y saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida, el que debe respetarse en favor de las generaciones actuales y futuras, promoviendo avanzar progresivamente y no retroceder.

Artículo X.- El Estado garantizará la priorización del agua en los diferentes usos poniendo el derecho humano al agua potable para la bebida, en primer lugar.

Artículo X.- Será deber del Estado crear un Organismo Independiente y autónomo del gobierno de turno, implementándolo con la capacidad de supervisar, promover, proteger e informar sobre las políticas públicas por parte del Estados sobre el Derecho Humano al Agua, así como también de las sanciones por las infracciones relacionadas.

Artículo X.- Será deber del Estado la fiscalización y control del Derecho Humano al Agua. La Fiscalización deberá ser compartida entre el Estado y actores de la sociedad civil organizada que defienden este derecho.

Artículo X.- Será deber del Estado asegurar que toda la población tenga un acceso económico, justo, sostenible y equitativo al agua potable y al saneamiento.

Artículo X.- El Estado deberá promover y fortalecer un tipo de gestión del agua en donde sean los mismos ciudadanos los encargados de proteger sus fuentes hídricas mediante herramientas de colaboración ciudadana que permitan planificar, diagnosticar y restaurar nuestros ecosistemas hídricos desde la cuenca, asegurando el consumo humano y la protección de la biodiversidad presente en nuestro territorio.

Artículo X.- El Estado deberá Incorporar en los planes de Educación el uso sustentable del agua.

TRANSITORIO:

El Estado deberá crear un sistema integrado en el uso del agua, de tal forma que las aguas superficiales, subterráneas y en cualquiera de sus estados deberán estar regulados e ingresados a un sistema único que permita un manejo integrado de este recurso.

La convencional Meneses **retiró** la iniciativa.

290. ICC Nº 954-5

Párrafo III: De los derechos humanos

Artículo 8°. Derecho humano al agua y al saneamiento. Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para la vida, la dignidad, la salud y la igualdad.

Toda persona, sin discriminación arbitraria, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. El Estado velará por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas, migrantes y personas privadas de libertad. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales.



Toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado y de las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, en situación de discapacidad o privadas de libertad.

Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Toda persona o comunidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos establecidos en este artículo.

Sometido a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención).

(ODF) Derecho al Consentimiento libre e informado antes de un tratamiento médico o vacunación (IPC N° 22)

291. IPC N° 22-04

Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno.

Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones).

(ODF) Contenido esencial de los Derechos (IIC N°215)

292. IIC N°215

27. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen, complementen o limiten las garantías o derechos que ésta establece, no podrán afectar los derechos en su esencia o núcleo fundamental, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Las restricciones a los derechos y libertades fundamentales deberán tener siempre establecerse por ley, tener una base jurídica y ser proporcionadas.

Los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos y libertades fundamentales señalados en el presente artículo, sin obstáculos ni discriminación. Se deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Dichas medidas no deben ser contrarias a lo que expresen libremente tales pueblos ni a la normativa vigente.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones).

(ODF) Derecho a la agricultura campesina y derecho fundamentales desde la perspectiva rural (ICC N°776-4, 1016, 1023)

293. ICC N°776-4

Artículo 1.- Es parte fundamental de la política de salud rural velar por centros de atención sanitaria in situ, el abastecimiento local de alimentos agroecológicos, la atención y el cuidado de los animales, y el resguardo de los equilibrios naturales entre todas las especies. El Estado reconoce que la salud tiene raíces ecosistémicas y deberá garantizar el derecho al cuidado integral de los pueblos y la naturaleza, atendiendo a la realidad eco-social, cultural, demográfica y epidemiológica específica de los territorios rurales.

Artículo 2. El Estado reconoce y garantiza que las y los campesinos, y otras personas que habitan y trabajan en zonas rurales, tienen derecho a utilizar y proteger sus medicinas, alimentación y agriculturas tradicionales preservando sus conocimientos, los cuales serán inapropiables. El Estado reconoce que estas prácticas y saberes, junto con las agriculturas de base agroecológica, constituyen parte de los pilares para garantizar el derecho a la salud y el derecho a una alimentación y nutrición adecuada en territorios rurales y urbanos.

Artículo 3. El Estado reconoce que las agriculturas campesinas cuentan con características agroecológicas propias, con el potencial de construir agroecosistemas y sistemas alimentarios locales aptos para afrontar la crisis climática, y proporcionará las condiciones técnicas y económicas para tal fin.

Artículo 4.- El Estado reconoce y garantiza que las y los habitantes de territorios rurales tienen el derecho fundamental a sistemas de salud in situ que garanticen, sin discriminación, la atención en salud, los procesos integrales de cuidados y el Buen Vivir. El Estado promoverá y facilitará el ejercicio del derecho a participar en el diseño y evaluación de políticas públicas relacionadas con un sistema de salud adaptado a los territorios rurales.



Artículo 5.- El Estado adoptará políticas integrales para garantizar el derecho a una educación y salud intercultural que considere la agroecología de manera holística y transversal en los territorios rurales y urbanos.

Sometido a votación se **rechazó** (9 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones)

294. ICC N°1016

Artículo Transitorio. Es deber del Estado, en virtud del reconocimiento del daño que ha infligido al sector artesanal la tradición constitucional y el modelo económico neoliberal y extractivista impuesto en la dictadura cívico militar, adoptar todas las medidas reparatorias necesarias con el fin de subsanar el daño causado al sector, dictar la ley establecida en la Constitución en un plazo no superior a 3 años la que debe, a lo menos, garantizar la no repetición; crear la Cámara del Artesanado; garantizar condiciones de trabajo dignas con cobertura permanente de prestaciones de seguridad social; el pleno ejercicio de todos sus derechos fundamentales; establecer las condiciones tributarias que sean acordes a los procesos de producción, de creación y reproducción de conocimientos y saberes, atendiendo especialmente a las particularidades de cada gremio o rubro, pudiendo inclusive establecer exenciones tributarias con el fin de que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos del artesanado.

El convencional Labbé **retiró** la iniciativa.

295. ICC N°1023

Artículo 1.- Los y las habitantes de territorios rurales, aislados e insulares tienen derecho a participar de manera vinculante en la toma de decisiones sobre lo que ocurre en sus territorios. Es deber del Estado garantizar esta participación y los medios para acceder a ella.

Artículo 2.- El Estado reconoce el derecho a la educación en los territorios rurales y facilita y garantiza sistemas educativos con pertinencia territorial y lingüística, no sexistas, y accesibles in-situ. Los contenidos deben considerar una amplia diversidad de expresiones culturales y artísticas, incluida la participación activa de la comunidad rural en la entrega de conocimientos, que incorporen saberes, artes y oficios locales a modo de fortalecer los vínculos sociales y el traspaso transgeneracional de saberes en las comunidades; contribuyendo a preservar y potenciar sus identidades, economías, culturas y territorios.

Artículo 3.- Es deber del Estado garantizar el acceso universal a un sistema de transportes público que considere las diversidades funcionales, que sea ecológico, eficiente y seguro de acuerdo con las necesidades del trabajo y la vida en territorios rurales, aislados e insulares, que asegure la conectividad del transporte bajo criterios de justicia territorial, equidad y calidad.

Artículo 4.- Las leyes reconocerán distintas formas de propiedad y usufructo de la tierra, como la propiedad individual, privada, colectiva, comunitaria, estatal, pública, cooperativa, consuetudinarias y otras.

Sometido a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención).

ODF) Protección de datos y seguridad informática (ICC N°274,375, 458, 524)

296. ICC N°274-4

Datos personales:

Artículo X. Derecho a la protección de los datos personales.

La Constitución asegura el derecho a la protección de los datos personales. Este derecho comprende la facultad de acceder a los datos recogidos que le conciernan, oponerse al tratamiento de sus datos y a obtener su rectificación y cancelación, así como otras facultades que se establezcan conforme a la ley. El respeto de estas normas estará sujeto al control y garantía de un órgano autónomo, de conformidad con la ley.

Sometido a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones)

297. ICC N°375-4

10.- Protección de datos de carácter personal

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

Estos derechos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.

Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos íntegros, verídicos y fidedignos de todos los órganos del Estado o bien que se encuentren en poder del Estado y éste tiene la obligación de proporcionarlos, en el más breve plazo.

El convencional Celedón **retiró** la iniciativa.



298. ICC N°458-4

“Art. x.- Derecho a la seguridad informática.

Toda persona tiene derecho a la seguridad informática.

El Estado, los particulares y los responsables de los sistemas de información automatizados deberán adoptar las medidas necesarias e idóneas para garantizar la integridad, confidencialidad, continuidad, resiliencia y autenticidad de la información que contengan los sistemas informáticos que administren y la disponibilidad de los servicios prestados.

Toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias según la criticidad de la información. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio de este derecho.

La ley establecerá un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica y patrimonio propio que velará por el respeto efectivo y promoción de este derecho.”

Sometido a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones).

299. ICC N°524

2. La protección, promoción y respeto del derecho a la autodeterminación informativa de los individuos, incluido el derecho a la protección de sus datos personales.

El tratamiento de datos personales sólo podrá realizarse en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley, el que en todo caso deberá ser lícito, leal, transparente y para fines determinados, explícitos y legítimos. Toda persona tiene derecho a acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, inferencia y otros que establezca la ley.

La ley establecerá un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica que velará por el respeto efectivo de este derecho.”

Sometido a votación se **rechazó** (6 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones).

ODF) Derecho a la espiritualidad (ICI 03-4)

300. ICI N°03-4

2.- Propuesta frente a Derecho a la Espiritualidad Se propone el resguardo y protección de los espacios sagrados denominados Espacio Sagrado del Abuelito Huenteyao, o Rucacura, la Punta del Toro, y la Punta de La Mula o Piclusruca, Piedra de Lobería de Puerto Huinay, espacios ubicados en Sector Bahía Mansa, de la Comuna de San Juan de La costa, y se aplique la figura de monumento nacional para su protección.

Sometido a votación se **rechazó** (4 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones).

ODF) Grupos Históricamente excluidos (287-4, 463)

301. ICI N°287-4

Art.X. Titularidad de derechos de grupos históricamente excluidos. Las personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos son titulares de los derechos que esta Constitución les reconoce y los contemplados en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Sometido a votación se **rechazó** (5 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención).

302. ICC N°463-4

Grupos Históricamente Excluidos

Artículo XXX. Derecho a la participación de grupos históricamente excluidos. Tratándose de grupos tales como las comunidades rurales, las disidencias y diversidades sexuales y de género, mujeres, personas cuidadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, migrantes y refugiados, personas privadas de libertad, el Pueblo Tribal Afrochileno y la comunidad afrodescendiente, entre otros, será deber del Estado remover las condiciones estructurales que imposibilitan el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades.

Las leyes y normas cuyo objetivo sea crear las condiciones que hagan real y efectivo el ejercicio de este derecho y que estén basadas en motivos de raza, origen étnico, lugar de origen, religión, sexo, género, identidad de género, edad, discapacidad, entre otras características personales y/o colectivas, no serán consideradas discriminaciones.

Sometido a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención).

ODF) Derecho al olvido (ICC N°304-4)

303. ICC N°304-4

Propuesta: Artículo x. Derecho al olvido. Toda persona tendrá derecho a solicitar que se elimine de los motores de búsqueda de internet toda o parte de la información relacionada con su persona o su familia, si no hubiere un interés público prevalente. La ley regulará la forma de ejercer este derecho así como los deberes de quienes mantengan el tratamiento de dichos datos y los casos en que se entiende que habrá interés público prevalente. Si la información fuera falsa o errónea, siempre existirá ese derecho.

Sometido a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones)

C. VOTACION PARTICULAR⁷⁸

Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos

— **Indicación N°1.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos”.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención).

Artículo 1

Derecho a la reparación integral por violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.

Indicaciones: N°2 a 7. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°5.** Grandón et al. Para sustituir el artículo 1 en el siguiente tenor:

“Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral.

Enmiendas amistosas:

Reemplazar ‘víctimas de violaciones’ por ‘víctimas de graves violaciones’, y reemplazar ‘tienen el derecho’ a ‘tienen derecho’.

Sometida a votación con las enmiendas propuestas se **aprobó** (25 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones).

Artículo 2

Derecho a la verdad. Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

Indicaciones: N°8 a 11. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°9.** Grandón et al. Para sustituir el artículo 2 en el siguiente tenor:

“Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial.”.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones).

Artículo 3

El derecho a la memoria. Las víctimas y comunidades tienen derecho a recordar el pasado y relacionarlo con el presente, a través de la construcción, expresión y transmisión de memorias respecto de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, y/o acciones de defensa, promoción y ejercicio de los derechos humanos y valores democráticos, a fin de permitir a la sociedad conocer, comprender, difundir y educar sobre su pasado en forma íntegra, democrática, pluralista y en pleno respeto por los derechos humanos.

⁷ En esta sección se informará únicamente las indicaciones que respecto a cada artículo del texto sistematizado resultaron aprobadas. Lo anterior, teniendo presente el artículo 3 literal m), sobre respeto y cuidado de la Naturaleza y aplicación de un enfoque ecológico; n), sobre eficacia, y s) sobre economía y cuidado de los recursos públicos, del Reglamento General de la Convención Constitucional, toda vez que las 332 indicaciones que fueron rechazadas se contienen en el capítulo siguiente (abarcando 37 páginas).

⁸ En el capítulo IV “Indicaciones rechazadas”, se informan los patrocinios colectivos ingresados y el nombre identificador que se dispuso para cada caso.



El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la memoria desde un abordaje integral que considere también su relación con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición, así como la participación de las víctimas y la sociedad civil, en armonía con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile.

El Estado tiene el deber de recuperar, preservar y garantizar el acceso público a las pruebas documentales, espacios de memoria y de otro tipo, construidos, recuperados o significativos para una comunidad, que dan testimonio y/o constituyen vestigios de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio.

Indicaciones: N°12 a 17. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°14.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso primero por el siguiente:

“El derecho a la memoria. Las víctimas y comunidades tienen derecho a recordar el pasado y relacionarlo con el presente, a través de la construcción, expresión y transmisión de memorias respecto de graves violaciones a los derechos humanos.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones).

— **Indicación N°15.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la memoria desde un enfoque integral que considere también su relación con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición.”.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°16.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso tercero por el siguiente:

“El Estado tiene el deber de recuperar, preservar y garantizar el acceso público a pruebas documentales y espacios de memoria construidos, recuperados o significativos para una comunidad, que den testimonio o constituyan vestigios de graves violaciones a los derechos humanos.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones).

Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio

— **Indicación N°18.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 4

Derecho a la vivienda.

1.- Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.

2.- El Estado deberá asegurar progresivamente y con el máximo de los recursos disponibles el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos, los siguientes atributos de la vivienda:

a) espacio suficiente para la producción y reproducción de la vida;

b) estructural y materialmente estable, ecológica, sustentable y sostenible;

c) tenencia jurídica asegurada;

d) condiciones de habitabilidad, higiene, comodidad y seguridad;

e) accesible;

f) integrada socialmente e inserta en un entorno con disponibilidad de servicios, instalaciones e infraestructura;

g) acceso a la luz solar, iluminación natural y eficiencia energética;

h) asequibles;

i) ubicada apropiadamente;

j) pertinente culturalmente y con pertenencia territorial, y

k) con acceso al equipamiento necesario para el desarrollo y redistribución de trabajos de cuidado; para la protección integral a la infancia y a mujeres y disidencias y diversidades sexuales y de género, frente a la violencia de género; y para evitar la discriminación y otras formas de vulneración que atenten contra la vida digna; conforme a la ley.



3.- El Estado podrá participar directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación, innovación y distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos a través de organismos públicos, comunitarios y de la sociedad civil.

4.- Los poderes públicos considerarán especialmente en el diseño de los planes de vivienda a personas con bajos niveles de ingresos económicos, mujeres jefas de hogar, personas mayores, personas en situación de discapacidad, pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de calle y todo otro grupo históricamente excluido. El Estado se obliga a desarrollar todas las acciones necesarias para satisfacer en forma urgente la necesidad de vivienda digna a las personas y familias agrupadas en comités de vivienda, en cooperativas, en tomas de terreno y campamentos. Estas viviendas están exentas del pago de cualquier tipo de contribuciones y son inembargables, de conformidad a la ley.

5.- Nadie podrá ser desalojado de su vivienda arbitrariamente.

Indicaciones: N°19 a 50. Resultaron aprobadas las siguientes:

Al numeral 1: Como no se aprobó ninguna indicación a este numeral, puesto en votación en su texto original se **aprobó** (29 votos a favor, ninguno en contra, 4 abstenciones).

— **Indicación N°26.** Meneses et al. Para sustituir el N°2 del artículo 4 por el siguiente texto:

“2.- El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio suficiente para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley.”.

Enmienda amistosa:

Reemplazar ‘espacio suficiente’ por ‘espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario.’.

Sometida a votación con la enmienda propuesta se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°32.** Meneses et al. Para sustituir el N°3 del artículo 4, por el siguiente texto:

“3.- El Estado participará directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación, innovación y distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°35.** Urrutia et al. Para sustituir el N°4 del artículo 4, por el siguiente texto:

“4.- Los poderes públicos considerarán especialmente en el diseño de los planes de vivienda a personas con bajos ingresos económicos y otras que establezca la ley. Estas viviendas están exentas del pago de cualquier tipo de contribuciones y son inembargables.”.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones).

— **Indicación N°38.** Cancino et al. Suprímase el numeral 5 del artículo 4.

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°43.** Mamani et al. Para agregar un nuevo numeral al artículo 4 del siguiente tenor:

“Las políticas públicas de diseño de planes de vivienda y organización territorial deberán tener especial consideración por la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas.”.

Sometida a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones).

— **Indicación N°50.** Grandón et al. Para añadir un nuevo inciso al artículo 4 en el siguiente tenor:

“El Estado garantizará la creación de viviendas de acogida para la protección integral a los adultos mayores, infancia, mujeres, disidencias y diversidades sexuales frente a la violencia de género y otras formas de vulneración que atenten contra la vida digna.”.

Sometido a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones).

Artículo 5

Función social y ecológica de la propiedad del suelo. La Constitución establece la función social y ecológica de la propiedad del suelo conforme a la cual es obligación del Estado:

1.- Garantizar la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada a través de sus programas habitacionales y el financiamiento o gestión de recursos que se requieran.



2.- Establecer las reglas de ocupación, uso, transformación del suelo y un sistema de planificación territorial conforme al interés general y a una distribución justa y equitativa de los suelos, en virtud de los principios de colaboración, coordinación, escalas interdependientes y no jerárquicas, interculturalidad, participación local, igualdad urbana, justicia territorial, priorización local, sustentabilidad, perspectiva de género, conectividad, movilidad, inclusión, accesibilidad, integración socio espacial, resiliencia, protección de bienes comunes, del patrimonio e identidad cultural, pertinencia cultural y pertenencia territorial y orientado al ejercicio de los derechos; conforme a la ley.

3.- Proceder a las expropiaciones y limitaciones de dominio que resulten necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna y adecuada. De igual forma, asegurar la debida indemnización, acorde a un sistema nacional de tasación y catastro de suelo.

4.- Administrar un Banco de Suelo Público orientado preferentemente al cumplimiento de fines habitacionales. Anualmente, todas las instituciones públicas le informarán o traspasarán, los bienes raíces que resulten prescindibles para el cumplimiento de sus fines institucionales, según señale la ley. El Banco de Suelo Público podrá adquirir suelos privados para atender el déficit habitacional.

5.- Establecer mecanismos adecuados para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda en desmedro del interés público, de conformidad a la ley.

6.- Prevenir o mitigar los riesgos derivados de procesos naturales.

7.- Garantizar la existencia de mecanismos adecuados para que las comunidades locales y todos sus integrantes puedan beneficiarse directamente de las plusvalías generadas por la acción urbanística y regulatoria de los entes públicos.

Indicaciones: N°52⁹ a 68. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°54.** Meneses et al. Para sustituir el encabezado del artículo 5 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 5.- Función social y ecológica de la propiedad del suelo. Conforme a la función social y ecológica de la propiedad del suelo el Estado debe.”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°56.** Serey et al N°2. Sustitúyase el numeral 1 por uno del siguiente tenor:

“1- El Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada a través de sus programas habitacionales, además deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad a la ley.”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°57bis.** Fuchslocher et al. Para sustituir el N° 2 del artículo 5 con un texto del siguiente tenor:

“2.- Establecer las reglas de ocupación, uso, transformación del suelo conforme a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, el interés general, la distribución justa y equitativa de los suelos y el ejercicio de derechos en el territorio.”.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones).

— **Indicación N°59.** Meneses et al. Para suprimir el numeral 3 del artículo 5.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones).

— **Indicación N°64.** Urrutia et al. Para sustituir el N°4 del artículo 5 por un texto del siguiente tenor:

“3.- Administrar un Banco de Suelo Público. Anualmente, todas las instituciones públicas le informarán o traspasarán, los bienes raíces que resulten prescindibles para el cumplimiento de sus fines institucionales, según señale la ley.”.

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones).

— **Indicación N°65.** Meneses et al. Para suprimir el N°5 del artículo 5.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones).

— **Indicación N°66.** Urrutia et al. Para sustituir el N°6 del artículo 5 por un texto del siguiente tenor:

“4.- Prevenir o mitigar los riesgos y vulnerabilidades de los desastres siconaturales.”.

⁹ La indicación N°51 propuso un artículo nuevo entre los artículos 4 y 5. Se rechazó.



Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones).

— **Indicación N°67.** Meneses et al. Para suprimir el N°7 del artículo 5.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones).

Artículo 6

Producción social del hábitat. *El Estado reconoce el rol protagónico de las comunidades locales en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento del territorio en que habitan. Por ello, es deber del Estado:*

1.- *Garantizar la participación popular y vinculante por parte de las comunidades locales en toda etapa y en cualquier instrumento de planificación territorial, programas y proyectos habitacionales, urbanos y rurales, bajo estándares de plena información y transparencia.*

2.- *Garantizar la construcción democrática y con perspectiva de género de los proyectos habitacionales, actividades y áreas productivas, de barrios y de ciudad; a través del reconocimiento, fomento y apoyo adecuado a comités, cooperativas, movimientos organizados y modalidades de autoconstrucción y autogestión comunitaria del hábitat.*

Indicaciones: N°69 a 74. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°70.** Meneses et al. Para sustituir el primer inciso del artículo 6 por uno del siguiente tenor:

“Art. 6.- Producción Social del Hábitat. El estado reconoce el rol protagónico de las comunidades locales en su territorio y garantiza su plena participación en toda etapa y en cualquier instrumento de planificación territorial, programas y proyectos habitacionales, urbanos y rurales, cumpliendo con los estándares de información y transparencia. Asimismo, promueve la autogestión comunitaria del hábitat.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

Artículo 7

Derecho a la ciudad. *Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar, transformar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna.*

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común, y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, la gestión democrática, la función social y ecológica del suelo y de la propiedad.

Es deber del Estado tomar las medidas intersectoriales para ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades y asentamientos humanos, bajo los principios de igualdad, justicia espacial e intergeneracional, equidad territorial, equidad de género, accesibilidad universal, seguridad humana, sostenibilidad, participación, y respeto a la diversidad y a la naturaleza.

Para ello, el Estado garantizará, a lo menos, la protección y acceso equitativo y efectivo a servicios básicos, bienes y espacios públicos; la conectividad y movilidad; la integración socio espacial; la colectivización de los cuidados; y la participación social en las plusvalías.

Indicaciones: N°75 a 82. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°75.** Tirado et al. Para sustituir el inciso primero del artículo 7 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 7.- Derecho a la ciudad y al territorio. Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna.”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones).

— **Indicación N°76.** Urrutia et al. Para sustituir el inciso segundo del artículo 7 por uno del siguiente tenor:

“El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad.”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°79.** Urrutia et al. Para sustituir el inciso tercero del artículo 7 por uno del siguiente tenor:

“Es deber del Estado y sus entidades territoriales tomar las medidas para ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades, asentamientos humanos y espacios públicos, bajo los principios de igualdad, justicia espacial e intergeneracional, equidad territorial, equidad de género,



accesibilidad universal, seguridad humana, sostenibilidad, participación, respeto a la diversidad e interculturalidad, resiliencia e interdependencia ecológica.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°80.** Urrutia et al. Para sustituir el inciso cuarto del artículo 7 por uno del siguiente tenor:

“Para ello, el Estado garantizará, a lo menos, la protección y acceso equitativo y efectivo a servicios básicos, bienes y espacios públicos; la conectividad; el derecho a movilidad; la convivencia y seguridad vial; la integración socio espacial; la colectivización de los cuidados; y la participación social en las plusvalías.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención).

Derecho al trabajo y su protección

— **Indicación N°83.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho al trabajo y su protección”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 8

El Estado de Chile reconoce y promueve el Trabajo Decente, que persigue cuatro objetivos estratégicos: el reconocimiento, respeto y garantía plena de los derechos fundamentales en el trabajo, la generación de oportunidades de empleo, el aseguramiento de la protección social y el reconocimiento y fortalecimiento del diálogo social.

Los sindicatos del sector público y privado y las asociaciones empresariales contribuyen al fortalecimiento de la democracia y a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Indicaciones: N°84 a 96. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°85.** Meneses et al. Suprimir el artículo 8.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones).

Artículo 9

Protección del trabajo y derecho al trabajo decente. El Estado reconoce y garantiza la protección del trabajo. En consecuencia, este deberá asegurar la protección eficaz de los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, mediante un órgano autónomo a cargo de su fiscalización.

La Constitución asegura el derecho al trabajo decente. Este comprende el derecho a la libre elección del trabajo, bajo condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, incluyendo el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital y a la garantía de indemnidad.

La Constitución garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración equitativa que le asegure su sustento y el de su familia.

Se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario.

Indicaciones: N°97 a 122 y 244. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°244.** Baranda et al. Para sustituir el inciso primero del artículo 9, por el siguiente:

“Artículo 9.- Protección del trabajo y derecho al trabajo decente. Toda persona tiene derecho al trabajo. El Estado garantiza la protección del trabajo decente. Este comprende, entre otros, el derecho a la libre elección del trabajo en condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital, la garantía de indemnidad.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

--- Como no se aprobaron indicaciones a los incisos segundo a quinto, habiendo sido sometidos a votación fueron **aprobados** con los siguientes resultados:

Inciso segundo: 24 votos a favor, 5 en contra, 4 abstenciones.

Inciso tercero: 25 votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones.

Inciso cuarto: 25 votos a favor, 1 en contra, 7 abstenciones.



Inciso quinto: 30 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención.

— **Indicación N°115.** Abarca et al. Para añadir los siguientes incisos al artículo 9°, el cual versa sobre “Protección del trabajo y derecho al trabajo decente”, y que comprende un texto del siguiente tenor:

“El Estado reconoce la corresponsabilidad social de los cuidados, debiendo fomentar, garantizar y generar políticas públicas que permitan la conciliación laboral y familiar, resguardando el interés superior de las niñas y adolescencias, fomentando una sociedad igualitaria que permita el desarrollo integral de todas las personas. Las leyes regularán la obligación de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para las niñas y adolescencias que estén al cuidado de quienes trabajan, sin discriminación de género.

El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo, los derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad y maternidad. Las mujeres y personas con capacidad de gestar no podrán ser discriminadas o despedidas durante el embarazo, gozarán de una protección especial y de licencia con remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social.”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones).

— **Indicación N°117.** Grandón et al. Para añadir un nuevo inciso al artículo 9 en el siguiente tenor:

“La subcontratación estará permitida únicamente para actividades ajenas al giro de la empresa. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, tales como los contratos a honorarios que ocultan relaciones laborales o administrativas estables, o la tercerización y externalización de servicios.”.

Sometida a votación se aprobó (17 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones).

— **Indicación N°122.** Alvarado et al. Para agregar un nuevo inciso final al artículo 9, del siguiente tenor:

“Para el trabajo rural, la ley tomará especialmente en cuenta sus condiciones particulares.”.

Sometida a votación se aprobó (20 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones).

Artículo 10

Participación de los trabajadores y trabajadoras. *La Constitución asegura a los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales el derecho de participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos a través de los cuales se ejercerá este derecho.*

Indicaciones: N°124 a 130. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°126.** Meneses et al. Para sustituir el artículo 10, por lo siguiente:

“Artículo 10.- Participación de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho.”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones).

Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

— **Indicación N°133.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 11

1.- *El derecho al cuidado de los primeros mil días de vida y protección de la maternidad y coparentalidad, debe ser entendido como un derecho fundamental básico, que le corresponde a todas las personas, por el hecho de ser tales. Garantizar este derecho es un deber del Estado, tal como propiciar normas que involucren a trabajadores del sector público y privado, además de las políticas públicas necesarias para que sea tratado como un derecho fundamental.*

2.- *El Estado velará porque a todos los niños y niñas, se les reconozca el derecho a ser deseados, a crecer en un ambiente tranquilo, y estos cuidados deben ser generados aun antes de la concepción, mediante el acceso a la información integral, en diversos ámbitos, como es la educación, derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales, derecho a la salud, entre otros, de esa forma se puede propender a ser cuidados de manera digna, garantizando su seguridad, integridad y desarrollo de vínculos sanos.*



3.- *Será deber del Estado que todas las mujeres y hombres que ejerzan la parentalidad, tanto como todas las personas proveedoras de cuidado, tengan acceso a las garantías tanto laborales como económicas, para ejercer los cuidados necesarios de manera integral.*

4.- *A fin de asegurar la salud integral de las personas que ejercen labores de cuidado, el Estado proveerá los programas necesarios de cobertura especializada para estas temáticas, integrando en las prestaciones la salud física, mental y espiritual.*

5.- *La coparentalidad será impulsada, fomentada y apoyada por el Estado, mediante el reconocimiento de algunos derechos y beneficios, tales como, un permiso prenatal, a fin de que el padre se involucre activamente los últimos días del embarazo, un permiso postnatal, que actualmente es de 5 días, que se extienda, pues el apego claramente es un proceso que no debe ser limitado únicamente a esos 5 días, y a fin de lograr un fortalecimiento de la familia y erradicar toda clase de discriminación por género, establecer un marco legal que proteja a los integrantes de este núcleo, a través de un fuero que incluya al padre, además de contar con estrategias educativas, culturales, sociales y económicas que permitan que este ejercicio sea posible.*

Indicaciones: N°134 a 135. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°134.** Meneses et al. Para suprimir el artículo 11.

Sometido a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones).

Artículo 12

Toda persona tiene el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse, debiendo el Estado otorgar un ambiente adecuado y los medios materiales y simbólicos necesarios para vivir dignamente en sociedad durante todas las etapas de la vida.

La ley establecerá un sistema nacional de cuidados de carácter integral, universal, accesible, suficiente, interseccional y con pertinencia cultural, que articulará prestaciones y promoverá la corresponsabilidad al interior de la comunidad. Este sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

Indicaciones: N°136 a 139. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°136.** Meneses et al. Para suprimir el artículo 12.

Sometido a votación se aprobó (21 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones).

Artículo 13

Derecho al cuidado. *Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad.*

El Estado debe generar normativas y políticas públicas, basadas en el enfoque de derechos humanos y de género, y la promoción de la autonomía personal, que garanticen la implementación de un Sistema Integral de Cuidados de carácter estatal, paritario, solidario y universal, con pertinencia cultural y perspectiva interseccional, asegurando su financiamiento permanente, suficiente y progresivo.

El sistema prestará especial atención a niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados.

Indicaciones: N°140 a 142. Resultaron aprobadas las siguientes:

--- Al no haberse aprobado ninguna indicación al inciso primero, se sometió a votación y se **aprobó** (28 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°141.** Meneses et al. Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“El Estado garantizará este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal. El Sistema tendrá un carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente.”.

Sometida a votación se aprobó (24 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones).

— **Indicación N°142.** Meneses et al. Agréguese en el inciso tercero entre las palabras “a” y “niños”, la palabra “lactantes,”.

Sometida a votación se **aprobó** (28 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones).

Artículo 14

Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. *El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas.*

El Estado garantizará su redistribución a través del Sistema Integral de Cuidados y, estableciendo un régimen laboral compatible con el trabajo de cuidados, que promueva la igualdad y la corresponsabilidad social y de género. Asimismo, garantizará, quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidados, los derechos laborales consagrados en la Constitución y las leyes.

Indicaciones: N°143 a 145. Al no haberse aprobado ninguna indicación se sometió a votación el artículo en su texto íntegro y se **aprobó** (27 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones).

Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical

— **Indicación N°146.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho a la negociación colectiva, huelga y libertad sindical”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 15

Derecho a la libertad sindical. *La Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.*

Los sindicatos serán titulares exclusivos del derecho a la negociación colectiva y huelga, en tanto únicos representantes de trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores que corresponda.

El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, afiliarse y desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, trazar sus propios fines y realizar su actividad sin intervención de terceros.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley.

La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras.

Se establecerán por ley las modalidades y procedimientos en que las personas trabajadoras ejercerán el derecho a negociar colectivamente.

La Constitución asegura el derecho a huelga. Compete a los trabajadores y las trabajadoras decidir el ámbito de intereses que se propongan defender, aspectos que no podrán ser limitados por la ley.

El legislador no podrá prohibir la huelga. La ley sólo podrá establecer limitaciones a la huelga para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población.

No podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

Indicaciones: N°147 a 184. Resultaron aprobadas las siguientes:

--- Al no haberse aprobado ninguna indicación al inciso primero, se sometió a votación y se **aprobó** (28 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones).

--- Al no aprobarse indicaciones al inciso segundo, se sometió a votación y se **aprobó** (26 votos a favor, 5 en contra, 2 abstenciones).

— **Indicación N°155.** Meneses et al. Para añadir en el inciso tercero luego de la palabra "constituir", la palabra "las".

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención).

Al no haberse aprobado ninguna indicación al inciso cuarto, se sometió a votación en su texto íntegro y se **aprobó** (30 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones).

Al no haberse aprobado ninguna indicación en el inciso quinto, se sometió a votación en su texto íntegro se **aprobó** (25 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones).

— **Indicación N°164.** Meneses et al. Para sustituir el inciso sexto por el siguiente:



"Se establecerán por ley las modalidades y procedimientos mediante los cuales las personas trabajadoras ejercerán el derecho a negociar colectivamente."

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones).

Al no haberse aprobado ninguna indicación en el inciso séptimo, se sometió a votación en su texto íntegro y se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

Al no haberse aprobado ninguna indicación al inciso 8 del artículo 15 se sometió a votación en su texto íntegro y se **aprobó** (23 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones).

Al no haberse aprobado ninguna indicación al inciso 9 del artículo 15 se sometió a votación en su texto íntegro y se **aprobó** (25 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones).

Seguridad social y sistema de pensiones

— **Indicación N°186.** Henríquez et al. Para eliminar el título "Seguridad social y sistema de pensiones".

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 16

El derecho a la seguridad social. *El Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento.*

La definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias.

La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores.

La seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas.

Indicaciones: N°187 a 215. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°190.** Meneses et al. Para sustituir el inciso primero por el siguiente:

"Derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad."

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°194.** Meneses et al. Para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

"La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados."

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°197.** Meneses et al. Para sustituir el inciso tercero por el siguiente:

"Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Ésta se financiará en forma conjunta por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación, en la forma que determine la ley. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema."

Enmienda amistosa: Se propuso la siguiente redacción a la indicación:

"Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Ésta se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema."



Sometida a votación la admisibilidad de la enmienda se **aprobó** (24 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención).

Sometida a votación la indicación en su nueva redacción se **aprobó** (25 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°201.** Meneses et al. suprimase el inciso final.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones).

— **Indicación N°209.** Delgado et al. Para añadir un nuevo inciso al artículo 16 en el siguiente tenor:

“El Sistema de Seguridad Social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido.”.

Sometida a votación se **aprobó** (18 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones).

— **Indicación N°213.** Fernández et al. Agréguese un inciso final del siguiente tenor:

“Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°214.** Alvarado et al. Para agregar un nuevo inciso final en el artículo 16, del siguiente tenor:

“Para garantizar el derecho a la seguridad social de las y los trabajadores rurales, se considerarán las condiciones específicas de su actividad.”.

Sometido a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones).

Artículo 17

Derecho a la seguridad social. *La Constitución garantiza el derecho a la seguridad social, fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación y oportunidad.*

La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, invalidez, viudez, orfandad, maternidad y paternidad; desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, la seguridad social asegurará la protección de las personas que ejercen labores domésticas y de cuidados no remunerados.

Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social y el control del sistema. Éste se financiará en forma conjunta por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación, en la forma que determine la ley. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema.

Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley.

Indicaciones: N°217 a 234. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°217.** Meneses et al. Suprimir el artículo 17.

Sometido a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones).

Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales

— **Indicación N°236.** **Henríquez et al.** Para eliminar el título “Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales”.

Sometido a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 18

La salud es un derecho social, comunitario y humano inalienable, incluyendo su dimensión física, mental y espiritual.

Es responsabilidad del Estado garantizar efectivamente el acceso a un Sistema Único y Universal de Salud, de carácter solidario, equitativo, participativo, con enfoque de género, intercultural, descentralizado y articulado desde el territorio municipal. Que se base en la prevención y la promoción de la salud, el respeto a los derechos sexuales, reproductivos y de género; que otorgue trato digno para el buen vivir y la muerte humanizada; que sea parte de la relación con la naturaleza y la biodiversidad.



Los servicios de salud deben articularse en torno a la atención primaria de salud y organizarse mediante el fortalecimiento de la red integrada de servicios de salud públicos y otras redes territoriales de salud popular.

El sistema único, universal y público, debe estar suficientemente financiado con impuestos progresivos de modo que las prestaciones sean gratuitas al momento de su realización, que los actores que las presten sean sin fines de lucro, que asegure el acceso en un plazo razonable y otorgando prestaciones de calidad.

Indicaciones: N°237 a 287. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°243.** Meneses et al. Para sustituir el inciso primero por el siguiente:

“Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental.”

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones).

— **Indicación N°247.** Meneses et al. Para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población.”

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°254.** Meneses et al. Para sustituir el inciso tercero por el siguiente:

“El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación.”

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°260.** Meneses et al. Para sustituir el inciso cuarto por el siguiente:

“El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituirá la base de este sistema y se promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo.”

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°262.** Valenzuela y Domínguez. Agréguese como nuevo inciso final del siguiente tenor:

“Las prestaciones del Sistema Nacional de Salud considerarán especialmente el acceso a métodos de reproducción asistida, acompañamiento y reparación de las afectaciones que aquejan a las personas como consecuencia de una intervención o procedimiento médico, así como, el tratamiento integral frente al consumo de drogas.”

Enmienda amistosa:

Reemplazar ‘especialmente’ por ‘también’.

Sometida a votación con la enmienda se **aprobó** (24 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones).

— **Indicación N°263.** Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Ninguna persona habrá de incurrir en un gasto catastrófico en salud.”

Sometida a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones).

— **Indicación N°265.** Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Es deber del Estado la planificación de la formación, distribución y capacitación permanente del personal sanitario.”

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones).

— **Indicación N°278.** Serey et al. Agréguese un nuevo inciso quinto del siguiente tenor:

“El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento.”

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones).

— **Indicación N°279.** Mamani et al. Para añadir un inciso al artículo 18 del siguiente tenor:

“El Estado reconoce los sistemas de salud tradicional de los pueblos y naciones indígenas y sus instituciones. Se deberá proteger y conservar especialmente los conocimientos, innovaciones y



prácticas de medicina indígena, así como la conservación de los elementos o componentes naturales en que se sustentan.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°284.** Meneses et al. Agréguese un nuevo inciso quinto del siguiente tenor:

“Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas.”.

Sometida a votación se **aprobó** (28 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°285.** Meneses et al. Agréguese un nuevo inciso sexto del siguiente tenor:

“El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema.”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°286.** Fernández et al. Agréguese un inciso final del siguiente tenor:

“Los prestadores privados integrados al Sistema Universal de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento.”.

Enmienda amistosa:

Reemplazar ‘Universal’ por ‘Nacional’.

Sometida a votación con la enmienda se **aprobó** (22 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones).

Artículo 19

El Estado de Chile reconoce el derecho de toda la población al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental, espiritual, sexual y reproductiva de acuerdo a su origen cultural, y en un medioambiente saludable. Esto con el fin de que todas y todos puedan gozar del bienestar necesario para ser igualmente libres.

Para tales efectos, es deber del Estado garantizar la ejecución de estrategias y acciones de salud pública, como son la prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación de la salud individual; protegiendo las condiciones sociales en que viven las personas y en que acceden a prestaciones asistenciales.

Corresponderá al Estado diseñar e implementar un sistema de salud capaz de garantizar las prestaciones sanitarias, atendiendo las necesidades de las personas independiente de su capacidad de pagar por ellas. Todo ello considerando los principios de equidad, universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, calidad, eficiencia y enfoque de género. Todo sistema de salud debe incluir instancias de integración y/o coordinación de toda la red sanitaria, la intersectorialidad y las comunidades.

El Estado procurará que el sistema de salud priorice sus esfuerzos sanitarios en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad con perspectiva intercultural y de género. Para esto se organizará a través de redes integradas, con una atención primaria que, además de ofrecer prestaciones asistenciales, oriente su gestión a la promoción de la salud y la participación comunitaria, con énfasis en los determinantes socioculturales y en los procesos protectores de la salud.

El sistema universal de salud será financiado a través de un fondo único que mancomune las cotizaciones de la población con impuestos generales. Estos se destinarán íntegramente a este sistema, avanzando hacia un modelo de financiamiento basado en impuestos generales de carácter progresivo y bajo los principios de la seguridad social.

Indicaciones: N°290 a 303. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°290.** Meneses et al. Para suprimir el artículo 19.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones).

Artículo 20

Derecho a la salud. La Constitución garantiza a todas las personas el Derecho a la Salud integral.

El Estado deberá considerar en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población.



El Estado garantizará este derecho, a través de un Sistema Universal de Salud de carácter nacional, público e integrado. Este se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, integralidad, interculturalidad, pertinencia territorial, descentralización, eficacia, calidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. El Estado promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo.

El Sistema Universal de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión y cuidados paliativos. La atención primaria constituirá la base de este sistema.

Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas.

El Sistema Universal de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema.

Los prestadores privados integrados al Sistema Universal de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento.

Indicaciones: N°304 a 332. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°304.** Meneses et al. Para suprimir el artículo 20.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones).

Artículo primero transitorio

Los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas, las de Orden y Seguridad, junto con los sistemas de salud contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, se incorporarán al Sistema Universal en un período de transición que no podrá superar los dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución.

Indicaciones: N°334. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°334.** Meneses et al. Suprímase.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones).

Artículo segundo transitorio

Las instituciones privadas que cumplan con los requisitos establecidos en el [art. Derecho a la Salud] y los demás que establezcan las leyes se integrarán al Sistema Universal a través de una ley que regule el traspaso fijando su implementación y gradualidad, cuya dictación no podrá exceder el plazo de dos años contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución.

Indicaciones: N°335. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°335.** Meneses et al. Suprímase.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones).

Artículo tercero transitorio

El Sistema Universal de Salud comenzará a regir en un plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigencia de esta Constitución. Las cotizaciones obligatorias deberán enterarse al Sistema Universal de Salud en el mismo periodo. La ley fijará los mecanismos y gradualidad de la entrada en vigencia del nuevo sistema y la forma en que las aseguradoras privadas de salud dejen de percibir las referidas cotizaciones. No se podrá reducir el monto de cotización de salud legal vigente por al menos un plazo de 10 años.

Indicaciones: N°336. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°336.** Meneses et al. Suprímase.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones).

Derecho a la educación

— **Indicación N°338.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho a la educación”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 21

Las primeras naciones, a través de sus instituciones autónomas, tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y proyectar sus sistemas de educación ancestral en el marco de su propia comprensión y configuración de mundo. Es deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho.

Deberán adoptarse medidas apropiadas para garantizar que las nuevas generaciones sean educadas por las familias e instituciones tradicionales propias del territorio, en el marco de sus saberes, lenguas y conocimientos ancestrales.

Indicaciones: N°339 a 344. No se aprobó ninguna indicación.

Sometido a votación el artículo, se rechazó (13 votos a favor, 14 en contra, 6 abstenciones).

Artículo 22

El Estado de Chile reconoce a los educadores ancestrales de los pueblos indígenas y promueve su enseñanza, diferenciándolos por el territorio a cual estos tienen pertinencia.

Indicaciones: N°345 a 348. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°345.** Céspedes et al. Suprímase el artículo 22.

Sometida a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones).

Artículo 23

Derecho a la educación. *La educación es un derecho humano esencial, indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El Estado tiene la función primordial, ineludible e indelegable de garantizar a todas las personas a lo largo de la vida su provisión gratuita y un acceso universal, permanente, inclusivo, democrático e integral.*

Indicaciones: N°349 a 365. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°353.** Céspedes et al. Sustitúyase el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 31.- El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones).

Artículo 24

Propósito de la educación. *La educación es fundamental para la vida digna, el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo plurinacional. Su objetivo central es contribuir al fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos, a la creación de una sociedad justa e igualitaria, al bienestar individual y colectivo, la protección de la naturaleza, biodiversidad, los territorios, al trabajo decente, al desarrollo productivo, científico, cultural y a la convivencia armónica de los pueblos naciones.*

La educación constituye el espacio de formación integral de las personas y comunidades, estimulando esencialmente el sentido crítico, enfoque de género, y el desarrollo del conocimiento, en un ambiente de respeto mutuo y relaciones horizontales y cooperativas. La educación es diversa, inclusiva, descolonizadora, plurilingüe e intercultural, ecológica y libre de toda discriminación, sexismo, racismo y discursos de odio.

La educación brinda oportunidades educativas a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión.

El Estado otorga especial protección a la educación propia de los pueblos originarios, respetando su derecho a la enseñanza y aprendizaje de su lengua, su cultura, saberes e identidad, y fomentará la mantención de las demás culturas, lenguas, saberes e identidades de los pueblos naciones en Chile.

Indicaciones: N°367 a 369. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°368.** Céspedes et al. Sustitúyase el artículo 24 por el siguiente:

“La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tiene como propósito el desarrollo integral de la persona, su personalidad, el sentido de su dignidad, el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, así como, la construcción del bien común, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fortalecimiento de la convivencia democrática y pacífica para el desarrollo de una sociedad justa, libre, diversa y cohesionada, la valoración y respeto de la Naturaleza y el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural del país.

La educación es una función primordial del Estado.



La educación será integral y de calidad, y se regirá por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista, ambiental, y con pertinencia local, cultural y lingüística.

La educación brindará oportunidades y apoyos a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión.”.

Enmienda amistosa:

Para redactar la indicación en los siguientes términos:

“La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tiene como propósito el desarrollo integral de la persona, su personalidad, el sentido de su dignidad, el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, así como, la construcción del bien común, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fortalecimiento de la convivencia democrática y pacífica para el desarrollo de una sociedad justa, libre, diversa y cohesionada, la valoración y respeto de la Naturaleza y el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural del país. La educación es una función primordial **e ineludible** del Estado.

La educación será integral y de **excelencia**. Se regirá por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista, **ambiental**, y con pertinencia **territorial**, cultural y lingüística. La educación brindará oportunidades y apoyos a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión.

El Estado garantizará infraestructura educacional adecuada para cada nivel de formación educativa, cuyo diseño contemple los criterios de pertinencia cultural y territorial.”.

Sometida a votación con las enmiendas propuestas se **aprobó** (22 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones).

Artículo 25

Sistema Plurinacional de educación pública y financiamiento. *El Estado como primer responsable del derecho a la educación, organiza y gestiona el sistema plurinacional articulado de educación pública de carácter democrático y comunitario, mediante servicios públicos, con financiamiento permanente, directo y basal, esto es, pertinente y suficiente que les permita cumplir plena y equitativamente con su función. Para ello el Estado debe destinar a lo menos el 6% del producto interno bruto del país, de acuerdo a la progresividad que establezca la ley.*

La educación parvularia, la educación básica y la educación media serán obligatorios y gratuitos. La educación superior pública será gratuita. La educación pública impartida en todos los niveles y modalidades educativas será de carácter laica, emancipadora, participativa, solidaria, democrática, contextualizada, promotora de la paz y respetuosa de toda corriente de pensamiento con respeto a los derechos humanos.

El Estado promoverá la educación pública de gestión comunitaria comprendida como un proceso educativo no formal, colectivo y diverso, siempre que esta se organice por medio de un programa sistemático, verificable, sin fines de lucro, emanado de los actores que la componen y que asegure un aprendizaje permanente para alcanzar el máximo desarrollo intelectual y cultural. Esta educación podrá formar parte del sistema nacional de educación pública y recibir financiamiento estatal, de conformidad a la ley.

Indicaciones: N°370 a 378. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°371.** Céspedes et al. Sustitúyase el artículo 25 por el siguiente:

“La educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

Los establecimientos de educación parvularia, básica y media, así como también las instituciones que provean educación superior, conforman un sistema nacional de educación basado en el principio de colaboración, que tendrá como centro la experiencia educativa de los estudiantes. El Estado fomentará su mejoramiento continuo y ejercerá labores de coordinación, regulación, promoción y supervigilancia del Sistema. Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, no podrán perseguir fines de lucro y se orientarán por los principios de este derecho y los generales que establece esta Constitución.

Para garantizar universalmente el derecho a la educación habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas organizado, financiado y administrado por el Estado, el que orientará el desarrollo del sistema educacional nacional. Su fortalecimiento y desarrollo será un deber primordial e ineludible del Estado, para lo cual deberá financiarlo de manera adecuada, gestionarlo de forma eficiente y participativa, y apoyarlo mediante políticas específicamente destinadas a ello. Este sistema deberá proveer una educación laica, gratuita y pertinente a las necesidades nacionales,



regionales y locales. En los niveles inicial, básico y medio, este sistema deberá gestionarse mediante servicios públicos descentralizados, financiados directamente por el presupuesto de la nación, en magnitud suficiente para cumplir plena y equitativamente con su función.”.

Enmienda amistosa:

Para reemplazar la indicación por la siguiente:

“La educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

Los establecimientos de educación parvularia, básica y media, así como también las instituciones que provean educación superior, conforman un sistema nacional de educación basado en el principio de colaboración, que tendrá como centro la experiencia educativa de los estudiantes. El Estado fomentará su mejoramiento continuo y ejercerá labores de coordinación, regulación, promoción y supervigilancia del Sistema. Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, no podrán perseguir fines de lucro y se orientarán por los principios de este derecho y los generales que establece esta Constitución.

Para garantizar universalmente el derecho a la educación habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas **organizado, administrado y financiado en forma permanente, directa, pertinente y suficiente por parte del Estado**, el que orientará el desarrollo del sistema educacional nacional. Su fortalecimiento y desarrollo será un deber primordial e ineludible del Estado, para lo cual deberá financiarlo de manera adecuada, gestionarlo de forma eficiente y participativa, y apoyarlo mediante políticas específicamente destinadas a ello. Este sistema deberá proveer una educación laica, gratuita y pertinente a las necesidades nacionales, regionales y locales. En los niveles inicial, básico y medio, este sistema deberá gestionarse mediante servicios públicos descentralizados, financiados directamente por el presupuesto de la nación, en magnitud suficiente para cumplir plena y equitativamente con su función.”.

Sometida a votación con la enmienda se **aprobó** (22 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones).

Artículo 26

Comunidades. *El Estado garantiza el derecho a la participación de las personas, familias y comunidades en el proceso educativo.*

Los establecimientos educacionales constituyen una comunidad democrática de aprendizaje compuesta por estudiantes, sus cuidadores y tutores, las y los profesores, educadores, asistentes de la educación, académicos, funcionarios y directivos; quienes promoverán la colaboración de organizaciones de la sociedad civil de carácter local.

Las instituciones reconocidas oficialmente deberán contar con un Consejo Educativo integrado por representantes de toda la comunidad, electos democráticamente, el que tendrá facultades resolutivas en la dirección y gestión del proyecto educativo institucional, en la construcción de los pilares del proyecto educativo-pedagógico de acuerdo a las necesidades particulares de las comunidades y en el marco de los principios generales de la educación, en las modificaciones al reglamento interno y, en el caso de los establecimientos pertenecientes al sistema de educación pública, además, participarán en la administración de los recursos.

El Consejo Educativo, tendrá, en el marco de los propósitos generales de la educación, la facultad para situar el currículum nacional en consideración del proceso de enseñanza aprendizaje y de las necesidades, intereses y características personales, culturales de las y los estudiantes, sus contextos y sentido de pertinencia.

Las comunidades de aprendizaje, organizadas de conformidad a la ley, participarán de manera vinculante en la definición de las políticas públicas educativas.

Indicaciones: N°379 a 382. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°380.** Céspedes et al. Sustitúyase el artículo 26 por el siguiente:

“La Constitución reconoce el derecho de los integrantes de cada comunidad educativa a participar tanto en decisiones de la unidad respectiva, como de la política educacional local y nacional que sean relevantes para su quehacer y para el ejercicio del derecho a la educación.

La ley especificará las condiciones y órganos para asegurar la participación vinculante de los integrantes de la comunidad educativa en todo establecimiento o institución reconocida oficialmente por el Estado.

Es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de oportunidades formativas múltiples, más allá del Sistema Nacional de Educación, promoviendo espacios culturales, artísticos, deportivos, comunitarios, como espacios de desarrollo y aprendizaje integral para personas jóvenes, adultas y mayores.”.



Enmienda amistosa:

Para redactar la indicación en los siguientes términos:

“La Constitución reconoce el derecho de **las y** los integrantes de cada comunidad educativa a participar **en la construcción del proyecto educativo, en las decisiones de la unidad respectiva y en la elaboración, diseño y ejecución** de la política educacional local y nacional que sean relevantes para su quehacer y para el ejercicio del derecho a la educación.

La ley especificará las condiciones y órganos para asegurar la participación **plena y** vinculante de los integrantes de la comunidad educativa en todo establecimiento o institución reconocida oficialmente por el Estado.

Es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de oportunidades formativas múltiples, más allá del Sistema Nacional de Educación, promoviendo espacios culturales, artísticos, deportivos, comunitarios, como espacios de desarrollo y aprendizaje integral para personas jóvenes, adultas y mayores.”.

Sometido a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones).

Artículo 27

Libertad de enseñanza y aprendizaje. El Estado respetará y garantizará la libertad de aprendizaje como expresión de diversidad. Esta comprende la posibilidad de toda persona, madres, padres o cuidadores de elegir establecimientos educacionales.

Esta garantía incluye el respeto a la libertad de los particulares para fundar proyectos educativos privados, quienes estarán obligados a funcionar de acuerdo a los propósitos de la educación, y estarán al servicio del interés público, no respondiendo a intereses corporativos. Aquellos que logren obtener el reconocimiento oficial del Estado, serán examinados por la autoridad pública de acuerdo a la ley.

Indicaciones: N°383 a 403. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°386.** Labbé et al. Para sustituir el artículo 27 por el siguiente:

“Artículo X- Libertad de enseñanza. La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y es deber del estado respetarla.

Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. Esta comprende la libertad para diseñar metodologías de aprendizaje y enseñanza, y la autonomía para implementarlas en el marco de los propósitos de la educación.

La Constitución respeta la libertad de los particulares para fundar proyectos educativos, los que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios, respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución, y las demás condiciones que establezca la Ley.

La libertad de enseñanza comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo en conformidad a los mecanismos que establezca la ley. Este derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes.”.

Enmienda amistosa:

Para reemplazar la indicación por la siguiente:

“La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y es deber del estado respetarla.

Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. Esta comprende la libertad para diseñar metodologías de aprendizaje y enseñanza, y la autonomía para implementarlas en el marco de los propósitos de la educación.

La Constitución respeta la libertad de los particulares para fundar **y gestionar** proyectos educativos, los que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios, respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución, y las demás condiciones que establezca la Ley.

La libertad de enseñanza comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Este derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes.”.

Sometida a votación con la enmienda se **aprobó** (22 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones).

Artículo 28

Trabajadores y trabajadoras de la educación. Las y los profesores y educadores son un pilar fundamental en el sistema educativo. El Estado garantizará su formación, con carácter gratuito,



la actualización continua de sus conocimientos, estabilidad en el ejercicio de sus funciones y el mejoramiento permanente de sus condiciones materiales, las que deberán ser adecuadas para un ejercicio pedagógico reflexivo, colaborativo y agente de los propósitos de la educación.

El Estado garantizará la formación gratuita de los asistentes de la educación la que será coherente con los propósitos de la educación.

Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. Esta libertad comprende la autonomía para planear los procesos de enseñanza, elegir los métodos o técnicas para su ejercicio lectivo y expresar libremente sus opiniones en el marco de los propósitos de la educación.

Con independencia del establecimiento educacional donde cumplan sus funciones, las y los profesores, educadores y asistentes de la educación se regirán por estatutos laborales especiales, únicos y universales, que señale la ley. El Estado garantiza, en todo caso, a los trabajadores de la educación, todos los derechos tanto individuales como colectivos consagrados en la Constitución.

Indicaciones: N°405 a 409. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°405.** Labbé et al. Para sustituir el artículo 28 por el siguiente:

“Artículo X. Reconocimiento a la labor educativa.

La Constitución reconoce la función primordial de profesores, profesoras, educadores y educadoras, así como de asistentes de la educación, en el resguardo del derecho a la educación.

El Estado garantizará su formación, con carácter gratuito; la actualización continua de sus conocimientos; su ejercicio reflexivo y colaborativo; otorgará estabilidad en el ejercicio de sus funciones; asegurará condiciones laborales óptimas y resguardará su autonomía profesional de acuerdo a los propósitos establecidos en esta Constitución y la Ley.

El Estado garantizará la formación gratuita de los asistentes de la educación la que será coherente con los propósitos de la educación.

Con independencia del establecimiento educacional donde cumplan sus funciones, las y los profesores, educadores y asistentes de la educación se regirán por estatutos laborales únicos y universales, que señale la ley.”.

Enmienda amistosa:

Para eliminar el inciso final de la indicación.

Sometida a votación con la enmienda propuesta se **aprobó** (23 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones).

Artículo 29

El Estado garantiza a todas las personas el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, adecuada a sus necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística y respeto a los principios de autonomía progresiva e interés superior de niños, niñas y adolescentes.

La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente, cuyos fines son el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, el bien común y el desarrollo de una sociedad libre, diversa y cohesionada, así como el fortalecimiento del respeto a los principios democráticos de convivencia, a los derechos humanos y la protección del medioambiente y la naturaleza.

El Estado asegurará la obligatoriedad y gratuidad entre el segundo nivel de transición parvularia y la educación media, extendiéndose la gratuidad desde el nivel de sala cuna y, progresivamente, a la educación superior.

El Estado articulará, regulará y supervigilará un sistema educativo equitativo y pluralista, que valora la diversidad de proyectos educativos atendiendo los intereses, necesidades y características de las personas y las comunidades, favorezca el desarrollo de sus trayectorias educativas y estimule la innovación pedagógica.

Las instituciones de dependencia estatal deberán ser diversas, no confesionales, de alto estándar educativo y de provisión descentralizada, constituyendo, en su conjunto, el eje estratégico del sistema educativo.

La Constitución reconoce la libertad de enseñanza. Se protege el derecho de las familias de elegir para las personas a su cargo una educación de acuerdo con sus creencias, convicciones y cosmovisiones. La comunidad podrá crear y conducir establecimientos educacionales bajo condiciones que aseguren el cumplimiento de los fines y principios que establece esta



Constitución, pudiendo recibir financiamiento estatal sólo aquéllos que ofrezcan educación gratuita, no persigan fines de lucro y se sujeten a las demás normas que establezca la ley.

La labor docente cumple un rol esencial para la realización plena del derecho a la educación. A fin de promover el desarrollo y aprendizaje de los y las estudiantes, el Estado velará por la formación inicial y continua y por condiciones laborales adecuadas para profesores, profesoras, educadores y educadoras.

Indicaciones: N°410 a 420. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°410.** Céspedes et al. Suprímase el artículo 29.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones).

Artículo 30

Alta capacidad e inclusión: nadie fuera del sistema educativo. Es deber del Estado garantizar un sistema educativo inclusivo en todos sus niveles. Todos los niños, niñas, adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales y alta capacidad, deberán contar con adecuaciones curriculares diferenciadas y apoyos socioafectivos que les permitan desarrollar su personalidad, sus aptitudes y sus capacidades mentales y físicas hasta el máximo de sus posibilidades.

Indicaciones: N°422. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°422.** Céspedes et al. Suprímase el artículo 30.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones).

Artículo 31

El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación.

La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tiene como propósito el desarrollo integral de la persona, su personalidad, el sentido de su dignidad, el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, así como, la construcción del bien común, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fortalecimiento de la convivencia democrática y pacífica para el desarrollo de una sociedad justa, libre, diversa y cohesionada, la valoración y respeto de la Naturaleza y el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural del país.

Deberá ser una educación integral y de calidad, rigiéndose especialmente por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista, ambiental, y con pertinencia local, cultural y lingüística. Se entenderá por calidad de la educación el cumplimiento de los propósitos y principios antes mencionados.

La educación será una función primordial del Estado.

Los establecimientos de educación parvularia, básica y media, así como también las instituciones que provean educación superior, conforman un sistema nacional de educación basado en el principio de colaboración, que tendrá como centro la experiencia educativa de los estudiantes. El Estado fomentará su mejoramiento continuo y ejercerá labores de regulación, promoción y supervigilancia. Las instituciones que conforman este sistema estarán sujetas al régimen común que jara la ley, no podrán perseguir fines de lucro y se orientarán por los principios de este derecho y los generales que establezca esta Constitución.

La educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

La Constitución reconoce procesos educativos no formales, realizados por medio de programas sistemáticos, no necesariamente evaluados y que podrán ser reconocidos y verificados según lo dispuesto por la ley.

Para garantizar universalmente el derecho a la educación habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas organizado, financiado y administrado por el Estado, el que orientará el desarrollo del sistema educacional nacional. Su fortalecimiento y desarrollo será un deber especial del Estado. Este sistema deberá proveer de manera progresiva una educación laica, gratuita y pertinente territorialmente.

La Constitución reconoce el derecho de los integrantes de cada comunidad educativa a participar tanto en decisiones de la unidad respectiva, como de la política educacional local y nacional que sean relevantes para su quehacer y para el ejercicio del derecho a la educación.

La ley especificará las condiciones y órganos para asegurar la participación vinculante de los integrantes de la comunidad educativa en todo establecimiento o institución reconocida oficialmente por el Estado.



La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y su contribución al pluralismo educativo.

La libertad de enseñanza comprende el derecho preferente de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir la educación de las personas a su cargo. Este derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y de conformidad a la ley. Comprende también el derecho de toda persona a crear y gestionar proyectos educativos, los que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios y respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución y las demás condiciones que establezca la Ley.

Los proyectos educativos así creados, que sean gratuitos y cumplan con los demás requisitos que para eso je la Ley, podrán recibir financiamiento del Estado. Estos proyectos serán parte de un sistema que el Estado deberá articular, resguardando su rol público.

La Constitución reconoce la función primordial de profesores, profesoras, educadores y educadoras, así como de asistentes de la educación, en el resguardo del derecho a la educación.

El Estado protegerá el rol docente para lo cual deberá fortalecer su función, promover el desarrollo de la profesión, mejorar sus condiciones laborales y resguardar la autonomía profesional de acuerdo a los propósitos establecidos en esta Constitución y la Ley.

El Sistema de Educación Superior estará conformado por las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales reconocidos por el Estado. Todos ellos deberán guiarse por los principios que esta Constitución establece, de acuerdo a los requerimientos educacionales, productivos, científicos y culturales del país.

En virtud del deber especial mencionado en el inciso 8º, el Estado deberá desarrollar y fortalecer los establecimientos estatales de educación superior.

Las Universidades privadas podrán ser especialmente reconocidas por ley, acreditando haberse dado una organización interna que asegure su plena autonomía respecto de sus fundadores o los sucesores a cualquier título de éstos, y cumpliendo los demás requisitos que fije la ley. Este reconocimiento les permitirá acceder a un trato preferente del Estado.

Las Universidades estatales y las Universidades privadas así reconocidas, serán autónomas. La Constitución protege la libertad de cátedra e investigación y la libre discusión de las ideas de sus académicos y académicas.

El Estado velará por el acceso a la educación superior de todos los estudiantes que cumplan los requisitos de admisión establecidos por la ley, fomentará la igualdad de acceso, con especial atención a los grupos históricamente excluidos, y garantizará progresivamente la gratuidad en este nivel educativo.

Se reconoce la autonomía de los pueblos originarios para proveer educación, de conformidad a sus costumbres y cultura, resguardando los contenidos y requisitos mínimos establecidos por la ley.

Indicaciones: N°423 a 452. Resultó aprobada la siguiente:

--- No habiéndose aprobado indicaciones entre los incisos primero y decimoquinto, sometidos a votación se **rechazaron** (8 votos a favor, 22 en contra, 3 abstenciones).

--- No habiéndose aprobado indicaciones en los incisos decimosexto y decimoséptimo, sometidos a votación se **rechazaron** (7 votos a favor, 18 en contra, 7 abstenciones).

--- No habiéndose aprobado indicaciones al inciso decimooctavo, sometido a votación se rechazó (4 votos a favor, 14 en contra, 13 abstenciones).

— **Indicación N°437.** Baranda et al. Suprimir el inciso 19.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones).

--- No habiéndose aprobado indicaciones al inciso vigésimo, sometido a votación se **rechazó** (7 votos a favor, 18 en contra, 8 abstenciones).

--- No habiéndose aprobado indicaciones al inciso vigésimo primero, sometido a votación se **rechazó** (10 votos a favor, 18 en contra, 5 abstenciones).

Derecho al sustento alimenticio

— **Indicación N°455.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho al sustento alimenticio”.

Sometido a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 32

La alimentación es un derecho fundamental e inalienable de los pueblos de Chile, base de la salud y la calidad de vida, indisolublemente ligado a la Soberanía Alimentaria, a los sistemas



campesinos de uso y conservación de semillas, a la agricultura campesina e indígena, a la recolección artesanal y al canal alimentario agropesquero tradicional. Garantizar este derecho es un deber del Estado y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país. No puede quedar al arbitrio del mercado.

Indicaciones: N°455 a 458. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°456bis.** Grandón; Fernández et al. Al 32, suprimase.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones).

Artículo 33

El Estado garantizará que todas y todos los habitantes del país tengan de manera permanente acceso físico y económico a una alimentación sana, saludable, diversa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada, que garantice una vida libre de hambre, satisfaga las necesidades biológicas de las personas y permita un desarrollo mental, físico y espiritual digno y satisfactorio.

Indicaciones: N°459 a 461. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°459bis.** Fernández et al. Sustitúyase el artículo 33 por el siguiente:

“Derecho a la alimentación adecuada. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Este derecho comprende la seguridad e inocuidad alimentaria, el acceso a una alimentación de calidad y el derecho a conocer la composición y origen de los alimentos, especialmente en sectores aislados geográficamente.

El Estado garantizará en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso, tanto físico como económico, a los alimentos que satisfagan este derecho, incluyendo alimentos especiales para las personas que lo requieran por razones de salud. Asimismo, promoverá el patrimonio culinario y gastronómico del país, y el consumo de alimentos y bebidas saludables.”.

Enmienda amistosa:

Para reemplazar la redacción de la indicación por la siguiente:

“Derecho a la alimentación adecuada. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Este derecho comprende la seguridad e inocuidad alimentaria, el acceso a una alimentación de calidad, **culturalmente adecuada, así como** el derecho a conocer la composición, origen y **trazabilidad** de los alimentos, especialmente en sectores aislados geográficamente.

El Estado garantizará en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso, tanto físico como económico, a los alimentos que satisfagan este derecho, incluyendo alimentos especiales para las personas que lo requieran por razones de salud. Asimismo, promoverá el patrimonio culinario y gastronómico del país, y el consumo de alimentos y bebidas saludables.”

Sometida a votación con la enmienda propuesta se **aprobó** (23 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones).

Artículo 34

Será deber del Estado resguardar, promover y apoyar la agricultura campesina e indígena, la recolección artesanal y el canal alimentario agropesquero tradicional, para garantizar el derecho a la alimentación, hacer realidad la soberanía alimentaria y hacer posible la producción de alimentos protegiendo el medio ambiente y los bienes naturales y respetando los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios.

Indicaciones: N°462. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°462.** Grandón et al. También Fernández et al. Para suprimir el artículo 34.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones).

Artículo 35

A fin de asegurar alimentos saludables, la orientación de la agricultura debe ser hacia las formas de manejo, producción y procesamiento agroecológicos, diversificados y desconcentrados. El Estado debe proveer los recursos y medios necesarios para garantizar procesos de cambio hacia métodos agroecológicos de producción y procesamiento.

Indicaciones: N°463 a 464. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°463.** Grandón et al. También Fernández et al. Para suprimir el artículo 35.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones).

Artículo 36

El Estado debe proveer los recursos y medios necesarios para garantizar procesos de cambios hacia métodos de producción para una pesca artesanal sustentable.

Indicaciones: N°465. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°465.** Grandón et al. También Fernández et al. Para suprimir el artículo 36.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones).

Artículo 37

Las y los campesinos, los pueblos originarios, las y los recolectores artesanales, los pescadores artesanales, las y los feriantes y sus organizaciones tienen derecho a participar en la definición de políticas agrícolas y alimentarias. El Estado deberá promover y garantizar esta participación, estableciendo las medidas necesarias para que la misma se haga efectiva, conforme establezca la Ley y esta Constitución.

Indicaciones: N°466 y 467. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°466.** Fernández et al. Suprímase el artículo 37.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones).

Derecho al deporte, la actividad física y la recreación

— **Indicación N°469.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho al deporte, la actividad física y la recreación”.

Sometido a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 38

La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la práctica del deporte, a participar de su organización colectiva e individual, y a la expresión y celebración identitaria en torno a la práctica deportiva, como un patrimonio cultural inalienable de sus comunidades. Al ser el deporte una actividad fundamental de la vida y la cultura, es deber del Estado garantizar el derecho a la práctica, la organización, la celebración y la identidad deportiva, como un derecho colectivo de los pueblos y de cada uno, observando:

I) la autonomía de las entidades deportivas dirigentes y de las asociaciones, en lo referente a su organización y funcionamiento. El Poder Judicial sólo admitirá acciones relativas a la disciplina y a las competiciones deportivas una vez agotadas las instancias de la justicia deportiva, regulada en la ley;

II) el destino de los recursos públicos a la promoción prioritaria de la diversidad igualitaria en el deporte, asegurando la participación de todas las personas en todas las actividades deportivas, el deporte escolar, de los pueblos originarios, y, en casos específicos, para el deporte de alta competición.

III) el tratamiento diferenciado para el deporte profesional y no profesional.

La ley establecerá la regulación y los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto el ejercicio de la exploración y gestión del deporte profesional como actividad económica, social y cultural, estableciendo, en todo caso, que su estructura administrativa y propiedad deberán ser democráticas.

Indicaciones: N°470 a 482. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°470.** Fernández et al. Suprímase el artículo 38.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones).

Artículo 39

Todas las personas tendrán derecho al deporte y a la actividad física, en todas sus disciplinas y en sus múltiples dimensiones, incluida la práctica deportiva ancestral, sin discriminaciones arbitrarias. Es deber del Estado remover las condiciones estructurales que imposibilitan el acceso y ejercicio de la práctica deportiva en condiciones de igualdad. Las leyes y normas cuyo objetivo sea crear las condiciones que hagan reales y efectivas las prácticas deportivas, y que estén basadas en motivos de raza, origen étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física, entre otras, no serán consideradas discriminaciones arbitrarias.

El Estado garantizará las distintas dimensiones del deporte y la actividad física, ya sea recreacional, educativa, formativa, autóctona, competitiva o de alto rendimiento, así como medio para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Para lograr estos objetivos, se podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley.



El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración y la reinserción social, así como la mantención y mejora de la salud. Por ello, la ley asegurará el involucramiento de las personas con la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas. En el cumplimiento de este mandato, el Estado deberá aplicar el principio de descentralización.

Indicaciones: N°483 a 493. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°484.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso primero por el siguiente:

“Derecho al deporte y la actividad física. Todas las personas tienen derecho al deporte y a la actividad física, incluida la práctica deportiva ancestral. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos, se podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley.”.

Enmienda amistosa:

Para que la redacción de la indicación sea la siguiente:

“Derecho al deporte, la actividad física **y las prácticas corporales**. Todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física **y a las prácticas corporales**. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos, se podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley.”.

Sometida a votación con la enmienda se **aprobó** (24 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°488.** Fernández et al. Suprímase el inciso segundo.

Sometido a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones).

— **Indicación N°489.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso tercero por el siguiente:

“El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración y la reinserción social, así como la mantención y mejora de la salud. La ley asegurará el involucramiento de las personas con la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas.”.

Enmienda amistosa:

Para que la redacción de la indicación sea la siguiente:

“El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración **e inserción** social, así como **el mantenimiento** y mejora de la salud. La ley asegurará el involucramiento de las personas y comunidades con la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas.”.

Sometida a votación con la enmienda se **aprobó** (24 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°493.** Fernández et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La ley establecerá la regulación y los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la búsqueda de talentos deportivos y la gestión del deporte profesional como actividad económica, social y cultural, debiendo asegurar formas de organización democrática.”.

Sometido a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones).

Igualdad ante la ley

— **Indicación N°494.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Igualdad ante la ley”.

Sometido a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 40

Derecho a la igualdad y no discriminación. *La Constitución asegura el derecho a la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile queda prohibida toda forma de esclavitud, sea sexual, laboral o de otra índole.*

Asimismo, se asegura el derecho a la igual protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en motivos tales como nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, idioma, religión o creencia, raza, pertenencia étnica, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, situación socioeconómica, pobreza, ruralidad, situación migratoria, condición de refugiado, apátrida o



desplazado interno, discapacidad, condición de salud mental o física, incluyendo la seropositividad, el estado civil, la filiación, la apariencia personal o cualquier otra condición social.

Se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación basada en alguna de las categorías mencionadas anteriormente u otras que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

El Estado promoverá las condiciones para garantizar que la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sea real y efectiva. Para ello, deberá adoptar las medidas que sean necesarias para remover los obstáculos que impidan o dificulten su plena realización en todas las esferas de la vida.

Una ley determinará las medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de todas las formas de discriminación, en los ámbitos público y privado. Ello no impide la adopción de otras leyes, políticas de igualdad, adecuaciones institucionales, medidas afirmativas o acciones estatales destinadas a alcanzar una igualdad sustantiva y superar situaciones de discriminación, marginación o subordinación, particularmente en aquellas categorías señaladas en el inciso segundo.

Los órganos del Estado deberán tener especialmente en cuenta los casos en que confluayan, respecto de una persona, más de una categoría, condición o criterio de los señalados en el inciso segundo.

Indicaciones: N°495 a 517. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°499.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso primero por el siguiente:

“Derecho a la igualdad y no discriminación. La Constitución asegura el derecho a la igualdad. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma de esclavitud.”.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, ninguno en contra, 5 abstenciones).

— **Indicación N°502.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“Se asegura el derecho a la protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, etnia, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o cualquier otra condición social.”.

Enmienda amistosa:

Para reemplazar la indicación por la siguiente:

“Se asegura el derecho a la protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, etnia, **pertenencia a un pueblo y nación indígena o tribal**, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o cualquier otra condición social.”.

Sometida a votación la admisibilidad de la enmienda se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención).

Sometida a votación con la enmienda propuesta se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra y ninguna abstención).

— **Indicación N°506.** Baranda et al. Para añadir, al final del inciso tercero del artículo 40, la frase: “incluyendo la denegación de ajustes razonables”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°508.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso cuarto por el siguiente:

“El Estado deberá respetar, proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales, sin discriminación.”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones).

— **Indicación N°511.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso quinto por el siguiente:

“La ley determinará las medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de todas las formas de discriminación, en los ámbitos público y privado, así como los mecanismos para garantizar la igualdad material y sustantiva entre todas las personas.”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).



— **Indicación N°513.** Fernández et al. Agréguese un nuevo inciso sexto del siguiente tenor:

“El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias, incluidos los ajustes razonables, para corregir y superar la desventaja o el sometimiento de una persona o grupo de ellas respecto de otras.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones).

— **Indicación N°515.** Fernández et al. Sustitúyase en el inciso sexto la expresión “en cuenta” por “en consideración”.

Sometido a votación se **aprobó** (27 votos en contra, 4 en contra y 1 abstención).

Artículo 41

La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la igualdad, la no discriminación y el no sometimiento.

Se garantiza la igualdad material y sustantiva entre todas las personas, sin distinción por cualquier condición de la diversidad social, tales como edad, características sexuales, identidad y expresión de género, orientación sexo-afectiva, pertenencia a pueblos originarios o tribal afrodescendiente, origen nacional o social, clase o estrato social, estado civil, idioma, religión o creencia, ideología u opinión política o de otro tipo, filiación, situación laboral, nivel educacional, condición de salud, de migración, de refugio, de ruralidad, de gestación, situación de discapacidad, seropositividad, o cualquier otra condición, situación, característica o elemento distintivo; adoptando medidas de inclusión y acción positiva que afirmen y garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, no sometimiento, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de personas en su niñez y juventud, personas mayores, personas en situación de discapacidad, mujeres, disidencias y diversidades sexo-genéricas, y otros grupos históricamente excluidos.

El Estado deberá corregir y superar toda situación en que se ponga a una persona o grupo de ellas, en desventaja o sometimiento respecto de otras, ya sea por acción u omisión, mediante normas, actos administrativos, criterios o prácticas aparentemente neutras, salvo que ellas puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, adecuados y proporcionales.

Es deber del Estado, de sus poderes, servicios, empresas, y de toda entidad que ejerza funciones públicas o contribuya a ellas, elaborar e implementar, en su caso, leyes, políticas públicas, protocolos, y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.

Existirá una acción judicial y administrativa para garantizar el imperio y cumplimiento de este derecho, para asegurar todos los contenidos dispuestos en esta norma. Asimismo, le corresponderá al Estado velar por la reparación integral de todas las personas y grupos que sean objeto de discriminación y sometimiento, promoviendo medidas efectivas de no repetición.

Indicaciones: N°519 a 526. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°519.** Fernández et al. Suprímase el artículo 41.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones).

Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales

— **Indicación N°527.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 42

Las actividades económicas, comerciales, sociales y culturales de los Pueblos-Naciones indígenas de carácter transfronterizo están permitidas siempre y cuando sean legítimas y lícitas. En colaboración con los Pueblos-Naciones indígenas el Estado protegerá y garantizará estas actividades a través de una regulación especial.

Indicaciones: N°528. No habiéndose aprobado indicaciones, sometido a votación el artículo se **rechazó** (13 votos a favor, 13 en contra, 6 abstenciones).

Artículo 43

El Estado está para garantizar de forma sana, suficiente, de calidad y sin exclusión: salud, seguridad social, justicia oportuna, vivienda, trabajo, educación, alimentación para el crecimiento y buen vivir de los habitantes del país.

Indicaciones: N°529. Resultó aprobada la siguiente:



— **Indicación N°529.** Mamani et al. Para suprimirlo.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones).

Artículo 44

La Constitución reconoce tres tipos de personas: Naturales, Colectivas y Jurídicas.

Indicaciones: N°530. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°530.** Mamani et al. Para suprimirlo.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones).

Artículo 45

Derechos lingüísticos. *Las personas y pueblos tienen el derecho individual y colectivo a comunicarse en su respectiva lengua en todo espacio público o privado, físico o digital, y a la oficialización de ella.*

Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener su identidad y diferencia, lo que implica el derecho al uso colectivo de su lengua, su conservación y el derecho de aprenderla, cultivando, además, el castellano como lengua de comunicación intercultural.

Todos los habitantes del territorio nacional, y en especial en las autonomías territoriales indígenas, tendrán el derecho a aprender y usar las lenguas.

Los integrantes de un pueblo indígena tienen el derecho a aprender y adquirir la lengua de sus antepasados y a recibir educación pública que considere su lengua. Ninguna persona o grupo podrá ser discriminado por razones lingüísticas.

El Estado reconoce todas las lenguas indígenas como patrimonio inmaterial de todos los pueblos y garantiza, en participación y consulta con los pueblos y a través de la institucionalidad nacional y regional, su tránsito progresivo a la co-oficialización. Mediante el aseguramiento de su visibilización, difusión, educación, revitalización y preservación, se deberá garantizar las políticas públicas para la difusión de las lenguas reconocidas y progresivamente las funciones sociales de estas a través de su uso en las publicaciones y documentos oficiales, en la administración pública, en la sociedad, medios de comunicación y plataformas virtuales. Para promover y profundizar este derecho, el Estado debe crear una ley, en consulta con los pueblos indígenas, que establecerá la política de planificación lingüística, con el objetivo primordial de preservar, conservar, registrar, desarrollar y educar sobre las lenguas indígenas en todas sus funciones sociales, además de avanzar en medidas de normalización, escritura, desarrollo lexical y gramatical de estas.

Dicha ley también establecerá la institucionalidad que permita la planificación, coordinación y promoción de la investigación lingüística con el objetivo de revitalizar, registrar y difundir las lenguas.

Indicaciones: N°531 a 532. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°532.** Mamani et al. Para sustituir el artículo 45 por el siguiente:

“Toda persona y pueblo tiene el derecho a comunicarse en su propia lengua en todo espacio público o privado, físico o digital. Todos los habitantes del territorio nacional tendrán el derecho a aprender y usar las lenguas, y a recibir educación pública que considere su lengua. Ninguna persona o grupo podrá ser discriminado por razones lingüísticas.

El Estado reconoce y protege todas las lenguas indígenas dentro del territorio nacional y deberá asegurar su visibilización, difusión, educación, revitalización y preservación. Una ley establecerá la política de planificación lingüística y su institucionalidad, con el objetivo primordial de preservar, conservar, registrar, desarrollar y educar sobre las lenguas indígenas en todas sus funciones sociales, además de avanzar en medidas de normalización, escritura, desarrollo lexical y gramatical de estas para su oficialización.”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención).

Artículo 46

El derecho a la consulta previa. *La participación y consulta previa es un derecho de los pueblos y naciones indígenas y el pueblo tribal; y una obligación para el Estado y de todos sus órganos, cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza susceptibles de afectar sus derechos.*

La consulta es siempre de carácter previo, no se agota con la mera información; es de buena fe, adecuada a las circunstancias, a través de las instituciones representativas indígenas, de manera sistemática y transparente, con el propósito de lograr el consentimiento libre, previo e informado sobre la medida objeto de la consulta.



Corresponderá a la ley en consulta y cooperación de buena fe con los pueblos y naciones indígenas y el pueblo tribal, establecer la regulación del proceso de participación y consulta previa de conformidad a los principios y estándares de esta Constitución y el Derecho Internacional.

La naturaleza y alcance de las medidas que se adopten para dar cumplimiento al derecho-deber a la consulta, en ningún caso pueden menoscabar los derechos fundamentales de los pueblos y naciones indígenas y el pueblo tribal, garantizados en el Sistema Internacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que en cualquier caso serán considerados como estándares mínimos.

Indicaciones: N°533 y 534. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°533.** Mamani et al. Para sustituir el artículo 46 por el siguiente:

“Artículo xx. Derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de éstos, a través de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe.

Es deber del Estado y sus órganos requerir el consentimiento en los casos conforme a esta Constitución, la ley y los tratados e instrumentos internacionales ratificados y vigentes en Chile.

El deber del Estado de realizar la consulta aplicará también a los pueblos tribales en territorio nacional.”.

Sometida a votación se **aprobó** (18 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones).

Artículo 47

Se creará un organismo autónomo y plurinacional, cuya función será revisar las solicitudes de inicio de un proceso de consulta previa, realizar el seguimiento del procedimiento y velar por el cumplimiento de los estándares o principios rectores que validan la consulta previa. La composición y las atribuciones específicas de este organismo autónomo serán determinadas por la ley, en consulta con los pueblos y naciones indígenas.

Indicaciones: N°535. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°535.** Mamani et al. Para suprimirlo.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones).

Artículo 48

Los procesos de participación y consulta previa podrán siempre ser revisados, ya sea por vía administrativa o judicial según corresponda.

Indicaciones: N°536. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°536.** Mamani et al. Para suprimirlo.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones).

Artículo cuarto transitorio

Este organismo autónomo se deberá crear dentro del plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, mientras que el inicio de sus funciones no podrá superar los diez meses desde su creación. En el periodo de transición, previo a su funcionamiento, el Estado y sus organismos se abstendrán de desarrollar e implementar procedimientos de participación y consulta previa, con excepción de la consulta previa que se implemente para la creación del organismo autónomo y plurinacional.

Indicaciones: N°537. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°537.** Mamani et al. Para suprimirlo.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones).

Derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales

— **Indicación N°538.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 49

Derecho humano al agua y al saneamiento. Los derechos humanos al agua y al saneamiento constituyen garantías indispensables para la vida, la dignidad, la salud y la igualdad.



Toda persona, sin discriminación arbitraria, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico. El Estado velará por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas, migrantes y personas privadas de libertad. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales.

Toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado y de las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, en situación de discapacidad o privadas de libertad.

Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones. Toda persona o comunidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos establecidos en este artículo.

Indicaciones: N°539 a 548. Resultaron aprobadas las siguientes:

— **Indicación N°541.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso primero por el siguiente:

“Derecho humano al agua y al saneamiento. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones.”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones).

— **Indicación N°542.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso segundo por el siguiente:

“El Estado velará por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones).

— **Indicación N°544.** Fernández et al. Sustitúyase el inciso tercero por el siguiente:

“Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas terrestres.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención).

— **Indicación N°546.** Fernández et al. Suprímase el inciso cuarto.

Sometido a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones).

Otros derechos fundamentales

— **Indicación N°549.** Henríquez et al. Para eliminar el título “Otros derechos fundamentales”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención).

Artículo 50

Los y las habitantes de territorios rurales, aislados e insulares tienen derecho a participar de manera vinculante en la toma de decisiones sobre lo que ocurre en sus territorios. Es deber del Estado garantizar esta participación y los medios para acceder a ella.

Indicaciones: N°550 a 552. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°550.** Fernández et al. Suprímase el artículo 50.

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones).

Artículo 51

El Estado reconoce el derecho a la educación en los territorios rurales y facilita y garantiza sistemas educativos con pertinencia territorial y lingüística, no sexistas, y accesibles in-situ. Los contenidos deben considerar una amplia diversidad de expresiones culturales y artísticas, incluida la participación activa de la comunidad rural en la entrega de conocimientos, que incorporen saberes, artes y oficios locales a modo de fortalecer los vínculos sociales y el traspaso transgeneracional de saberes en las comunidades; contribuyendo a preservar y potenciar sus identidades, economías, culturas y territorios.

Indicaciones: N°553 a 555. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°553.** Grandón et al. También Fernández et al. Para suprimir el artículo 51.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones).

Artículo 52

Es deber del Estado garantizar el acceso universal a un sistema de transportes público que considere las diversidades funcionales, que sea ecológico, eficiente y seguro de acuerdo con las necesidades del trabajo y la vida en territorios rurales, aislados e insulares, que asegure la conectividad del transporte bajo criterios de justicia territorial, equidad y calidad.

Indicaciones: N°556. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°556.** Grandón et al. También Fernández et al. Para suprimir el artículo 52.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones).

Artículo 53

Las leyes reconocerán distintas formas de propiedad y usufructo de la tierra, como la propiedad individual, privada, colectiva, comunitaria, estatal, pública, cooperativa, consuetudinarias y otras.

Indicaciones: N°557 a 565. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°557.** Grandón et al. También Fernández et al. Para suprimir el artículo 53.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones).

Artículo 54

Derecho a la protección de los datos personales. *La Constitución asegura el derecho a la protección de los datos personales. Este derecho comprende la facultad de acceder a los datos recogidos que le conciernan, oponerse al tratamiento de sus datos y a obtener su rectificación y cancelación, así como otras facultades que se establezcan conforme a la ley. El respeto de estas normas estará sujeto al control y garantía de un órgano autónomo, de conformidad con la ley.*

Indicaciones: N°566 a 568. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°567.** Harboe y Barceló. Para sustituirlo por uno del siguiente tenor:

“Artículo 54.- Derecho a la autodeterminación informativa. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de datos personales.

El tratamiento de datos personales sólo podrá realizarse en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley, observando en todo caso los principios de licitud, lealtad, transparencia, seguridad y finalidad.

El control de las personas sobre la información que les concierna se ejercerá a través de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad e inferencia, sin perjuicio de otros que se establezcan de conformidad a la ley.

La ley regulará un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica que velará por el respeto efectivo de este derecho.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones).

Artículo 55

Derecho a la seguridad informática. *Toda persona tiene derecho a la seguridad informática.*

El Estado, los particulares y los responsables de los sistemas de información automatizados deberán adoptar las medidas necesarias e idóneas para garantizar la integridad, confidencialidad, continuidad, resiliencia y autenticidad de la información que contengan los sistemas informáticos que administren y la disponibilidad de los servicios prestados.

Toda persona tiene derecho a adoptar las medidas técnicas de seguridad informática que considere necesarias según la criticidad de la información. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir el ejercicio de este derecho.

La ley establecerá un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica y patrimonio propio que velará por el respeto efectivo y promoción de este derecho.”.

Indicaciones: N°569 a 572. Al no haberse aprobado indicaciones, sometido a votación el artículo se **rechazó** (14 votos a favor, 12 en contra, 6 abstenciones).

Artículo 56

Derecho a la participación de grupos históricamente excluidos. *Tratándose de grupos tales como las comunidades rurales, las disidencias y diversidades sexuales y de género, mujeres, personas cuidadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, migrantes y refugiados, personas privadas de libertad, el Pueblo Tribal Afrochileno y la comunidad afrodescendiente, entre otros, será deber del Estado remover las condiciones estructurales que imposibilitan el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades.*



Las leyes y normas cuyo objetivo sea crear las condiciones que hagan real y efectivo el ejercicio de este derecho y que estén basadas en motivos de raza, origen étnico, lugar de origen, religión, sexo, género, identidad de género, edad, discapacidad, entre otras características personales y/o colectivas, no serán consideradas discriminaciones.

Indicaciones: N°573 a 576.

Al no aprobarse indicaciones al inciso primero, sometido a votación el inciso se **rechazó** (15 votos a favor, 11 en contra, 4 abstenciones).

No se realizaron más votaciones por carecer de objeto.

Artículo 57

Derecho al olvido. *Toda persona tendrá derecho a solicitar que se elimine de los motores de búsqueda de internet toda o parte de la información relacionada con su persona o su familia, si no hubiere un interés público prevalente. La ley regulará la forma de ejercer este derecho así como los deberes de quienes mantengan el tratamiento de dichos datos y los casos en que se entiende que habrá interés público prevalente. Si la información fuera falsa o errónea, siempre existirá ese derecho.*

Indicaciones: N°577 a 579. Resultó aprobada la siguiente:

— **Indicación N°577.** Harboe y Barceló. También Grandón et al.; Fernández et al. Para suprimir el artículo 57.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones).

IV. INDICACIONES RECHAZADAS

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento General, se registran las indicaciones rechazadas durante la discusión de esta propuesta en la Comisión.

Al respecto, cabe hacer presente que las indicaciones contenidas en este capítulo fueron patrocinadas de manera individual o colectiva. En tal sentido, y en virtud de lo dispuesto en el Reglamento General en su artículo 3 literal m), sobre respeto y cuidado de la Naturaleza y aplicación de un enfoque ecológico; n), sobre eficacia, y s) sobre economía y cuidado de los recursos públicos, tratándose de indicaciones con patrocinio colectivo se informan de modo agrupado bajo un identificador único para cada bloque. Tales identificadores son los siguientes:

1. María Magdalena Rivera Iribarren.
2. Luís Barceló Amado.
3. Alfredo Moreno Echeverría.
4. Harboe y Barceló: Felipe Harboe Bascuñán y Luís Barceló Amado.
5. Valenzuela y Domínguez: César Valenzuela Maass y Gaspar Domínguez Donoso.
6. Henríquez et al: Natalia Henríquez Carreño, Loreto Vallejos Dávila, Francisca Arauna Urrutia, Ingrid Villena Narbona y Daniel Bravo Silva.
7. Cantuarias et al: Rocío Cantuarias, Teresa Marinovic, Alfredo Moreno, Claudia Castro, Katerine Montealegre.
8. Marinovic et al. Rocío Cantuarias, Teresa Marinovic, Claudia Castro, Katerine Montealegre.
9. Chahín y Barceló: Fuad Chahín Valenzuela y Luís Barceló Amado.
10. Valentina Miranda Arce.
11. Serey et al: Mariela Serey, Giovanna Grandón, Damaris Abarca.
12. Abarca et al: Valentina Miranda, Bárbara Sepúlveda, Damaris Abarca, Aurora Delgado, Janis Meneses, Alondra Carrillo, Loreto Vallejos, Ingrid Villena y Tammy Pustilnick.
13. Mamani et al: Lidia González Calderón, Isabella Mamani, Fernando Tirado y Janis Meneses.
14. Dayyana González Araya.
15. Francisca Linconao Huircapan.
16. Grandón et al: Bastián Labbé Salazar, Dayyana González Araya, Lidia González Calderón, Giovanna Grandón Caro, Natalia Henríquez Carreño, Janis Meneses Palma, Valentina Miranda Arce y Francisca Linconao Huircapan.
17. Delgado et al: Grandón et al: Aurora Delgado, Bastián Labbé Salazar, Dayyana González Araya, Lidia González Calderón, Giovanna Grandón Caro, Natalia Henríquez Carreño, Janis Meneses Palma, Valentina Miranda Arce y Francisca Linconao Huircapan.
18. Labbé et al: Bastián Labbé Salazar, Janis Meneses Palma y Giovanna Grandón.



19. Rebolledo y Ossandón: Bárbara Rebolledo y Manuel José Ossandón.

20. Bárbara Rebolledo Aguirre.

21. Manuel José Ossandón Lira.

22. Meneses et al: Janis Meneses, Bastián Labbé, Giovanna Grandón, Tatiana Urrutia, Damaris Abarca, Mariela Serey, Aurora Delgado, Valentina Miranda, Javier Fuchslocher, Gaspar Domínguez, Natalia Henríquez, Roberto Celedón, Patricio Fernández, Matías Orellana, Benito Baranda, Elsa Labraña, Lidia González, Isabella Mamani, Fernando Tirado, Cesar Valenzuela, Adriana Cancino, Francisca Linconao Huircapan.

23. Urrutia et al: Janis Meneses, Bastián Labbé, Giovanna Grandón, Tatiana Urrutia, Damaris Abarca, Mariela Serey, Aurora Delgado, Valentina Miranda, Javier Fuchslocher, Gaspar Domínguez, Natalia Henríquez, Roberto Celedón, Benito Baranda, Elsa Labraña, Lidia González, Isabella Mamani, Fernando Tirado, Francisca Linconao Huircapan.

24. Fuchslocher et al: Meneses et al: Janis Meneses, Bastián Labbé, Giovanna Grandón, Damaris Abarca, Valentina Miranda, Javier Fuchslocher, Gaspar Domínguez, Natalia Henríquez, Roberto Celedón, Benito Baranda, Elsa Labraña, Lidia González, Isabella Mamani, Fernando Tirado, Francisca Linconao Huircapan.

25. Tirado et al. Janis Meneses, Bastián Labbé, Giovanna Grandón, Tatiana Urrutia, Damaris Abarca, Mariela Serey, Aurora Delgado, Valentina Miranda, Javier Fuchslocher, Gaspar Domínguez, Natalia Henríquez, Roberto Celedón, Benito Baranda, Elsa Labraña, Lidia González, Isabella Mamani, Fernando Tirado.

26. Cancino et al: Adriana Cancino, Aurora Delgado, Damaris Abarca, Mariela Serey, Tatiana Urrutia, César Valenzuela, Matías Orellana, Patricio Fernández.

27. Labraña y Celedón: Elsa Labraña y Roberto Celedón.

28. Fernández et al: Tatiana Urrutia, Adriana Cancino, Aurora Delgado, Benito Baranda, Javier Fuchslocher, César Valenzuela, Damaris Abarca, Gaspar Domínguez, Mariela Serey, Matías Orellana, Patricio Fernández.

29. Céspedes et al: Lorena Céspedes, Tatiana Urrutia, Adriana Cancino, Aurora Delgado, Benito Baranda, Javier Fuchslocher, César Valenzuela, Damaris Abarca, Gaspar Domínguez, Mariela Serey, Matías Orellana, Patricio Fernández.

30. Alvarado et al: Gloria Alvarado Jorquera, Francisco Caamaño Rojas, Carolina Vilches Fuenzalida, Francisca Arauna Urrutia, Camila Zárate Zárate, Loreto Vallejos Dávila, César Uribe Araya, Constanza San Juan Standen e Ivanna Olivares Miranda.

31. Serey et al N°2: Aurora Delgado, Damaris Abarca, Mariela Serey, Tatiana Urrutia.

32. Lisette Vergara Riquelme.

33. Madriaga et al: Elsa Labraña, Roberto Celedón y Tania Madriaga

34. Baranda et al: Benito Baranda, Javier Fuchslocher, Gaspar Domínguez y Lorena Céspedes.

A su vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 literal y), se informa antes del identificador de patrocinios de cada indicación el número que le correspondió durante la discusión en el respectivo comparado y sistema de votaciones.

AL ARTÍCULO 1

1. 2. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva del artículo 1 en el siguiente tenor:

“Derecho a la verdad y a la memoria. El Estado tiene la obligación de investigar, de establecer la verdad respecto de toda situación que constituya violación sistemática e institucional de los derechos humanos e impedir toda forma de impunidad en relación a ellos. Correlativamente la sociedad toda tiene derecho a una reparación integral adecuada, efectiva, proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño sufrido y el Estado tiene el deber de garantizar una reparación integral que comprende restitución in integrum, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición, sobre la base de la verdad y la justicia.

La comunidad nacional tiene el derecho al conocimiento de toda la verdad respecto de su pasado histórico incluidas situaciones de vulneraciones a los derechos humanos que hubiesen ocurrido en el país. Tiene derecho a recordar el pasado, relacionarlo con el presente y establecer sitios de memoria, museos, y toda otra forma de rememorar hechos dolorosos como también heroicos, como una forma viva de educación cívica y formación de las futuras generaciones.”. **(5-21-7)**¹⁰.

¹⁰ En virtud de los literales enunciados en nota al pie N°7, el resultado de las votaciones informadas en esta sección sólo informarán las cifras alcanzadas. En tal sentido, el primer número corresponde a votos a favor, el segundo a Secretaría de la Comisión sobre Derechos Fundamentales



2. 6. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Se considerará también violación a los derechos humanos cualquier acto terrorista que tenga fines políticos.”. **(Por rechazada).**

3. 7. Baranda et al. Para añadir un nuevo inciso final, en el artículo N°1, del siguiente tenor:

“Toda persona que sea lesionada en sus derechos por los organismos del Estado o sus funcionarios en ejercicio o con ocasión de su función, tendrá derecho reclamar su reparación ante los tribunales que determine la ley.”. **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 2

4. 8. Labraña y Celedón. Para suprimir el artículo 2. **(10-21-2).**

5. 10. Fernández et al. Sustituir el artículo 2 por el siguiente:

“Derecho a la verdad. Las víctimas y la comunidad tienen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad sobre hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, los crímenes guerra o de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.”. **(Por rechazada).**

6. 11. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Se considerará también violación a los derechos humanos cualquier acto terrorista que tenga fines políticos.”. **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 3

7. 17. Grandón et al. Para añadir un nuevo inciso al artículo 3 en el siguiente tenor:

“El Estado garantiza la estatización de los sitios de memoria en las que se hayan cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, consagrándolos como patrimonio cultural.”. **(10-19-4).**

AL ARTÍCULO 4

8. 19. Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 4 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 4. El derecho a vivir en una vivienda dotada de las condiciones materiales y del acceso a los servicios básicos, según se establezca en la ley.”. **(9-22-2).**

9. 21. Cantuarias et al. Sustitúyase el numeral 1 por el siguiente texto:

“El derecho al acceso a la vivienda propia, según se establezca en la ley.”. **(8-25-0).**

10. 25. Cantuarias et al. Sustitúyase el numeral 2 por el siguiente texto:

“El Estado deberá contribuir a crear las condiciones para que las personas puedan ejercer este derecho, ya sea que éste se otorgue a través de instituciones públicas o privadas.”. **(7-26-0).**

11. 30. Rebolledo y Ossandón. Para sustituir en el numeral 2, literal c) del artículo por el siguiente:

“c) tenencia jurídica, según lo dispuesto por los procedimientos establecidos por el legislador;”. **(Por rechazada).**

12. 33. Cantuarias et al. Suprímense en el numeral 3) las expresiones “directamente” y “comunitarios”.

13. 34. Cantuarias et al. Sustitúyase el numeral 4 por el siguiente texto:

“Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas.”. **(8-23-2).**

14. 37. Rebolledo y Ossandón. Para suprimir en el numeral 4.- del artículo la expresión: “tomas de terreno”, “y campamentos” e “y son inembargables”. **(Por rechazada).**

15. 39. Grandón et al. Para sustituir el numeral quinto del artículo 4 en el siguiente tenor:

“Nadie podrá ser desalojado de su vivienda arbitrariamente. En caso de desalojo, el Estado deberá garantizar soluciones habitacionales de conformidad a la ley.”. **(Por rechazada).**

16. 40. Baranda et al. Para sustituir el N°5 del artículo 4 por un texto del siguiente tenor:

“5.- Nadie podrá ser desalojado de su vivienda arbitrariamente. En caso de desalojos la persona tendrá derecho a un alojamiento alternativo.”. **(Por rechazada).**

17. 41. Rivera. Para agregar al numeral 5 del artículo 4, lo siguiente:

votos en contra, y el tercero, a abstenciones. Así, tratándose de la indicación de esta nota, hubo ‘5’ votos a favor, ‘21’ en contra y ‘7’ abstenciones.



“a) El pago de dividendos en compra de la vivienda única, declarada bien familiar, no podrá superar el veinte por ciento del ingreso familiar mensual. La vivienda única, es inembargable.”. **(Por rechazada).**

18. 42. Rivera. Para agregar el siguiente nuevo numeral 6, al artículo 4:

“6.- El Derecho a una vivienda digna es garantizado por la función social del derecho de propiedad. El Estado creará una Empresa Nacional de Construcción para garantizar la ejecución de los planes nacionales de vivienda pública. Su directorio estará compuesto mayoritariamente por representantes de sus trabajadores y representantes de comités de viviendas.”. **(8-24-1).**

19. 44. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La propiedad sobre la vivienda es inviolable. El Estado tiene el deber de erradicar toda toma, ocupación u otro uso ilegal de la propiedad ajena.”. **(9-24-0).**

20. 45. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los afectados por el uso ilegal de su vivienda o terreno tienen derecho a ser indemnizados por el Estado a causa de su inacción.”. **(6-26-1).**

21. 46. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Es deber del Estado desalojar a cualquier usurpador, usuario u ocupante ilegal de cualquier vivienda o terreno.”. **(8-25-0).**

22. 47. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce el derecho de acceso a la vivienda propia.”. **(8-24-1).**

23. 48. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce los derechos contenidos en este artículo a todas las personas jurídicas, sin distinción.”. **(6-27-0).**

24. 49. Linconao. Para agregar al artículo 4 dos nuevos incisos:

“Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a una vivienda adecuada, digna y con pertinencia cultural, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria, con acceso garantizado a servicios básicos.

El Estado, en consulta con los pueblos y naciones indígenas, adoptará las medidas eficaces y necesarias para garantizar este derecho. Las políticas públicas de diseño de planes de vivienda y organización territorial deberán tener especial consideración por la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas.”. **(15-17-1).**

ARTICULO NUEVO

25. 51. Moreno. Agréguese un nuevo artículo en el siguiente tenor:

“Artículo XX. El Estado deberá proteger el derecho de propiedad de las personas. La protección y garantía del derecho a la vivienda jamás faculta al Estado a autorizar, promover o permitir, mediante acciones u omisiones, la ocupación, la posesión o el uso ilegal de recintos privados.”. **(8-23-0).**

AL ARTÍCULO 5

26. 52. Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 5 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 5. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella. La propiedad debe servir al bien común, pudiendo la ley establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, cuanto así lo exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio y sustentabilidad ambiental.”. **(5-20-7).**

27. 55. Fuchslocher et al. Para sustituir el N°1 del artículo 5 por uno texto del siguiente tenor:

“1.- Garantizar la disponibilidad de suelo y proceder a las expropiaciones, limitaciones de dominio y establecer las cargas públicas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad y al territorio. Asimismo, establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad a la ley.”. **(16-15-2).**

28. 57. Cantuarias et al. Agréguese en el numeral 1) luego de la frase “provisión de vivienda” la expresión “propia.”. **(Por rechazada).**

29. 58. Cantuarias et al. Suprímase en el numeral 2 la expresión “perspectiva de género”. **(Por rechazada).**

30. 60. Cantuarias et al. Sustitúyase en el numeral 3) la frase “la debida indemnización, acorde a un sistema nacional de tasación y catastro de suelo” por “la indemnización por el daño



patrimonial efectivamente causado, la cual deberá pagarse en efectivo y al contado, previa toma de posesión material del bien”. **(Por rechazada).**

31. 61. Rivera. Para agregar, en el numeral 3 del artículo 5, luego de “(..) suelo.”, la siguiente oración:

“En circunstancias de terrenos que pertenezcan a personas naturales o jurídicas que posean más de 300 mil m² de suelo, no habrá pago de indemnizaciones.”. **(Por rechazada).**

32. 62. Rebolledo y Ossandón. Para añadir un nuevo inciso al numeral 3 del siguiente tenor:

“Las expropiaciones que se realicen en virtud de este título, deberán ser pagadas íntegramente, a valor de mercado, al contado, en dinero efectivo y antes de la toma de posesión material del bien expropiado.”. **(Por rechazada).**

33. 63. Cantuarias et al. Sustitúyanse los numerales 4, 5, 6 y 7 por el siguiente texto:

“El Estado fomentará un sistema integrado y descentralizado de toma de decisiones a nivel urbano y territorial.”. **(9-24-0).**

34. 68. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las expropiaciones que se realicen en virtud de este artículo deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas:

a) Ley que autorice la expropiación por una causa de utilidad pública o interés general calificado por el legislador.

b) Pago de indemnización por parte del Estado al propietario por el daño patrimonial efectivamente causado.

c) Pago de la indemnización en efectivo y al contado, previo a la toma de posesión material del bien expropiado.”. **(9-24-0).**

AL ARTÍCULO 6

35. 69. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas.”. **(8-24-1).**

36. 74. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las personas tienen derecho a participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad.”. **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 7

37. 77. Cantuarias et al. Suprímense en el inciso segundo las expresiones “colectivo”, “la gestión democrática”, y “la función social y ecológica”. **(Por rechazada).**

38. 78. Cantuarias et al. Sustitúyase el inciso tercero por uno del siguiente tenor:

“Para el pleno ejercicio de este derecho, es deber del Estado tomar todas las medidas necesarias para desalojar a cualquier ocupante ilegal de una vivienda o terreno.”. **(7-25-1).**

39. 81. Cantuarias et al. Suprímase en el inciso cuarto la frase “; la colectivización de los cuidados; y la participación social en las plusvalías”. **(Por rechazada).**

40. 82. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“En el ejercicio de este derecho, el Estado no podrá expropiar vivienda o terreno alguno sin al menos pagarle a su propietario una indemnización igual al precio de mercado, en efectivo y al contado, y en forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado.”. **(12-21-0).**

AL ARTÍCULO 8

41. 84. Moreno. Sustituir los artículos 8 y 9 por el siguiente:

“Artículo XX. Derecho al trabajo. Las personas tienen derecho a elegir libremente su trabajo. Las personas, naturales y jurídicas, tienen el derecho a la libre contratación. Se prohíbe la discriminación en base a el género, la etnia, la orientación e identidad sexogenéricas, u otras características que no se fundamenten en las capacidades e idoneidad de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, la ley podrá establecer límites a este derecho, velando por los derechos del trabajador y manteniendo un justo equilibrio en la relación contractual entre empleador y trabajador.”. **(7-26-0).**

42. 86. Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 8 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 8. El derecho al trabajo y a la protección jurídica de su ejercicio.



Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libertad de trabajo, con una justa retribución.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, especialmente en materia salarial entre hombres y mujeres, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a lo dispuesto en la ley o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional, y una ley lo declare así. Ninguna norma jurídica ni autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley.

El derecho de los sindicatos a la negociación colectiva, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.

El derecho a la huelga dentro de la negociación colectiva de conformidad a la ley. No podrán declararse en huelga quienes trabajen en instituciones, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud y al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las instituciones cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso y las eventuales sanciones que acarrearía su incumplimiento.”. **(Por rechazada).**

43. 88. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“La libertad de trabajo y la protección del mismo, en la forma establecida por la ley.

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, con una justa retribución.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal.

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o salud pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así.

Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren un grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales ordinarios establecidos en la ley.”. **(Por rechazada).**

44. 95. Cantuarias et al. Agréguese un inciso del siguiente tenor:

“El trabajo contribuye al desarrollo material y espiritual de las personas. Ni la ley ni autoridad alguna podrán calificar a un trabajo como esencial o no”. **(Por rechazada).**

45. 96. Cantuarias et al. Agréguese un inciso nuevo del siguiente tenor:

“El Estado impulsará, a través de las leyes, relaciones laborales modernas, que protejan siempre la libertad de trabajadores y empleadores.”. **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 9

46. 97. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“La libertad de trabajo y la protección del mismo, en la forma establecida por la ley.

Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, con una justa retribución.

Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal.



Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o salud pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así.

Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos.”. **(6-26-1).**

47. 100. Vergara. para reemplazar en el epígrafe “Al trabajo decente” por el siguiente: “de las y los trabajadores”. **(Por rechazada).**

48. 101. Rivera. Para suprimir en el epígrafe del artículo 9, la palabra “decente”. **(Por rechazada).**

49. 101bis. Vergara. Para reemplazar en el inciso primero ‘protección del trabajo’ por “protección de toda persona que desempeñe un trabajo”. **(Por rechazada).**

50. 98. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva al artículo 9 inciso segundo para un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre determinación. El trabajo humano es la fuente de toda actividad económica, así como el de la subsistencia personal y familiar, de las cuales emana su importancia y dignidad bajo condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, incluyendo el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital, garantía de indemnidad, la protección de la maternidad, corresponsabilidad parental, a la limitación razonable de la jornada de trabajo, y el derecho a un salario justo y suficiente que asegure al trabajador o trabajadora y a su familia un bienestar acorde con la dignidad humana y el derecho a una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan.”. **(Por rechazada).**

51. 105. Rivera. Para sustituir en el inciso segundo del artículo 9, la oración “La Constitución asegura el derecho al trabajo decente”, por la siguiente: “Toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre determinación. El trabajo humano es la fuente de toda actividad económica, así como el de la subsistencia personal y familiar. Reconocemos la primacía del trabajo sobre el capital”. **(10-20-3).**

52. 108. Vergara. Para reemplazar después de: “la Constitución asegura el derecho al trabajo decente” por lo siguiente: “Por lo que se garantiza la remuneración igualitaria y justa, la protección de las y los trabajadores, condiciones dignas de seguridad e higiene.”. **(5-28-0).**

53. 109. Grandón et al. Para sustituir el inciso tercero del artículo 9 en el siguiente tenor:

“La Constitución garantiza el reconocimiento y protección del trabajo de cuidados.”. **(13-18-2).**

54. 110. Rivera. Para agregar un nuevo inciso al artículo 9, que antecede al inciso que inicia con la oración “Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración.”, que señale lo siguiente:

“El Estado deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y seguridad en el trabajo rural, el acceso a un sistema previsional, normas de sindicalización y mecanismos de fiscalización que sean especiales, en reconocimiento y consideración a las necesidades y condiciones particulares del trabajo rural.”. **(11-20-2).**

55. 120. Labraña y Celedón. Indicación aditiva al artículo 9 inciso quinto para agregar la frase:

“Reconocemos la primacía del trabajo sobre el capital, que es, en definitiva, trabajo acumulado, por lo que la economía está al servicio de la persona humana.”. **(11-16-6).**

56. 114. Rivera. Para agregar el siguiente nuevo inciso final, al artículo 9:

“El derecho al trabajo está garantizado por la función social del derecho de Propiedad de los medios de producción. El Estado deberá aplicar en la sociedad una política económica, de salud, social y cultural en orden a aprovechar las aptitudes físicas, intelectuales y creativas de todo el pueblo para desarrollar de manera sostenida, en conjunto con el crecimiento de la producción, el pleno empleo, el elevamiento del nivel de vida, la paulatina reducción de la jornada de trabajo, especialmente en las labores pesadas o riesgosas, la superación de las diferencias entre el trabajo manual e intelectual y el de la ciudad y el campo.”. **(8-22-3).**

57. 116. Linconao. Para agregar al artículo 9 un nuevo inciso:

“El Estado garantiza el derecho de los pueblos y naciones indígenas, individual y colectivamente, a no ser discriminados en todas las dimensiones del derecho al trabajo y a la protección y pleno goce de sus derechos laborales y de seguridad social, evitando toda forma de explotación, discriminación o acoso. Asimismo, el Estado reconoce, fomenta y protege sus organizaciones económicas, actividades tradicionales, oficios tradicionales, sistemas de producción y comercio, con pleno respeto a la autodeterminación y el buen vivir de cada pueblo.”. **(14-15-4).**



58. 118. Grandón et al. Para añadir un nuevo inciso al artículo 9 en el siguiente tenor:

“Será obligación del Estado generar políticas de inclusión de personas trans, no binarias y disidencias al mundo laboral público y privado.”. **(15-11-7)**.

59. 121. Labraña y Celedón. Indicación aditiva que crea un nuevo inciso al artículo 9 en el siguiente tenor:

“El Estado deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y seguridad en el trabajo rural, el acceso a un sistema previsional, normas de sindicalización y mecanismos de fiscalización que sean especiales, en reconocimiento y consideración a las necesidades y condiciones particulares del trabajo rural.”. **(12-15-6)**.

AL ARTÍCULO 10

60. 124. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“El Estado reconoce la autonomía de los sindicatos y de cualquier otro grupo intermedio para poder cumplir con sus propios específicos.

El Estado reconoce la autonomía de las empresas privadas.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas.”. **(8-23-0)**.

61. 125. Grandón et al. Para sustituir el artículo 10 por el siguiente:

“La Constitución asegura a los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales el derecho de participar en las decisiones y ganancias de la empresa. La ley regulará los mecanismos a través de los cuales se ejercerá este derecho.”. **(12-19-1)**.

62. 127. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva del contenido del artículo 10 en el siguiente tenor:

“La Constitución asegura a los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales el derecho de participar en las decisiones de la empresa. La ley establecerá el procedimiento y forma de designación del o los representantes de los trabajadores con una participación de al menos un veinte por ciento del directorio respectivo.” **(Por rechazada)**.

63. 130. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, independientemente si están o no sindicalizados, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Con todo, la negociación colectiva no afectará el derecho de cada trabajador para acordar individualmente sus condiciones de trabajo, en razón de su idoneidad y/o capacidad personal.”. **(Por rechazada)**.

ARTICULOS NUEVOS

64. 131. Barceló. Para agregar después del artículo 10 un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Art XX: El Estado debe garantizar el derecho a la seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Todos los trabajadores y trabajadoras deben tener garantizada la protección frente a las contingencias que surgen a partir de los riesgos laborales, bajo los principios de solidaridad, universalidad, suficiencia, unidad y participación. La administración y cobertura de las prestaciones del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales será responsabilidad del Estado y también de entidades privadas sin fines de lucro, cuyo principal fin será la administración del referido seguro y el otorgamiento de prestaciones de salud común a un valor que solo considere la reposición o reembolso del gasto respectivo, sin involucrar utilidad. Estas últimas serán fiscalizadas por el Estado.”. **(11-20-2)**.

65. 132. Barceló. Para agregar después del artículo 10 un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Art XXX: Todas las personas deben tener garantizada protección frente a las contingencias que surgen a partir de los riesgos laborales, así como tener acceso a los regímenes de prestaciones familiares, subsidios de cesantía, subsidios por incapacidad laboral y otros complementarios o adicionales que establezca la ley, todo ello bajo los principios de solidaridad, universalidad, suficiencia, unidad y participación. La cobertura de las prestaciones antes indicadas será de responsabilidad del Estado y su administración o gestión se podrá realizar a través de entidades sin fines de lucro, que sean reguladas y fiscalizadas por el mismo Estado.”. **(13-18-2)**.

AL ARTICULO 11 (suprimido)

66. 135. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“Cualquier subsidio estatal destinado al cuidado, podrá ser entregado a las personas que los ciudadanos estimen mejor capacitadas para el desarrollo de esa función.”. **(Por rechazada)**.



AL ARTICULO 12 (suprimido)

67. 137. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“Cualquier subsidio estatal destinado al cuidado, podrá ser entregado a las personas que los ciudadanos estimen mejor capacitadas para el desarrollo de esa función.”. **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 13

68. 140. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“Cualquier subsidio estatal destinado al cuidado, podrá ser entregado a las personas que los ciudadanos estimen mejor capacitadas para el desarrollo de esa función.”. **(7-26-0).**

AL ARTÍCULO 14

69. 143. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“Cualquier subsidio estatal destinado al cuidado, podrá ser entregado a las personas que los ciudadanos estimen mejor capacitadas para el desarrollo de esa función.”. **(7-26-0).**

70. 144. Chahín y Barceló. Agréguese al artículo 14 en su inciso final la expresión “y de seguridad social”, luego de la palabra “laborales”. **(13-20-0).**

71. 145. Rivera. Para agregar nuevo inciso final al artículo 14, por el siguiente:

“Se creará la Red nacional de Labores Sociales Domésticas, garantizada por el Estado. La Red Nacional de Labores Sociales Domésticas deberá garantizar la construcción de salas cunas y guarderías infantiles; lavanderías colectivas y construcción de comedores populares en todas las poblaciones y comunas del país; ampliación de funcionamiento y raciones de los casinos de los establecimientos educativos de cada comuna, asequible a todos los miembros de la sociedad, bajo la planificación de un menú mínimo centralizado, que contribuya al desarrollo saludable de la población. Ración obligatoria, comedor y casas de acogida transitoria para la mujer y sus hijos que se desempeñan en el trabajo agrícola temporal.”. **(11-18-4).**

AL ARTÍCULO 15

72. 147. Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 15 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 15. El derecho de los sindicatos a la negociación colectiva, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.

El derecho a la huelga dentro de la negociación colectiva de conformidad a la ley. No podrán declararse en huelga quienes trabajen en instituciones, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud y al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las instituciones cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso y las eventuales sanciones que acarrearía su incumplimiento.”. **(4-22-7).**

73. 149. Cantuarias et al. Suprímase en el inciso primero la frase “, tanto del sector público como del privado,”. **(5-27-1).**

74. 150. Cantuarias et al. Suprímase en el inciso primero la frase “Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.”. **(5-28-0).**

75. 151. Cantuarias et al. Sustitúyase el inciso segundo por uno del siguiente tenor:

“Los trabajadores, en forma individual o asociada, serán titulares del derecho a la negociación colectiva y huelga pacífica. El ejercicio de los derechos laborales no podrá nunca supeditarse a la pertenencia o no a una organización sindical.”. **(6-27-0).**

76. 154. Cantuarias et al. Sustitúyase el inciso tercero por uno del siguiente tenor:

“La libertad de para sindicarse comprende la autonomía de estas organizaciones para el cumplimiento de sus fines con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.”. **(5-27-1).**

77. 158. Rivera. Para agregar al inciso cuarto del artículo 15, luego de la palabra “(...) ley.”, la siguiente oración:

“Las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar en la vida pública y política del país, en las instancias que correspondan sea a nivel local, regional, nacional e internacional. Las y los dirigentes sindicales podrán optar libremente a cargos de elección popular.”. **(13-19-1).**

78. 159. Cantuarias et al. Sustitúyase el inciso quinto por uno del siguiente tenor:

“La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, independientemente si están o no sindicalizados, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Con todo, la negociación colectiva no afectará el derecho de cada trabajador para acordar individualmente sus condiciones de trabajo, en razón de su idoneidad y/o capacidad personal.”. **(5-23-1)**.

79. 160. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva al artículo 15, sustituir inciso quinto por uno del siguiente tenor;

“La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación. La que podrá comprender por empresa, interempresas, grupos económicos, por ramas de actividad económica, por territorios o nivel nacional e internacional, si así procediese.”. **(9-21-2)**.

80. 163. Cantuarias et al. Sustitúyase el inciso quinto por uno del siguiente tenor:

“La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, independientemente si están o no sindicalizados, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Con todo, la negociación colectiva no afectará el derecho de cada trabajador para acordar individualmente sus condiciones de trabajo, en razón de su idoneidad y/o capacidad personal.”. **(8-25-0)**.

81. 166. Cantuarias et al. Sustitúyase el inciso antepenúltimo por uno del siguiente tenor:

“Todos los trabajadores tendrán derecho a la huelga pacífica como parte de la negociación colectiva, en conformidad a lo señalado en la ley. No podrán declararse en huelga ni tampoco paralizar sus funciones los funcionarios y demás trabajadores del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a esta prohibición.”. **(5-26-2)**.

82. 169. Grandón et al. Para añadir al inciso séptimo del artículo 15 en su parte final, la siguiente frase: “El legislador no podrá prohibir la huelga.”. **(11-18-4)**.

83. 171. Cantuarias et al. Sustitúyase el inciso penúltimo por uno del siguiente tenor:

“No podrán declararse en huelga las personas que presten servicios de utilidad pública cuya paralización pueda afectar la vida y trabajo de las personas.”. **(7-24-2)**.

84. 172. Miranda. Para reemplazar íntegramente el texto del inciso 8° del artículo 15°, por uno del siguiente tenor:

“La huelga podrá ser limitada únicamente para atender las necesidades o servicios esenciales de la comunidad que pudieran afectar la vida, salud o seguridad de la población. La ley definirá las condiciones de prestación de los servicios esenciales durante una huelga, así como las provisiones mínimas necesarias para atender dichos servicios.”. **(10-11-12)**.

85. 173. Rebolledo y Ossandón. Para sustituir en inciso penúltimo del artículo la expresión “El legislador no podrá prohibir la huelga.”, por la siguiente: “El ejercicio del derecho a huelga deberá llevarse a cabo cumpliendo siempre con los requisitos y la forma dispuesta en la ley.”. **(9-19-5)**.

86. 175. Rivera. También Labraña y Celedón. Para suprimir en el inciso octavo en el artículo 15, lo siguiente: “(...) La ley sólo podrá establecer limitaciones a la huelga para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población.”. **(10-19-4)**.

87. 176. Rivera. También Labraña y Celedón. Para suprimir la totalidad del inciso noveno del artículo 15. **(6-26-1)**.

88. 177. Rivera. Para agregar un nuevo inciso final al artículo 15:

“Las empresas condenadas por prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales de trabajadores no podrán contratar con el estado”. **(13-13-5)**.

89. 178. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Tampoco podrán declararse en huelga los funcionarios de la Administración del Estado y de las Municipalidades.”. **(6-23-2)**.

90. 179. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los derechos laborales de los trabajadores podrán ser ejercidos por estos sin que sea necesaria la pertenencia a una organización sindical.”. **(8-24-0)**.



91. 180. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado reconoce a los sindicatos y a todo otro grupo intermedio a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad.”. **(7-25-1)**.

92. 181. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado reconoce la autonomía de los sindicatos y de cualquier otro grupo intermedio para poder cumplir con sus propios específicos.”. **(7-24-1)**.

93. 182. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La negociación colectiva es un derecho de los trabajadores”. **(8-23-2)**.

94. 183. Labraña y Celedón. Indicación aditiva al artículo 15 que crea un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las empresas condenadas por prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales de trabajadores no podrán contratar con el estado ni usar subsidios o beneficios con cargo a fondos públicos. La ley determinará las condiciones de aplicación de este principio.”. **(10-9-12)**.

95. 184. Labraña y Celedón. Indicación aditiva del artículo 15 que crea un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las organizaciones sindicales, en cumplimiento de sus fines, tendrán derecho a participar en la vida pública y política del país, en las instancias que correspondan sea a nivel local, regional, nacional e internacional. Las y los dirigentes sindicales podrán optar libremente a cargos de elección popular.”. **(15-12-6)**.

ARTICULO NUEVO

96. 185. Harboe y Barceló. Para agregar después del artículo 15 un artículo nuevo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.”. **(10-17-6)**.

AL ARTÍCULO 16

97. 187. Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 16 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 16. El derecho a la seguridad social.

El Estado garantiza el acceso de todas las personas al goce de prestaciones necesarias para llevar una vida digna en el caso de jubilación, retiro o pérdida de trabajo, sean aquellas provistas por instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias, siempre en proporción a los ingresos de los afiliados.

El Estado supervigilará el ejercicio del derecho a la seguridad social, así como el adecuado funcionamiento de las instituciones prestatarias.

Cada persona tendrá el derecho a elegir, sin ser discriminación negativamente, el sistema de pensiones al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.”. **(8-18-7)**.

98. 189. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“Derecho a la seguridad social. El Estado garantiza el acceso universal a prestaciones mínimas establecidas por ley, éstas podrán ser otorgadas a través de instituciones públicas o privadas. Las personas siempre tendrán el derecho a elegir la institución que las otorgue.

En cualquier caso, el sistema de previsión deberá, al menos, resguardar a las personas contra las contingencias de vejez, invalidez o muerte, enfermedad y embarazo, seguridad y salud en el trabajo y el desempleo en los términos que determine la ley.

La afiliación y cotización al sistema de previsión será obligatoria para todos los trabajadores.

El Estado tendrá la obligación de vigilar el adecuado ejercicio de este derecho, así como de garantizar la propiedad de las personas sobre sus ahorros y la libertad de las personas para elegir la institución que otorgue las prestaciones derivadas de este derecho.”. **(8-25-0)**.

99. 192. Chahín y Barceló. Agréguese al artículo 16 inciso primero, la palabra “sostenible”, luego de la palabra “financiamiento”. **(Por rechazada)**.

100. 196. Rivera. Para sustituir el inciso tercero del Artículo 16, por el siguiente inciso:

“La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado en su mayoría por representantes electos entre



las y los trabajadores activos y pensionados y, en forma minoritaria, por representantes del Estado.”. **(10-18-5).**

101. 198. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva del inciso tercero del artículo 16, sustituir por uno del siguiente tenor:

“La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empleadores y los trabajadores.”. **(Por rechazada).**

102. 200. Chahín y Barceló. Agréguese al artículo 16 inciso tercero, luego del punto, la expresión “La ley podrá autorizar la participación de cuerpos intermedios en la gestión de determinados regímenes de protección social, todo bajo control y supervigilancia del Estado.”. **(Por rechazada).**

103. 203. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva del inciso cuarto del artículo 16, sustituir por uno del siguiente tenor:

“El nuevo Sistema de Seguridad Social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca, entregue prestaciones definidas, de manera tal, proporcione certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con el principio de la suficiencia.”. **(Por rechazada).**

104. 204. Chahín y Barceló. Reemplácese en el artículo 16 inciso final la expresión “que la vejez no esté nunca sujeta” por “que éstas no estén nunca sujetas”. **(Por rechazada).**

105. 205. Cantuarias et al. Añadir un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las personas tendrán siempre la libertad de elegir la institución que administrará sus ahorros previsionales.”. **(9-20-4).**

106. 206. Cantuarias et al. Añadir un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales y podrán heredarlos a las personas establecidas en la ley, salvo manifestación de voluntad expresa en contrario.”. **(9-15-9).**

107. 207. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores.”. **(11-13-9).**

108. 208. Grandón et al. Para añadir un nuevo inciso al artículo 16, en el siguiente tenor:

“La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos y autónomos. Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley.”. **(13-16-4).**

109. 211. Labraña y Celedón. Indicación aditiva al artículo 16 que crea un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empleadores y los trabajadores.”. **(12-15-6).**

110. 215. Vergara. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Toda política, gestión y administración de seguridad y previsión social corresponderá al Estado.”. **(7-20-6).**

ARTÍCULO NUEVO TRANSITORIO

111. 216. Labraña y Celedón. Indicación aditiva al artículo 16 que crea un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor:

“Dentro del plazo de un año, una vez aprobada la nueva Constitución Política, deberá adecuarse la actual legislación sobre seguridad social a las normas que establece el Artículo XX de la Constitución.

Expirado dicho plazo, asumirá de pleno derecho la recaudación, pago y gestión de los ahorros acumulados en los fondos de pensiones, el Instituto de Previsión Social, que se regirá hasta tanto se dicten las leyes que desarrollen la garantía constitucional del Artículo XX.

Las administradoras de fondos de pensiones deberán hacer traspaso de los fondos o documentos que los respalden y los registros individuales de cada afiliado activo o pensionado al referido Instituto dentro del plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta norma constitucional. Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones supervigilar al Instituto de Previsión Social en todo este proceso.”. **(7-23-2).**

AL ARTÍCULO 17(SUPRIMIDO)



112. 218. Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 17 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 17. El Estado reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la Seguridad Social, constituida como servicio público que otorga prestaciones contributivas y no contributivas, que aseguran cobertura decorosa y digna ante las contingencias sociales, que, entre las prestaciones que regule la ley, debe incluir las de asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, cesantía, vejez, invalidez, sobrevivencia, maternidad, apoyos y cuidados familiares, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Al Estado, como responsable del servicio público, corresponde proveer de un piso de protección social suficiente a toda la población.

El legislador definirá y regulará las cotizaciones tanto de empleadores como trabajadores, los aportes del Estado, la gestión y la participación social, velando por el desarrollo de la seguridad social conforme sus principios, en particular, la universalidad y la solidaridad, cuidando la sostenibilidad de los distintos regímenes que la integran.”. **(Por rechazada).**

113. 221. Cantuarias et al. Suprímase en el inciso primero la siguiente oración: “, fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación y oportunidad.”.

114. 222. Chahín y Barceló. Agréguese en el artículo 17 inciso primero la expresión “y sostenibilidad social y financiera” luego de la palabra “oportunidad”. **(Por rechazada).**

115. 223. Cantuarias et al. Sustitúyase el inciso segundo por uno del siguiente tenor:

“La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.”.

116. 225. Cantuarias et al. Sustitúyase el inciso tercero por uno del siguiente tenor:

“Las personas tendrán siempre el derecho a elegir la institución que administrará sus ahorros, sean estas públicas o privadas.”.

117. 227. Labraña y Celedón. Indicación aditiva al artículo 17 en su inciso tercero después de la última palabra “sistema” agregar la frase “siendo inembargables e inapropiables.”. **(Por rechazada).**

118. 228. Cantuarias et al. Suprímase el inciso final.

119. 229. Chahín y Barceló. Agréguese en el artículo 17 inciso final, entre la coma y la expresión “en las formas que señale la ley”, la expresión “así como en la gestión por delegación de prestaciones”. **(Por rechazada).**

120. 230. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores.”. **(Por rechazada).**

121. 231. Cantuarias et al. Añadir un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las personas tendrán siempre la libertad de elegir la institución que administrará sus ahorros previsionales.”. **(Por rechazada).**

122. 232. Cantuarias et al. Añadir un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales y podrán heredarlos a las personas establecidas en la ley, salvo manifestación de voluntad expresa en contrario.

En caso alguno los trabajadores podrán ser obligados a entregar sus cotizaciones a un sistema o fondo común, pudiendo siempre optar por conservar la propiedad de sus ahorros previsionales.”. **(Por rechazada).**

123. 233. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado no podrá tener el monopolio de la administración de los ahorros de los trabajadores.”. **(Por rechazada).**

124. 234. Vergara. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Toda política, gestión y administración de seguridad y previsión social corresponderá al Estado.”. **(Por rechazada).**

ARTÍCULO NUEVO

125. 235. Moreno. Añadir un artículo al final del apartado referente a seguridad social en el siguiente tenor:



“Artículo XX. El derecho de propiedad de las personas sobre sus fondos de pensiones es inviolable. El Estado no podrá nacionalizar, expropiar ni confiscar los fondos de pensiones de las personas. Los remanentes de los fondos de pensiones se podrán heredar en su totalidad en los términos que establezca la ley.”. **(8-20-5)**

AL ARTÍCULO 18

126. 237. Rebolledo. Para sustituir los artículos 18, 19, 20, primero transitorio, segundo transitorio y tercero transitorio por un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo X-. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud mental y física. Es deber del Estado garantizar acciones de prevención, promoción, protección y recuperación de la salud, y de rehabilitación del individuo, que contribuyan a la máxima satisfacción de este derecho, considerando las atenciones especiales necesarias para las personas que lo requieran.

El Estado deberá asegurar, en colaboración con la sociedad civil, que toda persona obtenga el acceso a prestaciones de salud conforme a los principios de equidad, atención oportuna, universalidad, solidaridad, eficacia y libre elección, en la forma establecida en esta Constitución y las leyes.

Los órganos de la administración del Estado fomentarán la educación sanitaria, el deporte, los hábitos de vida saludable y el descanso necesario.”. **(9-18-6).**

127. 238. Labraña y Celedón. Sustituir los artículos 18, 19 y 20 por el siguiente texto:

“Derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano y social. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral.

El Estado deberá establecer un Sistema Nacional de Salud y garantizar las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población.

El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación.

El Sistema Nacional de Salud desarrollará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión, entre otras que la Ley defina. La atención primaria constituirá la base de este sistema y se promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo.

Corresponderá al Estado la función de rectoría del sistema de salud y la Ley establecerá la modalidad en que diferentes actores participarán en las demás funciones del sistema, siempre resguardando su carácter público.

El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de Contribuciones Sociales a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema.”. **(10-19-4).**

128. 239. Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 18 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 18. El derecho a la protección de la salud.

El Estado garantiza el libre e igualitario acceso a la promoción, protección y recuperación de la salud y a la rehabilitación del individuo.

Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud.

Es deber preferente del Estado garantizar el funcionamiento, y la calidad de un sistema público de salud, apoyado parcialmente por cotizaciones obligatorias proporcionales a los ingresos de los usuarios. La ejecución de acciones de salud que se prestan por instituciones previsionales será regulada por la ley, la que garantizará la oportunidad y calidad de tales acciones, así como las obligaciones que puedan establecerse para cubrir tales prestaciones.

Cada persona tendrá el derecho a elegir, sin ser discriminado negativamente, el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado.”. **(5-21-7).**

129. 240. Cantuarias et al. Sustituir el artículo por el siguiente:

“El derecho al acceso a las prestaciones de salud.

Corresponderá al Estado la regulación de las acciones relacionadas con la salud. A través de la ley se podrán establecer la forma y condiciones en que éstas se realicen, debiéndose fomentar la competencia y transparencia en el sector, ya sean instituciones públicas o privadas. El Estado no podrá establecer en su trato respecto de ellas diferencias arbitrarias.



A través de la ley se podrán establecer cotizaciones obligatorias para el financiamiento de la salud de la población, pudiendo cada cotizante elegir libremente por el sistema de salud al cual adscribirse y destinar sus recursos, sea este estatal o privado. Es deber del Estado garantizar la libertad de elección, debiendo apoyar a todas las personas equitativamente, considerando su necesidad, en la forma establecida por la ley.

También se reconoce la libertad de las personas sobre los tratamientos médicos a los que se deba someter. Sólo la ley podrá establecer límites u obligaciones en estas materias, respetando siempre la dignidad de la persona humana.

La acción de los órganos estatales es complementaria a la responsabilidad personal y a la iniciativa privada, siendo deber del Estado fomentar la colaboración público-privada, con criterios de eficiencia en el uso de recursos, oportunidad de la prestación y resguardo de los recursos públicos.

La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud del derecho aquí consagrado y la forma en que se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador.”. **(8-24-1).**

130. 241. Madriaga et al. Para sustituir artículo 18 por:

“ARTICULO x.- DEL DERECHO A LA SALUD:

“El derecho a la Salud, es un derecho humano, fundamental y social, que tiene por fin el disfrute del más alto nivel de salud y bienestar físico, mental, espiritual, sexual, reproductivo y socio cultural de las personas, comunidades y pueblos, en equilibrio con el medio ambiente.

La expresión Salud, se entiende como una construcción colectiva, resultado de las Determinantes sociales, políticas, culturales, educacionales, económicas y de las interrelaciones de las personas, comunidades y pueblos, con su entorno ambiental y ecológico.”. **(7-22-4).**

131. 242. Henríquez et al. Para sustituir el inciso primero del artículo 18, por el siguiente:

“Artículo 18.- Derecho a la salud integral. La Constitución garantiza a todas las personas, comunidades y pueblos el derecho a la salud integral y al más alto nivel de bienestar físico y mental.”. **(11-12-10).**

132. 246. Henríquez et al. Para sustituir el inciso segundo del artículo 18, por el siguiente:

“El Estado, deberá implementar un único Sistema Nacional de Salud y ejercer su rectoría mediante un trabajo intersectorial para la regulación, diseño, ejecución, supervisión, vigilancia, fiscalización y evaluación de las políticas sanitarias.”. **(13-15-5).**

133. 251. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso tercero, del siguiente tenor:

“El Estado deberá considerar en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales de salud de la población.”. **(11-15-6).**

134. 252. Henríquez et al. Para sustituir el actual inciso tercero, que pasa a ser cuarto, por el siguiente:

“El Sistema Nacional de Salud será integrado, evitando su segmentación y fragmentación. Este se regirá por los principios de equidad, universalidad, integralidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación.”. **(11-16-6).**

135. 253. Grandón et al. Para sustituir el inciso tercero por el siguiente:

“El Sistema Único de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación.” **(12-17-4)**

136. 256. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso cuarto del siguiente o a tenor:

“El Estado promoverá la participación social, comunitaria y vinculante en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo, incluyendo la educación en salud.”. **(15-13-5).**

137. 257. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso quinto el siguiente:

“El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, urgencias, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión, cuidados paliativos y de fin de vida. La atención primaria constituirá la base de este sistema.”. **(15-14-3).**

138. 258. Henríquez et al. Para sustituir el actual inciso cuarto, por el siguiente:

“El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales del Estado. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al



financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema.”. **(13-16-4).**

139. 264. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las prestaciones de servicios sanitarios deberán ser equitativas, efectivas, seguras y de calidad. Estas podrán ser efectuadas por instituciones u organizaciones públicas o privadas. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas. Los prestadores privados con fines de lucro no podrán recibir fondos públicos con excepción de los casos que establezca la ley, la cual deberá respetar los aranceles del Sistema Nacional de Salud.”. **(14 -3-6).**

140. 266. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado debe implementar un sistema de información en salud que facilite la integración del Sistema Nacional de Salud.”. **(14 -13- 6).**

141. 267. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado promoverá y participará de las instancias internacionales orientadas a fortalecer la salud global.”. **(12 -13-7).**

142. 268. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Es deber del Estado, sus órganos y autoridades, en el ámbito de sus competencias, respetar, promover y garantizar el derecho humano a la salud de los pueblos indígenas, con la participación y cooperación de los pueblos interesados.”. **(13-13-7).**

143. 270. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Cada persona podrá elegir contratar seguros complementarios de salud voluntarios de carácter público o privado.”. **(9-22-2).**

144. 271. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las cotizaciones de salud en ningún caso podrán ser consideradas como un impuesto.”. **(8 -23-2).**

145. 272. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El sistema de salud deberá garantizar el acceso a prestadores de salud públicos y privados de manera que las personas puedan siempre optar por unos u otros.”. **(7-19-7).**

146. 273. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado será el ejecutor preferente de las acciones de salud cuando no exista iniciativa privada que permita garantizar su ejecución, en la forma y condiciones que determine la ley.” **(7-26-0).**

147. 274. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Cada persona tiene derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea público o privado.”. **(10-21-2).**

148. 275. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las personas tienen el derecho a elegir su asegurador y su prestador de servicios salud.”. **(8-22-3).**

149. 276. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado no podrá prohibir la existencia seguros de salud voluntarios tanto públicos como privados.”. **(7 -24 -2).**

150. 277. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado tiene el deber de otorgar un cheque de salud a las personas que así lo requieran, para que ellas utilicen el subsidio en el establecimiento educacional de su preferencia, sea este público o privado.”. **(8-25-0).**

151. 280. Linconao. Para agregar al artículo 18 un nuevo inciso:

“Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la salud a través de un sistema de salud intercultural y con pertinencia territorial, que promueve el desarrollo y la progresiva administración de sus instituciones de salud. Igualmente, tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener y desarrollar sus sistemas y prácticas de salud y, al reconocimiento de sus agentes de salud tradicionales. El Estado reconoce y garantiza los sistemas de salud de los pueblos y naciones indígenas y, protege especialmente los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas, así como la conservación de los elementos o componentes naturales en que se sustentan.”. **(14-11-5).**

152. 282. Grandón et al. Para añadir un inciso nuevo al artículo 18 en el siguiente tenor:



“Podrán participar del Sistema Nacional de Salud los prestadores privados que no persigan fines de lucro y cuyo giro único sea la provisión de servicios de salud. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento.”. **(12-16-5).**

153. 283. Grandón et al. Para añadir un inciso nuevo al artículo 18 en el siguiente tenor:

“No podrán destinarse recursos públicos para auxilio, pagos o subvenciones a prestadores de salud privados que operen fuera del sistema nacional de salud.”. **(13-14-4).**

154. 287. Vergara. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La salud será de acceso universal, buscando acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión y cuidados paliativos. El Estado debe ser un actor preponderante, asegurando los recursos suficientes garantizando el Derecho a la Salud Integral.”. **(9-20-4).**

ARTÍCULO NUEVO

155. 289. Labraña y Celedón. Para agregar un nuevo artículo xx:

“La asignación de recursos estatales para Salud Mental no podrá en ningún caso ser inferior al 6% del Presupuesto Anual del Ministerio de Salud.”. **(9 -19 -5).**

AL ARTÍCULO 19

156. 291. Cantuarias et al. Sustituir el artículo 19 por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la salud integral.

Es deber del Estado promover el igualitario y libre acceso a la salud, a través de acciones de promoción, prevención o recuperación de salud, de rehabilitación de la persona o cuidados paliativos en las postrimerías de la vida.

El Estado, a través de sus instituciones sanitarias, es el ejecutor preferente de las acciones de salud con enfoque integral cuando no exista iniciativa privada que permita garantizar su ejecución, en la forma y condiciones que determine la ley.

Asimismo, implementará las medidas necesarias para que las personas puedan elegir sus prestadores de salud, sean éstos públicos o privados.

Las acciones de salud serán coordinadas y supervisadas por el Estado para su adecuado acceso y ejecución, sean éstas efectuadas por entidades públicas o privadas.

Los recursos públicos y privados para la prestación de acciones de salud podrán ser integrados o coordinados por parte del Estado. Una ley establecerá las bases para efectuar la integración, la que considerará, a lo menos, las condiciones sanitarias que autorizan la aplicación de esta medida, los problemas de salud considerados, la forma de coordinación y el procedimiento de entrega de la correspondiente contraprestación a quienes efectúen las prestaciones.

Deberá existir un seguro de salud para todos los habitantes de la República. Las personas podrán elegir el tipo de administrador de éste y de seguros complementarios voluntarios, pudiendo ambos ser públicos o privados.”. **(Por rechazada).**

157. 292. Madriaga et al. Para sustituir el art 19 :

“ARTICULO xx.- DEL SISTEMA ÚNICO Y UNIVERSAL DE SALUD:

“Es deber prioritario del Estado respetar, promover y garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. A tal efecto, el Estado deberá garantizar la salud en todas las políticas y establecer un Sistema Único y Universal de Salud, regido por los principios de la Seguridad Social: Universalidad, Solidaridad, Unidad, Igualdad, Evolución progresiva de derechos, concordancia de la Seguridad Social con la realidad económica, Participación, Obligatoriedad, Integralidad, Inmediatez y Asignación preferente de recursos.

El Sistema Único y Universal de Salud, es de carácter Público, centrado en la Atención Primaria e integrado en redes territoriales, incluyente y respetuoso de distintos modelos sanitarios, con acciones de salud libres de pago, con una organización adecuada a la realidad y necesidades de cada territorio, basado en las características de su población y comunidades, debidamente dotado de recursos conforme a la realidad territorial. El Sistema Único y Universal de Salud, además garantiza, mediante instituciones, normas jurídicas, políticas sociales y económicas, la calidad e integralidad de las funciones esenciales de salud pública en todo el territorio nacional.

El Estado garantiza un modelo de financiamiento del Sistema Único y Universal de Salud sustentado en impuestos generales y específicos y, por ley podrá establecer contribuciones sociales. Todo financiamiento estará basado en principios de solidaridad, equidad y progresividad.



En el Sistema Único y Universal de Salud también podrán participar prestadores que sean personas naturales o jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, cuyo giro único sea la provisión de servicios de salud. Serán reguladas por el Sistema Único y Universal de Salud, en su ejercicio sanitario y financiero, bajo las mismas reglas que las instituciones públicas que lo integran, mediante contrato o convenio de derecho público y percibirán retribución de aquél por sus servicios.

Los seguros privados de salud que existieren, no podrán ofrecer coberturas sustitutivas ni duplicadas, de las funciones propias del Sistema Único y Universal de Salud.

Está prohibido destinar recursos públicos para auxilio, pagos o subvenciones a prestadores de salud privados, que ejerzan fuera del Sistema Único y Universal de Salud. Sólo por excepción y mientras el Sistema no tenga la capacidad material de entregar determinadas acciones de salud, podrán contratarse servicios específicos. Para estos efectos, el Sistema Único y Universal de Salud mantendrá un arancel a pagar, el que se entenderá forma parte integrante del respectivo contrato.”. **(Por rechazada).**

158. 297. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Cada persona podrá elegir contratar seguros complementarios de salud voluntarios de carácter público o privado.”. **(Por rechazada).**

159. 298. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las cotizaciones de salud en ningún caso podrán ser consideradas como un impuesto.”. **(Por rechazada).**

160. 299. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Cada persona tiene derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea público o privado.”. **(Por rechazada).**

161. 300. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las personas tienen el derecho a elegir su asegurador y su prestador de servicios salud.”. **(Por rechazada).**

162. 301. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado no podrá prohibir la existencia seguros de salud voluntarios tanto públicos como privados.”. **(Por rechazada).**

163. 302. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado tiene el deber de otorgar un cheque de salud a las personas que así lo requieran, para que ellas utilicen el subsidio en el establecimiento educacional de su preferencia, sea este público o privado.”. **(Por rechazada).**

164. 303. Vergara. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La salud será de acceso universal, buscando acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión y cuidados paliativos. El Estado debe ser un actor preponderante, asegurando los recursos suficientes garantizando el Derecho a la Salud Integral.”. **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 20

165. 305. Cantuarias et al. Sustituir el artículo por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas: El derecho a la salud integral.

Es deber del Estado promover el igualitario y libre acceso a la salud, a través de acciones de promoción, prevención o recuperación de salud, de rehabilitación de la persona o cuidados paliativos en las postrimerías de la vida.

El Estado, a través de sus instituciones sanitarias, es el ejecutor preferente de las acciones de salud con enfoque integral cuando no exista iniciativa privada que permita garantizar su ejecución, en la forma y condiciones que determine la ley.

Asimismo, implementará las medidas necesarias para que las personas puedan elegir sus prestadores de salud, sean éstos públicos o privados.

Las acciones de salud serán coordinadas y supervisadas por el Estado para su adecuado acceso y ejecución, sean éstas efectuadas por entidades públicas o privadas.

Los recursos públicos y privados para la prestación de acciones de salud podrán ser integrados o coordinados por parte del Estado. Una ley establecerá las bases para efectuar la integración, la que considerará, a lo menos, las condiciones sanitarias que autorizan la aplicación de esta



medida, los problemas de salud considerados, la forma de coordinación y el procedimiento de entrega de la correspondiente contraprestación a quienes efectúen las prestaciones.

Deberá existir un seguro de salud para todos los habitantes de la República. Las personas podrán elegir el tipo de administrador de éste y de seguros complementarios voluntarios, pudiendo ambos ser públicos o privados.”. **(Por rechazada).**

166. 306. Henríquez et al. Para sustituir el inciso primero del artículo 20, por el siguiente:

“Derecho a la salud integral. La Constitución garantiza a todas las personas, comunidades y pueblos el derecho a la salud integral y al más alto nivel de bienestar físico y mental.”. **(Por rechazada).**

167. 307. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso segundo, del siguiente tenor:

“El Estado, deberá implementar un único Sistema Nacional de Salud y ejercer su rectoría mediante un trabajo intersectorial para la regulación, diseño, ejecución, supervisión, vigilancia, fiscalización y evaluación de las políticas sanitarias.”. **(Por rechazada).**

168. 308. Henríquez et al. Para sustituir el inciso segundo del artículo, por el siguiente:

“El Estado deberá considerar en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales de salud de la población.”. **(Por rechazada).**

169. 309. Henríquez et al. Para sustituir el inciso tercero por el siguiente:

“El Sistema Nacional de Salud será integrado, evitando su segmentación y fragmentación. Este se regirá por los principios de equidad, universalidad, integralidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación.”. **(Por rechazada).**

170. 314. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor:

“El Estado promoverá la participación social, comunitaria y vinculante en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo, incluyendo la educación en salud.”. **(Por rechazada).**

171. 315. Henríquez et al. Para sustituir el actual inciso cuarto, por el siguiente:

“El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, urgencias, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión, cuidados paliativos y de fin de vida. La atención primaria constituirá la base de este sistema.”. **(Por rechazada).**

172. 316. Henríquez et al. Para sustituir el actual inciso sexto por el siguiente:

“El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales del Estado. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema.”. **(Por rechazada).**

173. 318. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso séptimo del siguiente tenor:

“Podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Ninguna persona habrá de incurrir en un gasto catastrófico en salud.”. **(Por rechazada).**

174. 319. Henríquez et al. Para sustituir el actual inciso séptimo, por el siguiente:

“Las prestaciones de servicios sanitarios deberán ser equitativas, efectivas, seguras y de calidad. Estas podrán ser efectuadas por instituciones u organizaciones públicas o privadas. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas. Los prestadores privados con fines de lucro no podrán recibir fondos públicos con excepción de los casos que establezca la ley, la cual deberá respetar los aranceles del Sistema Nacional de Salud.”. **(Por rechazada).**

175. 321. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Es deber del Estado la planificación de la formación, distribución y capacitación permanente del personal sanitario.”. **(Por rechazada).**

176. 322. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado debe implementar un sistema de información en salud que facilite la integración del Sistema Nacional de Salud.”. **(Por rechazada).**

177. 323. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado promoverá y participará de las instancias internacionales orientadas a fortalecer la salud global.”. **(Por rechazada).**



178. 324. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Es deber del Estado, sus órganos y autoridades, en el ámbito de sus competencias, respetar, promover y garantizar el derecho humano a la salud de los pueblos indígenas, con la participación y cooperación de los pueblos interesados.”. **(Por rechazada).**

179. 325. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Cada persona podrá elegir contratar seguros complementarios de salud voluntarios de carácter público o privado.”. **(Por rechazada).**

180. 326. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las cotizaciones de salud en ningún caso podrán ser consideradas como un impuesto.”. **(Por rechazada).**

181. 327. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado será el ejecutor preferente de las acciones de salud cuando no exista iniciativa privada que permita garantizar su ejecución, en la forma y condiciones que determine la ley.”. **(Por rechazada).**

182. 328. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Cada persona tiene derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea público o privado.”. **(Por rechazada).**

183. 329. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las personas tienen el derecho a elegir su asegurador y su prestador de servicios salud.”. **(Por rechazada).**

184. 330. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado no podrá prohibir la existencia seguros de salud voluntarios tanto públicos como privados.”. **(Por rechazada).**

185. 331. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado tiene el deber de otorgar un cheque de salud a las personas que así lo requieran, para que ellas utilicen el subsidio en el establecimiento educacional de su preferencia, sea este público o privado.”. **(Por rechazada).**

186. 332. Vergara. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La salud será de acceso universal, buscando acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión y cuidados paliativos. El Estado debe ser un actor preponderante, asegurando los recursos suficientes garantizando el Derecho a la Salud Integral.”. **(Por rechazada)**

ARTÍCULO NUEVO

187. 333. Ossandón. Para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo X.- De la objeción de conciencia. Se consagra la objeción de conciencia a todo médico requerido para interrumpir el embarazo, a los facultativos que debieran asistirle en dicho procedimiento, y a cualquier miembro del personal de salud que le corresponda realizar funciones dentro del pabellón quirúrgico durante la intervención.

Se consagra también la objeción de conciencia institucional a todos los centros de salud privados en los términos que determine la ley.”. **(7-25-0).**

A LOS ARTÍCULOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIO (SUPRIMIDOS)

No hay.

ARTÍCULO NUEVO TRANSITORIO

188. 337. Ossandón. Para agregar un nuevo artículo transitorio del siguiente tenor:

“Artículo X.- En caso que la implementación del sistema único de salud no cumpla con los estándares de eficacia y calidad prescritos en la Constitución y las leyes, el legislador podrá declarar un estado de alerta sanitaria, con facultades amplias para reglamentar la participación de los privados y la sociedad civil en la provisión de servicios asociados a la salud.”. **(3-24-6).**

AL ARTÍCULO 21 (rechazado)

189. 339. Ossandón. Para sustituir los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 por el siguiente artículo nuevo:

“Artículo X. El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación.



La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tiene como propósito el desarrollo integral de la persona, su personalidad, el sentido de su dignidad, el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, así como, la construcción del bien común, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La educación brinda oportunidades educativas a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión.

La educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

Es deber del Estado garantizar un sistema educativo inclusivo en todos sus niveles. Todos los niños, niñas, adolescentes y adultos con necesidades educativas especiales y alta capacidad deberán contar con adecuaciones curriculares diferenciadas y apoyos socioafectivos que les permitan desarrollar su personalidad, sus aptitudes y sus capacidades mentales y físicas hasta el máximo de sus posibilidades.

La Constitución reconoce procesos educativos no formales, realizados por medio de programas sistemáticos, no necesariamente evaluados y que podrán ser reconocidos y verificados según lo dispuesto por la ley.

Para garantizar universalmente el derecho a la educación habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas organizado, financiado y administrado por el Estado, el que orientará el desarrollo del sistema educacional nacional.

La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y su contribución al pluralismo educativo.

La libertad de enseñanza comprende el derecho preferente de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir la educación de las personas a su cargo, de acuerdo con sus creencias, convicciones y cosmovisiones.

Comprende también el derecho de toda persona a crear y gestionar proyectos educativos, los que deberán cumplir las normas mínimas que el Estado prescriba en materia de enseñanza, así como la autonomía de los pueblos originarios para proveer educación, de conformidad a sus costumbres y cultura, resguardando los contenidos y requisitos mínimos establecidos por la ley.

Las disposiciones de este artículo no se interpretarán como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el primer inciso, y que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado en una ley orgánica constitucional.

El Estado reconoce el rol esencial de la labor docente, y velará por el perfeccionamiento del profesorado, a fin de promover el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes.

El Sistema de Educación Superior estará conformado por las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales reconocidos por el Estado. Todos ellos deberán guiarse por los principios que esta Constitución establece, de acuerdo a los requerimientos educacionales, productivos, científicos y culturales del país.

Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo a la ley.

La Constitución garantiza la libertad de cátedra y académica.

El Estado velará por el acceso a la educación superior de todos los estudiantes que cumplan los requisitos de admisión establecidos por la ley, y fomentará la no discriminación en el acceso.”. **(2-26-5).**

190. 340. Céspedes et al. Suprímase el artículo 21. **(13-14-6).**

191. 341. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“Los padres, a través de instituciones educacionales, tienen derecho a establecer, desarrollar, controlar y proyectar sus sistemas de educación en el marco de su propia comprensión y configuración del mundo. Es deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho.

Deberán adoptarse medidas apropiadas para garantizar que las nuevas generaciones sean educadas por los padres, familias e instituciones educacionales, en el marco de sus convicciones, intereses y conocimientos.”. **(7-22-4).**

192. 342. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva del inciso primero del artículo 21 en el siguiente tenor:



“El Estado garantiza a todas las personas el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, adecuada a sus necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística y respeto a los principios de autonomía progresiva e interés superior de niños, niñas y adolescentes.”. **(12-13-8)**.

193. 343. Linconao. Para sustituir en el artículo 21 las palabras “las primeras naciones” por lo siguiente: “Los Pueblos y Naciones Indígenas”. **(14-15-4)**.

194. 344. Labraña y Celedón. Indicación aditiva al artículo 21 que crea un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento de acuerdo a las normas que establezca la ley.”. **(Por rechazada)**.

AL ARTÍCULO 22 (suprimido)

195. 346. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“El Estado de Chile reconoce a los padres, y promueve la enseñanza y crianza de sus hijos, conforme a sus convicciones y principios.”. **(Por rechazada)**.

196. 347. Mamani et al. Para sustituir el artículo 22 por el siguiente:

“Los distintos programas educativos y el currículum nacional deben incluir la herencia cultural de los pueblos, las historias, los conocimientos, tecnologías y cosmovisiones, reconociendo además el rol de los educadores ancestrales indígenas, respetando su autonomía, dignidad y derechos laborales.”. **(Por rechazada)**.

197. 348. Vergara. Para agregar un nuevo inciso:

“La ley establecerá los marcos de reconocimiento profesional, que no limitará el ejercicio exclusivo de más comunidades educacionales ancestrales, y en los marcos curriculares pertinentes según realidad territorial.”. **(Por rechazada)**.

AL ARTÍCULO 23

198. 349. Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 23 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 23. El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Su acceso al sistema formal que la imparte en sus distintos niveles, serán garantizados por el Estado.

Los padres, o quienes tengan el cuidado personal de acuerdo a la ley, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio del derecho a la educación, disponiendo de los establecimientos educacionales necesarios para ello.

Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica.

La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. Igualmente gratuita será la educación superior impartida por los establecimientos estatales o en aquellos no estatales que disponga la ley. La ley podrá establecer el pago por los gastos administrativos que irroque cada estudiante, así como los subsidios a los que puedan postular para cumplir con tal obligación. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo y la calidad de la educación, la cultura, la investigación e innovación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación;

El Estado reconoce las distintas formas de educación de los pueblos indígenas en el marco del sistema general de educación dispuesto en este artículo.”. **(5-19-9)**.

199. 350. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“1. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la educación, la que tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona y del sentido de su dignidad.



2. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de criar y educar a sus hijos, o pupilos en su caso, conforme a sus convicciones morales o religiosas. El rol de los órganos del Estado en materia educacional es siempre de ayuda y apoyo, y nunca de sustitución del rol de los padres.
3. La educación de segundo nivel de transición, así como la educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.
4. El Estado debe respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos establecimientos educacionales distintos de las creados o dirigidos por el Estado, los que deberán cumplir las normas mínimas que el Estado prescriba en materia de enseñanza.
5. Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.
6. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación, y deber del Estado de fomentar y colaborar con dicho desarrollo.
7. Las Instituciones de educación superior reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país.
8. El Estado asegura asimismo la libertad de cátedra de quienes ejercen la enseñanza, respetando el ideario de los establecimientos educacionales en cualquiera de sus niveles.
9. Las personas naturales y jurídicas tienen el derecho de crear, mantener y desarrollar centros educacionales, conforme a la ley y a los tratados internacionales ratificados por Chile y actualmente vigentes.
10. El Estado, en respeto de la igualdad ante la ley, tiene el deber de garantizar y promover estos derechos, mediante un financiamiento no discriminatorio de la libre elección entre la educación estatal y privada.
11. Las disposiciones de este artículo no se interpretarán como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el primer inciso, y que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba la ley.
12. La determinación de todo lo relativo a las prestaciones exigibles en virtud de este derecho, así como la forma de financiamiento en el marco de lo establecido, corresponderá exclusivamente a la ley.”. **(8-23-2).**

200. 352. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva del artículo 23 en el siguiente tenor:

“El Estado garantiza a todas las personas el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, adecuada a sus necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística y respeto a los principios de autonomía progresiva e interés superior de niños, niñas y adolescentes.”. **(9-20-4).**

201. 354. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones.”. **(Por rechazada).**

202. 355. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El cuidado y la educación de los hijos son el derecho natural de los padres y el deber que les incumbe prioritariamente a ellos, debiendo el Estado velar por su cumplimiento. Lo anterior incluye el derecho de los padres a elegir escuelas distintas de las públicas para sus hijos. Asimismo, los ciudadanos y las instituciones tendrán derecho a establecer escuelas primarias y secundarias e instituciones de educación superior y de educación especial. Las condiciones para el establecimiento y el funcionamiento de las escuelas no públicas, la participación de los poderes públicos en su financiación, así como los principios de la supervisión educativa de tales escuelas y de las instituciones de educación especial, se establecerán por ley.”. **(Por rechazada).**

203. 356. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Le estará prohibido al Estado imponer un modelo único de educación.”. **(Por rechazada).**

204. 357. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado no podrá propagar tendencias político partidistas mediante el sistema de educación pública.”. **(Por rechazada).**



205. 358. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los establecimientos educacionales particulares tienen el derecho a desarrollar sus proyectos y programas educativos propios.”. **(Por rechazada).**

206. 359. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La conciencia de niños y niñas es inviolable. Se le prohíbe al Estado realizar cualquier acto de adoctrinamiento político.”. **(Por rechazada).**

207. 360. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado tiene el deber de otorgar un cheque de educación a las personas que así lo requieran, para que ellas utilicen el subsidio en el establecimiento educacional de su preferencia, sea este público o privado.”. **(Por rechazada).**

208. 361. Mamani et al. Para añadir como un nuevo inciso del artículo 23, el siguiente texto:

“El sistema educacional público será intercultural y plurilingüe, con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, respetando métodos educacionales propios de pueblos indígenas y tribales e identidad cultural, saberes y conocimientos ancestrales. Los distintos programas educativos y el currículum deben incluir la herencia cultural de los pueblos, las historias, los conocimientos, tecnologías y cosmovisiones, reconociendo además el rol de los educadores ancestrales indígenas, respetando su autonomía, dignidad y derechos laborales.”. **(Por rechazada).**

209. 363. Dayyana González. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El estado solo podrá financiar la educación que sea directamente administrada por los organismos del estado, dejando fuera cualquier financiamiento a privados en educación.”. **(Por rechazada).**

210. 364. Dayyana González. Para agregar un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La educación cívica, educación física y ambiental serán obligatoria en todos sus niveles.”. **(Por rechazada).**

211. 365. Linconao. Para agregar un nuevo inciso al artículo 23, del siguiente tenor:

“El sistema educativo garantiza la educación intercultural, plurilingüe y con pertinencia cultural y territorial en todos los niveles de formación, con educadores tradicionales de los territorios respectivos y sus métodos de enseñanza. Sin perjuicio, del derecho de los pueblos y naciones indígenas a mantener y desarrollar sus sistemas de educación, los cuales reconoce y promueve el Estado.”. **(Por rechazada).**

ARTÍCULO NUEVO

212. 366. Labraña y Celedón. Para agregar un nuevo Artículo xx

“En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico que propendan al desarrollo de la inteligencia afectiva, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.”. **(11-13-9).**

AL ARTÍCULO 24

213. 369. Vergara. Para agregar un nuevo inciso:

“La educación brinda oportunidades a quienes están en situación de discapacidad, riesgo de exclusión o posea un alto rendimiento.”. **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 25

214. 372. Miranda. Para reemplazar el inciso 1° del artículo 25, por uno del siguiente tenor:

“Integrarán un sistema nacional de educación pública aquellos establecimientos educacionales administrados por el Estado desde el nivel preescolar hasta la educación superior, estableciéndose subsistemas por niveles de enseñanza. Asimismo, integrarán este sistema las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Aquellos establecimientos privados, podrán colaborar con dicho sistema nacional en el marco del cumplimiento de las exigencias establecidas para su fundación y funcionamiento en este artículo.”. **(Por rechazada).**

215. 374. Miranda. Para incorporar un nuevo inciso luego del inciso 1° del artículo 25, del siguiente tenor:

“Las instituciones estatales de educación superior forman parte del Sistema de Educación Pública y son creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación, innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio, con la finalidad de contribuir al desarrollo sustentable e integral del país, al fortalecimiento de la democracia, al avance de las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura y a la formación de profesionales,



técnicos y graduados con espíritu crítico y reflexivo. El Estado deberá desarrollar y fortalecer a las instituciones públicas de educación superior.". **(Por rechazada).**

216. 375. Rivera. Para agregar el siguiente nuevo inciso final al artículo 25:

"El Estado no podrá financiar al sector privado de educación. Los establecimientos de educación particular subvencionada que declaren no poder operar sin financiamiento público, serán integrados al Sistema Público de Educación. En el proceso de integración de establecimientos particulares subvencionados al sistema público de educación, todo el personal de la comunidad educativa mantendrá sus derechos y obligaciones laborales emanados de sus contratos individuales o de los instrumentos colectivos de trabajo, propendiendo progresivamente a su integración en un estatuto único educativo.". **(Por rechazada).**

217. 376. Dayyana González. Para agregar un nuevo inciso al artículo 25 en el siguiente tenor:

"El Estado solo podrá financiar la educación que sea directamente administrada por sus órganos, dejando fuera cualquier financiamiento a instituciones privadas en materia educativa.". **(Por rechazada).**

218. 377. Labraña y Celedón. Indicación aditiva al artículo 25 que crea un nuevo inciso del siguiente tenor:

"El Estado garantiza a todas las personas el derecho a una educación integral de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género, adecuada a sus necesidades y características, con pertinencia territorial, cultural y lingüística y respeto a los principios de autonomía progresiva e interés superior de niños, niñas y adolescentes.". **(Por rechazada).**

219. 378. Labraña y Celedón. Indicación aditiva al artículo 25 que crea un nuevo inciso del siguiente tenor:

"Sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento de acuerdo a las normas que establezca la ley.". **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 26

220. 381. Miranda. Para añadir en el inciso segundo del artículo 26° luego de "Los establecimientos educacionales", la oración "de nivel parvulario, básico y medio". **(Por rechazada).**

221. 382. Miranda. Para reemplazar dentro del inciso tercero del artículo 26° la frase "Las instituciones reconocidas oficialmente" por las palabras "Estas instituciones". **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 27

222. 383. Vergara. Para suprimir el artículo. **(8-23-2).**

223. 384. Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 27 por uno del siguiente tenor:

"Artículo 27. La libertad de enseñanza es inherente al derecho a la educación, e incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, dentro de las normas que la Constitución y de la ley establecen y bajo la supervisión de las instancias ministeriales correspondientes.

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las dispuestas por la ley.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse por ninguna tendencia político partidista alguna ni de su difusión, sin perjuicio de la educación cívica, que debe impartirse obligatoriamente en todos los establecimientos educacionales de enseñanza media. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.

Una ley establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.". **(8-17-7).**

224. 385. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

"El Estado reconoce, respeta y protege la libertad de enseñanza, promoviendo el derecho de las personas e instituciones de crear, gestionar y solventar proyectos educativos autónomos que cumplan con las exigencias mínimas establecidas por la ley, sin establecer diferencias arbitrarias basadas, entre otras circunstancias, en la calidad confesional de los establecimientos. Será deber del Estado reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos, reconociendo también su autonomía. La libertad de enseñanza no tendrá otros límites que los impuestos por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la nación.". **(8-23-2).**

225. 387. Rebolledo. Para sustituir el artículo 27 por el siguiente:



“Artículo XX: Libertad de enseñanza.

Se reconoce la libertad de enseñanza tendiente a asegurar el pluralismo, la tolerancia y la innovación.

Esta libertad comprende el derecho de todas las personas de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales instituyendo sus propios proyectos educativos en la forma y con los estándares de calidad definidos por la ley, y el derecho de padres, madres y cuidadores de escoger libremente una educación adecuada a sus creencias y convicciones.

En el caso de las instituciones de educación superior, se reconocen el derecho a la autonomía académica y a la libertad de investigación.

La enseñanza reconocida oficialmente, en todos sus niveles, no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.”. **(Por rechazada).**

226. 388. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva del artículo 27, sustituir por uno del siguiente tenor:

“La educación básica y media es obligatoria. La educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboren en su realización, ajustándose a los planes y programas establecidos por las autoridades educacionales.”. **(Por rechazada)**

227. 389. Céspedes et al. Sustitúyase el artículo 27 por el siguiente:

“La Constitución reconoce la libertad de enseñanza, y es deber del Estado respetarla y garantizarla.

La libertad de enseñanza comprende el derecho preferente de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el proyecto educativo de las personas a su cargo. Este derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y de conformidad a la ley.

Comprende también la libertad para crear y gestionar proyectos educativos, los que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios y respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución y las demás condiciones que establezca la Ley.

Para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Educación y garantizar universalmente el derecho a la educación, el Estado podrá entregar financiamiento y apoyo a estos proyectos educativos, siempre que sean gratuitos y cumplan con los requisitos adicionales que la ley determinará. Estos proyectos serán parte de un sistema que el Estado deberá articular, resguardando su rol público.”. **(Por rechazada).**

228. 390. Miranda. Para modificar el epígrafe del artículo 27 por el siguiente: “Libertad de enseñanza, aprendizaje y autonomía de establecimientos educativos.”. **(Por rechazada).**

229. 392. Miranda. Para sustituir dentro del inciso 1° del artículo 27° el enunciado “Esta comprende la posibilidad de toda persona, madres, padres o cuidadores de elegir establecimientos educacionales”, por un enunciado del siguiente tenor: “La libertad de enseñanza comprende el derecho de padres, madres, apoderados y apoderadas a escoger los establecimientos educacionales, en conformidad a los mecanismos establecidos en la ley.”. **(Por rechazada).**

230. 395. Rivera. Para agregar al final del inciso segundo del Artículo 27, luego de “de acuerdo a la Ley”, la siguiente oración: “Los proyectos particulares de educación no podrán reemplazar la educación pública en los niveles parvulario, básico y medio. Todos los niños, niñas, jóvenes y adultos matriculados en tales niveles deben obligatoriamente pasar por el sistema público de educación.”. **(Por rechazada).**

231. 396. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones.”. **(Por rechazada).**

232. 397. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El cuidado y la educación de los hijos son el derecho natural de los padres y el deber que les incumbe prioritariamente a ellos, debiendo el Estado velar por su cumplimiento. Lo anterior incluye el derecho de los padres a elegir escuelas distintas de las públicas para sus hijos. Asimismo, los ciudadanos y las instituciones tendrán derecho a establecer escuelas primarias y secundarias e instituciones de educación superior y de educación especial. Las condiciones para el establecimiento y el funcionamiento de las escuelas no públicas, la participación de los poderes públicos en su financiación, así como los principios de la supervisión educativa de tales escuelas y de las instituciones de educación especial, se establecerán por ley.”. **(Por rechazada).**



233. 398. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Le estará prohibido al Estado imponer un modelo único de educación.”. **(Por rechazada).**

234. 399. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los establecimientos educacionales particulares tienen el derecho a desarrollar sus proyectos y programas educativos propios.”. **(Por rechazada).**

235. 400. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La conciencia de niños y niñas es inviolable. Se le prohíbe al Estado realizar cualquier acto de adoctrinamiento político.”. **(Por rechazada).**

236. 401. Miranda. Para incorporar un nuevo inciso al artículo 27, con un texto del siguiente tenor:

“Las universidades, públicas y privadas, gozarán de plena autonomía académica, económica y administrativa. La Constitución protege la libertad de cátedra, de investigación y creación, junto con la libre expresión de ideas y deliberación de quienes integran sus comunidades.”. **(Por rechazada).**

237. 402. Labraña y Celedón. Indicación aditiva al artículo 27 para crear un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento de acuerdo a las normas que establezca la ley.”. **(Por rechazada).**

238. 403. Vergara. Para añadir un nuevo inciso:

“El Estado debe ser un actor preponderante, asegurando los recursos suficientes que garantice el Derecho Universal a la Educación. El Estado reconoce la libertad de enseñanza.”. **(Por rechazada).**

ARTÍCULO NUEVO

239. 404. Labraña y Celedón. Para agregar un nuevo Artículo XX:

“Estado garante con funciones de gestión, ejecución y fiscalización. La condición de Garante de Derechos, obliga al Estado a ser gestor, ejecutor y fiscalizador de la labor educativa. Por tanto, el sistema educacional se sostiene en un pilar central que es la Educación Pública.”. **(6-20-7).**

AL ARTÍCULO 28

240. 406. Céspedes et al. Sustitúyase el artículo 28 por el siguiente:

“La Constitución reconoce la función primordial de profesores, profesoras, educadores y educadoras, así como de asistentes de la educación, en el resguardo del derecho a la educación.

El Estado protegerá el rol docente, para lo cual deberá fortalecer su función, promover el desarrollo de la profesión, proveer una formación gratuita, mejorar sus condiciones laborales y resguardar la autonomía profesional de acuerdo a los propósitos establecidos en esta Constitución y la Ley.

El Sistema de Educación Superior estará conformado por las Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales reconocidos por el Estado. Todos ellos deberán guiarse por los principios que esta Constitución establece, de acuerdo a los requerimientos educacionales, productivos, científicos y culturales del país.

En virtud del deber especial mencionado en el inciso sexto, el Estado deberá desarrollar y fortalecer los establecimientos estatales de educación superior.

Las Universidades privadas podrán ser especialmente reconocidas por ley, acreditando haberse dado una organización interna que asegure su plena autonomía respecto de sus fundadores o los sucesores a cualquier título de éstos, y cumpliendo los demás requisitos que fije la ley. Este reconocimiento les permitirá acceder a un trato preferente del Estado.

Las Universidades estatales y las Universidades privadas así reconocidas, serán autónomas. La Constitución protege la libertad de cátedra e investigación y la libre discusión de las ideas de sus académicos y académicas.

El Estado velará por el acceso a la educación superior de todos los estudiantes que cumplan los requisitos de admisión establecidos por la ley, fomentará la igualdad de acceso y garantizará progresivamente la gratuidad en este nivel educativo.

Se reconoce la autonomía de los pueblos originarios para proveer educación, de conformidad a sus costumbres y cultura, resguardando los contenidos y requisitos mínimos establecidos por la



ley. La forma específica en la que se expresará esa autonomía estará establecida en una ley especial.”. **(Por rechazada).**

241. 407. Vergara. Para agregar después de “educadores” lo siguiente “, asistentes de la educación y todo quien conforman la comunidad educativa”. **(Por rechazada).**

242. 408. Vergara. Para agregar después de “Estado garantizará su formación” la palabra “continua”. **(Por rechazada).**

243. 409. Vergara. Para agregar un nuevo inciso:

“El Estado, las universidades y las entidades que la ley establezca, promoverán una carrera de investigación y perfeccionamiento docente, que genere insumos, investigaciones, propuestas y mecanismos que aporten al desarrollo de la educación.”. **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 29 (suprimido)

244. 411. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el bien de la persona en los distintos ámbitos de su vida.

Se manifiesta a través de la enseñanza formal o regular y de la educación informal.

La enseñanza formal o regular, es aquella que se entrega en los establecimientos de educación de manera sistemática y secuencial; siendo obligatoria desde el primer nivel de transición de la educación parvularia hasta el último año de enseñanza media.

La educación informal es aquella que el educando recibe principalmente a través de su núcleo familiar. Los padres, o quienes ejerzan legalmente el cuidado personal, tienen el derecho preferente y la responsabilidad de educar a sus hijos o pupilos conforme a sus convicciones; así como de elegir el tipo de educación y de establecimiento en que éstos recibirán la enseñanza formal. Esto incluye el derecho de escoger, dirigir y orientar la educación moral y religiosa de sus hijos según sus convicciones, y que sus hijos reciban una educación acorde a la misma.

Para asegurar lo anterior, el Estado tiene el deber de:

i. Financiar la provisión gratuita de los distintos niveles de educación formal, así como también, promover y velar por el acceso a la educación superior, tanto universitaria como técnico profesional.

ii. Garantizar la libertad de enseñanza, promoviendo el derecho de las personas e instituciones de crear, gestionar y solventar proyectos educativos autónomos que cumplan con las exigencias mínimas establecidas por la ley, sin establecer diferencias arbitrarias basadas, entre otras circunstancias, en la calidad confesional de los establecimientos y sus respectivos proyectos educativos. Será deber del Estado reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos, reconociendo también su autonomía. La libertad de enseñanza no tendrá otros límites que los impuestos por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la nación.

iii. Promover la libertad de elección de las familias respecto el tipo de educación para los niños y adolescentes a su cuidado, debiendo contribuir equitativamente a su financiamiento en proporción a las necesidades de cada cual, conforme a lo establecido por la ley. El Estado no podrá discriminar entre niños y adolescentes que se encuentren en la misma situación socioeconómica, independientemente del establecimiento educacional al cual asistan.

iv. Fomentar el desarrollo y la calidad de la educación en todos sus niveles y la formación ciudadana y cívica; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación, sea que dichas actividades se desarrollen a través de instituciones públicas o privadas.

La ley establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza, tanto a los establecimientos públicos como privados, y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Los proyectos educativos, públicos y privados, no deben estar orientados ni podrán propagar tendencias político-partidistas. El cuerpo docente deberá respetar esta condición, sin perjuicio del reconocimiento de su derecho a la libertad de cátedra.”. **(Por rechazada).**

245. 412. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva del artículo 29 en el siguiente tenor:

“Todas las personas tienen derecho a una educación integral, de calidad, equitativa, inclusiva, no discriminatoria, con perspectiva de género y de derechos humanos, adecuada a sus necesidades, con pertinencia territorial, cultural y lingüística, con respeto al principio del interés superior y el de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. La educación es un proceso de



formación y aprendizaje permanente cuya finalidad es el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, el desarrollo pleno de la comunidad educacional y el fortalecimiento de los principios democráticos de convivencia así como la protección de los derechos fundamentales y de la naturaleza.

El Estado articulará, regulará y supervigilará un sistema nacional de educación equitativo y pluralista, pudiéndose admitir en su interior una diversidad de proyectos educativos pero todos de alto estándar educacional y descentralizado, constituyendo en su conjunto el eje estratégico del referido sistema.

El Estado asegurará la obligatoriedad y gratuidad entre el segundo nivel de transición parvularia y la educación media, extendiéndose la gratuidad desde el nivel de sala cuna y, progresivamente, a la educación superior.

Se reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de la familia a elegir establecimientos educacionales particulares, los que podrán recibir financiamiento estatal siempre y cuando ofrezcan educación gratuita, que no persigan fines de lucro y se sometan a las demás normas que establezca la ley.

La labor docente cumple un rol esencial para la realización plena del derecho a la educación. El Estado velará por la formación inicial y continua de las y los estudiantes que les permita el desarrollo pleno de sus capacidades y asegurará condiciones laborales justas y dignas para los educadores y educadoras.”. **(Por rechazada).**

246. 413. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado tiene el deber de otorgar un cheque de educación a las personas que así lo requieran, para que ellas utilicen el subsidio en el establecimiento educacional de su preferencia, sea este público o privado.”. **(Por rechazada).**

247. 414. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones.”. **(Por rechazada).**

248. 415. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El cuidado y la educación de los hijos son el derecho natural de los padres y el deber que les incumbe prioritariamente a ellos, debiendo el Estado velar por su cumplimiento. Lo anterior incluye el derecho de los padres a elegir escuelas distintas de las públicas para sus hijos. Asimismo, los ciudadanos y las instituciones tendrán derecho a establecer escuelas primarias y secundarias e instituciones de educación superior y de educación especial. Las condiciones para el establecimiento y el funcionamiento de las escuelas no públicas, la participación de los poderes públicos en su financiación, así como los principios de la supervisión educativa de tales escuelas y de las instituciones de educación especial, se establecerán por ley.”. **(Por rechazada).**

249. 416. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Le estará prohibido al Estado imponer un modelo único de educación.”. **(Por rechazada).**

250. 417. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado no podrá propagar tendencias político partidistas mediante el sistema de educación pública.”. **(Por rechazada).**

251. 418. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los establecimientos educacionales particulares tienen el derecho a desarrollar sus proyectos y programas educativos propios”. **(Por rechazada).**

252. 419. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La conciencia de niños y niñas es inviolable. Se le prohíbe al Estado realizar cualquier acto de adoctrinamiento político.”. **(Por rechazada).**

253. 420. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado tiene el deber de otorgar un cheque de educación a las personas que así lo requieran, para que ellas utilicen el subsidio en el establecimiento educacional de su preferencia, sea este público o privado.”. **(Por rechazada).**

ARTÍCULO NUEVO

254. 421. Labraña y Celedón. Para agregar un nuevo Artículo XX.-

“Educación comunitaria. Allí donde se requiera y en acuerdo con las comunidades, el estado podrá delegar la función pública de la educación a organizaciones formales sin fines de lucro y



de ciudadanía activa, que posean capacidad de gestión autónoma, con participación comunitaria vinculante y acompañamiento de órganos locales del Estado.”. **(6-20-7).**

AL ARTÍCULO 30 (suprimido)

No hay.

AL ARTÍCULO 31 (rechazado)

255. 423. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“El derecho a la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona durante las distintas etapas de su vida.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística.

El Estado deberá reconocer y promover la diversidad de proyectos educativos que permitan el pleno desarrollo de las personas durante las distintas etapas de su vida, buscando siempre su bien integral. La libertad de enseñanza no tendrá otros límites más que la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad de la Nación.

Toda persona natural o jurídica a quien la ley no se lo prohíba, podrá fundar establecimientos de instrucción secundaria y superior.

Los padres y apoderados tienen el deber y derecho preferente de educar a sus hijos y de escoger el tipo de educación y establecimiento educacional conforme a sus convicciones. Asimismo, es deber de la comunidad en general contribuir a la enseñanza, desarrollo y perfeccionamiento de la educación, para lo cual el Estado reconocerá la debida autonomía de los centros educativos y de los docentes en el ejercicio de sus labores.”. **(7-25-1).**

256. 432. Baranda et al. Para añadir entre el inciso 15 y 16 un nuevo inciso, en el siguiente tenor:

“La educación parvularia es esencial para el desarrollo integral de los niños y las niñas, junto a sus familias, durante la etapa más importante de sus vidas, y sienta las bases para una trayectoria educativa y vital que lleve a la participación positiva en los distintos ámbitos sociales en el largo plazo. El Estado asegurará la provisión de educación parvularia de calidad pertinente a cada etapa de desarrollo y a los diferentes contextos.”. **(12 -14 -6).**

257. 436. Baranda et al. Sustituir el inciso 18, por el siguiente:

“La Constitución reconoce la autonomía de las Universidades estatales y las Universidades privadas, así como también protege la libertad de cátedra e investigación y la libre discusión de las ideas de sus académicos y académicas.”. **(12 -13 -6).**

258. 443. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado tiene el deber de otorgar un cheque de educación a las personas que así lo requieran, para que ellas utilicen el subsidio en el establecimiento educacional de su preferencia, sea este público o privado.”. **(Por rechazada).**

259. 444. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones.”. **(Por rechazada).**

260. 445. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El cuidado y la educación de los hijos son el derecho natural de los padres y el deber que les incumbe prioritariamente a ellos, debiendo el Estado velar por su cumplimiento. Lo anterior incluye el derecho de los padres a elegir escuelas distintas de las públicas para sus hijos. Asimismo, los ciudadanos y las instituciones tendrán derecho a establecer escuelas primarias y secundarias e instituciones de educación superior y de educación especial. Las condiciones para el establecimiento y el funcionamiento de las escuelas no públicas, la participación de los poderes públicos en su financiación, así como los principios de la supervisión educativa de tales escuelas y de las instituciones de educación especial, se establecerán por ley.”. **(Por rechazada).**

261. 446. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Le estará prohibido al Estado imponer un modelo único de educación.”. **(Por rechazada).**

262. 447. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado no podrá propagar tendencias político partidistas mediante el sistema de educación pública.”. **(Por rechazada).**

263. 448. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:



“Los establecimientos educacionales particulares tienen el derecho a desarrollar sus proyectos y programas educativos propios.”. **(Por rechazada)**.

264. 449. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La conciencia de niños y niñas es inviolable. Se le prohíbe al Estado realizar cualquier acto de adoctrinamiento político.”. **(Por rechazada)**.

265. 450. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado tiene el deber de otorgar un cheque de educación a las personas que así lo requieran, para que ellas utilicen el subsidio en el establecimiento educacional de su preferencia, sea este público o privado.”. **(Por rechazada)**.

ARTÍCULOS NUEVOS

266. 453. Moreno. Añadir un artículo al final del apartado “Derecho a la educación” en el siguiente tenor:

“Artículo XX. Del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Todas las limitaciones al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que contradigan sus valores, moral y principios, contenidas en esta Constitución deberán ser sometidas a la consulta libre, previa e informada de las madres, padres, apoderados o tutores de los menores de edad que ejerzan el derecho a la educación y no podrán aplicarse sin su consentimiento.”. **(6 -17 -4)**.

267. 454. Moreno. Añadir un artículo al final del apartado “Derecho a la educación” en el siguiente tenor:

“Artículo XX. De la libertad de enseñanza. Las personas, naturales y jurídicas, tienen derecho a abrir, organizar, mantener y desarrollar establecimientos educacionales de todos los niveles. A su vez, las personas que ejerzan este derecho deberán ser consultadas de forma previa, libre e informada sobre los límites que de esta Constitución se desprenden cuando estos impongan doctrinas ideológicas, morales, valóricas y políticas. Posteriormente a la consulta, el Estado deberá obtener el consentimiento de todos los consultados sin el cual límites no podrán imponerse.”. **(7 -18 -5)**.

AL ARTÍCULO 32 (suprimido)

268. 456. Moreno. Para suprimir los artículos 32, 33, 34, 36 y 37. **(9-21-1)**.

269. 457. Ossandón. Para sustituir los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 37:

“Artículo X.- Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Este derecho comprende la seguridad alimentaria y nutricional, la cobertura alimentaria para toda la población y el derecho a conocer la composición y origen de los alimentos.”. **(Por rechazada)**.

270. 458. Rebolledo. Para suprimir en el artículo 32 la frase: “Garantizar este derecho es un deber del Estado y es el principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias del país. No puede quedar al arbitrio del mercado.”. **(Por rechazada)**.

AL ARTÍCULO 33

271. 460. Labraña y Celedón. Agregar al final del inciso la frase “acorde a cada etapa de su vida y especialmente en caso de enfermedades o condiciones médicas específicas”. **(Por rechazada)**.

272. 461. Grandón et al. Para añadir un nuevo inciso al artículo 33 del siguiente tenor:

“El Estado tomará las medidas necesarias para evitar la distorsión de precios y acumulación excesiva de alimentos que puedan causar escasez o limitaciones en su disponibilidad, distribución y acceso físico y/o económico.”. **(Por rechazada)**.

AL ARTÍCULO 34 (suprimido)

No hay.

AL ARTÍCULO 35 (suprimido)

273. 464. Moreno. Sustituir el artículo 35 por el siguiente:

“Artículo 35. El Estado deberá promover el desarrollo una industria alimenticia eficiente, saludable y sostenible mediante políticas públicas, programas de inversión, incentivos al desarrollo científico y tecnológico, asociaciones público privadas y asociaciones comunitarias.”. **(Por rechazada)**.

AL ARTÍCULO 36 (suprimido)

No hay.

AL ARTICULO 37 (suprimido)



274. 467. Grandón et al. Para sustituir el artículo 37 por el siguiente:

“El Estado deberá promover y garantizar la participación de los trabajadores y comunidades rurales en la definición de políticas agrícolas y alimentarias. La ley establecerá las medidas necesarias para que se haga efectiva dicha participación.”. **(Por rechazada).**

ARTÍCULO NUEVO

275. 468. Labraña y Celedón. Para agregar un nuevo artículo xx:

“El Estado es responsable de tomar medidas concretas y eficaces para asegurar la distribución de los alimentos, evitar toda distorsión de precios, controlar la especulación y oportunismo en casos de situaciones de emergencia, catástrofes naturales, pandemias y/o crisis sociales o económicas, evitando que se prive a las personas el acceso a los alimentos.

Los productores, la industria alimentaria y sus distribuidores están obligados a informar pública y claramente la composición y calidad nutricional de los alimentos que disponibilizan en el mercado nacional y un registro detallado de la trazabilidad de los mismos.”. **(9 -20 -3).**

AL ARTÍCULO 38

276. 471. Grandón et al. Para sustituir el artículo 38 por el siguiente:

“Todas las personas tienen derecho al deporte, a las prácticas corporales y a la actividad física, en todas sus disciplinas y en sus múltiples dimensiones.

Se reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración, inclusión e inserción social, así como la mantención y mejora de la salud.

El Estado promoverá la formación y desarrollo de organizaciones deportivas y recreacionales afines, con participación democrática de la comunidad deportiva; así como la expresión identitaria en torno a la práctica deportiva dentro del marco de la Constitución y la ley.”. **(Por rechazada).**

277. 473. Cantuarias et al. Suprímase en el encabezado la frase “, como un derecho colectivo de los pueblos y de cada uno,”. **(Por rechazada).**

278. 474. Cantuarias et al. Intercálase en el literal I) entre las frases “entidades deportivas dirigentes y de las asociaciones,” y “en lo referente”, la siguiente oración: “así como de cualquier otro grupo intermedio,”. **(Por rechazada).**

279. 475. Cantuarias et al. Suprímase en el literal I) la oración “El Poder Judicial sólo admitirá acciones relativas a la disciplina y a las competiciones deportivas una vez agotadas las instancias de la justicia deportiva, regulada en la ley;”. **(Por rechazada).**

280. 476. Cantuarias et al. Sustitúyase en el literal II) la palabra “asegurando” por “fomentando”. **(Por rechazada).**

281. 477. Cantuarias et al. Suprímase en el literal II) la oración “, el deporte escolar, de los pueblos originarios, y, en casos específicos, para el deporte de alta competición”. **(Por rechazada).**

282. 478. Cantuarias et al. Suprímase en el inciso final la oración “estableciendo, en todo caso, que su estructura administrativa y propiedad deberán ser democráticas”. **(Por rechazada).**

283. 479. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado reconoce y protege la práctica de los deportes nacionales tradicionales.”. **(Por rechazada).**

284. 480. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado fomentará los deportes criollos.”. **(Por rechazada).**

285. 482. Grandón et al. Para añadir al artículo 38 un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Toda institución que tenga por objeto el ejercicio de la exploración y gestión del deporte profesional como actividad económica, social y cultural, tendrán que respetar los principios de democracia, probidad, transparencia y publicidad que resguarda esta Constitución y las leyes.”. **(Por rechazada).**

AL ARTÍCULO 39

286. 485. Cantuarias et al. Suprimir en el inciso primero la frase: “, incluida la práctica deportiva ancestral,”. **(Por rechazada).**

287. 486. Cantuarias et al. Sustituir en el inciso primero la oración: “Es deber del Estado remover las condiciones estructurales que imposibilitan el acceso y ejercicio de la práctica deportiva en condiciones de igualdad.” por la siguiente “Es deber del Estado contribuir a crear las



condiciones que posibiliten el acceso y ejercicio de la práctica deportiva en condiciones de igualdad”. **(Por rechazada)**.

288. 487. Cantuarias et al. Suprimir en el inciso primero la oración: “Las leyes y normas cuyo objetivo sea crear las condiciones que hagan reales y efectivas las prácticas deportivas, y que estén basadas en motivos de raza, origen étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física, entre otras, no serán consideradas discriminaciones arbitrarias”. **(Por rechazada)**

289. 490. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado reconoce y protege la práctica de los deportes nacionales tradicionales.”. **(12 -16 -4)**.

290. 491. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado fomentará los deportes criollos.”. **(10 -18 -4)**.

AL ARTÍCULO 40

291. 495. Rebolledo y Ossandón. Para sustituir los artículos 40 y 41 por uno del siguiente tenor:

“Artículo X. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la igualdad y la no discriminación.

Se garantiza la igualdad entre todas las personas, sin distinción alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o de cualquier otro tipo de circunstancia personal o social.

El Estado propenderá adoptar medidas de inclusión y acción positiva que afirmen y garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato.”. **(3-19-10)**.

292. 497. Harboe y Barceló. Para sustituir el artículo 40 por uno del siguiente tenor:

“Artículo 40. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre.

Ninguna persona, autoridad o grupo, ni la ley podrán establecer diferencias arbitrarias. Nadie puede ser discriminado negativamente a causa de su raza, color, sexo, género, idioma, religión, opinión o creencias públicas, discapacidad, posición económica o social, nacimiento o cualquiera otra condición.”. **(9 -16 -7)**.

293. 498. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

La igualdad ante la ley. Todas las personas gozan de los mismos derechos reconocidos por esta Constitución. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones arbitrarias.”. **(8-19-3)**.

294. 500. Henríquez et al. Para eliminar la frase “En Chile”, ubicada al inicio de la tercera oración del inciso primero. **(Por rechazada)**.

295. 503. Henríquez et al. Para incorporar, en el actual inciso segundo, entre la frase “diversidad corporal,” e ‘idioma’ la siguiente frase “condición laboral, gestación, lactancia, nivel educacional,”. **(Por rechazada)**.

296. 504. Baranda et al. Para agregar, en el inciso segundo del artículo 40, luego de la palabra “filiación”, la frase “, situación de calle”. **(Por rechazada)**.

297. 509. Henríquez et al. Para sustituir en el inciso cuarto la frase “que la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sea real y efectiva.” por la siguiente “la igualdad material y sustantiva.”. **(Por rechazada)**.

298. 510. Baranda et al. Para añadir, al final del inciso cuarto del artículo 40 la frase: *y el efectivo ejercicio de sus derechos”. **(Por rechazada)**

299. 512. Henríquez et al. Para reemplazar en el inciso quinto la palabra “subordinación” ubicada por “sometimiento”. **(Por rechazada)**.

300. 514. Henríquez et al. Para incorporar en el inciso sexto luego de la palabra “órganos”, la frase “y sus agentes”. **(13 -17 -2)**.

301. 516. Henríquez et al. Para agregar un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“Es deber del Estado, sus órganos y agentes, así como de toda entidad que ejerza funciones públicas o contribuya a ellas, elaborar e implementar, normas, políticas públicas o protocolos, en su caso, con el objeto de promover y garantizar este derecho.”. **(13-16-3)**.

302. 517. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Se prohíbe al Estado otorgar privilegios por razones de identidad, etnia, cultura, características sexuales, identidades y expresiones de género, y orientaciones sexoafectivas, entre otras. La República de Chile se manifiesta-de cualquier diferencia de esta clase.”. **(8-22-2)**.



ARTICULO NUEVO

303. 518. Harboe y Barceló. Para agregar después del artículo 40 un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Artículo XXX. Hombres y mujeres son iguales ante la ley y en el goce y ejercicio de los derechos. Es obligación del Estado promover esta igualdad, adoptando las medidas legislativas y administrativas para eliminar toda discriminación que la afecte.”. **(10 -14 -6).**

AL ARTICULO 41 (suprimido)

304. 520. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce y asegura a todas las personas:

La igualdad ante la ley. Todas las personas gozan de los mismos derechos reconocidos por esta Constitución. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones arbitrarias.”. **(Por rechazada).**

305. 521. Grandón et al. Para sustituir el artículo 41 por el siguiente:

“La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la igualdad y la no discriminación.

Es deber del Estado, sus órganos y agentes, garantizar la igualdad material y sustantiva, elaborando e implementando leyes, reglamentos o políticas públicas, en su caso, con el objeto de promover y garantizar este derecho.

La ley determinará las medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de todas las formas de discriminación, en los ámbitos público y privado; debiendo adoptar medidas afirmativas o acciones destinadas a alcanzar una igualdad efectiva y superar situaciones de discriminación, marginación o sometimiento.”. **(Por rechazada).**

306. 526. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Se prohíbe al Estado otorgar privilegios por razones de identidad, etnia, cultura, características sexuales, identidades y expresiones de género, y orientaciones sexoafectivas, entre otras. La República de Chile se manifiesta-de cualquier diferencia de esta clase.”. **(Por rechazada).**

AL ARTICULO 42 (rechazado)

307. 528. Mamani et al. Para sustituir el artículo 42 por el siguiente:

“Derechos en fronteras de los pueblos y naciones indígenas. Los pueblos y naciones indígenas habitantes en tierras y territorios fronterizos en Chile tienen derecho a relacionarse en éstos, respetando su trashumancia. El Estado protegerá la cohesión social e integridad cultural de sus habitantes, facilitándoles el permanecer y transitar libremente por las fronteras. La ley establecerá los estatutos especiales de migración en las zonas transfronterizas habitadas por pueblos y naciones indígenas.”. **(12 -13 -7).**

A LOS ARTICULOS 43, 44 Y 45

No hay.

AL ARTICULO 46

308. 534. Mamani et al. Para agregar un nuevo inciso al artículo 46 del siguiente tenor:

“En caso de acuerdo entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas, como resultado del proceso de consulta, será de carácter obligatorio para ambas partes. Y en caso que no se alcance un acuerdo, la decisión de aprobar la medida legislativa o administrativa respectiva corresponderá al Estado, debiendo adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos de los pueblos y naciones indígenas.”. **(Por rechazada).**

A LOS ARTICULOS 47, 48 Y CUARTO TRANSITORIO

No hay.

AL ARTICULO 49

309. 539. Marinovic et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“Derecho humano al agua y al saneamiento. Las personas tienen derecho al agua para consumo humano y saneamiento. Corresponderá al legislador regular el alcance y contenido de este derecho.

El agua es un bien nacional de uso público.

El Estado, conjuntamente con la sociedad civil y entidades privadas, deberá promover la gestión y uso eficiente, sustentable y sostenible del agua mediante el desarrollo de políticas públicas nacionales, desarrollo de infraestructura y el mejoramiento continuo de tecnología para la satisfacción de este derecho y la preservación de este bien.”. **(7-24-1).**

310. 540. Grandón et al. Para sustituir el artículo 49 por el siguiente:

“Derecho humano al agua y al saneamiento. Toda persona tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico.

El Estado garantiza la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos y usos, teniendo especial consideración por quienes habitan en territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales.

Toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable.”. **(13-13-5).**

311. 547. Marinovic et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La Constitución asegura la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua”. **(8-23-0).**

312. 548. Marinovic et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Ni la ley ni autoridad alguna podrán crear privilegios respecto de la administración de este bien nacional de uso público, por razones de identidad, etnia o cultura.”. **(7-23-2).**

AL ARTICULO 50 (suprimido)

313. 551. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“El Estado debe crear las condiciones necesarias para la promoción, defensa y desarrollo de las tradiciones nacionales, los diferentes modos de vida de sus ciudadanos y sus medios y formas de producción.”. **(Por rechazada).**

314. 552. Grandón et al. Para sustituir el artículo 50 por el siguiente:

“Derecho a la agricultura campesina. Las personas campesinas y comunidades rurales, tienen derecho a utilizar y proteger sus métodos de agricultura tradicionales preservando sus conocimientos, saberes y prácticas.

El Estado reconoce el potencial de la agricultura campesina para afrontar la crisis climática, y promoverá la transición agroecológica, proporcionando las condiciones técnicas y económicas para tal fin.”. **(Por rechazada).**

AL ARTICULO 51 (suprimido)

315. 554. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El ejercicio de este derecho no podrá nunca menoscabar el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y proyectos de vida.”. **(Por rechazada).**

316. 555. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El Estado reconoce y protege las tradiciones chilenas, y promueve su enseñanza.”. **(Por rechazada).**

AL ARTICULO 52 (suprimido)

No hay.

AL ARTICULO 53 (suprimido)

317. 558. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La protección de la naturaleza y el medio ambiente no podrá nunca obstaculizar el derecho de las personas a hacerse del sustento propio y el de sus familias.”. **(Por rechazada).**

318. 559. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las personas tienen el derecho a obtener del resto de la naturaleza, los alimentos y otros bienes que necesitan para efectos de asegurar la producción y reproducción de su vida.”. **(Por rechazada).**

319. 560. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La protección de la naturaleza y el medio ambiente no podrá implicar la alteración de las formas y medios de producción de los agricultores.”. **(Por rechazada).**

320. 561. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La propiedad sobre la tierra es inviolable. El Estado tiene el deber de erradicar toda toma, ocupación u otro uso ilegal de la propiedad ajena.”. **(Por rechazada).**



321. 562. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Los afectados por el uso ilegal de su vivienda o terreno tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado a causa de su inacción.”. **(Por rechazada).**

322. 563. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Es deber del Estado desalojar a cualquier usurpador, usuario u ocupante ilegal de una vivienda o terreno.”. **(Por rechazada).**

323. 564. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“El agua es un elemento fundamental para los agricultores. El Estado reconoce y protege los derechos de las personas sobre las aguas y les otorga a estas propiedad sobre ellos.”. **(Por rechazada).**

324. 565. Cantuarias et al. Agréguese un nuevo inciso del siguiente tenor:

“La propiedad de las personas sobre los derechos de aprovechamiento de aguas debe ser respetada.”. **(Por rechazada).**

AL ARTICULO 54

325. 566. Grandón et al. También Fernández et al. Para suprimir el artículo 54. **(12 -14 -6)**

326. 568. Cantuarias et al. Sustitúyase el artículo por uno del siguiente tenor:

“Todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales, lo que incluye el derecho a acceder a ellos, y a obtener su rectificación, complementación y cancelación con arreglo a lo establecido en la ley.

Además, la persona titular de datos tiene derecho a solicitar y recibir del responsable una copia de los datos personales que le conciernen de manera estructurada, en un formato estándar, abierto, que sea interoperable entre distintos sistemas y de uso común, a comunicarlos o transmitirlos o transferirlos a otro responsable del tratamiento de datos, sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, en la medida que concurren los requisitos y condiciones establecidas en la ley.

El tratamiento y protección de los datos personales se efectuarán en la forma y bajo las condiciones que determine la ley.”. **(Por rechazada).**

AL ARTICULO 55 (rechazado)

327. 569. Grandón et al. Para suprimir el artículo 55. **(10-14-8).**

AL ARTICULO 56 (suprimido)

328. 573. Grandón et al. Para sustituir el artículo 56 por el siguiente:

“El Estado, en cumplimiento de los mandatos establecidos en esta Constitución, deberá dar especial protección a las personas y grupos histórica, social, económica y culturalmente excluidos y garantizar el goce y ejercicio efectivo de sus derechos.”. **(11-18-2).**

329. 575. Fernández et al. Sustituir el inciso primero por el siguiente:

“Derecho a la participación de grupos históricamente excluidos. La Constitución asegurará la participación social, política y cultural de los grupos históricamente excluidos, entre ellos, comunidades rurales, personas en situación de pobreza, disidencias y diversidades sexuales y de género, mujeres, personas cuidadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, migrantes y refugiados, personas privadas de libertad, el Pueblo Tribal Afrochileno y la comunidad afrodescendiente, entre otros. Es deber del Estado remover las condiciones estructurales que imposibilitan el ejercicio de este derecho en igualdad de oportunidades.”. **(14 -16 -2).**

330. 576. Fernández et al. Sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“Las acciones dirigidas a crear condiciones para hacer efectivo el ejercicio de este derecho no serán consideradas discriminaciones.”. **(Por rechazada).**

AL ARTICULO 57 (suprimido)

331. 578. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva del epígrafe del artículo 57 por “Derecho al olvido digital”. **(Por rechazada).**

332. 579. Labraña y Celedón. Indicación sustitutiva al artículo 57 sustituir la frase “de la información relacionada con su persona o su familia, si no hubiere un interés público prevalente” por “datos personales o datos sensibles del solicitante, cuando la información publicada le genere perjuicio y que ya no exista un interés legítimo para su publicidad”. **(Por rechazada).**

V. PROPUESTA CONSTITUCIONAL

Los 22 primeros artículos de esta propuesta corresponden al resultado de la deliberación del Bloque Temático N°3 (ex B2), mientras que los siguientes al Bloque Temático N°4 y sobre Otros Derechos Fundamentales. Se informa entre paréntesis el número que, originalmente, correspondió al artículo en el texto sistematizado.

Proyecto de texto constitucional:

“Artículo 1.- Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral.

Artículo 2.- Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial.

Artículo 3.- El derecho a la memoria. Las víctimas y comunidades tienen derecho a recordar el pasado y relacionarlo con el presente, a través de la construcción, expresión y transmisión de memorias respecto de graves violaciones a los derechos humanos.

El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la memoria desde un enfoque integral que considere también su relación con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición.

El Estado tiene el deber de recuperar, preservar y garantizar el acceso público a pruebas documentales y espacios de memoria construidos, recuperados o significativos para una comunidad, que den testimonio o constituyan vestigios de graves violaciones a los derechos humanos.

Artículo 4.- Derecho a la vivienda.

1.- Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria.

2.- El Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho, contemplando, a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas, de conformidad a la ley.

3.- El Estado participará directamente en el diseño, construcción, rehabilitación, conservación, innovación y distribución equitativa de la vivienda, del equipamiento urbano y de los servicios básicos.

4.- Los poderes públicos considerarán especialmente en el diseño de los planes de vivienda a personas con bajos ingresos económicos y otras que establezca la ley. Estas viviendas están exentas del pago de cualquier tipo de contribuciones y son inembargables.

5.- Las políticas públicas de diseño de planes de vivienda y organización territorial deberán tener especial consideración por la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas.

El Estado garantizará la creación de viviendas de acogida para la protección integral a los adultos mayores, infancia, mujeres, disidencias y diversidades sexuales frente a la violencia de género y otras formas de vulneración que atenten contra la vida digna.

Artículo 5.- Función social y ecológica de la propiedad del suelo. Conforme a la función social y ecológica de la propiedad del suelo el Estado debe:

1.- El Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario para la provisión de vivienda digna y adecuada a través de sus programas habitacionales, además deberá establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo y vivienda que vaya en desmedro del interés público, de conformidad a la ley.

2.- Establecer las reglas de ocupación, uso, transformación del suelo conforme a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, el interés general, la distribución justa y equitativa de los suelos y el ejercicio de derechos en el territorio.

3.- Administrar un Banco de Suelo Público. Anualmente, todas las instituciones públicas le informarán o traspasarán, los bienes raíces que resulten prescindibles para el cumplimiento de sus fines institucionales, según señale la ley.

4.- Prevenir o mitigar los riesgos y vulnerabilidades de los desastres siconnaturales.

Artículo 6.- Producción Social del Hábitat. El Estado reconoce el rol protagónico de las comunidades locales en su territorio y garantiza su plena participación en toda etapa y en cualquier instrumento de planificación territorial, programas y proyectos habitacionales, urbanos y rurales, cumpliendo con los estándares de información y transparencia. Asimismo, promueve



la autogestión comunitaria del hábitat.

Artículo 7.- Derecho a la ciudad y al territorio. Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna.

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad.

Es deber del Estado y sus entidades territoriales tomar las medidas para ordenar, planificar y gestionar los territorios, ciudades, asentamientos humanos y espacios públicos, bajo los principios de igualdad, justicia espacial e intergeneracional, equidad territorial, equidad de género, accesibilidad universal, seguridad humana, sostenibilidad, participación, respeto a la diversidad e interculturalidad, resiliencia e interdependencia ecológica.

Para ello, el Estado garantizará, a lo menos, la protección y acceso equitativo y efectivo a servicios básicos, bienes y espacios públicos; la conectividad; el derecho a movilidad; la convivencia y seguridad vial; la integración socio espacial; la colectivización de los cuidados; y la participación social en las plusvalías.

Artículo 8 (9). Protección del trabajo y derecho al trabajo decente. Toda persona tiene derecho al trabajo. El Estado garantiza la protección del trabajo decente. Este comprende, entre otros, el derecho a la libre elección del trabajo en condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital, la garantía de indemnidad.

La Constitución asegura el derecho al trabajo decente. Este comprende el derecho a la libre elección del trabajo, bajo condiciones equitativas, sujeto a reglas de seguridad e higiene en el empleo, incluyendo el derecho al descanso, al tiempo libre, su desconexión digital y a la garantía de indemnidad.

La Constitución garantiza el reconocimiento y protección del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a una remuneración equitativa que le asegure su sustento y el de su familia.

Se prohíbe cualquier discriminación entre trabajadoras y trabajadores que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal, así como el despido arbitrario.

El Estado reconoce la corresponsabilidad social de los cuidados, debiendo fomentar, garantizar y generar políticas públicas que permitan la conciliación laboral y familiar, resguardando el interés superior de las niñas y adolescentes, fomentando una sociedad igualitaria que permita el desarrollo integral de todas las personas. Las leyes regularán la obligación de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para las niñas y adolescentes que estén al cuidado de quienes trabajan, sin discriminación de género.

El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo, los derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad y maternidad. Las mujeres y personas con capacidad de gestar no podrán ser discriminadas o despedidas durante el embarazo, gozarán de una protección especial y de licencia con remuneración salarial y prestaciones adecuadas de seguridad social.

La subcontratación estará permitida únicamente para actividades ajenas al giro de la empresa. Se prohíbe toda forma de precarización laboral, tales como los contratos a honorarios que ocultan relaciones laborales o administrativas estables, o la tercerización y externalización de servicios.

Para el trabajo rural, la ley tomará especialmente en cuenta sus condiciones particulares.

Artículo 9 (10).- Participación de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho.

Artículo 10 (13).- Derecho al cuidado. Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad.

El Estado garantizará este derecho a través de un Sistema Integral de Cuidados y otras normativas y políticas públicas que incorporen el enfoque de derechos humanos, de género y la promoción de la autonomía personal. El Sistema tendrá un carácter estatal, paritario, solidario, universal, con pertinencia cultural y perspectiva de género e interseccionalidad. Su



financiamiento será progresivo, suficiente y permanente.

El sistema prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados.

Artículo 11 (14).- Reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados. El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

El Estado garantizará su redistribución a través del Sistema Integral de Cuidados y, estableciendo un régimen laboral compatible con el trabajo de cuidados, que promueva la igualdad y la corresponsabilidad social y de género. Asimismo, garantizará, quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidados, los derechos laborales consagrados en la Constitución y las leyes.

Artículo 12 (15).- Derecho a la libertad sindical. La Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga.

Los sindicatos serán titulares exclusivos del derecho a la negociación colectiva y huelga, en tanto únicos representantes de trabajadores y trabajadoras ante el o los empleadores que corresponda.

El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, a afiliarse y desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, trazar sus propios fines y realizar su actividad sin intervención de terceros.

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el sólo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley.

La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva. Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación ramal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a las materias susceptibles de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras.

Se establecerán por ley las modalidades y procedimientos mediante los cuales las personas trabajadoras ejercerán el derecho a negociar colectivamente.

La Constitución asegura el derecho a huelga. Compete a los trabajadores y las trabajadoras decidir el ámbito de intereses que se propongan defender, aspectos que no podrán ser limitados por la ley.

El legislador no podrá prohibir la huelga. La ley sólo podrá establecer limitaciones a la huelga para atender servicios esenciales que pudieren afectar la vida, salud o seguridad de la población.

No podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.

Artículo 13 (16).- Derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad.

La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados.

Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Ésta se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema.

El Sistema de Seguridad Social garantizará un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas, oportunas y suficientes que den certeza respecto del monto recibido.

Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley.

Para garantizar el derecho a la seguridad social de las y los trabajadores rurales, se considerarán las condiciones específicas de su actividad.



Artículo 14 (18).- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental.

El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población.

El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación.

El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituirá la base de este sistema y se promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo.

Las prestaciones del Sistema Nacional de Salud considerarán también el acceso a métodos de reproducción asistida, acompañamiento y reparación de las afectaciones que aquejan a las personas como consecuencia de una intervención o procedimiento médico, así como, el tratamiento integral frente al consumo de drogas.

Podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Ninguna persona habrá de incurrir en un gasto catastrófico en salud.

Es deber del Estado la planificación de la formación, distribución y capacitación permanente del personal sanitario.

El Estado generará políticas y programas de salud mental destinados a la atención y prevención con enfoque comunitario y aumentará progresivamente su financiamiento.

El Estado reconoce los sistemas de salud tradicional de los pueblos y naciones indígenas y sus instituciones. Se deberá proteger y conservar especialmente los conocimientos, innovaciones y prácticas de medicina indígena, así como la conservación de los elementos o componentes naturales en que se sustentan.

Corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas.

El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema.

Los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento.

Artículo 15 (23).- El Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación.

Artículo 16 (24).- La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida y tiene como propósito el desarrollo integral de la persona, su personalidad, el sentido de su dignidad, el desarrollo de habilidades físicas, cognitivas, sociales y emocionales, así como, la construcción del bien común, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el fortalecimiento de la convivencia democrática y pacífica para el desarrollo de una sociedad justa, libre, diversa y cohesionada, la valoración y respeto de la naturaleza y el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural del país. La educación es una función primordial e ineludible del Estado.

La educación será integral y de excelencia. Se regirá por los principios de no discriminación, interculturalidad, inclusión, justicia, con enfoque de género y no sexista, ambiental, y con pertinencia territorial, cultural y lingüística. La educación brindará oportunidades y apoyos a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión.

El Estado garantizará infraestructura educacional adecuada para cada nivel de formación educativa, cuyo diseño contemple los criterios de pertinencia cultural y territorial.

Artículo 17 (25).- La educación parvularia, básica y media será de acceso universal, y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media.

Los establecimientos de educación parvularia, básica y media, así como también las instituciones que provean educación superior, conforman un sistema nacional de educación basado en el principio de colaboración, que tendrá como centro la experiencia educativa de los estudiantes. El Estado fomentará su mejoramiento continuo y ejercerá labores de coordinación, regulación, promoción y supervigilancia del Sistema. Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al



régimen común que fije la ley, no podrán perseguir fines de lucro y se orientarán por los principios de este derecho y los generales que establece esta Constitución.

Para garantizar universalmente el derecho a la educación habrá un Sistema de Educación Pública compuesto por establecimientos estatales de todos los niveles y modalidades educativas organizado, administrado y financiado en forma permanente, directa, pertinente y suficiente por parte del Estado, el que orientará el desarrollo del sistema educacional nacional. Su fortalecimiento y desarrollo será un deber primordial e ineludible del Estado, para lo cual deberá financiarlo de manera adecuada, gestionarlo de forma eficiente y participativa, y apoyarlo mediante políticas específicamente destinadas a ello. Este sistema deberá proveer una educación laica, gratuita y pertinente a las necesidades nacionales, regionales y locales. En los niveles inicial, básico y medio, este sistema deberá gestionarse mediante servicios públicos descentralizados, financiados directamente por el presupuesto de la nación, en magnitud suficiente para cumplir plena y equitativamente con su función.

Artículo 18 (26).- La Constitución reconoce el derecho de las y los integrantes de cada comunidad educativa a participar en la construcción del proyecto educativo, en las decisiones de la unidad respectiva y en la elaboración, diseño y ejecución de la política educacional local y nacional que sean relevantes para su quehacer y para el ejercicio del derecho a la educación.

La ley especificará las condiciones y órganos para asegurar la participación plena y vinculante de los integrantes de la comunidad educativa en todo establecimiento o institución reconocida oficialmente por el Estado.

Es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de oportunidades formativas múltiples, más allá del Sistema Nacional de Educación, promoviendo espacios culturales, artísticos, deportivos, comunitarios, como espacios de desarrollo y aprendizaje integral para personas jóvenes, adultas y mayores.

Artículo 19 (27).- La Constitución reconoce la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla.

Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones. Esta comprende la libertad para diseñar metodologías de aprendizaje y enseñanza, y la autonomía para implementarlas en el marco de los propósitos de la educación.

La Constitución respeta la libertad de los particulares para fundar y gestionar proyectos educativos, los que deberán regirse por procesos de admisión no discriminatorios, respetar los fines, principios y garantías del derecho a la educación establecidos en esta Constitución, y las demás condiciones que establezca la ley.

La libertad de enseñanza comprende la libertad de padres, madres, apoderados y apoderadas a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo. Este derecho se ejercerá considerando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 20 (28).- Reconocimiento a la labor educativa. La Constitución reconoce la función primordial de profesores, profesoras, educadores y educadoras, así como de asistentes de la educación, en el resguardo del derecho a la educación.

El Estado garantizará su formación, con carácter gratuito; la actualización continua de sus conocimientos; su ejercicio reflexivo y colaborativo; otorgará estabilidad en el ejercicio de sus funciones; asegurará condiciones laborales óptimas y resguardará su autonomía profesional de acuerdo a los propósitos establecidos en esta Constitución y la ley.

El Estado garantizará la formación gratuita de los asistentes de la educación la que será coherente con los propósitos de la educación.

Artículo 21 (33).- Derecho a la alimentación adecuada. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Este derecho comprende la seguridad e inocuidad alimentaria, el acceso a una alimentación de calidad, culturalmente adecuada, así como el derecho a conocer la composición, origen y trazabilidad de los alimentos, especialmente en sectores aislados geográficamente.

El Estado garantizará en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso, tanto físico como económico, a los alimentos que satisfagan este derecho, incluyendo alimentos especiales para las personas que lo requieran por razones de salud. Asimismo, promoverá el patrimonio culinario y gastronómico del país, y el consumo de alimentos y bebidas saludables.

Artículo 22 (39).- Derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales. Todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos, se podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley.



El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración e inserción social, así como el mantenimiento y mejora de la salud. La ley asegurará el involucramiento de las personas y comunidades con la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas.

La ley establecerá la regulación y los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la búsqueda de talentos deportivos y la gestión del deporte profesional como actividad económica, social y cultural, debiendo asegurar formas de organización democrática.

Artículo 23 (40).- Derecho a la igualdad y no discriminación. La Constitución asegura el derecho a la igualdad. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma de esclavitud.

Se asegura el derecho a la protección contra toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, etnia, pertenencia a un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o cualquier otra condición social.

Se prohíbe y sanciona toda forma de discriminación basada en alguna de las categorías mencionadas anteriormente u otras que tengan por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona incluyendo la denegación de ajustes razonables.

El Estado deberá respetar, proteger, promover y garantizar los derechos fundamentales, sin discriminación.

La ley determinará las medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de todas las formas de discriminación, en los ámbitos público y privado, así como los mecanismos para garantizar la igualdad material y sustantiva entre todas las personas.

El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias, incluidos los ajustes razonables, para corregir y superar la desventaja o el sometimiento de una persona o grupo de ellas respecto de otras.

Los órganos del Estado deberán tener especialmente en consideración los casos en que confluyan, respecto de una persona, más de una categoría, condición o criterio de los señalados en el inciso segundo.

Artículo 24 (45).- Toda persona y pueblo tiene el derecho a comunicarse en su propia lengua en todo espacio público o privado, físico o digital. Todos los habitantes del territorio nacional tendrán el derecho a aprender y usar las lenguas, y a recibir educación pública que considere su lengua. Ninguna persona o grupo podrá ser discriminado por razones lingüísticas.

El Estado reconoce y protege todas las lenguas indígenas dentro del territorio nacional y deberá asegurar su visibilización, difusión, educación, revitalización y preservación. Una ley establecerá la política de planificación lingüística y su institucionalidad, con el objetivo primordial de preservar, conservar, registrar, desarrollar y educar sobre las lenguas indígenas en todas sus funciones sociales, además de avanzar en medidas de normalización, escritura, desarrollo lexical y gramatical de estas para su oficialización.

Artículo 25 (46).- Derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de éstos, a través de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe.

Es deber del Estado y sus órganos requerir el consentimiento en los casos conforme a esta Constitución, la ley y los tratados e instrumentos internacionales ratificados y vigentes en Chile.

El deber del Estado de realizar la consulta aplicará también a los pueblos tribales en territorio nacional.

Artículo 26 (49).- Derecho humano al agua y al saneamiento. La Constitución garantiza a todas las personas el derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizar estos derechos para las actuales y futuras generaciones.

El Estado velará por la satisfacción de este derecho atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos.

Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas terrestres.



Artículo 27 (54).- Derecho a la autodeterminación informativa. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de datos personales.

El tratamiento de datos personales sólo podrá realizarse en los casos y bajo las condiciones establecidas en la ley, observando en todo caso los principios de licitud, lealtad, transparencia, seguridad y finalidad.

El control de las personas sobre la información que les concierna se ejercerá a través de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad e inferencia, sin perjuicio de otros que se establezcan de conformidad a la ley.

La ley regulará un organismo autónomo, independiente y con personalidad jurídica que velará por el respeto efectivo de este derecho.”.

Informe elaborado por la Secretaría de la Comisión sobre Derechos Fundamentales.

CRISTIAN ORTIZ MORENO

Secretario de la Comisión

AYLEN VELASQUEZ VALENZUELA

Abogada asistente

NATALIA PINTO FLORES

Abogada asistente

CARLA AEDO ARANCIBIA

Abogada asistente



ANEXO I: Informe bloque temático 2. Derechos sociales. Sistematización de audiencias

Informe elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile)

Reparación de violaciones de DD.HH. (201)

La presente dimensión aborda diversas temáticas asociadas a Derechos Humanos en general, así como reparaciones ante violaciones de Derechos Humanos. Esta sección contempla las intervenciones de cuatro audiencias distintas.

Antecedentes y Experiencias de vulneración

Una de las temáticas que se expresó durante las audiencias fue la situación de la denominada “macrozona sur” del país, con una especial atención en la Araucanía.

Uno de los principales argumentos con el cual Francisco Aguirre, Jefe Zonal de la Región de la Araucanía comenzaba las audiencias, es que dicha zona es *“escenario de la más graves crisis de Derechos Humanos que experimenta el país antes de la crisis el 18 de octubre, y son también, escenario de un conflicto centenario que no encuentra vías de solución justas y duraderas”*. En este sentido, se vive una época convulsa y que *“ha causado desolación y dolor, en vastos sectores de la población que habitan en estos territorios”* (Francisco Aguirre).

Asimismo, el mismo Francisco Aguirre reconoce las fallas en la acción del Estado, insistiendo en que la relación entre el Estado y los pueblos indígenas no puede entenderse sin que el Estado se haga cargo:

“del legado de despojo y privaciones que han sufrido dichos pueblos. No sólo en relación con sus tierras, territorios y recursos naturales, sino también en términos del avasallamiento de la identidad política y cultural como consecuencia de la discriminación y negación histórica de derechos del que han sido objeto dichos pueblos”.

Ejemplos sobre Violaciones de los Derechos Humanos existen, y están contenidos por el ejemplo, en el mapa de violaciones de DDHH del Instituto Nacional de D INDH. Con respecto a este mapa y en relación al estallido social, Sebastián Smart menciona que *“Solo en las regiones del Maule, Bío- Bío, la Araucanía y los Ríos ocurrieron entre el 18 de octubre del 2019 y el 14 de marzo 2020, 1081 hechos de violencia, donde un 74% son hombres y 26 % son mujeres”*. Al analizar estos hechos en detalles cerca del 70% corresponde a golpizas, disparos y 56 casos de violencia sexual, donde se relataron *“desnudamientos, tocaciones, amenazas de violación e introducción de objetos por vía vaginal anal o bucal”*. Por lo tanto, menciona el Jefe Regional de la Región de los Ríos *“estamos hablando de las más numerosas y graves violaciones a los Derechos Humanos desde el retorno de la democracia y con una concentración particular en las regiones acá analizadas”* (Sebastián Smart, INDH Los Ríos).

Frente a esos atropellos en contra de los Derechos Humanos, Sebastián Smart menciona que las recomendaciones en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición no han sido satisfechas por el Estado de Chile. Ejemplo de esto es que al 18 de octubre del año 2021:

“El Instituto Nacional de Derechos Humanos había presentado 3072 querellas, solamente 70 de ellas se encuentran formalizadas. (...) En la región que se comprende, de la que estamos hablando, solamente un 1 % de las causas han sido formalizadas y solamente tenemos una sentencia condenatoria en poco más de dos años ocurridos los hechos” (Sebastián Smart, INDH Los Ríos).

Así también, se han presentado diversas propuestas como una ley integral de reparación, medidas de no repetición, reforma a las policías uniformadas, fortalecer la institucionalidad de los Derechos Humanos en el país y *“una serie de otras medidas que están comprendidas también en los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que nuevamente a la fecha sigue pendiente del cumplimiento”* (Sebastián Smart).

Otro tema relevante tratado en las audiencias en relación a los antecedentes y experiencias con respecto a los Derechos Humanos, fue sobre la idea de constitucionalizar la defensa de los defensores de Derechos Humanos. En este sentido, según Álvaro Ramis de la Universidad Academia Humanismo Cristiano,

“Naciones Unidas reconocen el papel clave de las y los defensores de los Derechos Humanos, mandatando a los Estados a su protección particular de forma explícita en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de 1998, que señala: toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.”

Asimismo, Álvaro Ramis abre la pregunta de quiénes son los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, indicando que *“toda persona que promueva, procure el respeto y realización de los derechos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional, debe ser considerada defensora de Derechos Humanos”*. Así lo menciona también, la Declaración



Universal de los Derechos Humanos *“Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a proponer y procurar la protección y realización de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en los planos nacional e internacional”* (Álvaro Ramis).

Como indica Álvaro Ramis, en la Declaración y Programa de Acción de Viena del año 1933 esta reconoce:

“La importante función que cumplen las organizaciones no gubernamentales en la promoción de todos los Derechos Humanos en las actividades humanitarias a nivel nacional, regional e internacional. La Conferencia aprecia la contribución de estas organizaciones a la tarea de acrecentar el interés público en las cuestiones de Derechos Humanos, a las actividades de enseñanza, capacitación, investigación, y a la promoción y protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Si bien reconoce que la responsabilidad primordial -por lo que respecta a la adopción de normas- corresponde a los Estados, la Conferencia también aprecia la contribución que las organizaciones no gubernamentales aportan a este proceso” (Álvaro Ramis, UAHC)

Con respecto a Latinoamérica y el ejercicio de los Defensores y Defensoras de DDHH en la región Álvaro Ramis comenta que:

“Es la región del mundo donde es más peligroso defender Derechos Humanos, y particularmente los derechos ambientales. Esa situación creo que Latinoamérica no tiene una regulación muy específica, nada. [Hay que] decir [que] no tenemos precedentes legales que especifiquen mecanismos claros”.

Un ejemplo dado por el expositor fue el caso de Berta Cáceres, líder indígena y cofundadora del COPINH. En este sentido Álvaro Ramis comenta que:

“Sin embargo, esa soslayada masacre continua de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos sólo fue alterada cuando afectó a una persona que tenía una alta visibilidad pública, que había recibido premios internacionales como en el caso de Berta Cáceres y eso alarmó y ha permitido avanzar, por lo menos, en la atención hacia el problema”.

En relación con los métodos de trabajo y acción de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos se encuentran la promoción preventiva orientada a la promoción y protección; defensa de presos políticos y el derecho a un proceso justo; la atención especializada de colectivos sociales específicos; las demandas judiciales o extrajudiciales; organización de las comunidades indígenas u otras que articulan demandas en movilizaciones colectivas; incidencia pública ante autoridades nacionales e internacionales; elaboración de informes de situación o levantamiento de documentación con el fin de impedir la impunidad; acciones diseñadas para prevenir y erradicar la corrupción y la formación, educación y capacitación en Derechos Humanos (Álvaro Ramis, UAHC).

Discusión de Contenidos

Con respecto a la discusión de contenidos en relación con la inclusión de los DDHH en la nueva Constitución hubo tres temas principales que fueron: detenidos desaparecidos, pueblos originarios y la violencia contra la mujer con relación a la violación de DDHH.

El colectivo de Derechos Humanos de Concepción que alberga distintas organizaciones como la Asociación de académicos y académicas Enrique Molina; el Centro Cultural Edgardo Henríquez Frodden; Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Concepción y el Colegio de Profesores y Profesoras territorial Andalucía Sur, entre otros. Este, representado por Esther Araneda, comenta que la inclusión de los Derechos Humanos en la nueva Constitución es inevitable, pero se deben realizar dos apreciaciones:

“Primero, el sentido de su incorporación va más allá de su valor en sí como principio regulador de la convivencia humana [su sentido debe orientarse a] ser garantía irrenunciable de la construcción de una sociedad que promueve el desarrollo humano, sustentable en relación con el medio ambiente, inclusivo y participativo de los procesos de construcción social”.

En relación con el contenido y propuestas sobre la inclusión de los Derechos Humanos en la nueva Constitución, el Colectivo de DDHH de Concepción propone en primer lugar: *“establecer el reconocimiento de los tratados internacionales”*. Es decir, el reconocimiento de los DDHH contenidos, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconocidos en los diversos tratados internacionales, deben estar presente en el texto de la nueva Constitución, garantizados en términos imperativos.

Así también Esther Araneda menciona la educación formal con relación a los DDHH, indicando la necesidad de incorporar los Derechos Fundamentales en el currículo educativo durante todo el proceso formativo de la persona. En este sentido la idea es tratar los Derechos Humanos como una:



“construcción social y como forma de convivencia se debe sustentar en la experiencia histórica de nuestro país, con una evaluación exhaustiva de los atropellos a los que se sometió a toda una nación y sus naciones ancestrales a lo largo de su historia y específicamente en la historia reciente”.

Desde el punto de vista de los Pueblos Originarios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos Sede Bio- Bio dicen estar *“conscientes de los desafíos y dificultades que supone hacerse cargo de un debate público en torno a respuestas adecuadas frente a un tema de esta complejidad. Sin embargo, consideramos que no puede haber más dilaciones en comenzar a transitar este camino”* (Federico Aguirre, INDH Bío Bío).

Ese camino que menciona justamente abarca diversas brechas como lo son la inequidad social, pobreza y marginalidad que padecen los pueblos originarios. Sin embargo, debe responder también a la protección de la propiedad ancestral, territorios y recursos naturales y deberá pronunciarse:

“sobre los diseños institucionales que garanticen la participación efectiva de los pueblos indígenas, en la adopción de medidas que sean susceptibles de afectarlos directamente y también que se haga cargo de las necesidades de justicia y seguridad y eventualmente de las compensaciones para los actores no indígenas” (Federico Aguirre, INDH Bio- Bio)

Con relación a la violencia contra la mujer en casos de Violaciones de DDHH, Colectivo Urdiendo Memorias propone *“una Comisión Permanente de calificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos, que se elimine el pacto de silencio del informe Valech, que se incluya la violencia política sexual como delito de lesa humanidad”* (Lucy Domínguez). Así como también elaborar un catastro de mujeres prisioneras políticas durante la Dictadura, para de esta manera generar:

“[la] reparación e indemnización a las mujeres que fueron y son víctimas del delito de violencia política sexual por parte de los agentes del Estado de Chile, elaborar un documento público en el cual se registre el nombre de los violadores de Derechos Humanos” (Lucy Domínguez, Colectivo Urdiendo Memorias)

Por último, y algo que estuvo presente en las audiencias del Instituto Nacional de DDHH Sede Bio-Bio, el colectivo de DDHH Concepción y Urdiendo Memorias, fue la inclusión en la nueva Constitución de los principios de verdad, justicia, reparación y de no repetición.

Garantías

Con respecto a las garantías, el Instituto Nacional de Derechos Humanos sede Bio-Bio propone la creación de una única institucionalidad, que sea centralizada. Ello, con el fin de que no se desperdiquen las distintas institucionalidades de Derechos Humanos que hoy existen. En este sentido:

“Le puede dar bastante más fuerza y también establecer un mandato un poco más amplio de lo que hoy día tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está abocado particularmente desde un punto de vista judicial a cierto tipo de delitos. Eso podría, sin lugar a dudas, establecer algunos principios para la institucionalidad de Derechos Humanos que nos permitan avanzar en esta materia” (Sebastián Smart, INDH Los Ríos).

Asimismo, Esther Araneda, del Colectivo de DDHH de Concepción, plantea por ejemplo en materia de verdad, justicia y reparación que el *“Poder Judicial, debe adoptar medidas para asegurar y regularizar esta situación histórica de denegación de justicia, castigo y fin a la impunidad para los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar”*. Así como también *“ejecutar juicios justos y breve a fin de dictaminar sentencia en los plazos razonables de los casos pendientes de violación a los Derechos Humanos”*.

En este sentido, Araneda busca establecer la existencia de un comité de ética y de fiscalización para asegurar la independencia del poder judicial; eliminar la justicia militar en casos de Derechos Humanos; que el Estado garantice los cuatro pilares fundamentales de los Derechos Humanos - justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición-; mejorar las medidas de reparación y restitución a las víctimas, familiares, colectivos o pueblos y por último una nueva Ley de Patrimonio y de sitios de memoria.

Vivienda, Ciudad y Territorio (202)

Los derechos referentes a la Vivienda, Ciudad y Territorio pueden entenderse colectivamente como facetas de un Derecho a la Infraestructura, a las estructuras materiales necesarias para habitar el espacio en sociedad.

Una primera distinción conceptual, planteada en las audiencias por Sergio Baeriswyl del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), es que el Derecho a la Vivienda, como los demás Derechos Humanos, es inalienable; esto es, una persona no puede renunciar, ni siquiera



voluntariamente, a contar con una vivienda, y es siempre obligación del Estado el lograr que todas las personas residan en una. El Derecho a la Ciudad, por el contrario, afirma Baeriswyl:

“es un derecho opcional, ¿y por qué es un derecho opcional? Porque [...] nadie está obligado a vivir en la ciudad, como lo hacen más de 2 millones de chilenos que viven y han encontrado su felicidad en el mundo rural.”

En lo que va de las audiencias recibidas por la Comisión, identificamos 139 frases que corresponden a los temas de Vivienda, Ciudad y Territorio, distribuidas entre 11 audiencias, una de las cuales se presentó en el marco del bloque 3 (Derechos Civiles y Políticos).

Antecedentes y Experiencias de vulneración

Un primer antecedente para tener en cuenta es que Chile, al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, concentra a la gran mayoría de su población en ciudades grandes o pequeñas. 15 millones de personas en Chile, un 87,8% de la población, vive en localidades con más de 1.900 habitantes, indica Sergio Baeriswyl del CNDU; como comparación, Francisco Vergara, del Centro para la Producción del Espacio de la Universidad de las Américas (CPE UDLA), señala que *“en China [el porcentaje de personas que viven en ciudades] es cerca del 50%, nosotros estamos en el 90%, Uruguay es el 92%, Argentina es el 87%.”*

No obstante esta concentración de la población, la actual Constitución de 1980 no reconoce a las ciudades como figura legal, algo en lo que tanto Sergio Baeriswyl del CNDU como Francisco Vergara del CPE UDLA insisten. En el actual ordenamiento territorial, lo más similar a la ciudad es la Comuna autónoma, que cuenta con un gobierno local electo directamente y un cuerpo deliberativo, el Concejo Municipal; aún con ello, la mayoría de las comunas y las ciudades no coinciden: muchas ciudades pequeñas son cabeceras de comunas rurales mucho más extensas, y las 18 ciudades más grandes de Chile *“están formadas por más de 2 comunas [...], dieciocho. La gente cree que son Santiago, Valparaíso y Concepción. No, son 18. Probablemente en el tiempo van a ser más”*, advierte José Ramón Ugarte, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA).

La municipalización de los servicios públicos, entre ellos de salud, educación y cultura, han puesto una gran presión en el nivel local para ejecutar políticas que previamente estaban a cargo del Estado central, y consiguientemente, ha afectado la segregación territorial. Como contracara, la recaudación de los recursos provenientes de patentes y contribuciones también está municipalizada, aunque obedece al criterio de ubicación de las casas matrices de las empresas. Contra este modelo, que distribuye desigualmente los recursos entre las comunas, se pronuncia Rabindranath Acuña, alcalde de San Rosendo:

“que así podamos acceder, por ejemplo, a los tributos de este 50% al 60% de utilización del espacio, de esa riqueza que generan los terrenos de San Rosendo, transportados a una municipalidad que no es administradora de fondos de otros, sino que es la que genera, como municipio, es la localidad. Porque hoy en día está establecido así, las empresas pagan en Santiago, [el dinero va al] Fondo Común Municipal, y luego viene una repartición a las comunas que somos más chicas [...]”

El principal motivo por el cual las audiencias del CNDU, el CPE UDLA y la AOA se plantean en favor de establecer constitucionalmente la figura de la ciudad es porque ello permitiría una planificación conjunta de estos territorios, que sea capaz de combatir la segregación territorial a una escala que escapa a los municipios o los gobiernos regionales. José Ramón Ugarte, de la AOA, lo expresa con un ejemplo sobre el déficit de vivienda, señalando que:

“Desde luego, es un problema que no se resuelve mandando a los pobres a la periferia de las ciudades, como [es el caso en] las fotos que siguen a continuación, con ejemplos que son conocidos por todos: un caso en Puente Alto, un caso en Puerto Montt también, en la Población Alerce, o las diferencias que hay gigantescas respecto de la calidad del espacio público y el equipamiento dentro de una misma ciudad”

El Derecho a la Ciudad es, en palabras de Isabel Lacalle, de la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), un “derecho de acceso”, que alivia las brechas que separan a las personas de los servicios que requieren para el cumplimiento de otros derechos. Explica esto por oposición Lacalle, indicando que:

“La actual Constitución no consagra el Derecho a la Ciudad, no incorpora las significativas brechas que tiene, como son las dificultades para habitar, transitar, acceder a servicios, la falta de planificación urbana que permite una adecuada integración de todos aquellos que habitamos la ciudad.”

Agrega su colega de la COS, Ignacio Silva, que:

“El Derecho a la Ciudad tiene un reconocimiento reciente en textos constitucionales, a diferencia del Derecho a la Vivienda que tiene un amplio reconocimiento; hay más de 72 países que lo



reconocen. El Derecho a la Ciudad es un derecho que está en construcción y que ha empezado a reconocerse sobre todo en la realidad latinoamericana.”

En consideración a su carácter optativo, Sergio Baerisywl del CNDU considera que el Derecho a la Ciudad debería establecerse en la Ley por mandato constitucional, pero no fijarse en la Constitución. Agrega a su justificación que un derecho constitucional no sería lo suficientemente flexible para adaptarse al rápido cambio de las ciudades, recordando que:

“Todas las ciudades son distintas, tienen distintas escalas, tienen distintas memorias, distintas historias y distintas configuraciones de comunidades y son dinámicas. No sabemos cómo [será] la ciudad [en] diez años más; [...] antes de la pandemia no se creía que para las ciudades fuera necesario reducir la brecha digital, [...] esto] muestra una dinámica de cambio permanente de la ciudad, que hace difícil establecerla como objeto.”

Uno de los servicios públicos que más propiamente pueden incluirse en el Derecho a la Ciudad es el transporte público, y la situación de éste en las ciudades chilenas es dispar. Mientras que las mayores ciudades del país cuentan con sistemas integrados de transportes, en las de menor tamaño los taxis colectivos asumen un rol más preponderante, ante la ausencia de políticas estatales de transporte público. Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos (CONATACOH), ilustra esta diferencia:

“nosotros no tenemos ningún subsidio por parte del Estado, ninguna ayuda ni para los usuarios o para el transporte escolar, subsidios desde zona aislada para adultos mayores. Por lo tanto, somos totalmente discriminados respecto a los beneficios o a las ayudas que entrega el Estado a otros medios de transporte.”

Abunda en ello Sandoval, al retratar la disparidad en los efectos de la inversión en transporte público en las distintas regiones:

“no tenemos subsidio del Transantiago -que recibe anualmente más de mil millones de dólares. Es fácil hoy día comprar buses eléctricos con la plata de todos los chilenos, y los más humildes del transporte, como son los taxis colectivos, no tienen acceso a ninguno de los beneficios.”

En efecto, la actual legislación establece la existencia de “fondos espejo”, que distribuyen a las regiones un monto igual al invertido en transporte público en la Región Metropolitana, pero la debilidad o ausencia de una institucionalidad de transporte público en las ciudades más pequeñas resulta en que estos fondos se inviertan en otras políticas. Ante dicha ausencia de políticas de transporte público, la infraestructura abandonada o subutilizada se vuelve foco de intentos de reaprovechamiento del suelo por parte de los municipios, lo que puede beneficiar a las comunidades cercanas, a costa de reducir aún más la disponibilidad de infraestructura funcional. Lo ilustra Quinteros, alcalde de San Rosendo:

“Ferrocarriles del Estado -que también es una empresa que pertenece a todos los chilenos- tiene 23 hectáreas [ocupadas en la comuna], de las cuales la única manera de podernos hacer de esos territorios, para poder tener avance, ha sido por la vía de la expropiación. De la tan mal mirada expropiación, actualmente la comuna de San Rosendo ha expropiado seis hectáreas, tenemos en vista seis hectáreas más, pero por cada uno de esos procesos nos hemos demorado dos décadas.”

Los problemas en las políticas urbanas no se limitan al transporte; en materia de vivienda, Chile hoy registra un aumento en el número de personas sin techo. Lo retrata así José Ramón Ugarte, de la AOA:

“asistimos a un cambio que nos debiera avergonzar: después de décadas de disminución del déficit habitacional en Chile, la situación se ha revertido. Hace ya un poco más de una década que se ocurrió, empezó hacia el lado del crecimiento del déficit en vez de disminución, como bien venía ya desde hace 40 años; con una tendencia que no cambiará si no tomamos medidas capaces de hacerlo, acciones en que no es suficiente el solo aumento del gasto público o del presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.”

Redunda en ello¹¹ Francisco Vergara, del CPE UDLA:

“En el año 1998, el déficit era de 497.012 unidades de vivienda -en factores cuantitativos- y el 2017 fue de 497.615; es decir, esto a pesar de que en ese periodo se construyeron [más de] dos millones y medio de viviendas, a pesar de que, en ese periodo, se invirtió en] 3.200.000 subsidios, y a pesar de que en este periodo, el MINVU invirtió [591] millones de UF en tratar de

¹¹ Vale destacar que los datos de déficit habitacional presentados por el CPE UDLA corresponden a números absolutos; en presencia de crecimiento de la población, como el que ha habido entre 1998 y 2017, el mantenimiento de un número similar de viviendas faltantes implica una disminución porcentual en el déficit habitacional.



resolver el problema. No [ha] funcionado, no ha funcionado el sistema subsidiario para el problema de la vivienda.”

El mismo Vergara ilustra que es la especulación inmobiliaria la que se halla detrás de este persistente déficit:

“no hemos hablado de la ciudad como renta, y eso es clave, porque, como uno de los actores fundamentales de la ciudad, hoy en día están los factores financieros: la vivienda ya no es únicamente un espacio para el hábitat. Hoy en día, si ustedes revisan y abren su teléfono y buscan en Google “vivienda” les va a aparecer: “compre para invertir”, “asegure su futuro”, no estaba hablando de asegurar el futuro para vivir ahí, están hablando de asegurar el futuro para rentar con la vivienda”

Ignacio Silva, de la COS, pone énfasis en la falta de políticas de Estado en materia de Vivienda:

“Actualmente la política de vivienda se encuentra basada en decretos de carácter administrativo, donde se regulan los diversos programas de subsidio, y no ha existido una legislación integral que se extienda más allá del proyecto político del gobierno de turno.”

Francisco Vergara del CPE UDLA complementa, señalando que existieron políticas estatales más robustas en el pasado:

“en el año 1967, Eduardo Frei Montalva implementa una modificación a la Constitución: implementar el rol social de la propiedad, y esa modificación facilitó el proceso de desarrollo de proyectos de interés social en zonas bien localizadas dentro de las ciudades de Chile, estamos hablando del año 1967; esto después, la CORMU agarró todos esos beneficios sobre todos esos atributos y lo utilizó de muy buena manera en generar proyectos de gran envergadura, de buena calidad, bien localizados.”

La situación actual, como se ilustró anteriormente, es de una insuficiencia cuantitativa, en el sentido de que, a pesar de la inversión en subsidios de vivienda, el déficit se mantiene. De acuerdo al análisis realizado por el CPE UDLA en base a datos de la encuesta CASEN, los subsidios han logrado reducir el allegamiento interno (donde las personas viven en piezas al interior de la misma casa en que viven otras personas), pero solo convirtiéndolo en allegamiento externo (donde las personas allegadas viven en construcciones aparte dentro del mismo sitio). Vergara, del CPE UDLA, señala que muchos de los subsidios estatales, que están destinados para el arriendo o compra de viviendas en propiedad privada:

“han sido capturados [...] por rentistas, es difícil hacer seguimiento [...] hacer la conexión entre quienes recibieron subsidio y quienes no, es complejo. [...] Nosotros hicimos la investigación [...] en los edificios verticalizados de Santa Isabel, la mayoría de ellos sujetos al Subsidio de Renovación Urbana y la gran mayoría de sus proyectos estaban, eran sujetos de inversión para renta, y era uno de los sectores más rentables de Santiago para hacer este tipo de ejercicio.”

Además, a juicio de algunos de los ponentes, existe un problema de insuficiencia cualitativa, referente a la calidad de la construcción, diseño y ubicación de las viviendas. Señala Carlos López, del Movimiento Territorios Soberanos, que:

“Hoy vivimos en un modelo en dónde se nos imponen proyectos habitacionales de mala calidad con departamentos pequeños que en muchos casos presentan problemas al poco tiempo de ser entregados, distantes de nuestros lugares de trabajo y de nuestros barrios, donde tenemos a nuestros familiares y amistades, donde no hay buen equipamiento social ni actividades económicas cercanas para incorporarnos a ellas, ni las herramientas para generarlas.”

Cabe destacar que la regulación de los estándares de construcción de la vivienda social ha mejorado en las últimas décadas, en particular respecto al tamaño de las viviendas entregadas, comparándose favorablemente a los departamentos tipo “estudio” que se han vuelto más comunes en zonas céntricas: la superficie mínima actual para una vivienda social nueva es de 54 m², mientras que es posible encontrar departamentos de menos de 30 m² en el centro de las mayores ciudades del país.

Aún así, estas mejoras de la vivienda social han sido a costa de su ubicación. Ya sea por el incremento del precio del suelo o por la oposición de los vecinos propietarios, los proyectos de vivienda social han sido desplazados, en su mayoría, a zonas periféricas o incluso a ciudades satélite de los centros urbanos más importantes. Lo retrata así José Ramón Ugarte, de la AOA:

“Permítanme ilustrarlo con un ejemplo, que es del año 2016, de un caso de una población que se llamaba Flor del Valle en la comuna de Maipú, en Santiago, proyecto que fue impedido de materializarse por el Concejo Municipal de Maipú, que sometió a la votación la posibilidad que se construyera -en un terreno que está disponible- un conjunto de viviendas sociales, y la resolución del Concejo fue que no se realizara, por oposición de los vecinos que quedarían cercanos a la nueva población. Los postulantes a ese nuevo conjunto habitacional llevaban más de 10 años en un campamento, dentro de la misma comuna.”



Sobre la oposición vecinal, el mismo Ugarte recalca: *“Los conjuntos de vivienda para personas en situación de pobreza son tratados como lo que técnicamente se llama un “uso de suelo indeseado”¹², como si fueran actividades contaminantes.”* A su juicio, el principal problema cualitativo de la vivienda social en Chile es su ubicación: *“Los pobladores, la gente que vive en las casas, es capaz de arreglar su casa; lo que no es capaz de hacer es agarrar su sitio y llevarlo a otra parte, que esté mejor ubicado.”*

Esta caracterización de la vivienda social como un “uso de suelo indeseado” guarda fuerte relación con el carácter rentista de la inversión inmobiliaria, antes señalado por Francisco Vergara, del CPE UDLA; en la medida en que la propiedad de bienes raíces es una forma de inversión, la presencia de personas vulnerables en las cercanías surge como un “riesgo” al valor del suelo, y por ende, a la rentabilidad de las inversiones así localizadas.

Discusión de Contenidos

Las audiencias presentan varias consideraciones para el momento de fijar en la Constitución el Derecho a la Vivienda. En primera instancia, ponentes como Sergio Baerisywl, del CNDU, plantean el porqué del carácter fundamental de la Vivienda como derecho:

“La vivienda es un espacio es vital, es un espacio que posibilita la vida, sin la vivienda se pone en juego la vida de las personas y esto, a nuestro juicio, requiere un [Derecho] Fundamental de la Constitución porque vivimos en un país donde una persona quien no tiene vivienda no tiene posibilidades de vivir o sobrevivir. Por tanto, la vivienda es co-sustancial a la existencia de las personas.”

Además de un acuerdo generalizado en la necesidad de constitucionalizar este derecho, que hoy se encuentra ausente, hay una especial preocupación por la calidad de la vivienda. Ignacio Silva, de la COS, enumera siete criterios con base en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos:

“Es importante detenerse en el calificativo adecuado, porque implica aceptar que el Derecho a la Vivienda es mucho más que un techo y cuatro paredes [...] ¿Cuáles son las condiciones de adecuación de una vivienda? Son aquellos siete elementos específicos que aparecen en pantalla y que han sido definidos por la ONU, es decir: [1.] la seguridad jurídica en la tenencia; [2.] la disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructuras; [3.] la asequibilidad, es decir, que los gastos asociados a la vivienda no superen el 30 por ciento de los ingresos del hogar; [4.] la habitabilidad; [5.] la accesibilidad, que implica tomar en consideración las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados; [6.] la localización de la vivienda y [7.] la adecuación cultural a la identidad de las diversas personas que la habitan.”

Gustavo Sotomayor, del Movimiento Territorios Soberanos, plantea su interés en que los futuros moradores tengan incidencia en el diseño de las viviendas sociales:

“Yo creo que la vivienda digna para nosotros es súper importante esa, ese diseño participativo en todo lo que tiene que ver con la vivienda en específico y el proyecto habitacional que va a estar inserto en una ciudad que tiene que ser construida comunitariamente para que sea una ciudad en donde se pueda vivir bien.”

También en el ámbito del diseño y la construcción, Luis Gutiérrez, dirigente de la Villa José Manso de Velasco 5, pone énfasis en la regulación de la construcción de viviendas sociales, con el fin de proteger a las y los beneficiarios de incumplimientos en la calidad de la construcción:

“que sea un reconocimiento de la Vivienda como un Derecho Fundamental, erradicar definitivamente la modalidad de contrato entre privados en la construcción de proyectos habitacionales, todos los proyectos DS1, DS19 y DS49 que sean supervisados directamente por SERVIU, desde su inicio hasta la total entrega a los beneficiarios.”

Otro elemento que aparece relevado respecto a la dignidad de la vivienda es el reducir la complejidad y espera de los trámites para acceder a la vivienda social; relata su deseo a este respecto Evelyn Cheuquelen, del Comité de Vivienda “El Renuevo”:

“[Que] las vecinas de las poblaciones más vulnerables tengan el derecho de tener una oportunidad de casa [...] es importante mencionar que las vecinas juntan plata para su casa y no salen favorecidas y se desilusionan, se cansan de postular tantas veces, quedan 200 cupos de casa y quedan 3.000 familias esperando, y vuelve a ser un círculo vicioso.”

Gutiérrez, de la Villa Manso de Velasco, también hace hincapié en la idoneidad del tamaño de las viviendas, en relación al número de personas que las habitarán:

¹² Un término coloquialmente más común para este fenómeno es la sigla inglesa “NIMBY”, de la frase “Not In My Backyard”, traducible como “no en mi patio de atrás” o “no detrás de mi casa”, refiriéndose al rechazo de todo tipo de proyectos que puedan disminuir el valor de una vivienda o provocar incomodidad a sus moradores.



“siempre hemos observado la vanagloria de muchas autoridades cuando dicen 58 metros cuadrados por familia, donde viven 10, 12 integrantes; eso no es dignidad, eso es hacinamiento. Están dando una solución a la vivienda, a un problema de vivienda, pero están hacinando a una familia [en] 58 metros cuadrados.”

Respecto a este punto, es necesario observar que existe una expectativa de la vivienda como una solución a la familia extendida, lo que no se condice con la búsqueda de terminar con el allegamiento. La alternativa, de diseñar la vivienda social para su uso por múltiples hogares de una misma familia, es legítima, pero requiere criterios de diseño y financiamiento distintos a los que hoy existen, y tampoco es una alternativa que apele al interés de toda la población beneficiaria.

El relato de Evelyn Cheuquelen, del Comité de Vivienda El Renuevo, expresa parte de esta contradicción. En su experiencia, la vivienda social de su infancia era muy pequeña para su familia:

“Cuando finalmente terminaron de construir la población, y era tiempo de retornar a su casa, la cual sería hogar para cinco integrantes, se dieron cuenta de que no era una casa para cinco integrantes, así que llegaron a un punto en que decían “cabemos nosotros o caben las cosas” en ese momento todo lo que había podido lograr se tuvo que destruir, tuvieron que botar muchas cosas: muebles, camas, ropa, de todo. Además, su padre tuvo que construir una pieza con lo que tenía el alcance y en esa pieza dormían ella y sus hermanas, aún recuerda las noches de invierno en las que se goteaba toda esa pieza.”

No obstante, cuando se pregunta acerca de los estándares que debiese tener la vivienda social, responde con mínimos que no superan a los que causaron el problema en primer lugar, y plantea como opción la autoconstrucción y el allegamiento:

“si van a formar casa, aunque sea chiquitita, pero por último para vivir un techo donde tengas las necesidades básicas, que son las tres necesidades: agua, luz, alcantarillado, un techo para mí, para nosotros eso ya es algo, aunque que sea chiquitito, si vienen con un patio grande, uno hace lo que sea por su hijo para ampliarlo y vivir mejor, pero yo encuentro que estas necesidades no la pueden estar pasando.”

Un aspecto poco mencionado en las audiencias es el Derecho a la Vivienda no relacionado a la propiedad de esta. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en su exposición, plantea superar el paradigma de una política de vivienda social exclusivamente en propiedad, ampliándose a un criterio de provisión más amplio, en el que la garantía es a la seguridad de la tenencia. Sergio Baeriswyl, del CNDU, plantea el argumento:

“¿Por qué “disfrutar” de una vivienda digna? Porque el énfasis debe estar en el verbo y no en el objeto material. Cuando hablamos de disfrutar una vivienda, se abren abanicos de las distintas formas de acceder a la vivienda como: la vida en comunidad, comodatos, colectiva, incluso en el arriendo o también en propiedad. Lo que nos permite abrir un abanico de opciones diferentes para satisfacer esta necesidad fundamental que tiene que ser digna y adecuada.”

Por su parte, Ignacio Silva, de la COS, plantea la necesidad de resguardos a quienes ocupan viviendas que no son de su propiedad, por ejemplo, quienes arriendan:

“sobre la eventual colisión del Derecho de Propiedad con el Derecho a la Vivienda, en términos de lo que se reconoce como el Derecho a la Vivienda, el primer elemento que se reconoce como... Estos elementos que nosotros mencionábamos, que corresponden a la adecuación de una vivienda, es la seguridad jurídica en la tenencia y eso considera una protección legal contra los desalojos, en caso de que estos se produzcan.”

Uno de los temas que más aparecen en el diagnóstico de los problemas para el cumplimiento del Derecho a la Vivienda hoy es la especulación inmobiliaria y la falta de regulación del uso del suelo. A este respecto, varios exponentes tienen propuestas de corte constitucional que podrían aliviar estos problemas. Ignacio Silva, de la COS, plantea un mandato expreso para crear una política urbana que trascienda a los gobiernos:

“Actualmente, la política de vivienda se encuentra basada en decretos de carácter administrativo, [...] no ha existido una legislación integral que se extienda más allá del proyecto político del gobierno de turno. En ese sentido, una legislación de esta naturaleza podría impulsar acuerdos para regular la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general; controlar la especulación; establecer mecanismos de recuperación de plusvalías urbanas; involucrar activamente a las comunidades y los gobiernos locales las decisiones que se tomen sobre el territorio, entre otro aspecto.”

Francisco Vergara, del CPE UDLA, problematiza cómo la rentabilidad social de las inversiones públicas es capturada por inversores privados:



“Si llega el metro a la esquina de la casa de cualquiera de ustedes, su casa va a aumentar de valor, quizás hasta el doble, pero ustedes no hicieron nada [para que] aumentara de valor, fuimos todos a través de los impuestos que pagan [el] metro los que hicimos que tu casa subiera de valor, por lo tanto, la casa si sube de valor, no puede ser que todas esas ganancias sean únicamente para el propietario de la casa, porque fue la sociedad la que le ayudó a subir el precio esa casa”

José Ramón Ugarte, de la AOA, presenta el caso de la conurbación Iquique - Alto Hospicio como un ejemplo de cómo no se debe regular el uso de suelo en ciudades formadas por varias comunas:

“Si hubiera una autoridad de la ciudad en su conjunto, de [un] “Gran Iquique”, digamos, podría determinar qué suelos bien localizados, centrales -en el bajo de Iquique y no en el cerro como Alto Hospicio- puedan tener viabilidad. [Sin eso], sin duda [que] las viviendas se van a seguir construyendo solamente en la comuna de Alto Hospicio y ninguna en la comuna de Iquique. Una autoridad de la ciudad en su conjunto puede decidir cuál es el mejor lugar, sin tener que responderle a un grupo, o a un par de manzanas de aquí o del otro lado.”

Isabel Lacalle, de la COS, coincide en un diagnóstico similar, haciendo énfasis en la “función social del suelo” para enfrentar la desigualdad territorial:

“Una nueva Constitución debe considerar la función social del suelo y garantizar la acción de un Estado que planifique el desarrollo urbano, con terrenos bien localizados y precios accesibles para la construcción de viviendas sociales, que actualmente se encuentra determinada la ubicación de estas viviendas por los subsidios habitacionales, generando estos proyectos se ubiquen en zonas rezagadas de las ciudades, dependiendo del poder adquisitivo de las personas o de los hogares, generando la existencia de barrios desprovistos de bienes y de servicios básicos, ciudades con altos niveles de segregación y diversas formas de exclusión habitacional.”

Gustavo Sotomayor, del Movimiento Territorios Soberanos, presenta una propuesta de articulado en la que aparece prominentemente la idea de “bancos de suelos” a disposición de la construcción de vivienda social:

“El derecho a la vivienda digna y adecuada garantizada por el Estado. Bancos de suelo para la construcción de viviendas y barrios del buen vivir. Producción autogestionaria del hábitat. El diseño, la planificación y construcción de proyectos habitacionales desde las organizaciones de vivienda, apoyadas por una entidad patrocinante y constructora pública nacional. Financiamiento para la asistencia técnica en proyectos habitacionales y barriales y la participación vinculante en el ordenamiento territorial de las ciudades, para acceso a los servicios públicos básicos y equipamiento para el desarrollo de la ciudad a escala humana.”

José Ramón Ugarte, de la AOA, difiere de esta postura, advirtiendo que la extensión de los terrenos que están a disposición del Estado es muy pequeña; y que éste puede tener mayor influencia a través de la regulación de los usos de suelo:

“Los Bancos de Suelo, son una buena idea, pero distorsionadora, diría yo. Los suelos que son propiedad del Estado no son más allá del 10% de los suelos donde se construyen las viviendas o los conjuntos de viviendas sociales. Entonces, estamos dejando fuera de discusión el 90% del problema. Y el Estado, aunque tenga una capacidad de compras gigantesca, que aumente ese 10%, lo podrá aumentar a 20, lo podrá aumentar a 30, pero en ningún caso va a ser el mayoritario. La herramienta que tiene el Estado para producir conjuntos de vivienda social es la regulación. Con la regulación que sólo el Estado puede dar es cómo se fomenta o se obstruye la construcción de viviendas sociales bien localizadas.”

En lo referente a la consagración o el mandato legal del Derecho a la Ciudad, las audiencias proponen un articulado centrado en potenciar las capacidades de planificación de las autoridades y de administrar las ciudades a su propia escala, en vez de como conjuntos de comunas o partes de regiones. Sergio Baeriswyl, del CNDU, conecta esta mirada con los estándares mínimos de prestaciones urbanas:

“Cuando hablamos nosotros de ciudad, así como también lo plantea el Derecho Internacional, están definidos los estándares, los estándares mínimos; nosotros como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano también tenemos un sinnúmero de estándares mínimos en distintas materias: áreas verdes, acceso al transporte; estos y otros tópicos que pueden ser respetados en la medida que [hayamos] reconocido en la Constitución [a] la Ciudad, [que] por mandato constitucional ordene a todo el Estado a satisfacer las necesidades de las personas”

Isabel Lacalle, de la COS, presenta una mirada más favorable hacia la constitucionalización del Derecho a la Ciudad, señalando que:

“En cuanto al Derecho a la Ciudad, una nueva Constitución debe establecer las bases sobre las cuales se estructurará el modelo de sociedad, garantizando el Derecho a la Ciudad. La actual Constitución no consagra el Derecho a la Ciudad, no incorpora las significativas brechas que



tiene, como son las dificultades para habitar, transitar, acceder a servicios, la falta de planificación urbana, que [es la que] permite una adecuada integración de todos aquellos que habitamos la ciudad.”

Parte relevante de la regulación urbana es lo referente a la movilidad y el transporte público, que es una prestación que permite acceder a otras prestaciones y facilita el cumplimiento de otros derechos. Luis Gutiérrez, de la Villa Manso de Velasco, lo indica así:

“Estamos construyendo muchas viviendas para dar soluciones habitacionales, pero no pensamos en la conectividad de esas familias, no pensamos en cómo se van a desplazar las personas que no tienen vehículo, las hacíamos a un rincón o a un potrero, a un vertedero prácticamente, la nueva Constitución tiene que garantizar todo esto, un Derecho Fundamental.”

Coincide con ello Sergio Baeriswyl del CNDU:

“La movilidad, por cierto, es fundamental y por eso la señalábamos en el último punto -que no alcancé a mencionar. La movilidad es la que permite acceder a muchos Derechos de la Ciudad, y creemos por eso -por cierto- que tiene que ser algo que tiene que ir acompañado en el documento al resguardo constitucional.”

Así como Isabel Lacalle, de la COS:

“En cuanto al acceso equitativo a bienes y servicios, creemos necesario promover la inclusión social, el acceso a servicios y el bienestar social que aseguran el acceso al transporte y la movilidad. Desde ahí, incorporar una visión de desplazamiento seguro, accesible, inclusivo y de calidad dentro de la urbe y entre comunas de una región, que responda la diversidad de las usuarias y usuarios, en términos de capacidades diferentes, grupos etarios, géneros, personas en situación de vulnerabilidad”

Y Héctor Sandoval, de la CONATACOH:

“creemos que el transporte público debe ser considerado un bien esencial como un Derecho Fundamental, como es la Educación, la Salud, la Seguridad, la Vivienda, desplazarse, vivir un Ambiente Libre de Contaminación, etcétera. Ya que, si no existe transporte público, tampoco se puede acceder a lo que acabamos de señalar en forma eficiente, segura, ecológica y oportuna; muchos de otros derechos recientemente enunciados serían imposibles de lograr.”

Garantías

Un primer aspecto de preocupación de las y los ponentes en lo concerniente a garantías es la exigibilidad judicial del Derecho a la Vivienda. Ignacio Silva, de la COS, plantea esta necesidad:

“Nos parece relevante proteger el Derecho a la Vivienda mediante las vías judiciales y administrativas correspondientes. Así como el Poder Legislativo es el encargado de elaborar la legislación en la materia y el Poder Ejecutivo es quien debe implementar las políticas de vivienda, el Poder Judicial también puede cumplir un papel en la protección del Derecho.”

Gonzalo Pérez, del CNDU, ofrece una propuesta sobre qué debería quedar garantizado para recurrir a tribunales en protección del Derecho a la Vivienda:

“Tres ideas importantes para la justiciabilidad. Se entiende que la acción va a ser sobre prejuicios concretos, esto quiere decir que tiene que haber una vulneración de las condiciones que legalmente se habían establecido para el acceso- en cualquiera de sus modalidades- a la vivienda; no es una acción que se tenga que establecer en abstracto, y además, garantizando convicciones transversales de acceso a la justicia. Eso es lo esencial que nosotros contemplamos del recurso, específicamente la justiciabilidad del Derecho a la Vivienda”

La seguridad en la tenencia de la vivienda es otro aspecto relevante de garantizarse, especialmente al diversificarse la tenencia más allá de la propiedad. Una de las situaciones en las que esto es más controversial es en el caso de los campamentos y su erradicación. Ignacio Silva, de la COS, insiste en la necesidad de proveer soluciones de emergencia al momento de desalojar tomas ilegales de terrenos:

“Después del desalojo, es necesario entregar soluciones habitacionales. Algunas veces tendrán que ser -por la premura de los tiempos- de carácter más transitorio, en un comienzo. Otras veces [serán definitivas], si es que el Estado tiene esa capacidad [de] poder entregar soluciones de carácter más definitivo. Pero tenemos ese desafío digamos por delante y, de hecho, el último informe de la Relatora Especial de la ONU sobre la materia indica, como una de sus recomendaciones explícita, que los procesos de desalojo se adecuen a la normativa internacional de Derechos Humanos en la materia.”

En lo referente al Derecho a la Ciudad, una condición determinante del acceso efectivo a sus prestaciones, y en sí misma una prestación, es la seguridad pública, como lo señala Isabel Lacalle, de la COS: *“[Se deben] fortalecer las instituciones que comprenden al aparato estatal,*



desde los ministerios de las fuerzas de paz y orden, para efectos de que la ciudadanía se sienta no solo reflejada en ella, sino además protegida, reconocida y respetada.”

Finalmente, en materia de uso de suelos, la regulación adecuada de sus usos y la prevención frente a los riesgos y daños que las distintas actividades implican es un componente que se debe mandar. Rabindranath Acuña, alcalde de San Rosendo, presenta las consecuencias que ha significado, para la comuna que él dirige, la falta de regulaciones efectivas, y la necesidad de mejores reglas:

“No [podría] dejar fuera de esta presentación el uso del suelo. Pero ocupado por los ríos, los cuales de antaño fueron bastante beneficiosos con las comunas de Laja y San Rosendo, [...] hoy en día, eso no está presente, producto del mal uso del agua: mal uso para el regadío indiscriminado, mal uso para lo industrial y también mal uso porque lo hemos contaminado. [...] Establecer restricciones en distanciamiento de plantaciones forestales, porque día no lo son, hoy día solamente existe la autorregulación de las empresas.”

Por parte de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Isabel Lacalle menciona diversos aspectos en los que esta planificación se vuelve relevante:

“[Se debe] resguardar la regulación en torno a los temas como desastres socioambientales, zonas de catástrofe, contaminación ambiental, escasez hídrica, incendios, etcétera. Así como también resguardar problemáticas que se producen por procesos de gentrificación, construcción en la periferia y acceso a los servicios básicos.”

Restricciones

Además de lo ya discutido con respecto a la armonización entre los derechos de Propiedad y Vivienda, particularmente en materias de arriendos y tomas de terrenos, existe otra arista en la que es relevante considerar límites justificados al ejercicio de los Derechos a la Vivienda y la Ciudad, si es que estos se constitucionalizan: su financiamiento. En la medida en que la provisión de las prestaciones que cumplen estos derechos quede en manos del Estado y sus instituciones, es necesario considerar un adecuado balance fiscal para poder proveerlos de forma sostenida. Ignacio Silva, de la COS, plantea en particular una advertencia respecto de los recursos judiciales, indicando que:

“[La justiciabilidad del Derecho a la Vivienda] no significa que el Estado deberá entregar una vivienda de forma inmediata a toda la población, que ponga en riesgo las finanzas públicas, o que los Tribunales de Justicia estarán a cargo de lograr las políticas públicas en materia de vivienda.”

Derecho al Trabajo y su protección (203)

El Derecho al Trabajo y a su protección es uno de los que concitó más audiencias en el Bloque Temático 2; en su extensión se identificaron 154 frases relevantes, distribuidas en 22 audiencias distintas.

Antecedentes y Experiencias de vulneración

En términos generales y en relación con el trabajo y su protección, uno de los conceptos importantes a los que se hizo alusión durante las audiencias fue el de Trabajo Decente. En este sentido el representante de la OIT Humberto Villasmil cita a Juan Somavía y las memorias que presentó en el año 1992, en estas Somavía declara que:

“El trabajo no podía hacer cualquier trabajo, sino un trabajo dado en condiciones de seguridad, en condiciones de libertad, en condiciones de que no fuera un trabajo forzoso. Básicamente de cuatro vertientes: Dignidad Humana, Equidad, Seguridad y Libertad”

Respecto justamente a la Dignidad Humana, Humberto Villasmil resalta distintos convenios, como por ejemplo:

“Los convenios que luchan para abolir el trabajo forzoso, o los convenios que tienen que ver con la Libertad Sindical, o los convenios de igualdad de trato y no discriminación -100 y 111, que Chile ratificó- o el convenio que establece la edad mínima para el trabajo, etcétera”.

Igualmente, José Ortiz, representante de la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados (CGTP) resalta en términos de normativas internacionales que:

“El Convenio 87 de la OIT y el Convenio 98 abarca el conjunto de los trabajadores y tiene un convenio especial la OIT, que es el 151, que trata sobre los temas especiales del sector público. Pero para la OIT, y para la doctrina internacional, los trabajadores somos uno solo, más allá del empleador al cual presentamos nuestro trabajo”.

En relación a la importancia del Derecho al Trabajo y la redacción de normas laborales constitucionales, José Ortiz de la CGTP menciona que:



“Las normas laborales constitucionales no son un tema más, están en el centro de la desigualdad y el abuso hasta ahora protegidas por la ley y las instituciones para que los trabajadores no tengan ningún tipo derecho para mejorar sus remuneraciones y sus condiciones de trabajo”

Algo similar plantea Fabián Ponce, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al decir que el Derecho al trabajo contribuye *“para la supervivencia del individuo y de su familia, y contribuye también, en tanto en que sea libremente escogido o aceptado, a su plena realización y al reconocimiento en el seno de la comunidad”*. En ese sentido la Cámara Nacional de Comercio (CNC) insiste en la relevancia de las relaciones laborales y en un contexto de respeto con los Derechos Fundamentales, así, su representante, Sara Smok menciona que esto *“constituye la base sobre la cual debe estructurarse el resto de las consideraciones en relación con la regulación del Derecho del Trabajo y las relaciones laborales”*.

Así también Sara Smok plantea la necesidad de tener en cuenta las nuevas tecnologías, el cambio climático, los cambios demográficos, entre otros. Es por esto por lo que:

“En la última década particularmente el mundo del trabajo se ha estado transformando radicalmente y que, aludiendo a lo que la propia OIT ha planteado, el impulso ha venido dado por las innovaciones tecnológicas, los cambios demográficos, el cambio medioambiental y climático, la globalización y las desigualdades persistentes; todas las cuales tienen importantes repercusiones en la naturaleza y el futuro del trabajo, así como en el lugar y la dignidad de las personas que se encuentra en dicho contexto” (Sara Smok)

En este sentido, existe bastante trabajo por hacer, ya que la CGTP menciona: *“En la actualidad, más de 10 millones, somos los que trabajamos creando toda la riqueza de Chile”* y de esos 10 millones mencionados por la CGTP: *“un tercio somos informales y otro tercio tenemos trabajo en condiciones de precariedad. La mitad de nosotros gana menos de 400 mil pesos brutos, mientras la línea de la pobreza anda por los 600.000”*.

Así también y frente a la brecha salarial entre hombres y mujeres, el comité de trabajadoras y sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8M señala que *“la Fundación Sol señala respecto a la brecha entre hombres y mujeres dice que el promedio de ingresos que perciben las mujeres equivale al 79,6% del ingreso percibido por los hombres”*.

Con respecto a la consagración actual del trabajo en la Constitución, Sergio Pérez, de la Federación Walmart, menciona que *“la Constitución actual no reconoce el derecho al trabajo, sino la libertad de trabajo y su protección consagrada en el artículo 19 número 16”*. En este sentido Sergio Pérez explica que:

“En definitiva, reconoce únicamente el derecho de toda persona a buscar, escoger, obtener, practicar ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerada profesión u oficio, incluyéndose también el derecho a abandonar una actividad.”

René Cortázar también menciona que la actual Constitución garantiza el derecho a los trabajadores a negociar en su empresa, en este sentido señala que:

“La negociación por rama de actividad está permitida como consecuencia de un acuerdo directo entre trabajadores y empleadores. Este mismo tipo de instituciones existe en otros países: Canadá, Japón, otros.”

Otra de las temáticas que se expusieron en las audiencias fueron los contratos de los trabajadores, donde cada organización expuso sobre sus demandas particulares como por ejemplo el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales (CODEHS), la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP) y el Grupo de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios de la Universidad del Bío Bío. Por ejemplo, el CODEHS menciona que:

“Según datos de la DIPRES, el 70% de la Administración Central del Estado está bajo la modalidad de contrata y honorario, eso significa que la carrera funcionaria prácticamente no existe y no se respeta. Entonces se justifica un estatuto administrativo pero que considere la carrera funcionaria”.

Un ejemplo del uso de los contratos a honorarios es el que menciona Víctor Mora Canales del Grupo de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios de la universidad del Bío Bío:

“Lo otro para que no nos contraten de forma permanente y digan que nuestros trabajos son esporádicos, nos contratan desde marzo a diciembre, y ese periodo que, de enero y febrero, estamos fuera. Entonces usted no es un trabajador permanente de la universidad, cuando la misión de la universidad es enseñar”.

Otro caso particular de honorarios es el de la Asociación Gremial de Peritos de Propiedad Industrial (AGPPI). Al respecto Piedad Cortés comenta que:

“Nosotros no contamos con un contrato de trabajo, es más, se postula a este cargo de perito, y en este contexto, entregamos una boleta de honorarios -les comentaba que somos un equipo



altamente calificado, normalmente un porcentaje importante de los peritos de propiedad industrial tienen grado de doctor- entregamos una boleta de honorarios -como comenta Juan Luis- hacia INAP”

Profundizando en el caso de los contratos, los representantes de la ANIP explican que:

“Respecto a la situación contractual de los investigadores e investigadoras, nosotros, la una gran mayoría, está bajo condiciones de vulnerabilidad. Solamente un 37% tiene un contrato indefinido, es decir, cerca de dos tercios de las y los investigadores no tienen una situación laboral estable. Esto fue realizado a través de una encuesta propia, realizada por la misma organización ANIP en 2018”.

Otros casos, con relación a la situación de los trabajadores en nuestro país son los informales, los casos de subcontrato o conocido también como “tercerización” y los inactivos. Al respecto de los casos informales, Alejandro Valdebenito, representante del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgo, alude que son trabajadores que están “fuera del modelo de Seguridad Social”.

En este sentido y argumentando en favor de la formalidad laboral, la Fundación Emplea señala que:

“Genera ganancias para las personas, las empresas y para la economía del país. Se puede asegurar un sueldo digno y justo para las personas, y también permite salir de la pobreza, y progresar también a nivel personal, familiar y como sociedad. La experiencia también nos señala que se reduce la tasa desempleo y también [mejora] la mantención en un puesto de trabajo [disminuye] y la rotación”.

Con relación a los trabajadores subcontratados la CGTP explica que:

“Los trabajadores [subcontratados] en su gran mayoría son trabajadores semi esclavos. Hay alguien que los contrata y cobra a un tercero, que es el para el cual se trabaja, se queda con una parte y le da una segunda, el pedacito que sobra, al trabajador”.

El caso de los inactivos fueron un grupo que tuvo visibilidad en las audiencias de la mano de la Fundación Emplea. En este sentido, Jorge Gaju representante de la fundación menciona que:

“Hoy en día hay otra cifra, que está muy invisibilizada qué es en Chile hay más de un millón de “inactivos potenciales”. Los inactivos potenciales se definen como aquellos que podrían trabajar si tuvieran las posibilidades de hacerlo, o han buscado trabajo, pero no lo han encontrado, y ya no pueden [seguir buscando]”.

En este sentido y desglosando ese grupo de los inactivos el mismo Gaju explica que: “la mayor parte son mujeres: más del 55 por ciento, y jóvenes, de entre 15 y 29 años, son más de un tercio de ese grupo”.

Si bien, existieron temas y demandas en común entre las distintas audiencias. Cada una de las organizaciones, expuso también sobre demandas y situaciones particulares de cada uno de sus rubros. Por ejemplo, los trabajadores del salmón comentan que:

“La industria salmonera tiene hoy día setenta y un mil empleos que otorga a las distintas regiones dónde se encuentra ubicada, que es de la Región del Bío Bío a Magallanes... La tasa de sindicalización alcanza al 80% y donde la participación de las mujeres [es] cada vez más potente, hoy llega a casi el 50% de representatividad,”.

Un caso contrario, por ejemplo, es el de los Académicos de la Universidad de Talca donde explican que dentro de la universidad existen:

“Persecuciones reiteradas a académicos, un profesor titular hace críticas al Rector y ya alrededor de un año tuvo 5 sumarios...en una situación digna de Ripley, pero también es una situación... ese mismo, tuvo 5 declaraciones de ilegalidad de la Contraloría General de la República.

Durante las audiencias también expuso la Asociación Movimiento Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH):

“Nosotros como recicladores no tenemos hoy día ningún aporte estatal, nada, cero. No tenemos ningún reconocimiento real. No tenemos salud. No tenemos ningún principio social. Por lo tanto, lo que buscamos es que la Constitución a nosotros nos garantice eso. Nos garantice... y que no desaparezcamos y que seamos contratados por las grandes empresas”.

Los colectiveros también se hicieron parte del debate y mencionaron que:

“Nos financiamos a través de los bancos, las financieras, y vemos la dicotomía en que quienes tienen un poco más de solvencia tienen tasas de hasta un 1 por ciento anual, y en nuestro caso eso sobrepasa el 15, el 18 por ciento. No tenemos acceso a ningún instrumento de fomento, de CORFO, SERCOTEC, capacitación a través de SENCE por el tipo de tributación que nosotros tenemos”.



Discusión de Contenidos

Algunos de los expositores presentan algunos antecedentes internacionales para proponer contenidos específicos para la consagración del Derecho al Trabajo. Ejemplo de ello es lo mencionado por el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile (Prevencionistas) donde destacan la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en:

“Especial el artículo 31 de esta carta fundamental, que señala, sobre condiciones de trabajo justas y equitativas, en el numeral número 1: todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad”.

Asimismo, la Fundación Emplea cita a la Convención de Derechos Humanos para ver el trabajo como *“un Derecho Humano, en donde el trabajo (...) no es que dignifique a la persona, sino que la persona es digna en sí misma, y que el trabajo debe tener mínimos dignos y decentes para que las personas puedan desarrollarse”*. Por su parte, la OIT también invita a respetar y reafirmar la naturaleza y jerarquía de los convenios internacionales como los *“190 convenios y 206 recomendaciones, pero de manera muy particular, de aquellos convenios que se reconocen como convenios fundamentales dentro y fuera de la Organización”*.

Uno de los conceptos mayormente usados durante las audiencias con relación al trabajo y su protección fue el de trabajo decente. En este sentido, la OIT declara que *“[queremos] aspirar (...) que la Constitución chilena sea la primera en el mundo que recoja, reconozca el paradigma del Trabajo Decente”*. De manera similar el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile declara que *“el Trabajo Decente debe ser un imperativo ético. El Trabajo Decente debe tener rango constitucional”*. La Central Unitaria del Trabajo también propone la incorporación del trabajo decente y menciona que:

“Para esta propuesta constitucional del mundo sindical, queda de manifiesto la importancia de que la nueva Constitución consagre de forma expresa, transversal y con perspectiva de género, el valor del Trabajo Decente, mediante la incorporación de principios y garantías adecuados para que, en conjunto con otros valores del “Nuevo Chile” que se expresa a partir del Estallido Social, se transforme en uno de los pilares del Nuevo Pacto Social en construcción”.

Otras propuestas relacionadas con el trabajo decente son las de la Sociedad Chilena de Ergonomía (SOCHERGO) y el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile. La primera alude a:

“Una sugerencia, de cómo debería estar redactado ese párrafo, considerando que toda persona tiene derecho al trabajo decente, sano, seguro, igualitario; con Libertad Sindical, asociación, a la negociación colectiva, a información y capacitación que le permita cuidar y mantener su salud física, mental y social con condiciones adaptadas a sus capacidades, necesidades y limitaciones, quedando prohibido el trabajo forzoso y el trabajo infantil” (SOCHERGO).

En segundo lugar, el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile propone que:

“Lo primero, incorporar como Derecho Fundamental la definición de Trabajo Decente establecida por la OIT, quién entiende a este como empleo productivo, que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo, la protección Social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afectan su vida, y la igualdad de oportunidades”.

Si bien se ha propuesto incorporar el concepto de trabajo decente en la nueva Constitución, podemos preguntarnos ¿Qué es el trabajo decente? Y, ¿a qué hace alusión? En este sentido, el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos comenta que el trabajo decente es *“aquel que se da esencialmente por el bienestar de las personas, que genera ingresos, facilita el progreso social [y] económico, y fortalece a las personas, a sus familias, y a sus comunidades”*. Asimismo, Sergio Pérez de la Federación Walmart declara que:

“Un trabajo será decente y digno si se realiza respetando los principios imperantes en el derecho del trabajo moderno y sus derechos fundamentales, particularmente los reconocidos en el trabajo, la libertad de asociación, la Libertad Sindical y el respeto efectivo del derecho negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”

En relación al trabajo, sus principios y el contenido de este, Wendoling Silva explica que el eje que debiera tener la discusión constitucional del trabajo es su centralidad, esto significa que,

“En el ámbito del trabajo, debe cruzar toda la regulación constitucional (...) debe considerarse el trabajo como un eje central, que regule todo el ámbito constitucional, desde su regulación de los principios como derecho específico y también la protección del mismo, a través de acciones constitucionales que lo garantice”.



Así también, se destacaron ciertos principios rectores que deben regir la relación laboral. Por ejemplo, la OIT menciona aquellos principios que tienen relación con la protección social. Así, plantean la necesidad de considerar:

“La universalidad, la solidaridad intergeneracional, la expansión de las coberturas, etcétera. Pero vinculando esa protección particularmente con la relación de trabajo, de manera de cerrar la brecha de relaciones ambiguas o relaciones encubiertas (...) que a lo largo de la pandemia se nos presentó con una significación tan particular.

De la misma manera, Sergio Pérez de la Federación Walmart menciona que le parece fundamental:

“Que la nueva Constitución reconozca el trabajo como un hecho primordial para dar sentido a la existencia de los seres humanos y como una relación social fundamental, donde las personas encuentren reconocimiento, identidad y vinculación con el mundo, y no solo en su condición de hecho económico, productor de riqueza que mueve y sostiene la producción del bienestar de las sociedades”.

Así también alude que:

“Una Constitución laboral debe establecer el derecho al trabajo en su aspecto de acceso al empleo decente y digno ... Mantención de un sistema de reglas legales que protegen al trabajador como contratante débil del despido arbitrario ... El reconocimiento al derecho al trabajo debe integrar la obligación correlativa de trabajar. Es decir, se deberá consignar el deber de trabajar en función de las posibilidades de cada ciudadano y según su elección” (Federación Walmart-Confederación Comercio)

De esta manera también, el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile recalca el hecho de regular el concepto del trabajo. *“porque hoy tenemos nuevos escenarios, nuevas formas, metodologías de trabajo, que quedan fuera del modelo actual del Código del Trabajo, que quedan fuera del sistema de Seguridad Social y que carecen de protección en caso de accidentes, enfermedades profesionales”.*

Asimismo, el Grupo de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios de la Universidad Bío Bío profundiza lo mencionado anteriormente en el sentido de que se busque consagrar el derecho a un trabajo *“digno, seguro y sin precarización y con reconocimiento a todas las tareas que contribuyen a la producción y reproducción de la vida. De esta manera todas, todos y todes podemos tener un buen vivir”.* Por último, la Cámara Nacional del Comercio comenta que ven la necesidad de entregar protección social a todo trabajo humano independiente de la forma que este adopte o del vínculo contractual que exista, en este sentido proponen que *“la nueva Constitución consagre la protección social a todo tipo de trabajo humano, independiente de la forma que adopte o el vínculo exista”.*

Una de las temáticas que también se discutió en las audiencias fueron distintos conceptos como el salario, remuneración y la redistribución del ingreso. Con respecto al salario el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales (CODEHS) hace referencia al salario vital, esto significa que:

“Al recibir su remuneración, no solamente le permita sobrevivir, sino también poder desarrollar otras actividades tanto espirituales como morales. Y al mismo tiempo sostenemos que este salario vital, tiene que ser parcializado. Es decir, colocar a partir de un piso, pero a partir de las diferentes regiones, por ejemplo, la primera región y la Región de Magallanes deben tener un salario vital, superior al que se paga en el Área Metropolitana por las condiciones. Ese es un principio que nosotros creemos que se debe agregar a esta Carta Fundamental”.

La Central Unitaria de Trabajadores también argumenta que:

“El Estado debe garantizar a los trabajadores y trabajadoras un salario decente que permita cubrir las necesidades materiales, sociales, intelectuales, culturales, sanitarias, [de] esparcimiento, descanso y previsión de él o ella y de su familia, tendiente al mejoramiento continuo y progresivo”.

Este, debe considerar también la idea de una función redistributiva y de *“retribución por el aporte productivo -quiero decir- tanto en la empresa, el crecimiento, el desarrollo, el bienestar económico del país, y el nivel general de vida”* (Fabián Ponce, CUT Zonal Oriente). Así también, Fabián Ponce, de la CUT, plantea que el Estado debe asegurar

“La adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional, el pleno empleo, y valorar todas las formas de trabajo con respeto a los derechos laborales, reconozca el valor económico del trabajo de cuidados como fuente de riqueza, y que las formas sobre las políticas de promoción de la inversión extranjera y la normativa de protección de los inversores extranjeros respeten siempre los derechos laborales establecidos en la Constitución y en sus leyes”.

Por último, la Fundación Emplea considera el establecimiento de una:



“Remuneración justa y suficiente para la satisfacción de las propias necesidades. No alcanza con el sueldo mínimo, no alcanza con que las personas opten a este sueldo, porque no van a salir de la pobreza, y requieren un sueldo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, no generar deuda, y también mantener su sueldo a través de la generación de ingresos autónomos”.

La carrera funcionaria y la cuestión de los funcionarios públicos también fue tratado en las audiencias. Por ejemplo, la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS-Bío Bío) mencionan que

“La FENPRUSS ha peleado desde el año 2002 respecto a una real carrera funcionaria y obviamente eso no lo puede determinar una Constitución, pero sí el empleo digno y estable como eje central. Hoy día estamos llenos de trabajadores y trabajadoras a honorarios”

Al respecto el Comité de Defensa los Derechos Humanos y Sindicales (CODEHS) Explica que la solución podría ser:

“Hacer proceso de encasillamiento automáticos, después de 5 años de una persona que está en una función “x” a honorario o contrata y eso significa tener DFL de planta ministeriales y actualizables de manera anual y en paralelo a la Ley de Presupuesto y que no queden los DFL de planta siempre desajustados a lo que ocurre con la ley de presupuesto, que es la que finalmente nos gobierna en la administración pública y que nos hace vulnerar el artículo 10 del estatuto administrativo que plantea el 80% titulares”.

También hubo cabida en las audiencias para hablar sobre grupos vulnerables. En este sentido la Fundación Emplea mencionó que:

“Por otra parte, también creemos -y desde la experiencia lo hemos visto- que necesitamos aportar con soluciones a grupos con mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión. Como señalaba Jorge, estos grupos son: mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, migrantes, comunidad LGBTQ+, que les cuesta, que presentan barreras estructurales y brechas que les impiden insertarse al mercado laboral en plenitud”.

En este sentido, también se hace mención de la violencia. Desde el Comité de Trabajadoras y Sindicalistas Coordinadora Feminista 8M aluden a que *“la legislación actual [es] nimi[a], seguimos viviendo violencia en nuestros espacios de trabajo, no solo como mujeres o disidencias, sino como parte de la clase trabajadora que es agobiada y sin derecho a reparación”.*

Al respecto la Fundación Emplea, propone tres grandes líneas de acción:

“La primera es reconocer la igualdad de derechos y obligaciones para todas las personas, enfocándonos principalmente en establecer garantías para los grupos más excluidos, sin perjuicio de la maternidad, y la prohibición de cualquier tipo de discriminación arbitraria; eso debe quedar garantizado, y tenemos que también trabajar para que esto pueda ser desde la operatividad algo posible y alcanzable”.

Por último, las distintas organizaciones, luego de exponer sus puntos de vistas, dieron una serie de recomendaciones y propuestas relativas al rubro de cada organización. Por ejemplo, los Trabajadores del Salmón aluden a:

“revisar la actividad acuícola y buscar los lineamientos para mejorar esta actividad, que hoy día tiene digamos a muchas familias y compromete a muchas familias y su entorno en este trabajo, que se ha dado por más de 30 años”

De manera similar, la Asociación Movimiento Nacional de Recicladores (ANARCH) menciona que

“Es por eso que nosotros creemos que es tan importante que el Estado reconozca en nosotros, primero que nada, que somos trabajadores. Segundo que hoy día somos el eslabón más importante dentro de la cadena medioambiental. Y tercero, que se nos dé el lugar que nos corresponde por esa deuda histórica [de la] que nosotros hablamos. No hablamos de deuda histórica de los profesores, hablamos de la deuda histórica de los recicladores de base: el quintil más bajo de esta sociedad”

No solo la ANARCH y los Trabajadores del Salmón expusieron sus demandas. Por ejemplo, la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca señalan que:

“la Constitución incorpore aspectos que permitan desarrollar su trabajo a académicos y académicas de las universidades del Estado y, en este caso particular, hablamos de la Universidad de Talca. ¿Para qué? Para que la Constitución proteja a tales trabajadores y trabajadoras (...). Y para que le otorgue dignidad, condiciones para realizar su trabajo en libertad, en condiciones de equidad y sin incorporar aspectos de temor ni vulneración de derechos fundamentales.”

Asimismo, la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP) comentan que:



“Nuestra principal demanda ha sido la existencia de un contrato de trabajo. Aquí les muestro el Código del Trabajo, el artículo 7: “el contrato de trabajo es un contrato individual, es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada”. En nuestro caso siempre ha existido subordinación y dependencia, en cualquier etapa de la formación tanto de pregrado, postgrado, posdoctorado e investigador y lamentablemente nunca hemos tenido un contrato”

Por último, desde Chile Actores, y en representación de las profesiones artísticas, recalcan que proponen *“apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas, estimular la creación artística e incremento del patrimonio cultural de la nación, promoviendo la producción nacional de bienes culturales y su difusión, y, por último, garantizar también los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural”*.

Garantías

En términos de garantías del Derecho al Trabajo, se destaca primero la necesidad generar garantías normativas de este derecho para la promoción de los derechos de los trabajadores.

“La experiencia internacional en materia constitucional laboral y la práctica nacional de letra chica, muestran que Chile necesita dejar explícita y claramente establecido en la Constitución los parámetros para legislación laboral y un mandato constitucional claro de que el papel de las instituciones laborales del Estado es promover y defender los Derechos Fundamentales de los trabajadores” (José Ortiz, CGTP)

Otro elemento destacado respecto a garantías dice relación con la importancia de la fiscalización eficaz del cumplimiento de la normativa laboral. Es en este marco que es que Sergio Pérez de la Federación Walmart plantea que:

“Queremos que (...) quede plasmado en la Constitución un organismo autónomo en el cual esté dotado de estas directrices para cual se pueda robustecer y poder sancionar de mejor manera, en este caso, los incumplimientos de la legislación laboral vigente en Chile”

Restricciones

En relación con las restricciones dentro del Derecho al Trabajo, existió un debate en torno a los Colegios Profesionales y el control ético del ejercicio de las diversas profesiones. Por ejemplo, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales

“Referente al rol de resguardo, de tutela y de vigilancia, referente al comportamiento ético de los profesionales. Es importante que los colegios profesionales puedan tener nuevamente ese rol de control, pero hay que hacer diferencia fundamental entre colegios profesionales y sindicatos, siempre han caminado por carriles totalmente distintos dentro del ámbito laboral”.

Ante esto, cabe recordar la audiencia presentada por Fernando Bernales, quien advirtió que el control ético y la colegiatura obligatoria corresponden a elementos diferenciados. Así, señala que:

“Actualmente el control ético está sometido al conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia y es un hecho que los tribunales ordinarios de justicia, y particularmente la Corte Suprema, ha aplicado severas penas en materia criminal a abogados o severas sanciones en materia civil. Incluso la Corte Suprema- ha juzgado bajo el código de ética profesional a abogados no colegiados, considerando que constituye la lex artis [sic]”.

Cuidados y Reconocimiento del trabajo doméstico (204)

La constitucionalización del Derecho al Cuidado y el reconocimiento del trabajo doméstico y, en general, reproductivo es uno de los elementos más novedosos en la discusión constitucional. A diferencia de otros Derechos Fundamentales asentados hace ya largo tiempo, las experiencias de constitucionalización del cuidado son relativamente recientes y han representado una innovación importante, tanto por sus implicancias teóricas como prácticas.

En esta sección se presenta la perspectiva de cinco organizaciones de la sociedad civil que provienen de diferentes campos, entre ellos la organización feminista, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores y la academia. La mayoría de estas suscriben en cierta medida, un diagnóstico común relativo a la invisibilización del trabajo de cuidados, su distribución desigual en razón del género y la ausencia o debilidad de las políticas públicas abocadas a esta dimensión de la experiencia humana.

“La discusión de los cuidados se da en un contexto donde hay una organización social desigual de las actividades de cuidado que recaen principalmente en las mujeres. Y, por tanto, para que se sustente un Derecho al Cuidado, tiene que haber una democracia paritaria en todos los aspectos de la Constitución; que no significa sólo participación en los organismos, sino que, por ejemplo, el reconocimiento del Derecho al Cuidado y el trabajo de cuidados como un trabajo que genera valor.” (Nodo XXI)



Antecedentes y Experiencias de vulneración

Uno de los antecedentes recurrentes durante la discusión acerca del Derecho al Cuidado y el reconocimiento al Trabajo Doméstico fue la marcada feminización del trabajo de cuidados. Sobre este aspecto concurren varias audiencias; el Movimiento Ciudadano Postnatal 6 y 12 meses (en adelante, movimiento postnatal) afirma que: “las mujeres son las principales encargadas del cuidado hoy” enfatizando que esa situación se extiende a todo el ciclo vital de las personas cuidadas: “llevan la mayor carga respecto a los cuidados desde que nace un ser humano hasta probablemente su muerte”. El Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE), coincide:

“En un estudio, elaborado por el doctor Pablo Villalobos, quien es investigador de nuestro instituto también, este estudio se elaboró a partir de la CASEN del año 2017, se encontró que la mayoría de las cuidadoras son mujeres, como ya sabemos, y son personas mayores. Tienen menos años de escolaridad y una menor participación laboral.”

Claudia Miranda de MICARE profundiza en la relación entre la realización de trabajos de cuidado y diferentes formas de vulnerabilidad:

“Además, se observó que los hogares con personas dependientes y cuidadores tienen menos ingresos y mayor riesgo de pobreza, reciben menos beneficios sociales y reportan tener peor salud en comparación al resto de la población de nuestro país.”

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Walmart puso el acento en el trabajo de cuidados que recae en niños, niñas y adolescentes, enfatizando que este fenómeno -conocido en la literatura como paternalización-, constituye trabajo infantil.

“En la realidad si hay trabajo de menores, los que quedan como cuidadores de sus hermanos. O sea, los trabajadores en este caso, por desempeñar sus funciones, desprotegen de esta manera y al final como Estado no es garante de la protección de los derechos de los niños, los cuales quedan como cuidadores de sus hermanos o quedan atendiendo... o son como padres de sus propios hermanos y ahí nos encontramos con [que] cuando se denuncia esto, los menores pueden ser llevados al SENAME. Por ende [esto] es algo de lato conocimiento, pero no se hace nada y se sigue con el trabajo infantil.”

Otra discusión recurrente dice relación con el reconocimiento del valor económico, tanto del trabajo doméstico como del trabajo de cuidados. En efecto, Alejandra Jaures del Movimiento Postnatal subraya la contribución de “ese cuidado a la economía de los distintos países, en particular de nuestro país, de Chile, con un porcentaje que es altísimo en su contribución al PIB”. Asimismo, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo (CF8M) menciona que:

“La encuesta CASEN indica que en el año 2017 el 69% de los hombres perciben ingresos autónomos y el 39,1% de las mujeres recibe este tipo de ingresos. Nosotras nos preguntamos ¿Acaso ese 61% de trabajadoras que no recibe ingresos autónomos no trabaja, no cumple funciones como las labores de cuidado que ya hemos mencionado, que no aportan al PIB?”

En un punto estrechamente relacionado, aunque analíticamente diferenciable, la misma Coordinadora sostiene, esta vez respecto del trabajo doméstico y su relación con el PIB, que:

“Es importante citar al Banco Central, que, en su último Informe de Política Monetaria en junio del 2021, valorizó y reconoció por primera vez en su historia el trabajo doméstico, en un 25 por ciento del PIB durante el año 2020.”

En otro ámbito, Camila Miranda de la Fundación Nodo XXI expone los precedentes internacionales que, a su entender, incorporan “aspectos que nos orientan sobre el contenido del Derecho al cuidado”. De acuerdo con la expositora, estos precedentes se enmarcan en el Derecho Internacional de Derechos Humanos y pueden encontrarse en:

“la Declaración de los Derechos del Niño, la CEDAW sobre la discriminación hacia las mujeres, los derechos de las personas con discapacidades, de los adultos mayor[es], los derechos sociales, económicos y culturales. En definitiva, hay todo un marco que ha ido desarrollando aspectos que pueden dotar de contenido a un Derecho al Cuidado.”

Análogamente en lo que respecta a los precedentes del derecho comparado, Camila Miranda de Nodo XXI menciona casos de reconocimiento constitucional del cuidado en América Latina.

“en términos de otras experiencias comparadas, al menos en la región, pensando en América Latina, el caso de [la Ciudad de] México es el más reciente donde se constitucionalizó el Derecho al Cuidado Digno. Y además hay otros casos de constitucionalización del trabajo de cuidados como en Ecuador, México, Venezuela y otros países.”

Por último, la audiencia de la Fundación Nodo XXI postula el principio de sostenibilidad de la vida como fundamento del Derecho al Cuidado y de manera extensiva como una alternativa al principio de solidaridad sobre el que se construyeron las experiencias europeas de Estado de bienestar.



“la propuesta de constitucionalizar el Derecho al Cuidado se sitúa en una mirada o en una definición de la necesidad de un Estado social de derecho. Históricamente, la dimensión social del derecho se fundamentó desde el principio de solidaridad. Sin embargo, a partir de los desarrollos feministas, y ecológicos también, han aparecido otros principios que de alguna forma profundizan en el rol y en los impactos que debería tener una dimensión de cuidados en la sociedad. Específicamente plantear el principio de sostenibilidad de la vida”

Profundizando sobre esta materia, Camila Miranda de Nodo XXI consigna que tal principio:

“tiene dos dimensiones. Por un lado, la necesidad de las condiciones esenciales que hay que garantizar para sostener -es decir, para reproducir, para continuar- con la vida en todas las actividades que realizamos. Y, por otro lado, un debate democrático deliberativo sobre cuál es el carácter de esa vida que estaríamos defendiendo. Y que, si uno toma el estallido, podríamos hablar de una vida digna; o desde otras tradiciones de planteamientos paradigmáticos como el buen vivir.”

Asimismo, Miranda explicita un conjunto de principios adicionales, esta vez de raíz antropológica que, según afirma, permiten: “sustentar el derecho al cuidado, comprendiendo entonces una dimensión social del Estado”. De acuerdo con ella, estos principios serían:

“Por un lado, el principio de interdependencia, que lo que plantea, es que todas y todos requerimos de los demás para vivir. Y, también vinculado al principio interdependencia, aparece el principio de codependencia, también necesitamos de un espacio, de espacios vitales como la relación con la naturaleza, para vivir. El principio de corresponsabilidad social que implica asumir que actividades para mantener la vida (...) requieren del trabajo conjunto entre unas y otras, independiente de las formas de vida que decidamos, digamos, ir desarrollando.”

Una última discusión en materia de antecedentes es aquella que aborda la naturaleza de los cuidados en tanto fenómeno humano. Esta discusión es analíticamente diferente de la discusión sobre el carácter del Derecho al Cuidado, pero está íntimamente ligada a ella. Mientras ésta se consigna en la presente sección, aquella es tratada con cierto detalle en la sección de contenidos.

Claudia Miranda, de MICARE resalta la complejidad de este fenómeno, tanto en términos de los actores que involucra, como de la tensión entre dependencia y autonomía, la consagración del derecho al cuidado, por tanto, debería atender a esta complejidad.

“El cuidado es un fenómeno complejo que comprende a muchos actores (...) la cuidadora, la comunidad, las instituciones del Estado. En este momento no contamos con muchos avances... son insuficientes en materia de cuidado. Tenemos que recordar que el cuidado implica atención a la dependencia, pero también autonomía y autodeterminación y tenemos que definirlo así.”

Por su parte, Camila Miranda de Nodo XXI, sostiene que el cuidado como fenómeno social contiene, pero excede la cuestión del trabajo de cuidados y que consecuentemente, este debe ser comprendido en términos amplios, como parte de la experiencia humana.

“una pregunta importante es ¿Qué se entiende por cuidado? Y probablemente las largas discusiones [en] que hemos participado y sobre todo por el movimiento feminista se ha hablado de trabajo doméstico, trabajo reproductivo. Pero el cuidado, como una dimensión amplia, no solamente como trabajo, implica todas las dimensiones que requerimos para vivir. En definitiva, cómo modificamos el mundo, nos cuidamos, cómo nos vestimos, cómo disponemos de tiempo para movernos, cómo nos educamos, cómo cuidamos nuestra salud, cómo nos recreamos. En definitiva, todos los aspectos que nos permitan sostener, por eso el principio de sostenibilidad, sostener la vida.”

Finalmente, Alejandra Jaures del Movimiento Postnatal plantea la existencia de una tensión entre las necesidades humanas con relación al cuidado y la institucionalización de dichas prácticas, toda vez que:

“el ser humano en las diferentes etapas que transita en su vida requiere efectivamente de cuidados, de figuras que sean significativas y no la tercerización de estos cuidados, muchas veces institucionalizados”

Discusión de Contenidos

Una posición que produjo amplio consenso entre las diversas audiencias fue la relativa a la necesidad de consagrar constitucionalmente el Derecho al Cuidado. Sobre este punto coinciden el Movimiento Postnatal, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, la Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados, la Central Unitaria de Trabajadores, la Fundación Nodo XXI y el Núcleo Milenio para la Investigación del Cuidado. A este respecto, citamos la audiencia de la CF8M, la cual resulta expresiva de este consenso:

“He aquí donde hacemos hincapié en la urgencia de reconocer el trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo, este trabajo que ejercemos principalmente en las mujeres y que no se contempla dentro de nuestra jornada laboral formal.” (CF8M)



Y, adicionalmente:

“proponemos establecer como principio el reconocimiento constitucional de todos los trabajos, especialmente de aquellos no remunerados y que, siendo indispensables, no son reconocidos como tales, porque trabajadoras somos todas, vamos por el reconocimiento constitucional de los trabajos de cuidado, porque criar y cuidar también es trabajar.” (CF8M)

Por su parte, la CGTP enfatiza que dicho reconocimiento debe incorporar tanto salarios como condiciones dignas de trabajo, mientras la CUT apunta a la necesidad de “incorporar elementos como “la corresponsabilidad con los hijos e hijas, las tareas de cuidados, la organización de trabajo, el rol de la empresa”

La posición del Movimiento Postnatal, aunque coincidente en el aspecto antes descrito, resulta minoritaria en el sentido en que otorga un lugar preferente a las madres con relación al cuidado de sus hijos:

“Creemos que el Derecho al Cuidado es un derecho que hoy día debe ser reconocido en su más amplio espectro, considerando como fundamental los primeros cuidados que recibe el ser humano desde su nacimiento por parte de su madre, que es su figura de apego principal, su padre u otra figura de apego que tenga el menor al nacer. Nos parece fundamental consagrar este derecho en la Constitución.”

El carácter diádico de su propuesta queda de manifiesto en su solicitud de:

“consagrar también el Derecho a Maternar. Hoy día las mujeres -la pandemia lo ha dejado en evidencia- tenemos distintas dificultades para poder ejercer nuestro derecho a ser madres, acompañar de manera libre y consentida a nuestros hijos, desde su nacimiento, durante los primeros al menos 100 días de vida.”

Un contrapunto respecto a esta concepción del cuidado puede encontrarse en la audiencia de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, quienes por un lado, posicionan la cuestión del cuidado en el marco del trabajo invisibilizado y, por el otro apuntan a la desnaturalización del carácter feminizado de las labores de cuidado:

“El principio fundamental de nuestro programa es la comprensión del trabajo en clave feminista, los trabajos remunerados y no remunerados, los trabajos productivos y reproductivos, formales e informales deben ser reconocidos como tales, buscamos una transformación radical en las condiciones materiales, socializando y redistribuyendo a las tareas asignadas históricamente a las mujeres como las labores de cuidado, que no es sino una forma de trabajo invisibilizada que se realiza en hogares propios y ajenos, sin remuneración o muy mal remunerados, sin horario de inicio ni de término, mayoritariamente sin derechos laborales ni previsionales.”

A este respecto, la posición desarrollada por Claudia Miranda de MICARE sintetiza elementos de ambas audiencias. En efecto, afirma la importancia de reconocer el carácter diádico del cuidado como fenómeno, pero reconociéndolo en primer lugar, como una labor y en segundo lugar, como una que, en principio no está asociada de manera preferente a las madres.

“queremos invitar a la Convención a que no sólo se adelante en términos de reconocer constitucionalmente la labor de cuidar, sino que va[ya]mos un poco más allá a establecer el reconocimiento de esa labor, la figura de la diada del cuidador y de quién es cuidado y reconocer un rol preponderante del Estado en esta labor.”

La opinión de las intervinientes acerca de la universalidad es otro aspecto que permite contrastar posiciones. Cabe mencionar que, aunque las citas que a continuación se presentan, ofrecen apreciaciones diferentes de la universalidad, estas aplican a niveles de análisis diferentes y en consecuencia, este contraste no debiera entenderse como antagónico. En particular, Alejandra Jaures del Movimiento Postnatal cuestiona la aplicación del criterio de universalidad a las salas cunas, pues, en su opinión, éste fuerza a la institucionalización del cuidado:

“el derecho a la universalidad que se propone hoy es un derecho que obliga a la madre a poner en una determinada sala cuna, y hoy día lo que hay es que la madre puede elegir entre la sala cuna u obtener este dinero para que ella decida si puede... Si es que hay un cuidador en casa, por ejemplo, que pueda cuidar. Entonces hay una diferencia ahí.”

En contraste, para Camila Miranda de Nodo XXI, el principio de universalidad permite que el derecho al cuidado no esté condicionado a la situación laboral de quién lo ejerce o recibe. Esto es consistente con una conceptualización amplia del fenómeno de cuidados que, como vimos, contiene, pero excede al trabajo de cuidados:

“[al reconocer] el cuidado digno como un derecho humano, tenemos aspectos que están vinculados con los Derechos Humanos, como el principio de universalidad; es decir, todas como personas tenemos derecho a este cuidado, no requerimos tener un estatus en particular como trabajador o trabajadora para tener derecho a estos derechos al cuidado.”



En lo relativo a las propuestas de constitucionalización del Derecho al Cuidado, la audiencia de la Fundación Nodo XXI ofrece una alternativa explícita. Esta refleja una concepción del cuidado entendido simultáneamente en sus dimensiones procesual, relacional y de práctica social.

“toda persona tiene derecho al cuidado digno, entendido como el conjunto de actividades, relaciones y procesos que sustentan vitalmente a las personas a lo largo de todo el ciclo vital y que les otorgan los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad.”

El corolario de dicha formulación se materializa en la multiplicidad de dimensiones -“económicas, sociales, políticas y culturales”- en que se expresa dicho derecho, así como en su articulación con otros Derechos Fundamentales.

Por su parte, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo enfatiza la necesidad de una articulación estatal-comunitaria en la elaboración y funcionamiento de un ecosistema de cuidados. En ese sentido, apuntan a que la discusión constitucional en materia de cuidados debe propender a:

“la consolidación de un sistema plurinacional de cuidados, que involucre al Estado y comunidades para la redistribución de los trabajos de crianza y cuidados, dejando de ser una obligación sólo para mujeres o un privilegio de quienes pueden pagarlos”

Dicho sistema contaría como una de sus orientaciones el contribuir a “socializar estas labores de cuidado, pero a través de un mecanismo plurinacional, estatal” (CF8M).

Similar, aunque con diferencias de énfasis puede considerarse la posición de MICARE. Desde una perspectiva de Estado, su propuesta se aboca a una articulación integral de las políticas públicas de cuidado, la que debe responder a la multiplicidad de formas que adopta el cuidado:

“Requerimos contar en nuestro país con una política pública integral, que haya una perspectiva intersectorial y con una cobertura universal que sea flexible a las necesidades de la comunidad y, por esto, el cuidado debe ser concebido como un derecho y desde ese punto de vista, debe ser garantizado por el Estado.”

Finalmente, el Movimiento Postnatal propone, en un nivel mucho más concreto, la ampliación de las políticas de sala cuna a fin de incluir a distintos tipos de cuidadores:

“Lo que nosotros proponemos es que, por ejemplo, la sala cuna que ya existe pueda también caer en el padre, es decir, que sea ampliada al padre o incluso a abuelos, porque hay distintos tipos de familia o a la pareja lesbiana ¿Sí? A los padres, en general a los otros cuidadores también.”

Adicionalmente, algunas de las expositoras desarrollan las implicancias de sus propuestas, sea en términos del tipo de políticas públicas a las que tales propuestas estarían asociadas o bien del contenido fino que estas imprimen derecho al cuidado. El primer caso se observa en la presentación de Claudia Miranda de MICARE, para quién la constitucionalización del Derecho al Cuidado permitiría:

“que en el fondo se genere una política que incluya, por ejemplo, aspectos de salud mental, de salud física, con el Ministerio de Salud, aspectos que tienen que ver con el trabajo, con tener posibilidades de un trabajo más flexible para las cuidadoras, teletrabajo por ejemplo, que se garantice el derecho a que los niños reciban, los que necesitan educación especial y los que no, un sistema inclusivo: que las personas mayores tengan estos derechos, las personas dependientes sin una visión estereotipada.”

De acuerdo con Claudia Miranda, estos son algunos de los criterios que “deberían primar al generar este Subsistema de Cuidado”.

Por otra parte, Camila Miranda de Nodo XXI sostiene que la consagración del Derecho al Cuidado en los términos que proponen realza el carácter voluntario y relacional del fenómeno de cuidados, contribuyendo a disipar la concepción feminizada del cuidado.

“reconoce la libertad de las personas y las comunidades a decidir cuidar, contrayendo obligaciones con otras personas. Es decir, no puede ser una obligación social, principalmente de las mujeres, cuidar, tiene que ser una decisión.”

Asimismo, la expositora plantea que este Derecho al Cuidado posee diferentes dimensiones, cada una de las cuales se relaciona intersectorialmente con diferentes políticas. De este modo, un primer aspecto refiere al derecho a cuidar el que se relaciona tanto con la voluntariedad del cuidado como con su reconocimiento como una labor. Así el derecho a cuidar implica:

“decidir querer cuidar y en ese sentido reconoce la libertad de las personas y las comunidades. También reconoce el cuidado como un trabajo, como una actividad que produce valor y riqueza y por tanto tiene que complementar y enriquecer lo que se entiende como derecho al trabajo y las modalidades de trabajo que reconoce nuestra Constitución.” (Nodo XXI)



Por otra parte, un segundo aspecto de este derecho es aquel que refiere al derecho a ser cuidado o cuidada. Desde esta perspectiva, dicho derecho reconoce el principio de interdependencia y por ende, la importancia de “dimensiones como la salud, la educación, la previsión social, el derecho al tiempo libre, para desarrollarnos y autodeterminarnos.” (Nodo XXI)

Finalmente, una tercera dimensión del Derecho al Cuidado corresponde al “derecho a cuidarse o al autocuidado”. En particular, este: “supone reconocer que nuestra vida no solamente es para trabajar, sino para vivirla y, en ese sentido, cómo podemos tener derecho a tener tiempo, no tiempo libre, sino tiempo.” (Nodo XXI). Esta última dimensión estaría asociada a políticas tales como:

“una reducción de las jornadas laborales, condiciones ambientales también dignas de vivir, como el derecho a la vivienda, el derecho a un medioambiente sano y libre de contaminación, y también la propia autodeterminación, por ejemplo, en el caso de las mujeres con nuestros derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia.” (Nodo XXI)

Esta articulación intersectorial entre el Derecho al Cuidado y otros Derechos Fundamentales conduce a Nodo XXI a posicionar al primero como

“un paraguas articulador del resto de los derechos sociales porque le da un sentido tanto a la actuación del Estado, como también dialoga con todos los otros derechos como producir una vida saludable, producir la salud como un espacio de autodeterminación y desarrollo.”

Desde este punto de vista, la constitucionalización del Derecho al Cuidado en estos términos es planteada como *“un derecho que dé apertura, en el sentido que le da una orientación al resto de los derechos.”* (Nodo XXI)

Garantías

Desde el punto de vista de las garantías que protejan y regulen el acceso y ejercicio de este derecho, Claudia Miranda de MICARE destaca la importancia de la exigibilidad del derecho y sostiene que para ello resulta esencial que un sistema integral de cuidados sea:

“coordinado a partir de los distintos sectores del Estado, vale decir, las prestaciones, los reglamentos, las regulaciones, etcétera., que pueda comprender el futuro Subsistema de Cuidado, tiene que estar a cargo de un ministerio que se comuniquen con los otros”

En una nota similar, Camila Miranda de Nodo XXI estima que debe ser la Ley la que establezca:

“una nueva institucionalidad pública e integral que coordine y permita que se garantice de manera universal, accesible, pertinente y de calidad, además de todos los recursos e instrumentos necesarios.”

Huelga, Negociación Colectiva y Libertad sindical (205)

La presente sección aborda temáticas relacionadas con la Libertad Sindical, la Huelga, la Negociación Colectiva y el derecho a sindicación. Así también los conceptos más abordados fueron el de la Libertad Sindical y el entender a esta como una triada de derechos y la relación con el Trabajo Decente.

Antecedentes y Experiencias de vulneración

La Libertad Sindical está reconocida en el ámbito internacional en distintos tratados y convenios como, por ejemplo, *“los convenios 87 y 98 de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros”* (Cámara Nacional del Comercio). Así también en Chile *“está regulada en el artículo 19, el número 19 de la carta fundamental, [...] De esta forma, en la actualidad se reconoce constitucional[mente] el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos y afiliarse, como también el derecho de los trabajadores a desasociarse y a no afiliarse a un sindicato”* (Cámara Nacional del Comercio).

Asimismo, Wendoling Silva menciona que la Libertad Sindical debe ser consagrada tal como como *“una triada de derechos”*; específicamente, estos son: la huelga, la negociación colectiva y el derecho a la sindicación. Sin embargo, y como consecuencia del plan laboral de la dictadura y de la Constitución de 1980 *“tenemos una regulación muy menguada de la Libertad Sindical (...) Principalmente, mantiene solamente el derecho de sindicación como un derecho absoluto, pero no así el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga”* (Wendoling Silva).

Una crítica similar posee Karla Varas frente a la Constitución y la Libertad Sindical, ya que señala que *“la Constitución Política del 1980 impone trabas y obstáculos para que los sindicatos sean actores con poder real”*. Según la abogada y profesora de la Universidad Católica de Valparaíso *“si bien la Constitución del 1980 reconoce los Derechos de Sindicación, restringe sus finalidades, restringe sus principales medios de acción; la negociación colectiva está anclada a la empresa”*. Y en este sentido *“se acrecienta la desigualdad que reina en nuestro país. Impidiendo al movimiento sindical poder tener una efectiva incidencia en la mejora de las condiciones de las y los trabajadores”* (Karla Varas).



Así también, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) recalca el hecho de que la Constitución, y además el plan laboral del presidente Sebastián Piñera, *“institucionalizaron el debilitamiento sindical y su poder negociador, en favor de los intereses para la acumulación y concentración de la riqueza patronal”*.

Asimismo y en relación a la reforma laboral chilena Humberto Villasmil, representante de la Organización del Trabajo (OIT) para las audiencias comentaba que para la comisión de expertos de la OIT muestra preocupación en las *“limitaciones a la negociación colectiva en empresas vinculadas con el sector de Defensa y de Seguridad Nacional”*, más esto no corresponde a la opinión del expositor.

En este sentido, se puede profundizar en la negociación colectiva con lo mencionado por Wendoling Silva. La abogada y especialista en negociación colectiva, derechos laborales, organizaciones sindicales y tutela de derechos comenta que la Constitución actual en materia de negociación colectiva *“mantiene restringida solamente en el ámbito de la empresa y con respecto a determinados trabajadores, incluso prohibiendo respecto a los funcionarios públicos”*.

Con respecto a los funcionarios públicos Felipe Tamayo, representante del Comité de Defensa de los DDHH y Sindicales, menciona que: *“estamos en la indefensión absoluta y total (...) en la administración pública no existe el desafuero del dirigente sindical. Entonces, destituir a un dirigente sindical es demasiado fácil, por lo que se requiere algo de preocupación hoy día”*. De esta manera y como consecuencia de esto el mismo Felipe Tamayo menciona que *“todas las instancias, en la Inspección del Trabajo, en la OIT y donde habíamos tenido acceso y los recursos para poder hacerlo, han sido denegadas. Y sistemáticamente, la justicia chilena insiste en que, como no somos sindicatos, no aplican las prácticas antisindicales”*. En este sentido el ponente hace una diferencia entre los sindicatos y la asociación de funcionarios:

“Con el tiempo descubrí que la asociación de funcionarios es un sindicato de juguete. Porque, de los tres derechos fundamentales que tiene el sindicato, el derecho a organizarse, la negociación colectiva y huelga, los funcionarios públicos solamente tenemos acceso al primero, que es el derecho a organizarnos”

En relación con la huelga, Karla Varas menciona que la Constitución de 1980 *“tiene una norma prohibitiva en relación con el Derecho de Huelga, señalando que no puede ejercerse en el ámbito público y en el ámbito de los denominados servicios esenciales”*. Así también y con relación a los niveles de sindicalización y a la negociación colectiva, Varas menciona que:

“La mayoría de los países de la OCDE -con las que solemos compararnos- consagran un sistema de negociación ramal que permite aumentar la cobertura de la negociación colectiva y, de esa manera, que la mayoría de [los] trabajadores puedan optar a mejores condiciones laborales”.

Discusión de Contenidos

Una temática que se ha discutido en las audiencias sobre Derecho al Trabajo es el concepto de Trabajo Decente. En este sentido, la Central Unitaria de Trabajadores propone incorporar la idea de Trabajo Decente en la nueva Constitución y menciona que *“su potencial transformador, el valor que representaban a nuestra sociedad, y de su mano también, la importancia y relevancia de la organización de las y los trabajadores en el marco de la Libertad Sindical”*.

Todo esto con el fin de poder dar un mayor poder de negociación a las y los trabajadores, para de esta manera *“disminuir las inequidades dadas en la distribución de la riqueza generada”* (Fabián Ponce, CUT Zonal Oriente). Así también, y siguiendo con la Libertad Sindical y la idea de triada mencionada por Wendoling Silva, la Coordinadora Feminista 8M postula: *“la construcción de un nuevo modelo laboral, derecho fundamental a la Libertad Sindical en toda su expresión, especialmente, de esa huelga y efectiva, de negociación por rama y colectiva a nivel privado y estatal”*.

Si bien, se expuso bastante sobre la Libertad Sindical, ¿qué se entiende por derecho a la Libertad Sindical? La Confederación General de Trabajadores Públicos Privados (CGTP) explica que:

“Se basa en cuatro pilares fundamentales a nivel internacional, desde el año 1948. Uno, que los trabajadores puedan organizarse en sindicatos, [...] Dos, Derecho de Negociación Colectiva para todos los trabajadores que vivan en nuestro país. [...] Tres, que en la Constitución se reconozca el derecho a huelga a todos quienes trabajan, [...] Cuarto, que todo acto que viole estos derechos sea nulo [...]”

Una vez explicada en qué consiste la Libertad Sindical, es necesario comentar de qué manera esta puede ser garantizada o regulada en la nueva Constitución. Al respecto Wendoling Silva busca:

“Garantizarla como un derecho fundamental en el ejercicio del derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho a huelga y que cualquier regulación de estos derechos



mandatados a la ley sea con respeto a la esencia del derecho. No puede la ley, venir a limitar el ejercicio de estos derechos”

Karla Varas también menciona que:

“Creemos que el principio de Libertad Sindical debe estar consagrado de manera extendida, de manera garantista, porque bajo nuestra cultura antisindical y la labor que, en los distintos períodos históricos, ha tenido el legislador en orden a limitar estos derechos, es necesario dar un amplio margen de protección y garantía de forma clara y extendida”.

De esta manera, la abogada alude a que la Libertad Sindical entendida como un Derecho Humano Fundamental debe estar consagrada:

“En una sola cláusula constitucional, para que el sistema sea coherente; no como lo hace hoy en día la Constitución Política del ’80. Se debe partir consagrande el Derecho de Sindicación con alcance universal, bajo una fórmula amplia [de] reconocimiento, tanto en el sector privado como en el sector público, para abandonar la dicotomía entre sindicatos versus asociaciones de funcionarios” (Karla Varas)

En este sentido ambas académicas concuerdan en garantizar firmemente la Libertad Sindical en la nueva Constitución con el fin de poder proteger de mejor manera este derecho, que ha sido limitado en épocas anteriores. Así también, José Ortiz de la CGTP recuerda que: *“quede clarito que podemos organizarnos y organizar sin condicionantes. Se debe promover el sindicalismo y proteger a la dirigencia para que pueda cumplir cabalmente sus funciones”.*

La Libertad Sindical puede ser entendida como un principio universal y que está formado por otros derechos fundamentales. Dentro de esta y tal como se ha mencionado anteriormente se encuentran el derecho a sindicación, la negociación colectiva y la huelga.

Con respecto al derecho a sindicación, este implica:

“El derecho de los sindicatos de establecer sus propios fines y eso no puede estar restringido. Hoy en nuestra Constitución, existen limitaciones a los derechos de los sindicatos, impidiéndoles alcanzar su objetivo específico. Por ejemplo, se les prohíbe participar en actividades políticas y sus dirigentes no pueden ser candidatos a cargos de elección popular, lo cual no debiese existir en una nueva Constitución” (Wendoling Silva).

En este sentido, y siguiendo a Wendoling Silva, es necesario también para el derecho a sindicación, un reconocimiento universal de este, tanto para el sector público como privado, la libertad de los trabajadores para construir las organizaciones que ellos estimen, así como también el ejercicio de la autonomía sindical interna. Asimismo, Jessica Jerez, ponente del Grupo de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios de la Universidad del Bio-Bio, y la abogada Karla Varas, concuerdan con Wendoling Silva sobre todo en el derecho a la organización y constituir organizaciones sindicales:

“Eso en el sentido mínimo, creo que también es imprescindible que, se garantice el derecho a la organización, para más allá del modelo de negociación que se utilice, los y las trabajadoras podamos gestionar las demandas que tenemos a propósito de nuestras condiciones” (...) (Jessica Jerez, Honorarios UBB)

Así, Karla Varas menciona que:

“Se debe reconocer el derecho a constituir organizaciones sindicales en cualquier nivel, lo que los trabajadores y trabajadoras estimen convenientes, que no haya límites a la estructura sindical y que haya plena autonomía para definir si queremos formar un sindicato de base, una federación, una confederación una central sindical o cualquier otra que los trabajadores y trabajadoras estimen conveniente”

Con respecto a la autonomía, la abogada Karla Varas profundiza en que *“se debe reconocer el derecho a la personalidad jurídica, y se deben consagrar procedimientos de constitución de los sindicatos [que sean] sencillos y expeditos”.* así como también, se debe prohibir que los sindicatos puedan ser absueltos. Algo similar plantea la Central Unitaria de Trabajadores:

“También debemos y queremos establecer el derecho a la sindicación autónoma, debiendo reconocer a la organización sindical como libre y autónoma en su organización y funcionamiento, se debe reconocer la Libertad Sindical y los sindicatos como organizaciones para la representación, defensa y promoción de los derechos económicos y sociales de las personas trabajadoras”.

Por último, tanto los ponentes de la CUT como de la CGTP coinciden en el hecho de poder formar federaciones o confederaciones de sindicatos sin injerencias o presiones de externos:

“Que los trabajadores puedan organizarse en sindicatos, federaciones, [o] confederaciones sin ningún tipo de injerencia del Estado ni de los patrones en los asuntos sindicales” (José Ortiz, CGTP).



Así también, los expositores de la CUT van más allá y ahonda en poder fundar y afiliarse a organizaciones sindicales e internacionales:

“Reconocer el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales, y el de éstas a fundar organizaciones internacionales o afiliarse a las mismas. Proponemos un modelo de afiliación automática, pero con voluntariedad de desafiliación en cualquier nivel” (Fabián Ponce, CUT).

La negociación colectiva es un segundo derecho dentro de la Libertad Sindical, en torno a esto Wendoling Silva postula que *“se debe garantizar un derecho a negociación colectiva sin restricciones, sin apellidos, pudiendo ser nacional, ramal o sectorial y para todos los trabajadores y reconociendo la titularidad de los sindicatos”*. Sin embargo y en relación con la negociación ramal, Sara Smok, de la Cámara Nacional del Comercio, argumenta que la diversidad, respecto de la realidad que vive cada empresa es realmente muy disímil. Como por ejemplo en las regiones donde todo depende del territorio, del tamaño, del giro, de las relaciones laborales se han instaurado, de su propia historia, etcétera. En este sentido, postulan que:

“Creemos que [los que] mejor pueden llevar adelante el diálogo social y encontrar los acuerdos que necesitan para ir adelante son los propios trabajadores y empleadores que conocen en profundidad esa empresa y su gestión” (Sara Smok, CNC).

Así también, Smok plantea que:

“La nueva Constitución garantice los derechos de ambas partes involucradas, tanto de trabajadores para hacer efectivas sus demandas en el contexto de la negociación colectiva; como la del empleador a desarrollar las actividades de su negocio”.

Como contraposición, Karla Varas comenta que *“se debe reconocer la negociación colectiva a multinivel, sin que esté anclada en la empresa, abandonando el modelo del año 1980”*. De igual modo, la abogada plantea la posibilidad de generar un procedimiento de negociación colectiva para los funcionarios públicos *“debe existir un procedimiento de negociación colectiva especial, que haga compatible esta vía contractual de fijar condiciones laborales con este modelo de regulación legal especial de la función pública”* (Karla Varas).

Algo similar plantea Fabián Ponce, de la CUT, al expresar que:

“El Estado debe tener la obligación de estimular y fomentar la negociación colectiva en todos sus niveles, y garantizar su resultado frente al incumplimiento de lo acordado en los convenios colectivos. La titularidad de la negociación colectiva la detenta la organización sindical y no grupos negociadores paralelos”.

Un tercer derecho dispuesto dentro de la Libertad Sindical es la huelga, frente a esto Karla Varas explica que:

“Siendo la huelga la principal arma al alcance de la clase trabajadora para la defensa de sus intereses, se debe abandonar este reconocimiento en una lectura negativa; se debe reconocer de forma expresa, dando a los trabajadores la posibilidad de definir los intereses que se protegen a través de la misma; y abandonar el modelo de prohibición de su ejercicio en el ámbito de los servicios esenciales”.

Sin embargo, establece límites con relación a la huelga sobre todo o en momentos cuando *“pueda poner en riesgo efectivo los Derechos Fundamentales de terceros, a la vida, salud y seguridad de todo o parte de la población”*. Asimismo, Fabián Ponce, de la CUT, explica que debe reconocer el derecho a la huelga sobre todo para:

“(…) La defensa de todos los intereses políticos, económicos y sociales que les son propios. El ejercicio del derecho a huelga no puede dar lugar a sanción alguna, ni ser motivo de discriminación en el empleo o en las condiciones de trabajo”.

José Ortiz, de la CGTP, también indica que busca reconocer el Derecho a Huelga, pero *“a todos quienes trabajan, en todos los niveles, en todos los asuntos relativos a sus intereses. Sin más limitaciones que el respeto. Debe prohibirse el sistema de reemplazo bajo cualquier figura”*. En este sentido, entra al debate sobre si los funcionarios públicos podrían o no, ejercer ese derecho a huelga que hoy les está prohibido. De esta manera, Karla Varas menciona que:

“Respecto de los funcionarios públicos, en relación a la huelga, actualmente la tienen prohibida. Estoy de acuerdo que se genera esta anomalía, esta discordancia entre prohibición y lo que ocurre en la realidad. Y, efectivamente, la huelga en el sector público, así como huelga en el sector privado, puede generar choques con Derechos Fundamentales de terceros que queramos proteger y -eso lo dije al final de la propuesta- esa protección debe ir por la vía de un régimen especial, con restricciones -que, por esencia, son los servicios mínimos- para evitar daños irremediables en estos bienes jurídicos esenciales”.

Garantías



Con respecto a los organismos internacionales, tanto las audiencias de la CGTP, como la de Wendoling Silva recurrieron a los Convenios de la OIT para argumentar principalmente sobre la violación de los derechos relacionados a la Libertad Sindical como, por ejemplo:

“practica antisindical, o discriminación por motivo de afiliación sindical ... Nosotros queremos que se cumplan los convenios de la OIT ya ratificados y se establezcan acciones efectivas y ejemplares a las prácticas antisindicales; sea de las empresas o de los funcionarios o del Estado. Y que los hechos de lo actuado malamente se anulen, reparando el daño causado”. (José Ortiz, CGTP)

Wendoling Silva también se refiere a la OIT para hablar sobre la autonomía sindical, sobre todo en el hecho de la conformación de los sindicatos. En este sentido, la expositora mencionó que:

“El convenio 87 de la OIT, establece que no debe existir mayor injerencia del Estado en la formación de sindicatos. Lamentablemente la Dirección del Trabajo ha ido avanzando en ir regulando cada vez más y poniéndole más cortapisas a los sindicatos y ese rol, debiese ajustarse a lo que establezca la Constitución”.

En relación con el rol de la Constitución y de cómo se deberían garantizar los derechos relacionados con la Libertad Sindical, Wendoling Silva comenta que, *“más allá del reconocimiento de estos derechos que debiese tener la Constitución, [ésta debe] establecer acciones que permitan la eficacia de estos derechos, es decir, acciones constitucionales que permitan ejercer este derecho”.* En este sentido, Karla Varas comenta que *“la Constitución debe ser clara consagrando garantías y fijando límites al legislador”.*

Así también, Sara Smok, de la CNC, menciona que en la nueva Constitución se aseguren una serie de libertades asociadas a lo mencionado anteriormente como por ejemplo

“la Libertad de Asociación, la Libertad de Reunión y Libertad de Emitir Opinión, entre otras... promover un sindicalismo robusto, profesional e independiente de toda elección [o] injerencia externa; y respecto de la huelga, creemos que la nueva Constitución debiese, entonces, garantizar los derechos de ambas partes involucradas, trabajadores y empleadores.”.

Seguridad Social y Sistema de Pensiones (206)

La Seguridad Social es una prestación social cuyo objetivo es responder a la reducción, temporal o permanente, de la capacidad de las personas de obtener ingresos a través del trabajo, mediante la entrega de dinero o el pago de servicios. Las prestaciones más comunes de la Seguridad Social son las Pensiones, los Seguros de Salud y los Seguros de Cesantía, a los que en los últimos años se han sumado los modelos de transferencias directas e ingresos garantizados.

A lo largo de las audiencias de este bloque, se identificaron 99 frases relacionadas a estos temas, en 9 audiencias diferentes. A continuación, sigue una sinopsis de sus principales argumentos.

Antecedentes y Experiencias de vulneración

El desarrollo de las políticas de Seguridad Social, tanto en Chile como en otros países, ocurrió al alero del surgimiento de los movimientos de trabajadores y de la politización de sus condiciones de vida y trabajo, llevando a adoptarse de manera relativamente rápida medidas para aliviar los riesgos de muerte, accidentes, enfermedades y pobreza en la vejez entre los trabajadores. En particular en el caso chileno, las primeras formas institucionales de seguridad social descenden directamente de organizaciones solidarias de trabajadores, como las mutualidades. Hugo Cifuentes, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) da cuenta de ello:

“En Chile tenemos un sistema de 100 años, la seguridad social a nivel global no tiene más de 120 años. Y si nosotros [preguntamos] ¿cuáles son los logros del siglo XX? Por supuesto que entre ellos tenemos que citar [este] logro para la Humanidad, [que] es el establecimiento de la Seguridad Social. [...] en las cajas de compensación, desde antiguo existe participación social. Las cajas, como provienen originalmente de aportes de empleadores y trabajadores, [estos] forman parte de la dirección superior, son los que dirigen la entidad. [...] existe en las entidades privadas chilenas sin fines de lucro el concepto de la dirección superior participada. La misma que había en las cajas de previsión.”

Los modelos corporativos de Seguridad Social no se limitan a las mutuales y las cajas de compensación: muchas de las antiguas cajas de previsión, que hoy persisten a través del Instituto de Previsión Social, eran entidades privadas, creadas por grandes empresas para gestionar los ahorros previsionales de sus trabajadores, o directamente por agrupaciones de trabajadores de un cierto rubro. Luego de la implantación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) en 1981, varias agrupaciones -como los sindicatos de Supervisores de Codelco y el Colegio de Profesores- formaron AFPs para sus asociados, las que terminaron en manos de privados en un proceso de consolidación financiera en las siguientes décadas.

Este modelo, si bien permite acercar la gestión de las instituciones a los trabajadores organizados, también implica un riesgo de segregación; en efecto, las antiguas cajas de previsión



no eran universales, y su solidaridad sólo operaba dentro de cada caja, tal como lo sigue siendo en las actuales CAPREDENA de las Fuerzas Armadas y DIPRECA de Carabineros de Chile.

Tal requisito de universalidad, que está establecido en los instrumentos relevantes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es característicamente ausente en los sistemas de Seguridad Social de corte corporativista, excluyendo así también a trabajadores informales, independientes y trabajadores de cuidados no-remunerados, que son algunos de los grupos más vulnerables a los riesgos que la Seguridad Social busca aliviar. Hugo Cifuentes, de la OISS, desarrolla lo que implica la universalidad de la Seguridad Social:

“[alcanza a] todos los que están en el territorio de la República, incluso sigue a los que se van, en materia de pensiones al menos. Y universalidad también respecto a las prestaciones, avanzar a la suficiencia de la integralidad, generar unidad”

Complementa a ello Álvaro Gallegos, de la Comisión de Seguridad Social del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible (FEDJS): *“La universalidad debe ser objetiva, es decir, cubrir todas las contingencias, y también subjetiva, todas las personas.”* Asimismo, Alejandro Valdebenito, del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile (COExpertos) advierte en contra de un sistema de Seguridad Social que, por omisión, excluya a importantes sectores de la población:

“No podemos renunciar a eso, porque si están fuera del modelo de Seguridad Social, es imposible financiar también un modelo de prestaciones sociales. Hemos abusado de los mecanismos de contratación, hemos abusado de los empleos a honorarios, lo hemos visto en el mundo público, en las universidades, en sistemas de salud.”

Cifuentes, de la OISS, menciona como referente internacional el Convenio 102 sobre la Seguridad Social (norma mínima) de la OIT, proponiendo su uso incluso si no ha sido ratificado por Chile. A saber, el convenio establece nueve ramas de prestaciones de Seguridad Social (asistencia médica, monetarias de enfermedad, desempleo, vejez, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, familiares, maternidad, invalidez y sobrevivencia), además de cuatro principios para su aplicación: la garantía de prestaciones definidas, la participación de empleadores y trabajadores en la administración de los regímenes, la responsabilidad general del Estado en las prestaciones y la administración institucional, y el financiamiento colectivo de las prestaciones mediante cotizaciones o impuestos. En lo referente al diseño del régimen de Seguridad Social, el Convenio 102 de la OIT admite regímenes universales; de asistencia social; o relacionados con los ingresos, de tasa fija o ambos.

En lo respectivo a la actual situación de la Seguridad Social en Chile, las y los ponentes de las audiencias presentan antecedentes que redundan en una imagen de insuficiencia en materia previsional, lo cual trasciende incluso al actual sistema de pensiones. Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) presenta una cita del informe de la misión Klein-Saks de 1955 para ilustrar que el funcionamiento de la previsión en Chile ha sido una materia contenciosa durante más de 60 años.

Álvaro Gallegos, del FEDJS, ilustra con cifras las insuficiencias de las actuales pensiones:

“Cuando comparamos estas pensiones autofinanciadas con los salarios referenciales, se evidencia que estas pensiones simplemente desploman la capacidad de consumo de los adultos mayores. [...] y entonces vemos que esa tasa de reemplazo, a nivel de salario mediano y pensión mediana, ¡es de 14%! Como todos ustedes seguramente saben, las recomendaciones de la OIT hablan de un 45 % como piso mínimo, y en general en los países desarrollados hablamos de una tasa de reemplazo de 60 a 70%, incluso mayores.”

Ahonda más Gallegos, en las brechas de género del actual sistema:

“Y si ustedes ven la diferenciación entre hombres y mujeres, verán que los hombres logran una tasa de reemplazo del 30% de pensión mediana sobre salario mediano, pero en el caso de las mujeres esto es realmente dramático: apenas un 7,9%.”

Natalia Corrales, del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora 8M (CTS CF8M) aterriza estas cifras a los montos de pensión, indicando que:

“no podemos dejar de mencionar que, en el caso de las mujeres, cuando hablamos de pensiones el 50 por ciento de las 472 mil jubiladas por vejez a través de las AFP, reciben una pensión menor a 149 mil pesos, que serían 138 mil si descontáramos el Aporte Previsional Solidario del Estado, y la pensión mediana para quiénes cotizaron entre 30 y 35 años, es decir, casi toda una vida laboral, llega solo a los 287 mil pesos, incluyendo las APS.”

Cox, de la AAFP, apunta a una de las causas principales de las bajas pensiones: la escasez de ahorro previsional tanto en términos de “lagunas previsionales” (periodos trabajados pero no cotizados), como de “subcotización” (depósitos de cotizaciones por montos inferiores al 10% de la renta imponible): *“el ahorro obligatorio se quedó corto para el aumento de las expectativas de vida, especialmente entre aquellos que -por variadas razones- tienen pocos años de*



contribuciones o contribuciones por montos muy inferiores a sus correspondientes ingresos del trabajo.” Adicionalmente a ello, un importante número de personas se hallan totalmente desprovistas de ahorro previsional, por no haber trabajado nunca en el mercado laboral formal; en particular, es el caso de las mujeres jefas de hogar, cuyo trabajo de cuidados no es remunerado. Ilustra el problema Gallegos, del FEDJS:

“Y este caso de las mujeres proviene del hecho de que el sistema reproduce la inequidad de género del mundo laboral, y no considera el compromiso cultural de la mujer con la familia y el cuidado. Además, la aplicación de tablas [de] expectativas de vida diferenciadas por sexo, ¡que es una práctica proscrita en los países desarrollados! En [los] Estados Unidos desde el año 1964 y en Europa desde el 2011. El sistema termina por discriminar con base en [el] género. ¡Insólito!”

Otras áreas de la Seguridad Social que cuentan con cobertura en Chile, como el Seguro de Cesantía, no fueron mencionadas; en lo referente a los Seguros de Salud (FONASA e ISAPRES), así como los de Enfermedades Profesionales y Seguros de Accidentes del Trabajo estos se han cubierto en el capítulo referente al Derecho a la Salud. Lo relativo a las prestaciones de Maternidad y otras políticas de Cuidados se han tratado en el capítulo referente al Derecho al Cuidado.

En lo respectivo al Sistema de Pensiones, durante los últimos 20 años se han sucedido una serie de reformas que han modificado el vigente modelo de capitalización individual. En 2002, la creación de los “multifondos” supuso un moderado traspaso de control del dinero ahorrado a los afiliados del sistema, pero también una mayor responsabilidad e incerteza sobre los montos finales de pensión. Álvaro Gallegos, del FEDJS, hace hincapié en el problema que esto significa para quienes buscan pensionarse:

“Esta situación de la capitalización individual, lo que significa al final del día es que las personas no tienen claridad sobre cuál es su derecho a pensión, no tienen claridad en ningún momento de su vida laboral, están sometidos a todos los riesgos de volatilidad financiera, de longevidad, etcétera.”

La siguiente reforma, en 2008, tomó las recomendaciones de la Comisión Marcel para adicionar un Pilar Solidario No Contributivo de alcance (teóricamente) universal y financiado con impuestos generales, que entrega pensiones o suplementos de pensiones a quienes no tuvieron oportunidad de ahorrar lo suficiente. En efecto, esta reforma convirtió el sistema de capitalización individual en uno mixto, pero en el que todo el componente solidario es financiado por el Estado, supliendo las bajas pensiones.

El problema de las bajas pensiones se mantuvo pese a la reforma de 2008, convocándose en 2015 a una nueva comisión de expertos, la Comisión Bravo, cuyas propuestas no se materializaron directamente en una nueva reforma. En este periodo también surge el movimiento social “No+AFP”, cuya postura, en favor de un sistema de reparto tradicional pero universalizado concitó apoyo en la audiencia del Comité de Trabajadoras y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8M: *“Derecho a la seguridad social: cuyo financiamiento sea con cargo al Estado y los empleadores. Establecimiento de un sistema de reparto, solidario y tripartito; adherimos profundamente a la propuesta de la coordinadora No+AFP.”*

En el marco de la pandemia del COVID-19 y el “súper-ciclo electoral” de 2019-2022, se ha acelerado el debate acerca de una nueva reforma previsional; en particular, una serie de reformas constitucionales que han autorizado el retiro de una parte de los ahorros previsionales para aliviar los efectos de desempleo y subempleo causados por la pandemia. Tales retiros han promovido entre el público la preferencia por un sistema previsional centrado en el ahorro individual y al que sea posible recurrir en casos de emergencia. Así lo acredita, en base a encuestas de opinión, Marta Salazar, del Movimiento “Con Mi Plata No”, quien refiere que:

“De una base de datos de 800 personas encuestadas [por CADEM], el 93% pide “que, en caso de fallecimiento del trabajador, los fondos sean heredados por su familia”, el 90% “que exista la posibilidad de hacer retiros anticipados en situaciones extremas, como ante una enfermedad catastrófica”, el 83% de este universo, “que las cotizaciones que aportan los trabajadores sean de su propiedad y vayan a una cuenta individual”, el 76% “que se puede elegir si los fondos administrados por un organismo estatal o privado”.

Constanza Bollmann, de la AAFP, reafirma el vínculo entre los retiros y el creciente rechazo a un sistema basado en el reparto, haciendo referencia a cambios longitudinales en encuestas de opinión:

“Con respecto a la estatización de los fondos de pensiones, la posibilidad de “estatizar los fondos de pensiones, [es decir, que el Estado pase a ser dueño de tus fondos y los de todos los cotizantes y los reparta entre los jubilados] tiene significativamente más detractores que adherentes, y en octubre de este año [2021], el desacuerdo aumentó a casi un 70%.”



Surge así una dicotomía entre los diseños recomendados por las instituciones expertas en previsión y las preferencias del público, siendo las primeras más favorables a modelos solidarios, como el que promueve Hugo Cifuentes de la OISS:

“La Seguridad Social, a través de la extracción de las cotizaciones parafiscales, también participa de la redistribución de la riqueza. El Estado, a través de los aportes fiscales y las cotizaciones, son un instrumento que permite la colaboración intra e intergeneracional. Y adicionalmente todo eso permite, a la vez, algo que [es] fundamental en todo Estado, que es la cohesión y la integración social de todos los habitantes.”

La preferencia del público es más cercana a un modelo mixto en el que los esfuerzos de solidaridad sigan exclusivamente a cargo del Estado, con una clara negativa por contribuir a la redistribución de los ingresos. Citando encuestas de opinión, Bollmann de la AAFP indica que:

“cuando se pregunta a las personas [cuál] creen que es la mejor solución para aumentar los montos de las jubilaciones a futuro, una amplia mayoría, más del 60% propone como solución “un sistema mixto con ahorro individual más ayuda estatal a las personas con pensiones más bajas”, esto muy por sobre las opciones de “un sistema de ahorro individual” sin aporte del Estado, y también por sobre la alternativa de “un sistema de reparto, [donde parte de tus cotizaciones financian las pensiones de todos los jubilados]”.

La recientemente adoptada reforma previsional, que reemplaza las prestaciones de Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario por una Pensión Garantizada Universal, menos focalizada, responde parcialmente a las experiencias documentadas en las audiencias, pero no modifica los aspectos contributivos (de ahorro) del Sistema de Pensiones, ni la institucionalidad en régimen.

Un enfoque relativamente novedoso respecto a las prestaciones de Seguridad Social es de un Ingreso Básico Universal (IBU, a veces UBI, por sus siglas en inglés). Este consiste en una transferencia directa de dinero, financiada a través de impuestos generales, a todas las personas, sin focalización ni condiciones; de tal manera, trasciende el alcance tradicional de la Seguridad Social, pues no responde solamente en casos de reducción de la capacidad de trabajo, sino que suplementa los ingresos incondicionalmente.

Una sola audiencia, de la Red Chilena de Ingreso Básico Universal (Red IBU), presenta argumentos en favor de esta alternativa. Gabriela Cabaña, de esta organización, presenta una serie de ventajas que una prestación de ingreso básico universal tendría frente a políticas más tradicionales: 1. mejor cobertura, menos errores de asignación y menos riesgos de “trampa de pobreza”¹³ que las políticas focalizadas; 2. menor costo administrativo al no exigir contraprestaciones ni evaluaciones sociales; 3. consolidación de programas sociales; 4. no discriminación a proyectos de vida y familia; 5. respuesta no precaria a tendencias de automatización y flexibilización del trabajo.

La misma Cabaña plantea que una prestación de Ingreso Básico Universal tendría repercusiones en las demás decisiones económicas de las personas beneficiadas, señalando que:

“Las personas con más dinero en su bolsillo, con un dinero seguro, aunque sea modesto pueden, por ejemplo, desde mañana romper ciclos abusivos de deuda, pueden desde mañana tomar mejores decisiones respecto a su alimentación y pueden tomar una serie de decisiones que impactan su vida directamente de formas que no son reemplazables por los sistemas de provisión social. Entonces por eso creemos que, en ese nivel, en el nivel de la libertad de los proyectos de vida, esto si tiene un impacto que no puede ser sencillamente compensado o subsumido dentro de la provisión de derechos sociales.”

Discusión de Contenidos

En lo referente a propuestas de articulado para fijar el Derecho a la Seguridad Social, es posible apreciar en las audiencias una tendencia mayoritaria en favor de un modelo universalista, solidario, con fuerte involucramiento del Estado como garante de las prestaciones, y que tiende a consolidar las distintas prestaciones en pocas instituciones o tipos de instituciones.

Cristóbal Ramos, de la Red IBU, presenta la siguiente propuesta:

“En primer lugar: “El Estado reconoce el derecho a la asistencia social y a un mínimo vital”. Segundo: “el Estado deberá destinar una cantidad de dinero suficiente para la preservación de los sistemas de servicios y prestaciones sociales dentro de la Ley de Presupuestos”. Y en tercer lugar: “El Estado asegurará la mantención de un sistema que proporcione a cada habitante de la

¹³ Una “trampa de pobreza” es el efecto de una política social que incentiva a las personas beneficiarias a mantenerse bajo un cierto umbral de vulnerabilidad con el objetivo de seguir recibiendo un beneficio, dado que la alternativa les resulta menos beneficiosa, considerando todos sus ingresos y gastos.



República una transferencia monetaria, periódica, individual, incondicional, imprescriptible e inembargable.”

Hugo Cifuentes, de la OISS, plantea un fuerte rol del Estado en la Seguridad Social:

“El Estado como responsable de este servicio público -porque eso es la Seguridad Social- asegura el derecho a las personas, establece, regula, promueve, controla, supervigila el ejercicio de este derecho, y, por supuesto, participa en su gestión. Es su responsabilidad la gobernanza general del sistema; el Estado no puede escapar de aquí, ni se puede dejar que escape. [...] El Estado debe proveer de un mínimo de protección a la población, si no hay un rol del Estado firme en establecer sistemas mínimos de protección, la Seguridad Social no está cumpliendo con su deber.”

Álvaro Gallegos, del FEDJS, propone un articulado con clara responsabilidad estatal en la Seguridad Social:

“El Estado mantendrá un sistema de Seguridad Social, que otorgará asistencia de prestaciones sociales irrenunciables, basado en los principios rectores de universalidad, solidaridad, suficiencia, igualdad, equidad, obligatoriedad, participación, unidad y automaticidad. Las prestaciones del sistema garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos que, por causa definida en la Ley, se pensionen. Otorgará Seguro de Cesantía a los trabajadores desempleados y cubrirá las contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia, enfermedad y accidentes del trabajo. Los ciudadanos podrán interponer acción constitucional cautelar de urgencia para asegurar el cumplimiento de las prestaciones del sistema. La Ley determinará la estructura del sistema, su institucionalidad, sus prestaciones y diseño de beneficios, su financiamiento y la regulación de las inversiones que se hagan con sus recursos, velando por la sostenibilidad financiera y actuarial del sistema.”

Alejandra Cox, de la AAFP, reconoce la relevancia del rol del Estado como base universalista de un Sistema de Pensiones:

“Con respecto a cómo solucionar el problema de las bajas pensiones [...], creemos que la solución incluye tres elementos: el primero, una Pensión Básica Universal que cubra las necesidades básicas y beneficie a todos a partir de cierta edad; esta pensión básica debería [tener un monto de] al menos la línea de la pobreza, y sería un enorme, tendría un enorme componente solidario, y mejoraría sustancialmente las pensiones; debe ser financiada por el Estado.”

Aldo Santibáñez, de la Confederación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), plantea la necesidad de integrar los actuales sistemas de Seguridad Social en base a principios universalistas:

“Creemos importante asegurar -a lo menos- el reconocimiento de la Seguridad Social como Derecho Humano, crear un sistema integral que proteja a la población frente a los riesgos sociales. Un principio clave en materia de derechos es la universalidad, la no discriminación e ir robusteciendo la protección social de manera progresiva.”

Una tendencia menos común pero igualmente presente es la que propone un modelo de gestión mixta, que resguarde el carácter de ahorro individual de las cotizaciones, y que deja en segundo plano las consideraciones de solidaridad y redistribución, en aras del reconocimiento del esfuerzo individual y la protección de la heredabilidad del ahorro.

Marta Salazar, de la Asociación Con Mi Plata No, representa esta postura, proponiendo:

“Que esta Constitución nos garantice que los ahorros previsionales y las cotizaciones futuras sean de nuestra propiedad, sean de los trabajadores, producto de nuestro esfuerzo. No queremos la nacionalización de fondos [... queremos tener] el derecho de elegir a [...] quiénes van administrar nuestros ahorros previsionales, sea un ente público, sea un ente privado, pero [que] nosotros [tengamos] el derecho a selección [...] Nosotros queremos trabajar y esforzarnos por nuestras propias pensiones, nosotros no podemos [aceptar] que nos descuenten un 6% para llevar a un Pilar Solidario.”

Alejandra Cox, de la AAFP, coincide en proponer un diseño mixto, en el que se resguarda la opción de ahorrar a través de entes no-estatales, aún si insiste en un rol suplementario del Estado para remediar algunas de las causas inmediatas del ahorro insuficiente:

“El segundo nivel sería un sistema de ahorro basado en cuentas personales, donde los trabajadores decidan libremente qué tipo de institución maneja esos ahorros: privada, mixta, cooperativa, estatal. Este sistema debe tener una tasa de contribución adecuada -y [hago] énfasis en lo adecuado- compartida entre trabajadores y empleadores. El Estado debe subsidiar las contribuciones en caso de desempleo, o en caso de interrupción de empleo por labores de cuidado, de modo de reducir las lagunas.”



Juan Sutil, de la Confederación de la Producción y el Comercio, en una audiencia centrada en el Derecho al Libre Emprendimiento, plantea un criterio general de restricción a las prestaciones sociales del Estado:

“[Es necesario] un Estado que promueva la capacidad para la mayor parte de los ciudadanos de ser económicamente autovalentes, asegurando, eso sí, un piso de Derechos Sociales para los ciudadanos más vulnerables; donde los bienes y servicios puedan ser provistos por el Estado y los privados, con un sistema mixto basado en la libre elección, consagrando el principio de colaboración. Donde no se comprometan recursos del Estado ofreciendo beneficios y protecciones a quienes no los necesitan y se evita que la gestión y prohibición de esos beneficios sociales se conviertan en fuente de poder político con un Estado que termina capturado por quienes administran y tienen autoridad para decidir respecto a la provisión de esos derechos sociales.”

Hugo Cifuentes, de la OISS, matiza sus declaraciones respecto al rol del Estado en la Seguridad Social, planteando en cuáles circunstancias es admisible la participación de privados en la gestión:

“En nada se opone a las fases señaladas, la actuación de los privados en la gestión de la Seguridad Social, en tanto ella se efectúe conforme a los siguientes criterios: [...] intervención en la gestión de regímenes legales, en tanto exista la delegación legislativa correspondiente. Es el Estado el que delega, el que invita, el que hace participar, a través de la delegación legislativa correspondiente. Están sujetas al control y supervigilancia estricta del Estado y la participación se puede hacer también, por un concurso, por licitación, por cobertura de prestaciones sociales, por inversión de los recursos de la Seguridad Social que están a cargo de entidades públicas.”

Garantías

En lo referente a garantías del Derecho a la Seguridad Social, las y los ponentes coinciden en que el diseño de instituciones garantes debe quedar mandatado a la Ley; respecto a las garantías jurisdiccionales, tanto Hugo Cifuentes de la OISS, como Álvaro Gallegos del FEDJS, plantean que la Constitución debe incluir al Derecho a la Seguridad Social entre aquellos cuyo cumplimiento es requerible a través de los Tribunales, en caso de que las instituciones competentes lo vulneren: Señala Gallegos:

“El Derecho a la Seguridad Social no está garantizado en la actual Constitución; el Estado funciona como garante de los derechos aquellos, pero no están garantizados; y es un garante a través de las instituciones que regulan este sistema, pero de hecho, incluso si usted cree que ésta está siendo perjudicado con un derecho de una prestación, usted no tiene acceso a los tribunales, no puede ir a reclamar a los tribunales ese derecho.”

Derecho a la Salud y Determinantes Sociales de la Salud (207)

Antecedentes y Experiencias de vulneración

Dentro de las audiencias que abordaron el Derecho a la Salud y otros derechos asociados, se observaron diversas experiencias de vulneración y antecedentes del funcionamiento del sector hoy en día en Chile. Así, un primer elemento que se debe considerar es que la salud es un fenómeno multidimensional, que no está limitado a la atención en salud o al tratamiento de enfermedades.

“Nos gustaría partir reconociendo que la salud va más allá de la ausencia de enfermedad. Por lo que es importante su perspectiva salutogénica, que entiende la salud no como un fin, sino como un medio para alcanzar el pleno desarrollo y bienestar de las personas y comunidades. Involucrando aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, culturales y del entorno” (Alicia Arias, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile)

Esta perspectiva, según señala Alicia Arias, está en consonancia con el *Küme Mogen* mapuche y otras múltiples cosmovisiones del bienestar y calidad de vida de pueblos originarios en América Latina. En este sentido, plantea que *“su énfasis se encuentra en la relación armónica entre el bienestar individual con el bienestar colectivo y del medio ambiente”*.

Es en este contexto que, tanto en las audiencias del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, como en la del Instituto de Estudios Estratégicos para el Desarrollo Humano (INEDH), destacan elementos de determinación social de la salud, es decir, que las condiciones estructurales y materiales en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen influyen sobre la salud de las personas. Así, por un lado, Camilo Bass (INEDH) señala que, si bien Chile tiene buenos indicadores de salud, estos tienen prevalencias e incidencias desiguales e inequitativas.

“Si bien nuestro país tiene buenos indicadores macro comparado con nuestros países vecinos, de baja mortalidad infantil, alta expectativa de vida, en realidad hay una situación interna que es muy desigual, muy inequitativa y además tenemos una muy alta carga de multimorbilidad. Tres



de cuatro adultos en nuestro país tienen dos o más enfermedades crónicas, que requerirían atención médica individual y esto se da sobre todo en personas de menos recursos” (Camilo Bass, INEDH)

Por su parte, las académicas del Departamento de Atención Primaria de la Universidad de Chile presentan un ejemplo más claro, asociado a la pandemia.

“cuando observamos la elevada prevalencia y mortalidad por COVID-19 en comunas periféricas de la Región Metropolitana -como pueden apreciar en café y en rojo-, esta situación no tiene que ver con las características individuales de las personas que viven en esas comunas -como serían los factores biológicos o genéticos-, sino con las características colectivas de esas poblaciones -como son la elevada pobreza material, el hacinamiento crítico, el trabajo precarizado y la producción ambiental que se concentra en esas comunas” (Alicia Arias, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile)

Algunas de estas inequidades también están asociadas a factores estructurales, donde, por ejemplo, el acceso a centros de salud en regiones está limitado a las capitales regionales.

“Cuando se le explica las personas de Taltal que tienen que ir a atenderse al hospital de Antofagasta, o a la clínica que está en Antofagasta, pero no le dicen que tienen que recorrer tres horas en un bus, lleno de curvas; levantarse las 5 la mañana y volver a su hogar a las 21 horas, estamos señalando que hay que obviamente tener una perspectiva territorial” (Aldo Santibáñez, FENPRUSS)

Aldo Santibáñez, de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), contextualiza la consagración constitucional actual del Derecho a la Salud, indicando que:

“Si bien la Constitución del 1980 incluye derechos -como Salud, Pensiones, Educación, Trabajo y otros-, estos se ordenan en la libertad de elección de una provisión pública o privada, provocando una segmentación de la población y una fragmentación institucional que producen inequidades importantes en los resultados de la seguridad social”

En este marco, el modelo chileno cuenta con un sistema de provisión privada de salud, que fue cuestionado por Camilo Bass del INEDH, señalando que es un sistema que privilegia por nivel socioeconómico, pero también selecciona a personas con menores riesgos de enfermar. Generando además usuarios cautivos en sus planes de salud, dado que cambiar de plan de salud es difícilmente costeables por las personas que tienen preexistencias¹⁴.

“(…) La cartera de personas de Isapre, [son] 3 millones y media, versus 14 millones y más de personas de FONASA (...) tienen -las personas de FONASA- hasta un 33% más de riesgo de enfermar, por lo tanto, de necesitar recursos. (...) las personas de ISAPRE, [son] personas que tienen, como yo decía, mejores sueldos, mejor condición de salud, que generalmente no se enferman y tienen además más recursos en caso de necesitarlo.”

Sin embargo, Gonzalo Bustos de la Asociación Gremial de ISAPRES de Chile, indica que son parte de la seguridad y destaca su interés por seguir siéndolo. Indicando con ello que,

“Tenemos un rol público y dentro de ese rol público, aparte de las atenciones y el trabajo diario que se debe realizar, también entendemos que hay un aporte del sector privado en el desarrollo del sector salud y la posibilidad de mejorar el sistema de salud para todos los chilenos”

El mismo Bustos, además puntualiza con antecedentes respecto al financiamiento de la salud privada, indicando que el 60% del financiamiento proviene del sistema de ISAPRES, y que este *“permite mantener una red privada a lo largo de Chile, lo cual permite que tanto personas del sector público como del sector privado puedan acceder a las atenciones que este sector le otorga”*. Más aún, indica que, contrario a lo que se piensa, la salud privada no tiene tantos más recursos que la salud pública.

“La verdad es que eso fue real hace años atrás, sin embargo, durante este siglo, el Estado ha aumentado su presupuesto, de tal forma de que, actualmente, cuando se comparan los recursos disponibles por persona, sin las licencias médicas, [...] el promedio de gasto en el sistema público y en el sistema privado, son muy similares, son muy parecidos, en atención de salud” (Gonzalo Bustos, ISAPRES de Chile A. G.)

Luego, otra temática abordada en las audiencias dice relación con algunas experiencias internacionales. Esto, es abordado particularmente por las expositoras del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, donde presentan el caso de Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Bolivia. Respecto de Reino Unido es destacado como el

¹⁴ Las preexistencias, a saber, corresponden a las enfermedades que hayan sido diagnosticadas a los afiliados con anterioridad a los contratos de los seguros de salud y que determinan el precio final a cobrarse de parte de la entidad privada.



prototipo de un sistema de salud universal. Por su parte, el caso de Canadá lo destacan como un modelo de gobernanza en salud a considerar en tanto,

“el sistema de salud del canadiense incorpora luego en la gobernanza, la participación de la ciudadanía, e incluso en la administración de establecimientos de salud. Ahí existe participación de privados, pero sin fines de lucro que pueden, en su gobernanza, incluso administrar los establecimientos” (Alicia Arias, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile)

Por último, señalan los modelos boliviano y neozelandés por sus consideraciones respecto a la pertinencia cultural, atendiendo la diversidad de pueblos originarios que integran sus países.

“Coexisten con sistemas médicos indígenas, tanto el canadiense como el neozelandés y, más cercano en la región, el boliviano. En el sistema de salud boliviano, ya, hay un viceministerio de medicinas indígenas que tiene toda una estructura de interrelación con el sistema de salud formal” (Alicia Arias, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile)

Por último, se encuentra en las audiencias un caso particular que relata sobre el COVID prolongado como una patología que surge como consecuencia del contagio de SARS-CoV-2 (o más concretamente de la enfermedad por COVID-19), pero que ha sido invisibilizada por el sistema de salud.

“Un 58% [presenta] fatiga, dolores de cabeza, trastornos de atención, pérdida del olfato, pérdida de memoria, pérdida de la capacidad funcional y motora muchas veces. También se ha descubierto que esta sintomatología se ha presentado en niños, adolescentes...” (André Saravia, Long COVID Chile)

“...Que hoy en día acá en Chile no se nos ha reconocido, todo lo contrario, se nos discrimina dado que la sintomatología asociada se difiere (sic) de como una crisis de ansiedad, de que son síntomas psicosomáticos, cuando los efectos en el cuerpo no son así y básicamente el cuerpo médico sanitario prefiere referir de que el paciente está con una crisis de ansiedad que investigar qué ocurre más allá o que está alterando su organismo. Ya que se ha descartado a nivel global de que la COVID sea una enfermedad respiratoria, sino que es una enfermedad principalmente inflamatoria que afecta a nuestro sistema nervioso central, sistema nervioso simpático y parasimpático lo cual nos genera alteraciones multisistémicas” (André Saravia, Long COVID Chile)

Discusión de Contenidos

Es generalizado entre los expositores el planteamiento de que es necesaria y urgente una reforma al sistema de salud y que para ello modificar la consagración constitucional del Derecho a la Salud es un avance hacia dicha reforma. Ejemplo de aquello se observa en lo planteado por Gonzalo Bustos de ISAPRES de Chile, cuando indica que *“el sistema de salud efectivamente requiere de una reforma, requiere avanzar, materializar, una reforma importante, sustantiva y profunda. Tiene que aprovechar los roles complementarios del sector privado y del sector público”*.

En este sentido, Alicia Arias, del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, indica que esta reforma debe abordar las causas estructurales que hacen a los grupos vulnerables más susceptibles de enfermar, abordando los determinantes sociales de la salud.

“el Estado debe garantizar el Derecho a la Salud, más allá de la atención de salud, en la nueva Constitución. Y para consagrar este derecho, el Estado debe garantizar, por una parte, políticas públicas que aborden las causas que determinan la salud y enfermedad de las personas. Esto es, políticas relacionadas al trabajo, al medioambiente, a la justicia social, al acceso a la educación, y en todas las políticas públicas debe considerarse su repercusión en el estado de salud” (Alicia Arias, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile)

En esta misma línea, Fernando Araos, del Colegio Médico de Chile indica que *“el Derecho a la Salud no solamente está conformado por el acceso a las prestaciones, sino también en cómo el Estado resguarda las condiciones de vida saludables”*. Donde este derecho tiene una dimensión de acceso a la salud, pero también el establecimiento de condiciones para una vida saludable - obligando al Estado a proteger a la población más vulnerada y a actuar sobre factores de riesgo de enfermar.

Entre las audiencias también se identifican algunos principios o enfoques que debiese tener la consagración de un Derecho a la Salud. Así, un primero de ellos es lo planteado por Gonzalo Bustos de ISAPRES de Chile quien indica que una reforma de salud debe tener un enfoque sobre los individuos, que garantice una atención digna -la que caracteriza como oportuna y de calidad.

“La reforma debe ser vista desde la perspectiva de la persona. La persona es el centro respecto del cual cualquier modificación que se haga debe ser considerada, de tal manera de avanzar en mejorar los servicios respecto de la población”.



Por su parte, Alicia Arias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile plantea que el Derecho a la Salud debe contar con un foco integral de salud, *“con énfasis en la participación, la promoción de la salud y del buen vivir. Respetando e incorporando la atención de salud, los saberes científicos, populares y ancestrales de los pueblos indígenas de nuestro territorio y la protección digna de todas las personas del país sin discriminación alguna; y enfocado en garantizar una vida digna”*.

A esto, añade que debe ser un sistema solidario, integrado, participativo, descentralizado y plurinacional. Así, plantean que debe ser solidario, *“porque sabemos que existen determinantes que hacen la salud de ciertos grupos más frágil y como sociedad podemos compartir esos riesgos de forma solidaria y equitativa. Así, los que tienen más recursos contribuyen al sistema por los que tienen menos”*. Integrado, en la medida que ello permite la organización y coordinación de la red sanitaria, *“para responder eficazmente a las necesidades de toda la población, evitar la fragmentación de los cuidados de las personas que atraviesan esta red y limitar procedimientos y gastos innecesarios”*.

Por último, la misma expositora plantea la idea de descentralización, participación y plurinacionalidad, con el objetivo de reconocer la perspectiva y experticia de las comunidades sobre su propia salud -cosa que el sistema actual no reconoce. Esta idea es compartida por Aldo Santibáñez de FENPRUSS, quien indica que,

“Lo que debiera hacer el Estado y el modelo de salud es asegurar que los distintos modelos de salud de los distintos pueblos, que en este caso en Chile habemos 10 pueblos originarios, tengan los mecanismos para poder desarrollarse, pero no al alero del Estado, no al alero de la medicina tradicional, sino que en paralelo a ella. Estableciendo los puentes de comunicación necesarios para que sus agentes puedan conversar respecto de ciertos casos, pero dónde ambos modelos puedan ser debidamente validados a través de sus agentes”.

Tanto en la audiencia de Alicia Arias y Soledad Barría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, como en la de FENPRUSS un elemento clave destacado dice relación con la importancia de que el sistema esté basado en atención primaria y en el fortalecimiento de una red integrada de servicios de salud. Esto, en tanto los sistemas basados en servicios de atención primaria *“tienen mejores resultados sanitarios, son más equitativos, son más eficientes, son menos costosos y tienen mayor satisfacción de las personas que los utilizan”* (Alicia Arias, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile). Además, según señala Aldo Santibáñez de FENPRUSS, esto debe ser así porque *“la atención primaria es la estrategia de desarrollo de las comunidades, porque la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar general”*.

Fuera de estas consideraciones particulares, un principio generalizadamente compartido entre las audiencias fue la universalidad del Derecho a la Salud. Ejemplo de ello, es lo planteado por Gonzalo Bustos de las ISAPRES de Chile, cuando señala que debe haber un sistema universal, idéntico para toda la población, sin importar el nivel de ingreso, el género, la edad o las enfermedades que tenga.

“Nosotros pensamos que un futuro sistema de salud debe contar con plan de salud universal, que sea el mismo para toda la población, que sea el espejo de las metas que fije el Estado, (...) el Ministerio de Salud (...) Tiene que realmente ser genuinamente accesible a todas las personas y el otorgamiento de los beneficios de los planes a la universal deben ser realizados tanto por instituciones públicas o privadas”.

En la misma línea, Alicia Arias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile plantea que debe ser universal porque *“(...) debe incluir a todas y todos sin discriminación y sin barreras de acceso. Todas y todos los que vivimos en este territorio debemos formar parte de este sistema universal, lo cual no necesariamente puede garantizarse en un sistema basado solamente en el aseguramiento”*. En la misma línea es que Camilo Bass del INEDH plantea que la manera de hacer efectivo el Derecho a la Salud es a través de sistemas universales, que contemplen mecanismos de participación y sean pertinentes culturalmente con las poblaciones que atienden.

“Donde no existe un seguro, no es necesario tener un FONASA porque finalmente todos y todas aportamos a este sistema, idealmente a través de los impuestos generales, y al momento de ocupar el sistema simplemente es por necesidad. Da lo mismo si uno es rico, pobre, o mediano, o clase media, lo que importante es cuál es la urgencia que tiene y en el momento de ocupar el sistema no se le cobra” (Camilo Bass, INEDH)

Fernando Araos del Colegio Médico de Chile especifica las dimensiones que implica que el sistema sea universal y público, señalando que *“contempla atenciones preventivas, curativas y de rehabilitación durante todo el ciclo vital de las personas, priorizando por criterios sanitarios”*.

Otra discusión relevante planteada en las audiencias tiene que ver con el rol del sistema público y el sistema privado. Si bien es generalizado el planteamiento de la necesidad de que el sistema



esté integrado por la salud pública y privada, los distintos expositores realizaron diversas consideraciones a este respecto.

Por una parte, Gonzalo Bustos de ISAPRES de Chile destaca que el plan universal debe estar *“guiado, controlado, [y] fiscalizado por el Estado, de tal manera de aumentar la satisfacción de cada uno de los individuos”*. Este rol fiscalizador, es compartido por la exposición de Fernando Araos del Colegio Médico planteando que *“el Estado, como garante del derecho a la salud, tiene la función de rectoría del sistema, lo que incluye su regulación, supervisión y fiscalización”*.

Aun así, Gonzalo Bustos de ISAPRES de Chile advierte que se debe tener cuidado con los cambios que se hagan sobre el sistema de salud.

“Hay que tener mucho cuidado en cualquier cambio que se realice de este sistema, que no vaya a afectar el funcionamiento que pueda impedir en el corto plazo la operación tanto del sector público o privado, o que pueda desmejorar la operación tanto al sector público como privado. Afectando, con esto, el acceso a atención de salud de toda la población”.

Por su parte, Alicia Arias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, plantea que Derecho a la Salud debe erradicar el lucro, lo que es igualmente planteado por Fernando Araos del Colegio Médico de Chile y por Camilo Bass del INEDH. Así, la expositora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile plantea que,

“(…) la salud es un derecho fundamental de la ciudadanía y no puede estar sujeto a los intereses de lucro de actores privados. La actual mercantilización de la salud es profunda y en esto la nueva Constitución debe ser inapelable. De lo contrario, siempre quedarán resquicios disponibles para el usufructo privado de la vida y salud de las personas”.

En este sentido, Soledad Barría en la misma exposición indica que el sistema incluye prestadores públicos y privados eventualmente en las mismas condiciones,

“(…) siempre sean sin fines de lucro y que estén dentro de la misma red de atención. Pudiera haber otros eventualmente, otros prestadores privados, que no estén y esos no están dentro del sistema universal. Pero aquí el sistema incluye los prestadores públicos, aquellos que forman parte de la red de este mismo sistema público, y el financiamiento público que, en este caso, sería un símil de FONASA”.

Fernando Araos del Colegio Médico especifica un poco más el rol de los prestadores privados en el sistema de salud indicando que pueden existir complementariamente, pero que *“no tenemos Seguridad Social si es que las personas se priorizan según la capacidad de pago”*.

“(…) Estos pueden existir en modalidad complementaria o suplementaria, es decir, éstos no pueden duplicar la función del sistema público pues esto rompe el principio de equidad, pero sí pueden ofrecer mejores condiciones de hotelería, por ejemplo, cobertura de condiciones no incluidas en el sistema de salud universal”

En este mismo sentido, Aldo Santibáñez de FENPRUSS, sitúa con la misma importancia el Derecho a la Salud como un eje clave de la Seguridad Social.

“Proponemos que la nueva Constitución reconozca y procure garantizar que en Chile existirá un sistema de salud que se estructure en base los principios de la Seguridad Social: solidaridad, integralidad y universalidad.”

En términos de financiamiento del Derecho a la Salud, algunos expositores hacen ciertas consideraciones. Por ejemplo, dentro de los principios que indica Alicia Arias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile plantea que el sistema de salud debe estar suficientemente financiado. De la misma forma, tanto Aldo Santibáñez de FENPRUSS como Camilo Bass del INEDH especifican más claramente el monto, señalando ambos que el sistema debe contemplar al menos 6 puntos del PIB.

Gonzalo Bustos de las ISAPRES de Chile, plantea que una vía es la generación de un fondo de compensación que permita dar factibilidad al sistema. Indicando además que esto garantiza una libertad de elección y un funcionamiento que deje atrás los niveles de riesgo y pase a funcionar desde un principio de solidaridad.

“(…) De tal manera de que la persona pueda elegir entre estar en el FONASA, estar en el sector público, o estar en alguna institución privada. Como, por ejemplo, una ISAPRE que otorga ese mismo plan de salud universal, bajo las mismas condiciones”.

Garantías

Dentro de las garantías del Derecho a la Salud entre las audiencias se presentaron propuestas de garantías normativas e institucionales. En este sentido, por un lado, desde la FENPRUSS destacan la necesidad de tener normativas que puedan hacer del Derecho a la Salud uno justiciable.



“Se [debe] contar con garantías constitucionales, esto implica abrir la posibilidad de hacer requerimientos a la justicia para obligar al cumplimiento por parte del Estado de un determinado derecho” (Aldo Santibáñez, FENPRUSS).

Por otro lado, Fernando Araos del Colegio Médico de Chile, indica la necesidad de tener una institución que sea garante del derecho. Señalando que *“para hacer efectivo este derecho, se propone una defensoría de la salud que contribuye a la efectiva garantía del derecho a la salud y que busque la protección activa de estos derechos”*.

Además, Gonzalo Bustos de la asociación gremial ISAPRES de Chile, indica que es importante que el Estado fiscalice el cumplimiento de un plan universal de salud que tenga facilidades para eliminar las preexistencias en el sistema privado. Así también, desde el Colegio Médico de Chile se hace una mención a que el Estado tiene esta responsabilidad para que se garanticen los principios del Derecho a la Salud enmarcados en la Seguridad Social. Priorizando *“la atención según necesidades de salud y no capacidad de pago”*.

Salud y Seguridad en el Trabajo desde una perspectiva de derechos

Asociado tanto con el Derecho al Trabajo como con el Derecho a la Salud, se encuentra la Salud y Seguridad en el Trabajo. Esta dimensión, si bien se puede enmarcar dentro de los determinantes sociales de la salud, recoge tanto elementos de condiciones de trabajo como elementos propiamente de salud.

Por ello, la presente sección recoge las afirmaciones realizadas en torno a la Salud y Seguridad en el trabajo. Este tema fue abordado centralmente en dos audiencias -específicamente la de la Sociedad Chilena de Ergonomía (SOCHERGO, en adelante) y la del Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos de Chile. Además, otras tres audiencias hacen mención de este aspecto.

Antecedentes y experiencias

Uno de los primeros antecedentes planteados por los expositores dice relación con las dificultades de acceso a la salud laboral en Chile, ello, tanto por falta de cobertura, así como la subcalificación de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. Así, Mauricio Santos de la SOCHERGO plantea que,

“El acceso a la salud laboral es más difícil que el acceso a la salud común y, de hecho, otro dato importante es que el 30% de los trabajadores no están cubiertos por el seguro. Nosotros podemos observar en el sistema que hay informalidad, ocultamiento, subdeclaración, subcalificación de accidentes y enfermedades laborales”.

En este sentido, es que el mismo expositor de la SOCHERGO plantea que si bien existen muchas denuncias anuales de accidentes o enfermedades profesionales, el sistema tiene dificultades para entregar asociar dichos accidentes o enfermedades al trabajo.

“Entonces, (...) entre el año 2012 y el año 2019, por datos de la SUSESO, nosotros podemos observar que 500 mil denuncias de accidentes en promedio para cada año, falleciendo en promedio para cada año 270 personas. Hay 5800 denuncias de enfermedades profesionales y el 80% de esas denuncias de enfermedad[es] profesionales fueron calificadas como comunes, eso significa que fueron rechazadas”.

Así, el mismo dato de subcalificación de enfermedades profesionales es señalado por Fabián Ponce del zonal oriente de la CUT. Indicando que, *“esa precarización es justamente la contraposición al Trabajo Decente, que tiene muchas dimensiones”*.

En este sentido, Mauricio Santos de la SOCHERGO, plantea que el Derecho a la Salud y Seguridad en el Trabajo está consagrado en otras constituciones a nivel internacional, indicando a México, Honduras, Bolivia y Polonia, y añadiendo que *“por eso nosotros creemos que vale la pena hacer esta revisión e incluirlos en esta discusión”*. Además, el mismo expositor añade que en la misma Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo de Chile se menciona *“proponer la consagración constitucional de la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental específico de los trabajadores y trabajadoras en el marco de los derechos laborales y de la Seguridad Social universalmente reconocidos”*.

Discusión de Contenidos

En términos de contenido, se observa entre las audiencias un interés de garantizar el Derecho a la Salud y Seguridad en el Trabajo en la futura Constitución, incluyendo transversalmente a todos los rubros.

“Nuestra propuesta, en estricto rigor, es incluir en la nueva Constitución Política de Chile como parte de los Derechos Fundamentales de los trabajadores y trabajadoras la seguridad y la salud en el trabajo” (Mauricio Santos, SOCHERGO)

Ahora bien, en términos de cómo se debiese hacer efectivo este derecho, se presenta un consenso entre los expositores que discuten la temática, de integrar la salud ocupacional dentro



del sistema de salud general. Esto, es planteado tanto por Mauricio Santos de la SOCHERGO, como por Camilo Bass del INEDH.

“A propósito de las mutualidades (...) en otros países lo que hay es un sistema integrado; no se separa la atención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Es un tema que hay que conversar, si vamos a hacer un sistema integrado total o si se va a mantener en paralelo esta tensión” (Camilo Bass, INEDH).

“Lo que nosotros proponemos es generar este cambio a nivel constitucional de forma que terminemos con los parches y revisemos todo el marco normativo y generemos efectivamente un Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque lo que hoy tenemos es una ley, es un seguro. No hay un sistema integral que acoja esta temática” (Mauricio Santos, SOCHERGO)

Por último, vale considerar que Andrés Saravia de Long COVID Chile, hace algunas consideraciones de salud laboral para el personal médico, solicitando ampliar el espectro de enfermedades que se consideran como producidas por el trabajo.

“Abrir una cartera de prestaciones de seguridad social y médica, educación y capacitación para el personal médico y que se reconozca como una enfermedad profesional a todo quien se ha contagiado en su lugar de trabajo, no sólo para el personal sanitario y derecho a la salud y rehabilitación física y mental”.

Educación (208)

El Derecho a la Educación, conjuntamente con la Libertad de Enseñanza -discutida en el bloque temático de Libertades Civiles y Políticas, conforman el ámbito constitucional relevante a la educación; otras materias asociadas se discuten además en sus secciones correspondientes: la educación física en el capítulo sobre Derecho a la Actividad Física, y las condiciones laborales de los trabajadores de la educación en el capítulo sobre Derecho al Trabajo. El Derecho a la Educación surgió como tema en las audiencias de este bloque en un total de 9 audiencias, hallándose 150 frases en ellas.

Antecedentes y Experiencias de vulneración

Uno de los elementos que se destacan en las audiencias respecto a la educación es su capacidad para dar forma a la sociedad. Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile y representando al Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), plantea que la pérdida de centralidad de la educación pública es una de las causas de la segregación social que desembocó en Estallido:

“Si me preguntan a mí, un factor clave en el Estallido Social es haber destruido el factor más importante de cohesión social, que era precisamente este sistema de educación pública, inclusiva y de excelencia, que articulaba a los niveles básicos, medio, profesional y universitario.”

Los referentes constitucionales comparados y los del Derecho Internacional de los Derechos Humanos son relevantes al momento de definir cómo constitucionalizar el Derecho a la Educación. El mismo Vivaldi, del CUECH, favorece la garantía de la educación superior, la gratuidad de la educación pública y la preeminencia de la prestación estatal en base a la práctica de las constituciones en el exterior, mientras que Verónica del Pozo, de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) pone atención en los instrumentos internacionales:

“Fíjense ustedes que el derecho a la educación es el que tiene, probablemente, el mayor nivel de desarrollo en los pactos y tratados de derecho internacional. Y esto tiene una razón muy clara: a la comunidad internacional no le bastó meramente con reconocer el acceso a un servicio, sino que se detectó la necesidad de definir cuáles serían los valores y principios que, a través de la educación, queremos que forjen nuestra comunidad social y política.”

Adicionalmente, Ennio Vivaldi, del CUECH, puso especial énfasis en hacer la distinción entre las instituciones de educación públicas o privadas:

“Las universidades públicas no defienden los intereses ideológicos, políticos o económicos de ningún dueño, como si muy legítimamente, -muy legítimamente- pueden hacerlo aquellas que tienen dueño. Porque, precisamente al no tener dueño, pertenecen a toda la sociedad. [...] Esta ambigüedad, primero, no se da en ningún otro país del mundo. En cualquier otro país del mundo si usted va a decir que una universidad privada es una universidad pública, sencillamente no saben de qué está hablando.”

Es un diagnóstico común entre las audiencias el señalar que el estado de la educación pública ha decaído en las últimas décadas, vinculando el proceso con la liberalización de la educación superior, la municipalización y liberalización de la educación elemental, y la masificación y bancarización del acceso a la educación superior (en orden cronológico). Como signo de estos procesos, Jorge Ibáñez, de la fundación Educación 2020, afirma que *“[Hoy] el rol del Estado en la educación pública se limita principalmente al financiamiento. Chile tenía una trayectoria constitucional en que la educación pública tenía un rol fundamental, en que había una administración de la educación pública”.*



Ennio Vivaldi, del CUECH, vincula estos cambios directamente al programa de transformaciones económicas de la dictadura, asegurando que:

“Es un modelo, el de la Constitución del [año 19]81, es algo increíble. Durante el gobierno de Pinochet se dijo expresamente [que] no habría nada peor para la educación del país que [el que] haya educación pública, gratuita, de buena calidad, porque con eso se desincentiva que las familias pongan plata para mejorar la educación. Eso se dijo, ¿ya? Eso no lo ha dicho nunca nadie [más] en el mundo. De ahí partimos, de[sde] ahí, desde luego que hay un total abandono a las universidades y que se las arregle cada uno como pueda.”

Daniel Otárola, del Grupo Toparquía, critica el modelo de financiamiento escolar a través de vouchers¹⁵ dependientes de la asistencia de las y los estudiantes:

“creemos principalmente que el sistema de financiamiento vía voucher ha sido malísimo para la educación pública. De hecho, es un sistema que es a la demanda, es decir, cuando los niños [y] las niñas asisten a los establecimientos, a clases, se activa el financiamiento. Si no asisten, quedan sin financiamiento ese día.”

Se extiende luego el mismo Otárola sobre la participación de las escuelas particulares privadas y particulares subvencionadas en el ámbito de la educación elemental, entregando cifras y un diagnóstico por parte de observadores internacionales:

“La evidencia: 6 de cada 10 estudiantes asisten a escuelas privadas, y [esto es] casi el triple del promedio regional y mundial. Cuando tenemos todo un marco legal internacional que, de una u otra manera, protege [para] que no se genere un impacto negativo desde parte de los privados en la educación: está el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2015, el Informe Relator de la Educación del 2014, el Comité de Derechos de la Infancia, etcétera. Y eso va demostrando que Chile, de una u otra manera, está sobre privatizado”

Una situación más preocupante es la de las escuelas que educan a jóvenes en contextos de encierro, como los que residen en centros del SENAME. La actual regulación, asegura José Rebolledo, de la Red de Educación en Contextos de Encierro de Adolescentes (Red ECEA) es que estos estudiantes proveen de vouchers equivalentes a los de la educación para adultos, y por el mismo motivo, no pueden acceder al financiamiento adicional de la Ley SEP, pensada para favorecer a escuelas en contextos de vulnerabilidad. Indica Rebolledo:

“Respecto a la subvención escolar, manifestamos con especial preocupación que las y los adolescentes privados de libertad se encuentran gravemente amenazados en el ejercicio del Derecho al acceso a la Educación, ya que el Decreto con Fuerza de Ley número 2 de 1998 sobre subvención del Estado en establecimientos educacionales no considera las características de la educación de las y los adolescentes privados de libertad, de hecho la subvención que reciben estos establecimientos es la más baja del sistema y por ser educación [...] de adultos, tampoco podemos acceder a la ley SEP.”

En lo referente a la liberalización de la enseñanza superior, Ennio Vivaldi, del CUECH, apunta a un desmedro estructural de las universidades estatales, indicando que *“apenas un 26% [del financiamiento de las universidades estatales proviene] del aporte basal y fondos concursables [...] Las universidades estatales tienen un 15,6% de la matrícula de educación superior.”* Aunque no explicita en su presentación cuál es el criterio específico para considerar a una universidad como “pública”, Vivaldi da a entender que actualmente no existen:

“Lo que se ha cuestionado es si vamos a volver a tener, o no, universidades públicas. Y yo veo todos estos juegos de humo y voladores de luces, que apuntan precisamente a que persista el ideario chicago boy de que no haya universidad pública, [que] no haya educación pública.”

Víctor Mora, del Grupo de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios de la Universidad del Bío Bío, fija el inicio de los problemas asociados a la liberalización en el periodo de expansión de la matrícula universitaria, en la década de los 2000:

“En el tiempo de que las universidades públicas y estatales comenzaron a modernizar[se] y, en realidad, tercerizar gran parte de las funciones, reduciendo los puestos de trabajo permanentes y basándose en un modelo de trabajo más flexible. Estas nuevas funciones comenzaron a requerir de la Universidad, ante la masificación de la educación superior, en conjunto con los impulsos por el aseguramiento de la calidad, la internacionalización de las universidades y las políticas para promover la reflexión de nuestros estudiantes.”

Otro elemento abordado entre las audiencias dice relación con la municipalización de los establecimientos educativos públicos. La municipalización de la educación elemental estatal, esto

¹⁵ Voucher, término en inglés que se puede traducir directamente como “cupón”, refiere a un método de financiamiento de los servicios en los que los fondos se entregan indirectamente a éstos, dependiendo de que efectivamente las y los usuarios usen el servicio; el modelo opuesto es uno de “financiamiento basal”, en el que la cantidad de fondos entregados no depende del uso del servicio, sino de un presupuesto.



es, el traspaso de su administración desde el Ministerio de Educación a los gobiernos locales es señalada como causa de algunos de los problemas que las audiencias diagnostican. Daniel Otárola, del Grupo Toparquía, imputa a la municipalización como la causa de que hoy solo el 33% de las y los estudiantes de educación básica y media asistan a establecimientos municipales (públicos), tildando el proceso de “trágico” y como una “jibarización”.

Luego de las movilizaciones estudiantiles, una de las medidas adoptadas desde el Estado fue revertir esta municipalización, al crearse en 2017 el Sistema Nacional de Educación Pública. Su implementación, desde esa fecha, ha sido parcial, habiéndose creado, hasta esta fecha, 11 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que asumen a las escuelas y liceos de 41 comunas. Mauricio Videla, representante del comunal del Colegio de Profesores de Santa Juana, tiene una mirada crítica de este proceso, acusándolo de “privatización”, a pesar de que la institucionalidad de los SLEP es la de servicios estatales descentralizados y coordinados por la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación. Plantea Videla que:

“Hoy en día tenemos una política de desmunicipalización del sistema educativo que más bien habla de otra entidad que viene a fortalecer este sistema subsidiario, ya que son los [Servicios Locales de Educación Pública], SLEP, y la verdad que, como Colegio de Profesores, nosotros esperamos que la desmunicipalización se diera con una suerte de entidad comunal del Ministerio de Educación: sigue profundizándose la privatización.”

Una postura opuesta presenta el académico de la Universidad San Sebastián, Fernando Peña, quien se muestra esperanzado en que la desmunicipalización en curso sea “el punto de inicio de una mejora radical, de una transformación ojalá definitiva de la educación pública.”

Sin embargo, los problemas de la educación pública persisten en otros ámbitos. Roberto Pizarro, presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca, a través de presentar las irregularidades que aquejan a su casa de estudios, ilustra la debilidad institucional de las universidades públicas ante situaciones de abuso de poder, señalando que “a pesar de que la prensa libre ha denunciado, hay una persistente incapacidad institucional de investigar al respecto. [...] inclusive hay denuncias de Diputados de la República, en que [se] han planteado situaciones que son graves, [y que] parecen no encaminarse a nada.”

Otro ámbito en el que resulta más complejo el ejercicio del Derecho a la Educación es en los contextos de vulnerabilidad multidimensional. Dada la importante presencia de establecimientos particulares subvencionados a través de todo el sistema, éstos también están presentes en contextos vulnerables; así lo muestra Carolina Contreras, de la Asociación de Establecimientos Particulares Subvencionados (ASEPAR), señalando que:

“además, representamos al 93% de nuestros proyectos, que son gratuitos, y el 83% de nuestros colegios tienen un índice de vulnerabilidad, verdad, del 83%. [...] Pero, además, tenemos la certeza de nuestro rol social en cada uno de los territorios [en] que hemos estado y [en] que seguimos acompañando a los niños y niñas, jóvenes a través de posicionarnos en sectores de alta vulnerabilidad escolar. Muchas veces se habla de los [colegios] particulares subvencionados [como] que están ubicados en zonas más de elite, y no es así. Nuestro rol social nos ha movido, y nos moverá, y nos mueve hace mucho tiempo a ser factores protectores reales de los niños y niñas de la Región [del Bío Bío].”

Coincide en ello Esteban Fica, de la Corporación Educacional Colegio Bernardo O’Higgins (CECBO), relatando que:

“Nos habíamos propuesto crear condiciones para la educación, desde la ética de los cuidados y planteando un cerco perimetral entre las vulnerabilidades del entorno y la seguridad y cariño en el [interior]. Niños y niñas podrían venir a nuestra escuela, porque era y es un espacio seguro de desarrollo, y cada vez más familias quisieron ser parte de esta comunidad.”

Quienes representan a los colegios particulares subvencionados pusieron particular énfasis en destacar que sus establecimientos educan a niñas, niños y jóvenes diversos, y que sus familias prefieren este tipo de educación. Carolina Contreras, de ASEPAR, presenta cifras respecto a estos establecimientos en el país:

“el 91% de estudiantes con necesidades educativas [especiales], tanto transitorias [como] permanentes, se desarrollan en los establecimientos particulares subvencionados. El 55% de los estudiantes más pobres están siendo educados y formados para romper círculos de pobreza, para que salgan adelante, en los establecimientos educacionales particulares subvencionados. Y finalmente, el 82% de las familias prefiere la educación particular subvencionada; han encontrado allí su respuesta, gran cabida y atención.”

Los establecimientos particulares subvencionados, por su situación intermedia (propiedad privada, pero financiamiento estatal) son objeto de múltiples debates respecto a su regulación. Uno de estos aspectos es el de las condiciones laborales de sus empleados. Al respecto, Mauricio Videla, del Colegio de Profesores, advierte que “A nivel de colegios subvencionados, los



profesores están diezmados a nivel organizativo, sabemos que son los más precarizados en el 'mercado educativo'". Una versión distinta ofrece Carolina Contreras, de ASEPAP, al contestar una pregunta sobre la sindicalización y los derechos laborales de los trabajadores de escuelas y liceos particulares subvencionados. Señala Contreras:

"Los derechos colectivos [de los trabajadores] están obligados [para] nosotros, [...] y están asegurados. Cada establecimiento educacional particular subvencionado debe establecer, en sus reglamentos internos, la obligación de evidenciar que los docentes y los funcionarios tienen derecho a la unificación¹⁶ [sic], a que ellos se organicen, a que ellos también sean autónomos. Eso está expresado, porque hay un mandato para los establecimientos particulares subvencionados."

Otro aspecto de control es la gestión de los fondos públicos invertidos en los establecimientos particulares subvencionados, que se ha expandido en los últimos años. Carolina Contreras, de ASEPAP, explica:

"El 2015, a través de la Ley de Inclusión, todo lo que es [la] administración de particulares subvencionados fue regulado. [...] todos tuvimos que establecernos como personas jurídicas, y eso genera una regulación inmediata para que los recursos finalmente lleguen a donde deben llegar, que son los niños. En este sentido, las regulaciones y las instituciones que nos controlan son variadas y son varias. Por nombrar algunas: la Superintendencia de Educación, que nos hace una fiscalización anual y nosotros no podemos pasar de un año al otro sin tener todo transparentado. El Servicio de Impuestos Internos, la Agencia de la Calidad, que nos mide la calidad de la educación año a año cierto, como [a] todos los colegios nos ordenan en categorías. La Contraloría y muchas otras organizaciones que están sobre nosotros año a año. No bianual, ni cada cinco años, ni cada cuatro años."

Hay posturas encontradas entre las y los ponentes en lo referente a la educación privada. Algunos, como Daniel Otárola, de Grupo Toparquía, alegan que el vínculo entre educación privada, libertad de enseñanza e igualdad de oportunidades. Otárola argumenta que:

"Se van rompiendo ciertos mitos; [...] que se ha[n] ido instalando con esta noción de la Libertad de Enseñanza por sobre el Derecho a la Educación pública. Se han ido instalando mitos, donde se plantea que la privatización siempre amplía las oportunidades. Más bien, creemos que esto ha ido excluyendo y discriminando, genera[ndo] desigualdad y segregación."

Siguiendo en la misma línea, Otárola plantea que se ha creado una impresión de que la educación de dependencia privada es de mayor calidad que la pública, lo que, señala, no es real:

"Existía el mito [de que la educación privada] permitía mayor integración: no garantiza la calidad. Ahí es donde está el mito de la superioridad educativa de los centros privados. El estrechamiento curricular, el mito [de] que ofrece mayor diversidad de los proyectos [educativos]. De profesionalización docente; el mito [de] que ofrece mejores docentes. Y lamentablemente, hay casos de corrupción educativa y que, de una u otra manera, también rompen ese mito donde [el sistema de educación privado] es más transparente y eficiente que la educación pública."

Más abiertamente, Mauricio Videla, del Colegio de Profesores, llama a "terminar con el concepto de Libertad de Enseñanza", el que esta Comisión ya ha consagrado:

"El llamado es a empoderar las comunidades; por eso es necesario terminar con el concepto de 'Libertad de Enseñanza', porque entendemos que se asocia a la libertad de mercado. Nosotros entendemos que la construcción de proyectos educativos comunitarios es un ejercicio de libertad mucho mayor que el que da ese mercado."

Por otra parte, algunas audiencias buscan afirmar una tradición más extensa para la educación privada, presentando antecedentes de su presencia sostenida en el sistema educativo chileno desde fines del s. XIX. Vicente González, del Movimiento Crea de la Universidad San Sebastián (M. Crea USS) hace un repaso histórico:

"La sociedad civil no entró al plano de la educación sólo en las últimas tres décadas. Debemos recordar que nuestro país arrastra una tradición constitucional en la que la Libertad de Enseñanza ha estado constantemente presente desde 1874, pasando por la Constitución de 1925, en la que se estableció un carácter democrático, pluralista y sin orientación partidaria oficial; consagrando además la libertad de cátedra del personal académico de las universidades y el derecho de los estudiantes universitarios de expresar sus propias ideas y a escoger, cuando fuese posible, la enseñanza y tuición de los de los profesores. Con la Constitución de 1980, nuestro país aseguró por primera vez el Derecho a la Educación, el que incluye el Derecho Preferente de los Padres a Educar a sus hijos y además, por separado, la Libertad de Enseñanza. Esta tradición constitucional que se remonta [hasta] 1874 ha permitido que actualmente los jóvenes y sus familias dispongan de una gran gama de establecimientos educacionales."

¹⁶ Es posible que este término sea un calco del inglés "unionisation", que se traduce como "sindicalización".
Secretaría de la Comisión sobre Derechos Fundamentales



Fernando Peña, académico también de la Universidad San Sebastián, aboga en favor de mantener el Derecho Preferente de los Padres a Educar a sus hijas e hijos, sustentándolo con argumentos aristotélicos. Luego, en un ejercicio similar al de la audiencia del Movimiento Crea USS, rescata antecedentes históricos, pero también experiencias comparadas del extranjero:

“La Libertad de Enseñanza, ojo, no fue creada en la Constitución de 1980. La Libertad de Enseñanza está consagrada desde el año 1874, y la subvención -de hecho- no se creó tampoco en la Constitución del 1980, la subvención se comenzó a pagar en el año 1951. [...] Y obviamente, en países como Estonia, la mayoría elige escuelas públicas, pero en otros, como Bélgica y Holanda, más del 70% de los alumnos asiste a escuelas particulares subvencionadas. Y lo que quiero decirles con esto es que no hay una sola receta, no hay un solo camino, hay muchos.”

Un aspecto que se menciona en algunas de las audiencias es el rol de la educación en el desarrollo de la sociedad. Soledad Arriagada, de la Corporación Educacional CBO, presenta una breve reflexión sociológica al respecto:

“En efecto, la escuela es un espacio social complejo y diverso, se trata de una de las pocas instituciones modernas que perduran en el tiempo mutable de la postmodernidad; sin dudas es una institución en el centro del análisis y la demanda social. La mirada de la escuela como espacio de movilidad socioeconómica, o como estructura reproductora de las desigualdades de su sistema de residencia, coexisten y conflictúan, tanto simbólica como concretamente, [a] los sujetos que la construimos. Estas tensiones se evidencian en diversos espacios de la vida escolar, y con mayor fuerza en instituciones ubicadas en contextos de vulnerabilidad psicosocial, donde, [a] las brechas de comunicación, motivación o dinamismo, se suman distancias de capital social y cultural, relaciones de poder y elementos básicos de calidad de vida alimentación, salud y viviendas precarias, por ejemplo. Sin embargo, la educación también es oportunidad de desarrollo, mecanismo de promoción social [y] democratización de derechos, cuando se concibe con estos objetivos y se construye desde la responsabilidad social y la participación con un estándar de calidad.”

En una línea similar, pero presentando datos de estudios, Jorge Ibáñez analiza cuán bien el actual sistema educativo responde a la demanda de libertad de educación por parte de sus estudiantes:

“Cuando hacemos la pregunta de “¿si siente que los estudios les permite elegir libremente lo que quiere estudiar?” y [dividimos] por estratos [socio]económicos, tenemos que, [en] el nivel medio alto, el 92% cree que [se] les permite elegir lo que ellos quieren hacer la vida; pero si es que vamos avanzando, nos damos cuenta que, en [en] nivel socioeconómico medio ya bajamos: solamente seis de cada diez personas creen que los estudios les permiten elegir qué quieren hacer; y luego, si vamos avanzando nos damos cuenta que siempre esto va bajando ¿no? Ya a nivel [socioeconómico] medio bajo [es] el 47%, menos del 50%; y [en] el nivel [de] estrato socioeconómico bajo, sólo el 30% siente que sus estudios les permiten elegir lo que ellos quieren hacer.”

Seguidamente, Ibáñez argumenta que aquí subyace una tensión respecto del propósito de la educación, entre el desarrollo individual y la construcción del bien común. En una pregunta dirigida a esta Comisión, Ibáñez interroga: *“¿cuál es el sentido estratégico que queremos de la Educación en la Constitución?”* Jessica Jerez, del Grupo de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios de la Universidad del Bío Bío, entrega una potencial respuesta, al explicar por qué ella y sus colegas insisten en trabajar en la educación pública a pesar de las malas condiciones laborales:

“Trabajar en una universidad del Estado nos entrega a muchos y muchas la convicción de que, sí, el proyecto educativo que sostenemos colabora a la transformación social, dando [oportunidades] a un porcentaje muy significativo de los jóvenes que estudian en la Universidad del Bío Bío, que son [la] primera generación universitaria en su familia, e incluso en sus comunas, como ocurre con quienes ingresan por vía programa PASE.”

La audiencia de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) se centra en la materia de la educación no-sexista. Verónica del Pozo, una de sus ponentes, presenta antecedentes de sesgos en distintos aspectos de la práctica educativa: la invisibilización de las mujeres en los textos escolares, tanto en materia de autoría como en la representación de las mujeres, centrada en roles domésticos, y particularmente su subrepresentación en materias científicas e históricas.

Enseguida, Del Pozo plantea que una de las causas raíz de estos problemas es la falta de preparación de docentes y demás integrantes de la comunidad educativa para lograr un enfoque no-sexista en la educación, incluyendo el abordaje de los Derechos de las Mujeres y de las Diversidades Sexo-genéricas. En ausencia de estas medidas, advierte Del Pozo, las conductas sexistas se reproducen entre las y los estudiantes.

Del Pozo presenta también antecedentes basados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, indicando que:



“Tanto la CEDAW como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han reconocido el Acceso a la Educación Sin Discriminación, y eso implica no solamente una declaración formal, sino que el Estado tiene que otorgar orientación en materia de carreras profesionales, tanto a hombres como mujeres, en condiciones igualitarias; tiene que erradicar el trabajo no remunerado de las niñas en el hogar, porque eso evita que las niñas accedan a la educación; tiene que reunir sistemáticamente datos, desagregados por género y por sexo, sobre el acceso a la educación; tiene que garantizar los mismos programas de estudio; y tiene que garantizar también la igualdad la participación activa en el deporte y en la educación física, eso sólo como ejemplos.”

A estas obligaciones, firmadas y ratificadas por Chile, se suman además las siguientes, también enunciadas por Del Pozo:

“También se reconoce, por otro lado, en los distintos tratados, la eliminación de estereotipos sexo-genéricos de la educación, y eso implica combatir todos los estereotipos y la asignación de roles y patrones socioculturales que otorgan a las mujeres un papel inferior en la sociedad, y [se] recomienda que eso se haga a través del sistema educativo. Y, por último, porque esto no basta, cuando enseñamos en la educación, cuando hay un entorno de aprendizaje que es contrario a estos derechos, esto tampoco funciona. Por lo tanto, las convenciones también establecen obligaciones para el Estado, de generar entornos educativos y métodos de enseñanza seguros, libres de violencia y no discriminatorios.”

Otro ámbito de los antecedentes presentados en las diversas audiencias son las diversas experiencias de vulneración del Derecho a la Educación o en contextos educativos. En general, estos relatos están signados por una noción compartida de que las oportunidades formativas le han sido negadas sistemáticamente a las poblaciones más vulnerables. Ennio Vivaldi, del CUECH, lo plantea de forma sucinta, alegando:

“Por favor, no me digan que se le está dando una oportunidad a las personas de desarrollarse, cuando hay una diferencia en la calidad de la educación tan brutal como la que vemos en Chile. O sea, al niño de bajo nivel socioeconómico ¡por favor! No se le está dando ninguna oportunidad de poder expresar su potencial.”

Alejandra Arratia, de Educación 2020, hace un contraste entre el principio de la Libertad de Enseñanza y su aplicación práctica, sugiriendo que se ha usado como fachada para actos de discriminación arbitraria:

“Recordarán casos en que lamentablemente veíamos, por ejemplo, [a] chicas embarazadas que salían, [que] tenían que salir de la escuela porque se les decía, se apelaba al derecho a la Libertad de Enseñanza y se [les] quitaba la matrícula. Ese tipo de cosas ponen en jaque el Derecho a la Educación y nos parece que no pueden pasar.”

Las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación también se hacen presentes en las audiencias, acusando situaciones de autoritarismo, vulneración de los derechos laborales e impunidad luego de actos ilegales, como los que denuncia Roberto Pizarro, presidente de la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca:

“Cuando las autoridades desconocen sistemáticamente dictámenes de Contraloría [...] y además cuando se han dado estas declaraciones de ilegalidad, la Contraloría Regional del Maule no ha tomado medida disciplinaria alguna. [...] Hay un ejercicio del poder sin contrapeso [del] rector, nosotros todavía tenemos los estatutos de la dictadura, y en un plazo de 28 años, la misma [persona] de rector. Hay un ambiente laboral que está caracterizado por el miedo, y los tres estamentos -estamos hablando de los académicos, el estamento funcionario, el estamento estudiantil- han sufrido maltratos que han afectado sus Derechos Humanos y que vulneran su integridad psíquica incluso.”

Estas acusaciones no se limitan a casos particulares en casas de estudio: Jessica Jerez, de los trabajadores a honorarios de la Universidad del Bío Bío entrega un relato que habla de una situación de “desesperanza aprendida”¹⁷:

“¿Por qué seguimos trabajando en esta institución, si las condiciones no nos parecen satisfactorias? Y es que el sistema en el que vivimos funciona como una excelente maquinaria suiza, y hoy, tener un trabajo, aunque sea precario, explotador y que no nos hace felices, lo cuidamos porque pese [a] esto, nos permite sostener la vida; y aunque no todos y todas los verbalizan, nos distancia de quiénes están en peores condiciones de vida de las que aparentemente tenemos nosotras y nosotros.”

Problemas similares aparecen también en el ámbito de la investigación académica, donde estos trabajadores de la educación dependen de decisiones de los gobiernos de turno para poder

¹⁷ El concepto proviene de un estudio psicológico de Martin Seligman y Steven Maier, y refiere al cese de los intentos por remediar una situación dañina, dados los resultados nulos de previos intentos.



proseguir sus estudios e investigaciones. Constanza Marchant, de la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado, presenta su experiencia:

“Después de todo lo que nosotros, como investigadores e investigadoras, apoyamos a la [lucha contra la] pandemia, [donde] estuvimos desarrollando vacunas, estuvimos haciendo exámenes de PCR. Yo les cuento en los laboratorios de investigación que se desarrollaron PCR, lo hicieron voluntariamente: ni siquiera una remuneración como tal para las personas que se dedicaron a hacer PCR. [Los] laboratorios se reconvirtieron para eso, hubo retrasos por distintos motivos, por la pandemia. El Estado de Chile, a través su Ministerio de Ciencia, le negó, les negó a sus investigadores la posibilidad de una extensión en sus becas de posgrado. Las becas de posgrado, como dijimos, son manutenciones, ni siquiera se consideran renta. Y eso, que es tan básico para la subsistencia de cualquier persona, fue negado por el Estado de Chile. Aquí les muestro cómo este conflicto entre los becarios y la agencia simplemente no se resolvió. (...) Lamentablemente el Ejecutivo hizo oídos sordos y no obtuvimos esta posibilidad ¿Esto qué significa? Significa que investigadoras e investigadores no van a poder finalizar sus posgrados, van a tener que abandonarlos y la “inversión pública” -que dicen ellos- se va a perder.”

Quizá uno de los ámbitos en los que la vulnerabilidad es más evidente en el sistema educativo es en los “contextos de encierro”, como las escuelas que existen en cárceles y centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Solo una audiencia presenta antecedentes al respecto, la realizada conjuntamente por la Red de Educación en Contextos de Encierro de Adolescentes (Red ECEA) y la Corporación Educacional Tierra de Esperanza. Karina Basaure, representando a estas organizaciones, hace un repaso por la institucionalidad actualmente existente en este ámbito: estas escuelas dependen de y son financiadas conjuntamente por los Ministerios de Justicia y Educación, además del SENAME. José Rebolledo, de las mismas organizaciones, presenta una larga enumeración de las condiciones críticas que estos establecimientos enfrentan:

“Una de las principales características discriminatorias que nosotros observamos es el tipo de infraestructura y mobiliario con que cuentan los establecimientos educacionales, ya que esta es escasa y deficiente, y eso hace que estos adolescentes no se encuentren en las mismas condiciones que aquellos que estudian en los servicios educativos que se entregan en el medio libre, en la educación regular. De hecho, podemos decir que los establecimientos educacionales que funcionan al interior de los centros privativos de libertad administrados por SENAME no cumplen las exigencias mínimas establecidas respecto a infraestructura por parte de Ministerio de Educación, ya sea superficie destinada para aula, laboratorio, taller, biblioteca, [...], patio. [...]”

Otro aspecto preocupante son las condiciones de salubridad y seguridad física de estos establecimientos:

“Tampoco cumplen con las condiciones básicas establecidas por el Ministerio de Salud para obtener el reconocimiento oficial como establecimiento educacional. Es decir, vías de escape de puerta amplia, zona segura en caso de emergencia, servicio higiénico para uso exclusivo de alumnos, y de personal docente y administrativo de los establecimientos, medidas de higiene y seguimiento básico o medidas sanitarias para el almacenamiento de alimentos.”

Ni con contar con educadores formados específicamente para el tipo de situaciones que la educación en contextos de encierro implica:

“Los profesionales docentes que laboran dentro de los establecimientos educacionales no cuentan con formación docente inicial, o sea, no hay ninguna universidad en este país que prepare a profesionales para trabajar en el ámbito pedagógico con la población en este contexto y, más aún, observamos que el Ministerio de Educación, a través del CPIP tampoco entrega una oferta pertinente para suplir este déficit de información inicial docente; y esto, a nuestro juicio, se configura como una discriminación importante para la atención de los jóvenes privados de libertad en el ámbito educativo.”

El déficit institucional para atender a las necesidades de estos jóvenes es extrema. Rebolledo afirma incluso que el MINEDUC desconocía, hasta hace pocos años, la existencia de este tipo de centros educativos, considerando exclusivamente a aquellos administrados por Gendarmería de Chile para la población penal adulta. De hecho, señala Rebolledo, los planes educativos a su disposición son los de educación para adultos aun cuando las y los jóvenes que los cursan están en la edad normal para sus estudios. En esta misma línea, alega que no existen apoyos para favorecer la continuidad de estudios de las y los jóvenes en contextos de encierro.

Advierte también Basaure de la creciente complejidad que sus establecimientos enfrentarán una vez que el SENAME sea reemplazado por el Servicio de Protección a la Niñez, y las secciones juveniles de los centros penitenciarios traspasen a esta población hacia el nuevo servicio.

“la labor nuestra también a su vez se va a complejizar en términos de perfiles y tenemos una dinámica bastante fluctuante respecto a las atenciones, dividimos mucho las atenciones respecto a los jóvenes porque tienen dificultades en sus relaciones, por lo tanto, también va a implicar que todo lo que nosotros hemos mencionado hoy día deba profundizar o potenciarse mucho más, la



necesidades que mencionamos respecto al financiamiento hacia los jóvenes respecto al fortalecimiento de nuestras bases curriculares y asimismo en la atención de ellos.”

Finalmente, Rebolledo señala con preocupación que no existen referentes comparados para el resguardo del Derecho a la Educación de las y los jóvenes privados de libertad, y que su protección es escasa incluso a nivel de la población penal adulta. Esto significa que esta Comisión tendrá un trabajo particularmente complejo al codificar la protección de esta población especialmente vulnerable.



Discusión de Contenidos

Rol del Estado y Objetivos de la Enseñanza

Respecto a las propuestas de redacción para fijar constitucionalmente el Derecho a la Educación, surgieron en las audiencias una serie de debates articulados en torno a disputas que han marcado el discurso público sobre el sistema educativo en las últimas dos décadas. Existe, no obstante, un acuerdo transversal en el reconocimiento de la Educación como un derecho que debe ser garantizado. Este acuerdo lo expresa Jorge Álvarez, de Educación 2020, al señalar:

“El Derecho a la Educación es un Derecho Fundamental que debe ser garantizado por el Estado. El Derecho a la Educación tiene un carácter habilitante para una serie, para casi todos los otros derechos. Sabemos que hay, en el fondo, barreras de acceso para el ejercicio de los derechos y eso está muy relacionado con la calidad de la educación. Creemos que es un pilar esencial del desarrollo de la sociedad, de la construcción de una sociedad para el conocimiento, para el desarrollo, para una sociedad inclusiva, democrática.”

Verónica del Pozo, de ABOFEM, ofrece una conceptualización sintética de qué elementos incluir en un artículo sobre el Derecho a la Educación, poniendo énfasis en el rol del Estado y los objetivos de la enseñanza:

“[Se debe] reconocer al Estado como garante de los derechos, de todos los derechos sociales cierto, pero el garante de la Educación en todos los espacios educativos, y entregar al Estado herramientas de fiscalización y de regulación en los establecimientos públicos y privados, con independencia de cómo se resuelva el tema del financiamiento en la educación. [...] Por otro lado, los objetivos de la educación tienen que estar sí o sí definidos en el texto constitucional. O sea, esto no se trata de definir una prestación o un servicio, el acceso meramente a un servicio, [...] tiene que orientarse a formar a las personas en el respeto a la diversidad, a la no discriminación y a la no violencia.”

Como medio para aplicar el cumplimiento de estos objetivos, Del Pozo plantea una serie de disposiciones:

“En la Constitución tiene que estar regulado el acceso y la permanencia en la educación, mecanismos de inclusión, métodos de enseñanza y entorno de aprendizaje sin discriminación y, por cierto, en la academia y en la docencia promover también la paridad como criterio para la conformación en los cuerpos directivos en la academia, que sabemos que hoy día dista mucho de ser paritario, y también la formación del cuerpo docente y académico y también de los auxiliares de la educación para tratar estos temas.”

Alejandra Arratia, de Educación 2020, coincide en promover la centralidad del Estado en la Educación, enunciando que:

“El Estado debe financiar y administrar un Sistema Nacional de Educación Pública, que sea gratuita, laica, inclusiva, de calidad y que tiene que tener un enfoque de velar por el bienestar, no tan sólo por aprendizajes, que es fundamental -por cierto- porque es habilitante para todo el resto del desarrollo ¿no? Pero que tiene que velar por una experiencia formativa que sea positiva y que sea democrática también.”

En ello coincide también Ennio Vivaldi, del CUECH:

“Buscamos entonces un nuevo acuerdo entre el Estado y sus universidades, por una garantía explícita del Derecho a la Educación, por un ejercicio real de este Derecho a través de provisión pública y por un financiamiento público [...] Necesitamos un nuevo sistema público, articulado en todos los niveles de educación. Esto es clave: la educación pública empieza en la educación básica, media, técnico profesional y universitaria y, por supuesto, que tiene que haber un carácter mixto del sistema.”

Jorge Álvarez, de Educación 2020, pone en tensión el enfoque actual del sistema educativo, centrado en el acceso, y plantea un cambio de prioridades:

“Hoy día lo que la Constitución garantiza es el acceso a la educación, pero ¿Cómo garantizamos que niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprendan? ¿Cómo garantizamos que aprendan bajo las condiciones necesarias? No basta solamente con el acceso, lo que tenemos que garantizar evidentemente es el aprendizaje y que todos ojalá, idealmente, tengamos las mismas posibilidades para aprender”

Álvarez destaca también la necesidad de relevar el rol de las y los profesores, tanto dentro del sistema como en la sociedad toda, aunque no deja en claro cómo debe incluirse en el articulado constitucional. En un punto que ya se presentaba como antecedente, y en el que coincide conceptualmente con la audiencia de ABOFEM, Alejandra Arratia, también de Educación 2020, plantea que existe un “*doble propósito de la educación*”, que engloba la formación de las personas y la construcción de una sociedad. Por ello, Arratia sostiene que el Derecho a la Educación debe acompañarse de una serie de características:



“un enfoque de Derecho Humano, en equidad de género, por supuesto, desarrollo sostenible, interculturalidad, que respete todas las diversidades, no sólo una, y que reconozca las formas de educación, las lenguas de los pueblos originarios.”

Sujetos del Derecho

En lo referente a quiénes son sujetos del Derecho a la Educación, Arratia, de Educación 2020, incluye tanto a niñas, niños y adolescentes (como es usual), pero también a las personas adultas que estudian. En ese sentido, aprovecha de remarcar que *“los padres, madres y apoderados tienen que ser corresponsables de este derecho, pero en el fondo favoreciendo el ejercicio del derecho, pero asumiendo que el sujeto [del derecho] son niños, niñas, niñas, niños, adolescentes.”* Respecto a este mismo ámbito, José Rebolledo, de la Red ECEA, solicita:

“La inclusión, en la nueva Constitución Política de la República, del Derecho a la Educación de los y las adolescentes y jóvenes que se encuentran en contextos de privación de libertad, además de que propendan los medios efectivos que lo garanticen realmente en la práctica.”

Libertad de Enseñanza

Uno de los debates más controversiales que se hallan representados en las audiencias es el del límite entre el Derecho a la Educación y la Libertad de Enseñanza. Vale iniciar por definir el concepto: la Libertad de Enseñanza es un Derecho Civil, emparentado con la Libertad de Conciencia y los Derechos Comunicativos (todos ellos tratados en el previo Informe de Sistematización del Bloque Temático de Derechos Civiles y Políticos), que consiste en la libre determinación de los contenidos de la enseñanza por parte de quiénes educan. Históricamente, la Libertad de Enseñanza alcanzó relevancia política a través de la defensa de la Libertad de Cátedra frente a la persecución ideológica, una forma particular que aplica a la educación superior, en la que tanto profesores como estudiantes son adultos.

Dos aspectos de la aplicación de la Libertad de Enseñanza complejizan el concepto: por un lado, y al igual que con las Libertades de Prensa y Expresión, hay una preocupación legítima por proteger la veracidad de lo enseñado; por el otro, cuando la Libertad de Enseñanza es aplicada a la educación de niñas, niños y adolescentes, la autonomía progresiva de éstos significa que no se puede depender del consentimiento de las y los educandos como una libertad complementaria, y la voluntad de sus padres, madres y apoderados se vuelve relevante. Actualmente, la Constitución vigente fija que *“Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos”*, con lo que las disposiciones sobre educación y enseñanza aplican tanto a éstos como a los profesores y establecimientos educacionales.

De entre las audiencias, solamente en una de ellas se presenta un rechazo claro al concepto mismo de Libertad de Enseñanza, por parte de Mauricio Videla, representante del Colegio de Profesores; incluso así, Videla matiza su planteamiento inmediatamente, promoviendo un modelo de “Educación Comunitaria” que resguarda bienes similares. Asegura Videla que:

“El llamado es a empoderar [a] las comunidades; por eso es necesario terminar con el concepto de “Libertad de Enseñanza”, porque entendemos que se asocia a la libertad de mercado. Nosotros entendemos que la construcción de proyectos educativos comunitarios es un ejercicio de libertad mucho mayor que el que da ese mercado.”

Otras posturas buscan más bien moderar el balance entre la Libertad de Enseñanza y el Derecho a la Educación. En este sentido van las palabras de Alejandra Arratia, de Educación 2020:

“Lamentablemente se ha instalado una dicotomía que a nosotros nos parece que es artificial. La Libertad de Enseñanza es importante, pero tiene que estar al servicio del Derecho a la Educación. En el fondo, nos parece que cumple un rol, pero no es un rol que pueda poner en jaque la Libertad de Educación, el Derecho a la Educación.”

Añade a ello, también desde Educación 2020, Jorge Ibáñez:

“La Libertad de Enseñanza [...] está [hoy] mucho más al servicio del emprender proyectos educativos desde la lógica del mercado [...] hay que] avanzar hacia la diversidad de proyectos educativos y que estén supeditados al Derecho a la Educación.”

Una de las mayores preocupaciones que los ponentes de Educación 2020 plantean respecto a la aplicación de la Libertad de Enseñanza es que esta se use como un recurso para facilitar la discriminación arbitraria por parte de los establecimientos educacionales, así como a la vulneración de la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

Como ejemplo de una postura que privilegia la Libertad de Enseñanza se tiene a la audiencia del Movimiento Crea de la Universidad San Sebastián. Gabriel Mora, de esta agrupación, plantea dos motivos por los cuales la educación particular-subvencionada es preferible a la pública o municipal, los que luego usa para articular el sentido que él le da a la Libertad de Enseñanza: su presencia en el territorio, y la ausencia de movilización política. Enuncia Mora:



“¿Por qué los padres deciden colocar a sus hijos en colegios particulares subvencionados? ¿Por qué los prefieren? No solamente porque suelen ser los primeros colegios que aparecen en los sectores más vulnerables, los sectores más extremos de nuestro país; sino que, además, porque son esos los colegios donde suele haber un ambiente más estudiantil, más propicio para el estudio, debido a que no están en toma todo el año: no hay paro -prácticamente no hay paro- y esto crea un ambiente en el que los jóvenes, los padres saben que los jóvenes que entran en esos colegios van a poder estudiar durante todo el año, van a recibir las herramientas necesarias para poder darle frente a la vida en el futuro. Y es que esto es lo que significa el dar, el entregar la libertad de enseñanza, el defender el derecho a la libertad de enseñanza en nuestro país: es permitir que los jóvenes ingresen a sistemas educativos, es permitir que los colegios, que la educación llegue a lugares más extremos, a lugares a poblaciones más vulnerables, a poblaciones que están recién creciendo, [es permitir que] la educación llegue más rápido y con mejor calidad, esto es lo importante.”

Una defensa más elaborada de la Libertad de Enseñanza es la que articulan los ponentes de la Corporación Educacional CBO. Soledad Arriagada, de esta organización, explica su postura, como colegio particular subvencionado, usando el ejemplo de la Educación Sexual Integral, que ha resultado controversial con ciertos sostenedores:

“respecto de la tensión entre la libertad del establecimiento de [definir] los proyectos educativos y los contenidos mínimos, nosotros creemos que siempre el Enfoque de Derechos es lo que nos va a dar a las instituciones educativas los marcos del funcionamiento, y así como nosotros funcionamos también con el mandato estatal. No podemos soslayar, por ejemplo, elementos como la educación sexual integral. Este es un límite que nos entrega el enfoque de derechos y eso es lo que debiera ser el imperativo de cualquier proyecto educativo, no puede ir, [...] contra la base de los derechos que son el piso mínimo que nos hemos planteado como sociedad. [...] En ese sentido, la educación sexual integral es fundamental para los proyectos educativos, no debería un colegio funcionar sin ellos.”

En materia de diseño del sistema educativo, Arriagada respalda un modelo mixto, con presencia y mayores regulaciones a los prestadores privados subvencionados, sobre todo en materia financiera y de Derechos Humanos.

Fernando Peña, docente de la Universidad San Sebastián, fue otro ponente cuya audiencia puso énfasis en la defensa de la Libertad de Enseñanza y el Derecho Preferente de los Padres a Educar a sus hijos. Respecto a este último punto, articula un argumento desde referentes filosóficos, en este caso, John Rawls. Afirma Peña que:

“Rawls por otro lado, nos dice [...] que la moralidad de la autoridad -la de los tutores- obviamente siempre es anterior a la moralidad de la asociación, en este caso de la escuela o de otras instituciones que pueden colaborar en el proceso educativo. Por lo tanto, insisto y reitero: no podemos prescindir, no podemos pasar por alto [que] hay un orden de factores importantes, que comienza justamente en el seno de la familia y que es importante resguardar; y por eso es importante que este enunciado [aquel que consagra el Derecho Preferente de los Padres a Educar a sus hijos], o al menos la naturaleza de este enunciado quede expresado de alguna forma un nuevo texto fundamental.”

En lo respectivo a la Libertad de Enseñanza, convenientemente Peña usa el mismo ejemplo de la Educación Sexual Integral, por lo que es posible contrastar posturas tanto a nivel de principio como de política particular. En su caso, Peña afirma que es decisión de las escuelas cómo enseñar estas materias:

“Respecto a los temas de leyes o normativas relacionadas a educación sexual [...] las comunidades educativas tienen protocolos, además de reglamentos internos que obviamente también delimitan desde el ecosistema interno de la escuela, [a] cuáles son los planes o programas que se van a utilizar, ya sea los oficiales del Ministerio [de] Educación o algunos [otros], que estén obviamente apoyados por el currículum nacional. En ese sentido, yo no veo mayor conflicto, porque en general las escuelas siempre han sabido administrar esto con bastante prudencia.”

Educación Comunitaria

Una preocupación que ha marcado a todo el actual proceso constituyente es el reconocimiento de las Naciones Indígenas preexistentes al Estado Chileno, y en el caso de las audiencias referentes al Derecho a la Educación, esta consideración se ha conjugado con un más amplio concepto de Educación Comunitaria, que engloba a todo tipo de formas de enseñanza no convencionales.

En algunas audiencias, como las de Educación 2020 y Fernando Peña, el desarrollo de este argumento se limita únicamente al reconocimiento de las formas de educación de los pueblos indígenas, con particular atención a la enseñanza de las lenguas de estas naciones.



Otras audiencias, como las del Colegio de Profesores y el Grupo Toparquía, presentan propuestas extremadamente similares para una “Educación Público-Comunitaria”, que implican una fuerte participación de la sociedad civil y las comunidades educativas en la administración de los establecimientos educacionales y en los planes educativos. En el centro de esta propuesta conjunta hay un rechazo igual tanto al paradigma subsidiario heredado de la Dictadura, como al modelo de Estado Docente que le precedió. Daniel Otárola, del Grupo Toparquía, lo explica:

“Creemos que para superar esta crisis que ha traído el pacto público-privado, hoy día tenemos que avanzar a un nuevo pacto, que es público-comunitario, es decir, donde la educación no es que vuelva al Estado; no es que volvamos al Estado docente, cierto, a este tremendo Estado, entendiendo que hoy día tampoco están las condiciones, porque no tenemos un Estado de desarrollo, ni un Estado de bienestar, sino que el Estado es subsidiario.”

Agrega Mauricio Videla, del Colegio de Profesores:

“Y así, nace esta nueva alianza que quiere superar y trascender esta educación público-privada, por una educación público-comunitaria. [...] Nosotros por eso apostamos por el sistema comunitario, porque apuesta por empoderar a las comunidades educativas, empoderarlas también desde su cultura, y también la posibilidad [de] que ellas generen cultura.”

En lo referente a la institucionalidad de esta propuesta, tanto los ponentes del Colegio de Profesores como del Grupo Toparquía señalan un mismo diseño, de una “Subsecretaría de Educación Alternativa” o “Subsecretaría de Educación Pública y Comunitaria”, encargada de la coordinación y la entrega de fondos a las “modalidades de educación popular, comunitaria y autogestionaria” (Mauricio Videla, Colegio de Profesores), mientras que éstas determinarán libremente su currículo educativo y su presupuesto. A este último respecto, Videla señala:

“Nosotros estamos claros que el dinero ya está ya, lo que se debe hacer es reorientar los dineros. Como dije, aquí en este país, todo se toma de manera central en cuanto a financiamiento. Creemos que el financiamiento tiene que ser emanado y administrado desde las comunidades educativas, que sean ellas las que se empoderen.”

Respecto a los contenidos de la enseñanza comunitaria, la propuesta de Grupo Toparquía apunta a relevar los saberes ancestrales y populares. Lo expresa así Daniel Otárola: *“creemos que todos esos saberes que vienen desde lo popular, saberes ancestrales, saberes desde la experiencia, tienen que ser hoy día reconocidos y tiene que haber, de una u otra manera, hoy día un subsistema de educación alternativa”*. En una línea similar, Mauricio Videla, del Colegio de Profesores, propone lo siguiente:

“darle una nueva geografía al aprendizaje, que sea abierto a la comunidad, que se abran los espacios de las organizaciones sociales a las instituciones educativas; estamos demasiado separados. Por lo demás, tenemos un currículum demasiado homogéneo y que no entiende que las diferencias culturales son inmensas en nuestro país: básicamente, no es lo mismo educar en Arica que educar en el Wallmapu.”

Parte de esta mirada curricular alternativa se corresponde con un rechazo a la idea de “calidad” en la educación. Mauricio Videla, del Colegio de Profesores, lo plantea así:

“Dentro de las conclusiones que se [dieron] en este Congreso de Educación fue cuestionar [...] el concepto de “calidad” a la hora de entender a la educación como un derecho social: nosotros creemos que la educación está para humanizar, y cuando hablamos de calidad hablamos de objetos, de cosas, de cosificar.”

Una formulación menos radical de estas mismas iniciativas la plantean los ponentes de la Corporación Educacional CBO, articulando críticas a la manera en que el actual diseño del Sistema Educativo desoye a las comunidades en que se inserta. Soledad Arriagada, de esta organización, lo señala así:

“Lo público como estructura vertical, versus espacio de participación comunitaria, donde la política pública se construye desde abajo, situada y ecológicamente para ser pertinente a la complejidad social que nos habita, es la disyuntiva que nos enfrenta hoy y que creemos merece una discusión más profunda que la simple desmunicipalización o el cierre de las subvenciones.”

“No existe la integración territorial que nos permita aprender, establecer mecanismos de intercambio, redes de solidaridad o fortalecimiento de capacidades. Cada uno por su camino nos hemos hecho débiles y de esa forma también la educación de nuestros medios ha empobrecido.”

Educación Superior

Las audiencias que mencionaron el ámbito de la educación superior o terciaria lo hicieron específicamente refiriendo al caso de las universidades, y con un fuerte énfasis en promover un mayor rol del Estado. Se ausentan del debate representantes de las universidades privadas, así como de institutos profesionales y centros de formación técnica.



Víctor Mora, de los trabajadores a honorarios de la Universidad del Bío Bío, plantea que las universidades estatales tienen un rol social que trasciende la enseñanza:

“Las universidades estatales deben cumplir un rol valioso, tanto en la generación de espacios de reflexión, construcción de propuestas, debate y por qué no, una mirada de lo que requiere el país y sus regiones para la construcción de un Chile para todos, para todas y para todes.”

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, representando al CUECH, plantea interrogantes sobre el rol que las universidades debiesen tener en el desarrollo de Chile, como la siguiente:

“Yo quiero que se transparente, por favor les pido, que en esta Convención transparenten cosas que están escondidas. Preguntémonos honestamente ¿Debe Chile invertir en desarrollar ciencia y tecnología o debe comprarla? Hay gente que dice que es ridículo que Chile gaste plata en sus universidades [y que] compremos la ciencia y la tecnología cuanto la necesitemos.”

Vivaldi considera que las universidades estatales requieren de una responsabilidad particular del Estado: *“Se debe garantizar una responsabilidad recíproca entre el Estado y sus universidades, por cuanto éstas, al tener funciones específicas, requieren consecuentemente, de una relación acorde con el resto del Estado.”* En línea con esto, Constanza Marchant, de la ANIP, plantea que es posible lograr una mayor estabilidad laboral de las y los investigadores científicos a través de un financiamiento aumentado a las universidades estatales:

“Pensamos que es posible que se invierta más en financiamiento, especialmente los entes empleadores, que son las instituciones de educación superior, por ejemplo, las universidades. Eso sería un gran alivio también para la precariedad en la que se encuentran en algunas instituciones de investigación, universidades del Estado específicamente.”

Vivaldi no descarta de plano el aporte social de las universidades privadas, pero insiste en señalar que las universidades privadas, por definición, no pueden ser públicas. No aclara, en todo caso, qué constituye a una universidad pública, por distinción de una universidad estatal. Respecto de las primeras, señala Vivaldi:

“Los aportes de bienes públicos que hacen las universidades, independientemente [de] quién tenga la propiedad de ella, por supuesto que deben ser valorados. Ese es un problema totalmente distinto. Las universidades generan bienes que son bienes públicos, pero eso por supuesto, no las hace a ellas entidades públicas. Las hace contribuyendo [sic] al ámbito público del país. Esa confusión tiene que... no puede persistir.”

Otras Materias

En las audiencias aquí sistematizadas surgieron otras materias que debiesen considerarse al momento de consagrar el Derecho a la Educación en la Constitución, pero que no entran en discusión entre una audiencia y otra.

Fernando Peña pone atención en dos asuntos. En el primero, plantea preocupación por la cobertura de prestaciones educativas a jóvenes con necesidades educativas especiales, recomendando no establecer una edad límite para que participen del Sistema Educativo. Su segunda preocupación en esta sección es referente a la posibilidad de que la nueva Constitución interrumpa el proceso de desmunicipalización en curso, señalando que no ha transcurrido el tiempo suficiente como para poder evaluar en su totalidad el nuevo sistema, y que es posible hacer correcciones sin eliminarla de plano.

Por su parte, Alejandra Arratia, de Educación 2020, advierte sobre los riesgos de especificar excesivamente los contenidos del Derecho a la Educación, recordando que la mejor información disponible acerca de estas u otras materias es siempre contingente y evoluciona con rapidez. Por ello, recomienda establecer solo *“grandes principios”*, permitiendo *“cierta movilidad luego en la definición de políticas públicas y de regulación”*.

Garantías

En términos de garantías, se observa entre las audiencias, primero, un mandato hacia el Estado como garante del Derecho a la Educación. Así, Alejandra Arratia de Educación 2020, plantea la necesidad de incorporar el rol del Estado como garante de condiciones materiales para el desarrollo del proceso educativo.

“la Constitución tiene que explicitar que el Estado debe tener un rol garante, que la educación tiene que ser un derecho que es garantizado por el Estado y en esa medida, que el Estado debe asegurar las condiciones y ahí hacemos explícito que tienen que ser las condiciones materiales, por un lado, donde está el tema el financiamiento, donde explicitamos también por ejemplo el tema la conectividad”

Por otro lado, Mauricio Videla, del Colegio de Profesores, plantea la necesidad de instalar consejos educativos democráticos. Ello, en la medida de que *“aquí las decisiones de los*



directores son imposiciones, las decisiones de los sostenedores son imposiciones, y que poco saben de las necesidades de nuestra sociedad”.

Otro tipo de garantías planteadas en las audiencias dice relación con el reconocimiento del rol de los docentes, en tanto permitiría garantizar la calidad de la educación. Esto fue planteado tanto por Educación 2020, como por Karina Basaure de la Red ECEA. En este sentido, desde Educación 2020 plantean que *“el Estado tiene que reconocer el rol de docentes y profesionales de la educación, asegurando esta doble vertiente: por un lado, estándares de formación y condiciones adecuadas”.*

Alimentación (209)

La discusión sobre Derecho a la Alimentación concitó la presentación de tres audiencias, siendo los principales temas tratados la situación actual del país en materia de seguridad alimentaria y enfermedades ligadas a la alimentación, así como la definición, contenido, implicancias y garantías del Derecho a la Alimentación Adecuada.

Antecedentes y Experiencias de vulneración

Un primer apronte a la presentación de antecedentes se observó en la citación de precedentes del Derecho Internacional a partir de las cuales cobra existencia jurídica el derecho en comento. A este respecto, la Agencia Internacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que el reconocimiento de este derecho se remonta a

“1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fuera citada también con anterioridad y de modo muy central en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 11.”

Precedente también citado por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile (en adelante Colegio de Nutricionistas) y al que, de acuerdo con Manuela Cuvi de la FAO, cabe añadir lo establecido en *“convenciones como la Convención de los Derechos del Niño en sus artículos 24 y 27 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer entre otros.”*

Respecto a la relación entre el vigente marco jurídico chileno y el derecho internacional en esta materia, Lorena Rodríguez del Colegio de Nutricionistas agrega que la Constitución de 1980 no consagra el Derecho a la Alimentación.

En seguida, es posible constatar la presentación de precedentes provenientes del derecho comparado. Manuela Cuvi de FAO, consigna que

“El Derecho a la Alimentación está reconocido en las constituciones de diversos países del mundo -más de 30 en el mundo y en nuestra región son 15-, que lo conforman de manera explícita. Y también se encuentra reconocido en numerosas leyes en diversas materias: seguridad alimentaria y nutricional, alimentación saludable, alimentación escolar, agricultura familiar, pesca artesanal, entre muchas otras.”

Por su parte, Paulina Sánchez, de Red Hambre Cero, cifra el número de países de la región que consagran este derecho en 16 y destaca la importancia de considerar estos precedentes en el diseño del Derecho a la Alimentación.

Una segunda línea de antecedentes obedece al estado alimentario actual de la población chilena. En este aspecto, un tema relevante está dado por el consenso en la alta prevalencia de enfermedades como sobrepeso y obesidad. Cabe mencionar que antecedentes en esta misma dirección se presentan en la sección siguiente, dedicada al Derecho al Deporte, Actividad Física y Recreación.

En esta dirección, Manuela Cuvi de FAO constata que *“En Chile siete de cada diez personas mayores de quince años y seis de cada diez niñas y niños de quinto básico experimentan obesidad o sobrepeso”.* Para Paulina Sánchez de Red Hambre Cero, esta situación refleja una crisis alimentaria, en la que *“hay una enorme cantidad de malnutrición por exceso”* que requiere de una urgente visibilización. Sobre esta materia Lorena Rodríguez del Colegio de Nutricionistas, establece una relación entre la no consagración del Derecho a la Alimentación y el preocupante estado alimentario de la población chilena:

“Sin Derecho a la Alimentación no hay salud, y eso se refleja en nuestro país en las espantosas cifras de exceso de peso que tenemos hace ya varios años y que han ido empeorando además en los últimos años: nos destacamos por ser uno de los primeros en el mundo y sin duda el primero en nuestra región.”

Rodríguez, en particular, subraya el modo en que la obesidad interactúa con dimensiones sociales estructurales, tales como la edad, el género y la clase social:

“Este problema afecta desde la más tierna infancia a niños muy pequeños, menores de 6 años como vemos allí, y empeora claramente en la etapa escolar. Esto además genera unas



inequidades de esas de aquellas que son absolutamente injustas y evitables, como por ejemplo que afectan más a las mujeres y que afectan más a los sectores más vulnerables socioeconómicamente, y a las personas de menor nivel educacional.” (Colegio de Nutricionistas)

Refiriéndose a algunas de las causas detrás de la alta prevalencia del sobrepeso y obesidad en Chile Manuela Cuvi de FAO realza la dimensión socioeconómica que adquiere este flagelo:

“Solo por mencionar un factor, en Chile una dieta saludable es cinco veces más cara que una dieta que sólo satisface requerimientos calóricos. Esto significa que una gran parte de la población no tiene acceso a alimentos saludables.”

Es tal la profundidad de estos antecedentes, que la situación amenaza con producir efectos demográficos. En efecto, en su presentación Cuvi reporta que

“hasta un 80% de las muertes se deben a enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la alimentación. Por ello, se estima que en 30 años la expectativa de vida disminuirá en 3,5 años como consecuencia directa de este tipo de enfermedades.” (FAO)

Consultada sobre la materia, Manuela Cuvi es tajante en señalar que, en Chile:

“Las políticas en esta materia [prevalencia del sobrepeso y obesidad] no están funcionando, necesitan un refuerzo. Son materias muy complejas, son materias que requieren mucha coordinación entre las instituciones públicas, son materias que probablemente necesitan más legislación, más presupuesto, más prioridad a nivel nacional.” (FAO)

El segundo aspecto dentro de los antecedentes acerca del estado alimentario de la población está dado por la inseguridad alimentaria. Antes de presentar las diferentes posiciones a este respecto, conviene consignar la definición que sobre “inseguridad alimentaria” ofrece, en voz de Lorena Rodríguez, el Colegio de Nutricionistas:

“¿Y a qué nos referimos con “inseguridad alimentaria”? A la falta de acceso a alimentos, pero especialmente la falta de acceso a alimentos de calidad y a una variedad suficiente y nutritiva de alimentos. La respuesta en nuestro país ha sido una respuesta solidaria, que nos encanta pero que al mismo tiempo nos impacta: no es posible que en Chile tengamos que tener ollas comunes para acceder a alimentos y alimentos saludables.”

La inseguridad alimentaria está por tanto estrechamente ligada a lo que, en ocasiones, algunas ponentes denominan “hambre”, aunque, en rigor, se trata de un concepto ligeramente más amplio. A pesar de esta distinción -propia de la literatura especializada- por razones contextuales y en lo que sigue, presentaremos estos conceptos como si refirieran al mismo fenómeno.

La presentación de Manuela Cuvi, en representación de FAO provee un buen punto de partida, pues sitúa el nivel de inseguridad alimentaria local en el más amplio contexto latinoamericano. En efecto, Cuvi señala que:

“en relación con el tema del derecho comparado, señalar que efectivamente Chile se encuentra en una situación mejor referida a la inseguridad alimentaria, el combate al hambre. Chile es conocido en la región por sus políticas en esta materia.”

No obstante, esta posición es matizada por Cuvi, toda vez que, durante el año 2020, la pandemia condujo a un alza importante de la inseguridad alimentaria en el país:

“En cuanto al hambre y a la falta de acceso a alimentos, si bien los indicadores de Chile están bajo el promedio de la región, se encuentran en alza. Así, en el año 2020, 800 mil personas padecieron hambre y 3,4 millones de personas enfrentaron incertidumbre respecto a su capacidad para obtener alimentos saludables y nutritivos.” (FAO)

Esta situación fue reportada también en las audiencias de Red Hambre Cero y el Colegio de Nutricionistas, al respecto, los primeros señalan que:

“En Chile tenemos una situación alimentaria que la podemos llamar como una crisis, luego de la pandemia. Donde muchos de los hogares sufrieron hambre y así tuvieron que restarse comidas”

La misma agrupación señala que, a pesar de que la alimentación es un Derecho Humano, “en Chile el 20% de los hogares sufre inseguridad alimentaria”. Por su parte, el Colegio de Nutricionistas estima que los efectos de la pandemia sobre la inseguridad alimentaria se ven reforzados por la ausencia de un Derecho a la Alimentación de rango constitucional:

“Sin Derecho a la Alimentación no podemos asegurar bienestar y una vida digna, y esto queda demostrado además por las cifras de inseguridad alimentaria, que han empeorado drásticamente a propósito de la pandemia.”

Junto con el impacto de la no consagración del Derecho a la Alimentación, Lorena Rodríguez repara brevemente en las determinantes sociales de la inseguridad alimentaria:



“Detrás de esto [la inseguridad alimentaria] las causas son múltiples; no tendremos la oportunidad de desglosarlas todas, solo [quiero] decirles que las condiciones de vida de las personas, la pobreza, el acceso económico son un elemento central, así también los entornos que nos rodean.” (Colegio de Nutricionistas).

Por último, en un ámbito de discusión diferente, cabe consignar que el Colegio de Nutricionistas instala la cuestión de la relación entre el Derecho a la Alimentación, los sistemas de organización de la producción y distribución alimentaria y el desafío que supone lo que denomina “sindemia global”

“Pensar el Derecho a la Alimentación es reflexionar respecto a lo que producimos, transportamos, consumimos y su impacto, no sólo en las personas, sino que también en el medio ambiente (...) Y detrás de esto, un concepto que denominamos “sindemia global”, que representa hoy día el principal desafío para la Humanidad”

Este concepto, explican, alude a la relación entre las epidemias de obesidad y desnutrición y el proceso de cambio climático. Acerca de por qué habrían de relacionarse, el Colegio de Nutricionistas expone:

“Porque las causas de las causas de estas tres grandes [epidemias] tienen que ver con los modelos económicos, con los modelos sociales, tienen que ver con la producción, tienen que ver con los sistemas de ciudad como decían anteriormente, tiene que ver con el diseño país y el modelo de desarrollo al cual nos damos.”

Discusión de Contenidos

Las cuestiones relativas al contenido e implicancias del Derecho a la Alimentación son múltiples, pero conviene comenzar por las alusiones a su definición. En este aspecto se constata un amplio consenso, pues todas las audiencias remiten a la concepción que, de este derecho, ofrece la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Se trata de una definición cuyos componentes aparecen en reiteradas ocasiones en las tres audiencias inscritas en esta temática, de modo que conviene citar en extenso:

“Es el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero a una alimentación, que no es cualquier alimentación, es una alimentación que debe ser cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que debe corresponder a las tradiciones culturales de la población a las que pertenecen las personas o consumidores y que garantice una vida psíquica y física individual, pero también colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.” (Manuela Cuvi, FAO)

A partir de esta definición las diferentes expositoras desarrollan tanto extensiones teóricas como implicancias prácticas del concepto. En primer lugar, Manuela Cuvi se apresta a puntualizar que:

“El Derecho a la Alimentación adecuada no es el derecho a ser alimentado, sino el derecho a alimentarse, por uno mismo, en condiciones de dignidad. Por lo tanto, comprende el derecho fundamental a no padecer hambre, pero va más allá ocupándose también de la calidad nutricional de los alimentos.” (FAO)

Asimismo, Paulina Sánchez destaca la importancia de un criterio de sostenibilidad en la consagración el Derecho a la Alimentación adecuada:

“no solamente significa prevenir el hambre, sino que además conseguir la salud y el bienestar de las personas y con pertinencia cultural, que sea adecuada y sostenible la generación de alimentos, así como el consumo.” (Red Hambre Cero)

En una línea similar, Lorena Rodríguez desarrolla, en adición a los componentes antes presentados, elementos de sostenibilidad que, a su entender, forman parte del Derecho a la Alimentación. Desde este punto de vista, tal derecho incorpora:

“aspectos ambientales: que entornos nos rodean y la sostenibilidad ambiental; aspectos de pertinencia y aceptabilidad biológica y cultural; aspectos políticos y sociales: el concepto de soberanía alimentaria como la decisión de los pueblos a decidir qué producen y qué consumen”. (Colegio de Nutricionistas)

Por último, consultada acerca de los alcances del componente de “pertinencia biológica y cultural”, y si este cubriría el derecho a llevar una dieta vegana, Rodríguez sostiene que dicho concepto

“hace referencia a las necesidades de las personas, que pueden ser necesidades por elección o no. Por ejemplo, una persona con enfermedad celíaca no podría consumir alimentos con gluten; por ejemplo, una persona alérgica a la proteína de la leche de vaca no podría consumir alimentos con proteínas de leche de vaca; y así también un vegano o un vegetariano, que decidan no consumir alimentos de origen animal, están en su derecho.”



Dado el amplio consenso que suscita la definición propuesta por la FAO para el Derecho a la Alimentación adecuada, no es de extrañar que subsistan varias similitudes en materia de la redacción de dicho derecho. En efecto, pueden contrastarse sobre este tema, las propuestas de la FAO y el Colegio de nutricionistas respectivamente:

“incluir, en la sección dedicada a los Derechos Fundamentales, una disposición que establezca, como mínimo, que todas las personas tienen derecho a una alimentación adecuada en condiciones de dignidad. Como ya fue señalado, el componente de adecuación incluye la adecuación nutricional, la inocuidad, la pertinencia cultural, entre otros” (FAO)

“Toda persona tiene el derecho fundamental a una alimentación inocua y saludable, sostenible, que cubra sus necesidades biológicas y nutricionales, respetando sus tradiciones sociales y culturales. El Estado tiene el deber de garantizar, en forma progresiva, continua y permanente, la disponibilidad y el acceso, tanto físico como económico, de alimentos que satisfagan derecho, además de requerir a quienes corresponda que entreguen información pública, clara y veraz a la trazabilidad, composición y calidad nutricional de los alimentos. Asimismo, el Estado [promoverá] ambientes alimentarios saludables y el ejercicio de la soberanía alimentaria de los pueblos.” (Colegio de Nutricionistas)

Por otra parte, Red Hambre Cero propone consignar los principios que inspiran el Derecho a la Alimentación, incluyendo el compromiso de salvaguardar tanto la soberanía alimentaria como la seguridad alimentaria:

“Dentro de los valores y principios constitucionales sería importante mencionar que el Estado reconoce el Derecho de vivir libre del hambre y la malnutrición, por déficit o por exceso. Y esto, forma parte del derecho internacional y general, por lo tanto, es un deber del Estado resguardar la seguridad y la soberanía alimentaria.”

En cuanto a la relación de este derecho con la estructura del texto constitucional, la propuesta de Red Hambre Cero consiste en:

“que el Derecho a la Alimentación se incluya en varias partes de la Constitución. Dentro del preámbulo, creemos que es en la soberanía y la seguridad alimentaria, junto con la protección del medio ambiente, la justicia social ambiental, la plurinacionalidad, el multiculturalismo y la reparación integral hacia los pueblos indígenas.”

Cabe señalar que la relación del Derecho a la Alimentación con los tópicos expuestos en el fragmento recién citado se retoma hacia el final del presente apartado de contenidos.

Por otra parte, las audiencias coinciden en que la consagración de este derecho no es meramente declarativa y que, por ende, supone para el Estado una serie de deberes prestacionales.

“la alimentación adecuada es un Derecho Humano y al ser un derecho, este se puede hacer exigible y se hace visible para las personas y como también para el Estado en la responsabilidad”. (Red Hambre Cero)

En relación con el contenido de tales obligaciones, la FAO sugiere:

“incluir que el Estado tiene el deber de respetar, proteger y realizar el Derecho a la Alimentación adecuada; estos son los verbos rectores que se utilizan en los tratados de derechos internacionales de Derechos Humanos, y lo hace para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. Además, se recomienda establecer que el Estado tiene el deber de promover sistemas agroalimentarios sostenibles y entornos alimentarios saludables.”

Por su parte, la Red Hambre Cero propone una redacción que sintetiza tales obligaciones e incluye dentro de sus deberes uno inspirado en el principio de justicia intergeneracional, relativo a la producción y circulación de alimentos.

“El Estado aquí adoptará medidas deliberadas y expresas tendientes a erradicar el hambre, la desnutrición y la malnutrición. La Constitución garantiza la producción y comercialización sostenible de alimentos, a fin de asegurar la disponibilidad de alimentos para las generaciones futuras”

Por último, es relevante constatar con respecto de la soberanía alimentaria, que se trata de un concepto a menudo presente en las audiencias sobre Derecho a la Alimentación, pero que a diferencia del concepto de seguridad (o inseguridad) alimentaria, no es definido explícitamente por ninguna de las ponentes. No obstante, es posible encontrar algunos fragmentos que parecen referir al concepto de soberanía alimentaria, asociándolo al resguardo de las tradiciones alimentarias, en particular de los pueblos originarios, así como de sus condiciones de posibilidad. Esto permite robustecer la comprensión del vínculo entre derechos alimentarios y sostenibilidad, no sólo en términos de justicia intergeneracional sino también en términos de su importancia para la supervivencia de las prácticas alimentarias de las primeras naciones. El siguiente fragmento condensa esta posición.



"la [nueva] Constitución asegura y protege el acceso a la información y participación en la forma de la toma de decisiones ambientales de los pueblos indígenas, según sus culturas, tradiciones, así como en el control sobre las actividades que se desarrollan en sus tierras y territorios. También, en las formas culturales, la producción, la comercialización de alimentos por parte de los pueblos indígenas, y promoverá la forma de producción, de manera de estimular la economía de estos pueblos. Reconociendo su aporte en los saberes tradicionales a la producción ambiental adecuada de alimentos." (Red Hambre Cero)

Asimismo, es posible pensar en una extensión del resguardo, por el principio de soberanía alimentaria, a las tradiciones alimentarias locales y populares que no necesariamente tengan su origen en los pueblos originarios: *"se pone énfasis en que volvamos a formas tradicionales de alimentarnos y se realcen aquellos productos que son nativos y que se producen en los propios territorios"* (Red Hambre Cero).

Por último, corresponde constatar que, consultadas específicamente sobre la protección de los recursos alimentarios del mar, Cecilia Sepúlveda del Colegio de Nutricionistas señala explícitamente que: *"dentro del concepto de soberanía alimentaria, indudablemente deben ir los recursos marinos"*.

Garantías

Durante el proceso de audiencias, la discusión en torno a las garantías del Derecho a la Alimentación adoptó diferentes formas. En este apartado se identifican tres de ellas. En primer lugar, se discute el carácter interdependiente del derecho en comento con otros Derechos Fundamentales. En segundo lugar, se contrastan las garantías jurisdiccionales propuestas por las interventoras. Por último, en tercer lugar, se consignan diferentes medidas de política pública que las ponentes consideran pertinentes para la garantía de este derecho.

En lo que concierne al carácter interdependiente del Derecho a la Alimentación, Manuela Cuví, en representación de la FAO, señala que

"aunque parezca innecesario decirlo, obviamente el derecho a la alimentación adecuada es indispensable para el disfrute de otros derechos, como la salud o la vida y, además es interdependiente del Derecho Humano al Agua, del Derecho al Medioambiente, de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de los Derechos de las Mujeres, de los Derechos de la Infancia, de la promoción del desarrollo rural, entre otros."

En el mismo sentido, Paulina Sánchez de Red Hambre Cero releva las interconexiones existentes entre el Derecho a la Alimentación y un gran número de otros Derechos Fundamentales:

"es muy importante mencionar la sustentabilidad, porque la sustentabilidad se desarrolla, se relaciona con el medio ambiente y el Derecho Humano al Agua, que no pueden ser separados, así como el Derecho a la Salud y a la Vida"

De ahí entonces que, a su entender, la Constitución deba consignar:

"en la parte de los principios constitucionales, que toda actividad económica debe realizarse en torno a la sustentabilidad, es la única forma que podemos garantizar que nuestros recursos puedan ser gozados y los derechos también puedan ser garantizados para las generaciones futuras." (Red Hambre Cero).

Sobre este último punto, abunda Lorena Rodríguez, reforzando la idea que liga el principio de sostenibilidad en el uso de los recursos naturales con el Derecho a la Alimentación: *"Si no protegemos los recursos naturales, es imposible superar el Cambio Climático, la malnutrición, las dietas insanas y la inseguridad alimentaria"* (Colegio de Nutricionistas)

Es importante explicitar por qué una discusión relativamente teórica acerca de la interdependencia de derechos ocupa un lugar prominente en un apartado que trata sobre asuntos de garantías y mecanismos de justiciabilidad. En efecto y, sin perjuicio de su consagración como derecho autónomo, la interdependencia entre derechos implica que, frente a su vulneración, es posible presentar una acción orientada a salvaguardar el ejercicio de ese derecho, también en términos de la afectación que se produce a otros derechos concomitantes. Esto puede ser crucial en los casos en que un derecho no cuenta con una garantía de justiciabilidad tal como una acción de tutela, pero afecta a un derecho que sí está resguardado por dicho mecanismo de protección.

Pasando propiamente a la cuestión de las garantías institucionales, existe consenso respecto a la necesidad de establecer este tipo de mecanismos de justiciabilidad como un modo de resguardar el Derecho a la Alimentación de posibles vulneraciones. Sobre esta materia, Manuela Cuví manifiesta que:

"junto con reconocer el derecho es recomendable que la Constitución establezca una acción constitucional que permita su tutela en caso de incumplimiento. Quiero destacar que este es un elemento de justiciabilidad que distingue a un derecho de una mera declaración." (FAO)



Concuerda con este planteamiento Paulina Sánchez de Red Hambre Cero, y acto seguido declara:

“Las acciones constitucionales que nosotros proponemos para la Constitución, es una acción de tutela sobre Derechos Fundamentales, en la cual toda persona tendrá una acción de tutela con la que podrá reclamar a la Corte de Apelaciones respectiva en todo momento igual, mediante un procedimiento preferente y sumario por sí mismo, cuando vea que estos derechos son ser vulnerados, perturbados o amenazados por la acción, la omisión de cualquier autoridad pública, de cualquier persona, institución o grupo”.

Por su parte, Lorena Rodríguez está de acuerdo con un mecanismo de garantías institucionales y se pronuncia específicamente a favor de la consagración de una acción de amparo a este objeto:

“por supuesto, se requiere un mecanismo de exigibilidad, es decir de justiciabilidad de este derecho; y esto por lo tanto debe quedar incluido en la acción de amparo que se señale en la nueva Constitución, ante actuaciones ilegales o arbitrarias que impiden la efectiva fruición del derecho, ya fuere por privación, perturbación o amenaza; y que exista la posibilidad de accionar para la tutela efectiva de este derecho.” (Colegio de Nutricionistas).

Es importante mencionar que la existencia de esta acción no inhibe el uso de otros medios jurídicos orientados al mismo efecto, punto que expresa con claridad Rodríguez:

“Esta consagración, obviamente, no obsta de otros mecanismos de tutela del derecho y cuyos efectos podrían ser más estables en el tiempo, por ejemplo, la demanda al Estado por falta de servicios y la omisión de su actuación en la materia, como podrían ser omisiones la formulación de políticas públicas alimentarias y en la implementación de la regulación, fiscalización, o en la omisión de sus deberes prestacionales” (Colegio de Nutricionistas).

Finalmente constan en las audiencias algunas referencias a políticas específicas o a tipos de políticas públicas que, las ponentes consideran, pueden contribuir a garantizar el goce del Derecho a la Alimentación. A continuación, se consignan dos fragmentos que ilustran esta situación:

“En Chile existen regulaciones; (...), existe la ley sobre etiquetado de los alimentos, que ha sido muy importante muy reconocida a nivel internacional, se está discutiendo legislación sobre cómo evitar la pérdida de los desperdicios de alimentos que es muy importante (...) y sin duda son necesarias políticas que promuevan el acceso a alimentación saludable para las personas de menores ingresos”. (FAO)

El fragmento recién citado muestra la importancia de la legislación ordinaria en materializar tanto el componente de adecuación cualitativo del Derecho a la Alimentación, como el principio de seguridad alimentaria para las personas de menores recursos. Complementariamente, se destaca el rol crucial que las políticas y programas poseen en la realización misma del derecho en comento:

“en relación con la pregunta relacionada con la regulación del mercado alimentario o de la alimentación, señalar que, sin duda, el derecho a la alimentación requiere, para traducirse en acciones efectivas, su implementación a través de programas, a través de leyes, a través de regulaciones.” (FAO)

Deporte, Actividad física y Recreación (210)

Los Derechos a la práctica del Deporte, de la Actividad Física y la Recreación conforman un bloque fuertemente relacionado entre sí, y vinculado además a los Derechos a la Salud y la Educación. En las audiencias sistematizadas, se encontraron 57 frases relativas a estas materias, en un total de 5 audiencias.

Antecedentes y Experiencias de vulneración

Entre los antecedentes presentados en las audiencias abocadas a esta materia la situación actual de Chile en cuanto a sedentarismo y obesidad ocupa un lugar central. Respecto al primero de estos fenómenos, Claudio Basilio constata que, en perspectiva de ciclo vital:

“En los niños, ocho de cada diez personas son sedentarias. Es un impacto tremendo. En los adultos mayores mantenemos la misma brecha, la misma distancia en inactividad física, ocho de cada diez personas, ciudadanos y ciudadanas, no realizan actividad física de manera regular. Y en la edad adulta, solamente una persona [de cada diez] hace actividad física”

A esto se agrega la interacción con las dimensiones de género y clase que, de acuerdo con Basilio, profundizan esta problemática entre las mujeres y las personas de menores recursos. En sus palabras: *“los ciudadanos y ciudadanas de poder adquisitivo que tengan mayores ingresos hacen más deporte, vemos también una desigualdad de las mujeres”*. Esta última, según Basilio, está asociada a la desigual distribución del trabajo doméstico.



Asimismo, el colectivo Deportes para la Constitución pone de manifiesto la dimensión territorial del sedentarismo, el cual afirman, se agudiza en las zonas extremas del país: *“por ejemplo en la Región de Arica y Parinacota que tiene un porcentaje de un 78% (...) de la población que es sedentaria”* (Deportes para la Constitución). Sobre este punto abunda, en perspectiva comparada, el Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad de CLACSO (en adelante, Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad):

“dado los diagnósticos que han hecho el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y otras entidades, somos el país más inactivo de Latinoamérica, somos el país que tiene las más altas cifras de obesidad y de conducta sedentaria”

Puntualmente, Claudio Basilio ofrece antecedentes en extenso sobre la prevalencia de obesidad en hombres, en perspectiva de ciclo vital:

“cinco [de cada diez niños] tienen sobrepeso y obesidad, obesidad mórbida ¿ya? Estamos hablando de un niño por cada diez con obesidad mórbida [que] es una enfermedad crónica. En adultos tenemos ocho [de cada diez] con sobrepeso y obesidad, cuatro [de cada diez] de ellos con sobrepeso y cuatro [de cada diez] con obesidad grado 2. Y en términos de adultos [mayores] también se mantiene cuatro [de cada diez] y 5 personas [de cada diez] con obesidad. La prevalencia es en los hombres. De acuerdo a las estadísticas que da el Ministerio y la OCDE nosotros somos el primer país con obesidad infantil en el mundo con un 74,2%.”

En la misma línea, Hernán González de Deporte para la Constitución, llama la atención sobre la carga que esta situación impone al sistema de salud y el erario nacional:

“En primer lugar, deporte y salud. En la actualidad Chile es uno de los países que mayor tiene... mayor tasa de obesidad y sobrepeso existe en el planeta. Esto se traduce en un importante deterioro en la calidad de vida y un gasto aproximadamente del 6% del total del presupuesto de salud que tenemos en nuestro país, que es... podríamos decirlo en montos, de un millón de mil 700 millones de dólares.”

En este contexto, los y las expositoras ofrecen diferentes marcos desde los cuales abordar esta y otras problemáticas relacionadas. Cada uno de los cuales cuenta con sus propios antecedentes y justificaciones. Así, por ejemplo, Claudio Basilio plantea la distinción entre actividad física como práctica y condición física como proceso de transformación en un marco bio-psico-social. Basilio se decanta por este último concepto y, a este respecto, afirma que:

“Queremos hacer cambios en la persona y para eso se requiere (...), se requiere la condición física que es el cambio del estado fisiológico para un bienestar biopsicosocial, que se denomina cambios biológicos, cambios psicológicos y cambios sociales [en] la persona y en la sociedad. Juego y deporte son todas las acciones que se pueden desarrollar, siendo normadas o no normadas, con el propósito de mejorar la condición física y psíquica de las personas, teniendo un desarrollo de interacciones sociales que nos permiten mejorar en la dignidad de las personas y, por último, el [año 19]95 se empezó a decir bienestar integral, en el cual interactúan distintas dimensiones”

En el fragmento anteriormente citado puede notarse que la presentación de Basilio es, en cierto sentido, agnóstica a la distinción entre juego y deporte, en el sentido de que no establece una jerarquía entre ellas ni se decanta explícitamente en favor de una de ellas. Esto tiene sentido pues en el proceso de construcción de la condición física contribuyen tanto el juego como el deporte.

Lo anterior es relevante pues marca un contraste con uno de los principales temas que cruzan al resto de las audiencias la distinción entre deportes y recreación y más puntualmente la discusión acerca del modo en que estos elementos deberían plasmarse en la nueva Constitución. Como veremos, esta distinción está presente tanto en la sección de antecedentes como de contenidos. Por esa razón, en la presente sección se reportan los precedentes y justificaciones ofrecidas en las audiencias, así como las críticas al modo en que actualmente se concibe la relación entre deportes y recreación. En la sección siguiente, en cambio, se presentan los elementos más bien propositivos en torno a estos elementos.

En este sentido, las audiencias de Deporte para la Constitución y del Colectivo Recreación a la Constitución pueden considerarse como polares en el sentido de resaltar sus posiciones sin establecer la necesidad de preferir un paradigma sobre el otro. Por el contrario, la audiencia del Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad tiende a enfatizar la distinción entre ocio y recreación y deportes, en particular a partir de la crítica a lo que ellos denominan “hiper deportivización”.

Respecto a los antecedentes que sustentan la audiencia de Deporte para la Constitución, este grupo destaca no sólo el efecto positivo que la consagración del Derecho al Deporte tiene a nivel individual, a propósito del cual Hernán González afirma que: *“diversos expertos plantean que la actividad deportiva también ayuda a enfrentar problemáticas de salud mental”*, sino que, resalta



especialmente la importancia del Derecho al Deporte a nivel de sociedad, tematizando su contribución tanto a la equidad territorial como a la inclusión social.

“En segundo lugar, también creemos que es importante tener presente el derecho al deporte como para combatir la desigualdad territorial y social. (...) un estudio que es el Ministerio del Deporte en el año 2019, (...) plantea que mientras las regiones más centralizadas o más cercanas a la capital tienen un mayor porcentaje de participación en deporte, o existe menos sedentarismo, las regiones más extremas de nuestro país tienen una mayor cantidad de sedentarismo” (Deporte para la Constitución).

“Por último, también creemos que el deporte es un aporte a la inclusión social, en la perspectiva de que el Estado de Chile, desde el año 2008, tiene ratificado el Convenio Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, estableciendo obligaciones al Estado de Chile para garantizar el acceso de estas personas para realizar actividad deportiva” (Deporte para la Constitución).

Este mismo precedente jurídico, junto con otros tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, son presentados por Claudio Basilio para justificar un derecho que comprende, en pie de igualdad, tanto la dimensión deportiva como la recreativa.

“Tenemos distintos acuerdos en Chile que han firmado tratados internacionales partiendo en la década de los 90 con la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros como Estado debemos brindarle espacios sanos, saludables, ambientes recreativos. Posteriormente en el 2008 surge la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, tenemos que tener acceso de instalaciones deportivas para la sana recreación. El 2015 firmó un tratado, Chile, sobre la Carta Internacional de la Actividad Física y, finalmente, el 2019 nos sumamos cerca con todas las naciones, son 197 países que firmaron, el Tratado de la Agenda 2030”

Nótese que el modo en que Basilio interpreta la obligación del Estado en esta materia está fuertemente asociada a la provisión de infraestructura adecuada para la realización de estas actividades, lo que acerca su posición al marco del Derecho a la Ciudad, detallado en la segunda sección del presente informe.

Por otra parte, Sergio Toro del Colectivo Recreación a la Constitución presenta su concepción de la recreación a partir del concepto de bienestar subjetivo, tomando como referencia la definición del PNUD.

“PNUD nos plantea que la recreación o el bienestar subjetivo está dado por estos elementos que ustedes pueden observar ahí, que el gozar de una buena salud ante todo es una actitud primordial de sentir y gozar la vida, de sentirse adecuado o placentero en el momento en que la persona se encuentra en el contexto, y con quien se encuentra. Es decir, no es sólo una relación o una actividad personal propia, sino tiene que ver fundamentalmente con las relaciones que somos capaces de construir y con el entorno donde nos encontramos”.

Junto con los precedentes internacionales, las y los expositores presentan antecedentes relativos a las experiencias comparadas que informan sus respectivas posiciones. Daniela Ahumada de Deporte para la Constitución expone la situación del Derecho al Deporte en el contexto latinoamericano.

“O sea, acá la gran mayoría de nuestros vecinos latinoamericanos sí tienen contemplado el derecho al deporte, al igual que en el resto del mundo, algunos han optado por un derecho autónomo, otros por un derecho asociado a la educación, a la salud, independientemente del mecanismo han entendido de que el deporte es parte de nuestra dignidad, es parte de nuestra naturaleza”

El mismo contexto es invocado por Rodrigo Soto del Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad para preferir la constitucionalización del Derecho al Ocio y la Recreación por sobre la del Derecho al Deporte:

“el continente nos dice que hay estas dos experiencias, países que han declarado el deporte como un derecho, insisto, sólo la palabra deporte como derecho y otros que han instalado el derecho al ocio y la recreación en donde el deporte está contenido. O sea, el deporte se sigue promoviendo, pero no está en el primer plano, sino que lo que está en el primer plano es el derecho al ocio y la recreación.”

En particular, Soto se extiende sobre su crítica al paradigma de constitucionalización del Derecho al Deporte, inclinándose por contraparte hacia las experiencias latinoamericanas que privilegian el Derecho al Ocio y la Recreación:

“¿Qué dice el continente respecto al derecho al deporte? (...) la experiencia de constituciones que han declarado, insisto, la palabra deporte como derecho, ha promovido actividades competitivas en concreto, sobre todo, se ha promovido el alto rendimiento y el deporte competitivo ¿Por qué? Porque cuando se declara que el deporte debe ser un derecho en un país, no se han generado



(...) las condiciones para que se transformen las creencias, para que la declaración del deporte como un derecho genere un cambio cultural en el país. Entonces, (...) lo que se termina promoviendo en estos países es un foco más biológico, utilitarista e individualizante del deporte” (Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad).

“hay otras experiencias que han declarado prácticas cercanas a lo deportivo, pero que se ha manifestado como el derecho al ocio y la recreación, en donde se han promovido diversas prácticas corporales deportivas y recreativas que avanzan y que han avanzado a la democratización y a la instalación de estas prácticas en la vida cotidiana. O sea, más que promover algún deporte competitivo o de alto rendimiento se ha promovido el juego por el juego” (Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad).

En contraste, Daniela Ahumada de Deporte para la Constitución cita al caso español como un modelo exitoso de reducción del sedentarismo vía consagración del Derecho al Deporte:

“Respecto a las experiencias que han tenido el derecho al deporte (...) en otros países, la verdad es que hemos tomado el ejemplo de España. España ha sido un país que dentro de los últimos estudios ha demostrado que el sedentarismo se ha reducido hasta un 60 por ciento cuando en Chile, como bien señalaba Hernán, tenemos regiones que tienen hasta un 80 por ciento de sedentarismo”

En cuanto a la experiencia comparada en materia del Derecho a la Recreación, Sergio Toro del Colectivo Recreación a la Constitución, alude a la necesaria interconexión entre los Derechos Fundamentales de Salud, Educación y Recreación:

“la experiencia internacional -fundamentalmente de los países europeos- precisamente nos dice que los Derechos Fundamentales de Educación y Salud se articulan completamente con el Derecho a la Recreación, porque como hemos visto y hemos tratado de explicar, la recreación es una condición en, sí lo entendemos como todo ser vivo se expande en un ambiente favorable y todo ser vivo se restringe o se limita o se estresa, se desgasta por decirlo en términos súper simples, en un ambiente agresivo. Por lo mismo la Salud, si la entendemos como el proceso vital de la mejor condición posible y la Educación como el proceso de construcción de mundo, obviamente no se pueden separar, tienen que ir en conjunto.”

Por otra parte, las audiencias de Deporte a la Constitución y el Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad se refieren en particular a la situación actual en materia de regulación de los derechos en comento y sus implicancias. De esta manera, Daniela Ahumada compara la tardía relevancia que el Gobierno de Chile otorgó a la actividad física durante la pandemia de COVID 19, en contraste con la respuesta española al en la misma materia:

“una vez [que] tuvo confinamiento y cuarentena para poder controlar la pandemia, España fue los primeros países en establecer horarios definidos para poder realizar actividad física, cuando en Chile esta medida recién se vino a adoptar a un año de la pandemia.” (Deporte a la Constitución)

Análogamente, su colega Hernán González, contrasta la cantidad de horas semanales asignadas a la enseñanza de la educación física en el sistema escolar, con la recomendación de la OMS en la materia:

“Un dato muy clave es que la OMS, la Organización Mundial de Salud, establece y recomienda seis horas semanales de educación física en los colegios y, actualmente, en nuestro país es de sólo dos horas, e incluso en los últimos cursos de la enseñanza media es un curso electivo.” (Deporte a la Constitución)

En el caso del Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad, su diagnóstico de la situación chilena se concentra particularmente en los efectos de la hiper-deportivización. A su juicio, esta tiene su origen en que: *“Chile, sostiene una definición en la Ley del Deporte y en la política nacional del deporte aún vigente que deportiviza todo (...) acá en Chile lo que hacemos es que, todo se convierte en deporte”*. Acerca de esta asimilación de las prácticas corporales al deporte, Rodrigo Soto del Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad señala que este paradigma reduce todo *“a la competencia y como fin último a la búsqueda del rendimiento. Cuando todo se reduce el deporte se invisibilizan otras prácticas”*. A su entender, en un contexto como el chileno, signado por un alto sedentarismo, este modo de regulación se traduce en que: *“al hiper deportivizar, muchas personas quedan excluidas”* (Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad).

Finalmente, cabe mencionar entre los antecedentes, el esfuerzo del Colectivo Recreación a la Constitución por describir la recreación como un aspecto constitutivo de la experiencia humana y como un medio de despliegue de la propia individualidad. A juicio de Sergio Toro, en representación del colectivo antemencionado, la recreación ha sido equiparada erróneamente a la entretención o la diversión. Por el contrario:

“Lo que estamos planteando nosotros como colectivo es precisamente algo diferente, que es desde allí, es desde el placer o de lo que nos afirma, desde lo que nos afecta positivamente es



que no solo nos divertimos, sino que construimos existencia, construimos sentido de vida” (Colectivo Recreación a la Constitución).

La recreación, desde este punto de vista, conecta diferentes dimensiones de lo humano:

“en lo que llamamos recreación se articula lo imaginativo en lo racional, lo intuitivo y lo conceptual, guiados siempre por el placer en la acción. Y desde allí como hemos ya mencionado, vamos construyendo lo que llamamos sociedad, persona, naturaleza, entorno, mundo, etcétera.” (Colectivo Recreación a la Constitución)

De acuerdo con Sergio Toro, el concepto de recreación *“es intersectorial, es transversal a la vida”*. Su consagración como Derecho Fundamental entonces se justifica en que: *“la idea de recreación como esencia del placer, el goce, el disfrute que tiene el ser humano por derecho propio, por existencia”* (Recreación a la Constitución).

Como es evidente, el Derecho a la Recreación se sustenta en una concepción ontológica de la vida buena, y de la relación de las personas consigo mismas, sus pares y la naturaleza esto queda de manifiesto en el siguiente extracto:

“la recreación, en este contexto, más bien se orientaría a una operación del bienestar en el contexto de un buen vivir. E incluimos el buen vivir precisamente porque la condición social chilena, la condición cultural de una multiplicidad de culturas no es sólo un dato demográfico sino un dato epistémico, un dato ontológico, y por lo mismo el buen vivir como concepto, como planteamiento, como actitud, nos permite dialogar no solo con distintas culturas, sino también con distintas comprensiones, entendiendo algo en común” (Sergio Toro, Colectivo Recreación a la Constitución)

Discusión de Contenidos

En términos de las propuestas presentadas por las diferentes audiencias sobre Derecho a la Recreación y el Deporte, es posible observar dos propuestas comprensivas, así como algunos elementos menos sistemáticos en otras dos audiencias.

En primer lugar, respecto de las propuestas comprensivas, estas corresponden a las audiencias del Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad y de Deporte a la Constitución. Como puede deducirse de la discusión presentada en el apartado de antecedentes, se trata de posiciones contrapuestas, toda vez que los primeros se manifiestan en contra de la consagración del Deporte como derecho fundamental, mientras que para los segundos esto constituye su principal causa.

Si bien ninguna audiencia se manifiesta en contra del deporte en tanto que práctica humana, la discusión central en este apartado refiere a si el derecho fundamental a consagrar es el de “deporte” o si se trata de uno diferente.

Daniela Ahumada de Deporte a la Constitución, señala que, a juicio de su organización, *“el derecho al deporte es un derecho social, esto quiere decir que el Estado debe proveer y garantizar un acceso a actividad física, deportes y recreación”*. Ahumada reconoce la existencia de mecanismos de protección jurídica distintos a la constitucionalización del derecho en comento, tales como *“mejorar el actual sistema deportivo vigente en Chile, robustecer el Ministerio [o] robustecer la ley del deporte”*. Sin embargo, defiende la pertinencia de consagrar constitucionalmente el Derecho al Deporte para lo cual ofrece cinco argumentos.

En primer lugar, afirma que esta alternativa delimita con claridad los límites y derechos asociados al Derecho al Deporte, favoreciendo la conciencia ciudadana acerca de este derecho. En segundo lugar, porque su garantía requiere de un rol activo del Estado dado su carácter prestacional. De este modo, sólo su constitucionalización tendría la fuerza suficiente para mandar al Estado a tomar las acciones necesarias para garantizar este derecho. En tercer lugar, dados los problemas de administración y transparencia en materia de gestión pública relativa al deporte, la constitucionalización de este derecho favorecería una mayor fiscalización en el uso de los recursos públicos. En cuarto lugar, porque facilita su justiciabilidad, toda vez que la consagración del Derecho al Deporte permite establecer mecanismos jurídicos de garantía, tales como los recursos de protección u otros. Finalmente, un quinto argumento refiere a las ventajas de contar con un marco general que articule y oriente las diferentes políticas públicas en materia de deporte, toda vez que actualmente estas aparecen como iniciativas poco congruentes y muchas veces disociadas entre sí.

La consagración de los derechos a menudo está sujeta a dos modalidades. Por un lado, el reconocimiento de un derecho autónomo, lo que quiere decir que el derecho protege un bien jurídico específico. Por otro lado, el reconocimiento de un encadenamiento de derechos, lo que implica que un derecho se defiende porque es condición necesaria del ejercicio de otro derecho que sí protege un bien jurídico específico. En el caso de la propuesta de Deporte a la Constitución, esta organización se decanta por la primera de estas modalidades, la que justifican de este modo:



“¿Cómo podemos proponer incluirlo en nuestra carta fundamental? Y es que creemos que, en primer lugar, debe tener un rol de derecho autónomo, debe tener su propio lugar en la Constitución, estableciendo que la Constitución asegura a todas las personas el derecho al deporte y la actividad física, y que va a ser un deber del Estado el promover y garantizar la práctica deportiva como un elemento esencial para el desarrollo íntegro de las personas, de una forma equitativa, eficiente y descentralizada”.

Por otro lado, la propuesta del Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad, en voz de Rodrigo Soto, consiste en reconocer el concepto de *“prácticas corporales deportivas y recreativas”*. En su opinión, este concepto es suficientemente amplio para incluir al deporte, mientras que *“cuando se promueve el deporte no se incluyen otras prácticas corporales”*. Adicionalmente, en opinión de Soto, la constitucionalización de esta concepción del derecho en comento posee una serie de ventajas, entre las que se contarían que:

“promueve el uso del tiempo libre y del ocio en la vida cotidiana, de una forma no competitiva más colaborativa (...) se reducen las desigualdades e injusticias en el acceso al movimiento corporal, (...); disminuye también la discriminación de género cuando hablamos de prácticas corporales; contribuye a construir una cultura de la colaboración y el encuentro por sobre la competencia; se promueve la seguridad y la no-violencia, al promover prácticas corporales; se validan también los derechos de niños, niñas y adolescentes y también al instalar o al hablar de prácticas corporales, deportivas y recreativas promoveríamos este derecho de forma económica, social y ambientalmente sostenible.” (Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad).

Mientras que Deportes para la Constitución y el Grupo de Trabajo, Cultura, Deporte y Sociedad se decantan respectivamente por la constitucionalización del Derecho al Deporte y a las Prácticas Corporales Recreativas y Deportivas, el Colectivo Recreación a la Constitución presenta una defensa del Derecho a la Recreación en un tono muy diferente. En efecto, la recomendación de este colectivo de establecer como un Derecho Fundamental la recreación *“abre caminos para poder situar los otros derechos de una manera más fluida, más comprometida”*, esto debido a que crea las condiciones para reivindicar la centralidad de las relaciones humanas como trasfondo de otros derechos. En palabras de Carolina Kurruf

“el ser humano, cuando se encuentra con su esencia del placer, del goce, del disfrute de manera tranquila, resguardada, amorosa, colectiva e inclusiva, es capaz de mirar lo fundamental de la vida, que son las relaciones humanas”

En definitiva, la consagración de este derecho favorecería:

“no solamente una sociedad que se pueda constituir desde una unidad, desde un tejido mucho más constitutivo y amoroso (...) sino también que se proyecta en una perspectiva social y política de acogida y desarrollo en todos los niveles y formas, sin considerar o sin dejar a nadie fuera.” (Colectivo Recreación a la Constitución).

A pesar de que el Colectivo Recreación a la Constitución no tematiza la distinción entre deporte y recreación, consultados sobre el tema afirman que, si bien el deporte es también una instancia de recreación, el primero corresponde a una expresión muy específica, en contraste con la segunda:

“Si tuviera que priorizar también, sería primero Recreación y Deporte. El Deporte, la diferencia que tiene, es que ha tenido un avance tan sostenido en el desarrollo del siglo XX y XXI, que de alguna manera se ha caracterizado como una manifestación particular y muy concreta y específica” (Colectivo Recreación a la Constitución).

Y, sobre lo anterior, profundizan:

“no todos juegan el mismo deporte, no todos tienen la misma habilidad para el deporte. En cambio, la Recreación es constitutiva de ser, de estar siendo humano, entonces yo me puedo recrear con cualquier actividad que me resulta placentera [...] respetando obviamente mis relaciones sociales y el entorno”.

Es interesante señalar que, en su propuesta, el Colectivo Recreación a la Constitución establece ciertas restricciones al Derecho a la Recreación. Por ejemplo, si bien se reconoce que el fenómeno de la recreación posee una dimensión económica, esta dimensión o valor está subordinada *“al cuidado y protección de los bienes naturales”*. En otras palabras, lo que este derecho ampara:

“no es cualquier recreación, no da lo mismo hacer cualquier cosa en función de la diversión o la entretención, sino que hacemos actividades recreativas que nos permitan mantener, cuidar, preservar y vivir, por no decir “re-crear” nuestra naturaleza en nuestro entorno y paisaje.” (Colectivo Recreación a la Constitución).

Por último, en materia de implicancias prácticas, o contenidos específicos que se derivan de las propuestas realizadas, cabe mencionar la posición de Deporte para la Constitución según la cual



otro beneficio de consagrar el Deporte como derecho fundamental tiene que ver con que permite reforzar su vínculo con la educación:

“La educación física debe proveer el cuidado del cuerpo sano de los niños, niñas y adolescentes; también la educación física es una formadora de valores de desarrollo integral de la persona” (Deporte para la Constitución).

En un tono similar, Claudio Basilio refiere a las consecuencias a nivel prestacional que supondría una Constitución que tomara en cuenta la importancia de la condición física, como proceso de transformación bio psico social. En su opinión estos compromisos prestacionales deben diseñarse con perspectiva de acompañamiento durante todo el ciclo vital:

“generar las garantías, los espacios deportivos y se tiene que promover en todo... de manera transversal, en distintos aspectos y en distintos ciclos de vida, partiendo en la preescolaridad y terminando con la tercera y cuarta edad” (Claudio Basilio).

Anexo 1. Menciones de audiencias del Bloque Temático 2 a temáticas del Bloque Temático 1

Dentro de las audiencias que fueron calificadas como Bloque 2 se encontraron algunas temáticas asociadas al Bloque 1. Así, en primer lugar, se observa que Esther Araneda del Colectivo de DDHH de Concepción, propone una estructura general para la garantía de derechos fundamentales en la futura Constitución.

“Preámbulo de la Constitución. Lugar de los Derechos Humanos en la nueva Constitución; Capítulo primero, por ejemplo, Finlandia: “el ordenamiento jurídico garantiza la inmovilidad de la dignidad humana y de las libertades y los derechos individuales que promueve la justicia en la sociedad”. Tercero, capítulo de derechos fundamentales (catálogo de derechos). Cuarto, la relación entre Estado y ciudadanía debe recoger y debe estar basada en el respeto y garantía del disfrute de los derechos fundamentales. Quinto, garantías, debe reconocer el sistema internacional de proteger los Derechos Humanos como garantía de los Derechos Humanos de la ciudadanía”

Luego también, Alejandro Mena de la Asociación Movimiento Nacional de Recicladores de Chile, también puntualiza la necesidad de que los recicladores sean considerados como un grupo de especial protección, *“por tratarse de un grupo tradicionalmente discriminado y excluido y por la labor ambiental que desempeñan, de la cual toda la sociedad resulta beneficiada”*. Asimismo, añade que

“porque frente a la ley que hoy día se levanta estamos en desmedro, estamos en desventaja. Entonces lo que buscamos [es] que el Estado realmente nos reconozca como una población laboral, una población que viene hace muchos años trabajando y, por lo tanto, que seamos reconocidos constitucionalmente para poder defendernos. Defendernos hoy día de los proyectos que se vienen”.

Anexo 2. Menciones de audiencias del Bloque Temático 2 a temáticas del Bloque Temático 3

De igual manera, en el presente bloque se observaron afirmaciones correspondientes al bloque temático 3. Particularmente, se hacen menciones en torno al Derecho de Propiedad, a la Libertad de Empezar y Desarrollar Actividades Económicas, y sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

Derecho a la Propiedad

Así, en primera medida, Francisco Vergara del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas, plantea la necesidad de que el Derecho a la Propiedad tenga un sentido orientado hacia el rol social de la propiedad.

“(...) cito a Vicente Burgos, amigo y experto en derecho urbanístico, que nos dice que “el rol social de la propiedad hoy día existe en la Constitución del 1980, pero como límite a la propiedad; y no como sentido de la propiedad””.

Asimismo, René Cortázar plantea el Derecho de Propiedad plantea que este derecho tiene una función social que debe ser reconocida.

“De hecho, en la actual Constitución, cuando el interés social lo exige, el Estado tiene derecho a propiedad y lo tiene derecho a hacer pagando en efectivo el total de la inversión realizada. En buena parte de las constituciones del mundo esto se denomina [como] compensación total”.

Paralelamente, el mismo René Cortázar plantea el Derecho a la Propiedad como una garantía de inversión y, por tanto, como una garantía del Derecho al Trabajo, en la medida que asegura disponibilidad de puestos de trabajo.



“¿Qué ocurriría si, en nuestro nuevo texto constitucional, se debilitara este derecho [de propiedad]? Lo que ocurriría es que buena parte de estos inversionistas, que en el mundo globalizado -tanto chilenos como extranjeros- que estaban decidiendo si invertir en Chile o en otros países, probablemente dejarían de interesarse y de invertir en nuestro país. Y, por lo tanto, influiría sobre la disponibilidad de empleo y la protección real al Derecho al Trabajo”

Libertad de Emprender y Desarrollar Actividades Económicas

En torno a la Libertad de Emprendimiento se observa que la audiencia de Héctor Sandoval de la Federación de Taxi-colectivo de la Región del Bio Bío "Mi taxi colectivo" aborda casi en su totalidad esta libertad. Así, en esta audiencia se plantea que los taxis colectivos cumplen una función pública de transporte, particularmente en ciudades menos pobladas de regiones, que no ha sido reconocida ni apoyada por el Estado.

“el Estado sigue recaudando 3 mil millones de dólares anuales por concepto de impuestos específicos, donde mucho de eso lo aportamos nosotros, porque sólo el 20 por ciento del combustible que se consume en el país paga impuesto específico, y no lo paga el transporte aéreo, el transporte marítimo, las termoeléctricas, las mineras, gran parte de la agricultura y el transporte de carga. Por lo tanto, creemos que esto es injusto, es inequitativo, y nosotros debiéramos tener acceso también a estos beneficios”.

Así mismo, Héctor Sandoval plantea que esto ha provocado una dificultad de acceso a tecnologías menos contaminantes, a lo que solicitan algún tipo de apoyo estatal.

“queremos igualdad de condiciones, no queremos seguir siendo discriminados tributariamente, no queremos ser discriminados en el uso de las vías, no queremos ser discriminados en el acceso a las tecnologías y a las energías menos contaminantes”

Luego, Horacio Rojas de la Asociación de Eventos de Chile, también hace una mención a la Libertad a Emprendimiento, entendida como un derecho que atienda a ciertos rubros en situaciones excepcionales como lo ha sido la pandemia.

“Lo que pedimos a la nueva Constitución es que se custodie el derecho a emprender una actividad económica y el derecho a trabajar sin discriminación de rubros por [causa de] ideologías sin base científica, que el Estado deba balancear las cargas fiscales o restricciones económicas ante una emergencia con atención a su riesgo real y no a su riesgo supuesto, de una cierta industria”

Derechos Sexuales y Reproductivos

Finalmente, Aldo Santibáñez de FENPRUSS hace mención de la necesidad de garantizar constitucionalmente los Derechos Sexuales y Reproductivos.

“Actualmente los derechos sexuales y reproductivos no están reconocidos expresamente en la Constitución vigente, y por eso nosotros proponemos que este reconocimiento, la promoción y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, contribuye al objetivo general de lograr una nueva Constitución con perspectiva de género transversal”

Este reconocimiento, según indica, debe abordar una diversidad de derechos y libertades que supondría una consagración efectiva de los Derechos Sexuales y Reproductivos

“se debe reconocer el derecho a la libertad sexual; a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo; a la privacidad sexual; a la equidad sexual; al placer sexual; a la expresión sexual y emocional; a la toma decisiones reproductivas libre y responsable; a la información basada en el conocimiento científico; a la educación sexual integral; y a la atención de la salud sexual”.



ANEXO II. Bloque Temático 4. Derechos Colectivos. Sistematización de audiencias

Informe elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso – Chile)

401: Igualdad ante la Ley y No Discriminación

La presente sección, con la que comienza este cuarto informe de sistematización de audiencias públicas, reporta los antecedentes y propuestas que las y los expositores plantearon frente a la Comisión de Derechos Fundamentales en materia de Igualdad ante la Ley y No Discriminación. Las materias relativas a este código estuvieron entre las más discutidas durante el Bloque 4, totalizando casi el 20% de todas las citas codificadas. Se trata pues, de una sección algo más extensa y en algunos casos, relativamente abstracta, pero cuyas implicancias prácticas son de primer orden.

Antecedentes y experiencias de vulneración

La nutrida discusión sobre antecedentes que se recoge en este apartado está internamente dividida en dos grandes temas, por un lado, es posible distinguir un cierto número de discusiones teóricas, relativas a la naturaleza de la relación entre Igualdad ante la Ley y No Discriminación, al encuadre general de la discusión y a los enfoques a través de los cuales es conveniente tratar estas materias. Por otro lado, se pueden identificar discusiones acerca de las experiencias de vulneración o de la especificidad de ciertos tipos de discriminación hacia grupos, así como el surgimiento de nuevas modalidades de discriminación que han emergido como consecuencia del avance tecnológico.

Enmarcado dentro del campo de la Teoría del Derecho, Alberto Coddou inscribe la discusión sobre No Discriminación en la cuestión más general de los Deberes Generales que caben al Estado en lo que concierne a “respetar, proteger y promover Derechos Fundamentales”. Estos deberes, afirma Coddou, *“derivan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que compromete la responsabilidad internacional de los Estados, sin perjuicio de sus arreglos internos”*. Respecto al contenido de estos deberes, el expositor distingue cada uno de dichos deberes:

“el deber general de respetar implica principalmente deberes de abstención o de no interferencia en el goce y ejercicio de los Derechos por parte de sus titulares. El Deber general de protección supone el desarrollo de un marco institucional en el cual los derechos pueden estar libres de afectaciones o violaciones por parte de terceros, o en que los derechos puedan ser efectivamente [ejercidos] por sus titulares. (...) Y por último, el deber general de promoción implica la proactividad estatal en la discusión de los derechos, y la educación necesaria para que los primeros interesados en su protección sean los propios titulares.” Alberto Coddou

Esta cuestión se relaciona directamente con la de la No Discriminación, pues

“(...) en el último tiempo se ha incorporado -entonces- un deber general adicional; esto es el deber de respetar y proteger [o] garantizar y promover todos los Derechos Fundamentales sin discriminación de ningún tipo.” Alberto Coddou

Comprender, entonces la naturaleza de los Deberes Generales del Estado respecto a los Derechos Fundamentales, resulta útil para comprender este *Deber General* de No Discriminación y, en particular, su relación con el *Derecho* a la No Discriminación.

“Ahora bien, ¿cómo entender la relación de un deber general de no discriminación con un Derecho a la Igualdad y No Discriminación? Tanto a nivel internacional como comparado se distingue entre las cláusulas subordinadas y autónomas. Así, por ejemplo, en el pacto de San José, el artículo 1.1 supone una cláusula subordinada de No Discriminación en el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en aquella convención, mientras que el artículo 24 contiene un Derecho independiente a la Igualdad y No Discriminación, cuyo ejercicio y goce no va asociado o anexo a otros derechos.” (Alberto Coddou)

Planteado llanamente, el Deber General de No Discriminación refiere a la no discriminación en el acceso y ejercicio de los Derechos Fundamentales, mientras que el Derecho a la No Discriminación es un derecho en sí mismo y no remite a la protección de otro derecho. Esta noción, la de un derecho autónomo a la No Discriminación, fue mencionada por varias audiencias y será, probablemente, una de las cuestiones centrales a definir en la deliberación constitucional.

Aunque la mayor parte del análisis relativo a la autonomía del derecho a la No Discriminación se aborda en la sección de contenidos, se consignan aquí las intervenciones de Verónica del Pozo Saavedra, de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), y José Manuel Díaz de Valdés, quienes profundizan sobre esta materia. En concreto, Verónica del Pozo Saavedra indica que son varios los instrumentos de derecho internacional que consagran de manera doble a la No Discriminación, tanto como una cláusula subordinada al ejercicio de derechos específicos, en cuanto que como un derecho autónomo:



“el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención Americana, la CEDAW, los principios de Yogyakarta (...) todos establecen el derecho a la no discriminación como un derecho en sí mismo, pero también como un derecho en relación con los otros derechos que establecen estos pactos. (Verónica del Pozo Saavedra, ABOFEM)

Y puntualiza sobre ello:

Por lo tanto, si bien en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el PIDESC, por ejemplo, se consagra el derecho al trato igualitario entre hombres y mujeres en relación con los derechos que cada pacto consagra, también se establece la no discriminación como un derecho en sí mismo ¿Ya? Como un derecho autónomo, sin exigir que sean afectados otros derechos también. (Verónica del Pozo Saavedra, ABOFEM)

A estos ejemplos en materia de consagración en el Derecho Internacional, José Manuel Díaz de Valdés añade un caso de legislación nacional que ilustra la relevancia de esta discusión:

“Respecto a la Igualdad [y No Discriminación] como derecho autónomo, ¿a que me refiero con esto? Si ustedes ven, algunos tratados internacionales, o la Ley Zamudio, tienen un problema grave, y es que no basta que yo vulnere tu Igualdad ante la Ley para que [tú] puedas reclamar. No basta. [Tienes] que además probar que te vulneré un derecho adicional; es decir, te vulneré tu igualdad, te discriminé y además eso afectó tu propiedad, tu libertad de expresión, tu libertad de conciencia, etcétera.”

Como puede observarse, la cita de Díaz de Valdés sigue el tratamiento de un derecho único que consagra simultáneamente los principios de Igualdad ante la Ley y de No Discriminación. Aunque existen precedentes jurídicos en el derecho comparado respecto de la conexión entre ambas materias, la relación entre estas y si ameritan o la consagración de derechos autónomos por separado, reaparecerá durante la discusión de contenidos. En lo tocante al presente apartado, en cambio, puede consignarse la alusión al caso estadounidense como paradigmático respecto de la relación entre Igualdad ante la Ley y No Discriminación.

[en el ejemplo estadounidense] desde la igualdad formal, se pasa a entender que ésta podía otorgar una protección específica para las personas pertenecientes a un colectivo determinado, -esto eran, los afrodescendientes. De modo entonces que la discriminación, o que la No Discriminación más bien, surge con un propósito bien establecido, que es el proteger a ciertos grupos sociales. Estefanía Esparza

en Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos y los tribunales de justicia en Europa, en particular el Tribunal de Justicia Europeo. Ellos han elaborado, en el fondo, esta nueva forma de interpretación del Principio de Igualdad, tanto desde el punto de vista colectivo como también como un principio anti subordinador y no sólo como una norma de No Discriminación. Catherine Muñoz (Optia)

Asimismo, Esparza señala que la tradición jurídica chilena ha dado un trato dispar a ambos derechos, otorgando una cierta preeminencia al principio de Igualdad ante la Ley y acotando el alcance del principio de No Discriminación. Por su parte, Juan Enrique Pi (Fundación Iguales), complementa señalando que a pesar de que la jurisprudencia nacional ha recogido el principio de No Discriminación, este aún no alcanza rango constitucional.

el Derecho a la Igualdad se ha encontrado consagrado en nuestro ordenamiento jurídico prontamente, desde el Reglamento Provisorio de 1812, ocupando siempre un lugar destacado en los diversos textos. Sin embargo, [...] no se cuenta con una prohibición expresa de discriminación. A decir verdad, existen alusiones para ámbitos acotados, como el ámbito laboral o en materias económicas, que prohíben discriminar, pero se trata, como indiqué, de prohibiciones que no son generales, sino parciales. Estefanía Esparza

“diversas normas en el ordenamiento jurídico han adoptado un mandato de no discriminación expreso. [...] Este mandato, si bien ha sido ampliamente recogido por la jurisprudencia nacional, sigue manteniendo un rango legal y, por tanto, podría verse en conflicto con otras normas del mismo rango que pudieran declararse o existir a futuro.” Juan Enrique Pi (Fundación Iguales)

Siempre en sede teórica, cabe señalar que otra de las discusiones refiere la cuestión de si dotar o no al Derecho a la No Discriminación de adjetivos (por ejemplo, actualmente este derecho está acompañado del adjetivo “arbitraria”). Esta cuestión que, a simple vista podría parecer trivial, tiene grandes implicancias de política pública. El carácter de esta discusión es ilustrado satisfactoriamente en el siguiente fragmento:

[La Constitución vigente] no define qué es arbitrario. Dice “usted puede hacer distinciones, pero no arbitrariamente.” Nuevamente la jurisprudencia y la doctrina en Chile han sido súper contestes en esto (que significa que están de acuerdo) en que cuándo es arbitrario y hacen una diferencia: cuando no hay justificación. José Manuel Díaz de Valdés (Centro de Derecho Constitucional, UDD)



Estefanía Esparza problematiza la concepción actualmente vigente de la No Discriminación, un ejemplo de No-Discriminación con adjetivo:

“esta [concepción de] discriminación arbitraria, se aleja de lo consagrado en los distintos tratados internacionales, puesto que en nuestro país el elemento configurador de la discriminación es la arbitrariedad, es decir, la falta de justificación razonable de la medida.” Estefanía Esparza

La expositora, además muestra que, en virtud de los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile, se produce una discrepancia respecto a la concepción de No Discriminación que debe primar, lo que dificulta a los jueces y jueza el trabajo de impartir justicia.

“Esto [el resguardo contra la discriminación arbitraria] es distinto al derecho internacional y al derecho comparado, porque para ellos, uno de los elementos que configuran la discriminación es que se trate de actos u omisiones que se basan, o que tienen por resultado, afectar a los distintos grupos sociales. Así las cosas, en nuestro ordenamiento jurídico, entonces, conviven dos nociones distintas de discriminación que pueden ser contrapuestas y donde particularmente una, la discriminación arbitraria, genera inconvenientes a la hora de otorgar protección frente a la discriminación.” Estefanía Esparza

En contraste, Díaz de Valdés parece aportar un argumento intuitivo a favor de la concepción de (protección contra la) discriminación arbitraria, señalando un ejemplo en el que entra en juego este principio:

“Es decir, ¿yo puedo cobrarle más impuestos a una persona A que a una persona B? Sí, puedo tratarlos diferente si es que lo justifico: por ejemplo “usted tiene más ingresos y usted tiene menos ingresos.” Se le cobra más al que tiene más ingresos.” José Manuel Díaz de Valdés (Centro de Derecho Constitucional, UDD)

No obstante, en la medida en que se distingue el principio de Igualdad sustantiva del Principio de No Discriminación es posible constatar que en sí mismo un principio de No Discriminación sin adjetivos es compatible con un sistema impositivo de carácter progresivo. La importancia de esta distinción es refrendada por Estefanía Esparza. Asimismo, la compatibilidad de un principio de no discriminación sin adjetivos y el trato diferenciado es mencionada por Coddou:

“Se pretende con este hecho [una propuesta de contenidos] separar la Igualdad de la No Discriminación, para entregar mayor claridad y evitar la confusión con el trato idéntico, puesto que en ocasiones se piensa que el Derecho a la Igualdad consiste en brindar un trato igual, y hoy sabemos que inclusive con un trato idéntico se puede discriminar.” Estefanía Esparza

“Adicionalmente, y cómo lo hacen diversas constituciones, había que recordar que las acciones positivas en favor de grupos desaventajados no constituyen una infracción a la Igualdad ante la Ley” Alberto Coddou

En la misma dirección, cabe señalar que el representante del Centro de Derecho Constitucional de la U. del Desarrollo no estima que la prohibición de la discriminación deba restringirse únicamente a los casos en que esta es arbitraria. Existen casos, señala, en que se requerirá de un estándar más exigente y en el que la discriminación no podría justificarse únicamente a través del criterio de razón fundada.

“Y tercer problema, y quizá este es el más urgente de todos. Fíjense qué establecer como límite las distinciones que yo puedo hacer, la razonabilidad, es decir, que pueda dar una razón suficiente (valga la redundancia) no siempre es suficiente. Porque a veces yo tengo muy buenas razones para hacer una distinción, pero esa distinción afecta la dignidad de las personas. Es decir, la dignidad es un límite paralelo, adicional a la razonabilidad, cuando yo quiero hacer una distinción. Y eso no lo dice la Constitución actual.” José Manuel Díaz de Valdés (Centro de Derecho Constitucional, UDD)

Otra discusión teórica que aquí se consigna, dice relación con la necesidad de adoptar un enfoque interseccional para abordar adecuadamente la complejidad del fenómeno de la discriminación. Como con otras discusiones, en este caso se trata de un tópico que reaparecerá en la discusión de contenidos. En este apartado, por tanto, se ofrece un tratamiento orientado a proveer el encuadre y problematización de la temática.

“Bueno, fíjense que cuando el Estado construye políticas antidiscriminatorias, normalmente, en Chile y en todo el mundo, lo hacen en base a un criterio, uno: raza, género; uno. ¿Y cuál es el problema? Que esto está probadísimo. Que cuando tú haces una política pública así, tú beneficias al sector menos desaventajado del grupo desaventajado. Es decir, tu política es, por ejemplo, para las mujeres; entonces el grupo de mujeres que está mejor educado, que tiene mayor clase social, que está más bien, puede acceder a esos beneficios más que el resto” José Manuel Díaz de Valdés (Centro de Derecho Constitucional, UDD)

“Yo también los invitaría a considerar un tema que apareció en la exposición anterior, que es el tema de la interseccionalidad, como la llaman ustedes, o multi-discriminación. ¿A qué voy con



esto? En [la] Teoría del Derecho Antidiscriminatorio, algo que es evidente es que generalmente la discriminación que uno ve es la discriminación simple: raza, género, religión, etcétera; pero no la compleja, es decir, una persona que pertenece a la vez a todos estos grupos, que es -como decían ahí- mujer, migrante, de otra raza en Chile, que habla otro idioma, como Joanne Florvil, por ejemplo, ese es quizá el ejemplo más claro multi-discriminación en Chile.” José Manuel Díaz de Valdés (Centro de Derecho Constitucional, UDD).

En la misma línea, Catherine Muñoz (OPTIA) menciona la dificultad asociada a capturar la multidiscriminación, en particular respecto de la discriminación algorítmica - a la que nos referiremos en seguida-, especialmente cuando su carácter interseccional se expresa respecto de categorías raciales y de clase.

Desde su origen la raza -como construcción social- y la clase están profundamente entrelazadas. Esta unión tiene su origen en dos eventos históricos, ocurridos simultáneamente, la Constitución de América y la creación del capitalismo colonial. La clasificación social de la población colonizada se vio en primera instancia como un fundamento de la dominación, y luego como una parte importante de una nueva economía. Lo anterior dificulta diferenciarlas para efectos de determinar si una persona está siendo discriminada mediante sistemas de inteligencia artificial y en base a qué. Catherine Muñoz (OPTIA)

Finalmente, José Manuel Díaz de Valdés plantea algunas consideraciones adicionales a la discusión sobre no discriminación. En particular, discute la complejidad de tratar la cuestión sobre los destinatarios del derecho, es decir, de a quiénes son obligados por la consagración del derecho.

“hay un tema de destinatarios: ¿quién no puede discriminar? Normalmente siempre se consideró que la [prohibición] era para el Estado, pero empezamos a tener problemas cuando empezamos a aplicar esto a los particulares, porque los particulares no son iguales al Estado, y todos nosotros discriminamos en nuestra vida diaria; y el Estado tiene que ver ahí, o la Constitución, hasta dónde llega.” José Manuel Díaz de Valdés (Centro de Derecho Constitucional, UDD)

Ahondando sobre este punto, Díaz de Valdés especifica como una de las complejidades de este tema el carácter asimétrico de la relación entre destinatarios:

“Actualmente en Chile, por ejemplo, tenemos prohibiciones expresas en materia laboral y en materia del consumo. Pero son prohibiciones que además son asimétricas, ojo con eso. Ejemplo, el consumidor. Si yo voy a comprar una tienda, a mí no me pueden decir ‘a usted yo no le vendo porque usted es hombre’, por ejemplo, pero el comprador no tiene esa prohibición de discriminación: ustedes pueden entrar a una tienda y decir ‘yo no quiero ver autos hindúes, porque los hindúes son todos flojos’ [sic] y nadie les va a hacer nada. Entonces, ojo, es súper complicado aplicar la discriminación entre particulares, y por eso hoy día es un poco limitado lo que dice la Constitución.” José Manuel Díaz de Valdés (Centro de Derecho Constitucional, UDD)

Como se señaló al inicio de este apartado, una segunda gran temática concierne a las experiencias de discriminación contra personas de grupos históricamente excluidos, así como las especificidades que adoptan ciertas formas de discriminación. Sobre el carácter estructural de algunas de ellas se pronuncia Catherine Muñoz:

“el racismo es una discriminación estructural, la discriminación por género es estructural y la clase también es estructural. [Por] “estructural” me refiero a que tiene un origen histórico, que no yo no lo puedo explicar solamente con los rasgos externos, sino que hay toda una construcción social detrás” (OPTIA)

En lo que atañe específicamente a la discriminación por motivos raciales, la expositora profundiza:

“existe una arraigada creencia de superación del racismo, basado en la existencia de un generalizado mestizaje. Sin embargo, las sociedades han mantenido las estructuras jerárquicas que se fundan en el racismo. Esta disonancia denominada “daltonismo racial” se caracteriza por que las personas creen que desigualdades, discriminaciones o perjuicios en el fondo, no son problemas de racismo; sino que los explican por cualquier otro tipo de injusticia, desde otra perspectiva; tales como el mercado, la naturaleza, del azar o la clase.” (Catherine Muñoz, OPTIA).

Por su parte, José Rebolledo de la Red ECEA se refiere a las experiencias de discriminación y falta de oportunidades que afectan a jóvenes infractores de Ley.

“Respecto a la continuidad de estudios también observamos discriminación, porque es muy difícil que estos jóvenes, una vez que salgan en libertad, puedan continuar estudios en el medio libre sin los apoyos específicos que les dan en los establecimientos y el apoyo psicosocial que será el interior del centro privativo.” (José Rebolledo, Red ECEA)

En una intervención sobre cuyo grado de comparabilidad nos reservamos el derecho de emitir opinión, Gabriel Ygal Colodro plantea la existencia de una discriminación hacia las personas



chileno-israelíes, proveniente de fuerzas políticas con presencia en el Poder Legislativo y en la Convención Constitucional.

“Estos tratados se han visto amenazados por conflictos de naturaleza política, generados al interior del Congreso Nacional; más recientemente, por el proyecto de ley boicot. Este último punto, saca a la luz un tema importantísimo: la existencia de la fuerza política en el Congreso Nacional que nos singulariza de forma negativa entre todas las naciones, y que nos resta y excluye como chilenos israelíes a través del boicot. Respecto a esto último, nos parece relevante mencionar que lamentablemente, hace algunas semanas, puso, en esta Convención, un movimiento que llama directamente a discriminarnos.” Gabriel Ygal Colodro (Comunidad Chilena de Israel).

Por último, las audiencias de Imagina Chile y OPTIA, presentan antecedentes sobre una modalidad de discriminación de reciente aparición, denominada discriminación algorítmica. Este tipo de discriminación está asociada al análisis automatizado de patrones a partir de datos biométricos e involucra una serie de riesgos y sesgos que perjudican, en general, a la población que pertenece a grupos históricamente excluidos.

El fragmento que a continuación se recoge, expresa sintéticamente el tipo de riesgos que se producen debido a los sesgos de programación de estas entidades:

“los sistemas de reconocimiento facial, que son estos sistemas que identifican patrones en los rostros de las personas, a fin de identificarlas, han presentado tener sesgos evidentes respecto a género, a raza, e incluso clase (...) esto puede tener consecuencias de diversa índole, como, por ejemplo, la detención de manera ilegal, [o] que se le imputen cargos de manera ilegal a partir de un algoritmo, a partir de una tecnología que estaba sesgada. Entonces, finalmente, el tratamiento de datos biométricos tiene impactos súper importantes en lo que entendemos como democracia, pero también en la libertad de las personas.” Bastián Riveros (Imagina Chile)

Catherine Muñoz resalta que este tipo de discriminación no debe ser pensada exclusivamente en términos del componente tecnológico involucrado y, en su lugar, prefiere hablar de un tipo de discriminación de carácter socio-técnico, en tanto que:

“para fines regulatorios, es preferible considerar una descripción de sistemas sociotécnicos. Ya que, junto con los componentes técnicos ya referidos, también son esenciales las motivaciones de las personas que participan directamente en el diseño e implementación, así como su contexto social particular. La suma de los factores técnicos y sociales explica los impactos causados por este tipo de tecnología, especialmente aquellos negativos que vulneran los Derechos Humanos; como [es], en este caso, la discriminación algorítmica.” Catherine Muñoz (OPTIA)

De acuerdo a la misma expositora, la discriminación algorítmica es una forma de discriminación indirecta. Añade que dichas formas indirectas de discriminación tienen lugar cuando:

“una disposición, aparentemente neutra, pone a las personas que comparten una característica protegida en una desventaja desproporcionada en comparación con otras. Este tipo de discriminación es la regla general en materia de discriminación algorítmica. Y aquí no importa el ánimo, sino el resultado.” Catherine Muñoz (OPTIA)

Junto con el riesgo asociado a los sesgos contra las personas de grupos históricamente excluidos, Riveros expone el potencial mal uso de estas tecnologías a partir de actividades de perfilamientos. Estas consisten en

“básicamente establecer patrones de conducta [de] las personas a partir del tratamiento de datos, y esto genera proyecciones y decisiones automatizadas que exceden a las personas mismas (...)” Bastián Riveros (Imagina Chile)

Por último, se recuperan dos aristas de la discriminación algorítmica cuya atención requiere especial urgencia. Por un lado, el riesgo de un potencial uso malicioso en campañas políticas, con el consecuente efecto sobre la robustez de la democracia y, por el otro, la ausencia de un adecuado resguardo frente al creciente uso de sistemas de aprendizaje automático en tanto que instrumentos de política pública.

“yo diría que la consecuencia más radical y más grande, más grave, es finalmente que me puedan ofrecer un candidato a una elección de acuerdo a mis preferencias [que supuestamente] reflejo a partir de, por ejemplo, las redes sociales” Bastián Riveros (Imagina Chile)

“Me quiero referir específicamente a aquellas discriminaciones producidas por el uso de sistemas de machine learning o que toman decisiones automatizadas o semiautomatizadas que pretenden resolver este tipo de complejidades sociales. Lo anterior es relevante porque este tipo de sistemas actualmente está siendo usado por el Estado de Chile con la finalidad de utilizar su función y prestación de servicios sin ningún control sobre sus consecuencias ni registros sobre sus impactos.” Catherine Muñoz (OPTIA)

Contenidos

En lo respectivo a propuestas de articulado constitucional, los derechos a la Igualdad ante la Ley y a la No Discriminación resultan de particular interés entre las audiencias recopiladas, con 37 declaraciones que adelantan proposiciones de contenido. Un primer aspecto es el establecer un principio de Igualdad material positiva que se complemente con un mandato de No Discriminación, que, en opinión de Alejandro Mena, de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, ANARCH, tiene el carácter de un mandato de abstención:

“El Estado de Chile debe garantizar las condiciones de igualdad material, protección que en un Estado Social de Derecho se expresa en una doble dimensión: por un lado, como mandato de abstención o interdicción de tratos discriminatorios -mandato de abstención- y, por otro, como un mandato de intervención, a través del cual el Estado está obligado a realizar acciones tendientes a superar las condiciones de desigualdad material que enfrentan dichos grupos.”

En una línea similar, José Manuel Díaz de Valdés, del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, hace énfasis en los problemas de no consagrar el Derecho a la Igualdad ante la Ley como un derecho autónomo, esto es, de condicionar su aplicación práctica a la constatación de que otro Derecho Fundamental se ha violado:

“[Hoy] la Igualdad se hace como un “derecho parasitario” de otro derecho, y esta concepción es súper dañina, como ustedes pueden entender, porque desprotege gran parte de situaciones, porque yo no puedo probar a veces, o no puedo invocar otro derecho. Entonces, primera advertencia por favor: cuando ustedes discutan la igualdad, conságrenla como un derecho autónomo, que no dependa de la vulneración de otro derecho.”

Otra advertencia de Díaz de Valdés apunta a las consecuencias de establecer calificativos o condiciones a la Igualdad consagrada en la Constitución, pues estos pueden acabar limitando la aplicación efectiva de este derecho, o su protección por parte de los tribunales:

“Que sea una igualdad en sentido amplio. Cuidado con los adjetivos calificativos, que a veces reducen. Por ejemplo, si yo pongo “igualdad de derechos”, esa es una forma de igualdad, pero deja fuera otras formas de igualdad. Entonces, cuidado con cómo usan los calificativos y dónde los usan. Ojalá sea lo más amplia posible, la igualdad de trato en el sentido más amplio posible.”

En lo respectivo a la No Discriminación, Díaz de Valdés coincide con otras y otros ponentes en establecer constitucionalmente una prohibición general de la discriminación. Destaca de ella que no se encuentra condicionada a categorías o grupos particulares, lo cual también podría resultar en vacíos de cobertura:

“cuidado con esos sistemas, como el europeo, [que] por ejemplo, se construyeron sobre la base de una categoría o de dos: la raza, el sexo, el género, la religión, y de ahí fueron construyendo un sistema general; la idea es que al menos exista una prohibición general también, para que nada quede fuera, ninguna discriminación, [aunque] no pueda asociarse a estas características, quede fuera, como ya ha pasado.”

Esta misma consideración la expresa Juan Enrique Pi, de la Fundación Iguales: *“la discriminación es un fenómeno dinámico y las razones por las que se discrimina hoy no serán las mismas por las que se discriminará mañana.”* Estefanía Esparza, académica de la Universidad de la Frontera, va más allá que Díaz de Valdés, planteando que el Derecho a la No Discriminación no debe limitarse por un criterio de arbitrariedad en el trato, en la medida en que este requiere de una compleja interpretación caso a caso, que vuelve más irregular la aplicación del derecho:

“abandonar el concepto de discriminación arbitraria. La noción de discriminación arbitraria, al menos a nivel constitucional, se obtiene mediante la interpretación, pero yo considero que es relevante que la Constitución, no solamente no adopte este concepto, sino que de ello quede constancia en la historia de la Constitución; es decir, se plantea la existencia o la incorporación de la discriminación, sin adjetivo.”

Con ella coincide también Alberto Coddou, académico de la Universidad Austral: *“por otra parte, yo abandonaría el calificativo de “arbitraria”, con el objeto de considerar a la discriminación como un mal, un injusto constitucional, distinto de la mera irracionalidad.”*

En contraste, Juan Enrique Pi, de la Fundación Iguales propone consagrar constitucionalmente la concepción vigente del principio de No Discriminación (actualmente sólo posee rango legal). Se trata de una concepción que restringe la penalización de la discriminación a los casos en que esta es arbitraria y en los que además produce la afectación de otros derechos. De este modo, dicha consagración no trataría a la No Discriminación como un derecho autónomo, lo que se distancia además de las propuestas presentadas en varias de las audiencias, incluida la de Díaz de Valdés, citada al inicio de este apartado.

“[proponemos] elevar a rango constitucional el mandato de no discriminación contenido en la Ley 20.609. Este mandato establece que “se entiende por discriminación arbitraria toda distinción,



exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de legítimos Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución o en Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes (...)

Juan Enrique Pi (Fundación Iguales)

Por su parte, las consideraciones que desarrolla Esparza y que consignáramos hace un momento, resultan útiles para construir una forma aumentada de la No Discriminación, un Derecho a la No Subordinación, que pone el foco en el carácter sistémico de la discriminación y su propósito formativo del orden social:

“consagrar expresamente el Derecho a No Ser Discriminado, de manera diferenciada de la Igualdad, es que se pretende dar un contenido material a la No Discriminación o No Subordinación; es decir, de alguna manera separándolos de la Igualdad formal. Digo “No Subordinación” porque es una corriente que plantea que el Derecho a la Igualdad tiene por finalidad terminar con las estructuras opresivas que someten a grupos sociales determinados como, por ejemplo, las mujeres, los indígenas o las personas de la diversidad sexual, entre otros.”

Un aspecto que emerge frecuentemente en las audiencias en esta materia es la demanda por protecciones positivas a grupos desaventajados. Alberto Coddou caracteriza el modo en que la actual Constitución de 1980 es neutra en este aspecto:

“Habría que partir -diría yo- abandonando el modo en que el derecho constitucional comparado nos ha catalogado, por el actual artículo 19 número 2, que contiene el Derecho a la Igualdad ante la Ley, caracterizándonos como una constitución neutra; por no incluir o por no tomar partido por grupos desaventajados, no incluir una prohibición de discriminación, ni entregar soporte constitucional a acciones positivas del Estado.”

No existe acuerdo entre las y los ponentes respecto a cómo materializar la protección a grupos desaventajados: el mismo Coddou, por ejemplo, se muestra escéptico de una redacción que aborde explícitamente los diferentes tipos de discriminación. Dicha posición tiene a la vista las consecuencias que esta concepción ha tenido en los Estados Unidos

“el gran problema que tenemos es que, si empezamos a mencionar formas de discriminación distintas, como por ejemplo ha pasado en la legislación Federal en Estados Unidos, se generan estatutos separados que, por ejemplo, generan distintos tipos de escrutinio judicial si en un caso está en juego, por ejemplo, la categoría raza o color de piel, que, por ejemplo, supone un mayor escrutinio judicial que el género o el sexo en Estados Unidos. Lo mismo ha pasado (...) con la Age Discrimination Act o con la Disabilities Discrimination Act, que, de algún modo, generan tipos de defensas distintas, tipos de intencionalidad que son juzgadas de manera distinta.”

Coddou es enfático en la naturaleza política de los problemas que podrían derivarse de una consagración del Derecho a la No Discriminación redactada en estos términos.

“no queremos generar estatutos separados, ni una competencia de grupos desaventajados por mayor atención institucional. Y en ese sentido, yo creo que habría que seguir el ejemplo del comité [de la] CEDAW, quién ha interpretado que el término “toda forma de discriminación” es lo suficientemente amplio como para dar pie para que la deliberación democrática vaya modulando las formas de reprochar, reparar, prevenir y sancionar todas esas diferentes formas en que se expresa y manifiesta la discriminación.”

En desacuerdo con Coddou, Estefanía Esparza se decanta por reconocer la existencia de grupos históricamente excluidos, en lo tocante al derecho en comento. La expositora coincide, sin embargo, en las consecuencias jurídicas de estas normas, es decir, en el rol de estándar reforzado en materia de vulneración del principio de No Discriminación, que ellas suponen. En consecuencia, propone una selección cuidadosa respecto de qué grupos deben mencionarse, aunque adhiere a la idea de un listado abierto.

“esta definición de discriminación debe incorporar necesariamente una cláusula que contenga a las categorías sospechosas o pertenencias a los distintos grupos sociales. Estos grupos deben estar muy bien pensados y no pueden ser categorías o pertenencias contingentes, sino características por las cuales se haya discriminado tradicionalmente, puesto que su inclusión no tiene una finalidad meramente ejemplificativa, como pueda pensarse, sino que debe considerarse para aplicar un test de igualdad o un escrutinio más estricto, [...] Además, esta cláusula general debe incorporar una cláusula abierta final para nuevos grupos.”

Estefanía Esparza

En tanto, Juan Enrique Pi se muestra partidario de hacer una mención explícita a grupos históricamente excluidos, tanto en el preámbulo de la nueva Constitución como en la sección destinada a Derechos Sociales:



“Creo que puede estar establecida en los principios una mención a los grupos históricamente discriminados o excluidos, pero creo que también hay ciertos derechos y, particularmente cuando hablamos de Derechos Sociales” Juan Enrique Pi (Fundación Iguales)

“creo que cuando hablamos de Derechos Sociales, y de la forma en que se ejercen esos Derechos Sociales, o de la forma en que hay brechas en el ejercicio de esos derechos, sí debería haber una mención a esos grupos y sobre todo, y también en un concepto abierto, es decir, sabiendo que los grupos excluidos hoy en día o históricamente excluidos al año 2021 pueden ser otros y pueden haber nuevos en el futuro.” Juan Enrique Pi (Fundación Iguales)

por otro lado, José Manuel Díaz de Valdés advierte que los listados de protección de este tipo son restrictivos, y que puede ser más conveniente un mandato de No Discriminación preferencial hacia la interseccionalidad.

“la única forma en que tú llegues a los invisibles de los invisibles -y esta es la propuesta, que la tienen algunos países- es hacer un mandato especial al Estado, para que se preocupe de la discriminación con preferencia. Es decir, ‘usted Estado, preocúpese especialmente de combatir la multi-discriminación, o la interseccionalidad, en esta sociedad’.”

Juan Enrique Pi, de la Fundación Iguales propone que, de usarse este tipo de protecciones a grupos, debe ser a través una lista abierta y no restrictiva, posición que suscribe Catherine Muñoz de OPTIA; Ethan Langenegger, de la ONG Diverses y Estefanía Esparza favorecen un listado más extenso, insistiendo también en que no sea considerado exhaustivo.

Díaz de Valdés también desarrolla en extenso una revisión del tipo de medidas de “discriminación positiva” o “acción afirmativa” que pueden adoptarse en resguardo de estas categorías protegidas. Advierte que una de las más conocidas, las cuotas de integración, son una medida de último recurso, útiles cuando otras medidas ya se han intentado sin éxito, pero con más riesgo de aparecer como ilegítimas ante la opinión pública. Explica Díaz de Valdés esta escala de intensidad usando el ejemplo de las cuotas de sexo para la elección del Congreso, vigentes desde la elección de 2017:

“Hay tres temas en que fijarse. Primero, es más fácil la discriminación positiva que es temporal que la que es ilimitada en el tiempo, [...] que es] más difícil de echar abajo. Segundo, que sea neutra: las cuotas o las discriminaciones positivas más antiguas hablaban siempre a favor de un grupo, por ejemplo, “mujeres”, hoy día son más neutras. Por ejemplo, la Ley de Participación Electoral, que viene de la elección del Congreso pasado, es un 30 o 40% de cada sexo o género, no distingue hombre o mujer en particular, porque a veces puede funcionar para un lado o para el otro. Y tercero, y quizá lo más importante, es que sea una cuota de medios más que de fines. Una cosa, como la cuota electoral, que es poner más para que las personas elijan, que estén en el voto, y otra cosa es el fin: las de fines en general son más resistidas que las de medios”

Respecto a las alternativas a las cuotas, Díaz de Valdés releva la posibilidad de las “Acomodaciones Razonables”, que son medidas que ajustan las reglas, infraestructuras y organizaciones para hacer accesibles ciertas prácticas que normalmente no lo son para personas con ciertas características; un ejemplo físico son las rampas de acceso, pero también existen acomodaciones de reglas, que no son físicas¹⁸. En general, las acomodaciones pueden ser diseñadas -aunque no es necesario- para que mejoren la accesibilidad no solo de las personas previamente afectadas, sino de todas las potenciales usuarias. Dado que los mandatos de acomodación razonable generalmente se aplican caso a caso, su diseño final puede ser muy flexible, pero requiere también de garantías institucionales para su efectividad.

Otra discusión referente al alcance de la No Discriminación es la que versa sobre los diversos ámbitos y derechos en los cuales ésta ha de aplicar, lo cual también fue mencionado en el marco de audiencias dedicadas a tales temas. Sin ser una enumeración exhaustiva, se constata en ellas un interés:

“Todos los trabajadores en su país deben usar de idéntica protección siendo trabajador. Esta separación entre público-privado, después subcontratados, tercerizados, eventuales, temporeros, sólo ha servido en nuestro país para aumentar la precariedad y los abusos.” José Ortiz, (Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados)

“Las propuestas van en la dirección de igualdad material y no discriminación, e igual salario por trabajo de igual valor, prohibición de cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de etnia, raza, edad, sexo, género, religión, opinión pública, ascendencia nacional u origen social, sindical, embarazo, carga familiar, estado civil, rasgos físicos, o cualquier otra que

¹⁸ Usando el mismo ejemplo de las candidaturas de mujeres al Congreso, una medida de acomodación razonable que se implementó, en conjunto con las cuotas, fue el financiamiento adicional a las candidaturas femeninas, en respuesta a la evidencia de que estas candidaturas recibían menos fondos de los partidos.



tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.” Fabián Ponce, (Central Unitaria de Trabajadores)

“Pienso en el Derecho a la Salud, en el Derecho a la Vivienda, en el Derecho a la Educación, en el Derecho al Trabajo, donde constantemente vemos esa brecha en razón no solamente de ser personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex, o queer, sino que también muchas veces en pertenencia a Pueblos Originarios, en ubicaciones geográficas, en el sexo o el género de las personas, etcétera. Creo que esa definición debería estar en determinados derechos.” Juan Enrique Pi, (Iguales)

“En el Principio de Igualdad, es importante para nosotras que no necesariamente lleguemos al techo, sino que aseguremos un piso mínimo de condiciones básicas para vivir, sobre todo para las mujeres. Esto no obedece a ninguna concepción, más allá de la aplicación de los diversos tratados internacionales y estándares que existen, que se han desarrollado en la materia a propósito del Principio de Igualdad y de la No Discriminación.” Rocío Sánchez

Un último ámbito, superficialmente emergente, es el de la discriminación algorítmica. Como se consignó brevemente en el apartado de antecedentes, se trata de una forma de discriminación que ha surgido de la interacción entre las prácticas sociales discriminatorias y el uso de nuevas tecnologías.

A este respecto, Bastián Riveros señala que, frente al auge de las técnicas de análisis masivo de información biométrica, así como de las actividades de perfilamiento y los potenciales riesgos individuales y sociales que éstas comportan, su propuesta consiste en

“consagrar a nivel constitucional el Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles que afecten Derechos Fundamentales.” Bastián Riveros, Imagina Chile

Por su parte, Catherine Muñoz suscribe la necesidad de consagrar una interpretación colectiva del principio de Igualdad ante la Ley a fin de poder derivar de ella normas antidiscriminatorias capaces de hacer frente a la diversidad de modalidades en que la discriminación se manifiesta.

“El principio de igualdad en materia constitucional -me refiero a la Igualdad ante la Ley del artículo 19 número 2- que conlleve implícito una garantía de No Discriminación, debiese ser formulado e interpretado desde una visión colectiva. Tradicionalmente, la igualdad se entiende como un principio individual, pero desde esta perspectiva no es posible detectar y evaluar injusticias.” Catherine Muñoz, OPTIA

Garantías

En este apartado reportamos las intervenciones que, en torno a la cuestión de las garantías, expresaron dos audiencias; la de la Asociación Nacional de Recicladores de Base y la de Estefanía Esparza. Cabe destacar que, a diferencia de lo que se observará en otras secciones, en la presente predominan las garantías normativas y no se observan propuestas de garantías institucionales.

En concreto, Estefanía Esparza propone: “consagrar expresamente las medidas de acción afirmativa para terminar con la discriminación”. Esto implica:

“consagrar expresamente que el Estado está obligado a emprender acciones para terminar con la situación de discriminación o subordinación en la que se encuentran ciertos grupos sociales.”

Estefanía Esparza

La misma Esparza da cuenta de por qué esta medida puede ser comprendida como una garantía, toda vez que

“esta consagración expresa de las medidas de acción afirmativas colabora con poner fin a las discriminaciones estructurales, pues al tener identificados cuáles son los grupos tradicionalmente excluidos, es más fácil en cuanto a su justificación”

Estas medidas además son consistentes con las preocupaciones que subyacen a la adopción de una perspectiva interseccional orientada a subsanar las prácticas discriminación múltiple

[Consagrar expresamente las medidas afirmativas] también colabora especialmente con los casos de discriminación interseccional, es decir, donde concurren más de una causa de discriminación, y donde la solución más efectiva va a ser siempre la adopción de esta clase de medidas.” Estefanía Esparza

Por su parte, Alejandro Mena sostiene, a nombre de la Asociación Nacional de Recicladores de Base, que:

“cualquier medida de política pública que afecte a un grupo de personas debe implementar simultáneamente las acciones que permitan el goce de los derechos de la comunidad afectada,



máxime si se trata de un grupo de especial protección como nosotros los recicladores de base.”
Alejandro Mena (ANARCH)

La necesidad de una participación activa, como garantía procedimental se extiende también en el caso de los beneficiarios de política pública. En concreto, respecto de la formulación de medidas afirmativas, Mena plantea que, junto con ser diseñadas en miras a “lograr el mayor impacto posible a favor de la integración del grupo marginado”, para el éxito de estas políticas:

“no basta incorporar la participación de unos pocos sino, con base en la estructura organizativa de dicho grupo, deben proponerse acciones que incluyan al mayor número de personas.”
Alejandro Mena (ANARCH)

Por último, Alberto Coddou, propone establecer una norma que mandate al legislador a elaborar un instrumento legal que sancione la discriminación, orientando su interpretación a una concepción comprehensiva de la misma, así como a la elaboración de medidas afirmativas:

“Y en último término (...) incluiría un mandato constitucional de legislación que apunte hacia una Ley general que castigue todas las formas de discriminación, en todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo medidas de acción positiva que puedan prevenir y reparar todas las formas de discriminación.” Alberto Coddou

402: Admisión a las funciones y Empleos Públicos

La presente sección recoge las audiencias con el código 402, referente a la admisión a las funciones y empleos públicos. Esta sección recoge alrededor de 19 declaraciones de 2 audiencias principales relativas a Isabel Aninat y Enrique Rajevich y la Asociación Nacional de Funcionarios de Chile Deportes. Las principales temáticas abordadas fueron la carrera funcionaria, los tipos de contrato y empleo al interior de la administración pública, los concursos públicos, entre otros.

Antecedentes y experiencias de vulneración

El empleo público, el acceso a este y los tipos de contrato que existen marcaron la pauta de discusión durante esta sección. En este sentido Macarena Chandía de la Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes destaca que

“En el año 2020, el 67,7% de los trabajadores del Estado [estaban a] contrata, el 27,8% planta y el 4,4% correspondían a [contratados según el] código del trabajo y honorarios. Es decir, 228.013 personas a contrata, 93.652 plantas y 14.912 personas a honorarios y códigos del trabajo. Estos números nos dicen que el 72% de los cargos podrían ser provistos casi a dedo en la administración pública, sin contar con los trabajadores municipales y los de las Fuerzas Armadas”.

La gran cantidad de personas a contrata dentro de la administración pública es algo que preocupa de sobremanera a las organizaciones sindicales y a la academia en general. Por ejemplo, Enrique Rajevich menciona que:

“En el empleo a contrata, las personas entran directamente, no es necesario pasar por un concurso. También tenemos un número importante de personas que están a honorarios y que están prestando servicios de manera permanente: tampoco entran a través de un concurso. [...] la planta tiene una parte que es de exclusiva confianza, ni siquiera decimos que las 93.000 personas entraron bajo un sistema de concursos”.

Así también, es necesario destacar las consecuencias de la gran cantidad de personas a contrata y honorarios en el empleo público. De esta manera, Paula Bustamante de la ANFUCHID declara que:

“Las consecuencias saltan a la vista: inestabilidad laboral, precariedad de la relación contractual con el Estado, y la imposibilidad de transitar con una real carrera funcionaria, generando altos niveles de frustración y desmotivación, impidiendo que las trabajadoras y los trabajadores del Estado profundicen en el deber ser o en la vocación de servidor público...”

Asimismo, la misma Paula Bustamante manifiesta

“lamentablemente, este sistema o formato de contratación abre peligrosamente las puertas para que las autoridades democráticamente elegidas paguen favores, contraten amigos, compañeros de partido, los conocidos “operadores políticos” -tan presentes en el discurso de uno de los candidatos a presidente de Chile; confundiendo a la ciudadanía”

Estas declaraciones, cobran sentido con lo mencionado por Enrique Rajevich en relación a los concursos públicos

“Esto no se ha transformado en algo equivalente a la existencia de un concurso público, de un acceso igualitario a los empleos públicos de parte de las personas, porque insisto, simplemente lo que la Constitución está diciendo es que no puede haber más requisitos que los que fija la Constitución y las leyes. ¿cómo se entendía eso? Que esos requisitos, por supuesto, tienen que



mirar al mérito, a la idoneidad, pero de allí a que haya concurso público, esa conclusión no se sacó”.

En consecuencia y en relación con las personas a contrata la Dirección Nacional del Servicio Civil dictó en el año 2017 una norma que señala que

“Cuando se entre a contrata o bajo el Código del Trabajo -que tampoco tiene exigencia de concurso público- es necesario un procedimiento transparente de reclutamiento y selección, basado en el mérito, que tiene que ser difundido, que tiene que tener perfil, comisión, etc. Bueno, esa norma tiene una letra chica, porque dice al final que: salvo que la autoridad, por resolución fundada, resuelva no aplicarlo, informando de ello en la Dirección Nacional del Servicio Civil” (Enrique Rajevich).

Con respecto a esto, Macarena Chandía de la ANFUCHID menciona que:

“Hoy, en la administración del Estado, no existe una diferenciación explícita entre trabajadores de gobierno, que son los de exclusiva confianza de la autoridad de turno -o coalición gobernante-, y trabajadores del Estado, o de carrera, o funcionarios públicos, entendidos como cuadros técnicos con el rol de ejecutar la función pública a partir de las políticas públicas definidas por las autoridades elegidas democráticamente”.

Por lo tanto y según lo declarado en citas anteriores durante esta sección existe una diferencia entre lo que está escrito en la Constitución, en el Código del Trabajo y lo que sucede en la práctica. En este sentido Paula Bustamante declara que:

“Por tanto, y frente a esta realidad, nos queda meridianamente claro que el Acceso a la Función Pública que se supone garantizado a través del numeral 17 del artículo 19 de la actual Constitución Política, en estricto rigor es letra muerta. Ya que, para contratar trabajadores y trabajadoras a contrata, a honorarios y [según el] Código del Trabajo, la Ley establece requisitos mínimos, permitiendo procesos de reclutamiento directos y arbitrarios sin pasar por concursos públicos...”

Por otro lado, Enrique Rajevich y en relación al servicio público, menciona al Reino Unido y constituciones de otros países donde se privilegia el mérito y no el cuoteo político.

“Está [el] Reino Unido, que es como el lugar donde la noción de Servicio Civil nace. [...] donde reconoce lo que llaman la Comisión del Servicio Civil y las reglas fundamentales del empleo público, que al final del día, plantean como también algunas constituciones comparadas lo hacen, que tiene que ser neutral desde el punto de vista político y privilegiando el mérito y la idoneidad”

Contenidos

Con respecto al contenido y propuestas en relación al acceso al empleo público y su regulación, la abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez, Isabel Aninat propone a

“Todas las personas el Derecho Fundamental a Acceder a todas las Funciones y Empleos Públicos en Igualdad de Oportunidades, sin otros requisitos que los señalados por la Constitución o la Ley, y salvo las propias excepciones que admite la Constitución”

Así también, el empleo público debe “respetar y promover criterios de Inclusión, No Discriminación y Equidad de Género” (Isabel Aninat). En la misma línea, siguen las declaraciones de Macarena Chandía de la ANFUCHID mencionando que se debe

“Garantizar el acceso a todas las funciones y cargos públicos, ya sea para las trabajadoras y trabajadores del Estado o de gobierno, sin otros requisitos que los que imponga la Constitución y las Leyes. La Ley establecerá mecanismos que garanticen que la contratación de los cargos para trabajadoras y trabajadores del Estado se realice a través de concursos públicos, transparentes, que aseguren la igualdad de oportunidades de todos quienes postulan a dichas funciones y/o empleos.”

Asimismo, Isabel Aninat se refiere a que se debe respetar el carácter técnico y profesional del empleo público, así como también:

“la dignidad de todas las personas en el sistema de ingreso, de desarrollo y cese en la función pública; es decir, todas las partes de la carrera funcionaria. Eso creemos que debe estar en la administración del Estado, así como también extenderse a otros órganos como el Legislativo”

Con respecto a otros órganos de la administración del Estado la abogada también hace mención al nivel regional y municipal. En este sentido considera que:

“En el nivel regional y municipal, deben aplicarse los mismos principios y reconocerse los mismos estamentos, sin perjuicio de mantener ciertas flexibilidades que hoy día también existen para las municipalidades.”



Por último, se definen dos propuestas más que tienen relación con el Derecho a la Sindicalización y a la Negociación Colectiva, así como también a la diferenciación entre empleados de confianza de los gobiernos y empleados del Estado.

Con respecto al primer tema Isabel Aninat menciona que

“consagrar el Derecho a la Sindicalización y Negociación Colectiva de las personas funcionarias del Sector Público, y lo segundo aplicar por Ley al Sector Público las mismas normas del sector privado que admiten la Huelga, con excepción de aquellas que paralizan servicios esenciales o impiden la continuidad del servicio público.”

Por último y en consecuencia con la diferenciación entre funcionarios públicos Macarena Chandía de la ANFUCHID declara:

“Hoy es necesario que el ejercicio de la función pública quede diferenciado entre los trabajadores de exclusiva confianza o trabajadores de gobierno, y los trabajadores del Estado, de carrera, o funcionarios públicos, entendidos como cuadros técnicos altamente profesionalizados, calificados y de carrera, que cumplen con el rol de ejecutar la función pública a partir de las políticas públicas definidas por las autoridades elegidas democráticamente.”

Derechos centrados en sus Titulares

Las secciones correspondientes a los códigos comprendidos entre el 403 y el 410, así como los Derechos de las chilenas y chilenos residentes en el Exterior (código 315, bloque 3) refieren a Derechos Fundamentales que se encuentran definidos no por el objeto que el derecho garantiza -como es acostumbrado y se usa en los demás códigos, sino por quiénes son titulares del derecho en cuestión. Debido a ello, es necesaria una advertencia.

Cuando un derecho se define en virtud de sus titulares, no conforma, en sentido estricto, un derecho, sino una garantía de titularidad que protege a sus titulares ante riesgos de discriminación. De tal modo, cada una de estas secciones, por necesidad, replica a pequeña escala el catálogo completo de Derechos Fundamentales, en la medida en que las y los ponentes consideraran necesario presentar ante esta Comisión la intersección entre uno de los demás derechos y un grupo de personas para el cual éste reviste especial interés o importancia.

Por razones de tiempo y enfoque, el conjunto de las audiencias aquí sistematizadas no recoge la total extensión de los derechos a los que son titulares los grupos de personas consideradas en las siguientes secciones, pero sí refleja, en la medida en la que el proceso de audiencias lo permitió, las materias de mayor interés y urgencia de los segmentos organizados de estos grupos. En lo demás, es recomendable guiarse por la discusión que previamente se diera en general respecto a los derechos que no sean mencionados aquí.

403: Derechos de las Personas Privadas de Libertad y Derecho a la Reinserción

De acuerdo con la actual legislación, hoy en Chile, las personas privadas de libertad son niñas, niños y adolescentes en contextos de encierro y a custodia del Estado, aquellas condenadas con pena aflictiva por delitos, o en prisión preventiva en virtud de una investigación penal. Por su alcance, los Derechos de las Personas Privadas de Libertad presentan especial relación con materias tratadas en los anteriores bloques temáticos, como el Derecho al Debido Proceso (309), el Derecho a la Salud (207), a la Educación (208), y la Reparación de Violaciones de Derechos Humanos (201).

Esta sección, que recoge 47 declaraciones de 4 audiencias distintas, aborda las consideraciones respecto de las condiciones de vida de las y los privados de libertad, así como discusiones sobre el propósito de la privación de libertad.

Antecedentes y experiencias de vulneración

En lo respectivo a los antecedentes que las audiencias pusieron en conocimiento de esta Comisión, hay dos grandes áreas: por un lado, un análisis comparado respecto a la pertinencia de la privación de libertad como respuesta al delito, y por el otro, un atestiguamiento de experiencias de vulneración de Derechos Fundamentales en contextos de privación de libertad.

El primer tópico predomina en la audiencia de los profesores de derecho Javier Velásquez y Mauricio Reyes (en adelante, Velásquez y Reyes), quienes abordan la cuestión de la privación de libertad en términos de la efectividad de ésta para prevenir los delitos. Al respecto, Javier Velásquez diagnostica que:

“En el contexto de la política pública de los últimos 20 años, lo que se ha visto es un populismo penal que no está basado en evidencia criminológica, y básicamente el discurso político [...] ha sido construido en función del miedo y en función de la intensificación punitiva; aumentando las penas. Sin embargo, la evidencia criminológica actual ha mostrado que el aumento de penas no tiene ningún resultado.”



Parte crucial de su argumento es el dato de que la mayoría de las personas que delinquen lo hacen de manera ocasional, en su juventud, y que es poco probable que reincidan a medida que envejecen. En base a esa información, plantean la necesidad de un enfoque que facilite la rápida reintegración de estas personas en la sociedad, y se disponga a interrumpir las carreras criminales en su inicio, en vez de castigarlas por anticipado. Lo expresa brevemente Velásquez, señalando que *“políticamente se ha instalado la idea de que [se necesita] más mano dura, [que] generemos más, aumentemos las penas, pero en realidad la evidencia es clara. Si yo invierto en aquellos que tienen trayectorias delictuales ¡Pum! Reduzco la reincidencia.”*

Según estos ponentes, la principal limitante que hoy existe a la reinserción es la falta de apoyo para las personas que han cumplido sus condenas, y para sus familias; como en otras audiencias del tema, se pone especial atención en la situación de las mujeres privadas de libertad:

“El principal apoyo para que la gente en Chile deje de cometer delitos, una vez que sale de la cárcel, son las familias, y si el Estado no apoya a las familias... Si uno compara las políticas de apoyo social a las mujeres madres de familia que han cumplido una pena privativa de libertad, el Estado chileno les ofrece a las mujeres menos apoyo que en Estados Unidos, que es uno de los países más neoliberales.” Javier Velásquez, (Velásquez y Reyes)

La relevancia de la reinserción se hace más patente al considerar en qué medida el cumplimiento de una condena privativa de libertad implica una extracción desde la sociedad, tal como lo ilustra Paula Vial, de la Asociación Pensamiento Penal:

“hoy las políticas de reinserción no existen realmente en Chile, sino que se constituyen como políticas de exclusión. Esta exclusión se manifiesta en la pérdida del vínculo del privado de libertad con la comunidad: no hay posibilidad de acceder y disfrutar de formas de libertad anticipada, no hay posibilidad de desarrollar una vida íntima y familiar, no existe tampoco una posibilidad real de trabajar y ganar un sustento para sí y su familia, y no existe la posibilidad de participar políticamente en la toma de decisiones de la comunidad a través del sufragio.”

Todavía en materia de prevención del delito, el mismo Javier Velásquez advierte que el actual paradigma de seguridad pública, centrado en la vigilancia policial y la persecución del delito luego de su comisión, resta recursos a los esfuerzos de reinserción, que, Velásquez sostiene en base a evidencia comparada, son más eficaces en evitar la reincidencia:

“Yo me reuní el 2018 con el agente [de reinserción] del Ministerio Justicia y ellos saben que el [periodo] post penitenciario es importante, saben que la evidencia existe, pero lo que me decían [es que] “no hay dinero”. En cambio ¿[A] dónde se va el dinero? A más policías. [...] gran parte del trabajo [del Ministerio de Justicia] está, hoy en día, enfocado en el sistema penitenciario, pero no en el post penitenciario, y ahí es donde estamos fracasando.”

Una segunda arista centrada en la institucionalidad penal es la ilustrada por Paula Vial, de la Asociación Pensamiento Penal, quien destaca deficiencias en el diseño de la Reforma Procesal Penal del año 2000; en particular, Vial señala que es necesario separar la función de los Juzgados de Garantía de las materias de Ejecución Penitenciaria. Explica esto Vial:

“Los jueces de garantía son jueces especializados en materias penales y procesales, pero no penitenciarias, que es un conflicto jurídico distinto, sin que cuenten con competencia exclusiva, además. Nuestro Código Procesal Penal establece un control jurisdiccional de la ejecución de las penas, encomendando al juez de garantía esta labor, control que podría ser conceptualizado como impropio o indirecto, si se considera que la mayoría de las sentencias condenatorias provienen precisamente de dichos órganos jurisdiccionales. Podría hablarse incluso de una especie de conflicto de interés, siendo el mismo juez el que decide una medida cautelar, en algunos casos la pena; y luego, su ejecución.”

El principal problema que esto causa es que no existen mecanismos dedicados para denunciar y enmendar las violaciones de derechos de las personas privadas de libertad, lo que ha llevado a los defensores penales a improvisar con mecanismos de tutela inadecuados:

“Como no existe una jurisdicción y una legislación especializada, ni recursos, ni acciones especiales, los defensores penales utilizan los recursos ordinarios contemplados en nuestro ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos de los internos, y llevar a sede judicial el conocimiento de asuntos penitenciarios, utilizando mecanismos ordinarios, como Amparos y Protecciones, para resolver los conflictos que se originan al interior de los recintos penitenciarios, o con ocasión del cumplimiento de las condenas o del otorgamiento de beneficios. Sin embargo, estas acciones no son eficaces como mecanismos de tutela de derechos de reclusos, toda vez que la mayor parte de ellos son rechazados por los tribunales, generando hoy una tensión entre [juzgados] de garantía y cortes de apelaciones, en las que se produce una indefensión de muchos internos, por no ser considerada una vía idónea por algunas cortes.” Paula Vial (Pensamiento Penal)



Este problema introduce el aspecto más extenso de los antecedentes de esta sección: las experiencias de vulneración de derechos. La misma Paula Vial ilustra sinópticamente la situación:

“Las cárceles siguen siendo lugares sin ley: las malas condiciones materiales de las mismas, el hacinamiento, la insalubridad, la imposibilidad de acceso a servicios básicos -por ejemplo, para las mujeres, las toallas higiénicas a las que no tienen acceso-, al agua [...] Los prolongados tiempos de encierro originan altos niveles de violencia, reiteradas sanciones y malos tratos.”

Las académicas de derecho penal de la Universidad Andrés Bello, Rocío Sánchez y Katherine Ríos (Sánchez y Ríos, en adelante), hacen una revisión de las condiciones de vida en las cárceles chilenas, con especial atención en las mujeres privadas de libertad. Tal atención la justifica Rocío Sánchez, en que:

“Las mujeres privadas de libertad son tan pocas, que el sistema completamente las ha olvidado [al] desarrollar políticas públicas, las ha olvidado de las reglamentaciones técnicas y, por lo tanto, se trata de mujeres que están viviendo en un mundo de hombres, sin condiciones adecuadas para cumplir sus condenas. [...] Hoy día tenemos 3.445 mujeres privadas de libertad, en paralelo hay 42.340 hombres. Nosotras queremos señalar acá, que ‘cuando no se reconocen las diferencias entre las personas, el mismo tratamiento tiene un impacto desigual en los diferentes grupos sociales’ (Carlen, 2012).”

¿En qué consiste esta necesidad de un trato diferenciado? Katherine Ríos destaca, en primer lugar, la atención a las demandas biológicas más básicas:

“Las reclusas tienen necesidades distintas. Hoy día el Estado no es capaz de otorgar ni siquiera prestaciones básicas en términos de higiene sanitaria. El Estado no entrega toallas higiénicas a las mujeres para decirlo claramente; no está dentro del presupuesto de gendarmería, no tienen agua muchas veces dentro de determinadas horas, para su higiene íntima, ni que decirlo, que no tienen acceso a salud ginecológica y requieren, porque todas las mujeres sabemos que requerimos ciertas condiciones sanitarias distintas de los hombres, pero los centros (y de ahí saltamos precisamente al nivel cultural), los centros privativos de libertad están contruidos por hombres, habitados por hombres, administrados por hombres y viven mujeres dentro de estos centros, viven con la mayor precariedad y no están habilitados para las necesidades de estas pocas mujeres.”

Ríos luego pasa a caracterizar a las mujeres privadas de libertad: casi un 70% tienen menos de 35 años, en promedio cuentan con 8,5 años de escolaridad (es decir, apenas superando la educación básica), tienen más hijos que la media nacional, trabajan en el ámbito doméstico, la mayoría son pobres, migrantes o ambas, y se encuentran cumpliendo penas cortas, por delitos como hurto o tráfico de drogas.

De entre este grupo y de acuerdo a datos de 2017, 110 estaban lactando y 53 embarazadas, lo que inevitablemente involucra a sus hijas e hijos en el medio penal. Respecto a esto último, la misma Katherine Ríos hace hincapié en que esta situación es preferible a la separación forzosa entre madres e hijos, sobre todo cuando las condenas son cortas; en vez de ello, recomienda la disposición de un sistema especial que les permita continuar sus labores de cuidado con mínima perturbación.

Otra población penal femenina, incluso más desprotegida, son las mujeres trans que cumplen condenas en cárceles de hombres. Respecto a ellas, Ríos señala que:

“La población más invisibilizada dentro de las propias mujeres son las mujeres trans. En Chile ni siquiera tenemos datos de cuántas mujeres trans hay hoy dentro de la población carcelaria, pero sabemos que no son pocas: es cuestión de visitar los centros privativos de libertad. Además, si hay violencia al interior de las cárceles, claramente dentro del grupo de mujeres, estas son las mujeres que sufren mayor cantidad de violencia.”

Un último aspecto relevado por Katherine Ríos es respecto a la condena social, más gravosa para las mujeres:

“todos los estudios dicen, y es una cuestión que se puede afirmar, es que las mujeres sufrimos una doble condena al estar privadas de libertad; la condena que es la imposición del lus Puniendi, del derecho penal, pero la condena social, el sesgo de ser “mala madre”, “mala mujer”, que por supuesto en los hombres -que son mucho más presos los que hay- no cargan con este estigma, porque ningún preso es “mal padre” [solo por estar preso]. Pero las mujeres todas son “malas madres” o “malas mujeres”, de manera que, efectivamente se requiere una mirada distinta en las políticas públicas, que haga énfasis en la diferencia.”

Finalmente, se hace necesario mencionar que las situaciones de vulneración de derechos de las personas privadas de libertad no se limitan a la población penal adulta. Como ya se destacara en el informe del Bloque Temático 2, las niñas, niños y adolescentes en contextos de encierro también enfrentan condiciones de insuficiencia, como las que enumeró en la audiencia de la Red



ECEA José Rebolledo, coordinador técnico de la Corporación Educacional Tierra de Esperanza de Chiguayante:

“Una de las principales características discriminatorias que nosotros observamos es el tipo de infraestructura y mobiliario con que cuentan los establecimientos educacionales, ya que esta es escasa y deficiente, y eso hace que estos adolescentes no se encuentren en las mismas condiciones que aquellos que estudian en los servicios educativos que se entregan en el medio libre, en la educación regular.

De hecho, podemos decir que los establecimientos educacionales que funcionan al interior de los centros privativos de libertad administrados por SENAME no cumplen la exigencia mínima establecida respecto a infraestructura por parte de Ministerio de Educación, ya sea superficie destinada para aula, laboratorio, taller, biblioteca, [...], patio.

Y por otro lado, tampoco cumplen con las condiciones básicas establecidas por el Ministerio de Salud para obtener el reconocimiento oficial como establecimiento educacional. Es decir, vías de escape de puerta amplia, zona segura en caso de emergencia, servicio higiénico para uso exclusivo de alumnos y de personal docente y administrativo de los establecimientos, medidas de higiene y seguimiento básico o medidas sanitarias para el almacenamiento de alimentos.”

Contenidos

En lo relativo a propuestas de contenido constitucional, estas se centran en establecer constitucionalmente a la Reinserción Social como un derecho, en crear un marco constitucional para una Ley de Ejecución Penitenciaria para recurrir ante vulneraciones de Derechos Fundamentales, y otorgar a las personas privadas de libertad el derecho efectivo al sufragio.

Mauricio Reyes, de la audiencia de Velásquez y Reyes, expone una propuesta de articulado para resguardar el Derecho de Reinserción social, que, brevemente, condiciona la imposición de penas privativas de libertad al propósito de reinserter a la sociedad a las personas a las que éstas sujetan, mientras que establece la voluntariedad de los programas de reinserción para las personas que los reciben. Reyes explica este último punto:

“Es una consideración pragmática, puesto que, si es que el penado no consiente en someterse al proceso de resocialización, entonces éste evidentemente está destinado a fracasar. Y, en segundo lugar, está fundamentado en el respeto por la dignidad y la autonomía de las personas, puesto que la imposición coercitiva de una determinada concepción del bien no es compatible con ella”

Respecto a cómo enfocar estos esfuerzos, Javier Velásquez reitera el criterio de la Curva Edad-Delito, planteando que:

“Tenemos que detectar a aquellas personas que tienen carreras delictuales e invertir más recursos en aquellos que tienen carreras delictuales. Hay gente que no tiene carreras delictuales, y que al promover e identificar que ellos van a desistir, entonces no se tiene que intervenir más.”

El principio detrás de esta propuesta es que la privación de libertad implica la restricción de múltiples Derechos Fundamentales, y que debe siempre justificarse en la protección de estos mismos, y en la minimización del daño. El mismo Mauricio Reyes lo explica así:

“Nosotros no podemos justificar el sufrimiento por el sufrimiento, sino que necesariamente tenemos que orientar la ejecución de la pena a una finalidad constructiva, a una finalidad que tienda a reintegrar a la persona que ha delinquido, digamos, [...] y a motivarla para que viva en libertad y que, de esa manera, emerja su verdadera personalidad y no aquellas que estaba informada por todos estos factores nocivos y criminogénicos que la determinaron en un primer momento a cometer un delito.”

Rocío Sánchez matiza esta consideración normativa, afirmando que un adecuado resguardo de los Derechos Fundamentales de las personas privadas de libertad podría hacerla redundante:

“Se ha discutido bastante si acaso la Constitución debe incorporar los fines de la pena o no. A mí me da la impresión de que, si existe un adecuado resguardo de los Derechos Fundamentales, eso viene por añadidura, [...] existe un debate muy serio sobre cuál es el fin de la pena, no todos están de acuerdo en la reinserción, porque supone reinserter a alguien, pero que en realidad nunca ha estado inserto. Entonces, es un concepto que se queda cojo al mirar la realidad chilena y la latinoamericana, entonces algunos proponen, por ejemplo, el principio de humanidad como una disposición, que sería útil de incorporar, más allá de la reinserción.”

Paula Vial, de la Asociación Pensamiento Penal, desarrolla su propuesta de marco normativo para una Ley de Ejecución Penitenciaria. Señala que la Constitución debe requerir de las Leyes una institucionalidad separada para regular “el cumplimiento y ejecución de las penas y de jueces que las tutelen”, de modo que estas materias dejen de ser potestad reglamentaria del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia. Además, recomienda la existencia de un órgano de Defensa Penitenciaria, análogo a la Defensoría Penal Pública. En materia de derechos, Vial promueve que



se extienda la consagración del Derecho a un Debido Proceso a las personas privadas de libertad, no agotándose su aplicación en el fallo judicial, así como el Derecho al Control Judicial de las condiciones de privación de libertad y de ejecución de las penas.

En esta misma línea, Rocío Sánchez ofrece esta propuesta de articulado:

*“las personas condenadas gozarán de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de aquellos que expresa y razonablemente, sean limitados por causas legalmente sentenciadas. Durante la ejecución de la condena se prohibirá toda clase de discriminación arbitraria en razón de género.”*¹⁹

Otro aspecto, que corresponde a una discusión sobre Derechos Civiles y Políticos, es la restricción del Derecho al Sufragio a las personas privadas de libertad. A juicio Mauricio Reyes, y de Grace Méndez de la Asociación Pensamiento Penal, la privación de libertad por delitos no justifica la pérdida del Derecho al Sufragio. Méndez agrega que además el Estado tiene el deber de asegurar las condiciones para que este derecho se ejerza, en vista de que las personas privadas de libertad, pero no condenadas, que sí gozan formalmente de este derecho, se han visto incapacitadas de ejercerlo en la práctica.

Un último aspecto es lo relativo a la calidad del ejercicio de otros Derechos Fundamentales en los recintos penales; como ya se detallase extensamente en el apartado de Antecedentes, las actuales condiciones incumplen con claridad los estándares de hacinamiento, salubridad y seguridad, pero, además, es pertinente relevar las desigualdades dentro de la población penal. A ese respecto, Mauricio Reyes plantea que:

“el sistema penitenciario tiene que, de algún modo, nivelar para arriba, neutralizando los privilegios injustificados que existen en, digamos, en los penales como por ejemplo Punta Peuco, está también por ejemplo, el llamado ‘pabellón de los narcos’.”

404: Derechos Individuales y Colectivos Indígenas y Tribales

En esta sección referente al código 404 sobre Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales se recogen alrededor de 4 audiencias y 5 declaraciones. Las principales temáticas revisadas en estas audiencias son sobre la relación del Estado con los pueblos originarios, la plurinacionalidad, interculturalidad y temas relacionados con la niñez.

Contenidos

Con respecto a la relación del Estado con los pueblos originarios, Federico Aguirre del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sostiene que este debe *“abordarse desde una perspectiva que respeten los derechos colectivos e individuales de dichos pueblos, lo que implica incorporar en las políticas públicas y diseños institucionales, una aproximación que reconozca el pluralismo cultural”*. En este mismo sentido, se encuentran las declaraciones de Manuel Hidalgo, proveniente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile

“El segundo tema es el tema de la plurinacionalidad y la interculturalidad, que como decimos, tiene que ver con el carácter del Estado. “El Estado de Chile es un Estado Plurinacional”, y en este sentido no solamente hacemos referencia -por si acaso- a los Pueblos Originarios de Chile, sino que también tomar en cuenta al pueblo -aunque no tengan derechos territoriales- el Pueblo Afrodescendiente, y también los pueblos migrantes”.

Con respecto a la diversidad Federico Aguirre menciona que se debe asumir la diversidad de la sociedad con *“el objeto de instaurar relaciones interculturales asentadas en el respeto y garantía de los derechos sin discriminación”*. Así también esto significa que el Estado supere *“el ideario asimilacionista y asuma la vigencia actual de un marco normativo internacional vinculante, del cual emanan obligaciones de respeto y garantías”*.

Manuel Hidalgo también se refiere a la interculturalidad como principio garante. En este sentido la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile propone que:

“El Estado debe garantizar esta interculturalidad, desarrollando e implementando políticas, leyes y programas que promuevan el respeto, el cuidado y la preservación de cada una de estas comunidades y sus identidades culturales, fomentando al mismo tiempo el diálogo horizontal y colaborativo entre ellas, asegurando la convivencia en un marco de pleno respeto de los Derechos Humanos.”

Una preocupación particular fue la temática de la niñez. En este sentido Miguel Cilleros del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño menciona que la situación de niños y niña indígenas debe ser entendido como *“un derecho individual y colectivo, considerando que su interés superior*

¹⁹ Para una revisión más acabada sobre las garantías de No Discriminación, consúltese la sección 401 de este mismo informe.



también debe atenderse para su determinación aquellas condiciones especiales de los niños y niñas indígenas, como por ejemplo lo ha resuelto el sistema constitucional canadiense”.

405: Derechos de las Personas Mayores

El código 405 reúne a aquellas intervenciones que abordan la especificidad de la vejez, la discusión acerca del estatus constitucional de las personas mayores en tanto grupo, así como los derechos y garantías que a su respecto se propone consagrar. En torno a este código se presentaron tres audiencias, totalizando cuatro expositoras y un expositor.

Antecedentes y experiencias de vulneración

Un aspecto sobre el que concuerdan María Ximena Abogabir de Voces Mayores y Patricio Saldívar de Gero Zoom concierne al marco jurídico en el cual se inscribe la discusión sobre vejez y derechos de las personas mayores. En ambos casos se menciona explícitamente a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores como marco de referencia:

“en primer lugar nos pusimos de acuerdo en que nuestro paraguas conceptual iba a ser la Convención Interamericana [sobre la protección] de [los] Derechos Humanos de las personas mayores.” (María Ximena Abogabir, Voces mayores)

“Nuestro instrumento legal, cierto, es la Convención Interamericana por los Derechos [Humanos] de las Personas Mayores, que ustedes ya conocen, y que saben que en nuestro país hay una brecha importante en cuanto a su implementación.” (Patricio Saldívar, Gero Zoom)

Dado que se trata de un instrumento que genera cierto consenso, resulta conveniente delinear brevemente su contenido. A este respecto, Saldívar añade:

“Los Derechos Fundamentales que están reconocidos en la Convención Interamericana por los Derechos [Humanos] de las Personas Mayores es el tener una vida plena y saludable, una vida segura, una vida autónoma e independiente, integrarse en sus comunidades, participar de las actividades económicas, sociales, culturales, elegir a sus representantes y también formar parte de los gobiernos de su país.” (Gero Zoom)

En este marco, en seguida es posible identificar algunas nociones previas acerca del carácter de la vejez como fenómeno social. En este sentido, Abogabir (Voces Mayores) y Saldívar (Gero Zoom) enfatizan el carácter diverso de las vejeces. En particular, Saldívar releva la especificidad de la situación de las personas mayores en contextos rurales.

“Aquí nos interesaba resaltar el concepto de la heterogeneidad en la vejez. Siempre los medios de comunicación, los textos, se refieren a ese 15% de personas [mayores] que en Chile hoy día no son autovalentes y requieren ser asistidos, pero el pequeño detalle es que había un 85% invisibilizado de personas que estamos activas, somos autovalentes y queremos seguir siendo un aporte a la [comunidad].” Abogabir (Voces Mayores)

“Nosotros entendemos también que la vejez es muy diversa. Hemos participado y han participado también en este espacio otras organizaciones abogando también por los derechos de las personas mayores, pero nos interesa de sobremanera considerar [a] las personas mayores que viven en la ruralidad, que como [en] este caso, tienen que dejar y tienen que migrar de sus lugares, atentando con[tra] el derecho a envejecer e incluso a morir en el lugar de origen que ellos determinen.” Saldívar (Gero Zoom)

En el mismo contexto, Abogabir reflexiona sobre la necesidad de mirar el fenómeno de la vejez integrando para su estudio tanto la perspectiva de género como la de ciclo vital y, en ambos casos atendiendo al modo en que la dimensión territorial modula la experiencia de las personas mayores.

“Una siguiente idea fuerza es que el tema del envejecimiento claramente tiene una mirada de género; hay una feminización de la vejez. Hoy día sobre los 90 años existe... el 71% somos mujeres. Un enfoque también de curso de vida, en el sentido que se llega a esta edad un poco como el resultado de las condiciones anteriores; ya sea de las condiciones socioeconómicas que nos tocó vivir, las condiciones ambientales, las condiciones genéticas, algunas opciones personales, pero también, tan importantes como aquello, son las políticas públicas que, de alguna manera, inciden en nuestra calidad de vida.” (Abogabir, Voces Mayores)

“El envejecimiento también tiene un sesgo territorial comunitario; es distinto vivir en un lugar rural (un 15% vive en rural) que en un lugar urbano. O si también el nivel de ingreso de la comuna en la cual habitamos, que también genera condiciones diferentes y así muchas cosas.” (Abogabir, Voces Mayores)

Finalmente, todas las audiencias presentan antecedentes relativos a la asociación entre vulnerabilidad y vejez. Esta discusión es crucial pues sirve de fundamento para el debate sobre la necesidad o no de incluir a las personas mayores como un grupo de especial protección.



Puntualmente, Marcela Peredo (Observatorio Constitucional U Andes) y Patricio Saldívar (Gero Zoom) coinciden en la existencia de una vulnerabilidad específica relativa a las personas mayores. En particular, Peredo afirma *“nosotros hemos sostenido que hay una vulnerabilidad propia [de las personas mayores] que debe ser tratada en la Constitución.”* En consonancia con esta declaración, Saldívar añade:

“Nos parece que las personas mayores, es un grupo que históricamente ha sido discriminado a causa del edadismo, del capacitismo y de esta sociedad que discrimina por edad y principalmente a las personas mayores.” (Gero Zoom)

No obstante el consenso parcial expresado sobre esta materia, cabe mencionar que la posición de Peredo se distingue en que -siguiendo al Derecho Internacional- estima que la vulnerabilidad debería ser un componente de la definición misma de personas mayores: *“El problema constitucional es que hoy (...) el único criterio legal para poder ser considerado como [persona] mayor es la edad.”* (Marcela Peredo, Observatorio Constitucional U. Andes).

Seguidamente, la expositora contrasta la situación chilena con el estándar internacional en la materia.

“se considera también en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente la capacidad física y también psíquica del ser humano mayor, considerando que también encuentran allí puntos de vulnerabilidad, no solamente la edad como criterio.” (Marcela Peredo, Observatorio Constitucional U. Andes)

Adicionalmente, Peredo destaca que un ámbito de especial vulnerabilidad de las personas mayores concierne al acceso a la justicia

“Segundo problema: las personas adultas mayores normalmente suelen carecer de los medios materiales o, a veces por razones de salud, no van a los tribunales a reclamar judicialmente sus derechos y eso aumenta la vulnerabilidad natural o la indefensión que ellos padecen o sufren.” (Marcela Peredo, Observatorio Constitucional U. Andes)

Por su parte, Macarena Rojas de Voces Mayores retoma la cuestión de la vulnerabilidad, pero desde una perspectiva empírica, a través del reporte de resultados de un estudio -una consulta pública a personas de diferentes edades- llevado a cabo por su organización. A partir de dicho reporte, la expositora afirma que, independiente del tramo etario, los consultados manifiestan, en relación a la vejez, preocupación por

“no contar con recursos económicos suficientes, tener que depender de otras personas, no contar con una red de apoyo o ayuda cuando lo necesite, la posibilidad de enfermar gravemente y no poder hacer su vida libremente.” Rojas (Voces Mayores)

Por otro lado, cuando las personas mayores son consultadas acerca de cuáles de los derechos consagrados por la Comisión Interamericana Sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores les resultan más relevantes, se observa una saliencia relativa respecto al Derecho a la Seguridad y a una Vida sin Violencia, al igual que en los Derechos al Cuidado y a la Protección Social (Rojas, Voces Mayores).

Asimismo, la expositora reporta que cuando se presenta el mismo catálogo de derechos y se solicita a los entrevistados indicar cuáles de ellos *“no están totalmente garantizados en Chile”*, los resultados se concentran en torno a:

“el Derecho a la Seguridad y una vida sin violencia, el Derecho a la Salud el derecho a recibir cuidados de largo plazo en caso de dependencia, el Derecho a la Igualdad y la no discriminación” Macarena Rojas (Voces Mayores)

En consecuencia, Rojas concluye que:

“En términos generales, si bien hay diferencias por edad y por nivel socioeconómico, hay una consistencia entre las preocupaciones que tenemos las personas de todas las edades que vivimos en Chile en torno a la vejez, con los derechos que percibimos como no garantizados y también con las prioridades de los derechos a garantizar” Macarena Rojas (Voces Mayores)

Contenidos

Al igual que con otros grupos vulnerables y/o históricamente excluidos, existen, respecto de las personas mayores, demandas por un reconocimiento constitucional explícito del tipo de discriminación que experimentan. Saldívar (Gero Zoom), por ejemplo, plantea que, a juicio de su organización, resulta: *“fundamental que las personas mayores sean reconocidas como sujetas de goce y de ejercicios de derechos”*. Respecto del contenido específico de tales derechos, abunda Saldívar:

“creemos que todos los derechos que están consagrados en la Convención Interamericana deben ser reconocidos y que, idealmente, nuestra nueva Constitución reconozca en un apartado a las personas mayores sus Derechos Fundamentales, considerando y resguardando la



autodeterminación, la humanización en el trato y, por supuesto, la integración en la sociedad”.
Patricio Saldívar (Gero Zoom)

En una línea similar en lo que respecta al marco interamericano, Macarena Rojas (Voces Mayores), apunta a la importancia de:

“trabajar de forma colaborativa: familias, comunidad, sociedad civil y Estado, destacando la necesidad de una política pública intersectorial y territorial desde un enfoque de derechos y avanzar en la materialización de la Convención Interamericana de los Derechos [Humanos] de las personas mayores; es imperante.”

Como hemos visto, junto con ratificar la importancia del marco interamericano, la intervención de Rojas también resalta el carácter *“intersectorial y territorial”* que debe informar al diseño de la política pública en materia de vejez. Sobre este punto, Saldívar añade que resulta:

“fundamental que se tome en cuenta (...) también de las futuras acciones que tenga desde la Convención en las políticas públicas de nuestro país, mantener una mirada gerontológica pensando que todos somos seres envejecientes y que, si nuestra sociedad la miramos desde esta perspectiva, también va a ser una sociedad más inclusiva con todas las edades.” Patricio Saldívar (Gero Zoom)

Sobre esta materia, ahonda su colega, Camila Martínez:

“tal como lo expone Haydee Chamorro en Perú, nos parece esencial gerontologizar el Estado, porque trae consigo un proceso de cambio de paradigma de la vejez y el envejecimiento.” Camila Martínez (Gero Zoom)

Por último, en lo relativo a propuestas de redacción, Marcela Peredo ofrece *“un artículo corto, preciso”*, el cual inscribe el derecho a la vejez digna en un paradigma de ciclo vital:

“primero, la vejez o el derecho a la vejez conforme a la dignidad del ser humano en todas las etapas de su vida y que cualquier acto u omisión que amenace, perturbe o prive estos Derechos Humanos de los adultos mayores podría entonces ser contraria a... también a las convenciones que Chile ha ratificado, como la Convención Interamericana sobre el Adulto Mayor y generar las responsabilidades que la Ley determine y entonces establecer allí un mecanismo de acción de responsabilidad.” Marcela Peredo (Observatorio Constitucional, U. Andes)

Garantías

En materia de garantías, se observa en buena medida un consenso entre las audiencias que se refieren al tema, a saber; aquellas del Observatorio Constitucional de la U. de los Andes y Gero Zoom. Puntualmente, Marcela Peredo completa su formulación con una propuesta de garantía institucional:

“en segundo término, (...) [propongo] también constitucionalizar un órgano de tipo autónomo que se encargue en serio de velar por la vida, la integridad y dignidad de las personas mayores.”
(Observatorio Constitucional, U. Andes)

y ahonda sobre ello, señalando que:

“Chile es un país que está envejeciendo y que... creo yo que tiene un saldo pendiente allí y que desde el derecho se puede, a través de la Constitución y la Ley, establecer un órgano autónomo constitucional, con competencias interdisciplinarias, para que proteja a los seres humanos en el estado de la etapa de vejez.” Marcela Peredo (Observatorio Constitucional, U. Andes)

En tanto, Patricio Saldívar plantea, a nombre de Gero Zoom, que

“debiese existir un tratamiento especial, sobre todo en la figura de un defensor mayor o de un defensor ciudadano, que considere -cierto- que hay muchos casos [en] que las personas mayores requieren de ese tipo de acciones, como la defensoría específica cuando se ven casos de maltrato, violación a los derechos en cuanto al patrimonio, etcétera.” (Saldívar, Gero Zoom)

Al igual que en el caso anterior, la propuesta de Gero Zoom constituye una propuesta de garantía institucional cuyo objeto es viabilizar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Carta Magna.

Justamente sobre este tema fue consultada Marcela Peredo, específicamente sobre el carácter de su propuesta de garantía y la relación de ésta con la figura garante del defensor del pueblo. A este respecto, Peredo señaló que, aunque *“podría uno establecer que dentro del ombudsman - que es como se llama normalmente el defensor del pueblo- pudiera incluirlo [a un eventual defensor de la vejez]”*, su propuesta no apuntaba a la creación de esta figura, sino más bien:

“yo en realidad (...) estaba pensando en un órgano técnico, autónomo, de origen constitucional que pudiera velar, desde la prevención hasta la protección, y que, en ese sentido, tuviera cierta autonomía, porque el ombudsman puede resultar útil para otro tipo de derechos -principalmente derechos sociales u otros derechos” Marcela Peredo (Observatorio Constitucional, U. Andes)



Por último, Patricio Saldívar plantea la relevancia de consagrar una garantía indirecta relacionada al acceso a la información, por parte de las personas mayores, acerca de los derechos que les asisten.

“Creemos que es importante asegurar la real implementación de la Convención Interamericana por los Derechos [Humanos] de las personas mayores en nuestro país, pero además facilitar la información y el conocimiento de ésta, porque muchas personas mayores no la conocen y es importante darles acción desde el poder también y el conocimiento.” (Saldívar, Gero Zoom)

406: Derechos de las Mujeres

Antecedentes y experiencias de vulneración

Uno de los principales antecedentes para comprender temas relativos al Derecho de las Mujeres es la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW). Esta define la discriminación contra la mujer como

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el sexo que tenga por objeto o resultado (porque aquí no importa la intención del legislador, sino los resultados que esta legislación tenga en la práctica) y que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las mujeres” (Verónica del Pozo Saavedra)

Así también podemos encontrar antecedentes legales locales, como por ejemplo la Ley 21.282:

“Artículo 1º objetivo de la Ley: esta Ley tiene por objeto conmemorar los días 19 de diciembre de cada año el Día Nacional contra el Femicidio con la finalidad de visibilizar este delito como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, así como dignificar la memoria de quienes han sido víctimas del femicidio, reconociendo a su vez el aporte del movimiento feminista en la erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Artículo 2: declárese el 19 de diciembre de cada año como Día Nacional contra el Femicidio” (Paula Silva Terreros)

En este sentido, Paula Silva, de la Coordinadora 19 de Diciembre, menciona que:

“Ley que declara el día 19 de diciembre como día contra el femicidio implica: visibilizar este delito como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, dignificar la memoria de las víctimas de femicidio, reconocer el aporte del movimiento feminista en la erradicación de la violencia contra las mujeres en Chile y autorizar establecimientos educacionales, organizaciones sociales y de la sociedad civil para conmemorar el 19 de diciembre”

Sin embargo y a pesar de la existencia de la Ley mencionada anteriormente Claudia Neira también de la coordinadora 19 de Diciembre (19D) comenta que el trabajo que hacen como organización tiene con ver con la ausencia del Estado en estas materias ya que

“no ha dado cumplimiento a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos para las mujeres. Dentro de los Derechos Humanos que no ha cumplido, está el tema de la prevención, de la sanción de la erradicación de la violencia en contra las mujeres, que está establecido uno en CEDAW y el otro en Convención de Belém do Pará”

Asimismo, la expositora comenta que hoy no se cuenta con una Ley de Violencia Integral, sino más bien un proyecto de ley ingresado hace 5 o 6 años, y que:

“Es una verdadera declaración de principios; uno al leer los primeros siete artículos de la Ley, se ilusiona y cree que de verdad el Estado está tomando en serio el tema de la violencia hacia las mujeres y una vez que avanza la Ley y empieza a desarrollar cómo va a comprometer cada uno de los principios se evidencia la falta de financiamiento”

En este sentido y en relación al femicidio, Claudia Neira menciona:

“Cabe destacar que el delito, perdón, que el femicidio es un delito pluri ofensivo de gran lesividad personal, familiar y social, ya que atentan contra el Derecho a la Vida, el Derecho a la Igualdad y no discriminación, el Derecho a la Integridad Física y Psicológica, el Derecho a la Dignidad, el Derecho a la Libertad, el Derecho a la Seguridad de las mujeres, el Derecho a una Vida Libre de Violencia, entre algunos derechos que viola”

Otra temática discutida durante las audiencias fue la discriminación. Con respecto a esto Claudia Neira, de la Coordinadora 19D, comenta que:

“Solamente para tener presente; entre los años 2015 y 2020 (estos son los resultados de un estudio que estamos iniciando), se ingresaron a los Tribunales Penales 28.951 causas por maltrato habitual, de ellas -de estas 28.951-, se decretaron 3.869 medidas cautelares. Eso significa que apenas un 13% de las mujeres que denunciaron en tribunales penales maltrato habitual, el tribunal encontró que su vida corre algún riesgo y decretó alguna medida cautelar.”

Por lo tanto, menciona Claudia Neira *“el problema queda vigente, entonces nos encontramos con [que] la consecuencia de eso es que las mujeres están con medidas cautelares, pero los niños, las niñas tienen derecho a visitas con su padre agresor”*. Ejemplos de discriminación existen



varios, como por ejemplo los de Antonia Garros, Silvana Garrido, Marta Bustos, entre otras. Frente a esto la Coordinadora 19D comenta que:

Antonia Garros, donde Carabineros la lleva luego de una denuncia de violencia, la lleva a arreglar la situación con el agresor al departamento y, después de esa discusión, Antonia se suicida. Silvana Garrido, Marta Bustos, Macarena Valdés, Ximena Cortés, en donde habido que exhumar nuevamente los cuerpos, porque se acusa suicidio o muerte natural en algunos casos. Isidora González, donde su femicidio no se tipifica como tal, porque la Corte estableció que no tenía una relación tan duradera con el femicida, que no era tan -no es duradera la palabra que usó- que era como un vínculo débil con el femicida. (Claudia Neira Oportus)

Es por estas razones que Claudia Neira y la Coordinadora 19D mencionan que les parece fundamental

“Que la Convención conozca estas historias, que son anónimas. Por lo demás, que antes de la ley de femicidio del 2010 ni siquiera conocíamos los nombres; recién esa ley, que es una ley muy mínima, nos permitió cuantificarlas, conocer algunos nombres y que así han sido las organizaciones sociales y feministas quienes hemos tenido que hacer la contención, apoyar las denuncias y visibilizar este tema, mientras hay un Estado que, habiéndose comprometido en tratados internacionales, no le ha dado cumplimiento a ninguno de ellos.

Con respecto a la responsabilidad en torno a las negligencias y la impunidad en los crímenes contra las mujeres Claudia Neira alude que

“En realidad quiénes menos responsabilidad tienen en la impunidad de los crímenes a las mujeres, son los jueces y las juezas; porque este es un circuito de justicia que no funciona y acá lo que señalaba la constituyente, hay una cuestión cultural: Carabineros ve que hay una mujer que está de[sde] el piso diez, tirada en el suelo y asume que es suicidio y la caratula como suicidio. Tenemos el caso de Marta Bustos, una mujer que apareció enterrada en un vertedero en Huasco, cubierta con cal y el Servicio Médico Legal la caratuló como muerte natural”

Frente a esto dice Claudia Neira:

“La mayor responsabilidad en esto la tiene Carabineros, Investigaciones, el Servicio Médico Legal y la Fiscalía. El Ministerio de la Mujer además no contempla una cantidad de abogados, abogadas, incluso de apoyo psicológico para las víctimas, que cubra esta necesidad y que la gente, ya una vez enfrentada al femicidio, al menos tenga un apoyo jurídico que le garantice cierta tranquilidad, que le garantice el acceso a la información de lo que está ocurriendo en el juicio. Hoy día estamos en el octavo día del juicio por el femicidio de Muriel Mazuelo, un juicio que se pidió la postergación 30 veces. 30 veces, de ese grado de violación de derechos estamos hablando.

Contenidos

A lo largo de las audiencias del Bloque Temático 4, las propuestas de resguardo de los Derechos de las Mujeres se centran en los ámbitos de Igualdad, Diversidad, Protección frente a la Violencia, Derechos Sexuales y Reproductivos y Trabajo.

Mariela Infante, de Nada Sin Nosotras, hace hincapié en que las instituciones no son neutras, en la medida en que reproducen o transforman las desigualdades. Aplicándolo al caso de las mujeres, afirma que

“la consagración de sus derechos requiere el reconocimiento de su calidad de sujetas iguales y diferentes; iguales en tanto parte del género humano y diferentes en tanto sus necesidades e intereses específicos se configuran a partir de la construcción cultural de los sexos, que las sitúa en una situación de subordinación.”

Advierte Infante que es necesario avanzar a un diseño institucional consciente de las condiciones estructurales de las y los sujetos a quienes afecta. Puntualiza que

“En el caso de las mujeres, considerar esta experiencia concreta significa incorporar nuevos derechos en el texto constitucional, como el Cuidado, el Derecho a una Vida Libre de Violencia y los Derechos Sexuales y Reproductivos.”

Infante se extiende respecto al Derecho a una Vida Libre de Violencia, promoviendo el modelo de un “Estado Cuidador”. Agrega luego:

“Además de incluir explícitamente el Derecho a una Vida Libre de Violencia, en el catálogo de derechos se deben incorporar los principios de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, primacía de los Derechos Humanos en el actuar estatal y la transversalización del enfoque de género en los órganos del Estado.”

Los Derechos Sexuales y Reproductivos, sistematizados en detalle en la sección 307 del Bloque Temático 3, aplican por igual a todos los sexos y géneros, pero requieren de una especial



atención con quienes han sido postergadas y desatendidas. Mariela Infante lo plantea de esta manera:

“Negar los Derechos Sexuales y Reproductivos representa un control y tutela sobre la vida, sexualidad y cuerpo de las mujeres, [lo] que resulta inaceptable en una sociedad democrática. Proponemos entonces que esta Comisión consagre expresamente, en el catálogo de Derechos Fundamentales, los Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos para lograr su efectiva protección.”

En lo relativo al Derecho al Trabajo, Verónica Riquelme, de Nada Sin Nosotras, presenta un abanico de medidas para eliminar las diferencias injustificadas en la labor de hombres y mujeres:

“Transformar la división sexual del trabajo y las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, reconocer y visibilizar las tareas de cuidado como trabajo, desfeminizar, desprivatizar, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres, por ejemplo, su participación social, política, su tiempo libre y la cuarta base: avanzar hacia la corresponsabilidad social y la colectivización de los cuidados.”

Intersectando las materias de Derecho al Trabajo con otros Derechos Fundamentales, Verónica Riquelme señala que se deben resguardar:

“[El] Derecho al acceso, permanencia y condiciones en el Trabajo, justas y sin discriminación, el Derecho a la igualdad de remuneraciones por un trabajo de igual valor, el Derecho a una vida libre de violencia, incluyendo el ámbito del trabajo remunerado y reconocer el trabajo doméstico y de cuidados y garantizar la corresponsabilidad para armonizar con el trabajo de cuidados.”

Grace Méndez, de la Asociación Pensamiento Penal, presenta la intersección entre labores de cuidado y derechos de las mujeres privadas de libertad:

“Debemos reconocer, como Estado, la realidad de los roles que cumplen las mujeres, y mientras eso no cambie, constitucionalmente debe asegurarse un marco mínimo, un piso que permita que legalmente se impida que las mujeres privadas de libertad que tienen hijos menores de edad vivan la maternidad desde la cárcel.”

Garantías

Con respecto a las garantías en relación con el Derecho de las Mujeres, Mariela Infante de Nada Sin Nosotras, comenta que resulta de suma importancia establecer mandatos claros para el Estado.

“Como por ejemplo: respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a una vida libre de violencia, investigar y sancionar a los responsables y proteger y reparar a las sobrevivientes; generar las condiciones para que las bases materiales de la violencia sean progresivamente reemplazadas por bases de igualdad material y no discriminación y transversalizar el enfoque de género y las perspectivas feministas en políticas públicas, legislaciones, sentencias y el desarrollo institucional de todos los órganos del Estado”

407: Derechos de las Personas con Discapacidad, Funcionalmente Diversas y Neurodiversas

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad las define de la siguiente manera:

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás.”

El concepto de discapacidad, al centrarse en las deficiencias, ha sido disputado, especialmente desde grupos activistas, quienes acentúan el hecho de que sus diferencias son parte de la diversidad humana, y que solo configuran obstáculos en la medida en que la sociedad y el entorno les resultan hostiles. Los conceptos de “Diversidad Funcional” y “Neurodiversidad” apuntan a tal visión.

En el marco de las audiencias presentadas a esta Comisión, sólo una de ellas, la de la Agrupación Unidos por la Neurodiversidad, aborda el tema de la diversidad funcional, específicamente la neurodiversidad y con un tratamiento particular del autismo. Dado que este enfoque no cubre la diversidad de experiencias de estos grupos de personas, esta sección buscará generalizar, cuando sea posible, sus antecedentes y recomendaciones.

Antecedentes y experiencias de vulneración

Un antecedente a considerar es el número de personas funcionalmente diversas en Chile. Maximiliano Bravo informa de estas cifras, destacando que no incluyen información detallada sobre las particularidades dentro del colectivo:



“En Chile no existen estadísticas para identificar el número de personas en el espectro autista u otras condiciones neurodivergentes; sin embargo, la población de personas en situación de discapacidad en Chile son 2.838.018 personas, [cifra] basada en las fuentes del Segundo Estudio Nacional de Discapacidad, hecho por SENADIS en el año 2015.”

Una de las medidas que la actual legislación contempla para apoyar a estas personas es la Ley de Inclusión Laboral, que establece una cuota²⁰ de 1% de los empleos en empresas de más de 100 trabajadores a personas reconocidas por el Estado como discapacitadas o invalidadas. A juicio de Bravo, las provisiones de esta ley son insuficientes, en la medida en que no dispone de ninguna medida de acomodación razonable que ajuste los lugares y reglas de trabajo a las diferencias funcionales de estos trabajadores. Hablando en particular de las acomodaciones relevantes a ciertas personas neurodivergentes, Bravo señala:

“si para las personas neurodivergentes [ya] es muy difícil acceder a puestos de trabajo con ese porcentaje, es aún más complejo permanecer y progresar en ellos, cuando los ajustes de los procesos de selección y contratación no se dan, o cuando no existen ajustes en los ambientes laborales (como reducir estímulos sensoriales), cuando no existe una cultura de comunicación clara, o cuando no se ofrecen orientaciones sociales emocionales. Así no podemos hablar de inclusión laboral e inclusión social plena.”

Contenidos

La protección de los Derechos Fundamentales de las personas funcionalmente diversas atañe a distintos ámbitos, incluyendo la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el entorno construido, y el reconocimiento de la identidad. En adelante, se presenta una visión sinóptica y generalizada de las propuestas en estos ámbitos.

El cuidado de la salud es uno de los aspectos más evidentes: aunque las condiciones de diversidad funcional no son ni siempre ni permanentemente enfermedades, las personas funcionalmente diversas se benefician de diagnósticos y tratamientos oportunos y acertados, además de ajustados a sus condiciones particulares. Así lo expresa Alexandra Vozmediano, de Unidos por la Neurodiversidad:

“[Queremos] un sistema de salud solidario, que nos garantice el acceso a un diagnóstico oportuno y precoz, también a una intervención de calidad, multidisciplinaria, para enfrentar los desafíos del desarrollo en cada etapa vital de la persona.”

A lo anterior, cabe agregarse también la importancia del respeto por la agencia y la autonomía individual de las personas funcionalmente diversas al momento de recurrir a las prestaciones de salud: existe una documentada historia de antecedentes de violación de Derechos Fundamentales a través de tratamientos forzados, tratos crueles y de la aplicación de las denominadas “terapias de conversión”, que usan la inflicción de dolor o estrés para forzar el ocultamiento de rasgos de diversidad funcional.

La educación de las personas funcionalmente diversas requiere de adaptaciones particulares, lo que supone un dilema en términos de diseño institucional: muchos países y organizaciones han optado por crear sistemas separados de “educación especial”, que disponen de las adaptaciones y métodos específicos para ciertos tipos de diversidad funcional, pero redundando en la exclusión sistemática de las personas así educadas. Tal exclusión resulta particularmente apremiante cuando la formación recibida no es homologable a la de los planes de estudios generales, lo que impone mayores obstáculos al avance hacia la educación superior en particular.

Alexandra Vozmediano plantea dos demandas a este respecto:

“[Queremos] educación inclusiva en el sistema público, y, sobre todo, en el sistema privado: pre básica, básica, media, técnico-profesional y universitaria.”

[Queremos] reconocimiento de las personas en situación de discapacidad que estudian en escuelas especiales por parte del Estado: que reciban una certificación por los años [durante los] que ahí reciben capacitación, guía y aprendizaje”

En lo referente al entorno construido, incluyendo la vivienda, los espacios públicos y los sistemas de transporte y telecomunicaciones, el principal medio de acción afirmativa son las adaptaciones razonables²¹, en este contexto, generalmente denominadas como medidas de “diseño universal” o “acceso universal”. El uso del término “universal” refiere a que estas medidas generalmente son capaces de facilitar el uso a todas las personas, y no exclusivamente a las funcionalmente diversas, incluso si en algunos casos se pueden establecer reglas de preferencia o exclusividad

²⁰ Para una revisión más detallada del funcionamiento de las cuotas como medidas de acción afirmativa, consulte la sección 401, subtítulo de Contenidos.

²¹ Para una definición de las adaptaciones razonables, consulte la sección 401, subtítulo de Contenidos.



en su uso. También tocando en materias educativas, Alexandra Vozmediano expresa esta demanda así:

“[Queremos] diseño universal [accesible] y diseño universal para el aprendizaje: es un enfoque para brindar instrucción, destinado a satisfacer la necesidad de todos los participantes en un entorno de aprendizaje; se basa en tres principios fundamentales para proporcionar múltiples medios de participación: acción, expresión y representación. Estos principios sientan las bases y enfoques que abordan todas las necesidades de los alumnos; es vital, porque busca acomodar no sólo aquellos que son neurodivergentes, sino a cualquier persona, para ayudarla a alcanzar su potencial y aspiraciones personales.”

Así como en el caso de las audiencias sobre los Derechos de las Diversidades Sexuales y de Género, para las personas con Diversidad Funcional es una demanda relevante el reconocimiento de su autonomía personal en términos de su Identidad y Libre Desarrollo de la Personalidad. No es casual que ambos grupos compartan la experiencia vulneratoria de las “terapias de conversión”, y de conductas de “enmascaramiento” como medio para evitar la discriminación en entornos hostiles. Expresa la necesidad de garantizar este derecho Maximiliano Bravo, ejemplificando con su relevancia en el trabajo:

“Es vital resguardar el Derecho a la Identidad y la Protección de la misma, generando un clima de seguridad psicológica en nuestros ambientes laborales, para que las personas en el espectro autista u otras condiciones neurodivergentes no se sientan obligadas a ponerse una máscara para encajar socialmente, con el fin de conservar sus trabajos.”

Garantías

En materia de garantías al ejercicio de sus derechos, Maximiliano Bravo, de Unidos por la Neurodiversidad, propone que, en espacios laborales, las personas funcionalmente diversas cuenten con:

“[la] figura de un mediador para que se sientan en confianza, que puedan pedir ayuda y también hacer más entendibles las reglas escritas y no escritas dentro del ambiente laboral, para cumplir satisfactoriamente con sus labores y participar en relaciones laborales virtuosas con sus colegas y supervisores.”

Medidas de adaptación similares podrían ser adoptadas de igual manera en otros entornos institucionales, requiriendo en todos los casos que la persona a cargo cuente con la capacitación adecuada para proponer soluciones basadas en evidencia e interactuar con sensibilidad ante las eventuales solicitudes.

408: Derechos de las Disidencias y Diversidades Sexuales y de Género

En lo respectivo al resguardo de los Derechos Fundamentales de las diversidades sexuales y de género, se constataron 20 declaraciones relevantes, en dos audiencias. Lo que sigue es un sumario de sus principales argumentos.²²

Antecedentes y experiencias de vulneración

“Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer -diversidad sexual y de género, en lo sucesivo- han sufrido, a lo largo de la historia de Chile, exclusión, discriminación, violencia y abandono” señala Isabel Amor, de Fundación Iguales, haciendo una breve sinopsis del motivo por el cual este grupo de personas busca un resguardo reforzado de sus Derechos Fundamentales.

Sigue con una revisión de los antecedentes históricos de este trato discriminatorio, trazando sus inicios a la persecución de la “sodomía” en tiempos coloniales, su extensión con la Ley de Estados Antisociales, que entregaba mandato al Estado para *“internar en casas de trabajo y hospitales, prohibir recibir en determinados lugares, estar sujetas a vigilancia, multar o incautar sus bienes”* a las personas homosexuales, relata Amor. Añade también que la Iglesia Católica jugó un papel “contundente” para conducir en esta dirección a las autoridades políticas. Solo en los 1990s, después del fin de la dictadura, se avanzó en la despenalización de la homosexualidad, pero hizo falta presión pública e internacional para que la legislación chilena adoptara medidas de protección para la diversidad sexual y de género: de acuerdo a Amor, los casos Zamudio y Atala Rizzo configuran un *“punto de inflexión”* en la legislación en esta materia.

Actualmente, el marco legal de protección a la diversidad sexual y de género, relata Amor, se conforma por la Ley Antidiscriminación, la Ley de Identidad de Género, la eliminación de la distinción entre hijos naturales y legítimos en el Código Civil, y, a la espera de la recientemente

²² Aunque no aparece mencionado en las audiencias, es conveniente hacer una distinción conceptual entre Diversidad y Disidencia Sexual y de Género. El concepto de “diversidad” constata una condición intrínseca e innata de estas personas, mientras que el de “disidencia” refiere a una postura de afirmación pública de la diversidad, frente a la falta de reconocimiento de ésta.



promulgada Ley de Matrimonio Igualitario, el cuerpo de fallos judiciales que reconocen a las uniones de hecho como familias y la doble maternidad de parejas lesbo-maternales.

Amor pone especial atención en la Ley Antidiscriminación, para hacer notar lo elemental de su protección, a la vez que su insuficiencia:

“La Ley Antidiscriminación estableció por primera vez en Chile algo tan básico como que los actos discriminatorios eran antijurídicos y, por tanto, debían estar [proscritos] y aparejados a una sanción. Sin embargo, la Ley [Antidiscriminación] ha demostrado ser insuficiente. Uno de sus principales defectos es que establece a priori una posibilidad de discriminar en razón del legítimo ejercicio de otros Derechos Constitucionales.”

Juan Enrique Pi, también de la Fundación Iguales, pone atención, por su parte, en las implicancias de la promulgación de la Ley de Identidad de Género, afirmando que *“nunca en Chile se ha consagrado un principio de Libre Desarrollo de la Personalidad a nivel constitucional, lo que se ha traducido en una constante disputa por las libertades civiles.”* El Derecho a la Identidad Personal y la Libre Determinación de la Personalidad²³, que está ausente de la actual Constitución pero resguardado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de los Derechos del Niño, recibe un reconocimiento, aún si legal y parcial, a través de esta ley.

La relevancia de la afirmación de la identidad no se circunscribe únicamente al libre desarrollo de la personalidad individual, sino que, de acuerdo a Alex Pascal Castillo, de la ONG Diverses, tiene también implicancias de reconocimiento colectivo, especialmente ante la marginación sistemática:

“Parte de nuestra historia está invisibilizada de forma histórica, entonces pertenecemos a un grupo que, así como las personas racializadas, ha sido echado hacia el final o a la cola de la historia. Entonces nos es relevante ser visibles y estar en este espacio, para nosotres es un orgullo y [es] importante, porque hablamos por otras personas, hablamos por nuestras familias - en mi caso, por personas más pequeñas, que yo que espero crezcan en un lugar mucho mejor al que yo crecí [...] hay una necesidad de ser visibles, hay una necesidad de ser escuchades, porque no se nos da ese espacio; y generalmente los puestos de poder los tienen las personas heterosexuales... Y son hombres y mujeres, hoy en día hay paridad de género, y eso ha dado acceso a muchas otras posibilidades, pero falta aún un poco de avance.”

Este reconocimiento, argumenta Ethan Langenegger, también de la ONG Diverses, tiene implicancias en las condiciones de vida de las personas que implica:

“¿No creen que nos han hecho esperar lo suficiente? ¿Qué ya han muerto suficientes? Estimades: sus antecesores están en deuda con nosotres. Las diversidades hemos debido pagar un precio muy alto por un Estado que no nos protegió de seguir siendo discriminados, maltratados y asesinados. Lo que hoy les pedimos es que ustedes puedan pagar esa deuda del Estado, construyendo una Constitución que nos incluya, proteja, pero, por sobre todo, de la que seamos parte. El Chile que soñamos, inclusivo, digno, donde la revolución no sea vivir hasta los 35 años por parte de las personas trans.”

La audiencia de la ONG Diverses también abordan materias del ejercicio de otros Derechos Fundamentales por parte de personas de la diversidad sexual y de género:

“Respecto al Derecho al Trabajo, las disidencias sexuales han estado históricamente relegadas a la precarización laboral, y alejadas de esferas laborales tradicionales y formales, dejándonos en trabajos de alta exposición a la violencia o bajos salarios; es crucial garantizar el Derecho al Trabajo para toda persona sin discriminación.” Ethan Langenegger (ONG Diverses)

“Tenemos información sobre educación y qué medidas debemos tomar con respecto a ello: están explicadas en el libro, [...] hay todo un espacio dentro del libro que habla sobre la Educación Sexual Integral.” Alex Pascal Castillo (ONG Diverses)

“Con respecto a los tratamientos, en Chile todavía no hay regulaciones específicas sobre la edad de cuando empezar ciertos tratamientos hormonales o físicos. Al no haber regulaciones específicas, en estos procesos pasan dependiendo de la familia, dependiendo de la condición en la que esté viviendo esta persona, falta ahí algún tipo de base en la que estas personas puedan sentarse para lanzarse a sus propios procesos, ya que los procesos hormonales y físicos tienen consecuencias a largo plazo.” Alex Pascal Castillo (ONG Diverses)

Contenidos

En lo referente a contenidos que incluir en la Constitución, las propuestas sobre diversidades sexuales y de género consideran los ámbitos de la familia, la identidad, la no discriminación, las prestaciones de salud, el trabajo y la protección frente a la violencia.

²³ Para otro ámbito en el cual este Derecho aparece mencionado en las audiencias, consulte la sección 407, subtítulo de contenidos.



Juan Enrique Pi, de la Fundación iguales, propone modificar el reconocimiento que la actual Constitución hace de la familia, para reconocer a distintos tipos de familias, pero sin caracterizarlas, de modo que sus distintas formas puedan ser reconocidas por la Ley, atendiendo a los posibles cambios futuros.

Alex Pascal Castillo, de la ONG Diverses, propone el reconocimiento constitucional del Derecho a la Identidad, incluyendo la autodeterminación de la identidad de género entre sus implicaciones. Con ello, se generaría un mandato constitucional que permita medidas legales y reglamentarias de acomodación razonable²⁴ en instancias como el Registro Civil, los servicios de salud u otros.

La prestación de tratamientos médicos relevantes a las personas de sexo y género diverso también debería estar disponible en los servicios públicos, evitando que las personas interesadas “tengan que buscar por otras vías médicas no certificadas, exponiéndose a procedimientos en condiciones inhumanas”, en palabras de Alex Pascal Castillo.

En lo referente al Derecho al Trabajo, Ethan Langenegger, de la ONG Diverses, plantea que deben incluirse provisiones para asegurar el acceso al empleo sin discriminación a personas de sexo y género diverso. Lo ejemplifica con la propuesta de un “cupó laboral trans”, una acción afirmativa de cuota²⁵.

Una de las formas de discriminación más apremiantes que las personas de la diversidad sexual y de género enfrentan, de acuerdo a las audiencias, es la violencia física y psíquica. Alex Pascal Castillo, de la ONG Diverses, plantea que la Constitución debe resguardar el Derecho a una Vida Libre de Violencia, que incluya garantías de prevención, protección, sanción y reparación.

Garantías

Como en varias otras audiencias, la de la ONG Diverses favorece la idea de crear una Defensoría del Pueblo, pero además añaden una Defensoría de la Diversidad, dedicada exclusivamente al resguardo de las diversidades sexuales y de género. Presenta la propuesta Ethan Langenegger:

“Respecto a la institucionalidad, se propone crear, en primer lugar, un Defensor del Pueblo -una propuesta que no podemos abordar en este momento- y en segunda, la creación de una Defensoría de la Diversidad, que tendría por objetivo brindar protección a todas las personas que pertenezcan las diversidades, y trabajar en contra cualquier tipo de discriminación; además, deberá tener la facultad de realizar capacitaciones a funcionarios públicos, generar campañas de concientización, realizar recomendaciones a organismos públicos, entre otros.”

409: Derechos de las Personas Migrantes

El siguiente apartado recoge las audiencias con el código 409, referente a los Derechos de las personas migrantes. Esta sección recoge alrededor de 27 declaraciones de 3 audiencias principales relativas al Servicio Nacional de Migraciones, el Movimiento Acción Migrante y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Las principales temáticas abordadas fueron el derecho internacional, el aumento migratorio en el país, consagrar el Derecho a Migrar en la Constitución, entre otros.

Antecedentes y experiencias de vulneración

Mabel Cobos del Movimiento de Acción Migrante se refiere al derecho internacional y como este, en diferentes tratados reconoce el Derecho al libre tránsito. En este sentido la exponente menciona que:

“El derecho internacional a través de múltiples tratados, reconoce el derecho al libre tránsito, esto es, el derecho a salir de un país para entrar en otro. Además, diferentes convenciones reconocen el derecho a la protección de las personas en situación y contexto de movilidad humana”.

Por otro lado, y ya hablando de nuestro país, Romer Rubio del Servicio Nacional de Migrantes dice que Chile “se ha convertido en el país con el mayor crecimiento del flujo migratorio de los países OCDE y la segunda nación con mayor porcentaje de población migrante de esta región”. En tan solo cinco años el país ha “triplicado su población migrante, lo que representa un cambio demográfico explosivo que requería de una nueva ley migratoria”. Dicha Ley, menciona Ricardo Bahamondes, exponente de la misma organización es la “ley 20.325, [que] establece los principios fundamentales de protección, enumerando por primera vez un catálogo de derechos y obligaciones, a diferencia de la ley anterior respecto a los extranjeros migrantes”.

La nueva ley de migraciones establece también:

“Derechos y obligaciones para los extranjeros, como bien decíamos, la No Discriminación Arbitraria, igualdad en los derechos laborales, igualdad en el derecho a acceso a la salud, derecho

²⁴ Para una descripción de las acomodaciones razonables, consulte la sección 401, subtítulo de Contenidos.

²⁵ Para una descripción de las cuotas como mecanismo de acción afirmativa, consulte la sección 401, subtítulo de Contenidos.



a la seguridad social y beneficio de carga fiscal, derecho al acceso a la educación, vivienda propia, reunificación familiar muy importante por estos días, sobre todo, con las visas consulares que se establecieron hace dos o tres años atrás, envío de recepción de remesas a sus países de origen y el debido proceso”

Así también, la nueva Ley de Migración establece un sentido amplio para la reunificación familiar:

“Vemos que, dentro de las políticas públicas, ya se establecieron vistos consulares durante el periodo de 2018 y 2019, sobre todo para Haití y para Venezuela, justamente propendiendo una migración segura, ordenada y regular” (Ricardo Bahamondes).

Por último y algo que se debe destacar en relación a los derechos políticos de las personas migrantes es que:

“Gozan del derecho al sufragio luego de 5 años de residencia en el país. Asimismo, las personas nacionalizadas pueden ser elegidas para cargos políticos luego de cinco años desde la obtención de la nacionalidad chilena” (Mabel Cobos).

Discusiones de Contenidos

Uno de los principales argumentos en torno a la migración fue que Chile debe respetar los tratados y convenios en materia de migración, todo esto desde un enfoque y resguardo de los Derechos Humanos. Manuel Hidalgo de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes se refiere a que:

“Toda norma o política en materia de migración o refugio, respeta los tratados y convenciones internacionales existentes y de estricto cumplimiento a sus disposiciones normativas desde un enfoque de Derechos Humanos. Es además tarea permanente del Estado de Chile y de sus instituciones contribuir a la construcción de nuevos y mejores acuerdos internacionales relacionados con la migración y refugio, así como formalizar en forma expedita la adhesión de Chile a los mismos.”

En este sentido y en relación a la movilidad Humana, Mabel Cobos del Movimiento de Acción Migrante señala que:

“Las personas en situación de movilidad humana -es decir, migrantes refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de trata y tráfico de personas, desplazadas internas o por razones medioambientales- son titulares de todos los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile”.

Asimismo, la misma Cobos menciona que se debe consagrar constitucionalmente el Derecho a migrar

“En atención a dichas obligaciones del Estado, es preciso consagrar a nivel constitucional el derecho a migrar, el cual constituye una garantía para las personas migrantes frente a decisiones arbitrarias y frente a la afectación de sus derechos fundamentales, debido a barreras para su regularización”.

Algo similar plantea Ricardo Bahamondes del Servicio Nacional de Migraciones quien pide *“determinar taxativamente el lus Migrandi, que acogerá la Constitución, entendiendo los desafíos que esto implica para el manejo del flujo migratorio y su abordaje como fenómeno mundial”*. La Coordinadora Nacional de Inmigrantes, también mencionó en su audiencia la consagración del Derecho a migrar *“nosotros creemos que la constitución debe garantizar el derecho de toda persona a migrar desde y hacia Chile, y el pleno respeto de los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas” (Manuel Hidalgo).*

Las tres audiencias mencionadas anteriormente buscan desde su punto de vista consagrar el Derecho a Migrar en la Constitución. Sin embargo, también cada organización solicitó a la Convención otras temáticas relacionadas con migración como, por ejemplo, la niñez, el reconocimiento de derechos políticos, implementación de nuevas políticas públicas de inclusión, cumplimiento al principio de progresividad y no regresividad, entre otros.

De acuerdo con lo dicho, el Servicio Nacional de Migraciones, por ejemplo, comenta que

“Hoy los migrantes, luego de tener la carta de nacionalidad, desde el día 1 pueden ejercer el Derecho al Voto, pero no pueden ser elegidos. Entonces estamos hablando de un reconocimiento parcial a los derechos que debería tener como nacional. Es decir, nuestra propuesta sería que, una vez que se le otorga a ese ciudadano extranjero el derecho a la nacionalidad pueda hacer ejercicio de sus derechos tanto activos como pasivos, es decir, tanto de elegir como de ser elegido” (Romer Rubio).

En este sentido y como propuesta Ricardo Bahamondes busca *“reconocer los derechos políticos de elegir y ser elegidos, algo ya decía Romer en cuanto a los derechos de ejercer cargos públicos”*. Referente a esto Eduardo Cardoza del Movimiento de Acción Migrante menciona que *“Nosotros fijamos, que hay un plazo de tres años que es necesario para acceder al derecho a*



voto. En ese sentido, nosotros consideramos que es normal que haya una necesidad de tiempo con respecto”. Así también, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes mencionan que el Estado chileno debiera legislar e implementar “*políticas activas de inclusión y protección de las personas migrantes y refugiadas, priorizando en esto a la población infantil y adolescente, y favoreciendo la reunificación familiar.* (Manuel Hidalgo)”

Asimismo, y una temática que fue bastante discutida en las audiencias tuvo relación con los niñas, niños y adolescentes. Con respecto a esto Ricardo Bahamondes señala que se debe “*garantizar el principio de lus Solis a favor de los niños que sean extranjeros o transeúntes, y así todo niño nacido en Chile tenga una nacionalidad y así evitar la apatridia*”. Referente a esto, Manuel Hidalgo propone que:

“Las personas nacidas en otros países, residentes en Chile y que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley, podrán obtener la nacionalidad chilena sin obligación de renunciar a su nacionalidad previa o de origen. Quienes hayan tenido o tengan que renunciar a la nacionalidad chilena para ser ciudadanos en otro país, la pueden recuperar en cualquier momento, si así lo manifiestan ante las autoridades correspondientes y no existen impedimentos de carácter constitucional o de Ley que sean Acción ...”

Algo similar busca Mabel Cobos la decir que:

“La nacionalidad es un Derecho Humano reconocido por diversos tratados internacionales suscritos por Chile, entre otros aspectos prescribe que es deber de los estados prevenir, evitar y reducir la apatridia y brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación”.

Por último, la misma Mabel Cobos se refiere al principio de no regresividad al señalar que

“Chile debe dar cumplimiento al principio de progresividad y no regresividad consagrado en el derecho internacional de los Derechos Humanos, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el reconocimiento de los derechos fundamentales ya reconocidos a las personas no nacionales en tratados internacionales en la Constitución y legislación vigente. Por lo que se debe evitar la adopción de cualquier norma tendiente a retrotraer o menoscabar un derecho ya reconocido en estas normas”

Garantías

Mabel Cobos del Movimiento Acción Migrante y con respecto al reconocimiento de principios y de derechos fundamentales para las personas migrantes reconoce que:

“Estimamos que el reconocimiento de los principios y derechos enunciados, debe estar acompañado de un sistema de garantías constitucionales que permita la protección de los derechos, mediante acciones céleres, preferentes en las que prime el derecho material por sobre las formalidades jurídicas”.

Restricciones

Con respecto a las restricciones Ricardo Bahamondes del Servicio Nacional de Migraciones y en relación al ingreso de migrantes por pasos no habilitados menciona que:

“A modo de reflexión, si es que un extranjero debe entrar o no sin restricciones al país, y eso deberá también abordarlo ustedes como [Comisión]. Igualmente, si es que el ingreso es por paso no habilitado también, tiene que ser sancionado justamente por estos derechos y deberes que consagra la misma Ley de Extranjería”.

410: Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

La presente sección sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) tuvo aproximadamente 42 declaraciones de 8 audiencias distintas de organizaciones como la CIDENI, Subsecretaría de la Niñez, SINTRASUB, entre otros. Los principales temas que se discutieron fueron sobre las experiencias, convenios, tratados referentes a los NNA, Así también, se realizaron diversas propuestas y experiencias como por ejemplo la realidad de los centros de menores, los niños y el entorno privativo de libertad, la actualidad de los programas y políticas, entre otros. Con respecto a las propuestas, una de las principales tiene relación con el reconocimiento de los NNA como sujetos de derecho.

Antecedentes y experiencias de vulneración

En relación a los Antecedentes y experiencias de con respecto a los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Cilleros del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI), menciona que el reconocimiento de los Derechos de los Niños y Niñas, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional Comparado hacen consagrar de alguna manera “*los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de forma expresa en sus textos constitucionales*”. En Chile, por ejemplo



“La ratificación de la Convención [de los Derechos del Niño], coincidió con el retorno a la democracia y su aprobación unánime por el Congreso Nacional denota que los derechos de niños y niñas son un punto de encuentro, de consenso, a nivel universal y nacional” (Miguel Cilleros).

Sin embargo, si bien los derechos fueron ratificados por Chile, no han existido mecanismos reales de participación. En este sentido María Ester Valenzuela recalca el hecho de que

“Al no existir una regulación expresa, ni canales de participación para niños, niñas y adolescentes, estos han utilizado las vías extrainstitucionales quedando demostrado esto en los ejemplos que les daba; del Mochilazo, la Revolución Pingüina y las protestas en el metro pre-estallido. Y aquí el Comité de Derechos del Niño el año 2015 señaló que no existen estructuras oficiales que permitan a los niños participar en la elaboración de políticas nacionales, regionales y locales relativas a la infancia y, en particular, en procesos que demuestren de qué manera se tiene debidamente en cuenta su opinión”.

En esta misma línea argumentativa sigue Blanquita Honorato de la Subsecretaría de la niñez, al decir que el Estado de Chile ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niños y debe cumplir con su compromiso, no solo poniendo a disposición, sino que debe realizar acciones para cumplir esos derechos.

“Actualmente el Estado de Chile ratificó, hace más de 30 años, la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece ciertos principios y ciertos derechos que se deben asegurar de manera especial a niños, niñas y adolescentes [de aquí en más: NNA] ¿Qué significa esto? Que todos los derechos que están también en la Constitución Política de la República de Chile se deben asegurar de manera especial para NNA ¿Eso qué significa? Que el Estado no solamente lo tiene que poner a disposición, sino que además tiene que realizar acciones para que los NNA puedan ejercer estos derechos”.

Esto es, lo que justamente plantea Miguel Cilleros de la CIDENI, al mencionar que la ratificación del Convenio no se ha “permeado” al texto constitucional.

“La Convención de los Derechos del Niño fue un puente entre esos dos mundos que habían estado divididos por la guerra fría y que también se había expresado en el derecho constitucional y [en] el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, este reconocimiento tan relevante de 1990, de nuestro Congreso Nacional, no ha permeado hasta ahora en nuestro texto constitucional, cuestión que sí ha ocurrido en diversos países. A modo de ejemplo, en Brasil, México, Ecuador, Argentina de nuestro entorno y a nivel europeo se destaca la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que es vinculante para todos los Estados de la Unión, es decir [inaudible: 52:15] legislación interna y que consagra en su Artículo 24, específicamente los Derechos del Niño y el Principio del Interés Superior.

Otra de las temáticas abordadas durante estas audiencias fue la situación de los centros y programas de protección. Por ejemplo, Violeta Oyarce, del Sindicato de trabajadoras/es Subcontratados para la Niñez y Juventud, menciona que

“El 17% de la ejecución de los programas de protección están en manos de privados y el 84% del presupuesto total de Mejor Niñez, es decir, el nuevo SENAME para el año 2022 va en las cuentas, va directamente a las cuentas corrientes de las empresas que licitan programas. Solo en ocho empresas de un total de 372 con a lo menos un programa activo, tienen sus cuentas corrientes montos apoyados, por un total cercano a los 13 mil millones de pesos.”

Frente a esto también, Francisco Gorziglia comenta que

Respecto a la privatización, efectivamente el 97% de la política de niñez está en manos de privados. Hoy, con el nuevo servicio Mejor Niñez, según cifras de noviembre de 2021. Tenemos 14. 904 niños, niñas y adolescentes en lista de espera, cerca de 3000, cerca de 3000 están con lista de espera de más de 3 años, nos parece en brutal, nos parece brutal, porque finalmente el peloteo, en el peloteo concurre el Estado y concurre los privados y cada uno se limpia de responsabilidad.

En este sentido cobra relevancia las palabras de Violeta Oyarce al decir

“El contexto que queremos aportar es que de acuerdo al modelo de país vigente y su lógica subsidiaria, se ha generado casi la completa liberalización de la política de la niñez en Chile, es un caso emblemático Chile en la instalación de una política de protección a la infancia con orientación neoliberal. Donde la función pública, las garantías de derechos sociales han sido tercerizados y su impacto en la población se ha traducido a meras mediciones estandarizadas, resultados prescritos, fiscalizaciones cuantitativas, números, firmas, papeleos en general, más bien burocracia”.

Por último, se destacan dos temáticas relevantes que tienen relación con los niños y el entorno privativo de libertad y la situación de las mujeres en el Servicio de Protección Especializada de la



Niñez. En relación a la infancia y el entorno privativo de libertad de sus madres, Katherine Ríos menciona que:

“Es un tema sumamente discutido, sobre todo en infancia si es bueno o no que los niños estén en el entorno de [privación de] libertad. Por eso en general y en el derecho comparado, se ha establecido un límite de cuatro años, en Chile sólo hasta los 2 años seis meses, hasta tres [años] máximo, se les permite a los niños estar con sus madres y siempre están mirados desde el interés superior del niño, no de las presas”.

Así también y con respecto a la situación de las mujeres en el Servicio de Protección, Blanquita Honorato de la Subsecretaría de la Niñez, declara:

“Hoy día nosotros tenemos que la mayoría de los NNA que están en el Servicio Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia son mujeres, porque las mujeres son mayormente víctimas de vulneraciones de derechos. De hecho, tenemos, por ejemplo, en casos de abusos sexuales, tenemos que el 85% de las víctimas son mujeres y de los cuales un 80% muchas veces son menores de 14 años”.

Discusiones de Contenidos

Con respecto a los contenidos, un primer elemento es la consagración y reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. En este sentido, Miguel Cilleros del CIDENI, expresa que se necesita

“[el] Reconocimiento expreso de los niños como sujetos de derechos y titulares de Derechos Fundamentales y de ejercerlos de acuerdo a la evolución de sus facultades contando, para ello, con la orientación y dirección de sus padres o personas encargadas de su crianza”.

En esta misma línea van las declaraciones de Leslie Power al argumentar que:

“Los niños sean sujetos de derecho: esta es nuestra propuesta, [...]y por supuesto a las adolescentes. Ponerlos como sujetos de derechos. Sujetos, no objetos. Porque pareciera ser que nuestros bebés, niñas y niños que nacen son siempre consideradas como un objeto, que no piensan, que no sienten, que no les pasa nada, que no tienen memoria, que no recuerdan, que no importa si recibe leche materna o no, si son dejados aquí o allá, si son castigados o no son castigados, si se les aplica un método para dormir torturante como el método duérmete niño, o se le da pecho y se les acurruca por la noche”.

Así también, Francisco Gorziglia, de la SINTRASUB, considera que la propuesta hacia la nueva Constitución debe considerar cuatro puntos, en este sentido el exponente menciona que se debe:

“Reconocer como sujeto de protección especial a los niños, niñas adolescentes y jóvenes cualquiera sea su nacionalidad, sexo, género, color, raza, condición, vínculo familiar o cualquier otro dispositivo, debiendo el Estado optar las medidas tendientes para su adecuada y eficaz protección, en su calidad de sujetos de especial derecho. El Estado al reconocer a la niñez como sujeto de unos de los núcleos fundamentales de la sociedad, deberá adoptar todas las medidas necesarias destinadas a reconocer sus derechos inalienables como sujetos de especial protección, reconociendo expresamente en cada uno del espacio público y poderes del Estado, los derechos fundamentales a los que estos asisten. El Estado, debe permanente proteger a la niñez y juventud frente a toda forma de abandono y vulneración de derechos fundamentales y cualquier forma que constituya un atentado al interés superior que le asiste”.

Otras propuestas para la convención tienen que ver con algunos principios como el interés superior del niño, la igualdad y no discriminación arbitraria, tal como menciona Blanquita Honorato de la Subsecretaría de la niñez

“Primero, el interés superior del NNA, que implica que, ante la colisión de intereses contrapuestos, siempre prime el beneficio primordial del NNA ¿Cómo se traduce eso? Si una familia quiere que un niño trabaje y para eso deje de ir al colegio, en ese caso entonces, sabemos que eso no es beneficioso para el niño y debiese primar el interés superior de ese NNA. Por otra parte, tenemos la igualdad y no discriminación arbitraria, donde tenemos temas hoy día, como, por ejemplo, la situación de NNA migrantes que, si bien tienen el derecho de acceder a prestaciones como salud o educación, en los territorios nos ocurre que hoy día están siendo discriminados y no les están abriendo las puertas para poder ejercer de manera adecuada sus derechos”.

Asimismo, Miguel Cilleros propone:

“proponemos una particular atención a la situación de las niñas y las diversidades sexuales, a la situación de aquellos niños que nacen y crecen en pobreza... Protección contra toda forma de violencia, derecho al buen trato y una vida libre de violencia, cuestión sobre la cual también haremos llegar un documento específico sobre la protección de los niños frente a la violencia .. y En todas las medidas que afecten al niño y la niña, su interés superior debe ser una consideración prioritaria y ese interés superior debe ser entendido como la satisfacción de sus derechos y la realización del desarrollo integral”.



Otra temática abordada fue sobre los procesos de individualización y socialización, propios de esta etapa de la vida y deben ser promovidos por la Constitución. Con respecto a esto Miguel Cilleros del CIDENI explica que:

“Son una derivación de la garantía fundamental al libre desarrollo de la personalidad, concepto o garantía fundamental reconocida en prácticamente todas las constituciones de los Estados Sociales Democráticos de Derecho y que espero que también sea reconocida en nuestro nuevo texto constitucional”.

Dentro de los procesos de socialización podemos encontrar la participación y el derecho a poder formar un criterio propio. Miguel Cilleros menciona que *“un punto clave de la Convención es que los niños, niñas y adolescentes deben participar y tienen derecho a formarse un juicio propio sobre las cuestiones que les afectan”*. Por lo tanto, menciona el expositor, la formación y las formas de deliberación deben ser adecuada a sus condiciones y *“eso es lo que ha hecho dudar a parte del movimiento a favor de los Derechos de los Niños y Niñas, sobre su participación en contiendas electorales de adultos, donde su participación a veces pasa a ser meramente simbólica o tiene algunas dificultades”*.

María Ester Cisneros, también del CIDENI comenta que en Chile no se prohíbe, ni se limita la posibilidad de los jóvenes de asociarse, como por ejemplo la ACES y la CONES, sino que *“esto no solamente debe quedarse ahí, sino también en demostrar cómo se está considerando la opinión. El mandato no es hacer lo que niños, niñas y adolescentes digan u opinen. El mandato es escucharlos y considerar su opinión y luego a ponderar esta opinión para efectos de las decisiones que se tomen”*. En este sentido, Miguel Cilleros comenta que el problema no es fijar una edad mínima para votar porque

“Por un lado está el tema del derecho a ser elegido y participar de los órganos de deliberación, y el segundo, es qué ocurre con los niños que siempre van a quedar por debajo de esa edad y, por lo tanto, todos ellos deben participar. Entonces es una cuestión de cómo se organizan los sistemas electorales, cómo se organiza la participación de los niños, niñas y adolescentes y en ese ámbito discutir sobre la posibilidad del derecho al voto”.

Por otro lado, Blanquita Honorato de la Subsecretaría de la Niñez comenta sobre la autonomía progresiva. Esto implica que los niños

“pueden ejercer sus derechos de manera autónoma de acuerdo a su edad, nivel de madurez y grado de desarrollo. Nosotros como Estado podemos definir una edad, por ejemplo, decir que a los 14 años los niños pueden salir en la noche (...). Sin embargo, nadie mejor que la familia puede saber cuándo un niño está listo para cumplir ciertos hitos en su desarrollo y cuándo no y, por eso mismo, el derecho preferente de los padres y la autonomía progresiva son principios complementarios que se deben considerar”

Por último, la misma Blanquita Honorato se refiere a tres temáticas relevantes en torno a los niños, niñas y adolescentes como lo es la perspectiva de género, familias vulnerables y la adopción. En relación con las temáticas de género, la expositora comentó que

“La perspectiva de género aquí tiene que estar presente, cuando se trata sobre todo de las vulneraciones de derechos en NNA. Tenemos la responsabilidad de la administración del Estado como garante de los derechos de NNA, en el sentido de que esto se debe hacer de manera adecuada, con las personas que estén especializadas para ello y no solamente desde Servicios o de[sde] la Subsecretaría de la Niñez, sino que todo el Estado, como garante, debe entonces asegurarse de que su personal esté capacitado y que conozca cuáles son los derechos de los NNA”.

así también y con respecto a la vulnerabilidad de las familias menciona que:

“Hoy día los NNA viven en familias más vulnerables, más pobres, en barrios más peligrosos y muchas veces más alejados de servicios básicos. En ese sentido entonces, tener NNA no tiene el mismo costo que vivir en una familia solamente con adultos y, por tanto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de línea de la pobreza, se debe tener una consideración especial para las familias que tienen NNA a su cargo” (Blanquita Honorato).

Por último y en relación con la adopción Blanquita Honorato declara que

“Nosotros creemos que parte de considerar a los niños como sujeto de derechos tiene que ver precisamente con eso, con el derecho de los NNA a vivir en familias, que hoy día les estamos negando, por ejemplo, los que están en residencia. En ese sentido, creemos que lo que debemos cambiar es el paradigma hacia esa consideración, entendiendo que hoy día no se trata del derecho de ciertas parejas de una u otra forma constituidas a adoptar, sino que el derecho de los niños a vivir en familia”.



Garantías

En relación a las garantías de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto la Subsecretaría de la Niñez como la SINTRASUB realizan diversas propuestas. Por ejemplo, Blanquita Honorato menciona que existen una serie de derechos que establece la Convención de los Derechos del Niño y que no se están aplicando en nuestro país.

“Luego tenemos la efectividad de los derechos. Las leyes que nosotros tengamos no pueden ser letra muerta, sobre todo cuando tienen que ver con NNA, un poco lo conversábamos y es la razón por la que estamos acá. Hoy día la Convención de los Derechos del Niño establece una serie de derechos que hoy día no están haciéndose realidad”.

Por otro lado, Violeta Oyarce de la SINTRASUB busca impulsar la creación de una nueva institucionalidad en materia de la niñez y que limite

“la lógica subsidiaria actual en asuntos relevantes para el Estado como es la protección de la niñez y juventud, a través de la creación de un servicio público que agrupe la totalidad o un porcentaje significativo, alrededor del 80% al menos, de las diversas líneas programáticas. Se trataría de un servicio público centralizado con perspectiva de género multicultural, pero desconcentrado territorialmente a nivel comunal que le permita relacionarse con otros servicios públicos que funcionan bajo la lógica comunitaria, tales como la municipalidad, los CESFAM, las escuelas y organizaciones funcionales y territoriales”.

Asimismo, Oyarce plantea que la nueva institucionalidad debe tener un enfoque comunitario que permita crear “redes de protección, cuidado y reparación territorial para lograr una mayor garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Así también y junto a la creación de este nuevo servicio se “debe necesariamente crear un estatuto laboral específico para las y los trabajadores que desempeñan con la niñez, quienes desempeñamos con la niñez, en las diversas líneas programáticas.”

Por último y no menos importante Francisco Gorziglia de la SINTRASUB comenta que en situaciones y eventos vulneratorios, los problemas deben ser tratados con la ayuda de distintas organizaciones

“Con participación efectiva de las comunidades y de los territorios organizados, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros de madre, los talleres populares, los talleres educativos. Son espacios formativos, son refugios de encuentro y en los espacios territoriales, creemos que ellos deben ser un elemento primordial en el ejercicio del respeto de los derechos de la niñez”.

411: Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado

Antecedentes y experiencias de vulneración

En términos de antecedentes presentados en torno a esta discusión, se observó que la mayoría de ellos correspondieron a antecedentes normativos. Así en primera instancia, Valentina Durán del Observatorio Constitucional Ambiental precisó la consagración actual del Derecho al Medioambiente.

“el Artículo 19 número 8 de la Constitución actual -como ustedes sabrán- consagra a todas las personas “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, asociado a un “deber del Estado de velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”, estableciendo además una cláusula, con la posibilidad de restricciones al ejercicio de otros derechos, para proteger el medio ambiente y esto en función de una Ley. Y además, el medioambiente está considerado en la Constitución de 1980, dentro de la Función Social de la Propiedad, como un elemento integrante de éste, en relación a la conservación del patrimonio ambiental.” (Valentina Duran, Observatorio Constitucional Ambiental, 20 de diciembre de 2021).

Así, este esquema que consagra el Derecho a Vivir en un Medioambiente Libre de Contaminación ha tenido una mayor consagración en la jurisprudencia, ampliando en las consideraciones que son garantías para este derecho.

“La Corte Suprema y varias Cortes de Apelaciones han reconocido que el Derecho a Vivir en un Ambiente Libre de Contaminación es un bien colectivo, de disfrute individual, pero que compete a la sociedad toda. A su vez, cabe reconocer que la jurisprudencia en Chile ha reconocido también que este Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Libre de Contaminación, dice relación con el hecho de vivir bien; de tener una cierta calidad de vida y, en este sentido, pensamos que no es posible hoy día retroceder en estas definiciones” (Pilar Moraga, Centro para la Ciencia del Clima y la Resiliencia, 22 de diciembre 2021).

Si bien en Chile, se ha garantizado el Derecho al Medioambiente más ampliamente que lo estrictamente establecido en la Constitución. Se debe considerar que, a nivel internacional, la expectativa de consagración de este derecho va más allá de lo establecido en Chile. Indicando además que todos los países latinoamericanos incorporan el Derecho a un Medioambiente Sano.



“El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recién en octubre [de 2021], reconoció el Derecho a un Medioambiente Sin Riesgos, Limpio, Saludable y Sostenible como un Derecho Humano importante para el disfrute de los otros Derechos Humanos. También está avanzando, [en] la Asamblea de las Naciones Unidas en reconocer este derecho. El Protocolo de San Salvador, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nosotros acabamos de aprobar en el Congreso y que prontamente se va a promulgar, reconoce el Derecho a un Medioambiente Sano, el Derecho de toda persona a vivir en un Medioambiente Sano y a contar con Servicios Públicos Básicos, asociados a un deber de los Estados parte -de esta Convención Americana- de promover la protección, preservación y mejoramiento del medioambiente.” (Valentina Duran, Observatorio Constitucional Ambiental, 20 de diciembre de 2021).

Además, se apunta a incorporar la idea de “ecológicamente equilibrado”, lo que ha sido mencionado por las constituciones de *“Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Costa Rica, de Francia, de Portugal”* (Valentina Duran, Observatorio Constitucional Ambiental, 20 de diciembre de 2021). Esta noción si bien se señala que es atractiva y genera consensos, pero desde la ecología se indica que *“no existe el medioambiente equilibrado, o un ecosistema equilibrado, porque los equilibrios se van modificando por acciones naturales o artificiales”* (Valentina Duran, Observatorio Constitucional Ambiental, 20 de diciembre de 2021).

Discusiones de Contenidos

En términos de contenidos, un primer elemento identificado en un par de audiencias es la importancia de la consagración constitucional del Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado. Esto se plantea tanto desde una perspectiva de protección a los recursos naturales, así como en atención a reformular nuestra relación con la naturaleza.

Así, Lorena Rodríguez, del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile, plantea que *“Si no protegemos los recursos naturales, es imposible superar el Cambio Climático, la malnutrición, las dietas insanas y la inseguridad alimentaria”*. Por su parte, Valentina Durán del Observatorio Constitucional Ambiental indicó que *“(…) es el momento de reformular nuestra relación con la Naturaleza; y parte de esa reformulación también tiene que ver con los Derechos de la Naturaleza. Pero también quiero advertir que me parece muy importante no olvidar el concepto de Medioambiente”*.

Respecto a la formulación específica del Derecho al Medioambiente, se presentó una propuesta concreta tanto desde el Centro para la Ciencia del Clima y la Resiliencia, como una desde el Observatorio Constitucional Ambiental.

Pilar Moraga del Centro para la Ciencia del Clima y la Resiliencia, indica inicialmente que los resguardos adecuados de un derecho al medioambiente deberían consagrarse como tres derechos independientes.

“El primero es el Derecho de toda persona a un Medioambiente Saludable y Ecológicamente Equilibrado. El segundo, el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y el tercero es el Derecho de todas las personas al Acceso a la Energía Limpia y Segura”

Así también, la misma expositora especifica que este derecho debe tener una perspectiva intergeneracional y un foco en la estabilidad del clima.

“el reconocimiento de la necesaria protección de los intereses de las generaciones futuras. En ese sentido, la jurisprudencia comparada también nos da ciertas lecciones. Y se entiende que el Derecho a un Ambiente Sano debe incorporar el concepto a un clima estable” (Pilar Moraga, Centro para la Ciencia del Clima y la Resiliencia, 22 de diciembre de 2021).

Por otro lado, Valentina Duran del Observatorio Constitucional Ambiental indica que este derecho debería consagrarse de forma transversal en la Constitución. Añadiendo que:

“(…) estimamos que el medio ambiente y la relación del ser humano con la naturaleza deben estar en el Preámbulo, también en el título que sea el símil de lo que [son] actualmente las Bases de la Institucionalidad, como un contexto en el cual se desenvuelve la persona y el Estado, también en un título de Principios que rijan el actuar del Estado, en la Forma del Estado y su Ordenamiento Territorial, en las Atribuciones y funciones de los Órganos del Estado, y por cierto en el catálogo de Derechos y Deberes constitucionales”

En específico, su propuesta de redacción es que la Constitución consagre *“el Derecho de toda persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un Medioambiente Sano, Limpio, Seguro y Sostenible”* (Valentina Duran, Observatorio Constitucional Ambiental, 20 de diciembre de 2021).

En ambas audiencias en las que se presentan propuestas específicas, también presentan acuerdo respecto de que la responsabilidad de hacer efectivo el derecho radica en el Estado. Así, Valentina Durán del Observatorio Constitucional Ambiental, indica que el texto constitucional



debería incluir que *“el Estado tiene el deber irrenunciable de resguardar y promover la satisfacción de este derecho, y de custodiar y tutelar la conservación y regeneración de la naturaleza”*.

Además, Pilar Moraga, indica que también debería radicar su responsabilidad en los privados, elemento que también es de acuerdo en ambas audiencias.

“estos deberes no sólo deben radicar en el aparato del Estado, [...] También los privados, [...] deben asumir activamente, no sólo el desafío en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también en materia de adaptación y así promover y activar la conservación y restauración de los ecosistemas en los cuales operan las distintas actividades” (Pilar Moraga, Centro para la Ciencia del Clima y la Resiliencia, 22 de diciembre de 2021).

Valentina Durán, por su parte, cree que los privados tienen que implicar tanto a personas naturales como jurídicas. Ello, señalando que *“(...) en los deberes de las personas, incluso personas jurídicas, debiera haber un Deber de Proteger, Conservar, y Reparar el Medioambiente. Esto puede ser una buena herramienta para los jueces, en fin, para las políticas públicas”* (Valentina Durán, Observatorio Constitucional Ambiental, 20 de diciembre de 2021).

Garantías

Además, en dos audiencias se hacen menciones a posibles garantías de este derecho. En la audiencia del Centro para la Ciencia del Clima y la Resiliencia, Pilar Moraga indica, por un lado, la necesidad de establecer una acción colectiva ante vulneraciones de este derecho.

“Es necesario dar un paso más allá de la actual acción de protección (...), y pensar en una acción popular; aquella que pueda presentar cualquier persona, independiente que ésta sea o no directamente afectada por la eventual vulneración de un derecho y que, al mismo tiempo, tenga la capacidad para exigir el cumplimiento de los deberes que la Constitución establece.” (Pilar Moraga, Centro para la Ciencia del Clima y la Resiliencia, 22 de diciembre de 2021).

De manera similar, Valentina Durán indica:

“Nos parece que tiene que haber una tutela judicial consagrada en la Constitución, que sea colectiva, de interés público, que proceda contra toda acción u omisión que comprometa el derecho de las personas, colectividades y futuras generaciones, a disfrutar de un medioambiente sano” (Valentina Durán, Observatorio Constitucional Ambiental, 20 de diciembre de 2021).

Para esto, Pilar Moraga indica una garantía institucional para ello:

“Vemos que las controversias ambientales se oponen, en general, entre grandes empresas [o] entre el Estado y las comunidades y, en ese sentido, la disputa es desigual y una defensoría podría establecer herramientas similares para ambas partes, de manera [de] asegurar el acceso a la justicia en materia ambiental” (Centro para la Ciencia del Clima y la Resiliencia, 22 de diciembre de 2021).

412: Derecho Humano al Agua y al Saneamiento

Antecedentes y experiencias de vulneración

Los problemas asociados a la falta de agua y saneamiento fueron comúnmente señalados entre las audiencias. En este sentido, la creciente sequía que ha afectado distintas zonas del país, es uno de los principales elementos destacados entre las audiencias. La sequía, según la define Daniela Duhart de la Fundación Newenko, es *“el fenómeno natural que es la falta física, la disminución de precipitaciones y sequías prolongadas. Distinto del fenómeno, propiamente antrópico, de la construcción social de la escasez hídrica”*.

Como presenta Rabindranath Acuña de la Municipalidad de San Rosendo, esto ha afectado particularmente más a zonas rurales.

“[Otra] problemática que [se] presenta es la falta de agua en las comunidades rurales. Esto lo podemos notar, por lo que nos dicen, por lo que nos cuentan los propios vecinos [y] por la realidad que también debemos asumir como Municipalidad para poder abastecer a más de 200 vecinos con camiones aljibe. Cada vez que hay un eucalipto, cada vez que hay un pino, en realidad se seca la napa subterránea de los vecinos”

En este sentido, esto también lo destaca Daniel Rivera del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, indicando que también se debe a una falta de redes públicas de agua potable.

“Las brechas en nuestro país se concentran en sectores periurbanos y en localidades rurales (...). Aquí, de acuerdo a estimaciones oficiales, sólo 53% de la población hoy día tendría acceso a través de redes de agua potable, a través de redes públicas. El resto de personas se está abasteciendo a través de vías más informales, [...] donde no se puede garantizar efectivamente el cumplimiento de todos los estándares que deben darse para el acceso a agua potable”

También se observa que en diversas audiencias se plantean los efectos en el medioambiente producidos por la explotación privada de los recursos hídricos. Por una parte, José Sanzana de



la Cámara de Turismo, Comercio y Servicios de Saltos del Laja, quien destaca que en el río Laja la explotación para la producción de energía eléctrica ha afectado fuertemente el agua disponible para riego.

“(...) se saca casi el 95% del agua para el riego, pero dentro de esos actores, hubo actores que eran canalistas, mejor dicho, usuarios de riego, que empezaron a hacer uso de esas aguas para sus proyectos energéticos. Y dentro de eso podemos destacar (...) el canal Zañartu, con la construcción de la central Trupán: solicitaron un proyecto para construir esa central, pero el problema era que no hacía mención [de] que el agua que querían usar la iban a [trasvasar] de cuenca hacia el río Itata, y solamente ellos, con el uso normal, agrícola, usaban 22,6 metros cúbicos; el restante simplemente lo vertían al río Itata, y dejando todo un conflicto hacia abajo. Técnicamente nos secaron”

Por su parte, Marco Landeros de Federación Nacional de Agua Potable Rural de Chile (FENAPRU, en adelante), señala elementos similares sobre la industria agrícola. Por una parte, entrega un ejemplo de cómo se ha producido falta de abastecimiento de agua potable suficiente por la producción de paltas.

“(...) una escuela de Cabildo, ahí en Petorca, dejó de funcionar, y una posta rural lo mismo, por falta de agua. Bueno, hoy día nosotros estamos exportando paltas, sobre todo [desde] esa zona, (...) entonces para poder regar esas paltas, necesitamos agua. Entonces, claramente el agua en esta zona es un bien económico de consumo, y [esta consideración] está por sobre un bien social o cultural. Lamentablemente, estas personas que ejercen esa actividad, no están fuera de Ley, en nuestra actual Constitución se les permite; y eso es lo que nosotros queremos cambiar hoy día.”

En algunas de las audiencias, se indicaron que había problemas con el marco regulatorio. Daniela Duhart de la Fundación Newenko, indica que la regulación actual tiene una

“(...) consagración y entendimiento de una propiedad privada exacerbada sobre los derechos de aprovechamiento, en un marco regulatorio cuya lógica medular (...) hasta ahora ha sido garantizar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua, en que se concibe el agua como una mercancía (...). De lo que ha resultado en un modelo de gestión privada del agua, de mercado desregulado, en que las reglas de protección y la toma de decisión recae en grandes usuarios y excluye y margina del acceso y la toma de decisión (...) a la ciudadanía.”

Según indica la misma Daniela Duhart, indica que el problema de los derechos de aprovechamiento es que tienen “características de perpetuidad, de gratuidad, sin sujeción a priorización de usos y tipos de fuentes, (...) no son caducables ni revocables en función del medio ambiente y el bien común. Es un régimen bastante desregulado en consideración de lo estratégico que resulta este elemento para las vidas”. Esto, según señala, ha generado una sobreexplotación de los recursos hídricos y los usuarios quedan excluidos de la gobernanza del agua.

En parcial contraste, como indica Daniela Rivera del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, la disponibilidad de agua en los últimos años ha crecido.

“En cuanto al Derecho Humano al Agua [hay que] precisar que, a nivel fáctico, la realidad [es que] nuestro país ha experimentado avances muy significativos, en los últimos años fundamentalmente. Tenemos una cobertura prácticamente universal, de casi un 100% de cobertura en sectores concesionados”

Luego, respecto al Derecho Humano al Saneamiento, indica que tienen “a nivel de sectores concesionados una cobertura prácticamente universal, ya sea en cobertura de alcantarillado, de tratamiento de aguas servidas o aguas residuales, las brechas siguen estando (...) en los sectores periurbanos y en localidades rurales”.

Por otro lado, se presentan antecedentes en torno a la afectación de mujeres trabajadoras a causa de los problemas de gestión hídrica. Según menciona Evelyn Vicioso de Fundación Newenko, las mujeres, aun cuando son más eficientes en la gestión hídrica, son las más afectadas por la crisis.

“(...) cuando decimos que son las más afectadas es porque la población rural con jefaturas femeninas viene aumentando desde el año 2015, donde las mujeres tienen problemas que van en aumento con la red de abastecimiento; son las que tienen mayores problemas para la gestión y va de la mano de un proceso importante de feminización de la pobreza, principalmente en regiones donde hay un alto proceso de escasez hídrica, podemos ver lo que ocurre en la Región de la Araucanía, Coquimbo, Petorca y también algo de la Región Metropolitana”

Según se señala en la audiencia de la Fundación Newenko y en la de FENAPRU, Chile ha adherido, y por tanto se ha obligado, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según indica Daniela Duhart de Fundación Newenko, este tratado:



“(…) reconoce que, en virtud del derecho humano al agua potable, toda persona sin discriminación tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico; y que en virtud del derecho humano al saneamiento, toda persona sin discriminación tiene derecho al acceso desde el punto de vista físico y económico en todas las esferas de la vida a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable y que proporcione intimidad y garantice la dignidad al mismo tiempo que reafirma que ambos derechos son componentes del derecho a un nivel de vida adecuado”

Es en este contexto que Marco Landeros de FENAPRU indica que *“han pasado 11 años, y aún hoy día se violan los Derechos Humanos al Agua en Chile; no han cambiado mucho en nada esas condiciones, y fue un saludo a la bandera solamente esa firma, porque (...) no hay sanciones”*.

En cuanto a la experiencia comparada de consagración del Derecho al Agua y al Saneamiento, Daniela Rivera, del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, indica que a nivel internacional:

“No son muchas las constituciones que hoy día consagran de manera explícita los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento. De 190 textos constitucionales vigentes alrededor del mundo, sólo 26 lo consagran de manera explícita. Y (...) la mayoría de ellos el centra o se focaliza en el Derecho Humano al Agua, muy pocos mencionan o precisan el derecho al saneamiento”

Discusiones de Contenidos

Respecto a las discusiones de contenidos planteadas en las audiencias, se observa que un elemento común es la necesidad de asegurar disponibilidad de agua para consumo humano y animal. Sin embargo, se presenta una diferencia respecto del cultivo de subsistencia. Mientras que Rabindranath Acuña de la Municipalidad de San Rosendo indica que *“(…) la nueva Constitución a lo menos debe asegurar el aprovechamiento del agua de consumo humano y animal y el cultivo de subsistencia”*. En contraposición Daniela Rivera del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC si bien concuerda en la necesidad de asegurar el agua para el consumo personal y doméstico, la definición de si eso incluye o no al cultivo de subsistencia debería ser materia de ley.

“(…) lo ideal sería entregar o delegar, quizás puede ser bajo ciertos estándares, esa definición al legislador, para no hacer demasiado rígidas en esas definiciones. Porque además hay que precisar que estos conceptos como saneamiento y sobre todo también el de uso personal y doméstico pueden ser muy variables”

Por su parte, Marco Landeros de FENAPRU discute sobre los elementos fundamentales para garantizar este derecho; planteando que se deben *“intensificar los esfuerzos para proporcionar que toda la población tenga un acceso económico, justo, sostenible y equitativo al agua potable y al saneamiento”*.

También en dos audiencias se plantea la idea de la protección de las cuencas hidrográficas. Esto desde una perspectiva de garantizar disponibilidad de agua a nuevas generaciones. Como señala Marco Landeros de FENAPRU:

“Así que, dentro de esa misma línea está la Protección de las Fuentes de Agua, así como también la Protección de las Cuencas Hidrográficas, y la Restauración y Recuperación de los Ecosistemas: esto se vuelve imprescindible e impostergable, y adquiere un sentido y carácter estratégico para la preservación de la vida”.

Respecto al deber del Estado de protección del Derecho al Agua, Daniela Duhart de Fundación Newenko indica que, a las aguas,

“(…) les correspondería un régimen especial de administración y protección por parte del Estado que se regule y administre su acceso y goce, distinto del resto de los bienes sometidos al régimen general de transacciones de propiedad y poder permitir condicionar su uso, priorizar los usos, priorizar las fuentes, protegerlos, mantener siempre el control a través de la regulación y garantizar la subsistencia de las fuentes naturales del agua”

Entre las audiencias también se discutieron algunos elementos sobre el modelo de gestión de aguas. Por una parte, en las audiencias de Fundación Newenko y FENAPRU se discute la necesidad de incorporar la participación comunitaria en la gobernanza del agua. En este sentido, Marco Landeros de FENAPRU, indica que:

“(…) se debe promover y fortalecer un tipo de gestión donde el agua, donde sean los mismos ciudadanos [los] encargados de proteger sus fuentes hídricas, mediante herramientas de colaboración ciudadana que permitan planificar, diagnóstica y restaurar nuestros ecosistemas hídricos desde las cuencas, asegurando el consumo humano y la protección de la biodiversidad presente en nuestro territorio”

En este sentido, Evelyn Vicioso de Fundación Newenko añade que es necesario *“incorporar la gestión comunitaria del agua con perspectiva de género (...) reconociendo el rol transversal y*



fundamental de las mujeres en el cuidado y gestión del agua que hasta ahora han jugado y que siguen jugando.”.

Por otra parte, María Molinos del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, discute que este derecho puede contar con la participación de privados en la gestión del agua y que, además no tiene necesariamente que ser gratuito.

“Que sea un derecho humano no significa que necesariamente debe ser gratuito, aunque sí efectivamente debe garantizarse a través de subsidios que todas las personas van a poder acceder a él. También es importante destacar que (...) -esta prestación de estos servicios-, puede ser a través de operadores tanto públicos como privados. Lo importante es que estén fuertemente regulados y que, por tanto, se les exija cumplir con las condiciones que se establezca en la normativa. Y para ello es muy importante que exista el financiamiento y también políticas públicas adecuadas.”

Garantías

Se plantea, tanto en la audiencia de FENAPRU como en la del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, se plantea la necesidad de crear un organismo que sea garante de este derecho. Marco Landeros de FENAPRU plantea:

“También creemos que es necesario crear un organismo independiente, autónomo del gobierno de turno, (...) con la capacidad de supervisar, promover, proteger e informar sobre las políticas públicas por parte del Estado sobre el Derecho Humano al Agua, así como también las sanciones por las infracciones relacionadas. Nosotros creemos que esto debiese ser como un símil a la Contraloría General de la República, totalmente autónoma y no dependiente del gobierno de turno”

Con esto, el mismo expositor plantea la necesidad de *“crear un Sistema Integrado del Uso del Agua, de tal forma que las aguas superficiales, subterráneas, y en cualquiera de sus estados deban estar reguladas, ingresar en un sistema único, que permita un manejo integrado de este recurso”.*

Por su parte María Molinos del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC plantea dos organismos distintos para los prestadores públicos y privados.

“nuestra propuesta es que en los sectores concesionados sea [responsable] la Superintendencia de Servicios Sanitarios y en los sectores no concesionados sea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. Esto para que aquellas personas que vean un incumplimiento de este derecho, tengan una institución en concreto a la que puedan mostrar su disconformidad”.

Anexo 1. Menciones a derechos del Bloque 2

Entre las audiencias del Bloque 4, se presentaron algunas discusiones asociadas a las temáticas del Bloque 2. En particular, fueron dos audiencias que referían al Derecho de Cuidados y el Reconocimiento del trabajo doméstico. Sin embargo, la propuesta de una de estas audiencias decía relación con el Derecho a Seguridad Social.

Cuidados y Reconocimiento del trabajo doméstico

En lo relativo a los cuidados se observa que Verónica Riquelme de Nada Sin Nosotras, plantea los cuidados como cuatro derechos diferentes que reconocer: *“el derecho de toda persona para ser cuidado, el derecho a elegir cuidar y el derecho al autocuidado y un cuarto planteamiento; reconocer el trabajo doméstico de cuidado no remunerado como trabajo, con una contribución social y económica”.* Así para ella, el Estado es el llamado a garantizar estos derechos, mediante *“(…) un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano y generar leyes y políticas públicas que garanticen la igualdad de género y la no discriminación en el trabajo remunerado”.*

Alejandra Zúñiga, por su parte, hace énfasis en el reconocimiento del trabajo de cuidados, como una expectativa central de las mujeres en la nueva Constitución. Para ello, señala también que es importante una garantía de igualdad entre hombres y mujeres.

“Creo que lo primero será hacerse cargo de la que en mi opinión es la mayor deuda social, que el Estado y la economía tienen aún con las mujeres, remunerar el trabajo de cuidado. En todo el mundo, las tareas domésticas y el cuidado familiar siguen estando mayoritariamente en manos de mujeres e incluso en países escandinavos, con los mejores índices de igualdad de género y las mejores políticas de cuidado infantil subsidiario, de horarios de trabajo flexibles, la división por género del trabajo de cuidados sigue siendo muy importante” (Alejandra Zúñiga, 22 de diciembre de 2021).

Seguridad Social y Sistema de Pensiones

En la misma audiencia de Alejandra Zúñiga, destaca que su propuesta para garantizar el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados es a través de un ingreso básico universal.



Este, lo define como “(...) un ingreso incondicional de subsistencia pagado por el gobierno de manera uniforme y en intervalos regulares desde el nacimiento”. Este ingreso sería universal e incondicional desde el nacimiento y favorece el trabajo de cuidadoras y cuidadores en la medida que es “[g]arantizar el derecho de administración para las y los cuidadores, es decir, que el Ingreso Básico Universal que corresponde a las personas dependientes, sea administrado libremente por quien ejerce las tareas de cuidado” (Alejandra Zúñiga, 22 de diciembre de 2021).

Así, la expositora hace una propuesta de redacción de este derecho:

“La Constitución reconoce a todas las personas el derecho al mínimo vital. Para ello se garantizará un Ingreso Básico Universal individual, periódico e incondicional, desde el nacimiento. En el caso de los menores de edad y demás personas dependientes, el ingreso básico será administrado por sus cuidadores o cuidadoras, la ley regulará el modo en que será efectivo este derecho” (Alejandra Zúñiga, 22 de diciembre de 2021).

Anexo 2. Menciones a derechos del Bloque 3

Respecto de los derechos mencionados en las presentes audiencias correspondientes al Informe del Bloque 3, se presentaron dos audiencias completas que hacían mención una a la Libertad de Información y Prensa y la otra a el Derecho a la honra, privacidad y datos personales. Además, hay una mención a Derechos Sexuales y Reproductivos en una audiencia.

Libertad de Información y Prensa

En primer término, la audiencia del Consejo para la Transparencia hizo mención al Derecho de Acceso a la Información Pública. Así, este derecho, en primer término, lo plantearon como un derecho autónomo que debería ser consagrado en la nueva Constitución. Así, David Ibaceta, de esta institución, plantea que la consagración de este derecho se requiere protección ante el Estado y ante privados.

“¿Y qué significa que se consagre este derecho de acceso como un derecho fundamental? Primero, la necesidad de que se reconozca, para que haya un ejercicio pleno, para que ese reconocimiento puede ser además refrendado respecto de cualquier órgano del Estado (...); este es un derecho que actúa fundamentalmente en contra del Estado, pero que eventualmente también puede actuar respecto de los privados (...). También porque con esto se reasegura y fortalece la idea de una institucionalidad autónoma e independiente y además, lo más importante, porque se coadyuda de una garantía independiente de otros derechos”.

Así también plantean que es necesario que este derecho, cuando es consagrado, permite ampliar su espacio para garantizarlo universalmente.

“El derecho de acceso a la información, si ha tenido un problema, ha sido su elitización. Determinarlo como un derecho fundamental permite ampliar su espacio. Nosotros queremos que toda la ciudadanía sepa que tiene un derecho, que lo puede ejercer contra la autoridad y que tiene herramientas para garantizarlo” (David Ibaceta, Consejo para la Transparencia, 22 de diciembre de 2021)

Por último, también plantean la necesidad de generar una garantía institucional del Derecho de Acceso a la Información Pública, mediante un órgano de control.

“En primer término, el reconocimiento explícito, como veníamos diciendo, del Derecho de Acceso a la Información con conformidad a la Ley. En segundo lugar, la consagración de un órgano, de una autoridad de control, de un órgano garante, que garantice el ejercicio de este derecho, promueva la transparencia y fiscalice el cumplimiento de la normativa respectiva y, finalmente, una posibilidad de solicitar amparo al ejercicio del derecho cuando éste no sea debidamente satisfecho por parte de la administración pública.” (Ana Muñoz, Consejo para la Transparencia 22 de diciembre de 2021)

Libertad de Expresión

Como parte de un marco de protección ante la violencia física y psíquica contra las personas de sexo y género diverso, Alex Pascal Castillo, de la ONG Diverses, argumenta que deben establecerse restricciones a la Libertad de Expresión en caso de que esta sea usada para incitar al odio contra grupos vulnerables:

“Nadie puede desconocer que, por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, hemos sido víctimas de brutales ataques contra nuestra Integridad Física y Psíquica [...] respecto a la Libertad de Expresión, deben establecerse límites, como la incitación al odio.”

Derechos sexuales y reproductivos

Mariela Infante de Nada sin Nosotras hizo mención a una propuesta de contenido para la Constitución en torno a los Derechos Sexuales y Reproductivos. Así, plantea como obligaciones del Estado:



“(…) promover, respetar, proteger y garantizar la autonomía y autodeterminación de cada persona respecto a su cuerpo, sexualidad y reproducción; garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el territorio nacional y en los establecimientos públicos y privados, entregar información y educación sexual integral y, por último, la protección efectiva contra la violencia y la discriminación”

Derecho a la honra, privacidad y datos personales

Por último, la audiencia de Imagina Chile hace referencia casi exclusivamente al Derecho a la Honra, Privacidad y Datos Personales.

Así, esta audiencia plantea una serie de problemas en torno al tratamiento actual de los datos personales. Así, en primera medida, Bastián Riveros de Imagina Chile plantea que *“(…) el tratamiento de datos se hace sin un sujeto y sin la injerencia o la participación del colectivo”*. En este sentido, el mismo expositor añade que:

“hoy en día, la evidencia nos sugiere que existen tratamientos de datos que son desconocidos por las personas, que cuya finalidad, si en un principio nos pueden decir, no sé: “la finalidad va a ser para informarles sobre nuevos productos”, finalmente ocurre que el tratamiento que se hace posteriormente es desconocido por la ciudadanía, y esto tiene consecuencias muy graves para efectos de las Libertades Individuales y también para la democracia misma”

Así también da ejemplos como Cambridge Analytica e InstaGIS en Chile.

“En Chile también se descubrió que la empresa InstaGIS ha utilizado esta actividad de perfilamiento, a partir de información que era proporcionada por una de las empresas de las cuales era parte el conglomerado, que era SoSafe; entonces, a partir de información de SoSafe, se le entregaba información a InstaGIS y se realizaban actividades de perfilamiento, que finalmente mostraban ciertas aristas del candidato de turno a las personas, de acuerdo a sus opiniones y a partir del perfilamiento.” (Bastián Riveros, Imagina Chile, 22 de diciembre de 2021).

En este sentido, plantea que si bien en Chile está consagrado el Derecho a la Privacidad este es insuficiente para abordar el tratamiento de datos personales que ha surgido con los progresos en materia de recuperación de información y minería de datos. En este marco es que su propuesta es pensar el Derecho a la Protección de Datos Personales como Autodeterminación Informativa.

“¿Qué significa Autodeterminación Informativa? Básicamente el derecho que tienen las personas para controlar la información [de su persona] que circula en los distintos espacios, tanto en el momento de la captura, es decir, cuando nosotros entregamos estos datos, como en el posterior tratamiento” (Bastián Riveros, Imagina Chile, 22 de diciembre de 2021).

Este derecho, lo plantean también como uno colectivo *“porque precisamente, tanto en la captura del dato, como en la clasificación de éstos, en el tratamiento mismo, las personas no participan, y muy por el contrario, desconocen finalmente qué se hace con esta información”* (Bastián Riveros, Imagina Chile, 22 de diciembre de 2021).

Este derecho debería ser resguardado por el Estado y, para aquello, proponen la Agencia de Protección de Datos como un organismo autónomo que lo haga.

“(…) Por eso es que pongo el énfasis en -por ejemplo- la Agencia de Protección de Datos como un órgano estatal independiente (...) porque precisamente en el análisis caso a caso, va a hacer la ponderación a partir de este organismo” (Bastián Riveros, Imagina Chile, 22 de diciembre de 2021).

Por último, discute la importancia también de consagrar el Derecho al Olvido, entendido como

“el derecho de las personas a solicitar que esta información sea desindexada, que sea borrada de ciertos espacios, de ciertas plataformas; no confundir ese derecho con el interés público que tiene la sociedad de saber ciertas informaciones” (Bastián Riveros, Imagina Chile, 22 de diciembre de 2021).



ANEXO III. Informe Enlaces Transversales

Convención Constitucional. Abril 2022²⁶

En conformidad con el Artículo 90 del Reglamento General de la Convención Constitucional relativo al “Mecanismo de transversalización” se realiza el presente informe para dar cuenta de las duplicaciones, divergencias o ausencias identificadas en relación a los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socioecológico y descentralización de las normas aprobadas por el Pleno de la Convención al 06 de abril de 2022, con objeto de ponerlas en conocimiento de la Comisión de Derechos Fundamentales.

Para efecto de su mejor comprensión el informe se ordena en base a títulos relativos a cada enfoque y dentro de este se hace referencia a las duplicaciones, divergencias o ausencias respecto al contenido en aprobado por la Comisión de Derechos Fundamentales.

Enfoque de Derechos Humanos

El enfoque de Derechos Humanos fue el enfoque que tuvo mayor presencia en el conjunto de normas que fueron aprobadas por el pleno y que han avanzado al borrador de la Constitución, puesto que se tratan en general de Derechos Políticos y Civiles en los que se ha puesto un particular énfasis en proteger y fortalecer para impedir la violación de éstos.

Duplicaciones: si bien, hubo en los informes duplicaciones claras de normas e intenciones explícitas que iban por el mismo objetivo, han sido aprobadas en el pleno normas que no presentan duplicaciones actualmente en este enfoque.

Divergencias: no se identifican artículos aprobados que sean contradictorios o que no vayan en la misma dirección dentro de los artículos aprobados por el pleno respecto de la Comisión de Derechos Fundamentales.

Ausencias: este enfoque es el que se encuentra presente de manera más clara y amplia en el conjunto de normas aprobadas por el pleno respecto de los Derechos Fundamentales, por lo que el enfoque no está ausente en general. Sin perjuicio de lo anterior, se puede seguir fortaleciendo y profundizando el cuidado y respeto de los Derechos Humanos dentro de las normas que serán aprobadas.

Enfoque de Género

El enfoque de Género fue abordado principalmente en las normas aprobadas relacionadas con los Derechos Sexuales y Reproductivos así como también en el Derecho a la Identidad.

Duplicaciones: no existen normas aprobadas hasta el momento que dupliquen los contenidos u objetivos de las normas aprobadas de Derechos Fundamentales por su contenido específico.

Divergencias: no se identificaron divergencias de las normas aprobadas en torno a Género, considerando que la mayor parte de las menciones son en relación a incluirlo como un enfoque obligatorio a considerar en diferentes normas.

Ausencias: este enfoque se encuentra presente en las normas aprobadas de Derechos Fundamentales con una profundidad adecuada y se debe mantener su mención de manera constante para que se considere en cada ámbito importante del desarrollo de nuestra sociedad.

Enfoque de Inclusión

Solo se ha hecho una mención explícita a este enfoque dentro de las normas aprobadas en relación a Derechos Fundamentales y que se refiere en particular al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

Duplicaciones: no hay normas que tengan este enfoque que se encuentren duplicadas o tengan la misma intención que alguna otra de otra comisión.

Divergencias: no existen divergencias respecto de este enfoque puesto que no ha sido abordado en profundidad ni se han aprobado normas cuya intención sea explícita a este enfoque.

Ausencias: es uno de los enfoques menos mencionados en general y se debería abordar en mayor profundidad, no sólo como un punto más dentro del listado de enfoques.

Enfoque de Plurinacionalidad

Ausencia:

- Primer informe Comisión Sistema Político, Artículo 5, inciso segundo, titularidad colectiva de los derechos de los pueblos indígenas.

²⁶ Informe elaborado por las convencionales Natalia Henríquez Carreño y Mariela Serey Jiménez.
Secretaría de la Comisión sobre Derechos Fundamentales



“Es deber del Estado Plurinacional, respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas, el ejercicio de la libre determinación y de los **derechos colectivos e individuales de que son titulares**”.

- En cambio, el inciso tercero del Artículo 6, del primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales señala:

“Los Pueblos y Naciones Indígenas **son titulares de derechos fundamentales colectivos.**”

A considerar, como fuente de potenciales duplicaciones, divergencias o ausencias:

- Primer informe Comisión Sistema Político, Artículo 5, inciso primero, derechos de los pueblos indígenas. Se reconocen los siguientes derechos a los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado: a) libre determinación, b) autonomía y autogobierno, c) propia cultura, d) identidad, d) cosmovisión, e) patrimonio, f) lengua, g) reconocimiento de sus tierras, territorios, h) protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, i) a la cooperación e integración, j) al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y, k) a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

- Primer informe Comisión Sistema Político, Artículo 5, inciso tercero, garantías generales,

“Junto con ello, **garantizará el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, creando institucionalidad y promoviendo políticas públicas** que favorezcan el reconocimiento y comprensión de la diversidad étnica y cultural de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado.”

- Primer informe Comisión de Forma de Estado, Artículo 7, inciso segundo, consulta y consentimiento pueblos indígenas en las entidades territoriales.

“Los pueblos y naciones preexistentes al Estado **deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado** en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución.”

- Primer informe Comisión de Forma de Estado, Artículo 10, derechos de pueblos indígenas.

“la protección y el respeto de los **derechos de autodeterminación y de autonomía de los territorios indígenas**, en coordinación con el resto de las entidades territoriales.”

Enfoque Socioecológico

Divergencias:

- Primer informe Comisión de principios, Artículo 6, primer inciso, denominación a personas o grupos excluidos.

“reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración de los **grupos oprimidos e históricamente excluidos**”.

- Primer informe Comisión de Forma de Estado, Artículo 9, inciso primero, denominación a personas o grupos excluidos.

“[...] estableciendo de ser necesario, acciones afirmativas en favor de los **grupos empobrecidos e históricamente vulnerados.**”

Duplicaciones:

- Primer informe Comisión de Principios, Artículo 9, derechos de la naturaleza, titularidad.

“**La naturaleza tiene derechos.** El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos”.

- Además, el inciso cuarto del Artículo 6, del primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales señala:

“**La Naturaleza será titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables.**”

A considerar, como fuente de potenciales duplicaciones, divergencias o ausencias:

- Primer informe Comisión Derechos Fundamentales, Artículo 14, economía, naturaleza, empresas y usuarios.

“Su ejercicio deberá ser **compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y con la protección de la naturaleza.**”



El contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio, las que deberán **promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño y asegurarán la protección de los consumidores.**

Las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados, se entenderán como conductas contrarias al interés social.

Primer informe Comisión Derechos Fundamentales, Artículo 18, función social y ecológica de la propiedad.

“Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, **conforme con su función social y ecológica.**”

Enfoque de Descentralización

A considerar, como fuente de potenciales duplicaciones, divergencias o ausencias:

- Primer informe Comisión de Forma de Estado, Artículo 27, numeral 10, política pública derechos sociales.

“10. La **política regional de vivienda, urbanismo, salud, transporte y educación** en **coordinación** con las **políticas, planes y programas nacionales**, respetando la **universalidad** de los derechos garantizados por esta Constitución.

- Primer informe Comisión de Forma de Estado, Artículo 28, servicios públicos

“**La ley determinará cuáles Servicios Públicos**, Instituciones Autónomas o Empresas del Estado, en virtud de sus fines fiscalizadores, o por razones de eficiencia y de interés general, **mantendrán una organización centralizada y desconcentrada en todo el territorio de la República**”.